CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1996

DR. ARTURO HOYOS
PRESIDENTE

SALA PRIMERA (CIVIL)

LICDO. RAFAEL A. GONZÁLEZ
PRESIDENTE

LICDO. ELIGIO A. SALAS — LICDO. ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK

LICDA. SONIA F. DE CASTROVERDE
SECRETARIA

SALA SEGUNDA (PENAL)

LIC. JOSÉ MANUEL FAÚNDES
PRESIDENTE

DRA. AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ — DR. FABIÁN ECHEVERS

LICDO. MARIANO HERRERA
SECRETARIO

SALA TERCERA (CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y LABORAL)

DR. ARTURO HOYOS
PRESIDENTE

LICDA. MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA — DR. EDGARDO MOLINO MOLA

LICDA. JANINA SMALL
SECRETARIA

SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES)

DR. ARTURO HOYOS
PRESIDENTE

LICDO. JOSÉ MANUEL FAÚNDES — LICDO. RAFAEL A. GONZÁLEZ

DR. CARLOS H. CUESTAS G.
SECRETARIO GENERAL

PONENCIA

LOS DERECHOS DE LA MUJER PANAMEÑA EN LA CONSTITUCIÓN DEL SIGLO XXI

Por: Magistrada Ángela Russo de Cedeño

INTRODUCCIÓN. I. La Situación Legal de la Mujer en las Distintas Constituciones Panameñas. A. Constitución de 1904. B. Constitución de 1941. C. Constitución de 1946. D. Constitución de 1972. II. Cambios Substanciales en Nuestra Legislación. A. El Código de la Familia. B. Ley 27 de 16 de junio de 1995. C. En materia Laboral. 1. Derecho a no ser despedida. 2. Derecho al Descanso Obligatorio. 3. Derecho a la suspensión de términos de caducidad y prescripción establecidos en favor del empleador. 4. Derecho a no trabajar jornadas extraordinarias o nocturnas. 5. Derecho a no efectuar tareas perjudiciales a su estado. 6. Derecho a amamantar a su hijo o hija. 7. Derecho a un Local Acondicionado para poder amamantar a su hijo o hija. D. Ley 22 de 7 de diciembre de 1990. E. Proyecto de Ley N° 42 "Por el cual se previene, prohíbe y sanciona el hostigamiento sexual en el empleo y en el sistema educativo. F. Decreto Ejecutivo N° 28 de 26 de enero de 1996, por el cual se desarrolla el artículo 491 de la Ley 3 de 17 de mayo de 1994. G. Decreto Ejecutivo N° 70 de 27 de julio de 1995, por medio del cual se crea el Consejo Nacional de la Mujer.

CONCLUSIONES. PROPUESTA CONSTITUCIONAL PARA EL SIGLO XXI.

BIBLIOGRAFÍA.

INTRODUCCIÓN

Al revisar los temas a tratarse en el IX Congreso Mundial de Derecho de Familia, y tomando en cuenta que mediante Decreto Ejecutivo número 70 de 27 de julio de 1995 se creó el Consejo Nacional de la Mujer, del cual me honro en ser uno de sus miembros en representación del Órgano Judicial, consideré oportuno escribir sobre "Los Derechos de la Mujer Panameña en la Constitución del Siglo XXI".

Este tema cobra mayor importancia en nuestro medio cuando El Consejo Nacional de la Mujer y La Secretaría Técnica del mismo, emprenden la divulgación del Plan Nacional Mujer y Desarrollo para concientizar tanto a hombres y mujeres sobre la igualdad de derechos que ambos tenemos, a pesar de nuestras innegables diferencias biológicas.

Panamá se ha comprometido a nivel internacional [1] a potenciar el papel de

---

[1] Ley N° 12 de abril de 1995, Gaceta Oficial 22,768 de 24 de abril de 1995.

Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra la Mujer (Convención "Belem Do Para").

Ley N° 5 de 16 de junio de 1987. Gaceta Oficial 20,830 de 25 de julio de 1987. Convención Internacional en contra de la Tortura.

Ley N° 4 de 22 de mayo de 1981. Gaceta Oficial 19,331 de 3 de junio de 1981. Convención Para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra La Mujer.

Ley N° 15 de 28 de octubre de 1977. Gaceta Oficial 18, 468 de 30 de noviembre de 1977. Convención Americana Sobre Derechos Humanos ("Pacto de San José").

Ley 13 de 27 de octubre de 1976. Gaceta Oficial 18,336 de 18 de mayo de 1977. Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Ley 14 de 28 de octubre de 1976. Gaceta Oficial 18,373 de 8 de julio de 1977. Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos.

Ley 15 de 28 de octubre de 1976. Gaceta Oficial 18,269 de 4 de febrero de 1977. Protocolo Opcional al Pacto Internacional sobre los

la mujer en la sociedad, es decir, a crear las condiciones para que la mujer no sólo sea partícipe sino beneficiaria; para que la mujer pueda acceder a los puestos de poder.

Su participación en un proceso de lucha por la igualdad de las mujeres, y por eliminar cualquier obstáculo que impida lograr una verdadera equidad, encuentra sus más recientes bases en el compromiso de Panamá al adoptar la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial Sobre la Mujer, celebrada en Beijing, China, del 4 al 15 de septiembre de 1995.

La presente ponencia pretende mostrar al lector (a), cómo ha variado nuestra legislación en cuanto a los derechos de la mujer, ya que el conocimiento y divulgación de dichos cambios contribuirá no sólo a que tanto hombres como mujeres los acepten, ayudando a estas últimas a exigir el cumplimiento de ellos, sino que contribuirá a que los panameños y panameñas reconozcamos que en la mayoría de los casos la ausencia de equidad entre sexos, es inconsciente. De allí la necesidad de tomar iniciativas respecto a ello.

En muchas ocasiones el derecho ya ha sido reconocido en una ley, incumpliéndose el mismo por razones no de orden legal, sino por patrones socio-culturales que hemos aprendido de nuestros padres y/o madres, y a su vez estos de los suyos.

No por el hecho de que sean conductas aprendidas que pasan de generación a generación, y que tradicionalmente nos hayamos comportado de una determinada manera, es que debemos dejar de reconocer que en muchos casos nuestra conducta es discriminatoria. Lo importante es aceptar la existencia de un problema y las alternativas de solución para atacar el mismo, y así avanzar en el mundo contemporáneo que se enfrenta a grandes desafíos con la globalización.

Como Magistrada del Tribunal Superior de Familia estoy convencida que el reconocimiento de los derechos de la mujer vistos desde la perspectiva de género, contribuirá a la unidad familiar que es uno de los principios fundamentales que consagra nuestro Código de la Familia en su artículo primero.

A su vez, como miembro del Órgano Judicial considero que dicho reconocimiento nos ayudará a cumplir el objetivo de justicia y equidad que por ley estamos obligados a respetar y cumplir, ya que los actos discriminatorios ya sea contra hombre o mujer, niños, niñas, adolescentes y ancianos, conculcan el principio mismo de justicia.

En ese orden de ideas, abordaremos el tema de la situación legal de la mujer en las distintas Constituciones Panameñas, así como en los diferentes cuerpos legales, llegando por último a una propuesta Constitucional para el siglo XXI, tomando en cuenta y compartiendo el sentir de Eduardo Umaña Luna, cuando en su obra "La Familia: Núcleo Fundamental de la sociedad (¿Siglo XXI?)" nos señala: "Alborea el siglo XXI: Posible y total igualdad social, política, económica, sentimental de la mujer. Ojalá Colombia rompa con su `demonología para entender que la mujer no es objeto, sino sujeto; compañera y no sierva; copartícipe del hogar y no servidora incondicional del hombre (debe liberarse del dominio conyugal que, a veces -duro es decirlo- se amplía a la tiranía de los propios hijos ...)".[2]

Derechos Civiles y Políticos.
Ley 35 de 23 de noviembre de 1957. Gaceta Oficial 13,432 de 3 de enero de 1958. IV Convención de Ginebra (Relativo a la Protección de Personas Civiles Durante Tiempo de Guerra).

[2]UMAÑA LUNA, Eduardo, La Familia: Núcleo Fundamental de la Sociedad (¿Siglo XXI?), Ediciones Librería La Constitución Ltda. Santa Fe de Bogotá, 1996, pág. 288.

I. LA SITUACIÓN LEGAL DE LA MUJER EN LAS DISTINTAS CONSTITUCIONES PANAMEÑAS.

A. Constitución de 1904

La Constitución Panameña de 1904 en su artículo 16 señalaba que: "Todos los panameños y extranjeros son iguales ante la ley. No habrá fueros ni privilegios".

Respecto al sufragio, la misma indicaba en su artículo 49 que: "Todos los ciudadanos mayores de 21 años de edad tienen derecho al ejercicio del sufragio, excepto los que estén bajo interdicción judicial y los inhabilitados judicialmente por causa de delito ..."

La noción de género no fue incluida en ninguno de los artículos descritos, así como tampoco en el resto de la normativa constitucional de 1904, de suerte que a pesar de la no utilización del término varones en el artículo 49 de dicha Constitución, la norma en mención fue interpretada y traducida en la práctica a la prohibición y exclusión de la mujer como detentadora del derecho a votar y ejercer el sufragio.

Refiriéndose al voto de la mujer en la Constitución de 1904, el Dr. César Quintero en su libro **Derecho Constitucional** señala que: "Así, en lo que al voto de la mujer respecta, muchos creyeron que con la eliminación del término **varones**, el constituyente de 1904 concedió a aquélla derechos políticos. Pero, no resulta así, pues en la práctica las autoridades públicas nunca interpretaron ni aplicaron en tal sentido el referido artículo". [3]

Se hizo una interpretación exegética de la ley, considerándose que la norma no contemplaba a la mujer sino sólo al hombre.

La mujer panameña se vio privada del derecho a ejercer el voto, existiendo una evidente desigualdad en cuanto a derechos en relación al hombre.

B. Constitución de 1941

La Constitución Panameña de 1941 incluyó el término varones que no contenía la de 1904, cuando en su artículo 61 señaló:

"Son ciudadanos de la República todos los panameños varones mayores de veintiún años.

El Legislador podrá conferir a las mujeres panameñas mayores de veintiún años la ciudadanía, con las limitaciones y los requisitos que la Ley establezca; no obstante, la mujer panameña mayor de veintiún años podrá desempeñar empleos con mando y jurisdicción".

Al no considerar a la mujer panameña como ciudadano, la misma no podía elegir ni ser elegida para ningún puesto público de elección popular. No podía ejercer cargos oficiales con mando y jurisdicción. (Artículo 60 de la Constitución de 1941), haciéndose nuevamente evidente la discriminación que por sexo establecía nuestra Carta Magna.

En entrevista sostenida con el Dr. César Quintero, ilustre constitucionalista panameño, el mismo nos manifestó que "Si bien el artículo 61 de la Constitución Panameña de 1941 establecía que el legislador podría conferir a las mujeres mayores de veintiún años la ciudadanía con las limitaciones que la ley estableciera, nunca se dictó una ley que regulara tal situación y le confiriera los derechos a la mujer panameña. No fue sino hasta que el Presidente Ricardo Adolfo de la Guardia, en diciembre de 1944 dictó un Decreto de Gabinete y disolvió la Asamblea Legislativa, creando una Constituyente formada en 1945,

---

[3] QUINTERO, César. Derecho Constitucional, Tomo I, Antonio Lehmann, Librería Imprenta y Litografía, Ltda., San José, Costa Rica, 1967, pág. 413.

donde por primera vez se integran o se nombran a dos (2) mujeres, Esther Neira de Calvo y Gumercinda Páez. Esa Asamblea Constituyente le dio el derecho a la mujer a votar. Fue así como dicha norma de la Constituyente fue luego incorporada a la Constitución de 1946".

C. Constitución de 1946

La Constitución de 1946 reconoce la igualdad de derechos entre hombre y mujer cuando en el artículo 97 estableció que "Son ciudadanos de la República todos los panameños mayores de veintiún años sin distinción de sexo".

Expresamente la Constitución de 1946 introdujo la igualdad de derecho al voto sin distingos de sexo, y es a partir de este momento que la mujer panameña pudo ejercer libremente su derecho de elegir y ser elegida, sin condicionar el mismo a nada.

Podemos decir que esta Constitución es la que tiene un corte más social, colocando a la mujer en un nivel similar en cuanto a derechos respecta, como ser humano en igualdad de condiciones.

D. Constitución de 1972

Esta Constitución siguiendo los lineamientos de la anterior, reservó a los ciudadanos panameños los derechos políticos y la capacidad para ejercer cargos públicos, considerando como tales a "todos los panameños mayores de diez y ocho años, sin distinción de sexo" (artículo 119 de la Constitución de 1972).

Además, nuestra Constitución Política, en su artículo 19 señala que "No habrá fueros o privilegios personales ni discriminación por motivo de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas".

Vemos que con el correr de los tiempos, fue reconocido constitucionalmente el derecho de la mujer en igualdad de condiciones respecto al hombre.

Sin embargo, tal y como afirma Frene Ginwala, parlamentaria, Presidenta de la Asamblea Nacional de Sudáfrica y abogada, "Los derechos reconocidos en las constituciones y en las leyes tienen por sí mismos escasa relevancia para las mujeres que tienen que trabajar la triple jornada del cuidado de los hijos e hijas, la atención del hogar y la obtención de un ingreso, o para las mujeres que carecen de conocimientos, formación, educación y confianza; o para las mujeres que se ven constreñidas a veinte años de crianza de los hijos sin opción alguna; o para las mujeres sometidas a la intimidación y la violencia; o para las mujeres que deben enfrentarse a sistemas judiciales innaccesibles a las diferencias de género.

Tales desigualdades son a la vez consecuencia y causa accesoria de la subordinación estructural que impide a las mujeres el ejercicio de sus derechos. A menos que se aborde esta cuestión de la subordinación estructural, la igualdad de derechos será poco más que un eslogan vacío para la gran mayoría de las mujeres de todo el mundo" [4]

II. CAMBIOS SUBSTANCIALES EN NUESTRA LEGISLACIÓN.

Partiendo del convencimiento que la igualdad formal, es decir, aquella reconocida en la ley, no es suficiente pero si importante, y siendo indispensable conocer los cambios que en general ha sufrido la misma en relación a los derechos de la mujer, luego de una evaluación del contenido jurídico del Derecho de Familia vigente desde una perspectiva de género, nos disponemos a mostrar al lector los avances obtenidos.

---

[4] GINWALA, Frene. "La discriminación no es el problema", en Revista El Progreso de las Naciones. UNICEF House, 3 UN Plaza, Nueva York, N. Y. 10017, E. E. U. U., 1995, pág. 38.

A. El Código de la Familia.[5]

Con la entrada en vigencia del Código de la Familia el 3 de enero de 1995, se produce una reforma substancial en cuanto a los derechos de la mujer reconocidos en una ley panameña.

Así, los cambios introducidos en dicho cuerpo de ley, han contribuido a mejorar las condiciones jurídicas de la mujer panameña, especialmente la casada cuando en su artículo 77 señala que:

"Los esposos deben fijar de común acuerdo el domicilio conyugal. A falta de declaración expresa, se entenderá que la mujer ha adoptado el domicilio del marido o viceversa, según la circunstancia de cada caso" (el subrayado es nuestro).

Nuestra legislación anterior, es decir, el Código Civil, establecía una clara relación de subordinación de la mujer hacia el hombre, ya que en su artículo 112 a) al referirse a las obligaciones y derechos entre los cónyuges, normaba que la mujer estaba "obligada a seguir a su marido donde quiera que fije su residencia, a no ser que haya hecho uso del derecho que le otorga el Artículo 83".

Así, nuestra anterior legislación (Código Civil), producto de una sociedad en la que el hombre por haber sido tradicionalmente el proveedor es considerado el jefe del hogar, y en la que las labores domésticas son exclusivas de la mujer, marcaba grandes diferencias en cuanto a derechos se refiere.

La legislación derogada establecía claras diferencias que se hacía indispensable subsanar, ya que la referida disposición resulta de suma importancia tratándose de divorcios en los que se invocaba la causal de abandono absoluto de los deberes de esposa, de suerte que una vez que el marido probaba que la mujer no permanecía en el hogar conyugal, y no se encontraba viviendo bajo su mismo techo, y al estar obligada a seguirlo donde quiera que éste lo fijara, le era fácil obtener una sentencia a su favor aduciendo abandono.

Sin embargo, hay que reconocer que la Jurisprudencia del Primer Tribunal Superior dio paso al cambio cuando en sus fallos señala que:

> "No siempre la separación a que acuda uno de los cónyuges demuestra o implica una falta de su parte. Es preciso que esa separación sea inmotivada o injustificada para que constituya abandono de los deberes conyugales"[6]

El marido se limitaba a probar una simple separación porque la ley lo favorecía estableciendo la carga a la mujer de seguir a su marido, más no de éste de seguirla a ella.

Con la entrada en vigencia del Código de la Familia, y habiendo superado lo establecido en el artículo 112 a) del Código Civil, el juez a fin de tomar en cuenta las circunstancias de cada caso tal y como indica el artículo 77 del Código de la Familia, debe tener claridad sobre los motivos que han llevado ya sea al hombre o a la mujer a salir de la casa, sin que a priori se tome como que la última ha abandonado su hogar, y que por tanto es culpable en el divorcio por no haber seguido a su marido.

---

[5] Ley 3 de 17 de mayo de 1994, por la cual se aprueba el Código de la Familia, G. O. 22591 de 1 de agosto de 1994, año XCI, p. p. 1-224.

[6] Primer Tribunal Superior de Justicia. Sentencia consultada de 20 de enero de 1994 dentro del Proceso de divorcio propuesto por Néstor René González contra Claudia Esther Rodríguez de González. Magistrado Ponente: Aníbal Herrera Peña.

El alejamiento ya sea de uno a otro cónyuge puede no haberse originado por conductas de quien alega ser inocente.

Somos del criterio que para que se configure la causal de abandono de los deberes de esposo o esposa, y/o padre o madre, el mismo debe ser voluntario por parte del cónyuge que abandona e igualmente el demandante, que alega ser inocente, debe probar que tal abandono, es decir que el alejamiento no fue originado por sus conductas.

En tal sentido, MONROY CABRA manifiesta que en estos casos se deben hacer las siguientes observaciones: "a) el incumplimiento debe ser grave e injustificado; b) no es necesario que se incumplan todos los deberes sino uno o varios de ellos; c) **al cónyuge que alegue el incumplimiento le corresponde la carga de la prueba** ..."[7] (la negrita es nuestra).

En nuestra opinión el artículo 77 del Código de la Familia, ha eliminado la situación de **desigualdad legal** a la que se sometía a la mujer, por el sólo hecho de serlo, de suerte que al establecerse que el domicilio conyugal debe fijarse de común acuerdo y que en caso contrario se tomarán en cuenta las circunstancias de cada caso, se están equiparando los derechos y deberes que tienen los cónyuges mutuamente, buscando en todo caso la verdad material. Se hacen realmente recíprocos los derechos y obligaciones.

Este artículo que ha introducido el Código de la Familia, en el que se obliga a valorar las circunstancias de cada proceso, rompe con la concepción tradicional de que la mujer es quien debe realizar las labores domésticas del hogar.

Nos referimos a este punto, ya que es frecuente observar que en los procesos de divorcios se invoca la causal sexta (6ª) del artículo 212 del Código de la Familia, es decir, el abandono absoluto de los deberes de esposa, llegando a señalarse en algunos casos en los hechos en que se funda la demanda, que "la mujer no obedece a su marido" y que por tanto ha incurrido en abandono y hasta en trato cruel.

Esto es un indicativo de que la igualdad legal no se compagina con la real, ya que en nuestro medio existen quienes alegan que la mujer debe estar a disposición incondicional del marido y por tanto obedecerlo, en una relación de subordinación, a pesar de las normas constitucionales como las descritas que reconocen la igualdad de derechos sin distinción de sexos. Todo esto producto de concepciones socio-culturales que van formando estereotipos tal y como explica Graciela B. Ferreira en su obra "Hombres Violentos Mujeres Maltratadas", cuando dice que: "Por fin nos damos cuenta de que gran cantidad de normas, costumbres o prescripciones -al consolidar los llamados estereotipos masculinos y femeninos- se han vuelto contraproducentes para lograr una cierta plenitud humana. Los estereotipos son los moldes sociales prefijados que se han utilizado para educar a las personas según su sexo".[8]

En muchos casos, los testigos no hacen alusión a hechos consistentes en comprobar el abandono de los deberes de esposa, limitándose a señalar que el señor X, "no tiene quien le realice las labores domésticas del hogar", y que por tanto les consta el abandono, hecho éste que por si sólo no puede entenderse nunca como abandono de los deberes de esposa, pues como hemos manifestado para que se configure dicha causal deben estar presentes otros elementos.

En otros casos ha sido sustentada la demanda de divorcio con fundamento en el abandono absoluto de los deberes de esposa, en el hecho de que al no convivir la misma bajo el mismo techo con su esposo, mal puede cumplir a cabalidad con los

---

[7] MONROY CABRA, Marco. Derecho de Familia y Menores, 2ª ed., Editorial Librería Jurídica Wilches, Bogotá, 1991, pág. 272.

[8] FERREIRA, Graciela B. Hombres Violentos Mujeres Maltratadas. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, Argentina, 1992, pág. 77.

deberes a ella asignados como lo es el de seguir a su marido adonde quiera que fije el domicilio conyugal, o que la mujer no puede cumplir con el deber de asistencia como lo es el de preparar los alimentos para su esposo, atender su ropa, procurale su compañía permanente, es decir, todas las atenciones que una esposa dedicada debe proporcionar a su marido, a pesar de que ésta trabaje fuera del hogar.

No comparto la tesis que afirma que a falta de domicilio conyugal, la mujer seguirá el del marido y de no hacerlo se configura el abandono absoluto de los deberes de esposa, así como tampoco que la realización de las labores domésticas son propias de las responsabilidades exclusivas de la mujer dentro del matrimonio, por las razones que ya hemos expresado en nuestros fallos y que son las siguientes:[9]

> "**Primero**: El Matrimonio una vez contraído produce efectos y obligaciones RECÍPROCAS entre los esposos.
>
> **Segundo**: Esas obligaciones RECÍPROCAS son la cohabitación, la fidelidad, el apoyo, socorro y ayuda mutua.
>
> **Tercero**: El artículo 110 del Código Civil expresa que "Los cónyuges están obligados a vivir juntos y a guardarse fidelidad. Los cónyuges se deben recíprocamente respeto y protección.
>
> **Cuarto**: A falta de la fijación de un domicilio conyugal, mal puede imputarse a uno a otro cónyuge la responsabilidad exclusiva de convivencia bajo un sólo techo, pues, hay que buscar más allá de la norma, ya que las condiciones que revisten a cada matrimonio son distintas y dependen de las circunstancias que lo rodean, sean éstas de orden económico, social o moral, y las acciones que cada pareja ha adoptado, habiendo la otra aceptado. Llegando a un acuerdo tácito de vivir de una manera distinta a lo que se entiende como tradicional".

Sin embargo, debemos manifestar que "No con esto estamos afirmando que en la institución del matrimonio rija el principio de autonomía de la voluntad, pero hay que recordar que los criterios modernos, los cuales pueden ser bien tomados en cuenta al aplicar e interpretar el Código Civil, apuntan, tal y como lo reconoce el Código de la Familia al establecimiento de la igualdad de los cónyuges en la relación, lo que se evidencia en la definición que de matrimonio adopta la nueva ley: El matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer, con capacidad legal, que se unen para hacer y compartir una vida en común. (El subrayado es nuestro.)[10]

En otros casos, el abandono es alegado por el actor a pesar de que no existe certeza de que realmente se fijó un domicilio conyugal. Al respecto el Primer Tribunal Superior de Justicia, bajo la ponencia del Magistrado Jorge Isaac Iglesia, dejó clara la situación cuando señaló que:

> "En este caso, pese a estar ligados por el vínculo matrimonial, los esposos no ajustaron su conducta a ese sistema de vida que auspicia la vida en común matrimonial. Pero en ningún momento puede decirse que esto fuera responsabilidad exclusiva de la esposa y tampoco se haya probado que ella se sustrajo voluntariamente de ese sistema de conducta, abandonado deliberadamente los deberes propios de su

---

[9] Tribunal Superior de Familia. Magistrada Ponente- Ángela Russo de Cedeño. Fallo de veintiuno (21) de marzo de mil novecientos noventa y seis (1996) dictado en proceso de divorcio apelado, entrada 95 SA-314.

[10] Primer Tribunal Superior de Justicia. Magistrada Ponente- Ángela Russo de Cedeño. Fallo de veintiuno (21) de marzo de mil novecientos noventa y seis (1996) dictado en proceso de divorcio apelado, entrada 95 SA-314.

> condición de esposa. Y es que era responsabilidad de ambos propiciar las condiciones adecuadas para que se hiciera factible una normal vida en común. Esa responsabilidad gravitaba con mayor peso sobre el esposo que ahora pretende la ruptura definitiva del vínculo conyugal".[11]

El criterio de la necesidad de acreditar la culpabilidad a quien se le imputa el abandono de los deberes de esposos o esposa, ha sido recientemente ratificado por nuestra más alta Corporación de Justicia, quien en resolución del 12 de diciembre de 1995, en un proceso de divorcio por Separación de Hecho, manifestó que:

> "... al estudiar la sentencia materia de la impugnación es fácil percatarse de la posición del demandante. Existe realmente una errónea valoración probatoria, cuando, como es fácil percibir en las pruebas aportadas al proceso, el demandante abandonó voluntariamente el hogar separándose de su esposa y el fallo desconoce tal situación.
>
> Para el tribunal la declaratoria de culpabilidad no es pertinente por cuanto así se desprende del contenido del artículo 116 del Código Civil, al permitir que cualquiera de los cónyuges, sea culpable o inocente, pueda promover la acción de divorcio aduciendo separación de hecho. La jurisprudencia citada por el Tribunal Superior tiene razón de ser en cuanto a la facultad para accionar. Cuestión distinta es lo establecido en el artículo 121 del Código Civil en donde frente a una pensión de alimentos, el tribunal está en la obligación de determinar si efectivamente tal y como lo pide la demandante, se hace merecedora del auxilio alimentista establecido en dicha disposición par lo cual procede la calificación de culpabilidad.
>
> Ahora bien, el artículo 121 del Código Civil dispone que el Juez puede conceder una pensión alimenticia a cargo del culpable, lo que implica que esa pensión la establece si lo considera conveniente.
>
> En el caso presente, considera la Sala, que probada como está la culpabilidad del demandante respecto a la separación de hecho ..."[12]

Nuestra más alta Corporación de Justicia, en fallo de 19 de marzo de 1996, en relación a la causal de abandono absoluto de los deberes de esposo o esposa, y en cuanto a la necesidad de probar los motivos que condujeron a la separación de los cónyuges y a quién le corresponde la carga de la prueba, señaló:

> "... El divorcio se demandó por una causa que, en opinión de la Sala, constituye un cargo mucho más grave que la mera y simple cuestión de determinar cual es la residencia de los cónyuges. Haber demostrado en forma aislada que la parte demandada no vive en el domicilio del marido, sin aportar elementos que expliquen las razones generadoras de ese evento, no autoriza a nadie para que infiera que la mujer fue culpable del abandono de sus deberes de esposa. Como acertadamente lo señala el Procurador General de la Nación, muchos y variados pueden ser los motivos responsables de que esa situación esté ocurriendo y no hay tampoco argumento que sirva par sustentar que debe presumirse que lo acontecido se produjo por culpa de la mujer y no por culpa del marido, fuera de que no hay

---

[11] Primer Tribunal Superior de Justicia. Magistrado Ponente - Jorge Isaac Iglesias. Fallo de 2 de mayo de 1990. Apelación interpuesta dentro del proceso de Divorcio propuesto por MYRON MORGAN NICANOR contra MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ MITRE.

[12] Corte Suprema de Justicia. Sala de lo Civil. Fallo de 12 de diciembre de 1995.

> certidumbre acerca de si la demandada permanece en el verdadero domicilio conyugal o si los esposos residen en lugares distintos por simples razones de trabajo o de cualquier otra índole, no necesariamente imputables a divorcio porque su esposa era culpable de incurrir en la causal contemplada en el ordinal 7 del artículo 114 del Código Civil, a él le correspondía probar la culpabilidad de su esposa"[13]

En el tema relativo a las labores domésticas, es importante hacer mención que además de que tradicionalmente se han atribuido las mismas a la mujer, dicho trabajo no es reconocido como tal ni por las propias mujeres, ya que es un rol asignado culturalmente a ellas y al cual no se le otorga valor económico.

Me refiero a este punto, ya que a menudo cuando las mujeres acuden a declarar en un proceso, y dando cumplimiento al Código Judicial se les pregunta por su profesión u oficio a fin de que conste en sus datos generales, las mismas responden que "no trabajan, ya que sólo realizan las labores del hogar".

Ni la propia mujer da valor a su trabajo en la casa.

Este fenómeno es claramente explicado en la obra "Historias no contadas de Mujeres, Hombres y Vacas" de Aguilar, Azofeifa, Rodríguez y Velasco, cuando al referirse a la división del trabajo, señalan que: "las mujeres tienen gran parte de la responsabilidad del trabajo sin fin, es decir, del que se hace dentro del hogar. Esta es precisamente una de las características del trabajo femenino, su invisibilidad; el trabajo de las mujeres desaparece una vez concluido (la comida, la ropa limpia, entre otras), su destino no es el mercado y por lo tanto no se contabiliza económicamente (por ejemplo la crianza de gallinas, la elaboración de ropa para los hijos) y no tiene valor social (la sociedad no reconoce las labores del hogar como trabajo, salvo cuando se contratan servicios domésticos). Ahora bien, la invisibilidad del aporte productivo de las mujeres, no es una situación que se da exclusivamente en el análisis del sector pecuniario, sino que éste se extiende a las concepciones, valoraciones y planteamientos que se hacen en el sector agrícola tanto como en otras actividades productivas."[14]

Cabe destacar que nuestro Código de la Familia, en cuanto a esa invisibilidad del trabajo doméstico, rompe con las concepciones tradicionales, al punto que entre sus normas lo reconoce y asigna un valor económico, de suerte que la mujer que trabaja en casa puede pedir el reconocimiento del mismo.

Así, al referirse al Régimen de Separación de Bienes, el artículo 128 del Código de la Familia señala que: "... El trabajo para la casa de cualquiera de los cónyuges será computado como contribución a las cargas y dará derecho a obtener una compensación que el Juez señalará, a falta de acuerdo, a la extinción del régimen de separación."

Este mismo artículo es aplicable al Régimen de Participación en las Ganancias, ya que el artículo 104 del Código de la Familia, determina que: "En todo lo no previsto en esta sección se aplicarán, durante la vigencia del régimen de participación en las ganancias, las normas relativas al régimen de la separación de bienes".

A pesar del adelanto que legalmente hemos logrado, cuando se presentan procesos en los que se manifiesta expresamente que se pretende un divorcio por razón de que la mujer no obedece al marido, o porque no le lava, le plancha ni cocina, tomamos conciencia de que el reconocimiento a nivel de una ley no es

---

[13] Corte Suprema de Justicia. Sala de lo Civil. Magistrado Ponente - Eligio A. Salas. Fallo de 19 de marzo de 1996.

[14] AGUILAR, Lorena; AZOFEIFA, Francisco; RODRÍGUEZ, Guiselle y VELASCO, María Luisa, Historias No Contadas de Mujeres, Hombres y Vacas. Litografía e Imprenta Imperial, San José, Costa Rica, Febrero de 1996, pág. 9.

suficiente, sino que se hace indispensable y urgente su divulgación a través de planes y programas en los que intervengan todas y cada una de las instancias tanto estatales como del sector civil.

Debemos educar a nuestros hijos e hijas en forma tal que respeten sus derechos y colaboren en las responsabilidades domésticas, ya que sólo así lograremos la unidad familiar.

B. Ley N° 27 de 16 de junio de 1995:

La República de Panamá, en un esfuerzo más ante su compromiso adquirido internacionalmente al ratificar mediante Ley N° 12 de 20 de abril de 1995 (Gaceta Oficial N° 22,768 de 24 de abril de 1995) la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La Mujer, aprobó la Ley N° 27 de 16 de junio de 1995, por la cual se tipifican los delitos de violencia intrafamiliar y maltrato de menores; se ordena el establecimiento de dependencias especializadas para la atención de las víctimas de estos delitos; se reforman y adicionan artículos al Código Penal y Judicial; y se adoptan otras medidas, constituyendo uno de los grandes avances que luego del esfuerzo en materia de derechos de la mujer se hayan alcanzado en nuestro país.

Decimos esto, ya que a pesar de que la sociedad aceptaba el hecho de que la violencia doméstica es un problema que debíamos enfrentar, no existía en nuestra legislación antes de la entrada en vigencia de la Ley 27 de 1995 una regulación que erigiera en delito el maltrato y violencia intrafamiliar, debiendo recurrir al momento de que ésta se daba, a los delitos sobre lesiones personales, no dándose en dichos ni el tratamiento legal adecuado ni el psicológico.

La nueva Ley que tipifica los delitos de violencia intrafamiliar y maltrato de menores, es el resultado de la necesidad de elevar a delito las constantes violaciones al derecho de familia, donde en especial se ve afectada la mujer, los niños, niñas, adolescentes y los ancianos, quienes en la mayoría de los casos, por representar a grupos más vulnerables en nuestra sociedad, resultan los más afectados.

Somos conscientes que el simple hecho de haber tipificado como delito la violencia intrafamiliar y el maltrato, no significa que los mismos van por ello a ser erradicados.

Sin embargo, esta Ley constituye un avance en el respeto y reconocimiento de los derechos de la mujer y de los miembros de la familia, aunado a que la misma contempla la atención y tratamiento de dicho problema familiar.

Así el artículo 3 de la Ley 27 de 1995 adiciona el artículo 215 A del Código Penal así:

> "El miembro de una familia que agreda física o psicológicamente, a otro miembro, será sancionado con 6 meses a 1 año de prisión, o con medida de seguridad curativa, o con ambas.
>
> En caso de agresión psicológica, debidamente comprobada por el médico psiquiatra forense, el agresor primario será sancionado con la aplicación de medida de seguridad curativa, conforme al Artículo 115 del Código Penal, debidamente vigilada por el Departamento de Corrección.
>
> En caso de incumplimiento de la medida de seguridad curativa, el juez podrá sustituirla por prisión de 6 meses a 1 año".

Esta Ley, también en su artículo 3 define lo que debe entenderse como miembro de una familia señalando que son:

"... las personas naturales unidas por el vínculo de parentesco o matrimonio, y quienes convivan con ellos de manera permanente, con exclusión de aquellos cuya convivencia esté fundada en vínculos de carácter contractual".

Otro aspecto importante de la nueva legislación, lo constituye el artículo 6 que adiciona el Artículo 215 D del Código Penal, en el sentido de hacer responsable al funcionario público o al particular de comunicar la ejecución de alguno de los delitos que contempla esta Ley, así:

"El funcionario público o el particular que tenga conocimiento de la ejecución de un hecho tipificado como violencia intrafamiliar o maltrato de menores, y no ponga en conocimiento de las autoridades la comisión del delito, será sancionado con 50 a 150 días multa".

Entra en juego así el poder de ejecución que tiene el juez, es decir, "el poder o facultad suficiente para hacer cumplir el mandato que lo reconoce (que reconoce el derecho o pretensión), teniendo siempre como fin primordial el bienestar físico y moral de la familia y el menor. De nada sirve que el juez reconozca un derecho si el mismo no se materializa".[15]

Es importante señalar respecto a esta ley, que el hecho de poner en conocimiento de las autoridades la comisión de un delito de violencia intrafamiliar, no implica responsabilidad alguna para el denunciante, aún cuando no se pruebe la comisión del delito, ya que la Ley 27 de 16 de junio de 1995, así lo contempló en su artículo 6.

C. En materia Laboral:

Es innegable que en Panamá se han aprobado leyes que benefician a la mujer tratando de lograr su integración en condiciones de igualdad a la sociedad. Sin embargo, derogada la legislación que excluye o limita a las mujeres en el ejercicio de sus derechos, o creada una nueva que reconoce los mismos, el problema no desaparece; sigue allí, latente y representa un obstáculo que afecta a la sociedad en que vivimos.

"Existen múltiples factores que hacen que estos derechos no se cumplan:

- Desconocimiento de las leyes por parte de las mujeres.
- Evasión de parte de los empleadores.
- Las licencias de maternidad no son reconocidas como inversión social o de la salud.
- Desconocimiento de los beneficios de la Lactancia Materna"[16]

Con el fin de contribuir al conocimiento y difusión de dichos derechos podemos señalar las siguientes normas que dentro de nuestra legislación laboral protegen la lactancia materna y por tanto a la mujer, quien biológicamente ha sido bendecida con el embarazo.

1. Derecho a no ser despedida.

La protección de la mujer embarazada en nuestra legislación parte de la norma constitucional que claramente así lo dispone.

El artículo 68 de la Constitución Panameña establece que "Se protege la maternidad de la mujer trabajadora".

Queda así claro con esta norma constitucional que el Estado Panameño consciente de su responsabilidad, protege el derecho a la maternidad de la mujer

---

[15] RUSSO DE CEDEÑO, Ángela y CORREA, Rosaria. La Jurisdicción de Familia y Menores en el Código de la Familia, Cuadernos de Educación Judicial N° 5, Órgano Judicial de Panamá, enero de 1995, pág. 21.

[16] Embarazo, Lactancia Materna y Derechos de la Mujer Trabajadora. Publicación auspiciada por el Hospital Amigo de los Niños-Lactancia Materna. Departamento Materno Infantil del Ministerio de Salud y El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), la edición, Panamá, 1995, pág. 2

trabajadora.

Además, la misma indica que "La que esté en estado de gravidez no podrá ser separada de su empleo público o particular", no pudiendo por tanto ser despedida por razón de su embarazo.

Desarrollando el precepto constitucional, el Código de Trabajo al referirse a este punto establece en su artículo 106 que: "La Mujer que se encuentra en estado de gravidez sólo podrá ser despedida de su empleo por causa justificada y previa autorización judicial".

2. Derecho al descanso obligatorio.

Nuestra Constitución Política en su artículo 68 dispone con el fin de asegurar el desarrollo de un embarazo normal, la recuperación de la madre y la atención de ésta, del niño o niña producto del mismo, que: "Toda trabajadora en estado de gravidez gozará de descanso forzoso retribuido del mismo modo que su trabajo durante las 6 semanas que preceden al parto y las ocho que le siguen".

Este mismo derecho se encuentra desarrollado en la Ley 44 de 12 de agosto de 1995, por la cual se dictan normas para regularizar y modernizar las relaciones laborales, cuando en su artículo 14, que subroga el artículo 107 del Decreto de Gabinete 252 de 1971, asegura el permiso o licencia de maternidad con el pago del salario completo para la mujer que se encuentra embarazada y que desarrolle trabajos remunerados de cualquier naturaleza.

3. Derecho a la suspensión de términos de caducidad y prescripción establecidos en favor del empleador.

La nueva Ley 44 de 12 de agosto de 1995, estableció en su artículo 14 que: "Durante el período de licencia señalado en este artículo, bajo pena de nulidad, el empleador no podrá iniciar, adoptar ni comunicarle a la trabajadora ninguna de las medidas, sanciones y acciones previstas en este Código. Para estos efectos, durante este período se suspenden los términos de caducidad y prescripción establecidos a favor del empleador".

4. Derecho a no trabajar jornadas extraordinarias o nocturnas.

El descanso adecuado para el logro de un producto sano se encuentra establecido en el artículo 116 del Código de Trabajo cuando reconoce a la mujer embarazada el derecho a no trabajar jornadas extraordinarias o nocturnas, imponiendo al empleador la obligación de hacer los ajustes necesarios para que esto pueda cumplirse.

5. Derecho a no efectuar tareas perjudiciales a su estado.

En este mismo orden de ideas, la referida norma del Código de Trabajo establece otra obligación a cargo del empleador y en beneficio de la trabajadora embarazada, cuando dispone que: "El empleador hará también los arreglos necesarios con el objeto de que la trabajadora en estado de gravidez no efectúe tareas inadecuadas o perjudiciales a su estado".

Así, dicha norma indica que: "La Mujer en estado de gravidez no podrá trabajar jornadas extraordinarias. Si la trabajadora tuviera turnos rotativos en varios períodos el empleador está obligado a hacer los arreglos necesarios para que la trabajadora no tenga que prestar servicios en la jornada nocturna o mixta".

6. Derecho a amamantar a su hijo o hija.

El derecho que tiene la madre de poder amamantar a su hijo o hija, es en nuestro medio poco conocido.

Con el objetivo de que la madre pueda alimentar a su hijo o hija, el Código de Trabajo, siguiendo los designios constitucionales de proteger el embarazo y la mujer embarazada, dispone en su artículo 114 que: "Toda mujer cuando está

lactando dispondrá en los lugares donde trabaja de un intervalo de quince minutos cada tres horas, o si lo prefiere de media hora dos veces al día durante sus labores, con el objetivo de alimentar a su hijo.

El empleador procurará algún medio de descanso dentro de las posibilidades de sus labores y mantendrá suficientes sillas o asientos a disposición de las trabajadoras. El tiempo empleado para tal fin, deberá computarse para efecto de la remuneración de la trabajadora, como tiempo de trabajado".

Las grandes distancias que separan los hogares de los lugares de trabajo, la ausencia de guarderías en los centros de trabajo, dificultan el cumplimiento de este derecho reconocido en favor de la mujer, el niño y la niña.

7. Derecho a un local acondicionado para poder amamantar a su hijo o hija.

Tomando en cuenta que lda ley reconoce el derecho que tiene la madre de amamantar a su hijo o hija, el mencionado artículo 114 del Código de Trabajo, a efectos de que pueda asegurarse dicho derecho, establece que "Todo empleador que ocupe en el local o lugar de trabajo más de 20 mujeres, quedará obligado a acondicionar un local para que las mujeres alimenten sin peligro a sus hijos. Este acondicionamiento se hará dentro de las posibilidades económicas del empleador".

En ese mismo sentido, el artículo 156 acápite b del Código Sanitario, establece que: "Toda obrera o empleada publica o particular, tendrá facilidades para el amamantamiento de su hijo, y las instalaciones, establecimientos y servicios de importancia dispondrá de cunas, coches y otras instalaciones adecuadas".

D. Ley 22 de 7 de diciembre de 1990.[17]

En nuestro medio, desde 1990, la mujer puede cuando contrae matrimonio, adoptar o no el apellido del marido al momento de hacer la solicitud de sus documentos de identidad personal.

Con anterioridad a esta ley, la mujer debía necesariamente una vez que contraía matrimonio adoptar el apellido del marido.

El reconocimiento de este derecho que tiene la mujer de conservar su apellido y de no firmar con el de casada, también ha sido plasmado en el Código de la Familia, específicamente en el artículo 76. El mismo constituye un avance más en nuestra legislación ya que reconoce el derecho a la individualidad de todo ser humano. La mujer no pertenece al marido.

A pesar de que desde 1990 se encuentra vigente la Ley 22, es común ver en nuestro medio que las mujeres no se acogen a la misma, de suerte que siguen incorporando el apellido del marido a su nombre.

Esta ha sido la costumbre y es el patrón cultural que nos ha sido transmitido, que tal como lo manifestamos anteriormente, fue aprendido y pasado de generación a generación, hecho éste que dificulta el cambio en nuestro medio, pero que no lo hace imposible.

E. Proyecto de Ley N° 42 "Por el cual se previene, prohíbe y sanciona el hostigamiento sexual en el empleo y en el sistema educativo".

Con el propósito de tomar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación de género y establecer políticas públicas para erradicarla, y en un esfuerzo más por reconocer la igualdad de oportunidades, fue elaborado el Anteproyecto de Ley N° 42 que a pesar de haber sido presentado a la Asamblea

[17]Ley 22 de 7 de diciembre de 1990, Gaceta Oficial N° 21,687 de 17 de diciembre de 1990.

Legislativa el año pasado y éste, no tuvo la acogida necesaria para que el mismo fuera discutido.

En el mismo se establecen como objetivos, "... el desarrollo de parte de la política publica antidiscriminatoria de género del Estado Panameño tendiente a:

1. Prevenir, prohibir e intentar erradicar el hostigamiento sexual en el empleo y en el sistema educativo;

2. Imponer responsabilidades y sanciones garantizando con ello los derechos humanos, la dignidad, el respeto y el bienestar de toda mujer u hombre estudiante, trabajadora o trabajador y servidora pública o servidor público."

En dicho anteproyecto de ley, se reconoce que el hostigamiento sexual es un problema grave y complejo que confronta nuestra sociedad y que demanda solución; que es una forma de discriminación por razón de género y constituye una práctica ilegal e indeseable; así como que dicha conducta afecta el desarrollo profesional, la eficiencia, las oportunidades de promoción y el nivel de productividad general en las empresas, instituciones públicas y el sistema educativo.

En el mismo, se define el hostigamiento sexual cuando en su artículo 6 dice que se entiende por tal "... toda conducta sexual no consentida por quien le reciba, ya sea que hubiera ocurrido una sola vez o en forma reiterada y que provoque un efecto perjudicial en las condiciones o desempeño laboral o educativo".

Este anteproyecto de ley es una muestra más de la preocupación que existe en el sector de la población, frente a otro que no lo tiene como prioridad, ya que como hemos indicado, no fue considerado para su discusión en la Asamblea Legislativa, a pesar de los esfuerzos de la Comisión de Asuntos de la Mujer, de introducir en nuestras leyes las tendencias modernas que permitan una real protección del ser humano y sobre todo, la igualdad de oportunidades sin distingos de ninguna clase.

F. Decreto Ejecutivo N° 28 de 26 de enero de 1996. "Por el cual se desarrolla el Artículo 491 de la Ley 3 de 17 de mayo de 1994.

El artículo 491 del Código de la Familia, faculta al Ministerio de Educación para que desarrolle un sistema que permita continuar y terminar los estudios a las adolescentes embarazadas.

Esta norma representa un avance en nuestra legislación, ya que con anterioridad a la entrada en vigencia del Código de la Familia, la estudiante que quedaba embarazada se veía obligada a dejar la escuela con las consiguientes consecuencias sociales que ello traía. Una vez que ésta dejaba la escuela por razón de su embarazo, difícilmente lograba reintegrarse y poder continuar con dichos estudios.

Con el fin de que la adolescente embarazada no tenga que perder el año escolar, continúe estudiando y tenga la oportunidad de superarse y seguir adelante, se dictó el Decreto Ejecutivo N° 28 de 26 de enero de 1996, mediante el cual se establece el trámite en los planteles educativos para estos casos, asegurando que la adolescente reciba los medios educativos adecuados para la continuación de sus estudios, pudiendo utilizarse la intervención de un equipo interdisciplinario conformado por trabajadores sociales, psicólogos y profesionales afines, quienes darán sus recomendaciones sobre el caso.

G. Decreto Ejecutivo N° 70 de 27 de julio de 1995.

Como muestra del compromiso por trabajar en la integración social, promoviendo la igualdad de oportunidades, potenciando el papel de la mujer en nuestro país, y considerando que: "... todos los estudios realizados a nivel Centroamericano han demostrado que la mujer se encuentra en una situación de desventaja social a nivel de las micro y macro estructuras sociales; que las

diferencias sociales que existen entre hombres y mujeres no están determinadas por sus características biológicas, sino por los condicionantes de género, entendiéndose como aquellos patrones de conducta establecidos por la organización social, la educación, la iglesia, la familia, los medios de comunicación y otros; que la ratificación de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana para Sancionar, Prevenir y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, de la Organización de Estados Americanos y el Código de la Familia han sido muestras evidentes de la intención de los Gobiernos de lograr una sociedad equitativa y democrática para hombres y mujeres; que se hace necesario visibilizar el aporte de la mujer al desarrollo del país creando una instancia de concertación que permita su inclusión y valoración en la sociedad como un ente productivo; que el programa de acciones inmediatas derivadas de la Declaración de San Salvador II para la inversión en capital humano suscrito por nuestro país el 31 de marzo de 21995, se consagra la Consolidación de las Oficinas Nacionales de la Mujer elevándolas a un alto nivel de decisión gubernamental para que apoyen la superación de la Mujer"[18], mediante Decreto Ejecutivo número 70 de 27 de julio de 1995, se creó el Consejo Nacional de la Mujer, adscrito al Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, formado por doce miembros (y sus respectivos suplentes), seis del gobierno y seis de la sociedad civil.

Lo que se pretende es un Consejo Nacional de la Mujer en el que se unan esfuerzos de lado y lado, es decir del gobierno y de la sociedad civil, con la finalidad de eliminar los obstáculos que por razones culturales y sociales impiden a la mujer ejercer en forma real y efectiva un derecho a la par del hombre.

El Consejo Nacional de la Mujer, es un organismo consultor y de asesoría para la promoción y desarrollo de la mujer en la vida política, social y económica del país, con los objetivos y responsabilidades siguientes:

1. Promover el desarrollo de la mujer en la vida política, social y económica del país.

2. Gestar y evaluar políticas públicas para la mujer, que faciliten la incorporación de la equidad de género en los planes nacionales de desarrollo.

3. Fomentar el desarrollo de programas y estudios, y efectuar cualquier actividad pertinente que permita la eliminación de todos los obstáculos que limiten la participación de la mujer.

4. Coordinar acciones con las oficinas o entidades que se creen en la administración pública para la promoción de la mujer.

5. Establecer relaciones y coordinar actividades con Instituciones Gubernamentales, Organismos no Gubernamentales e Internacionales que permitan intercambiar experiencias e información.

En ese mismo sentido, se creó la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de la Mujer, que es: "... el órgano técnico y administrativo encargado de las políticas públicas dirigidas a mejorar la condición de la mujer, hasta que se establezca por ley un órgano para tal efecto".[19]

CONCLUSIONES

---

[18]Decreto Ejecutivo N° 70 de 27 de julio de 1995, mediante el cual se crea el Consejo Nacional de la Mujer y la Secretaría Técnica del mismo.

[19]Decreto Ejecutivo N° 70 de 27 de julio de 1995, mediante el cual se crea el Consejo Nacional de la Mujer y la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de la Mujer, artículo noveno.

1. El desconocimiento de sus derechos es un límite para la participación de las mujeres en la vida política, social y cultural del país.

2. Como consecuencia de ello, para potenciar el papel de la mujer en la sociedad panameña es necesario que todos, tanto hombres como mujeres, conozcamos cuáles son nuestros derechos.

3. Derogada la legislación que excluye o limita a las mujeres en el ejercicio de sus derechos (derogada la teoría), el problema persiste, sigue latente y es lo peligroso, ya que ciertas prácticas siguen vigentes, haciendo de lado lo que legalmente ha sido ya reconocido.

4. En teoría las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres pero en la práctica no, de suerte que hemos experimentado avances en nuestra legislación, más no han sido del todo puestos en el contexto social.

5. A pesar del adelanto que legalmente hemos logrado con el Código de la Familia, cuando se presentan ante nuestros tribunales procesos en los que el actor manifiesta que pretende un divorcio por razón de que la mujer no obedece al marido, o porque no le lava, le plancha o cocina, tomamos conciencia de que el reconocimiento a nivel de una ley no es suficiente, sino que se hace necesario y urgente su divulgación a través de planes y programas en los que intervengan todas y cada una de las instancias tanto estatales como de la sociedad civil, y donde se involucren activamente tanto mujeres como hombres.

6. Para la mayoría de las mujeres el problema no es el reconocimiento de sus derechos sino la capacidad para ejercitarlos, ya que el problema radica en la subordinación estructural a que la sociedad está acostumbrada.

7. No siempre la separación a que acuda uno de los cónyuges demuestra o implica una falta de su parte. Es preciso que esa separación sea inmotivada o injustificada para que constituya abandono de los deberes conyugales.

8. Constituye un adelanto en materia de los derechos de la mujer, el hecho de que nuestro Código de Familia contemple que las adolescentes embarazadas no pueden ser separadas de las escuelas, asegurando así su educación. Sin embargo, todavía existe resistencia por parte de los educadores a poner en vigencia dicha norma.

9. Nuestra Constitución vigente, así como las anteriores, carecen de una normativa con perspectiva de género que se hace necesario incorporar.

10. Requerimos de una real articulación de esfuerzos entre el gobierno y la sociedad civil, donde la nota concordante sea el sentido de compromiso en la búsqueda de soluciones al problema.

PROPUESTA CONSTITUCIONAL PARA EL SIGLO XXI

Para poder realizar una revisión de las normas que están por debajo de la Constitución, hay que evaluar si las de rango constitucional responden a las necesidades actuales de la población panameña que incluye tanto a hombres como a mujeres.

Convencida de que la norma constitucional existente no es suficiente para enfrentar la inconsciente desigualdad que existe en nuestro medio, y para poder que se apliquen las normas jurídicas que contiene y contenía el Código de la Familia, y a fin de evitar la declaratoria de inconstitucionalidad de las mismas, hay que incorporar en la normativa constitucional, que a la mujer se le garantiza el derecho a la no discriminación y a la igualdad, aún cuando exista el artículo 19 de la Constitución Política Nacional.

En tal sentido, proponemos para el Siglo XXI:

1. Elevar a rango constitucional el problema de las tareas domésticas, en el sentido de que las mismas deben ser compartidas. Es una responsabilidad de ambos cónyuges y no sólo de la mujer.

2. Elevar a rango constitucional el fuero de paternidad, a fin de involucrar al padre en ese proceso, lo que contribuirá a la paternidad responsable.

3. Elevar a rango constitucional la obligación de integrar la perspectiva de género en todas las normativas.

4. Elevar a rango constitucional la obligación de dar tratamiento y seguimiento a todas las personas que son víctimas de violencia doméstica, y no dejarlo a discreción del funcionario competente.

5. Si está reconocido que la mujer se encuentra dentro de uno de los grupos vulnerables en las economías de desarrollo; si la realidad existente demuestra que es la mujer la que se ve desprotegida y despojada de una vivienda para ella, sus hijos e hijas; y si el interés del Estado al ratificar convenciones internacionales que destacan la situación de desigualdad que existe en nuestro medio por razón de sexo, es el de atacar el problema, es necesario elevar a rango constitucional la protección de la mujer para equiparar hasta cierto punto la situación de desventaja que vive la misma, la que en muchos casos no es más que consecuencia de la pobreza.

6. Elevar a rango constitucional la prohibición de que se utilicen imágenes que denigran a la mujer, como una limitante a la libertad de expresión enfocada a que los medios respeten el derecho a la imagen de la misma.

BIBLIOGRAFÍA

1. Obras:

AGUILAR, Lorena; AZOFEIFA, Francisco; RODRÍGUEZ, Guiselle y VELASCO, María Luisa. Historias No contadas de Mujeres, Hombres y Vacas, Litografía e Imprenta Imperial, San José, Costa Rica, febrero de 1996.

FERREIRA, Graciela B. Hombres Violentos Mujeres Maltratadas, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, Argentina, 1992.

MONROY CABRA, Marco. Derecho de Familia y Menores, 2ª de., Editorial Librería Jurídica Wilches, Bogotá, 1991.

QUINTERO, César. Derecho Constitucional, Tomo Y, Antonio Lehmann, Librería Imprenta y Litografía Ltda., San José, Costa Rica, 1967.

UMAÑA LUNA, Eduardo, LA FAMILIA: NÚCLEO FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD (¿Siglo XXI?), Ediciones Librería La Constitución Ltda., Santa Fe de Bogotá, 1996.

2. Revistas, folletos y cuadernos:

Embarazo, Lactancia Materna y Derechos de la Mujer Trabajadora. Publicación Auspiciada por el proyecto Hospital Amigo de los Niños-Lactancia Materna. Departamento Materno Infantil del Ministerio de Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)., 1ª edición, Panamá, 1995.

GINWALA, Frene. "La Discriminación no es el Problema", en Revista El Progreso de las Naciones, UNICEF House, 3 UN Plaza, Nueva York, N. Y. 10017, E. E. U. U., 1995.

RUSSO DE CEDEÑO, Ángela y CORREA, Rosaria. La Jurisdicción de Familia y Menores en el Código de la Familia, Cuadernos de Educación Judicial N° 5, Órgano Judicial, Panamá, 1995.

3. Entrevista:

Con el Dr. César Quintero, destacado constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Panamá.

4. Legislación:

Constitución Política de la República de Panamá de 1972, Reformada por los actos reformatorios de 1978 y por el Acto Constitucional de 1983, Editorial Álvarez, Panamá, 1985. Jorge Fábrega.

Constituciones de la República de Panamá, 1972, 1946, 1941, 1904. Impreso en los Talleres Gráficos del Centro de Impresión Educativa, 1981. Ramón E. Fábrega F. y Mario Boyd Galindo.

Código Civil de la República de Panamá. Anotado y concordado por Jorge Fábrega y Cecilio Castillero. Litho Impresor Panamá, 1987, y reformas adicionales.

Código Judicial de la República de Panamá. Gaceta Oficial N° 20756, con sus reformas.

Código de Trabajo. Decreto de Gabinete 252 de 1971.

Ley N° 27 de 16 de junio de 1995. Por la cual se tipifican los delitos de Violencia Intrafamiliar y Maltrato de Menores, se ordena el establecimiento de dependencias especializadas para la atención de las víctimas de estos delitos, se reforman y adicionan artículos al Código Penal y Judicial y se adoptan otras medidas.

Ley 3 de 17 de mayo de 1994, por la cual se aprueba el Código de la Familia, G. O. 22591 de 1° de agosto de 1994.

Ley 22 de 7 de diciembre de 1990, Gaceta Oficial N° 21,687 de 17 de diciembre de 1990.

Ley N° 44 de 12 de agosto de 1995, por la cual se dictan normas para regularizar y modernizar las relaciones laborales.

Decreto Ejecutivo N° 70 de 27 de julio de 1995, mediante el cual se crea el Consejo Nacional de la Mujer y la Secretaría Técnica del mismo.

Decreto Ejecutivo N° 28 de 26 de enero de 1996, por el cual se desarrolla el Artículo 491 de la Ley 3 de 17 de mayo de 1994.

Ley N° 12 de abril de 1995, Gaceta Oficial 22,768 de 24 de abril de 1995. Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra la Mujer (Convención "Belem Do Para").

Ley N° 5 de 16 de junio de 1987. Gaceta Oficial 20,830 de 25 de julio de 1987. Convención Internacional en contra de la Tortura.

Ley N° 4 de 22 de mayo de 1981. Gaceta Oficial 19,331 de 3 de junio de 1981. Convención Para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra La Mujer.

Ley N° 15 de 28 de octubre de 1977. Gaceta Oficial 18,468 de 30 de noviembre de 1977. Convención Americana Sobre Derechos Humanos ("Pacto de San José").

Ley 13 de 27 de octubre de 1976. Gaceta Oficial 18,336 de 18 de mayo de 1977. Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Ley 14 de 28 de octubre de 1976. Gaceta Oficial 18,373 de 8 de julio de 1977. Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos.

Ley 15 de 28 de octubre de 1976. Gaceta Oficial 18,269 de 4 de febrero de 1977. Protocolo Opcional al Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos.

Ley 35 de 23 de noviembre de 1957. Gaceta Oficial 13,432 de 3 de enero de 1958. IV Convención de Ginebra (Relativo a la Protección de Personas Civiles Durante Tiempo de Guerra).

ÍNDICE

PONENCIA i

PLENO 1

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 2

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL DOCTOR EMILIO ROYO LINARES EN REPRESENTACIÓN DE CÉSAR AUGUSTO RODRÍGUEZ GARIBALDO EN CONTRA DE LA ORDEN DE HACER N° AI-04-96-DGA, DICTADA POR LA DIRECTORA GENERAL DE ARRENDAMIENTO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CINCO (5) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 2

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR BOLÍVAR FÁBREGA CONTRA LA ORDEN DE NO HACER DADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SEIS (6) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 4

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR DIÓGENES BATISTA GRAU EN CONTRA DE LA SENTENCIA N° 136 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 1995 DICTADA POR EL JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO DE VERAGUAS. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 8

ACCIONES DE AMPAROS DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTAS POR LA LICENCIADA MERCEDES SOLÍS EN REPRESENTACIÓN DE GLORIANELA DE FARRUGIA, LUZ ELENA MARTÍNEZ, ANÍBAL SALAS CÉSPEDES, ALINETH PADILLA S. Y BLYSEIRA NAVARRO; POR LA LICENCIADA YANISSEL CHANG ÁVILA, EN REPRESENTACIÓN DE NIBARDO ELÍAS CABRERA, JUAN J. DOMÍNGUEZ R., JULISSA CASTILLO, MERCEDES SOLÍS AHUMADA, MELITON GONZÁLEZ, ALAÍN Y KHAREM J. LASSO Y POR EL LICENCIADO NIBARDO ELÍAS CABRERA EN REPRESENTACIÓN DE LEONOR E. ARCE, YANISSEL CHANG ÁVILA, LIDIA DE BAZÁN Y ÁLVARO CORREA RUEDA, CONTRA LA ORDEN DE NO HACER EMITIDA POR EL DIRECTOR DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, DE NO ENTREGAR LA FICHA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CATORCE (14) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . 9

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR CLAUDIO DOMINGO MUÑOZ REYES CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA 95-JDC 95 DE 26 DE NOVIEMBRE DE 1995 DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 2. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 13

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR JUAN SALOMÓN VEGA CONTRA LA JUEZ 15ª DEL CIRCUITO, RAMO PENAL, DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 14

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR JOSÉ MANUEL FAÚNDES RODRÍGUEZ EN CONTRA DE LA COMISIÓN DE CREDENCIALES, JUSTICIA INTERIOR, REGLAMENTO Y ASUNTOS JUDICIALES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, CATORCE (14) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 15

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PROMOVIDA POR EL LICENCIADO ROGELIO CRUZ RÍOS, EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ CASTRILLÓN HENAO, CONTRA LA ORDEN DE HACER PROFERIDA POR EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS, QUE CONSISTIÓ EN EL TRASLADO DE SU REPRESENTADO DEL HOSPITAL SANTO TOMÁS A LA CÁRCEL MODELO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 20

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PROPUESTA POR EL LICENCIADO HILARIO BELLIDO O., EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA AMERICAN INTERNATIONAL IMPORTS, S. A., CONTRA LA ORDEN DE NO HACER,

EXPEDIDA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 6 DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 20

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA LICDA. SARA SÁNCHEZ EN REPRESENTACIÓN DE PEDRO CAMPAGNIANI, GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO PANAMEÑO DE TURISMO, CONTRA LA ORDEN DE HACER DICTADA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 9 Y CONFIRMADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO MEDIANTE SENTENCIA DE 28 DE MARZO DE 1996. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 22

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDA POR JOSÉ MARÍA OLMOS CONTRA EL DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTE (20) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 22

DEMANDA DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO LUIS CARLOS CEDEÑO EN REPRESENTACIÓN DE HORACIO RODRÍGUEZ DE LEÓN, REPRESENTANTE DE HOMAB, CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 053 DE 27 DE ABRIL DE 1994, DICTADA POR EL MINISTERIO DE SALUD. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).
. 25

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR RUBÉN ÓSCAR CASTRO VS JUEZ SEGUNDO DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 26

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL HOTEL WASHINGTON HYATT Y/O OF PANAMÁ CONTRA LA ORDEN DE HACER DICTADA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 9 Y CONFIRMADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 27

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR DARÍO EUGENIO CARRILLO GOMILA CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA DILIGENCIA DE CIERRE DE ÁUDITO DE FECHA 1° DE AGOSTO DE 1996. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 29

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PROPUESTO POR LA FIRMA FORENSE TRONCOSO, LACAYO & PORRAS, EN REPRESENTACIÓN DE AGRO GANADERA SANTA FE, S. A., CONTRA LA ORDEN DE NO HACER, CONTENIDA EN EL AUTO N° 2119 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 1995, DICTADA POR EL JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO RAMO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 32

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO EDWIN R. MUÑOZ EN REPRESENTACIÓN DE KONG CHUN LI Y YAN WIN CHAN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 32

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LIC. BOLÍVAR JOSÉ CANO EN REPRESENTACIÓN DE MARISOL CABALLERO CONTRA EL JUEZ SEGUNDO DE CIRCUITO DE CHIRIQUÍ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 33

RECURSO DE HABEAS CORPUS 35

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MIGUEL RODRÍGUEZ Y EMILIA SOLÍS CONTRA LA FISCALÍA SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 35

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE SERGIO MORENO BERNAL Y EDGARDO HILL JORDÁN CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 36

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MIGUEL ÁNGEL ÁBREGO QUINTERO Y GILBERTO ESPINOZA CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 37

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROGELIO ELOY GARCÍA EN CONTRA DEL ADMINISTRADOR REGIONAL DE ADUANAS, ZONA ORIENTAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 39

HABEAS CORPUS A FAVOR DE FLORA RAMONA HEREDIA CONTRA EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 42

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ORLY ALEXIS BATISTA MONTES CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SEIS (6) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 46

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUAN REYES MARTÍNEZ GARRIDO CONTRA EL FISCAL NOVENO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SEIS (6) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 47

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOHNNY EREC RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, SEIS (6) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 49

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARMEN MORÁN DE ROSAS EN CONTRA DEL DIRECTOR DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 51

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FERNANDO MARTH SALDAÑA CONTRA LA DIRECTORA NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 53

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUPERTINO TORRES ATENCIO EN CONTRA DE LA JUEZ DÉCIMO QUINTA DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, OCHO (8) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 55

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JACQUELINE FABIÁN EN CONTRA DEL DIRECTOR DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, OCHO (8) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 58

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE VLADIMIR QUINTANA BONILLA CONTRA EL DIRECTOR DE MIGRACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, OCHO (8) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 60

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE REX JANSEN ROBERTS, EN CONTRA EL JUEZ TERCERO DEL CIRCUITO DE COLÓN, RAMO PENAL, MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 61

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE SANTA METZ, CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y

JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 65

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS ERNESTO MOSQUERA Y JAIRO JACOB ORTEGA POVEDA, CONTRA EL FISCAL SEGUNDO DE CIRCUITO DE SAN MIGUELITO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 68

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS ALCIDES GUERRERO CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 69

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ISABEL EDITH RODRÍGUEZ MACÍAS EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 70

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DEL SEÑOR RENÉ MIRÓ, CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 73

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR GUILLERMO BONILLA GARCÍA EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 73

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE YAHAIRA CRISTIN MORRIS CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOCE (12) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 76

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FELIPE CAMARGO AMAYA CONTRA EL JUEZ SEGUNDO DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TRECE (13) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 77

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDUARDO MALCOLM MOSQUERA CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 78

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DIEGO FERNANDO AGUIRRE EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 79

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JAVIER PORTABLES Y TOMMY ROY CRUZ VILLARREAL EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 80

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE JULIANA FOX, ROBERTO ORTIZ, RODOLFO FOX Y ALFREDO SIMPSON EN CONTRA DEL FISCAL TERCERO DEL CIRCUITO DE COLÓN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 81

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HERACLIO PEREA MOSQUERA EN CONTRA DE LA FISCALÍA CUARTA SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 82

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARLON LARA PALACIOS EN CONTRA DEL JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 83

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARÍA EDITH ARIZA DE MACHADO EN CONTRA DEL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 85

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE VICTORINO DE LA CRUZ EN CONTRA DEL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTE (20) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . . 87

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE SANTO DOMINGO RAMOS CONTRA EL JUEZ DE CIRCUITO DE DARIÉN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 90

HABEAS CORPUS A FAVOR DE HENRY LARRY GARCÍA CONTRA LA FISCAL PRIMERA SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 92

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE KWOK HUNG LEÓN NG Y WING LEUNG LEÓN YIP EN CONTRA DEL DIRECTOR DE MIGRACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 94

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EVELIO JIMÉNEZ EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 95

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ARCELIO ELÍAS BERNAL ÁVILA, CONTRA EL FISCAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 96

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS A. CERA RODRÍGUEZ EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 97

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE AVELINO ASPRILLA EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 98

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HIPÓLITO MARTÍNEZ, JULIO JALLER Y ELIGIO MARTÍNEZ EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 99

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROSA PEÑA DE FERNÁNDEZ EN CONTRA DEL DIRECTOR DE MIGRACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 102

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DAYANARA GARCÍA Y ALEXIS BRITTON EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 103

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DOMINICA BERTRE EN CONTRA DEL DIRECTOR DE MIGRACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 106

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE WEN KUNFENG O WAN KWANG CONTRA EL INSPECTOR DEL CENTRO CARCELARIO DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 108

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GENARO PALACIOS LUJÁN EN CONTRA DEL FISCAL

SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996) 109

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE PEDRO SAAD ARAÚZ EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 110

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROBERTO SANGUILLÉN EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 111

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE REBECA ZAMBRANO DE GONZÁLEZ EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 112

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LOS CIUDADANOS CHINOS LIN HONGIAO (NOMBRE LEGAL) O ZHEN KE ZHONG (USUAL) Y ZHEN DEXING (NOMBRE LEGAL) O ZHEN PENG CHAN (USUAL), CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 116

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ABRAHAM DE LAS MERCEDES FUENTES, CONTRA EL JUEZ SEGUNDO DE CIRCUITO RAMO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 117

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALEXANDER JESÚS BONILLA GUERRA CONTRA EL FISCAL SEGUNDO DE CIRCUITO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ. VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 118

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GUILLERMO ARTURO PORTE ALVARADO CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 120

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDUARDO ANTONIO ROSE JULIO EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996) 121

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JAIRO OSVALDO BELLO LÓPEZ EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 123

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALONSO BROWN WRIGHT EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TREINTA (30) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 125

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 127

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ROLANDO VILLALAZ GUERRA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR TOMÁS EMILIO DE SEDAS RAMOS, CONTRA EL ACTO DE NOTIFICACIÓN DEL AUTO N° 11 DE 12 DE ENERO DE 1988, EXPEDIDO POR EL JUZGADO CUARTO DE TRABAJO DE LA PRIMERA SECCIÓN, Y EL POSTERIOR ACTO DE ARCHIVAR EL EXPEDIENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 4, CONTENTIVO DEL PROCESO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO, PROMOVIDO POR TOMAS DE SEDAS RAMOS CONTRA EL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

SEIS (1996). 127

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO JORGE M. AGUILERA, EN REPRESENTACIÓN DE EITEL E. AGUILERA, CONTRA LOS ARTÍCULOS 4 Y 6 DEL DECRETO DE GABINETE N° 86 DE 30 DE MAYO DE 1969. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, OCHO (8) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 132

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA LICDA. KENIA ELIZABETH CÁRDENAS APOLAYO EN REPRESENTACIÓN DE FEDERICO SOLÍS EN CONTRA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA N° 71-01-491DGA DEL 25 DE MAYO DE 1995. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 143

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA POR MARIO JULIO GIRÓN CONTRA EL PROCESO PENAL QUE SE LE SIGUE POR EL SUPUESTO DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 147

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD, PROPUESTA POR EL LICENCIADO EDUARDO E. RÍOS MOLINAR, EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR JOSÉ DEL ROSARIO MUÑOZ, CONTRA LA SENTENCIA DE 30 DE MAYO DE 1995, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO (CASO JOSÉ DEL ROSARIO MUÑOZ CONTRA PARTES Y SERVICIOS TOYOPAN, S. A.). MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 149

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA POR ALBERTO PÉREZ DENTRO DEL PROCESO DE AYUDA PRENATAL SOLICITADO POR GLORIA GÓMEZ EN REPRESENTACIÓN DE YISKA GÓMEZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 149

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA POR MIGUEL DEGRACIA CASTRO EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES 157 DE 28 DE ABRIL DE 1995, 234 DE 15 DE JUNIO DE 1995, RESOLUCIÓN DE 18 DE AGOSTO DE 1995, TODAS EMITIDAS POR EL JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO DE VERAGUAS, RAMO CIVIL Y LA RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 1995, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 151

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTO POR JOSÉ RAMIRO FONSECA PALACIOS CONTRA LOS ARTÍCULOS 25 Y 26 DE LA LEY 1 DE 3 DE ENERO DE 1995, MEDIANTE LOS CUALES SE ADICIONAN AL CÓDIGO JUDICIAL LOS ARTÍCULOS 2528-A Y 2528-E. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 153

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA POR ALBERTO A. ORTEGA CONTRA SENTENCIA DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1992, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 154

TRIBUNAL DE INSTANCIA 155

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DENTRO DE LA ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA VILLALAZ Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE ÁLVARO PINO, HUMBERTO RUIZ, JOSÉ R. BRENES, CELESTE DE ARAÚZ, LUIS SANTIZO, FIDEL MARTÍNEZ Y OTROS, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA NOTA ARI/AG-DL/433-96 DE 22 DE MAYO DE 1996, EXPEDIDA POR EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 155

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO JOSÉ MANUEL FAÚNDES DENTRO DE LA ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR JOSÉ MANUEL FAÚNDES RODRÍGUEZ EN CONTRA DE LA COMISIÓN DE CREDENCIALES, JUSTICIA INTERIOR, REGLAMENTO Y ASUNTOS JUDICIALES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, CATORCE (14) DE AGOSTO

DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 156

DENUNCIA CRIMINAL PROPUESTA POR JOSÉ MANUEL FAÚNDES RODRÍGUEZ CONTRA EL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO SOSSA R. POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE DELITOS EN SU PERJUICIO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 157

SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN EN CONTRA DEL HONORABLE LEGISLADOR ALBERTO ALEMÁN BOYD, POR EL DELITO EN QUE HUBIERA INCURRIDO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 158

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DENTRO DE LA DEMANDA DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE ENRIQUE ALBERTO BRENNAN BRAVO Y CONTRA LA FISCAL PRIMERA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 160

SALA PRIMERA DE LO CIVIL 161

APELACIONES MARÍTIMAS 162

JESÚS ARTIACH, PANAVENT HOLDING, SERVICIOS ALVARADOS, MARINE SUPPLIERS, DISTRIBUIDORA MARINA, S. A. Y HONOR IMPORT APELAN CONTRA LA SENTENCIA DE 28 DE DICIEMBRE DE 1995 DICTADA POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ESPECIAL DE CONCURSO DE ACREEDORES DEL PACÍFICO C. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DOCE (12) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 162

RECURSO DE CASACIÓN CIVIL 167

FINANCIERA LA HISPANOAMERICANA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A ASEGURADORA MUNDIAL DE PANAMÁ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 167

LESTER CASH KNIGHT RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A JORGE LUIS BAZÁN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 169

AGNES ESTHER BRIN SALAZAR DE CHIARI RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE RODOLFO CHIARI DE LEÓN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, TRECE (13) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 170

FINANCIERA LA HISPANOAMERICANA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A ASEGURADORA MUNDIAL DE PANAMÁ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 171

AGROPECUARIA COMERCIAL, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A PORCINOCULTORES UNIDOS DE AZUERO, S. A. Y PRODUCTORES ASOCIADOS DE AZUERO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTE (20) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 172

ANA VICTORIA POSSE DE VALLARINO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE LOUIS MARTINZ ANDERSEN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 181

IMPEDIMENTO 182

BANCO GENERAL, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A MARDEN TORRIJOS HERRERA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 182

INSTITUTO DE INVERSIONES EUGANA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE FINA CAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 183

RECURSO DE HECHO 184

EL LICENCIADO ROLANDO A. SANTAMARÍA INTERPONE RECURSO DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 19 DE JULIO DE 1996, DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO INSTAURADA POR VICTORIANO GONZÁLEZ ORTEGA CONTRA ANTHONY LIM Ó ANTHONY PATRICK LIM, DAMARIS CHONG DE LIM, HORACIO CHIAL Y ADRIENNE PEARL LIM DE CHIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996. . . 184

TRIBUNAL DE INSTANCIA 185

APELACIÓN INTERPUESTA POR SEABOARD MARINE LIMITED CONTRA EL AUTO DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 1994, DICTADO POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ORDINARIO MARÍTIMO QUE LE SIGUE COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTE (20) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 185

LA LICENCIADA ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO, MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MENORES ELEVA CONSULTA A LOS HONORABLES MAGISTRADOS DE LA SALA PRIMERA, DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 187

SALA SEGUNDA DE LO PENAL 189

ACUSACIÓN PARTICULAR 190

ACUSACIÓN PARTICULAR PRESENTADA POR LA LCDA. OMAYRA GARCÍA DE BERBEY CONTRA LA LICENCIADA MARCELA DE ANTINORI, JUEZ OCTAVO (SIC) DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, POR EL SUPUESTO DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 190

AUTO APELADO 193

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 9 DE AGOSTO DEL 1995, PROFERIDA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, QUE SOBRESEE EN FORMA PROVISIONAL A EDGAR RENTERÍA HURTADO Y A ALEJANDRO MOYA ALLEN, SINDICADOS POR EL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE DAYANARA VIQUEZ MORENO Y ABDIEL ZACARÍAS CHAVERRA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, OCHO (8) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 193

AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO 195

SUMARIO INCOADO CONTRA CARLOS ANTONIO SHERLEY (A) "PICOLO", SINDICADO POR EL HOMICIIDIO DE JAVIER HINESTROZA ANGULO (A) "ARDILLA". MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 195

AUTO DE PROCEDER APELADO EN EL PROCESO SEGUIDO A ESTEBAN POLANCO MARQUÍNEZ, ELIÉCER RIVERA DE GRACIA, LUIS ALBERTO VARELA RUDAS, LUIS ANTONIO CÓRDOBA Y DEMETRIO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, SINDICADOS POR LOS DELITOS DE HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL Y ROBO EN PERJUICIO DEL DOCTOR MAURO JOSÉ ZÚÑIGA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 201

SUMARIAS SEGUIDAS A LUIS GABINO DE LA ROSA RODRÍGUEZ, MARCOS ARAÚZ MORENO, ALEX

ANTONIO LACAYO FONA Y LIBRADO ZAMBRANO BARRIOS POR LOS DELITOS DE HOMICIDIO, LESIONES PERSONALES, ROBO A MANO ARMADA Y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR EN PERJUICIO DE AGAPITO RIVERA AVILÉS (OCCISO), DOMITILA HERRERA TUÑÓN Y LUIS MIGUEL RIVERA HERRERA (LESIONADOS). MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 211

AUTO CONSULTADO 220

CONSULTA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ARIEL JOSÉ TUÑÓN LOAIZA Y RICAUTER JARAMILLO SAMANIEGO, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL, EN PERJUICIO DE ZURDAN ANTONIO RECUERO MENDOZA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 220

RECURSO DE CASACIÓN PENAL 222

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A ÁNGEL SANTIAGO SÁNCHEZ FLORES, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 222

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A ERIC BEY MOSCOSO TORRERO, POR DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA, EN PERJUICIO DE LA EMPRESA TADIBE, S. A. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CINCO (5) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 223

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A ENRIQUE SEGURA O ENRIQUE SINISTERRA, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CINCO (5) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 224

ADMISIBILIDAD DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A IRMTRAUD INGELORE GRAHT, SINDICADA POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 225

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A FRANCISCO CÓRDOBA, ANA LUISA LASSO Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 226

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A LUIS ALBERTO GONZÁLEZ MEJÍA, POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 228

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A ROLANDO CHELO LEGISTER BULLER, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 230

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL QUE SE SIGUE A NARCISO BASTO DÍAZ Y MIGUEL ÁNGEL QUINZADA, SINDICADOS POR LA COMISIÓN DE DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOCE (12) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 231

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A RAFAEL RENÉ UREÑA Y FRANCISCO ELÍAS VILLAVICENCIO GRANDA, SINDICADOS POR DELITO DE PECULADO EN PERJUICIO DEL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (I. R. H. E.). MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CATORCE (14) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 232

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A SILVINTON BARKER BAILEY, POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 233

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL QUE SE SIGUE A RIGOBERTO PEÑALOZA GUERRA, SINDICADO POR EL DELITO DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 234

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ROBERTO DE ARCO, FISCAL DE CIRCUITO EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 31 DE ENERO DE 1996, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL, QUE ABSUELVE A LUIS SAMUDIO DE LOS CARGOS FORMULADOS EN SU CONTRA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 235

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A FRANKLIN HERNÁNDEZ, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO COMETIDO EN PERJUICIO DE MARÍA ITZEL ALONSO DE THOMAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 236

RECURSO DE CASACIÓN EN EL PROCESO SEGUIDO CONTRA MARCO ANTONIO AYALA POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 239

SOLICITUD DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL DENTRO DEL RECURSO DE CASACIÓN EN EL PROCESO SEGUIDO A GUSTAVO ELIÉCER MELGAR FADUL, POR EL PECULADO EN PERJUICIO DE LA JUNTA COMUNAL DEL CHORRILLO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 239

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 243

DESISTIMIENTO DE RECURSO DE RECONSIDERACIÓN ANUNCIADO POR EL LICENCIADO JACINTO CEREZO GÓNDOLA, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 15 DE JULIO DE 1996, PROFERIDA POR LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, QUE SANCIONA AL LETRADO CON MULTA DE B/.500.00. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A: ECHEVERS. PANAMÁ, OCHO (8) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 243

RECURSO DE HECHO 243

RECURSO DE HECHO, INTERPUESTO POR EL FISCAL SEGUNDO DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A BERTA SOLÍS DE ARCHIBOLD Y RICARDO ARCHIBOLD, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA, EXPEDICIÓN DE CHEQUES SIN LA SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 243

RECURSO DE HECHO CONTRA RESOLUCIÓN PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO PENAL QUE SE SIGUE A ARISTIDES VEGA CORTEZ, SINDICADO POR EL DELITO DE HURTO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 244

RECURSO DE REVISIÓN PENAL 245

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ISABEL ELÍAS RODRÍGUEZ CORTEZ, POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE APODEMIO GUTIÉRREZ DELGADO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 245

ADMISIBILIDAD DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, INTERPUESTO POR RODRIGO ANTONIO HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE

VILLALAZ. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 246

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO QUE SE LE SIGUE A NICOMEDES CHANIS ARCIA, POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, OCHO (8) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 246

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR HERÁCLITO PEREA MOSQUERA, SINDICADO POR EL DELITO HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, SECUESTRO Y ASOCIACIÓN ILÍCITA, COMETIDO EN PERJUICIO DE VÍCTOR LIAO CHUNG. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, OCHO (8) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 247

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO EN EL PROCESO SEGUIDO A UBALDO SÁNCHEZ DE LEÓN Y JOSÉ LUIS SAMANIEGO GUERRERO, SINDICADOS POR EL DELITO DE ROBO, COMETIDO EN PERJUICIO DE CATALINO GONZÁLEZ FRANCO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOCE (12) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 248

JUICIO SEGUIDO A SATURNINO RODRÍGUEZ RAMOS Y OTRO, SINDICADOS POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE RUFINO PÉREZ MONTERO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 249

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A CARLOS PINTO SANTAMARÍA Y OTROS, SINDICADOS POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE BARTOLO DÍAZ M. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 250

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A JOSÉ DE LA LUZ JIMÉNEZ PALACIOS, SINDICADO POR DELITO DE FALSEDAD DE DOCUMENTO PRIVADO (CHEQUE). MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 251

RECURSO DE REVISIÓN INVOCADO POR ARCADIO PINTO SANTAMARÍA, REO DEL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE BARTOLO DÍAZ MORALES. PINTO SANTAMARÍA, ARCADIO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 254

SENTENCIA APELADA 255

APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ROSENDO SERNA VERGARA, SINDICADO POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE GLADYS NELDA MURILLO DE ARGUMEDEZ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 255

JUICIO SEGUIDO CONTRA EDILTRUDES HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE YANETH AMEIS CONTE ALVEO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 258

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA EN EL PROCESO SEGUIDO A RAFAEL REYNALDO TORRES IBAÑEZ POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE LUCRECIA INÉS GRANT SAMUELS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 262

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ROMÁN ELEUTERIO SMYTHE GARAY, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ALBERTO JIMÉNEZ LOAIZA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 265

JUICIO SEGUIDO A MARIO CHIN MARTÍNEZ, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE LUIS JIMÉNEZ RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL

FAÚNDES. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 268

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA EN EL PROCESO SEGUIDO A AMADO SÁNCHEZ ORTEGA, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE OVIDIO PINEDA SANJUR, CAMILO CERRUD Y FIDEL DOMÍNGUEZ FRÍAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 271

PROCESO PENAL SEGUIDO A MEXI EVIDEL GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ JIMÉNEZ Y REGINO GRAJALES GONZÁLEZ, POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE LIBERATO CERRUD CEDEÑO Y AMINTA ESPINO DE DELGADO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 274

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA EN EL PROCESO SEGUIDO A ARCADIO ALVEO RODRÍGUEZ, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ALICIA VILLARRETA FLORES. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, CINCO (5) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 284

PROCESO SEGUIDO A EVARISTO ALFONSO GODOY, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE JUAN ANTONIO BATISTA. PROCEDENCIA: SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, SEIS (6) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 286

APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A YISEICA CLARIBETH COBOS, POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE EDUVIGES RODRÍGUEZ DE OLEA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . . 289

APELACIÓN DE LA SENTENCIA EN EL PROCESO SEGUIDO A DAVID SU GONZÁLEZ, POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ALBERTO ARRITOLA PINEDA. SU GONZÁLEZ, ALBERTO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ M. FAÚNDES. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 292

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA EN EL PROCESO SEGUIDO A JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ BANDA, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE GILBERTO MANUEL CASTILLO HERNÁNDEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 297

PROCESO SEGUIDO A RICARDO PEÑALBA MORALES, POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL (HOMICIDIO), EN PERJUICIO DE ISIDRA AGUILAR. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, NUEVE (9) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 299

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A MARLON LINARES LEONARD Y NARCISA ESTELA NÚÑEZ REYNA, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE FERNANDO ADRIÁN FLORES. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 304

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO A BERNARDO OJINIS DIMAS URRUTIA, POR EL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE LETICIA CHAVARRÍA DE CUETO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 307

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN 310

FIANZA DE EXCARCELACIÓN A FAVOR DE ÁNGEL ABEL FRÍAS, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO FÉLIX DE LEÓN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 310

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN A FAVOR DE NURIA MARÍA ÁLVAREZ A.,

SINDICADA POR EL SUPUESTO DELITO DE ABORTO PROVOCADO EN DETRIMENTO DE MARILÚ ITZEL HIGUERO DE LEÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 311

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN A FAVOR DE EDWIN ABDIEL SAMANIEGO RIVERA, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 312

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN A FAVOR DE JUSTO LUIS AGUILAR MOSQUERA, SINDICADO POR EL SUPUESTO DELITO DE HOMICIDIO EN DETRIMENTO DE MANUEL SMITH DE LA ESPADA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 316

TRIBUNAL DE INSTANCIA 317

DENUNCIA INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DARÍO EUGENIO CARRILLO CONTRA ALFREDO SANJUR, DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL DE SAN FRANCISCO Y ALEJANDRO MONCADA, DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL, POR LOS DELITOS DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LIBERTAD Y ABUSO DE AUTORIDAD. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 317

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LABORAL 319

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN 320

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ALBERTO CHANG V., EN REPRESENTACIÓN DE YADIRA ELIZABETH ALDRETE DE ARAÚZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 01-96 DEL 20 DE ENERO DE 1996, EXPEDIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE FERIAS, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 320

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA LICENCIADA AIDA JURADO ZAMORA, A FIN DE QUE SE DECLARE QUE EL SEÑOR FRANCISCO ALEXIS HERRERA TIENE DERECHO A SER RESTITUIDO EN EL CARGO DE CAPITÁN DE LA FUERZA PÚBLICA, POR HABERLO DISPUESTO ASÍ EL JUZGADO SEXTO PENAL DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ, MEDIANTE AUTO N° 91 DEL 1° DE FEBRERO DE 1996 Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SEIS (6) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 321

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DOCTOR ROLANDO VILLALAZ, EN REPRESENTACIÓN DE RUBÉN CASTRO SHEDEEN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 1223-95 DE 11 DE FEBRERO DE 1995, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EL ACTO CONFIRMATORIO Y EL SILENCIO ADMINISTRATIVO INCURRIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, AL NO RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN EN SUBSIDIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SEIS (6) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 322

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO BOLÍVAR RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, EN REPRESENTACIÓN DE NEXIDES DEL C. AULESTIA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 424 DE 16 DE JUNIO DE 1995, EMITIDO POR EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 323

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EMIDIO MANZANÉ, EN REPRESENTACIÓN DE ANEL GARCÍA, BEATRIZ ÁBREGO Y LASTENIA VÁLDEZ Y POR EL LICENCIADO JORGE ÁLVAREZ, EN

REPRESENTACIÓN DE CÁNDIDA ÁBREGO Y MARÍA GARCÍA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 126 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 1995, DICTADA POR LE DIRECTOR NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS DE (1996). 328

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LCDA. DIDIA BASO EN REPRESENTACIÓN DE EDUARDO ALBERTO VALDÉS F., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL SILENCIO ADMINISTRATIVO INCURRIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGUROS SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, OCHO (8) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 329

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MIGUEL GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓN DE ELMER MIRANDA QUINTERO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN N° 12 DE 25 DE MARZO DE 1996, DICTADA POR LA JUNTA COMUNAL DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PANAMÁ, ACTO CONFIRMATORIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 330

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LCDA. MARLENE BALLARD DE FÁBREGA, EN REPRESENTACIÓN DE EDUARDO E. ARANGO, PARA QUE SE DECLAREN NULAS POR ILEGALES LAS RESOLUCIONES N° 137-93 DE 7 DE JULIO DE 1993, N° 051-93 DE 11 DE OCTUBRE DE 1993 DICTADOS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 331

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA PITTY Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE NEW GENERATION, INC., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA DMV/1519/95 DE 13 DE JULIO DE 1995, EXPEDIDA POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 333

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS HERRERA EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ MIGUEL ZÁRATE, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1995, SUSCRITO POR EL COMANDANTE PRIMER JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PANAMÁ LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 341

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA AIDA JURADO ZAMORA, EN REPRESENTACIÓN DE LÁZARO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, PARA QUE LA SALA TERCERA DECLARE, QUE EL DEMANDANTE TIENE DERECHO A SER RESTITUIDO AL CARGO DE CAPITÁN DE LA FUERZA PÚBLICA, POR HABERLO DISPUESTO ASÍ EL JUZGADO SEXTO PENAL DE CIRCUITO DE CHIRIQUÍ, MEDIANTE AUTO N° 92 DE 1° DE FEBRERO DE 1996, Y QUE ES VIOLATORIA LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO INCURRIDO POR EL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA AL NO EJECUTAR UNA ORDEN JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 342

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA MORENO Y FÁBREGA, EN REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCTORA URBANA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NEGATIVA TÁCITA DEL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, A ACCEDER AL PAGO DE LOS GASTOS INCURRIDOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL ENSANCHE ARRAIJÁN-PUENTE DE LAS AMÉRICAS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECINUEVE

(19) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 343

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA VELARDE Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE JORGE ISAAC GONZÁLEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 407 DE 19 DE MARZO DE 1996, EMITIDA POR LA COMISIÓN DEL FONDO COMPLEMENTARIO DE PRESTACIONES SOCIALES Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 346

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO AMÍLCAR E. BONILLA EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD PARIMAR, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA NOTA N° 4971-DINACOFI DE 18 DE DICIEMBRE DE 1995 SUSCRITA POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 347

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MIGUEL A. CÁRDENAS EN REPRESENTACIÓN DE ELSA MARIBEL GONZÁLEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL EL DECRETO DE PERSONAL N° 325 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 1995, DICTADO POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 350

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS RAÚL TRUJILLO SAGEL, EN REPRESENTACIÓN DE RAÚL TRUJILLO MIRANDA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 12862 DE 30 DE AGOSTO DE 1995, EXPEDIDA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES DE PENSIÓN DE VEJEZ ANTICIPADA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 351

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LADO. EMILIO DE LEÓN, EN REPRESENTACIÓN DE EFRAÍN STAFF SÁNCHEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 022 DE 7 DE NOVIEMBRE DE 1994, EXPEDIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURO AGROPECUARIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 360

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ EN REPRESENTACIÓN DE FERRETERÍA INDUSTRIAL, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 163-94 DE 14 DE JUNIO DE 1994, DICTADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 369

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL DOCTOR WINSTON SPADAFORA FRANCO, EN REPRESENTACIÓN DE DORIAN RÍOS APARICIO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO N° 27 DE 27 MARZO DE 1996, DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 374

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EMILIO DE LEÓN, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR JOSÉ DEL CARMEN ESPINOZA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 032 DEL 15 DE JUNIO DE 1995, EXPEDIDO POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA DE PANAMÁ; ASÍ COMO LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES.

MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 375

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA EDDA AMAYA, EN REPRESENTACIÓN DE SISTEMAS ENERGÉTICOS DE PANAMÁ, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 20-96 DE 9 DE MAYO DE 1996, EMITIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 377

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA EISENMAN & AROSEMENA, EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ MARÍA DUTARY CALVIÑO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 10,568-95-J. D. DE 20 DE JULIO DE 1995, EMITIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 378

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ARIEL CASTILLERO GONZÁLEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL OFICIO N° A. L. 1778-95 SUSCRITO POR EL SECRETARIO GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL DE 26 DE DICIEMBRE DE 1995, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 384

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO HERNÁN BONILLA, EN REPRESENTACIÓN DE PABLO MORÁN BATISTA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO N° 57 DE 14 DE MARZO DE 1995, DICTADO POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 386

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE AROSEMENA, NORIEGA Y CONTRERAS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD SOL LIMITED, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 3-5989, DEL 8 DE AGOSTO DE 1994, DICTADA POR LA COMISIÓN DE CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL; ASÍ COMO LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 389

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ARISTIDES G. FIGUEROA, EN REPRESENTACIÓN DE EZEQUIEL DAWSON VALDIVIESO, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO N° 215 DE 15 DE MARZO DE 1995, EXPEDIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 394

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA FÁBREGA, BARSALLO, MOLINO Y MULINO, EN REPRESENTACIÓN DE CEMENTO PANAMÁ, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° A. C. R. P. 587-92 S/F, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 397

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DR. ROLANDO VILLALAZ EN REPRESENTACIÓN DE FRANCISCO DÍAZ MÉRIDA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 10,961-DNP DE 24 DE NOVIEMBRE

DE 1995 EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, LA NOTA D. G. 522-95 DE 17 DE OCTUBRE DE 1995, EL ACTO CONFIRMATORIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 400

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. JULIO F. BARBA, EN REPRESENTACIÓN DE FLORENCIO DE LEÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA NEGATIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DE PAGAR EL SOBRESUELDO AUTORIZADO POR LA RESOLUCIÓN N° 2 DE 11 DE ABRIL DE 1980. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 401

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. JULIO F. BARBA, EN REPRESENTACIÓN DE FLORENCIO DE LEÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA NEGATIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DE PAGAR EL SOBRESUELDO AUTORIZADO POR LA RESOLUCIÓN N° 2 DE 11 DE ABRIL DE 1980. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 402

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD 403

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE MORENO Y FÁBREGA, EN NOMBRE PROPIO, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACUERDO MUNICIPAL N° 13 DEL 25 DE ABRIL DE 1994, DICTADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BARÚ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 403

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA INFANTE, GARRIDO Y GARRIDO, EN REPRESENTACIÓN DE GUSTAVO ORTEGA RÍOS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE OFICIALES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PANAMÁ, CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 1993, POR MEDIO DE LA CUAL SE ELIGIÓ COMO COMANDANTE PRIMER JEFE, A CHRISTIAN ARNHEITER. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 403

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO AURELIO ANTONIO ROBLES, EN REPRESENTACIÓN DE AUGUSTO CÉSAR RODRÍGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ARTÍCULO 9 DEL REGLAMENTO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL ÓRGANO JUDICIAL, APROBADO MEDIANTE EL ACUERDO N° 9 DE 12 DE AGOSTO DE 1992, DICTADO POR LA SALA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 410

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO HERNÁN BONILLA G., EN REPRESENTACIÓN DEL LICENCIADO DIÓGENES ARDINES GONZÁLEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO N° 14 DE 10 DE MARZO DE 1987, DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FÁBREGA P. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 412

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ALEJANDRO PÉREZ, EN NOMBRE DE LEOPOLDO BENEDETTI, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 98 DE 29 DE DICIEMBRE DE 1994, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y LA EMPRESA PYCSA DE PANAMÁ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 413

IMPEDIMENTO 421

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ICAZA, GONZÁLEZ-RUÍZ & ALEMÁN, EN REPRESENTACIÓN DE TULIP INTERNACIONAL A/S PARA QUE SE DECLARE

NULA, POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 7171 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995, DICTADO POR LA DIRECTORA GENERAL DE COMERCIO INTERIOR DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, OCHO (8) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 421

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA LICENCIADA GRETTEL VILLALAZ DE ALLEN, EN SU PROPIO NOMBRE, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 002-96 DE 25 DE ENERO DE 1996, DICTADA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 422

SOLICITUD DE IMPEDIMENTO, DEL MAGISTRADO ÓSCAR VARGAS VELARDE, DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, PARA QUE SE LE SEPARE DEL CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ANTECEDENTES N° 166-1-93-DAG-DEAE, DE 15 DE DICIEMBRE DE 1993, ELABORADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GENERAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 423

SOLICITUD DE IMPEDIMENTO, DEL MAGISTRADO ÓSCAR VARGAS VELARDE, DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, PARA QUE SE LE SEPARE DEL CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ANTECEDENTES N° 225-1-93-DAG-DEAE, DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1993, ELABORADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 424

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA LICENCIADA GRETTEL VILLALAZ DE ALLEN, EN SU PROPIO NOMBRE, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 002-96 DE 25 DE ENERO DE 1996, DICTADA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 425

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DENTRO DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL, INTERPUESTA POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LA FISCALIZACIÓN ADUANERA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE LA SALA SE PRONUNCIE SOBRE EL ALCANCE Y SENTIDO DE LA SENTENCIA N° HCO32-96 DICTADA POR EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (HABEAS CORPUS DEL SEÑOR MANUEL A. SIMANCA) 22 DE ENERO DE 1996. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 426

JURISDICCIÓN COACTIVA 426

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DIEGO VELÁZQUEZ CARVAJAL, EN REPRESENTACIÓN DE ALBERTO DE MAYO ANDJELO, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SEIS (6) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 427

EXCEPCIÓN DE PAGO POR CONSIGNACIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RICARDO VILLARREAL ALVARADO, EN REPRESENTACIÓN DE EUGENE CHARLES McGRATH RENAULD, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 429

INCIDENTE DE RESCISIÓN DE SECUESTRO, INTERPUESTO POR LA FIRMA ROSAS Y ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE FINANCIERA DELTA, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE AHORROS, CONTRA SANTIAGO JUSTO ARAÚZ Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 432

EXCEPCIÓN DE PAGO INTERPUESTA POR LA LICENCIADA SARAI ISABEL BLAISDELL EN REPRESENTACIÓN DE ÓSCAR DANILO CRUZ ÁBREGO, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, LE SIGUE A ABELARDO CRUZ ÁBREGO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 433

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL 436

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR LA FIRMA MORGAN Y MORGAN, EN REPRESENTACIÓN DE PANAMETAL INTERNACIONAL, S. A., Y DESARROLLO PANCHILE, S. A., CONTRA LA SENTENCIA DE 1° DE JULIO DE 1995, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: GUSTAVO CHELLEW SCHOEDER -VS- PANAMETAL INTERNACIONAL, S. A., Y DESARROLLO PANCHILE, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SEIS (6) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 436

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR IVÁN ROBERTO CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE JACQUES CHEVIGNE, CONTRA LA SENTENCIA DE 28 DE JUNIO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: JACQUES CHEVIGNE -VS- INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 437

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL INTERPUESTO POR EL LICENCIADO NICODEMUS RODRÍGUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE ABEL CUSATTI, CONTRA LA SENTENCIA DE 8 DE FEBRERO DE 1996, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: ATLANTIC PACIFIC, S. A. VS. ABEL CUSATTI. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 438

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ÁLVARO MUÑOZ EN REPRESENTACIÓN DE DOMINGO QUINTERO, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 4 DE JUNIO DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: DOMINGO QUINTERO -VS- FINCA SANTA LUCIA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 442

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO HUMBERTO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, EN REPRESENTACIÓN DE SIDIA MARISOL RUILOBA, CONTRA LA SENTENCIA DE 12 DE JULIO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: SIDIA MARISOL RUILOBA -VS- BUSINESS SUPPLIERS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 446

SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES 450

CARTA ROGATORIA 451

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO SESENTA Y TRES DE MADRID, ESPAÑA, DENTRO DEL PROCESO DE MAYOR CUANTÍA N° 281-95, A INSTANCIA DE LA ENTIDAD PORTMAN GOLF, S. A. CONTRA OTROS Y LA ENTIDAD INVERSORES REUNIDOS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 451

COMISIONES ROGATORIAS PROCEDENTES DEL PRIMER FISCAL DIRIGENTE DEL JUZGADO SUPERIOR DE LA CIUDAD DE DUSSELDORF, ALEMANIA, EN LO REFERENTE A LOS TRES ALLANAMIENTOS, REGISTRO Y CONFISCACIÓN DE LAS OFICINAS DEL SEÑOR GERARDO STRANSKY TRUST CORPORATION; ABN-MRO BANK Y MOSSACK, FONSECA & CO. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 453

EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA 462

ELEANOR WAGNER DE EVANS, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO DICTADA POR LA CORTE DEL DISTRITO DEL CONDADO DE BELL TEXAS DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LA CUAL SE DETERMINA EL DIVORCIO ENTRE ELEANOR WAGNER DE EVANS Y ENRIQUE FLORENTINO EVANS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 462

BRENDA I. GILLIAM, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO DICTADA POR LA CORTE SUPERIOR DE CALIFORNIA, CONDADO DE LOS ÁNGELES, EL 5 DE JUNIO DE 1991. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 463

STEPHEN CHARLES BUDD, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA DE DIVORCIO DICTADA EL 19 DE MARZO DE 1996, DEL ESTADO DE NUEVO MÉXICO, CONDADO DE MORA, DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, MEDIANTE EL CUAL SE DISUELVE EL VÍNCULO MATRIMONIAL CON LA SEÑORA NATALIE ANN ROMERO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, CINCO (5) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 465

MARÍA DE LOS ÁNGELES BARÉS ALBA DE PERERA, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1987, PROFERIDA POR EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRABAJO Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO DE GUÁRICO, EN LA CUAL SE DISUELVE EL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LA UNÍA AL SEÑOR GUILLERMO PERERA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 466

DENISE ELIZABETH MANFREDO LEE, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO PROFERIDA POR LA CORTE SUPREMA DE CALIFORNIA, CONDADO DE MONTERREY DEL DÍA 7 DE ENERO DE 1992, EN VIRTUD DE LA CUAL DECLARA DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL EXISTENTE CON EL SEÑOR FRANK PETER. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 468

VIANKA ESTELA CEDEÑO CÓRDOBA, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO DE FECHA DE 5 DE MAYO DE 1995 EMITIDA POR LA CORTE SUPERIOR DEL ESTADO DE GEORGIA, ESTADOS UNIDOS, EN LA CUAL SE DECLARÓ LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE UNÍA A ÉSTA CON GREGORY KEITH GREEN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 469

LIBRADA CORTEZ, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA DE DIVORCIO DICTADA POR LA THE CIVIL INSTRICTIT COURT FOR THE PARISH OF NEW ORLEANS, N° 91-13108 DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DECRETADA EL 17 DE JUNIO DE 1991. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 471

VIANNEY VELÁZQUEZ QUESADA, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO PROFERIDA POR EL CIRCUITO 11AVO. CIRCUITO JUDICIAL DEL CONDADO DE DADE, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS EMITIDA EL 9 DE MARZO DE 1994, EN VIRTUD DE LA CUAL DECLARA DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL EXISTENTE CON EL SEÑOR HENRI TOLBERT. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 472

EXHORTOS 474

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO CIVIL N° 2 DEL TRIBUNAL DEL DISTRITO DE TOKIO, JAPÓN, POR LA CUAL SE REQUIERE QUE POR CONDUCTO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES PANAMEÑAS, SE NOTIFIQUE A LA COMPAÑÍA, L. D. K. (TONG) INTERNATIONAL, INC. S. A.; DE LA DECISIÓN DE PROCEDER AL REMATE DE LOS BIENES INMUEBLES QUE SE LISTAN EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTO A LA SOLICITUD. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, CINCO (5) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 474

SOLICITUD DE ASISTENCIA LEGAL LIBRADA POR EL TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DISTRITO NORTE, DENTRO DEL PROCESO DE ACCIÓN CIVIL NÚMERO 95-CV-0923-JTC SUBROGADA POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA USO Y BENEFICIO DE SIEMENS ENERGY AND AUTOMATION, INC. CONTRA INGENIERÍA DE DESARROLLO Y ELECTRICIDAD, S. A. (INDELSA), ASEGURADORA MUNDIAL, S. A. Y BANCO DE PANAMÁ, S. A. COMPAÑÍAS MERCANTILES EXTRANJERAS PARA NOTIFICAR A MARTA LORENA DE BERNAL, PRESIDENTE O GUSTAVO ADOLFO BERNAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 475

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE CURRIDABAT, REPÚBLICA DE COSTA RICA, DENTRO DE LA SUMARIA 780-2-96 SEGUIDA CONTRA ROBERTO RODRÍGUEZ LOBO POR DELITO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE DROGAS COMETIDO EN PERJUICIO DE LA SALUD PÚBLICA, TRAMITADO EN LA AGENCIA FISCAL DE CURRIDABAT. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 477

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE SAN JOSÉ, REPÚBLICA DE COSTA RICA, DENTRO DEL PROCESO ABREVIADO DE DIVORCIO PROMOVIDO POR VICTORIA CAROLINA MORALES SUÁREZ CONTRA ANTONIO CAMBRA VEGA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 479

SOLICITUD DE ASISTENCIA LEGAL LIBRADA POR EL TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DISTRITO NORTE, DENTRO DEL PROCESO DE ACCIÓN CIVIL NÚMERO 95-CV-0923-JTC SUBROGADA POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA USO Y BENEFICIO DE SIEMENS ENERGY AND AUTOMATION, INC. CONTRA INGENIERÍA DE DESARROLLO Y ELECTRICIDAD, S. A., (INDELSA), ASEGURADORA MUNDIAL, S. A. Y BANCO DE PANAMÁ, S. A., (INDELSA), ASEGURADORA MUNDIAL, S. A. Y BANCO DE PANAMÁ, S. A., COMPAÑÍAS MERCANTILES EXTRANJERAS. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 480

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE SAN JOSÉ, REPÚBLICA DE COSTA RICA, REFERENTE AL EXPEDIENTE 328-4-96 PROMOVIDO POR VICTORIA MORALES SUAREZ CONTRA JOSÉ ANTONIO CAMBRA VEGA DENTRO DEL PROCESO DE GUARDA, CRIANZA Y EDUCACIÓN, EN FAVOR DE EMILIO CAMBRA MORALES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 482

EXHORTO LIBRADO POR LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA, DIVISIÓN DEL TRIBUNAL DE LA REINA, CORTE MERCANTIL EN LAS CORTES REALES, STARND, LONDRES, CASO WC2C 2LL; DENTRO DEL PROCESO RELATIVO A LAS LEYES DE ARBITRAJE 1950-1979 Y EN EL ASUNTO DE ARBITRAJE ENTRE ANDRADE GUTIÉRREZ CONTRACTORS, IN. (SOLICITANTE) Y M. GROUP RESORTES, S. A. (RESPONDIENTE), PARA QUE REALICEN LOS TRÁMITES PERTINENTES DE NOTIFICACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 484

EXHORTO S/N DE 2 NOVIEMBRE DE 1995, LIBRADO POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO TRES DE SANT FELIU DE GUIXOLS, REINO DE ESPAÑA, DENTRO DEL PROCESO DE COGNICIÓN N° 18/94 A INSTANCIA DE D. FRANCISCO FITE GILLET CONTRA D. ROBERT JEGAT Y LA SOCIEDAD DE COURTAGE INMOBILIER QUEBECOIS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 485

TRIBUNAL DE INSTANCIA 487

JUAN ORTELIO BERMÚDEZ HERNÁNDEZ, INTERPONE DENUNCIA POR FALTA A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO EN CONTRA DEL LICENCIADO ANTONIO GUARDIA OSSES. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 487

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR DALYS CANTO CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 33-96 DE FECHA DIECISÉIS (16) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA (1996),

EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, RAMO PENAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 490

ACUERDO NÚMERO 144 491

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PLENO

AGOSTO 1996

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL DOCTOR EMILIO ROYO LINARES EN REPRESENTACIÓN DE CÉSAR AUGUSTO RODRÍGUEZ GARIBALDO EN CONTRA DE LA ORDEN DE HACER N° AI-04-96-DGA, DICTADA POR LA DIRECTORA GENERAL DE ARRENDAMIENTO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CINCO (5) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Doctor **EMILIO ROYO LINARES** actuando en su calidad de apoderado judicial del señor **CÉSAR AUGUSTO RODRÍGUEZ GARIBALDO**, ha presentado ante esta Superioridad, Acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la supuesta orden de hacer contenida en la Resolución N° AI-04-96-DGA dictada por la Directora General de Arrendamiento, Lic. Olga Golcher.

El Pleno de esta Máxima Corporación de Justicia procede en primer término al examen del libelo presentado, en vías de determinar si el mismo ha cumplido con los requisitos de admisión exigibles para estos procesos.

En este punto se percata el Tribunal, que la acción en estudio adolece de varios defectos que impiden su admisión, tal como se procede a indicar de inmediato:

La acción instaurada pretende la revocatoria de una resolución de **carácter administrativo**, propio de las funciones que en esta materia ostenta la Dirección General de Arrendamiento.

Esta Máxima Corporación de Justicia al avocarse al conocimiento de las acciones de amparo de garantías constitucionales, ha venido reiterando de manera permanente, la imperiosa necesidad de que en aquellos casos en que los actos acusados sean susceptibles de los recursos ordinarios previstos en la Ley, resulta imprescindible el agotamiento previo de esas vías procesales **antes** de la presentación de la Acción Extraordinaria de Amparo de Garantías Constitucionales (principio de definitividad).

En el negocio sub-júdice se evidencia de manera palmaria, que por ser de carácter eminentemente administrativo el acto acusado, una vez agotada la vía gubernativa, el amparista está facultado para la instauración de un proceso contencioso administrativo ante la Sala Tercera de la Corte Suprema.

Sin embargo, pese a que se evidencia en el expediente que la parte que se considera afectada utilizó los recursos correspondientes en la instancia gubernativa, no reposa en el expediente documento alguno que permita inferir al Tribunal que se haya hecho uso de la vía procesal idónea (el proceso contencioso administrativo) para ventilar la controversia causada por el acto administrativo expedido por la Dirección General de Arrendamiento.

Existen copiosos pronunciamientos jurisprudenciales del Pleno de la Corte, en los cuales se ha reiterado que en estos casos, no se consideran agotados los medios de impugnación correspondientes si se encuentra pendiente o fuere posible, la instauración del proceso contencioso administrativo, con la consideración adicional de que ésa es también la vía procesal **más idónea** para ventilar la litis, puesto que en aquella instancia existe la posibilidad de revisar toda la actuación administrativa, practicar pruebas y realizar todos los trámites procesales pertinentes para satisfacer la pretensión del demandante cuando así es del caso, es decir se puede examinar con mayor profundidad la alegada violación lo cual no es posible dentro de la Acción de Amparo. Por ello se ha manifestado que cuando se utiliza una vía procesal que no es la más efectiva o la más adecuada para el caso que se juzga, se puede colocar en una situación de desventaja procesal a una de las partes.

Sobre el particular son consultables las resoluciones calendadas 20 de abril de 1990, 30 de enero de 1991; 2 de mayo de 1990, 21 de febrero de 1992, 27 de enero de 1993, de 13 de enero de 1994 y 26 de septiembre de 1994, entre otras.

La Corte observa prima facie, que la orden atacada fue expedida hace aproximadamente 4 meses, por lo que se desnaturaliza el fin de la acción presentada, toda vez que el Amparo de Garantías Constitucionales es una institución que persigue que sean revocadas aquellas órdenes que violen derechos fundamentales, por la gravedad e inminencia del daño que representan. En concordancia con este principio, es inadmisible una acción de Amparo contra actos dictados en un margen de tiempo excesivo, como el que nos ocupa.

Este ha sido el criterio sostenido por este Tribunal en reiteradas ocasiones, entre las cuales podemos citar la sentencia de 30 de julio de 1992, en la cual se declara no admisible el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por la firma **Vásquez y Vásquez** en representación de **JORGE ELIÉCER BERNAL**, y en el cual en su parte pertinente se señaló lo siguiente:

> "Otro aspecto que la Corte no puede soslayar es que la acción de amparo pretendía enervar un auto dictado hace un año, tres meses y cuatro días. La acción de amparo, según el artículo 2606 del Código Judicial, persigue revocar una orden que, por la gravedad e inminencia del daño que representa, requiere de una revocación inmediata. Como se aprecia, es elemento fundamental del amparo la urgencia en la protección del derecho constitucional que se estima conculcado. La inminencia del daño significa que se trate de un perjuicio actual, no pasado un ocurrido hace mucho tiempo. Inminente quiere decir que amenaza o está para suceder prontamente, y lo antónimo de inminente es remoto, lejano, como ocurre en el presente caso, en que la orden carece de actualidad, de inminencia y, por tanto, falta el elemento de urgencia que requiere una revocación inmediata."

El mismo criterio se ha mantenido inveteradamente por este Tribunal (v. g. sentencia de 28 de enero de 1991 en el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por Elías Castillo en contra del Procurador General de la Nación; sentencia de 14 de febrero de 1991 en el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por Eric Jaramillo Crespo en contra de la Junta de Conciliación y Decisión N° 1; sentencia de 30 de julio de 1992 en el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por Rosa Chitrit de Bernal en contra del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá; sentencia de 26 de noviembre de 1992 en el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por José Barahona Sánchez en contra del Director General de la Caja de Seguro Social; sentencia de 15 de marzo de 1993 en el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por la sociedad General Export, S. A. en contra del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá; sentencia de 25 de junio de 1993 en el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por Hallmerk International Corp., Inc. contra el Fiscal Quinto de Circuito de Chiriquí; sentencia de 17 de marzo de 1993 en el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por Elideni del Barrio Vda. de Serrano contra el Contralor General de la República; sentencia de 12 de mayo de 1993 en el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por Orelis D. Barría contra la Juez del Tribunal Tutelar de Menores; sentencia de 14 de enero de 1993 en el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por Víctor Manuel López contra el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá; sentencia de 27 de julio de 1992 en el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por Aristides De Icaza contra la Junta de Conciliación y Decisión No.12; sentencia de 27 de agosto de 1993 en el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por Jaime Padilla Béliz contra el Juez Primero de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá; sentencia de 26 de agosto de 1993 en el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por Tomás Altamirano contra el Procurador General de la Nación; sentencia de 14 de febrero de 1992 en el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por Rafael Guillermo Pitty en contra del Director General de Aduanas; sentencia de 8 de mayo de 1992 en el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por Unif Tranding Corporation, S. A. contra

la Administración Regional de Ingresos; sentencia de 19 de julio de 1992 en el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por Alberto De Santis Rodríguez contra el Juzgado Segundo de Circuito de lo Penal del Tercer Distrito Judicial de Panamá; sentencia de 14 de junio de 1993 en el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por H. C. Corporation en contra del Juez Cuarto de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá; sentencia de 30 de septiembre de 1993, propuesto por Carlos E. Carrillo en representación del señor Alberto Alemán Boyd, en contra del Procurador de la Nación, Encargado).

Cabe apreciar, que ésta ha sido la postura sostenida por la Corte Suprema en situaciones asimilables jurídicamente a la que nos ocupa. Es preciso recordar que el artículo 2606 del Código Judicial condiciona la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales a la circunstancia de que "la gravedad e **inminencia** del daño requieran su revocación inmediata", situación que como hemos puntualizado no concurre en el presente caso.

Finalmente se observa que la Acción de Amparo presentada ha sido dirigida de manera global a los Magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia, y no al Magistrado Presidente de esta Corporación Judicial, contraviniendo con esta omisión, lo dispuesto en el artículo 102 del Código Judicial, norma legal que es del tenor siguiente:

> "Artículo 102. Las demandas, recursos, peticiones e instancias formuladas ante la Corte Suprema de Justicia y los negocios que hayan de ingresar por alguna razón en ella, deberán dirigirse al Presidente de la Corte si competen al Pleno de ésta o a la Sala de Negocios Generales y a los Presidentes de las Sala Primera, Segunda y Tercera, si se tratare, respectivamente, de negocios civiles, penales, contencioso-administrativos y laborales y se hará la presentación ante el Secretario General o de la Sala correspondiente, quien debe dejar constancia de ese acto." (Subrayado es nuestro).

En virtud de todo lo expuesto, y concretamente a raíz de los defectos indicados, este Tribunal debe negarle viabilidad a la acción de Amparo de Garantías presentada por el Doctor **ROYO LINARES**, al constatarse que la misma no ha cumplido con las exigencias legales que hacen procedente su admisión.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE, la acción de Amparo de Garantías Constitucionales, interpuesta por el Doctor EMILIO ROYO LINARES en representación de CÉSAR AUGUSTO RODRÍGUEZ GARIBALDO.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR BOLÍVAR FÁBREGA CONTRA LA ORDEN DE NO HACER DADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SEIS (6) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Pedro M. Meilán, actuando en nombre de BOLÍVAR FÁBREGA,

interpuso acción de amparo de derechos fundamentales contra el **acto omisivo** de la Dirección General del Registro Público, consistente en la no inscripción de la escritura N° 1962 de 10 de marzo de 1992, mediante la cual se cancela una hipoteca y se traspasa, en concepto de donación, la finca N° 3487, inscrita a folio 442, tomo 68, de la Sección de Propiedad Horizontal de la Provincia de Panamá.

El demandante considera que la omisión aludida infringe el artículo 44 de la Constitución Nacional, consagratorio del derecho a la propiedad privada adquirida conforme a la ley.

Con el objeto de decidir sobre la admisibilidad de esta iniciativa constitucional, procede la Corte Suprema a examinar si el libelo de amparo cumple con los requisitos formales que establecen los artículos 2610 y 654 del Código Judicial, así como con los señalados por la jurisprudencia de esta Corporación.

A tales efectos, se observa que el amparista no identifica claramente el acto atacado. Así, expresa que "la orden de no hacer hay que entenderla como la omisión parcial o la no ejecución parcial de la inscripción de la escritura N° 1962 del 10 de marzo de 1992" (f. 11, subraya la Corte). De los hechos primero, tercero, cuarto y quinto del libelo se desprende que el demandante ataca una **conducta omisiva**; sin embargo, al explicar el concepto en que supuestamente ha sido infringido el derecho constitucional de la propiedad privada, se refiere al acto impugnado como la "orden de registrar sólo la cancelación de la hipoteca contenida en la Escritura Pública #1962 y no así la Donación de la Finca #3487 por parte de la Dirección del Registro Público" (f. 13, subraya la Corte).

Valga recordar que se está en presencia de una **orden de hacer** cuando el acto jurisdiccional o administrativo atacado contiene en su parte dispositiva un mandato de carácter imperativo dirigido al afectado, o que deba cumplir o ejecutar alguna autoridad pública, y de ese acto positivo se deriva un virtual o actual desconocimiento de derechos fundamentales subjetivos del amparista.

En el mismo orden de ideas, se trata de una **orden de no hacer** cuando el acto administrativo o jurisdiccional contiene en su parte dispositiva una prohibición o una abstención dirigida al afectado o a determinado funcionario público, y con ese acto negativo se irrogan graves amenazas o violaciones de los derechos fundamentales del titular de la acción de amparo.

José Dolores Moscote precisó el alcance de estos conceptos de la siguiente manera:

> "¿Qué es una `orden de hacer o de no hacer que al tenor del artículo 189 de la constitución, dé derecho al recurso de amparo? Si las palabras se toman en su recto, lógico y natural sentido, no puede ser otra cosa que el mandato emanado de una voluntad arbitraria dirigido a procurar de parte de aquella a quien se impone la ejecución o la no ejecución de un acto del cual resulte disminuido con el goce de algún derecho que la constitución le reconoce y garantiza."(MOSCOTE, José Dolores, Instituciones de Garantía, (Título XV de la Constitución), Edit. Imprenta Nacional, Panamá, 1943, p. 53).

Por otro lado, la **omisión** implica una abstención que caracteriza la actuación -arbitraria, según Moscote- de la autoridad pública, en franco imcumplimiento de una obligación legal, con el resultado de la vulneración de derechos subjetivos constitucionalmente amparados.

La conducta omisiva y la orden de no hacer no son entonces conceptos que deban confundirse, como ocurre en la acción que se examina. Mientras que la omisión guarda relación inmediata con el **hacer** de la autoridad pública -con manifestación negativa-, la orden de no hacer mediatiza la conducta del particular, a quien impone una modalidad determinada de conducta, también con manifestación negativa.

En número plural de sentencias de amparo recientes esta Corporación se ha ocupado del cumplimiento de esta formalidad por el demandante. En una de 12 de mayo de 1995 expresó el Pleno:

> "Es de resaltar que en la demanda de amparo se advierte imprecisión en cuanto a la identificación de la supuesta orden de hacer ... Cabe recordar que al amparista le corresponde individualizar de manera clara y concreta el acto que pretende atacar, a los efectos de cumplir con lo que dispone el numeral 1 del artículo 2610 del Código Judicial" (Registro Judicial, mayo 1995, p. 24).

Observa la Corte que a folios 1 y 2 del cuaderno reposa copia autenticada de nota marginal de advertencia practicada por la Dirección General del Registro Público el 10 de mayo del año en curso, con fundamento en el artículo 1790 del Código Civil, en la que se explica que al ingresar la escritura N° 1962 de 10 de marzo de 1992 se realizó la inscripción de la cancelación de la hipoteca que gravaba la finca N° 3487, inscrita a folio 442 del tomo 68 de la Sección de Propiedad Horizontal de la Provincia de Panamá, "pero se omitió inscribir la donación ... a favor de Colombia Atehortua Viuda de Fábrega", lo que permitió la inscripción posterior de un embargo decretado sobre el mencionado inmueble por el Juez Sexto de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante autos N° 1355 de 21 de julio de 1995 y N° 1626 de 11 de septiembre de 1995, dentro del proceso seguido por Condominio Carmana contra Evisabel Fábrega de Sánchez y Bolívar Fábrega.

El artículo 1790 del Código Civil, fundamento de la referida nota marginal, es del tenor siguiente:

> "Siempre que el registrador notare un error de los que no puede rectificar por sí, ordenará se ponga al asiento una nota marginal de advertencia y la avisará por el periódico oficial y la notificará en los estrados del despacho a los interesados, si no pudiere notificarlos personalmente.
>
> Esta nota marginal no anula la inscripción; pero restringe los derechos del dueño de tal manera, que mientras no se cancele o se practique, en su caso, la rectificación, no podrá hacerse operación alguna posterior, relativa al asiento de que se trata. Si por error se inscribiera una operación posterior será nula." (Subraya la Corte).

Por su parte, el artículo 1788 de la misma excerta legal faculta al registrador para que remedie oficiosamente cualquier error u omisión al realizar el registro de cualquier título, autorización que pone a disposición del interesado la posibilidad de excitar, por gestión administrativa directa, la acción rectificadora del registrador:

> "**ARTÍCULO 1788.** El registrador general podrá rectificar por sí, bajo su responsabilidad, los errores u omisiones, contenidos en los asientos principales o secundarios de inscripción, cuando en el despacho exista aún el título respectivo.
>
> Aun cuando el título no esté ya en el despacho, podrá también rectificar los errores u omisiones cometidos en asientos secundarios, si la inscripción principal basta para darlos a conocer y es posible rectificarlos por ella." (Subraya la Corte).

Por otro lado, el artículo 1789, ibídem, instituye la vía judicial para que pueda reclamarse la corrección de una inscripción, en este caso ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, tanto en cuanto a defectos como en casos de omisiones:

> "**ARTÍCULO 1789.** Cuando el título no exista en el despacho ni baste, tratándose de asientos secundarios, la inscripción principal para dar a conocer y rectificar por ella el error u omisión, no podrá

> hacerse la rectificación sino por mandato judicial." (Subraya la Corte).

De esta manera el interesado tenía a su disposición dos medios para enmendar, ya sea directamente en el Registro Público o por la vía judicial, la omisión ocurrida en la inscripción de la donación de la finca N° 3487, inscrita a folio 442, tomo 68, de la Sección de Propiedad Horizontal de la Provincia de Panamá.

El amparo contra omisiones de servidores públicos requiere que la conducta omisiva se produzca en el ámbito administrativo, que no constituya presupuesto del silencio administrativo negativo y, habida cuenta de la naturaleza **extraordinaria** y **subsidiaria** de este mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales que integra la jurisdicción constitucional subjetiva, el demandante agote la vías que la ley instituye para la rectificación de lo actuado.

Sobre esta materia resulta ilustrativo lo que afirma Allan Brewer-Carías, al comentar la legislación venezolana:

> "la acción de amparo procede también contra actos administrativos o contra conductas omisivas de la Administración que violen o amenacen violar un derecho o garantía constitucionales, pero siempre que no exista `un medio procesal breve, sumario y eficaz, acorde con la protección constitucional . En consecuencia, si dicho medio existe no procedería la acción de amparo" (BREWER-CARIAS, Allan; El Amparo a los Derechos y Garantías Constitucionales (una aproximación comparativa), Cuadernos de la Cátedra Allan R. Brewer-Carías de Derecho Público, Universidad Católica del Táchira, N° 1, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1993, p. 119, subraya la Corte).

De otra parte, la Corte llama la atención sobre otro vicio de procedibilidad, concerniente a la oportunidad en cuanto a la presentación de la demanda de amparo. Aun cuando no se encuentra expresamente acreditada el momento en que el amparista tomó conocimiento sobre la existencia de la omisión que censura, de cualquier modo se observa que el documento fue inscrito el 27 de marzo de 1992, según indica el sello del microfilmador-jefe (f. 6), siendo retirado por el propio amparista el 10 de enero de 1996. Se comprueba así que transcurrieron más de tres años entre la fecha de inscripción y el reingreso del documento al registro, y poco más de tres meses desde que el demandante retiró la escritura, comprobación esta que a primera vista hace inadmisible esta iniciativa extraordinaria según la jurisprudencia del Pleno, por evidenciar el incumplimiento del presupuesto de admisibilidad que se refiere a la gravedad o inminencia del daño.

Por las consideraciones expuestas, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda de amparo de derechos fundamentales propuesta por el licenciado Pedro M. Meilán, en representación de Bolívar Fábrega.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR DIÓGENES BATISTA GRAU EN CONTRA DE LA SENTENCIA N° 136 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 1995 DICTADA POR EL JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO DE VERAGUAS. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en grado de apelación, el amparo de garantías constitucionales presentado por el Licenciado Néstor Ureña Batista, en representación del señor **DIÓGENES BATISTA GRAU**, contra la sentencia N° 136 de 20 de noviembre de 1995, proferida por el Juzgado Primero del Circuito Judicial de Veraguas, Ramo Penal.

La sentencia atacada en amparo condenó al señor DIÓGENES BATISTA GRAU a la pena de un (1) año de prisión, convertida a cuarenta (40) días multa, por haber sido encontrado culpable del delito de apropiación indebida en perjuicio de Comerciales Otero, S. A. El Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial confirmó esta decisión, mediante resolución de 7 de mayo de 1996.

Ese mismo Tribunal Superior, mediante resolución de 9 de julio de 1996, no admitió la presente acción constitucional, por las siguientes razones:

1) Que el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial se pronunció, anteriormente, sobre los mismos hechos que fundamentan el amparo, cuando resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia acusada.

2) Que la orden de hacer que se pretende impugnar, "no tiene la característica de gravedad e inminencia que requiere su pronto pronunciamiento". (Foja 64).

3) Que en el mes de noviembre de 1995, el recurrente presentó un amparo de garantías constitucionales contra el auto de enjuiciamiento dictado por el Juzgado Primero del Circuito Judicial de Veraguas, Ramo Penal, fundamentado en los mismos argumentos de la presente acción.

Por su parte, el demandante sostiene que la sentencia atacada es violatoria del artículo 32 de la Constitución Nacional, porque al señor DIÓGENES BATISTA GRAU se le condenó penalmente "sin cumplir con las formalidades legales señaladas para estos casos" (foja 3), en vista de que "el auto, cabeza del proceso se dictó en base a una denuncia y no en base a una querella y para subsanar este hecho debió revocarse ese Auto que da inicio al proceso y recibirle una querella que diera inicio nuevamente, en vez de recurrir al trámite, extra ley, de la ratificación de la supuesta querella". (Foja 4).

El análisis de la sentencia apelada y del resto de las constancias procesales, pone de manifiesto que la decisión del Tribunal Superior se ajusta a derecho. El recurrente en amparo pretende que se revise, una vez más, la actuación del juez de primera y segunda instancia, lo que no es materia constitucional. Al respecto, esta corporación judicial se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en el sentido de que el amparo de garantías constitucionales es una acción extraordinaria e independiente, que sólo es viable cuando se producen violaciones directas a los derechos fundamentales. Es inadmisible, entonces, el presente amparo, como señaló el Tribunal Superior.

No obstante, cabe señalar que no es válido el argumento de la resolución apelada cuando expresa que la orden de hacer que se pretende impugnar, "no tiene la característica de gravedad e inminencia que requiere su pronto pronunciamiento". La sentencia atacada en amparo fue confirmada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial el 7 de mayo de 1996 y la presente acción constitucional fue interpuesta el 3 de julio de 1996, por lo que no puede considerarse excesivo el tiempo transcurrido entre esos dos actos.

En consecuencia, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución proferida por el Tribunal Superior del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, que no admitió el amparo de garantías constitucionales interpuesto por el Licenciado Néstor Ureña Batista, en representación del señor DIÓGENES BATISTA GRAU.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIONES DE AMPAROS DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTAS POR LA LICENCIADA MERCEDES SOLÍS EN REPRESENTACIÓN DE GLORIANELA DE FARRUGIA, LUZ ELENA MARTÍNEZ, ANÍBAL SALAS CÉSPEDES, ALINETH PADILLA S. Y BLYSEIRA NAVARRO; POR LA LICENCIADA YANISSEL CHANG ÁVILA, EN REPRESENTACIÓN DE NIBARDO ELÍAS CABRERA, JUAN J. DOMÍNGUEZ R., JULISSA CASTILLO, MERCEDES SOLÍS AHUMADA, MELITON GONZÁLEZ, ALAÍN Y KHAREM J. LASSO Y POR EL LICENCIADO NIBARDO ELÍAS CABRERA EN REPRESENTACIÓN DE LEONOR E. ARCE, YANISSEL CHANG ÁVILA, LIDIA DE BAZÁN Y ÁLVARO CORREA RUEDA, CONTRA LA ORDEN DE NO HACER EMITIDA POR EL DIRECTOR DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, DE NO ENTREGAR LA FICHA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CATORCE (14) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El día 18 de julio de 1996, bajo las entradas 558-96, 559-96, 560-96, 561-96, 562-96, 563-96, 564-96, 565-96, 566-96, 667-96, 568-96, 569-96, 570-96, 571-96 y 572-96, ingresaron a esta Corporación Judicial catorce acciones de amparo de garantías constitucionales propuestas por la licenciada Mercedes Solís en representación de **GLORIANELA DE FARRUGIA, LUZ ELENA MARTÍNEZ, ANÍBAL SALAS CÉSPEDES, ALINETH PADILLA S. y BLYSEIRA NAVARRO**; por la licenciada Yanissel Chang Ávila, en representación de **NIBARDO ELÍAS CABRERA, JUAN J. DOMÍNGUEZ R., JULISSA CASTILLO, MERCEDES SOLÍS AHUMADA, MELITON GONZÁLEZ, ALAÍN y KHAREM J. LASSO** y por el licenciado Nibardo Elías Cabrera en representación de **LEONOR E. ARCE, YANISSEL CHANG ÁVILA, LIDIA DE BAZÁN y ÁLVARO CORREA RUEDA**, contra la orden de no hacer emitida por el **DIRECTOR DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL**, de no entregar la ficha de seguro social.

Al verificar que todas las acciones se dirigían contra el mismo acto y la misma autoridad, se expidió la resolución que aparece a fojas 301, en virtud de la cual se dispuso acumular los recursos a fin de que se sustancien y fallen mediante una sola sentencia.

Una vez admitidas las acciones de amparo de garantías constitucionales, se requirió de la autoridad demandada el envío de la actuación correspondiente a estos casos o un informe sobre los hechos en que se fundamentan estas acciones.

El 23 de julio se recibió de la Dirección de la Caja de Seguro Social una nota, sin fecha ni número, en la que se destaca la falta de colaboración del patrono Solís, Endara, Delgado y Guevara con los funcionarios de Auditoría de la Caja de Seguro Social, al negarles el acceso a los libros de contabilidad y demás comprobantes de pago de la empresa para verificar si la misma estaba pagando las cuantías legales de la cuota obrero-patronal que le corresponde según la ley. Tal negativa, se afirma, dio lugar a que se expidiera la Resolución N° 601-96 D. G. de 26 de abril de 1996 que condena al patrono Solís, Endara, Delgado y Guevara a pagar B/.1,000.00 a la Caja de Seguro Social, en concepto de multa, conforme lo establece el artículo 61 del Decreto Ley 14 de 1954.

En cuanto a la retención de las fichas de los empleados, la Directora encargada lo justifica en los términos siguientes:

"La retención de las fichas al patrono se fundamentan en el artículo

> 80 de la Ley Orgánica que rige a la institución, por mantener el patrono **SOLÍS, ENDARA, DELGADO Y GUEVARA,** obligaciones pendientes, cuyo incumplimiento da lugar a que la Caja de Seguro Social proceda con esta medida. Debe tenerse presente que el acto de retención de las fichas que hace la Caja de Seguro Social tiene la naturaleza de acto de control para hacer efectivas las aportaciones pecuniarias que deben satisfacer los patronos, ya que de esta manera se garantiza el cumplimiento de las disposiciones y la institución puede así brindar las contraprestaciones económicas y de servicios de salud que se otorgan".

El texto de las catorce acciones de amparo de garantías constitucionales es similar, de manera tal que ante denominadores comunes conceptuales, basta el análisis de uno para comprender a los otros.

La orden de no hacer aparece en un formulario de retención de fichas de la Sección de Contabilidad y Cómputo del Departamento de apremio y trámite al cobro de la morosidad patronal de la Dirección de Ingresos de la Caja de Seguro Social, cuyo original no aparece en el expediente remitido por la Dirección de la Caja de Seguro Social y cuya fotocopia (fs. 11, 31, 51, 71, 91, 131, 151) no fue autenticada por el Secretario de la entidad de seguridad social, al tenor del documento que se adjunta en cada caso (fs. 238, 298).

Como hechos en que se fundamenta la acción, se anota la fecha de ingreso al empleo de cada accionante, la orden de retención de fichas de la sociedad civil Solís, Endara, Delgado y Guevara, se afirma además, que el pago de la cuota obrero-patronal de seguro social de todos los empleados se encuentra al día, que la ley no contempla la sanción impuesta y que las fichas del seguro social son patrimonio de cada empleado y tienen derecho a ellas si están al día en el pago de sus cuotas. Se sostiene finalmente que ninguno de los accionantes ha sido parte en proceso administrativo alguno que se ventile ante la Caja de Seguro Social en su contra.

Al señalar las garantías constitucionales que se estiman infringidas y el concepto en que lo han sido, se anota en primer lugar el artículo 17 constitucional, en el concepto de violación directa por omisión, en la medida en que la autoridad correspondiente no cumplió con la ley y los reglamentos de la Caja de Seguro Social en materia de notificaciones y de otorgar el derecho de impugnación de las partes afectadas con sanciones emanadas de la institución.

También se menciona el artículo 32 de la Carta Fundamental en el concepto de violación directa por omisión, al expedir un formulario de retención de fichas en perjuicio de personas que no son parte en el proceso y por cuanto el tipo de sanción impuesta carece de asidero legal. También se alude a la doble sanción al patrono por el mismo hecho.

Como tercera disposición constitucional violada por la orden de no hacer expedida, se señala el artículo 109, que consagra la garantía de seguridad social en casos de enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y otros riesgos y contingencias que sean objeto de previsión y seguridad, pues al negar el acceso a la ficha de seguro social a los trabajadores asegurados que se encuentran al día en el pago de las cuotas obrero-patronales, se produce una violación de dicha garantía de manera directa por omisión.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Los catorce empleados de la firma forense **SOLÍS, ENDARA, DELGADO y GUEVARA,** que han acudido al Pleno de la Corte Suprema de Justicia en acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de no hacer expedida por la Caja de Seguro Social, la cual los priva del derecho a la ficha para tener acceso a prestaciones médicas y/o hospitalarias como asegurados, no son parte del proceso administrativo que la Caja le sigue al Patrono N° 87-831-0086, ni de la Resolución N° 601-96. D. G. de 26 de abril de 1996 de la Dirección General de la Caja de Seguro Social, en virtud de la cual se le condenó a pagar mil balboas en concepto de multa por violación de los artículos 61 y 67 del Decreto Ley 14 de

1954.

La orden de no hacer, materializada en la retención de las fichas del Seguro Social a los empleados y que según la Directora encargada, no es más que un acto de control para hacer efectivas las aportaciones pecuniarias que deben satisfacer los patronos, deviene en un acto administrativo violatorio de nuestra Carta Magna en sus artículos 32 y 109, al aplicar una medida sancionatoria a terceros que no incurrieron en las infracciones de la ley de seguridad social que se le imputan al patrono y al negar el acceso al ejercicio de un derecho a personas que tienen la calidad de asegurados y que se encuentran al día en el pago de sus cuotas.

La Caja de Seguro Social en su estructura administrativa cuenta con departamentos especializados de jurisdicción coactiva que les facilita el cobro de cualquier obligación pecuniaria de los patronos, sin involucrar a los empleados en una responsabilidad que sólo compete a la patronal. Es ajeno a esta acción, el examen de los fundamentos de la resolución sancionatoria a la empresa, pues como se anotó antes, la orden que se ataca es la retención de fichas del seguro social a empleados que no son parte en el proceso administrativo al que se contrae el expediente remitido como antecedente en estos casos.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONCEDE las acciones de amparos presentadas por la licenciada Mercedes Solís en representación de GLORIANELA DE FARRUGIA, LUZ ELENA MARTÍNEZ, ANÍBAL SALAS CÉSPEDES, ALINETH PADILLA S., y BLYSEIRA NAVARRO; por la licenciada Yanissel Chang Ávila, en representación de NIBARDO ELÍAS CABRERA, JUAN J. DOMÍNGUEZ R., JULISSA CASTILLO, MERCEDES SOLÍS DE AHUMADA, MELITON GONZÁLEZ, ALAÍN y KHAREM J. LASSO y por el licenciado Nibardo Elías Cabrera en representación de LEONOR E. ARCE, YANISSEL CHANG ÁVILA, LIDIA DE BAZÁN y ÁLVARO CORREA RUEDA y en consecuencia, REVOCA, la orden de retención de sus fichas como asegurados de la CAJA DE SEGURO SOCIAL.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(Con salvamento de Voto)
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

De acuerdo con las constancias procesales, este amparo de garantías constitucionales se refiere a la decisión de la Caja de Seguro Social de examinar los libros de la firma de abogados SOLÍS, ENDARA, DELGADO Y GUEVARA, de acuerdo con el artículo 67 de la Ley Orgánica de la Caja, para la comprobación de sueldos, salarios y descuentos relacionados con el seguro social.

Según afirmación de la Caja no fue posible cumplir el propósito porque el empleador no brindó las facilidades necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto.

Ante esa situación la Caja tomó la decisión de retener las fichas del Seguro Social mediante las cuales se posibilita la asistencia a los empleados de SOLÍS, ENDARA, DELGADO Y GUEVARA, como jurídicamente está autorizada en tanto que las prestaciones a los asegurados es el resultado de las cuotas correctamente pagadas.

Contra esa retención se interponen los recursos de amparo presentes, por parte de los empleados.

La decisión mayoritaria del PLENO concede el amparo y revoca la orden de retención.

No comparto el criterio en que se funda.

Si desde el punto de vista económico se pudiera seguir la política de que el no pago -o el pago en forma indebida- de las cuotas no releva a la Caja de Seguro Social de prestarle asistencia social al empleado, entonces estaría fundada la decisión que se toma en la Sentencia. Pero esa no es la realidad. Sólo podría procederse de esa manera si el régimen de seguridad social fuera más exigente con el patrono y no ocurriera la morosidad y mal cumplimiento de la cuota de seguro, lo que es público y notorio.

El caso presente hasta cierto punto es un ejemplo. El patrono se niega a prestar a los funcionarios de la Caja las facilidades necesarias para el examen de los documentos. Y la negativa se ha hecho problemática al punto de ser el origen y la verdadera causa de los recursos de amparo que ocupan al Pleno de la Corte en esta ocasión.

El artículo 67 citado es del siguiente tenor:

> "Artículo 67: Para garantizar el estricto cumplimiento de este Decreto-Ley y sus Reglamentos, la Caja tiene la facultad de inspeccionar los lugares de trabajo y examinar los libros de contabilidad, listas de pago y demás documentos que fueran necesarios para la comprobación del sueldo, salarios y descuentos relacionados con el Seguro Social.
>
> Los patronos están obligados a prestar a los funcionarios de la Caja las facilidades necesarias para el cumplimiento de esta disposición. La negativa del patrono será sancionada de acuerdo con este Decreto-Ley".

De conformidad, si la Caja se ve imposibilitada por la conducta del patrono de verificar el debido cumplimiento del pago de las cuotas del Seguro Social, queda en consecuencia relevada del pago de las pretensiones correspondientes.

En esto consiste precisamente el acto de retención de las fichas a los empleados; fichas mediante las cuales se les posibilita recibir los beneficios de la seguridad social.

Lo anterior implica que la retención de fichas del Seguro Social no obedece al cobro de los B/.1,000.00 a que ha sido condenado el patrono, sino al incumplimiento de la obligación de facilitar el examen de la corrección con que haya procedido el empleador en lo que se refiere a la Caja de Seguro Social, de lo cual surge el derecho de los beneficiarios.

Por estas consideraciones salvo respetuosamente el voto.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR CLAUDIO DOMINGO MUÑOZ REYES CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA 95-JDC 95 DE 26 DE NOVIEMBRE DE 1995 DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 2. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado SIXTO ÁBREGO CAMAÑO, actuando en representación de CLAUDIO DOMINGO MUÑOZ REYES, ha interpuesto acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en la Sentencia N° 95-JDC-2-

95 de 27 de noviembre de 1995 que expidió la Junta de Conciliación y Decisión N° 2. y confirmada por la Sentencia de 28 de mayo de 1996 del Tribunal Superior de Trabajo.

La referida acción persigue que esta Superioridad Judicial revoque la Sentencia de 27 de noviembre de 1995 emitida por la Junta de Conciliación y Decisión N° 2, dado que a juicio del afectado, la misma ha violado el debido proceso, en virtud de que se declaró justificado el despido del señor CLAUDIO DOMINGO MUÑOZ REYES, y por tanto, se absuelve a la empresa demandada INTEL, S. A. de las pretensiones incoadas en su contra por el trabajador antes mencionado. Estas pretensiones consistían en el reintegro al puesto de trabajo y, en consecuencia, el pago de los salarios dejados de percibir. La resolución antes mencionada fue confirmada por el Tribunal Superior de Trabajo.

El Pleno considera que esta acción de amparo no es admisible por cuanto se colige de las pretensiones del amparista que lo que se pretende es que las sentencias impugnadas sean examinadas nuevamente, lo cual equivale a una tercera instancia. Ello es así por cuanto se señala que se ha violado el debido proceso debido a que ni la Junta de Conciliación N° 2, ni el Tribunal Superior de Trabajo tomaron en consideración ni mucho menos practicaron la medida de inspección ocular solicitada por el apoderado judicial del demandante, argumento éste que no permite la interposición de una acción de amparo. La parte demandante pretende que la Corte revise la actuación de la Junta de Conciliación N° 2 y del Tribunal Superior de Trabajo, los cuales en su concepto no apreciaron en ningún momento la solicitud del demandante en el sentido de que se decretara y practicara una inspección ocular la cual constituye a su juicio una medida probatoria debidamente admitida por nuestra legislación que ayudaría a demostrar la verdad material de que su representado no violó ningún procedimiento y que se ajustó a la práctica largamente ejercida en el establecimiento. Se desprende de lo anterior lo que se pretende es que se examine la actuación laboral, ya decidida en primera y segunda instancia, y que a su vez se califique si el despido era justificado o no.

Lo anterior se colige de los hechos en que se fundamenta el amparo, que prácticamente constituyen un alegato para sustentar el criterio de que el despido del señor CLAUDIO DOMINGO MUÑOZ REYES fue injustificado. Aunado a lo anterior, la parte actora señala claramente su pretensión, que no es precisamente que se revoque la Sentencia de la Junta de Conciliación y la Sentencia del Tribunal Superior por violar el debido proceso, sino que según sus propias palabras:

> "Reitero nuestra petición en el sentido de que se revoque las Sentencias impugnadas, y en su defecto se condene al INTEL a cumplir con las pretensiones de la demanda."

En este sentido, el Pleno de esta Corporación ha sido reiterativo en el criterio de que el Amparo es una acción independiente que tiende a reparar violaciones directas a los derechos constitucionales infringidos, por lo que al presentarse la acción constitucional en examen contra decisiones jurisdiccionales, la misma no es una tercera instancia que le permite al juzgador valorar elementos y situaciones propias del proceso común. Máxime cuando en el escrito de amparo se le solicita al Pleno que revoque las sentencias impugnada y que se condene al INTEL a cumplir con las pretensiones de su demanda.

En consecuencia, el PLENO de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por el Licenciado SIXTO ÁBREGO CAMAÑO en representación del señor CLAUDIO DOMINGO MUÑOZ REYES.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ

Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR JUAN SALOMÓN VEGA CONTRA LA JUEZ 15ª DEL CIRCUITO, RAMO PENAL, DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor JUAN SALOMÓN VEGA ha presentado, por intermedio de su apoderada judicial especial, la Licenciada EDMARA ESPINO DE DÍAZ, recurso de apelación contra la resolución expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 21 de junio de 1996 que no admite la demanda de amparo de garantías constitucionales interpuesta por la parte actora contra la Juez Decimoquinta del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil.

En la demanda se formula una pretensión consistente en una petición dirigida al Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá para que éste revoque la orden contenida en la Sentencia N° 72 del 25 de octubre de 1995, expedida por el Juzgado Decimoquinto de Circuito, De lo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá. El Primer Tribunal Superior no admitió el recurso de amparo en estudio por considerar que se trata de un caso en que se ha decretado la privación de la libertad de un sujeto de derecho en un juicio penal por lo que lo procedente es, en su opinión, la interposición de una acción de habeas corpus.

Una vez examinada la presente acción de amparo la Corte se percata de que en el caso que nos ocupa se impugna la Sentencia N° 72 de 25 de octubre de 1995, expedida por la Juez Decimoquinta del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal, mediante la cual se resuelve condenar al señor JUAN SALOMÓN VEGA, sindicado por el delito de expedición de cheque sin suficiente provisión de fondos, a la pena de veinte (20) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período, y se ordena la detención del sentenciado a fin de que sea puesto a órdenes del Departamento Nacional de Corrección para el cumplimiento de su condena, lo cual está muy lejos de ser una detención preventiva, como afirma el Primer Tribunal. Por ende, no es viable el recurso de habeas corpus.

No obstante lo anterior, la Corte observa que la presente acción de amparo pretende enervar una resolución dictada hace más de 8 meses. En este sentido, ha dicho la Corte en diversas ocasiones que la acción de amparo, según el artículo 2606 del Código Judicial, persigue revocar una orden que, por la gravedad e inminencia del daño que representa, requiere de una revocación inmediata. Esto quiere decir que el elemento fundamental del amparo es la urgencia en la protección del derecho constitucional que se estima conculcado. La inminencia del daño significa que se trate de un perjuicio actual, no pasado u ocurrido hace mucho tiempo. Inminente quiere decir que amenaza o está para suceder prontamente, y lo antónimo de inminente es remoto, lejano, como ocurre en el presente caso, en que la orden carece de actualidad, de inminencia y, por tanto, falta el elemento de urgencia que requiere una revocación inmediata.

La apoderada judicial del demandante señala en sus alegatos que su representado ha quedado en completo estado de indefensión por cuanto no se le notificó el auto de llamamiento a juicio ni la sentencia condenatoria lo que a su juicio constituye una abierta violación al debido proceso. Agrega el apoderado judicial del demandante que al no haber sido notificado de la sentencia condenatoria no pudo hacer uso de los recursos que la ley establece por lo que la sentencia ha quedado ejecutoriada, y por ende, procede la admisión del recurso de amparo.

En referencia a lo antes expuesto, la Corte ha reiterado en diferentes ocasiones que el recurso extraordinario de amparo solo es viable cuando se han

interpuesto todos los recursos que la ley le permite y, en torno al presente negocio, el Pleno de esta Corporación estima que ante la serie de irregularidades procesales que el demandante señala en su libelo, todavía resulta viable la interposición del recurso de revisión por lo que, a juicio de esta Corporación, no es admisible la acción de amparo que hoy nos ocupa. Esto, aunado al criterio de urgencia que caracteriza al recurso de amparo, lo cual analizamos con anterioridad, nos permite afirmar que lo procedente es, pues, la confirmación de la resolución apelada.

En consecuencia, el PLENO de la Corte Suprema, Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial el 21 de junio de 1996 que NO ADMITE la demanda de amparo de garantías constitucionales presentada por la Licenciada EDMARA ESPINO DE DÍAZ en representación de JUAN SALOMÓN VEGA contra la Juez Decimoquinta de Circuito, del Primer Circuito Judicial, Ramo Penal.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR JOSÉ MANUEL FAÚNDES RODRÍGUEZ EN CONTRA DE LA COMISIÓN DE CREDENCIALES, JUSTICIA INTERIOR, REGLAMENTO Y ASUNTOS JUDICIALES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, CATORCE (14) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En el proceso que adelanta la Asamblea Legislativa contra el Honorable Magistrado JOSÉ MANUEL FAÚNDES, éste, por conducto de apoderado legal, ha promovido acción constitucional de amparo de garantías constitucionales contra la Comisión de Credenciales, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Judiciales (en adelante, la Comisión) del Órgano Legislativo, con la finalidad de que las resoluciones de 24 de junio de 1996, y de 27 de junio de 1996, expedidas por la Comisión dentro del expresado proceso, sean revocadas, por cuanto contienen órdenes que constituyen, en apreciación del amparista, violaciones a los derechos y garantías fundamentales del Magistrado Faúndes.

Corresponde en esta etapa procesal que el Pleno entre a analizar la demanda para determinar su admisibilidad, para lo que debe contrastar la misma con el artículo 2610 del Código Judicial y con los requisitos de admisibilidad que ha señalado doctrina constante de este Pleno.

Los actos acusados, a los que se le imputa la violación de derechos y garantías fundamentales del amparista, son los siguientes:

"...

a) Resolución de fecha 24 de junio de 1996 que dispone la admisión y tramitación de la supuesta denuncia formulada por el Procurador General de la Nación, en contra del Magistrado de la Sala Segunda de lo Penal, Licdo. José Manuel Faúndes R. por la supuesta comisión de delitos, visibles a foja 1 del dicho expediente por parte de la Comisión de Credenciales, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Judiciales de la Asamblea Legislativa en funciones judiciales.

b) Resolución de fecha 27 de junio de 1996, en virtud de la cual la

> Comisión de Credenciales, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Judiciales de la Asamblea Legislativa en funciones judiciales dispone atribuyéndose funciones instructorias, la realización y perfeccionamiento de un sumario, ordenando para tal fin la práctica de diligencias testimoniales, de informes y demás que se expresan en la aludida resolución. ..."

Como se aprecia, se trata de dos resoluciones contentivas de dos supuestas órdenes de hacer o de no hacer que lesionan derechos y garantías fundamentales del amparista. Este Pleno, en copiosa jurisprudencia, ha indicado que la acción constitucional de amparo de garantías constitucionales procede, en primer lugar, contra un acto que revista la forma de un mandato que imponga una norma de conducta a una persona, lesiva de sus derechos y garantías fundamentales. No procede, por lo tanto, contra varias ordenes impugnadas en una misma acción de amparo, que es lo que acontece en este caso. Para acreditar dicha doctrina, basta invocar las sentencias de este Pleno, de 13 de octubre de 1995, de 7 de marzo de 1994, de 2 de junio de 1995 y de 13 de enero de 1994, entre otras muchas que han señalado de manera reiterada y uniforme esta regla para la procedencia del recurso.

En segundo lugar, aprecia el Pleno, que las dichas órdenes de hacer o de no hacer, no lo son, por cuanto no constituyen mandatos imperativos dirigidos a una persona, en desmedro de sus derechos y garantías fundamentales, por cuanto la primera de ellas es constitutiva de la admisión de denuncia del Procurador General de la Nación (véase la providencia de 24 de junio de 1996, foja 22), que la Comisión estimó que era procedente; y la resolución de 17 de junio de 1996, en virtud de la cual la Comisión ordenó, en funciones de autoridad de instrucción, la evacuación de una serie de trámites de instrucción de las referidas sumarias (véase foja 21). En ambos casos, dichos actos no son constitutivos de órdenes, en la manera que este Pleno, en reiterados pronunciamientos, lo ha estimado, al acoger los conceptos del eximio constitucionalista patrio e inspirador de esta acción de tutela y protección a la vigencia de los derechos y garantías fundamentales reconocidas en nuestra Constitución Política, José Dolores Moscote.

En efecto, en fecha tan temprana como en sus "Instituciones de Garantía", el profesor Moscote expuso con claridad el alcance que tienen las ordenes emanadas de autoridad pública y, en especial, el alcance de los actos emanados de autoridades jurisdiccionales, en la forma que se transcribe:

> "...
> ¿Qué es una "orden de hacer o de no hacer" que al tenor del artículo 189 de la constitución, de derecho al recurso de amparo? Si las palabras se toman en su recto, lógico y natural sentido, no puede de ser otra cosa que el mandato emanado de una voluntad arbitraria dirigido a procurar de parte de aquella a quien se impone la ejecución o la no ejecución de un acto del cual resulte disminuido con el goce de algún derecho que la constitución le reconoce y garantiza. Tal orden o tal mandato, en último análisis, sólo puede ser atentatorio contra la libertad propiamente dicha, contra los derechos fundamentales del ciudadano de que trata el título III de la constitución, ya que los demás que ésta le asegura, tienen suficientes garantías orgánicas que pueden hacerse efectivas por otros medios.
>
> Indudablemente no están exentos los funcionarios judiciales de ser recurridos en caso de que den "órdenes de hacer o de no hacer". También ellos pueden caer en la tentación de apartarse de las pautas que les señala su grave ministerio; en este caso débese andar con mucho cuidado al calificar las órdenes que pueden impartir. Muchas de éstas son "órdenes de hacer o de no hacer" en sentido lato, de modo que apenas habrá algunas que no estén incluidas en las de esta clase. En realidad, la mayor parte de las decisiones judiciales son verdaderas órdenes, explícitas o implícitas. Basta, sin embargo, que ellas sean dadas en virtud de las leyes que regulan los procesos para que ya por esta sola razón se considere que no las comprende el artículo 189. Esas leyes determinan una competencia, regulan ramas

> enteras del derecho y proveen o deben proveer los remedios legales aplicables para corregir, para subsanar, los errores de cualquier clase en que los jueces incurran con motivo de su aplicación. Solamente cuando estos se aparten del orden jurídico a que se hayan vinculados dictando "ordenes de hacer o de no hacer" en el sentido estricto, violatorias directamente de los derechos y garantías constitucionales que salvaguarda la constitución, es cuando procede contra ellos el recurso sumario de amparo de que habla el artículo 189 comentado. En cualquier otro caso o situación su uso es incorrecto, inoperante. ..."
>
> (PUBLICADO EN "ENSAYOS SOBRE HISTORIA CONSTITUCIONAL DE PANAMÁ", SEGUNDA EDICIÓN, JORGE FÁBREGA P. PÁG. 580,581).

Dichos conceptos medulares fueron reproducidos en su "Derecho Constitucional", edición de 1947, página 407 y 408, en términos sustancialmente idénticos.

Y es que, en el fondo, los actos de trámite, dentro de un proceso, no constituyen órdenes dirigidas a terceros que lesionen sus derechos fundamentales, sino dirigidas, en las más de las ocasiones, a los funcionarios que deban adelantar, dentro de un proceso, actuaciones de diversa naturaleza, como lo son, en lo penal, la "orden" de "rendimiento de indagatoria" y la "orden" de ampliación de la indagatoria, y, en general, todos los actos de trámite. Estos van dirigidos a instruir y dar cumplimiento secuencialmente a todas las etapas procedimentales dentro del respectivo proceso, salvo que dichos actos, dirigidos contra una persona, sean lesivos a sus derechos fundamentales, pues, de otra suerte, el amparo constituiría una fuente alternativa para dilucidar aspectos que se deben ventilar, en un nivel de principio, en un proceso jurisdiccional ordinario.

Mediante este mecanismo, además, se vulneraría uno de los principios fundamentales relativo a esta acción constitucional, cual es que rige, con respecto a ella, el principio de subsidiariedad, también conocido como principio de definitividad (probablemente por influencia del amparo mejicano), en virtud del cual no prospera la acción constitucional de amparo, en particular en materia jurisdiccional, si el agraviado tiene a su alcance el ejercicio de acciones, pretensiones, recursos u otros medios de defensa instituidos en su beneficio en las leyes que gobiernan los procesos en general, contenidos en leyes procesales, i. e. Código Judicial, Código de Familia, Código de Procedimiento Marítimo etc. Ese principio lo recoge el artículo 2606, numeral 2 del Código Judicial.

El Pleno se encuentra obligado a reiterar, por enésima vez, que la acción constitucional de amparo tiene como finalidad revocar aquellos actos que violen, de manera directa e inmediata, los derechos y garantías fundamentales, de naturaleza constitucional, de cualquier persona que acuda a esta vía constitucional; es decir, que el acto cuya revocatoria se pide contenga materia constitucional. No resulta procedente para impugnar actos procedimentales, violatorios de disposiciones legales, para la que existen, en el ordenamiento jurídico procesal, remedios para obtener la tutela judicial efectiva, por cuanto, como también ha reiterado el Pleno, igualmente en multitud de ocasiones, la vía constitucional de amparo no es una tercera instancia o una vía recursiva que el afectado pueda utilizar alternativamente con respecto a los remedios ordinarios, según prefiera, para anular actos violatorios de derechos de rango legal.

Solamente en el caso excepcional, que habría que ponderar en cada caso, de que el acto emanado de autoridad administrativa constituya un acto absolutamente arbitrario, entendido como tal, aquél al cual no se puede reconducir a una norma que habilite la actuación de la respectiva autoridad, sino, por el contrario, su fuente o fundamento se ubica, exclusivamente, en el capricho personal de la autoridad que dicta el acto arbitrario, al margen del ordenamiento constitucional, lesivo de manera directa e inmediata a sus derechos y garantías fundamentales de rango constitucional; y que tal acto pueda ocasionar un daño irreparable que debe revocarse cuanto antes, podría, a juicio de este Pleno, revocar dicho acto por medio de esta acción constitucional.

El carácter indispensablemente subsidiario de la acción constitucional de amparo ha sido señalado por la jurisprudencia en materia de acción de tutela colombiana, en el amparo mejicano, y también, por la doctrina constitucional del Tribunal Constitucional de España, por mencionar unos pocos ejemplos. Sobre la naturaleza subsidiaria del recurso de amparo en España, ha podido manifestar Germán Fernández Farreres:

"...

3. El recurso de amparo tiene carácter subsidiario y no es una tercera instancia judicial revisora de las decisiones judiciales, de manera que las cuestiones de estricta legalidad ordinaria, sin incidencia alguna en el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, resultan ajenas al amparo constitucional. Por ello mismo, es un proceso constitucional sustantivo e independiente de la vía judicial ordinaria seguida con carácter previo, que no se configura como un recurso jurisdiccional equivalente a cualesquiera otros previstos por el ordenamiento. ..."

(GERMÁN FERNÁNDEZ FARRERES, EL RECURSO DE AMPARO SEGÚN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL, PROLOGO DE FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE, PÁG. 32).

El citado autor, menciona a continuación una serie continuada de sentencias del Tribunal Constitucional en abono de esa afirmación, todas ellas consultables en su obra, de donde se extrae la cita, "El Recurso de Amparo según la Doctrina Constitucional", página 32 y ss., Editorial Marcial Pons, 1994.

Los señalamientos anteriores, antes reproducidos, que hace suyos el Pleno, lo llevan de la mano a señalar que, contra el acto de la Comisión, en funciones de instrucción, si el amparista discrepara de ellos, pende un remedio jurisdiccional en la vía ordinaria, esto es, el incidente de nulidad, gobernado por el artículo 689 del Código Judicial, por lo que, ante la existencia de un remedio en vía jurisdiccional ordinaria, no procede esta acción extraordinaria, no solamente porque ha sido jurisprudencia constante, sino porque esa jurisprudencia ha sido elevada al rango de norma procesal de derecho positivo, en el numeral 2 del artículo 2606 del Código Judicial. La doctrina de la Corte, sobre este particular, ha señalado en múltiples ocasiones la preferencia en el uso de medios ordinarios de impugnación sobre esta acción constitucional, por razón del principio de subsidiariedad o definitividad, de que se ha hecho mérito anteriormente.

Desde este ángulo, existe en el proceso que se adelanta contra el Magistrado Faúndes, incidente de nulidad propuesto por su defensa técnica, incidente éste que, de prosperar, anularía todo lo actuado hasta ese momento.

No quiere esto decir, naturalmente, que en el juzgamiento del Honorable Magistrado Faúndes, si hubiere mérito para ello de conformidad con la decisión que, sobre el particular, adopte la Asamblea Legislativa, en las sesiones judiciales en las cuales ejerza funciones jurisdiccionales, proceda al juzgamiento en desconocimiento absoluto de los trámites y derechos procesales de los cuales es titular el Magistrado Faúndes; por cuanto, si se produjese un manifiesto acto arbitrario en el juzgamiento por parte de la Asamblea Legislativa, o aún, en funciones de instrucción, por la Comisión, que amerite su inmediata revocatoria por dejarlo en absoluta indefensión, cabría la acción constitucional de amparo de garantías constitucionales, por cuanto dichos actos arbitrarios podrían conducir a la vulneración del conjunto de derechos que integran el debido proceso, que han sido señalados copiosamente por jurisprudencia de este Pleno, y para lo que basta, solamente, remitir a la sentencia de 15 de enero de 1996, la cual, entre otras consideraciones, manifestó:

"...

En primer término, las garantías objetivas del debido proceso han sido claramente delimitadas por jurisprudencia reiterada de esta superioridad. En este sentido, de acuerdo con el estricta legalidad procesal, la administración de justicia debe ejercitarse conforme a los trámites establecidos en la Ley. Ella implica, el acatamiento de las formalidades básicas o esenciales que rigen la actividad

> jurisdiccional: asegurarse a las partes en todo proceso legalmente establecido la oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso, de contradecir las aportadas por las contraparte, y de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos. ..."
>
> (REGISTRO JUDICIAL, ENERO 1996, FALLO DEL 15 DE ENERO DE 1996).

Desde otro ángulo, si el proceso se adelantase con libertad de formas y haciendo caso omiso del derecho de defensa del Magistrado Faúndes, éste, además, tendría a su alcance la demanda de inconstitucionalidad contra cualquier causa penal que adelante la Asamblea Legislativa en el juzgamiento que le corresponde por mandato constitucional y legal. Así lo manifestó este Pleno, cuando decidió que la Resolución N° 1-D, de 25 de febrero de 1988, y otras relacionadas, actos éstos que condujeron a la destitución del ex-Presidente Eric Arturo Delvalle, era violatoria de la Constitución, en virtud de la sentencia de constitucionalidad, de 13 de septiembre de 1990.

Existen, por lo tanto, tres grupos de razones por las cuales el Pleno estima que el recurso de amparo propuesto no debe prosperar: por ir enderezado contra dos supuestas órdenes, por no ostentar las mismas la calidad de órdenes que violen derechos o garantías fundamentales en desmedro de una persona y por existir en el ordenamiento procesal vías ordinarias para impugnar aquellos actos que considere el amparista violatorios de sus derechos legales.

Por todo lo expuesto el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por el Lic. José Manuel Faúndes Rodríguez, en contra de la Comisión de Credenciales, Justicia Interior Reglamento de Asuntos Judiciales de la Asamblea Legislativa.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PROMOVIDA POR EL LICENCIADO ROGELIO CRUZ RÍOS, EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ CASTRILLÓN HENAO, CONTRA LA ORDEN DE HACER PROFERIDA POR EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS, QUE CONSISTIÓ EN EL TRASLADO DE SU REPRESENTADO DEL HOSPITAL SANTO TOMÁS A LA CÁRCEL MODELO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

Por reunir los requisitos legales reglados en la legislación procesal vigente, **SE ADMITE** la acción de amparo de garantías constitucionales promovida ante esta Corporación de Justicia por el licenciado **Rogelio Cruz Ríos**, en representación de **JOSÉ CASTRILLÓN HENAO**, contra la orden de hacer proferida por el **FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS**, que consistió en el traslado de su representado del Hospital Santo Tomás a la Cárcel Modelo.

Por tanto, se requiere de la autoridad demandada dentro del término perentorio de la ley, el envío de la actuación correspondiente del caso o en su defecto un informe escrito de los hechos materia de esta acción, además, agregar

copias de los Tomos XVII y XVIII, del sumario.

Se tiene al licenciado **ROGELIO CRUZ RÍOS** como apoderado legal del demandante.

BASE LEGAL: artículos 2609, 2610 y 2611 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PROPUESTA POR EL LICENCIADO HILARIO BELLIDO O., EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA AMERICAN INTERNATIONAL IMPORTS, S. A., CONTRA LA ORDEN DE NO HACER, EXPEDIDA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 6 DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Hilario Bellido O., actuando en calidad de apoderado general para litigios, de la sociedad anónima **AMERICAN INTERNATIONAL IMPORTS, S. A.**, presentó ante esta Corporación de Justicia, acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la **JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN #6 DE PANAMÁ**, para que sea revocado en todas sus partes el auto N° PJ-6-96-61 de fecha 14 de junio de 1996, por medio del cual esa autoridad laboral rechaza por improcedente el Recurso de Apelación propuesto por la empresa que representa, contra la sentencia PJ-6-96 de junio de 1996, la cual contiene una orden de no hacer, que viola los Derechos y garantías de American International Imports S. A., consignados en la Constitución Política y las leyes vigentes.

Corresponde en este momento procesal determinar si la acción presentada cumple con los requisitos formales de admisibilidad que establece el Código Judicial en su artículo 2610.

Advierte el Pleno, que el escrito presentado señala la orden impugnada por la presente acción, el nombre de la autoridad que la dictó, los hechos en que se fundamenta la pretensión, así como la norma constitucional infringida.

Como fundamento el accionante sostiene que la resolución judicial impugnada ha violado el artículo 32 de la Constitución Nacional que consagra el principio del debido proceso, al rechazar por improcedente el recurso de apelación interpuesto por American International Imports, S. A. contra la sentencia de fondo dentro del proceso laboral que Indira Pérez Carrera promovió contra aquella.

La situación mencionada, según el amparista, se da porque el juzgador al dictar el auto impugnado no se ajustó a lo dispuesto en dicha norma, ni observó las disposiciones que contiene el artículo 871, numeral 1, del Código de Trabajo, que ordena que toda resolución debe estar motivada. Además sostiene que la resolución impugnada se fundamentó en datos erróneos por cuanto en el proceso se establecieron los salarios promedios en B/.293.95 mensuales, los cuales daban un total de B/.2,585.99, de las prestaciones a pagar a la trabajadora, lo que según el artículo 914 del Código de Trabajo y el artículo 8 de la ley 1 de 1986 hace plenamente viable el recurso de apelación.

Con tales argumentos solicita, se revoque en todas sus partes el auto PJ-6-96-61 de 14 de junio de 1996 dictado por la Junta de Conciliación y Decisión #6 de Panamá.

La situación planteada fue examinada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial al resolver por auto de 22 de julio de 1996, el recurso de hecho propuesto contra la resolución de 14 de junio de 1996 dictada por la Junta de Conciliación y Decisión #6 (Cfr. Fs. 2-7) que niega el recurso de apelación.

Se trata, pues, de resolución judicial que ya fue impugnada y resuelta en la instancia respectiva por medio de un recurso de hecho y no cabe otra acción contra la decisión de primera instancia, ni es el amparo la vía procesal para hacer una revaloración de pruebas, pues no es una tercera instancia, tal como lo han señalado precedentes reiterados de esta Corporación Judicial. Además, al presentar la acción de amparo contra el auto de 14 de junio de 1996 de la Junta de Conciliación y no contra la resolución del Tribunal Superior de Trabajo que no admitió el recurso de hecho, el amparista no acertó en la selección, pues la de primera instancia había sido objeto de una resolución adversa.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el licenciado Hilario Bellido O., en representación de AMERICAN INTERNATIONAL IMPORTS, S. A.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA LICDA. SARA SÁNCHEZ EN REPRESENTACIÓN DE PEDRO CAMPAGNIANI, GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO PANAMEÑO DE TURISMO, CONTRA LA ORDEN DE HACER DICTADA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 9 Y CONFIRMADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO MEDIANTE SENTENCIA DE 28 DE MARZO DE 1996. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada SARA SÁNCHEZ SÁEZ, en carácter de apoderada judicial del INSTITUTO PANAMEÑO DE TURISMO, ha presentado escrito ante esta Superioridad, solicitando ACLARACIÓN de la resolución dictada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el 12 de julio de 1996, por medio de la cual "NO ADMITE el amparo de garantías constitucionales interpuesto por la licenciada SARA SÁNCHEZ en representación de PEDRO CAMPAGNIANI, Gerente General del INSTITUTO PANAMEÑO DE TURISMO (IPAT) contra la orden de hacer dictada por la JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 9 y confirmada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO mediante sentencia de 29 de marzo de 1996".

Se desprende de la lectura de dicha solicitud, que ésta no se dirige a aclarar puntos oscuros o dudosos en la parte resolutiva de la sentencia (artículo 986 del Código Judicial), sino, por el contrario, pretende que este Pleno "revoque en todas sus partes la resolución apelada (sic) y haga justicia, no dando ápice a esta clara ilegalidad". Desconoce la letrada la naturaleza tanto de la aclaración de sentencias en general, como de las sentencias que el Pleno, en funciones de Tribunal Constitucional, dicta en materia constitucional, las que son finales, definitivas y obligatorias y contra las cuales no procede recurso alguno, aspectos que han sido determinados por este Pleno en innumerables sentencias, a cuya lectura remitimos a la peticionaria.

Se observa que, en la solicitud de aclaración de sentencia, notoriamente

improcedente, la apoderada le endilga a esta Superioridad que la sentencia cuya aclaración solicita no da lugar a una clara ilegalidad, lo que se traduce en una falta de consideración y respeto que no puede pasarse por alto, procediendo en consecuencia a amonestar, por tratarse de la primera vez, a la profesional del derecho.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA DE PLANO la solicitud de aclaración de sentencia formulada por el INSTITUTO PANAMEÑO DE TURISMO (IPAT), y DISPONE imponer una AMONESTACIÓN PRIVADA a su apoderada judicial, Licenciada SARA SÁNCHEZ SÁEZ.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDA POR JOSÉ MARÍA OLMOS CONTRA EL DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTE (20) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado al Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia, la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el Licdo. Alvaro Muñoz Fuentes en representación de **JOSÉ MARÍA OLMOS**, ante el Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial, contra el Sr. **DANIEL ROBLETO**, Director Regional de Trabajo de la provincia de Chiriquí, quien emitió la orden de no hacer contenida en el Auto # 19 del 22 de abril de 1996 -y confirmado mediante resolución del 5 de junio de 1996 emitida por el Ministro de Trabajo- que rechazó la solicitud de reintegro del amparista, quien fue despedido por la empresa **ANDY ELENA, S. A.**

Los hechos del recurso original se basaron en que el amparista gozaba de fuero sindical desde diciembre de 1995 por haber sido elegido dirigente sindical.

OLMOS recibió carta de despido el 11 de marzo de 1996, que se haría efectiva el día siguiente, es decir, el 12 de marzo.

La misiva decía que la medida se debió a que "El día 10 de marzo de 1995, a las 10:30 de la mañana, usted escenificó una acción violenta, injuriosa, amenazadora e irrespetuosa en contra del Administrador de la Empresa, Sr. José Manuel Ríos y otros miembros del personal ...".

Señaló el actor que para ser despedido, la empresa debió entablar primero un proceso para quitarle el fuero sindical.

El accionante solicitó reintegro ante el Director Regional de Trabajo de la provincia de Chiriquí, quien dictó el fallo impugnado, y confirmado por el Ministro de Trabajo y Bienestar Social.

En fallo emitido el 16 de febrero de 1996, la Sala Tercera de esta Corporación de Justicia, casó la sentencia del 21 de diciembre de 1995 dictada por el Tribunal Superior de Trabajo, y autorizó a **ANDY ELENA, S. A.** al despido del amparista por los actos de violencia, amenaza y demás, reproducidos

anteriormente en el extracto de la carta expuesta.

La sentencia de marras estableció que los hechos que indujeron dicha decisión, se verificaron el 9 de marzo de 1995.

Entonces, la Dirección Regional de Trabajo de la provincia de Chiriquí, mediante auto # 19 del 22 de abril del año que decurre, rechazó la solicitud de reintegro presentada por el Sr. **JOSÉ MARÍA OLMOS** contra **ANDY ELENA, S. A.**, siendo confirmada la misma el 5 de junio por el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social.

La empresa le presentó al accionante la carta de despido el 11 de mayo de 1996; la misma señala los hechos que motivaron la sanción, explicando que se pidió autorización judicial para el despido y que el proceso laboral había finalizado; también decía que mediante el fallo ya mencionado, la Sala Tercera de la Corte Suprema autorizó el despido, notificándole el mismo, que se haría efectivo a partir del 12 de febrero de 1996, por los hechos ocurridos el 9 de mayo de 1996.

Consideró el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial que lo que en realidad motivó la impugnación fue un error "mecanográfico", al final de la mencionada misiva se indicó que los hechos se llevaron a cabo el 9 de mayo de 1996, fecha que no había transcurrido al entregarse la carta de despido, esto es, el 11 de marzo del mismo año, siendo que "Mal podría entonces, en esta fecha ordenarse un despido a partir del 12 de marzo de 1996, por hechos ocurridos supuestamente en una fecha posterior (9 de mayo de 1996)."

Lo anterior indujo al a-quo a decidir que la acción de amparo presentada era inadmisible por improcedente, toda vez que el despido fue autorizado por la Sala Tercera de la Corte Suprema mediante el fallo ya mencionado por los hechos ocurridos el 9 de marzo de 1995 a las 10:30 a. m. y no por los hechos del 9 de mayo de 1996, "ya que se desprende claramente en la nota visible a fojas 35-36 del presente recurso extraordinario, que se trata de un error mecanográfico."

A consecuencia de esta decisión, el amparista presentó de manera oportuna su recurso de apelación, que se fundamenta en los siguientes argumentos:

Que la acción de amparo tiene como objetivo subsanar la acción irregular del funcionario del Ministerio de Trabajo que no cumplió su deber de ordenar el reintegro de un trabajador amparado por el fuero sindical, que le fuera otorgado mediante elecciones celebradas en diciembre de 1995, por un período de dos (2) años.

En esas circunstancias, se debe solicitar autorización para despedir al trabajador ante un Tribunal competente, cosa que no se hizo en este caso.

Que la resolución de la Sala Tercera ordenó levantar el fuero sindical de **JOSÉ MARÍA OLMOS**, "... producto de una elección anterior cuyo período terminó.", pero el fuero sindical nuevo que se le otorgó en diciembre de 1995 no se le quitó.

Por otra parte, manifestó el Licdo. Muñoz Fuentes que, pese a que la carta de despido se refirió a los hechos estimados por la Corte en su decisión, el patrono señaló en la misma unos hechos acaecidos en fecha distinta al 9 de mayo de 1996; dicho error -a juicio del amparista- no puede ser subsanado por la empresa, y menos por los tribunales de laborales, dado que el artículo 214 del Código de Trabajo obliga a las empresas a especificar los hechos y su fecha, cuando van a despedir a un trabajador, lo que le permite a éste defenderse.

Finalmente, señaló el actor que esta Superioridad ha establecido reiteradamente que los Tribunales no pueden suplir las deficiencias en las cartas de despido, porque ello contraría lo normado por el artículo 214 del Código Laboral, que es de orden público, y tanto las autoridades gubernativas como el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial incurrieron en el error de "alterar tácitamente los ordenamientos reguladores en la forma de notificación

del despido."

Vertidos los principales argumentos en el presente negocio, se dispone la Corte a emitir su decisión, previa las siguientes consideraciones.

Dado el contenido de la parte resolutiva de la decisión apelada, advierte esta Superioridad que lo que cabe es decidir la admisibilidad de la acción que nos ocupa.

Opina el Pleno que no le asiste la razón al apelante, toda vez que es ostensible que el fundamento de la carta de despido estriba en los mismos hechos del fallo de marras, lo que significa que la impugnación se basa en dicha decisión, máxime que la carta de despido hizo énfasis en realidad al mismo hecho -por tratarse obviamente de un error- que el utilizado por el fallo del recurso de casación; por ende, se incumple lo estatuido por los artículos 204 de la Constitución Nacional, y el 2606, numeral 3° del Código Judicial.

Además, pese a que el presente recurso amerita una decisión relativa a la admisión de la acción, considera el Pleno que es pertinente señalar -en lo relativo al nuevo período como dirigente sindical para el que fue elegido el trabajador- que no prospera el argumento de que se trata de que por tratarse de un nuevo período como dirigente sindical debe negarse el despido, ya que, como se ha llegado a la conclusión de que el fallo de la Sala Tercera se respalda en los mismos hechos, conceder la presente acción significaría desconocer una decisión que sobre el caso ha dicta esta Corporación de Justicia.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto del 12 de julio de 1996 dictado por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, que no admite la acción de amparo de garantías constitucionales presentada contra el auto del 5 de junio de 1996, dictado por el Ministro de Trabajo, que confirma el auto #19 del 22 de abril de 1996, dictado por el señor DANIEL ROBLETO, Director Regional de Trabajo de la Provincia de Chiriquí.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO LUIS CARLOS CEDEÑO EN REPRESENTACIÓN DE HORACIO RODRÍGUEZ DE LEÓN, REPRESENTANTE DE HOMAB, CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 053 DE 27 DE ABRIL DE 1994, DICTADA POR EL MINISTERIO DE SALUD. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Luis Carlos Cedeño, actuando en representación de la empresa HOMAB, S. A. representada legalmente por el señor Horacio Rodríguez De León, ha presentado demanda de amparo de garantías constitucionales contra la Resolución N° 053 de 27 de abril de 1994, expedida por el Ministerio de Salud.

En la demanda se formula una pretensión consistente en una petición dirigida al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para que revoque la orden contenida en la resolución arriba mencionada mediante la cual el Ministerio de Salud cancela el Registro Sanitario N° 34127 otorgado el 26 de octubre de 1989, que ampara el producto farmacéutico CETAXIMA 1g., polvo solución inyectable I.

M. I. V., elaborado por YOUNG SHIN PHARMACEUTICAL IND. CO. LTD. de Taiwán R. O. C., República de China; y el Registro Sanitario N° 38811, otorgado el 22 de enero de 1993, que ampara el producto farmacéutico ORITAXIM 1000 elaborado por Laboratorio CADILA LIMITED, República de India.

Una vez examinada la demanda, la Corte observa que la presente acción de amparo pretende enervar una resolución dictada hace más de 2 años. Ha dicho la Corte en diversas ocasiones que la acción de amparo, según el artículo 2606 del Código Judicial, persigue revocar una orden que, por la gravedad e inminencia del daño que representa, requiere de una revocación inmediata. Esto quiere decir que el elemento fundamental del amparo es la urgencia en la protección del derecho constitucional que se estima conculcado. La inminencia del daño significa que se trate de un perjuicio actual, no pasado u ocurrido hace mucho tiempo. Inminente quiere decir que amenaza o está para suceder prontamente, y lo antónimo de inminente es remoto, lejano, como ocurre en el presente caso, en que la orden carece de actualidad, de inminencia y, por tanto, falta el elemento de urgencia que requiere una revocación inmediata.

En consecuencia, el PLENO de la Corte Suprema, Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda de amparo de garantías constitucionales presentada por el Licenciado Luis Carlos Cedeño en representación de HOMAB, S. A. contra la Resolución N° 053 de 27 de abril de 1994, expedida por el Ministerio de Salud.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELOY ALFARO DE ALBA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR RUBÉN ÓSCAR CASTRO VS JUEZ SEGUNDO DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de amparo de garantías constitucionales presentada por la Licenciada Marisol Bonilla de Arrocha, en representación del señor **RUBÉN ÓSCAR CASTRO**, contra el auto proferido por el Juzgado Segundo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal el 16 de mayo de 1996. De acuerdo con lo que señala la recurrente en amparo, dicha resolución admitió sólo algunas de las pruebas aducidas dentro del proceso penal que se le sigue al señor Castro, "negando la admisión de otras que expresamente señala en la parte motiva". (Foja 2).

El Primer Tribunal Superior, mediante resolución fechada 15 de julio de 1996, no admitió el presente amparo porque consideró que no se había cumplido con lo que establece el artículo 2606 del Código Judicial, que condiciona la viabilidad de esta acción constitucional a que el recurrente en amparo haya agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate.

Como argumento fundamental, manifestó lo siguiente:

"En el propósito indicado y luego de llevar a cabo el examen

> correspondiente de la documentación adjuntada por el amparista, el Tribunal ha podido determinar que este último no ha dado cumplimiento al mandato consignado en la norma jurídica arriba citada, pues, si bien trajo a los autos el documento público de fojas 14 que da cuenta que el Juez demandado le negó la concesión del recurso ordinario de apelación que en tiempo oportuno impetrara el accionante contra el auto de fecha 16 de mayo de 1996 (que hoy se ataca por vía del presente amparo), no consta en el expediente la prueba demostrativa de que el señor RUBÉN ÓSCAR CASTRO haya ejercitado el recurso de hecho que cabía interponer contra dicha resolución judicial (ver artículos 2427 y 2432 del Código Judicial) en razón a que, contrario a lo señalado por el Juez demandado, de la correcta interpretación del artículo 2330 del Código Judicial se infiere claramente que el aludido auto de fecha 16 de mayo de 1996 resulta apelable en el aspecto relacionado con los elementos probatorios cuya práctica le fue negada al postulante del amparo." (Foja 17).

Por su parte, el recurrente, al sustentar la alzada alega que la negativa de la concesión del recurso de apelación, "debió determinarse mediante providencia que fuera notificada a las partes y no mediante proveído", ya que en la forma como lo hizo el Juzgado Segundo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal, "nos priva automáticamente del derecho de ejercer cualquier otro medio o Recurso para atacarla; colocando doblemente en la indefensión a Rubén Óscar Castro, pese a reconocerse que se le ha privado también de aportar pruebas que son fundamentales para su defensa." (Foja 21).

El análisis de las piezas procesales pone de manifiesto que la resolución impugnada mediante el presente amparo, esto es el auto proferido por el Juzgado Segundo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal el 16 de mayo de 1996, admitió algunas pruebas y negó otras. Por tanto, era apelable al tenor de lo dispuesto por el artículo 2230 del Código Judicial.

Si bien el Juzgado Segundo rechazó el escrito de apelación por considerarlo improcedente, el recurrente contaba con la posibilidad de recurrir de hecho contra esa negativa. Esta corporación judicial ha señalado en pronunciamientos anteriores, que el recurso de hecho es parte del recurso de apelación (Sentencias de 11 de agosto de 1995 y 24 de febrero de 1995), pues conforme al artículo 1141 del Código Judicial, admitir un recurso de hecho para facilitar un recurso de apelación, significa autorizar el recurso de apelación. Consecuentemente, debe confirmarse la decisión del Tribunal Superior, pues el recurrente no cumplió con el requisito que exige el ordinal 2° del artículo 2606 del Código Judicial.

Por último, es preciso reiterar que el amparo de garantías constitucionales es una acción autónoma y extraordinaria, que sólo es viable cuando existe violación de los derechos fundamentales y no una acción sustitutiva de los medios y trámites de impugnación que prevé la ley.

En mérito de lo expuesto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 15 de julio de 1996, que no admitió la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el señor RUBÉN ÓSCAR CASTRO, contra el Juez Segundo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL HOTEL WASHINGTON HYATT Y/O OF PANAMÁ CONTRA LA ORDEN DE HACER DICTADA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 9 Y CONFIRMADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado WINSTON CHURCHILL JAMES, en su condición de apoderado de ausente de las sociedades HOTEL WASHINGTON HYATT y HYATT OF PANAMÁ, dentro del proceso laboral propuesto por CARLOS A. REID, ha interpuesto acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la orden de hacer contenida en la sentencia de 28 de marzo de 1996, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo, que modifica y confirma la sentencia CJ-9 de 20 de enero de 1995, dictada por la Junta de Conciliación y Decisión N° 9 de Colón.

El Pleno de la Corte procede a decidir la admisibilidad del amparo de garantías, previas las siguientes consideraciones:

La resolución impugnada resolvió lo siguiente:

> "... MODIFICA la sentencia CJ-9 de 20 de Enero de 1995, proferida por la Junta de conciliación y Decisión N° 9, en el proceso laboral CARLOS A. REID HUTCHINSON -VS- HOTEL WASHINGTON HYATT Y HOTELERA FLAMINGO, S. A. en el sentido de que se DECLARE el reintegro del trabajador CARLOS A. REID HUTCHINSON a sus labores habituales con el pago de salarios caídos a partir del despido hasta la interposición del recurso de apelación, sin perjuicio del pago de la indemnización correspondiente con el respectivo recargo de que habla el artículo 219 del Código de Trabajo, y la CONFIRMA en todo lo demás. Se adicionan costas en 5%."

Los hechos que fundamentan la presente acción constitucional, en resumen, expresan que en el proceso laboral de la referencia, el demandante CARLOS A. REID fue "tratado como empleado de una entidad privada siendo un empleado público, y consecuentemente, fuera de la competencia de la ley laboral" y, en base a ello, fue considerada como empleador y condenada al reintegro del trabajador "una empresa con la cual el demandante no tuvo una relación de trabajo directamente ni como empleador sustituyente". Esta empresa es la sociedad HOTELERA FLAMINGO, S. A. quien adquirió el HOTEL WASHINGTON mediante licitación pública, "libre de pasivo laboral", con posterioridad al alegado despido del demandante, que en ese entonces laboraba para el IPAT, anterior propietario y administrador de dicho hotel.

Como normas infringidas se citan los artículos 18, 19, 32 de la Constitución Nacional y los artículos 735 y 2 del Código de Trabajo.

A juicio de la Corte, la acción de amparo de garantías constitucionales no es la vía para dilucidar problemas sobre la legalidad de ciertos actos, como es la pretensión del amparista respecto a la resolución impugnada, sobre la cual él mismo señala que es "a todas luces ilegal". En este sentido, como se ha podido observar se acusa al sentenciador de violar la norma constitucional (art. 18) que lo obliga a cumplir las leyes de nuestro país debido a que incurrió en la "aplicación de toda una legislación una situación incompatible". Todo lo cual, según el recurrente, obedece a que el Tribunal Superior de Trabajo no valoró correctamente ciertas pruebas, lo cual fue determinante en la decisión que adoptó. En tal sentido cita el artículo 735 del Código de Trabajo, expresando además:

> "No requieren prueba los hechos afirmados por una parte y admitidos o reconocidos por la contraria, respecto a los cuales la ley no exija prueba específica, los hechos notorios; los que estén amparados pro una presunción de derecho, y el derecho escrito que rige en la nación, o en los municipios, en las entidades autónomas

semiautónomas o descentralizadas." (El subrayado es nuestro).

> Como es observable a través del examen de las piezas procesales, no realizó el juzgador A-QUO, esfuerzo alguno en dar observancia a lo establecido en las piezas procesales y por ende en dar aplicación a lo conceptuado en las normas en cita, amen de ignora (sic) por completo resoluciones que ponen en claro la no obligación del IPAT, para con el señor REID, quien demanda, y por ende tampoco de HOTELERA FLAMINGO, S. A. por ser compradora de buena fe y sin pasivo laboral (como lo establece Pliego de Cargo 2/92, por tener para la época del despido el señor en mención la calidad de empleado Público."

Por tanto, este extraordinario remedio constitucional resulta improcedente dado que el amparo no es una tercera instancia en la que se pueda entrar a evaluar las pruebas aducidas en el proceso. Sobre este particular la Corte señaló en fallo de 15 de enero de 1995 lo siguiente:

> "La Corte ha sostenido en innumerables fallos, que la acción de amparo no es una tercera instancia en la que se pueda entrar a evaluar las pruebas aducidas por las partes para el reconocimiento de sus pretensiones procesales. La acción de amparo es una acción autónoma, de naturaleza constitucional, tendente (sic) a tutelar los derechos individuales y sociales consagrados en la Constitución Nacional. En lo que respecta al cumplimiento del debido proceso, en relación con el derecho de presentar pruebas y contradecirlas, lo que se protege es el derecho de aducirlas y practicarlas, pero la labor de darles el mérito legal, dentro del proceso le corresponde sólo al proceso ordinario, y como ya se ha dicho, en el proceso extraordinario de amparo la evaluación probatoria es completamente extraña a su naturaleza."

Finalmente, resulta pertinente advertir que no cabe el amparo cuando se alega la violación de derechos contenidos en la ley, es decir, que no tengan rango constitucional, como en el caso bajo examen. En todo caso, contra la infracción de tales derechos lo procedente sería el Recurso Contencioso de Derechos Humanos.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el amparo de garantía constitucionales propuesto por el HOTEL WASHINGTON HYATT y/o HYATT OF PANAMÁ contra la orden de hacer dictada por la Junta de Conciliación y Decisión N° 9 y confirmada por el Tribunal Superior de Trabajo.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR DARÍO EUGENIO CARRILLO GOMILA CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA DILIGENCIA DE CIERRE DE ÁUDITO DE FECHA 1° DE AGOSTO DE 1996. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Darío Eugenio Carrillo Gomila, en su propio nombre y

representación, ha interpuesto acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en la "Diligencia de Cierre de Áudito", de 1° de agosto de 1996, por la cual la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro ordenó el cierre de auditoría del año 1993, diligencia cuya práctica le fue comunicada mediante nota 210-336 de 19 de abril de 1996.

Considera el demandante que dicha actuación viola el artículo 48 de la Constitución Nacional.

El artículo 2611 del Código Judicial preceptúa que el Tribunal a quien se dirija la demanda de amparo de garantías constitucionales debe examinarla, para comprobar si reúne los requisitos comunes a todas las demandas y los indicados en el artículo 2610 del mismo Código, y además para determinar si no es "manifiestamente improcedente".

Es decir, que para admitir la demanda de amparo de garantías constitucionales debe examinarse no sólo los aspectos formales de la misma, sino también el acto impugnado, para determinar si es de aquellos impugnables por esta vía.

De acuerdo con reiterada jurisprudencia de esta Sala Plena, la demanda de amparo de garantías constitucionales contra órdenes emanadas de una autoridad, debe reunir los siguientes requisitos:

a) **que se interponga contra órdenes de hacer o no hacer**;
b) que por la gravedad e inminencia del daño que representan estas órdenes se requiera su revocación inmediata;
c) que la revocatoria de estas órdenes no pueda obtenerse por otra vía, **porque no existen otros medios ordinarios de impugnación, o porque éstos se han agotado**; y
d) que tratándose de resoluciones judiciales la acción se interponga con sujeción a las reglas establecidas en los ordinales 1, 2 y 3 del artículo 2606 del Código Judicial.

En el caso en estudio el acto impugnado no es una orden de hacer o de no hacer, porque en la "Diligencia de Cierre de Áudito", impugnada por el amparista con la presente acción, se deja constancia de la celebración de una conferencia con el contribuyente y de lo que le informó en esta diligencia, la auditora investigadora Graciela de Beraha, en los siguientes términos:

> "El resultado de la conferencia fue el siguiente: Se le informó al contribuyente de las diferencias en Ingresos no Declarados, Ingresos por Arrendamiento, Gastos en la Actividad de Arrendamiento, Seguridad e Inmueble para el año 1993." (Fs. 2).

Además, el acto impugnado señala en la sección III relativa a las conclusiones que "**La presente diligencia tiene por objeto darle a conocer al contribuyente** los resultados preliminares de la revisión por parte del auditor asignado. El Departamento de Auditoría Integral se reserva el derecho de verificar y ampliar los resultados antes señalados." (Fs. 2).

Es evidente entonces que el acto impugnado no constituye un mandato imperativo que obliga al amparista a que ejecute o se abstenga de una determinada conducta. Mediante este acto se pone en conocimiento del contribuyente que es objeto de una investigación, con el fin de que ejercite su derecho a defenderse presentando sus descargos.

Según el amparista dicha diligencia de cierre de áudito de **1° de agosto de 1996**, le fue comunicada mediante la **Nota N° 210-336 de 19 de abril de 1996**, en la cual el Jefe del Departamento de Auditoría Integral, a. i. le presentó al contribuyente a la Auditora Fiscal Graciela de Beraha, quien fue comisionada para realizar la siguiente investigación oficial: "Auditoría Integral para los años 1993, 1994 y 1995". En dicha nota también se le solicitó al contribuyente "se sirva(n) brindar la cooperación necesaria para que nuestro(s) funcionario(s) pueda(n) cumplir a satisfacción la misión que establece el Código Fiscal, especialmente en sus artículos 710 y 755 y disposiciones legales concordantes."

y se dejó constancia de la entrega "de la 'Carta al Contribuyente' la cual explica el mecanismo del proceso de la fiscalización y resalta los derechos de los contribuyentes." (Fs. 1).

Esta Corporación de Justicia, a este respecto, ha señalado en fallos recientes lo siguiente:

> "La comunicación que se ha impugnado no constituye un mandato que obligue a una determinada conducta al contribuyente, sino una mera comunicación en el sentido que la Dirección General de Ingresos, realizará una actividad administrativo-tributaria de fiscalización, así como las personas que, dentro del Ministerio de Hacienda y Tesoro, realizarán la aludida fiscalización. Es, por lo tanto, el ejercicio de una función tributaria, justamente de fiscalización, para lo que la Ley dota a la Administración de potestades administrativas, mediante cuyo ejercicio el contribuyente se encuentra en una situación pasiva, de inercia, en una condición de sujeción, frente a la Administración. Naturalmente, el ejercicio de la potestad administrativa debe realizarse con arreglo a los procedimientos establecidos (principio de legalidad). Pues bien, el ejercicio de la potestad o de las potestades tributarias está debidamente fundamentado en las funciones y atribuciones que la ley (Ley 8ª de 1964 y Decreto de Gabinete N° 109 de 1970 y sus modificaciones) o de las normas reglamentarias (Decreto Ejecutivo N° 4, de 20 de enero de 1984) le asignan a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro.
>
> Por otra parte, el acto expedido por el Departamento de Auditoría Integral constituye un acto de comunicación, de mero trámite, para la adecuada fiscalización de las obligaciones tributarias a cargo de los contribuyentes. Dicho acto, como los oficios, no constituyen órdenes, por lo que se percibe claramente que la acción de amparo adolece de un presupuesto esencial que impide su admisión, es decir no constituye una orden. Véase, sobre este último aspecto, la sentencia de amparo de 3 de mayo de 1996." (Resolución de 21 de mayo de 1996, dictada dentro de la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta por el Licenciado Jaime Padilla González, en su condición de gestor oficioso de Administración y Servicios de Hotelería, S. A., contra la orden de hacer contenida en la Nota N° 210-73 de 3 de mayo de 1996, dictada por el Jefe de Auditoría, A.I. de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro.)
>
> "En lo relacionado con la pretendida orden de hacer o de no hacer, ésta debe revestir la forma de un mandato expedido por un servidor público, que origine un deber de acción o abstención, cuando tal orden viole alguna garantía constitucional del amparista, lo que no ocurren en el presente caso." (Resolución de 20 de mayo de 1996, dictada dentro de la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta contra el Auto de 22 de febrero de 1996, emitido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante el cual negó el incidente de recusación propuesto por la firma forense Villalaz y Asociados en contra de la Fiscal Tercera Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá).

Como la presente acción es manifiestamente improcedente, ya que no va dirigida contra una orden de hacer o no hacer, no debe admitirse en cumplimiento del artículo 2611 del Código Judicial.

De consiguiente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por el licenciado Darío Eugenio Carrillo Gomila, en su propio nombre y representación, contra la orden de hacer contenida en la "Diligencia de Cierre de áudito" de 1° de agosto de 1996, dictada por el Director General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, comunicada mediante la nota 210-336 de 19 de abril de 1996.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PROPUESTO POR LA FIRMA FORENSE TRONCOSO, LACAYO & PORRAS, EN REPRESENTACIÓN DE AGRO GANADERA SANTA FE, S. A., CONTRA LA ORDEN DE NO HACER, CONTENIDA EN EL AUTO N° 2119 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 1995, DICTADA POR EL JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO RAMO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma de abogados **TRONCOSO, LACAYO & PORRAS,** en su calidad de apoderados judiciales de la empresa **AGRO GANADERA SANTA FE, S. A.,** presentó acción de amparo de garantías constitucionales contra el auto N° 2119 de 21 de septiembre de 1995, dictado por el Juzgado Primero de Circuito de Panamá, Ramo Civil, contentiva de una orden que impide a la amparista intervenir en el juicio ejecutivo propuesto por **LUIS ERNESTO CHU contra EFRAÍN ALCIDES CORREA.**

Al examinar la acción presentada a fin de establecer su admisibilidad in limine, se advierte que la misma, además de reunir los requisitos comunes de toda demanda, hace expresa mención de la orden censurada, señala las garantías fundamentales que estima infringidas y explica el concepto de la infracción, no obstante, se aparta de las prescripciones normativas en materia de competencia, específicamente de lo previsto en el artículo 2607 del Código Judicial, en virtud de que no compete a este Tribunal el conocimiento de los actos que procedan de servidores judiciales con mando y jurisdicción en una provincia, como es el acto impugnado con esta acción, el cual fue emitido por el Juzgado Primero de Circuito de Panamá, Ramo Civil.

Si bien es cierto que la decisión fue confirmada por el Tribunal Superior en resolución del 9 de mayo de 1996, y el Pleno ha sostenido que las acciones de amparo deben dirigirse al acto originario y no al confirmatorio, ello no significa que compete a la Corte conocer de esta acción, por cuanto violaría los principios de competencia territorial, expresamente señalados por la norma antes mencionada.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SE INHIBE de conocer la presente acción por falta de competencia.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSE MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO EDWIN R. MUÑOZ

EN REPRESENTACIÓN DE KONG CHUN LI Y YAN WIN CHAN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Edwin René Muñoz, actuando en nombre y representación del señor **YAO PAK KION**, ha presentado acción de amparo de garantías constitucionales "contra la orden de detención mediante la cual, la Policía Técnica Judicial detiene y pone a órdenes de la Dirección de Migración para su posterior deportación, aduciendo que los señores **KONG CHUN LI y YAN WIN CHAN**, son indocumentados y sin darles la mínima oportunidad de defensa, desde el día 24 de julio de 1996." (Foja 2).

El apoderado judicial del recurrente considera que la orden impugnada es violatoria de los artículos 17, 20, 21 y 32 de la Constitución Nacional.

El análisis del presente negocio pone en evidencia que el acto atacado consiste en una orden de detención preventiva ya ejecutada, con la finalidad de deportar, posteriormente, a dos ciudadanos extranjeros. Se trata, entonces, de un acto que compromete la libertad ambulatoria de esas personas. Al resolver otra acción de amparo de garantías fundamentales interpuesta como consecuencia de una situación similar, esta corporación judicial señaló lo siguiente:

> "De otra parte, el Pleno de la Corte estima conveniente destacar que las peticionarias "... se encuentran detenidas en Migración y ya existe orden de deportación ..." (F. 3, subraya la Corte). Así las cosas, resulta evidente que en la causa que ahora se examina, se pretende atacar un acto que conlleva la **deportación** de personas, **ya detenidas**, por lo que hay que hacer énfasis en lo preceptuado por la normativa legal relacionada con la acción constitucional de habeas corpus. El artículo 2565 del Código Judicial señala:
>
> "Todo individuo detenido fuera de los casos y la forma que prescriben la Constitución y la ley, por cualquier acto que emane de las autoridades, funcionarios o corporaciones públicas del órgano o rama que fuere, tiene derecho a un **mandamiento de Habeas Corpus** ..." (Énfasis de la Corte).
>
> Por su parte, el numeral 5 del artículo 2566, también atinente al instituto del habeas corpus, establece como "acto sin fundamento legal", entre otros, la **deportación sin justa causa**, todo lo cual indica que para la situación concreta de que se conoce resulta improcedente la acción de amparo." (Registro Judicial de abril de 1995).

De lo anteriormente expuesto se colige que el presente amparo es manifiestamente improcedente y no debe ser admitido, al tenor de lo dispuesto por el artículo 2611 del Código Judicial.

Por tanto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por el Licenciado Edwin René Muñoz, en representación del señor YAO PAK KION y a favor de los señores KONG CHUN LI y YAN WIN CHAN.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LIC. BOLÍVAR JOSÉ CANO EN REPRESENTACIÓN DE MARISOL CABALLERO CONTRA EL JUEZ SEGUNDO DE CIRCUITO DE CHIRIQUÍ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **Bolívar José Cano Cruz** ha presentado recurso de apelación contra el Auto de 22 de julio de 1996 del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial que resolvió **NO ADMITIR** la acción de amparo propuesta en favor de **MARISOL CABALLERO GUERRERO** y contra el Auto N° 1165 de 24 de junio de 1996, dictado por el Juez Segundo del Circuito de Chiriquí, Ramo Civil, dentro del proceso de Concurso de Acreedores Necesario propuesto por **María Emérita Valdés Araúz** contra de **Rómulo Caballero Batista** y en el que se ordenaba la práctica del inventario de los bienes del concursado.

El amparista sostiene como principal argumento contra la Resolución impugnada los siguientes razonamientos:

> "El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, utiliza una tesis para negar la admisibilidad del Amparo, aduciendo que `La Orden cuya revocatoria se pretende por vía de la Acción de Amparo, es en su esencia, una resolución judicial dictada por el funcionario competente dentro de un proceso de Concurso de Acreedores Necesario, de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 2 del artículo 1811 del Código Judicial. El funcionario acusado al emitir la orden cuyo examen se pretende no ha hecho sino cumplir con el mandato que le impone el artículo 1836 del Código Judicial .
>
> Sin embargo señores Magistrados, con dicha Orden, si se están causando perjuicios a mi representada, pues no habían sido resueltas con anterioridad una serie de peticiones y sin que a la fecha hayan sido resueltas por el funcionario acusado, pareciera, que no se le dio la lectura necesaria al expediente que contiene la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesto por mi (sic).
>
> La Corte Suprema de Justicia, al resolver Apelación de un Amparo de Garantías Constitucionales, interpuesto por **RÓMULO CABALLERO GUERRERO Y (SI) ISRAEL ENRIQUE CABALLERO ARAÚZ**, en fallo del dieciséis (16) de enero de mil novecientos noventa y seis (1996), señala que el Amparo de Garantías Constitucionales puede ejercer (sic) contra toda clase de actos violatorios de derechos fundamentales que revistan la forma de una Orden de Hacer o de no hacer, por lo que consideramos viables la admisión del Recurso de Amparo de Garantías Constitucionales.
>
> Por todo lo anteriormente expuesto solicito muy respetuosamente, se revoque el Auto impugnado y se ordene al Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, que admita y conceda la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales y se ordene suspender la Orden de Hacer".

Las razones que llevaron al Tribunal **A quo** a no admitir la acción de amparo las comparte plenamente este Tribunal dentro de este proceso constitucional de amparo. Sostiene la Resolución impugnada en su parte más destacada lo siguiente:

> "En esta tarea se observa que la orden cuya revocatoria se pretende por vía de la acción de amparo, es en su esencia, una resolución

> judicial dictada por funcionario competente dentro de un proceso de concurso de acreedores necesario, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 1811 del Código Judicial. El funcionario acusado al emitir la orden cuyo examen se pretende no ha hecho sino cumplir con el mandato que le impone el artículo 1836 del Código Judicial. Es importante mencionar que durante la diligencia de inventario, conforme lo reglamenta nuestra ley procesal, existen mecanismos para viabilizar los reclamos que pretendan excluir de este listado algunos de los bienes en él comprendidos. En vista de lo anterior resulta factible afirmar que la resolución acusada además de constituirse en su esencia en un acto de impulso procesal y de necesario acatamiento dentro de la especial calidad del proceso judicial propuesto, encuentra durante su ejecución fórmulas para resolver los reclamos de parte de quien se considere afectado. Todo lo cual le permite al tribunal concluir que la orden acusada no cumple con la exigencia legal plasmada en el tercer párrafo del artículo 2606 del Código Judicial cuando se refiere a la procedencia del amparo contra órdenes que por la gravedad o inminencia del daño que representan requieran de una revocación inmediata".
>
> En efecto el artículo 1840 del Código Judicial establece lo siguiente:
>
> "Los reclamos para excluir del inventario alguno o algunos de los bienes en él comprendidos serán resueltos por el Juez de la causa, con intervención del Curador".

La disposición transcrita demuestra claramente que el amparista **se anticipa** al desarrollo del proceso, cuando lo que impugna es la fecha de la práctica del inventario de los bienes del concursado, y pretende **antes de la práctica** del inventario reclamar la exclusión de bienes, cuando la disposición citada señala que los reclamos de exclusión de bienes se hacen **durante** el inventario. Lo anterior demuestra, además, que existen medios de impugnación dentro de este proceso especial no utilizado en su momento oportuno en la práctica del inventario y por lo tanto hace improcedente el amparo, como lo sostiene el Tribunal **A quo**. Igualmente estamos en presencia de un acto de mero impulso procesal ordenado por la ley en el artículo 1836 del Código Judicial, que el Juez de Circuito no podía de dejar de atender, lo que a su vez significa que no estamos en presencia de una orden, sino del cumplimiento de un trámite legal procesal exigido por el Código Judicial.

Por las razones expuestas, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la Resolución expedida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial el día 22 de julio de 1996 dentro de la citada acción de amparo.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA. E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MIGUEL RODRÍGUEZ Y EMILIA SOLÍS CONTRA LA FISCALÍA SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado FÉLIX ENRIQUE TROYA, Defensor de Oficio del Circuito Judicial de Veraguas, interpuso ante esta Corporación de Justicia, acción de habeas corpus a favor de MIGUEL RODRÍGUEZ y EMILIA SOLÍS contra la orden de detención preventiva, fechada 25 de abril de 1996, emitida por la SECRETARIA DE DROGAS DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL.

Acogida la acción, se libró mandamiento de habeas corpus, mediante providencia de 23 de julio de 1996. El funcionario acusado contestó mediante nota de 25 de julio de 1996, lo siguiente:

> "En cumplimiento de lo ordenado por la Honorable Corte Suprema de Justicia, ... se procede a rendir a rendir (sic) el informe solicitado por la Honorable Corporación de Justicia de la siguiente forma:
>
> 1. Sí es cierto que de manera escrita y mediante providencia debidamente motivada y razonada de fecha veinticinco (25) de abril de 1996, emanada de la FISCALÍA superior del Segundo Distrito Judicial, Secretaría de Drogas se ordenó la detención preventiva de MIGUEL RODRÍGUEZ, EMILIA SOLÍS DE RODRÍGUEZ y OTROS.
>
> 2. Los motivos o fundamentos que se tuvo para ello ... el día 24 de abril de 1996 este Despacho realizó Diligencia de Allanamiento y Registro a la residencia de los citados encartados en donde se incautó gran cantidad de sustancia presuntamente ilícita, la cual al ser analizada por el Laboratorio Técnico Especializado en Drogas de Panamá, certificó que las mismas resultaron positivas para la determinación de COCAÍNA, en la cantidad de 1,068.49 gramos. Los fundamentos de derecho utilizados son: Título VII, Capítulo V del Libro II del Código Penal. Artículos 2147 y 2159 del Código Judicial, en relación a la Ley 23 del 30 de diciembre de 1986 reformados por la Ley 13 del 27 de julio de 1994.
>
> 3. A la tercera pregunta respondo que los mismos no se encuentran a nuestras órdenas (sic), ya que las sumarias que se le instruyen por razones de competencia fueron remitidas a la Fiscalía Primera del Circuito de Veraguas, el 24 de junio de 1996, y los precitados se encuentran a órdenes de esa esfera circuital."

El artículo 2602 del Código Judicial establece que son competentes para conocer de la demanda de habeas corpus, por actos que procedan de autoridades o funcionarios con mando y jurisdicción en una provincia, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. Resulta claro, entonces, que en razón de lo expresado en la nota arriba transcrita, no corresponde a la Corte el conocimiento de la presente acción. En consecuencia, en cumplimiento de lo que ordena el artículo 2588 del Código Judicial, corresponde enviar sin dilación alguna los autos al funcionario competente, en este caso, al Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLINA el CONOCIMIENTO de la acción extraordinaria de habeas corpus interpuesta a favor de MIGUEL RODRÍGUEZ y EMILIA SOLÍS, ante el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE SERGIO MORENO BERNAL Y EDGARDO HILL JORDÁN CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado CARLOS AMEGLIO MONCADA solicitó a la Corte Suprema de Justicia presentó recurso de Habeas Corpus en favor de los ciudadanos SERGIO MORENO BERNAL y EDGARDO HILL JORDÁN, contra el Fiscal Auxiliar de la República.

Librado el mandamiento pedido contra el funcionario, se le ordenó poner a los detenidos a órdenes de esta Corporación. A su vez, se le mandó, dentro del término de dos (2) horas contados a partir de la notificación, presentar el informe escrito al que hace referencia el artículo 2582 del Código Judicial.

El Fiscal Auxiliar de la República rindió el informe solicitado en donde expresa:

"...

a. No se ordenó la detención de los señores SERGIO MORENO BERNAL, y EDGARDO HILL JORDÁN.

b. Los motivos o fundamentos de hechos y de derecho, se encuentran claramente contenidos en el proveído de ésta fecha, y por le cual se ordenó a la Policía Técnica Judicial, la desaprehensión de los recurrentes.

c. No se encuentran bajo nuestra custodia, tal y como fuera expuesto en el punto anterior, por considerar que no existía mérito, hasta el momento, para que continuaran recluidos en las instalaciones de la Policía Técnica Judicial, a nuestra orden. ...".

Como se desprende de lo expresado por el funcionario contra quien se libro el mandamiento de habeas corpus, contra SERGIO MORENO BERNAL y EDGARDO HILL JORDÁN, no se ha ordenado detención, por lo que se debe entender, que los mismos, no se encuentran privados de su libertad corporal, motivo por el cual debe declararse terminado este procedimiento extraordinario.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EL CESE del procedimiento en esta acción de habeas corpus presentada a favor de los señores SERGIO MORENO BERNAL y EDGARDO HILL JORDÁN.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MIGUEL ÁNGEL ÁBREGO QUINTERO Y GILBERTO ESPINOZA CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Edda Ábrego de Ruiz, mediante escrito presentado a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, ha interpuesto acción de Habeas Corpus a favor de los ciudadanos **MIGUEL ÁNGEL ÁBREGO QUINTERO y GILBERTO ESPINOZA** contra la orden de detención emitida por la Fiscalía Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Por cumplidas las reglas de reparto, se libró el mandamiento contra la autoridad demandada para que informara en el término de dos horas sobre el fundamento de hecho y de derecho que tuvo para adoptar la medida cautelar personal mencionada, contra los señores ÁBREGO y ESPINOZA.

El 31 de julio se recibió el Oficio N° 7775, mediante el cual el licenciado **ROSENDO MIRANDA**, Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, aceptó haber ordenado la detención de MIGUEL ÁNGEL ÁBREGO y GILBERTO ESPINOZA, mediante providencia de 2 de julio de 1996, como consecuencia de un allanamiento con venta controlada de sustancias ilícitas, que arrojó como resultado la incautación de 47 sobres con sustancia de color blanco que se presumía era cocaína y se le ocupó a MIGUEL ÁNGEL ÁBREGO dinero en efectivo entre los que aparecieron billetes de los registrados y fotocopiados en la venta controlada. En cuanto a GILBERTO ESPINOZA, quien en ese momento se encontraba en la residencia allanada, se le detuvo porque portaba un revólver calibre 32 con serie limada y sin permiso.

Al informe suministrado en el oficio al que se hace referencia, se adjuntó copia autenticada del expediente levantado con motivo de este caso y en el mismo se puede constatar que la investigación penal se genera en un informe de novedad, calendado el 28 de junio de 1996, dirigido al Jefe de la División de Estupefacientes de la Policía Técnica Judicial por el Detective IV, ANEL A. BRADIEL, que da cuenta sobre el desarrollo de una actividad ilícita en el Corregimiento de Pedregal, en la residencia de un ex miembro del DENI que se dedicaba a la venta de drogas.

El 28 de junio de 1996, se solicitó la autorización para realizar una compra simulada con allanamiento, previa indicación de la serie y el registro de los billetes de banco que se iban a utilizar. Ese mismo día, en horas de la noche, se hizo la compra simulada y media hora después se practicó la diligencia de allanamiento en la casa 37-B, de propiedad de MIGUEL ÁNGEL ÁBREGO y en el anexo de madera que está ubicado en la parte de atrás y es de propiedad de JAIME ARTURO ÁBREGO QUINTERO. En la residencia principal no se encontró sustancia ilícita alguna, pero a MIGUEL ÁBREGO al enseñar el dinero que llevaba consigo, sacó de uno de los bolsillos del pantalón la suma de cien balboas (B/.100.00) y de otro bolsillo la suma de setenta y cinco balboas (B/.75.00), siendo esta última cantidad la que correspondía a los billetes marcados que se habían utilizado para la compra simulada; en el anexo de propiedad de JAIME ÁBREGO, se encontró una bolsita plástica transparente con 47 sobres en su interior, que contenía polvo blanco que resultó ser cocaína.

En la declaración indagatoria de JAIME ÁBREGO (fs. 20-26) éste acepta ser el dueño de la droga que se encontró en su casa (anexo) y que no sólo es consumidor sino también vendedor de droga, pero aclara que el dinero marcado que se encontró en posesión de su hermano, MIGUEL ÁNGEL ÁBREGO, le fue entregado por él para que se lo guardara, pues como era fin de semana, temía gastárselo en licor. Esa misma versión fue dada por su hermano MIGUEL ÁNGEL ÁBREGO, quien manifestó que conocía la adicción de JAIME ÁBREGO a la droga y lo había reprendido cuando se enteró que vendía sustancias ilícitas, pero éste no le había hecho caso.

El resto de los elementos de convicción que se han incorporado al sumario, demuestran que el informe de novedad se refiere a un ex miembro del DENI como el vendedor de sustancias ilícitas y aunque no hay una identificación de cuál de los hermanos ÁBREGO era ex empleado del Departamento Nacional de investigaciones, se deduce que lo es JAIME ARTURO ÁBREGO, al manifestar en su indagatoria el temor de ser enviado a la cárcel Modelo, lugar donde dice tiene enemigos y su vida peligra. En cuanto MIGUEL ÁNGEL ÁBREGO QUINTERO, quien acepta tener conocimiento de las actividades ilícitas de su hermano sin ser partícipe de ello, dada su formación académica, sus antecedentes laborales y sus labores agropecuarias de

las que devenga sus ingresos, permiten presumir que su versión se ajusta más a la verdad, pues no se puede perder de vista que la legislación penal y la Constitución Nacional consagran la figura jurídica de la no exigibilidad de otra conducta, cuando se trata de parientes cercanos involucrados en hechos delictivos de cierta naturaleza.

Respecto a la situación procesal de GILBERTO ESPINOZA, al tenor de la providencia de 2 de julio de 1996, dictada por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, en la que se ordenó la compulsa de copias para que la esfera circuital investigara lo relativo a la posesión y comercio de armas prohibidas, cabe declinar esta acción ante la autoridad competente.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la detención de MIGUEL ÁNGEL ÁBREGO QUINTERO, ordenada por el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas y DECRETA su inmediata libertad, siempre que no exista otra causa penal en su contra; DECLINA y ordena la compulsa de copias a fin de que el Segundo Tribunal Superior de Justicia, conozca de la acción de Habeas Corpus a favor de GILBERTO ESPINOZA.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROGELIO ELOY GARCÍA EN CONTRA DEL ADMINISTRADOR REGIONAL DE ADUANAS, ZONA ORIENTAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Ramón Arosemena Quintero en representación de **ROGELIO ELOY GARCÍA GARCÍA**, ha interpuesto acción de Habeas Corpus, contra el Administrador Regional de Aduanas, por considerar que la detención que sufre es ilegal.

Librado el mandamiento de Habeas Corpus en el término ordenado en el artículo 2567 del Código Judicial vigente, el funcionario requerido mediante Nota 710-01-400-ARAZO de 31 de julio de 1996, contestó en los siguientes términos:

> "A. Sí es cierto que se ordenó la detención de ROGELIO ELOY GARCÍA GARCÍA. Dicha orden fue expedida por el Administrador Regional de aduanas, Zona Oriental, mediante Providencia N° AL-ARA-018 de fecha de 18 de julio de 1996.
>
> B. En cuanto a los motivos o fundamentos de hecho y de derecho que se tuvo para ello; veamos: ...
>
> El sindicado ROGELIO ELOY GARCÍA GARCÍA, alias "LOLOY", se encuentra fuertemente involucrado en la comisión del delito aduanero de contrabando.
>
> Ello se desprende del sumario en donde existen graves indicios de culpabilidad contra GARCÍA GARCÍA, cuando señala en su Indagatoria (foja 31), que él funge como encargado de la Administración de la empresa PROSONIC. Este hecho, aunado al señalamiento que hace SIMANCAS DELGADO en su indagatoria, (visible a foja 23), cuando dice

> que la mercancía la recogió de un camión en un callejón cerca de la empresa PROSONIC. Esto es, que todo lo vincula directamente con el ilícito perpetrado.
>
> Que el propio GARCÍA GARCÍA declara en su indagatoria, que él entregó la mercancía al señor SIMANCAS DELGADO y que fue este (Simancas) quien tomó la liquidación vieja del escritorio. (foja 16). Alude a la Declaración-Liquidación de Aduanas N° 384626.
>
> Otro hecho que vincula a GARCÍA GARCÍA en el delito aduanero de contrabando, es lo declarado por ÓSCAR ELIÉCER BATISTA, quien señala que él y el señor GARCÍA recogieron a SIMANCAS en el Restaurante 5 y 6 de Calle 11 y 12, Río Abajo y dieron una vuelta por la calle para hablar, pero que él no puso cuidado sobre el tema.
>
> Todos estos graves indicios son reforzados con la Nota N° 708-01746-DFA del 29 de junio de 1996 en donde el Jefe Nacional del Departamento de Fiscalización Aduanera informa al Director General de los pasos del operativo y del hecho que al solicitar a SIMANCA que enviara un mensaje vía beeper al señor CHANIS CEDEÑO fue el propio señor GARCÍA GARCÍA quien devolvió la llamada al señor SIMANCA DELGADO.
>
> Finalmente señalamos que el indagado ROGELIO ELOY GARCÍA GARCÍA, a pregunta formulada en su declaración: "diga el indagado si usted acepta la responsabilidad de los hechos y renuncia al término e la misma. -contestó: sí acepto la responsabilidad de los hechos, pero no había intención de infringir, ya que no tengo conocimiento en el trámite de mercancía".

Por su parte el apoderado judicial del señor ROGELIO ELOY GARCÍA GARCÍA, beneficiado con esta acción de habeas corpus, sostiene entre otras cosas lo siguiente:

> "El señor GARCÍA ha sido sindicado de la comisión de un delito que no tiene pena señalada de prisión y mucho menos mínima de dos años. Igualmente y tal como se desprende de las constancias del expediente, el señor GARCÍA no ha sido sorprendido en flagrante delito, ya que no se cumplen los presupuestos para ésto establecido en el artículo 2149 siguiente del Código Judicial.
>
> Insistimos que el Administrador Regional de aduanas, Zona Oriental no ha aplicado y mucho menos cumplido con las normas del Código Judicial antes citadas que en este caso son de forzoso e ineludible cumplimiento por parte del mencionado funcionario público.

Del examen verificado advierte el Tribunal, que la apertura del sumario tiene por fundamento el Acta de Proceso N° 0456 de 29 de junio de 1996, suscrita por funcionarios del Departamento de Fiscalización Aduanera, en donde se deja consignado, que ese día, siendo aproximadamente las 11:20 a. m., se procedió a detener el vehículo marca Mack, color blanco, con matrícula 661464, el cual contenía mercancía seca en general procedente de la Zona Libre de Colón, mercancía que iba a ser descargada en el depósito del Almacén SHARK.

El camión era conducido por MANUEL A. SIMANCAS D., quien presentó liquidación N° 3846626 de fecha 21 de mayo de 1996, perteneciente al GRUPO FUERTE (ALMACÉN SHARK); la cual no amparaba la mercancía que se encontraba dentro del camión, es decir, que no portaba documentación alguna que justificara su legal importación.

En el caso en estudio, el delito que se persigue es el de contrabando, por tanto, es importante transcribir el artículo 24 de la Ley 30 de 1984 que regula esta materia:

> "ARTÍCULO 24. Los responsables del contrabando o defraudación aduanera serán sancionados:

> 1) Con multa de (1) a cinco (5) veces el valor de la mercancía objeto del ilícito, siempre que su valor no exceda de Cien Mil Balboas.
> 2) Con multa de dos (2) a cinco (5) veces el valor de la mercancía objeto del ilícito si el valor de la mercancía excediese de los Cien Mil Balboboas, y además, prisión de uno (1) a (3) tres años, si fuere reincidente.
>
> PARÁGRAFO: Cuando el valor de la mercancía resulte inferior al valor de los impuestos de importación dejados de pagar, la multa se calculará en esos casos en base a los impuestos de importación.

Por su parte, el artículo 2148 del Código Judicial establece que:

> "ARTÍCULO 2148. Cuando se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de dos años de prisión, o cuando el autor o partícipe ha sido sorprendido en flagrante delito, se podrá decretar su detención preventiva previo cumplimiento de las formalidades previstas en este Código ..."

Hay que advertir que en esta materia la pena de prisión se aplica en casos de contrabando de mercancía con un valor superior a los CIEN MIL BALBOAS (B/.100.000.00). Con respecto a ello consta en los documentos aportados al proceso que el valor de la mercancía lo constituye un monto aproximado de B/.60,000.00 (Sesenta Mil Balboas con 00/100). Por otra parte, no existe constancia de que el señor **ROGELIO ELOY GARCÍA GARCÍA** sea reincidente en la comisión del delito de contrabando.

Es por ello que aunque el artículo 45 de la Ley 30 de 8 de noviembre de 1984 establece la detención preventiva para los sindicados en delitos aduaneros cuando exista plena prueba de este, o graves indicios de culpabilidad, hasta tanto se consigne fianza para obtener su libertad provisional, es evidente que el legislador no contempla la pena de prisión para los infractores de esta ley en el caso de que el valor de la mercancía, objeto del ilícito, no exceda de la suma de Cien Mil Balboas, limitándola únicamente a los casos de reincidencia, en los que sí cabe entonces la detención preventiva contemplada en el premencionado artículo 45.

Tal como consta en el expediente, la mercancía decomisada en este acto no excede la suma mencionada d Cien Mil Balboas, ya que fue valorada en una suma aproximada a los Sesenta Mil Balboas.

No debe pues, el señor **GARCÍA GARCÍA** permanecer detenido, máxime que en el evento de ser encontrado culpable del delito aduanero que se le imputa, no tendría, por ningún motivo que cumplir pena de prisión alguna. En todo caso, sólo podría ser multado con una cantidad que varía de uno a cinco veces el valor de la mercancía objeto del ilícito tal cual lo preceptúa el numeral primero del citado artículo 24 de la Ley 30 de 8 de noviembre de 1984.

Similar criterio ha sostenido esta Corporación de Justicia en sentencia de 17 de noviembre de 1994 en la que se señaló:

> "..., la pena de prisión se aplica, en tanto que agravante punitiva, únicamente 1 en los casos de contrabando de mercancía fuere reincidente. A los fines de traer luz sobre este asunto es útil señalar que en este caso concreto a la mercancía le fue asignado un valor C. I. F. de B/.9,4961.63 balboas (fs. 23-25) Carlos Eliécer Ayala, dueño de la carga y principal imputado, se refiere a la comisión de este delito afirmando que "era la primera vez", afirmación que no ha sido desvirtuada, todo lo cual excluye de manera categórica la posibilidad de que los inculpados pudieren resultar sancionados con pena de prisión o, a la luz de la interpretación manifestada en el salvamento de voto, ser objeto, precisamente, de la medida cautelar de naturaleza personal más grave, como lo es la detención preventiva."

De igual manera en fallo de 22 de enero de 1996 la Corte señaló:

> Para el caso en estudio la pena de prisión se aplica para los casos de contrabando de mercancía con un valor superior a los CIEN MIL BALBOAS (b/.100.000.00). Con respecto a ello, consta en los documentos aportados al proceso que el valor de la mercancía lo constituye la suma de TRECE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO BALBOAS CON VEINTE CENTÉSIMOS (b/.13.175.20). Por otra parte, no existe constancia de que el señor SIMANCA DELGADO sea reincidente en la comisión del delito de contrabando.

Por las razones expuestas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARA ILEGAL la detención preventiva del señor ROGELIO ELOY GARCÍA GARCÍA y ORDENA su inmediata libertad, de no existir otra causa penal en su contra.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE FLORA RAMONA HEREDIA CONTRA EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado GASTÓN G. GARRIDO en representación de **FLORA RAMONA HEREDIA**, interpuso Acción de Habeas Corpus contra el Director General de Migración, por considerar que la privación de libertad que sufre la prenombrada es ilegal.

En la demanda se expresa que la señora **FLORA RAMONA HEREDIA** se encuentra detenida desde el 12 de julio de 1996, al no portar al momento de su detención con los documentos válidos que acrediten su residencia legal en el país.

Al exponer el Licdo. GASTÓN G. GARRIDO los fundamentos de su recurso expresa:

> "A. FLORA HEREDIA GERMÁN, fue detenida el día 12 de julio de 1996, en el Corregimiento de Pueblo Nuevo, lugar donde labora como peluquera, el cual no se ajusta dicha detención para (sic) lo señalado por la Dirección Nacional de Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia.
>
> El cual por Resolución dictada del 15 de julio de 1996, con la denominación D. N. M. I. M. 45-94, quienes señalan que FLORA HEREDIA, debe ser deportada del país, no obstante, el artículo 21 de la Constitución Nacional señala que una persona no se le puede privar así de su libertad, obviamente se puede notar que dicho lugar donde fue arrestada no es lugar de prostitución, ya que en el Corregimiento de Pueblo Nuevo es una zona empresarial de alto y menor ingreso económico, tal y como peluquera en nuestro país y como se puede observar ingresó al país del (sic) 11 de abril de 1995, el cual siempre ha estado anuente a sus permisos migratorios ya que labora dentro del país".

Librado el mandamiento de Habeas Corpus en fecha de 19 julio de 1996, el Director Nacional de Migración y Naturalización procedió a rendir el informe de actuación el día 24 de julio de 1996, fecha en que fue recibido en la Secretaría General de la Corte Suprema, cuyo tenor es el siguiente:

> "a) Es cierto que ordenamos la detención de la señora FLORA RAMONA HEREDIA, de nacionalidad dominicana. la misma fue remitida a este Despacho por la Corregiduría de Pueblo Nuevo el día 13 de julio de 1996.
>
> b) Los motivos de hecho en que se fundamenta la detención de dicha ciudadana son:
>
> PRIMERO: Que, al momento de su detención dicha ciudadana no portaba documentos válidos que acreditarán su residencia legal en el país.
>
> Los motivos de derecho están fundamentados en los preceptos legales contenidos en el Decreto Ley N° 16 del 30 de junio de 1960, modificado por el Decreto Ley N° 13 del 20 de septiembre de 1995 y la Ley 6ª, del 5 de marzo de 1980, específicamente los Artículos 36, 65 y 85 ...
>
> c) La señora FLORA RAMONA HEREDIA de nacionalidad dominicana, se encuentra a nuestras órdenes para su deportación mediante Resolución N° 4594 del 15 de julio de 1996".

Según el actor la medida de privación de la libertad que sufre la señora **FLORA RAMONA HEREDIA** de nacionalidad dominicana es ilegal, al no existir orden de detención escrita que legalice la detención preventiva. Por su parte el Departamento de Naturalización y Migración sostiene que es legal dicha detención, ya que en sus archivos consta que la prenombrada señora no portaba con la documentación que acredite su residencia legal en el país.

Esta Superioridad procede a examinar los elementos y actuaciones que constan en el legajo contentivo de la investigación iniciada en torno a la detención de **FLORA RAMONA HEREDIA** a fin de determinar la legalidad o no de la misma.

Como es sabido la acción de habeas corpus tiene por objetivo determinar si se cumplieron las formalidades previstas en la ley para mantener la detención preventiva de una persona, so pena de nulidad si ha sido incumplida uno sola de las formalidades previstas en la ley.

El artículo 21 de la Constitución Nacional consagra el principio de legalidad de la detención, al disponer:

> "Nadie puede ser privado de su libertad, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, expedido de acuerdo con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley ...".

Por su parte el Director Nacional de Migración está facultado mediante los artículos 3, 58 y 62 del Decreto Ley 16 de 30 de junio de 1960, reformados por el Decreto Ley N° 13 de 20 septiembre de 1965 y la ley 6 de 5 de marzo de 1980, para mantener bajo sus órdenes para los fines de la ley a los extranjeros que se encuentren sin documentos válidos o por no tratarse de turistas bona fide, o por razones de seguridad, salubridad u orden público, como por otro lado, los artículos 36, 65 y 85, del precitado Decreto Ley N° 16 de 30 de junio de 1960, señalan específicamente lo siguiente:

> "ARTÍCULO 36: El Ministro de Gobierno y Justicia podrá negar la entrada al país o el tránsito por el mismo a cualquier extranjero, **así como expulsar del territorio nacional a cualquier extranjero que se encuentre residiendo en él, siempre que ello sea necesario o conveniente por razones de seguridad, de salubridad o de orden**

público."

"ARTÍCULO 65: Los extranjeros que hubieran llegado al país sin haber llenado los requisitos legales de ingreso **o que permanecieren en el mismo después de vencer sus visas de transeúntes, turismo, tránsito o visitante temporal, o sus tarjetas de turismo o de tránsito sin residencia autorizada, serán puestos a órdenes del Ministerio de Gobierno y Justicia** para ser deportados o para tomar, respecto de ellos, cualquier otra medida que sea de lugar.

El Ministerio de Gobierno y Justicia podrá cancelar los permisos definitivos, provisionales o de visitante temporal, así como los permisos o visas de transeúntes, turistas, visitantes temporales o de tránsito, cuando sus tenedores se encuentren en cualquiera de los casos contemplados en los artículos 36, 37 y 38 de este Decreto Ley. Estos extranjeros serán puestos a órdenes del Ministerio de Gobierno y Justicia para su deportación, salvo los casos en que ésta sea decretada por el Ministerio de Gobierno y Justicia, de acuerdo con el primer inciso de este artículo." (Énfasis nuestro).

"ARTÍCULO 85: El Director del Departamento de Migración decidirá y despachará en primera instancia, los asuntos relacionados con la migración en general".

No obstante, dicho articulado debe supeditarse a los preceptos constitucionales, por cuanto en nuestro país rige el principio de Supremacía de la Constitución, por ende, toda detención ordenada debe ajustarse obligatoriamente a la norma constitucional precitada.

En el presente caso, se aprecia que sí consta orden de detención expedida por el Director Nacional de Migración y Naturalización, dictada el día 23 de julio de 1996, contra la beneficiada con esta acción de habeas corpus, **FLORA RAMONA HEREDIA**, luego que la misma fuera puesta a sus órdenes por la Señora Corregidora de Pueblo Nuevo.

Sin embargo, debe advertir esta Máxima Autoridad de Justicia, que si bien es cierto existe orden de detención, la misma **fue dictada el día 23 de julio de 1996, 11 días después de estar detenida la señora FLORA RAMONA HEREDIA**, lo cual evidencia que la Dirección General de Migración, lleva un manejo poco organizado con relación a las detenciones de extranjeros con status migratorio ilegal. Debe la Corte hacer tal señalamiento por cuanto no es correcto que dicha Dirección esté realizando detenciones (para lo cual legalmente está acreditada) sin seguir una tramitación ordenada, secuencial y principalmente ajustada a nuestro ordenamiento constitucional.

Para dejar constancia de dichas irregularidades cometidas en el presente caso, considera necesario este Tribunal, hacer un desarrollo cronológico, y en forma sucinta, de cómo se ha llevado a cabo esta actuación:

a) 13 de julio de 1996, la Corregidora de Pueblo Nuevo pone a órdenes de Migración a la Señora **FLORA RAMONA HEREDIA.**
b) 15 de julio de 1996, se ordena la deportación de la prenombrada.
c) 17 de julio de 1996, se le notifica de la Resolución que ordena su deportación.
d) 18 de julio de 1996, la detenida interpone acción de habeas corpus mediante apoderado judicial, por cuanto no existía orden de detención en su contra.
e) 19 de julio se libra mandamiento de habeas corpus.
f) 23 de julio el Jefe de Investigación de Migración pone a órdenes del Director Nacional de Migración a la detenida.
g) 23 de julio, el Director Nacional de Migración, dicta orden de detención.
h) 24 de julio, El Director Nacional de Migración contesta el mandamiento.

Esto evidencia que al momento de realizarse la detención, y de mantenerse la misma, por espacio de 11 días, no existía orden de detención contra la señora **FLORA RAMONA HEREDIA**, motivo por el cual ella procede a interponer el presente

recurso de Habeas Corpus. Lo que sí procedió y de manera inmediata, a realizar la Dirección de Migración fue el dictamen de la orden de deportación, mediante Resolución N° 4594 de 15 de julio de 1996, la cual como ya ha sostenido esta Corporación de Justicia, no puede considerarse como una orden de detención, ya que de la lectura de dicha orden de detención no se establece en ninguna parte la detención preventiva de la prenombrada señora. La orden de detención debe ser expresa. No puede ser tácita ni deducirse de la orden de deportación, ya que tal interpretación sería contraria al artículo 21 de la Constitución Nacional. (Al respecto son consultables las sentencias de 19 de julio de 1996, 17 de julio de 1996, entre otras). **La orden de detención fue dictada muy tardíamente, tratándose de ser formalizada dicha detención.**

Esto evidencia que la detención que ha sufrido la señora **FLORA RAMONA HEREDIA** ha sido ilegal por cuanto no hubo mandamiento escrito debidamente motivado que justificara su detención y sí fue dictada de manera inmediata la orden de deportación. La medida cautelar de carácter personal que limite o restrinja la libertad ambulatoria debe estar debidamente sustentada. Así lo establecen las sentencias de 1° de julio de 1996 y de 3 de julio de 1996, entre otras.

De igual manera, en fallo de 26 de julio de 1996, sostuvo el Pleno, al resolver acción de habeas corpus a favor de los señores ZHENG XIAO FENG, ZHENG JINBIN, ZHENG FA Y ZHENG ALBIN, que la detención de los mismos era ilegal, por cuanto se encontraban detenidos por más de dos meses sin que existiera orden escrita que justificara su detención. Al respecto, sostuvo esta Corporación de Justicia:

> "Dicha omisión origina la violación del artículo 21 constitucional y 2568 del Código Judicial, siendo procedente en esta situación declarar ilegal la detención de los mismos, sin perjuicio de que el ingreso irregular al país de estas personas se trámite conforme a las leyes de migración y a las garantías fundamentales que la Constitución consagra".

No obstante, evidenciada pues la ilegalidad del status migratorio de **FLORA RAMONA HEREDIA**, tal cual se desprende de la **copia** del Registro de Filiación y Seguimiento del Extranjero de la Dirección Nacional de Migración y Naturalización que consta en el expediente, ya que la detenida ingresó al país el día 11 de abril de 1995, con visa de turista, la cual como establece la Legislación de Turismo y Migración es otorgada como válida por un período de 30 días prorrogables hasta 90 días, no es ilegal que la Dirección Nacional de Migración proceda a imponer y ejecutar la respectiva sanciónpor permanencia ilegal en el país, sea esta la deportación o cualquier otra que determine dicha Dirección.

En consecuencia la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la detención de la señora FLORA RAMONA HEREDIA y ORDENA su inmediata libertad, siempre que no medie otra causa penal en su contra.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ORLY ALEXIS BATISTA MONTES CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SEIS (6) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado NARCISO HERRERA GRAU, ha interpuesto acción de Habeas Corpus a favor de ORLY ALEXIS BATISTA MONTES contra el Director de la Policía Técnica Judicial.

Librado el mandamiento de Habeas Corpus, fue remitido por la autoridad acusada el informe de rigor, en que se expresa lo siguiente:

"Doctor
ELIGIO SALAS
Magistrado Ponente
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
E. S. D.

Honorable Señor Magistrado:

Respetuosamente me dirijo a Usted para dar contestación al Mandamiento de HABEAS CORPUS presentado a favor del señor ORLY ALEXIS BATISTA MONTES en contra del suscrito Señor Director General de la Policía Técnica Judicial.

De acuerdo a lo establecido mediante el Artículo 2582 del Código Judicial, me permito rendir el presente informe:

1. No es cierto que hemos ordenado la detención del señor ORLY ALEXIS BATISTA MONTES.
2. No tiene razón de ser en base al punto anterior.
3. No tenemos bajo custodia, ni a nuestras órdenes al prenombrado BATISTA MONTES.

De esta forma damos contestación a la providencia calendada 29 de julio del presente año emitida por esa Máxima Autoridad de Justicia.

Del Honorable Magistrado, con muestras de mi distinguida consideración.

Atentamente,

(fdo.) ALEJANDRO MONCADA
Director General"

Observa esta Corporación de Justicia que como quiera que de acuerdo al informe transcrito, el señor **ORLY ALEXIS BATISTA MONTES** no se encuentra detenido, pierde objeto la presente acción, por lo que se produce el fenómeno jurídico denominado **"Sustracción de Materia"**, por lo que procede el cese del proceso, en base a lo normado en el artículo 2572 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA EL CESE del procedimiento y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUAN REYES MARTÍNEZ GARRIDO CONTRA EL FISCAL NOVENO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SEIS (6) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTES SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado HORACIO RAMSEY MORALES ha interpuesto recurso de apelación contra la Resolución de 2 de julio de 1996 dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia por motivo de la acción de habeas corpus propuesta a favor de **JUAN REYES MARTÍNEZ GARRIDO** contra el Fiscal Noveno del Primer Circuito Judicial de Panamá.

La resolución apelada declaró LEGAL la detención preventiva de JUAN REYES MARTÍNEZ por encontrarlo vinculado con el delito de Robo calificado, cometido en perjuicio de ARTURO ANTONIO LEWIS.

La inconformidad del recurrente, con el fallo dictado por el Segundo Tribunal Superior, se debe a que dicha resolución se basa en supuestos indicios graves que relacionan a JUAN REYES MARTÍNEZ con el robo a mano armada del vehículo de ARTURO LEWIS, cuando éste último en ocasiones señaló que el primero no participó en el delito. Sostiene el apelante que se le otorgó fuerza de indicios graves a informes y testimonios contradictorios de miembros de la fuerza pública, cuando algunos de ellos sostuvieron en sus declaraciones ante la fiscalía que reconocieron a su defendido porque vieron su foto en su licencia de conducir que se encontraba en el vehículo robado, luego de ser recuperado. En tal sentido, expresa que no se tomó en cuenta que su mandante declaró haber sido víctima de un robo de sus documentos personales el día 21 de marzo, que el robo del vehículo ocurrió el 17 de marzo y fue recuperado el 22 de marzo. Por todo ello como indicó en el libelo de habeas corpus, considera el abogado apelante que no existen méritos suficientes o indicios graves para señalar a su defendido como uno de los autores del robo, considerando que en todo caso estaríamos en presencia del delito de Aprovechamiento de Cosa proveniente de un ilícito, cuya pena no conlleva prisión preventiva.

Para resolver, la Corte procede a examinar los antecedentes del caso, verificando que, en efecto, tal como lo relata el a-quo, las sumarias se originaron el 17 de marzo de 1996 por la denuncia interpuesta por ARTURO ANTONIO LEWIS por el hecho de haber sido despojado en forma violenta del automóvil que conducía, por dos sujetos armados, de los cuales sólo pudo ver a uno.

En la resolución de 28 de marzo de 1996 (fs. 43) dictada por la Fiscalía Auxiliar de la República, por la cual se decretó la detención preventiva de JUAN REYES MARTÍNEZ, se expresa que éste fue aprehendido al día siguiente de haber acontecido la persecución policial de que fue objeto el vehículo denunciado, ya que participó en el intercambio de disparos con los agentes del orden público, lo que constituye indicio grave en su contra. También se hace referencia al hecho de que el afectado retiró los cargos contra el detenido, pero que el delito no es de aquellos respecto a los cuales es posible desistir de la pretensión punitiva, según lo preceptúa el artículo 1984 del Código Judicial.

Posteriormente, el Fiscal Noveno del Circuito de Panamá asume el conocimiento de las sumarias y ordena practicar otras diligencias para el perfeccionamiento del sumario, manteniendo la detención preventiva del imputado, por tratarse del delito de hurto, que tiene pena mínima de prisión superior a dos años (fs. 60). Esta decisión la mantiene dicho funcionario al negar la solicitud de libertad provisional solicitada a favor de JUAN REYES MARTÍNEZ, según se observa de fojas 96 a 101 de los antecedentes, y destaca otra serie de evidencias contra el imputado, como los testimonios de los agentes sobre la persecución (fs. 72-73 y 77-79) y sobre el hecho de encontrar sus documentos personales en el interior del vehículo robado, respecto a lo cual el sindicado al rendir indagatoria refutó que durante ese tiempo se los habían robado, sin embargo nunca denunció ese hecho.

En vista de las circunstancias anotadas, el Segundo Tribunal Superior

expresó las siguientes consideraciones:

"II- ASPECTOS DE FONDO.

La conducta reprochable en este proceso consiste en el apoderamiento arbitrario de bien ajeno, utilizando arma de fuego y con la participación de dos personas para llevar a cabo el hecho punible, lo cual tipifica el delito de Robo Calificado, regulado en el artículo 186, ordinales 1° y 3° del Código Penal, modificado por el artículo 1 de la Ley 15 de 1993, cuya sanción oscila de 5 a 7 años de prisión.

El delito de robo es un hecho punible contra el patrimonio, perseguible de oficio, ésto significa que no está permitida la despenalización en estos casos, es decir, aún cuando la víctima manifieste deseo de retirar la denuncia, deben continuar las investigaciones, en especial cuando está comprobada la existencia y propiedad de la cosa objeto del delito como del hecho punible, conforme a lo previsto en los artículos 2073 y 2090, ordinal 81 del Código Judicial, tal como ocurre en el negocio bajo examen.

Dentro de otro contexto, tenemos que constan graves indicios de responsabilidad penal contra el señor JUAN REYES MARTÍNEZ GARRIDO, nos referimos a los testimonios de los miembros de la Policía que le aprehendieron y en el vehículo robado encontraron sus documentos personales.

La excusa presentada por el imputado JUAN REYES MARTÍNEZ GARRIDO, sobre las razones por las cuales no lo exime de responsabilidad, porque el hecho ocurrido el 17 de marzo de 1996 y el procesado dice que le robaron los documentos el 21 de marzo de 1996, es decir, 4 días después, además no presentó denuncia, eso significa que no está comprobada la excusa invocada.

Ante tales circunstancias, es incuestionable que han concurrido los presupuestos legales exigidos por el artículo 2159 del Código Judicial, para sustentar la medida cautelar personal de detención preventiva cuestionada, porque el proceso es conducido por autoridad competente; el delito imputado permite aplicar la detención preventiva; constan graves indicios de responsabilidad penal contra el imputado; se le está garantizando el debido proceso y la excusa invocada carece de asidero fáctico y jurídico."

A juicio de la Corte, el criterio sostenido por el a-quo es acertado ya que hasta el momento existen elementos probatorios que vinculan al favorecido con la acción de habeas corpus con el delito investigado, por lo que se cumplen las exigencias establecidas por los artículos 2148 y 2159 para mantener su detención preventiva.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución de 2 de julio de 1996 dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, en la acción de Habeas Corpus interpuesta a favor de JUAN REYES MARTÍNEZ GARRIDO contra el FISCAL NOVENO del PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOHNNY EREC RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, SEIS (6) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Al Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha ingresado la acción de habeas corpus preventivo interpuesta por el Licenciado LUIS CARLOS VALDÉS a favor de **JOHNNY EREC RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ** y contra el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

En su escrito de habeas corpus, el recurrente indica que su representado fue retenido en una ronda de profilaxis social en el sector de Curundú por miembros de la Policía Nacional que al no encontrar motivo para mantenerlo retenido lo dejaron en libertad; que posteriormente tiene conocimiento de que se giró una orden de detención preventiva contra la persona de **ERIC RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ** con cédula de identidad personal N° **8-261-47**, pero que quien ha sufrido "los embates de una persecución" ha sido **JOHNNY EREC RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ** con cédula **N° 8-261-42.** Sigue diciendo el recurrente que su defendido no fue jamás la persona que fue detenida por los agentes captores de la Policía Nacional, por tanto solicita que se dicte mandamiento de habeas corpus preventivo a favor de **JOHNNY EREC RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ,** "para que el mismo pueda presentarse al Ministerio Público a rendir declaración y hacer sus descargos."

Librado el respectivo mandamiento de habeas corpus, el funcionario acusado rindió su informe de conducta, visible de fojas 6 a 8 del cuadernillo:

> "**PRIMERO:** Este despacho ordenó la detención del señor **ERIC RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ced. 8-261-47.** Dicha detención fue emitida mediante Resolución de fecha 6 de marzo de 1996, ...
>
> **FUNDAMENTOS DE HECHO:**
>
> **PRIMERO:** Los hechos se dieron según lo señala el informe de novedad a foja tres (3) del sumario, el pasado cinco (5) de febrero cuando la ronda policial conformada por agentes de la Unidad de Control de Multitudes, visualizaron a un sujeto en actitud sospechosa, por lo que procedieron a su retención para la respectiva revisión, la cul (sic) no se pudo efectuar ya que el sujeto se dió a la fuga dejando caer un cartucho de plástico con el logo de "GAGO", conteniendo en su interior cinco (5) sobres de plásticos transparentes, que en su interior contenía una sustancia en forma de polvo color blanco la cual se presume sea Cocaína.
> ...
> **FUNDAMENTOS DE DERECHO:**
>
> **PRIMERO:** ... para la descripción física de las sustancias ilícitas y el peso de la misma, donde nos certificó que las muestras analizadas resultaron **POSITIVAS para la determinación de COCAÍNA, con un peso de 15.81 gramos. (Fs. 23-24).**
> ...
> Podemos señalar de que puso ser un error de las unidades policivas al redactar su informe o del mismo imputado con el objeto de que no fuese identificado, ya que los agentes captores señalan en su informe que el dueño de la sustancias ilícita se identificó como Eric Rodríguez Gutiérrez "alias" Jhonny con cédula N° 8-261-47, con residencia en Curundú Sector "S" casa 478, y el Licenciado Valdés señala que su cliente se llama **JOHNNY EREC RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, con cédula de identidad N° 8-261-42 con residencia en Curundú, Sector "S" casa 478, y que por ésta razón se trata de otra persona.**
>
> Al respecto, podemos ver de que se trata de la misma persona, ya que

ambas partes manifiestan que la persona reside en Curundú Sector "S" casa 478, sus apellidos coinciden es decir **"RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ"**, y en cuanto al número de cédula sólo difiere su último dígito, y con relación al nombre difiere de una vocal, es decir, los agentes lo señalan como Eric y el jurista como Erec. ...".

La acción de habeas corpus tal como viene normada **literalmente** en el artículo 23 de la Constitución Nacional describe al habeas corpus como una acción reparadora. Sin embargo, escudriñando el espíritu del artículo 23 de la Carta Magna, y con el objeto de ampliar las garantías fundamentales de los asociados, la jurisprudencia de la Corte ha permitido que la acción de habeas corpus no sólo sea ejercida como una medida reparadora -cuando la persona ya ha sido físicamente privada de su libertad corporal-, sino que dicha acción también puede ser ejercida como mecanismo preventivo para evitar que la detención se concretice. Es decir, la persona que tenga conocimiento, por cualquier medio, que en su contra se ha proferido una orden de detención puede interponer un recurso de habeas corpus preventivo. Es esto precisamente lo que ha ocurrido en el presente negocio, pues el licenciado LUIS CARLOS VALDÉS FADUL ha interpuesto un recurso de habeas corpus en favor de **JOHNNY EREC RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ** en momentos en que aún no se ha limitado físicamente su libertad corporal, y la orden de detención que se ha emitido, aunque con un error en el nombre resulta evidente que va dirigida en su contra.

La orden de detención contra la persona de **ERIC RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ** cumple con todos los requisitos para ser considerada legal ya que el delito que se investiga tiene señalada pena mínima de dos (2) años, y es evidente que se trata de la misma persona, **JOHNNY EREC RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ** y **ERIC RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ**, quien fuera detenido en posesión de la sustancia ilícita, pues su propio defensor reconoce que fue "retenido" por miembros de la Policía cuando hacían una ronda, pero que por no encontrar razón para detenerlo fue dejado libre, lo cual no aparece comprobado en las sumarias.

Aunque la orden de detención adolece de un simple error en el nombre completo del sindicado, todas las constancias del proceso apuntan a que **JOHNNY EREC RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ** proporcionó datos en parte reales y en parte falsos para evitar su completa identificación, de otro modo, ¿cómo pudo enterarse que se había ordenado una detención contra un tal ERIC RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ? Resulta absurdo pensar que siendo dos personas diferentes, viven en el mismo sector, en la misma casa, tienen los mismos apellidos y casi el mismo número de cédula, y no se trata de la misma persona.

Resulta claro que el funcionario instructor incurrió en un error involuntario fácilmente subsanable y que por tanto no afecta el fondo del asunto.

Por todo lo anterior, resulta conducente declarar legal la detención del recurrente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la Repúlica y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención de JOHNNY EREC RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ó ERIC RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, con cédula 8-261-42.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARMEN MORÁN DE ROSAS EN CONTRA DEL DIRECTOR

DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor WILMER ROSAS ATENCIO, actuando en representación de CARMEN MARISOL MORAN DE ROSAS, ha interpuesto recurso de habeas corpus en contra del Director Nacional de Migración y Naturalización.

Librado el mandamiento de habeas corpus contra el Director Nacional de Migración, dicho funcionario contestó mediante la Nota N° DNMYN-230-96 de 15 de julio de 1996, lo siguiente:

"a) Es cierto que ordenamos la detención de la señora CARMEN MORAN DE ROSAS, de nacionalidad dominicana. Dicha detención se efectuó durante el operativo conjunto realizado entre la Policía Nacional del Área A, San Felipe y la Dirección Nacional de Migración, el día 7 de junio de 1996.

b) Los motivos de hecho en que se fundamenta la detención de dicha ciudadana son:

PRIMERO: Que, el día 7 de junio la ciudadana CARMEN MARISOL MORAN DE ROSAS, de nacionalidad dominicana, fue detenida en el operativo conjunto efectuado entre la Policía Nacional del Área A, San Felipe y la Dirección Nacional de Migración, dentro del Bar Colón.

SEGUNDO: Que, si bien es cierto que al momento de su detención dicha ciudadana portaba un Permiso Provisional de Permanencia en calidad de Casada con panameño, es más cierto aún, que de acuerdo a nuestra ley migratoria, la inmigración al país de extranjeros que se dediquen a este tipo de actividades está totalmente prohibida.

Los motivos de derecho están fundamentados en los preceptos legales contenidos en el Decreto Ley N° 13 de 20 de septiembre de 1965 y la Ley 6ª, del 5 de marzo de 1980, específicamente los Artículos 36, 37 literal a), y 65, que al tenor establecen lo siguiente:

ARTÍCULO 36: El Ministerio de Gobierno y Justicia podrá negar la entrada al país o el tránsito por el mismo a cualquier extranjero que se encuentre residiendo en él, siempre que ello sea necesario o conveniente por razones de seguridad, salubridad o de orden público.

ARTÍCULO 37: Queda prohibida la inmigración al país de los extranjeros que se encuentren en cualquiera de las condiciones que se pasan a enumerar:

a) Las mujeres que se dediquen a la prostitución; los que trafiquen con la prostitución o con estupefacientes y las personas de conducta inmoral;

ARTÍCULO 38: El matrimonio de extranjero o extranjera con nacional panameño no otorga de por sí derecho a la residencia en la República de Panamá. El Ministerio de Gobierno y Justicia podrá por razones de salubridad, moralidad, seguridad pública, economía nacional o necesidad social, negar la entrada o la permanencia en el país, a los extranjeros casados con nacional panameño.

ARTÍCULO 65: Los extranjeros que hubieren llegado al país sin haber llenado los requisitos legales de ingreso o que permanecieren en el mismo después de vencer sus visas de transeúntes, turismo, tránsito o visitante temporal, o sus tarjetas de turismo o de tránsito sin residencia autorizada, serán puestos a órdenes del Ministerio de Gobierno y Justicia para ser deportados o para tomar, respecto de

ellos, cualquier otra medida que sea de lugar. El Ministerio de Gobierno y Justicia podrá cancelar los permisos definitivos, provisionales o de visitante temporal, así como los permisos o visas de transeúntes se encuentren en cualquiera de los casos contemplados en los Artículos 36, 37 y 38 de este Decreto Ley. Estos extranjeros serán puestos a órdenes del Ministerio de Gobierno y Justicia para su deportación, salvo los casos en que ésta sea decretada por el Ministerio de Gobierno y Justicia de acuerdo con primer inciso de este Artículo.

c) La señora CARMEN MORÁN DE ROSAS, de nacionalidad dominicana, se encuentra a nuestras órdenes en espera de ser deportada del territorio nacional mediante Resolución N° 4158 del 2 de julio de 1996."

Por su parte, el señor Wilmer Rosas Atencio afirma en su escrito, que la ciudadana dominicana CARMEN M. MORAN DE ROSAS, que es su esposa, fue aprehendida por Inspectores de Migración en los alrededores de Calle 12 (Santa Ana) a las 8:30 de la noche, en el preciso momento en que se encontraba esperándolo en un lugar de acceso libre al público. A ello añade, que al momento de su detención portaba su respectivo carné de Migración vigente, puesto que mediante la Resolución N° 0198 de 16 de enero de 1996, se le concedió visa de inmigrante, con el permiso provisional de permanencia (un año) N° 413, en calidad de casada con panameño, la que ha sido CANCELADA mediante las resoluciones 3504 de 18 de junio de 1996 y 4158 de 2 julio de 1996, ambas expedidas por el Director Nacional de Migración y Naturalización. Finalmente, estima que el informe de Comisión de la Sección de Investigaciones de Migración, en ningún momento ha podido establecer que su esposa estuviese ejerciendo la prostitución clandestina, por lo que se le han violado los Principios Fundamentales que consagra la Carta Magna, como el de presunción de inocencia, **indubio pro reo** y la libertad de tránsito.

Observa el Pleno, que como consecuencia de los operativos efectuados, el Director Nacional de Migración expide la Resolución N° DNMYN 3504 de 18 de junio de 1996 y la Resolución N° DNMYN 4158 de 2 de julio de 1996 que confirma la anterior, cuyas copias aparecen a fojas 1 y 2 del expediente. En dichas resoluciones, se resuelve cancelar la condición de residencia de la señora CARMEN MARISOL MORÁN DE ROSAS, por estar ejerciendo la prostitución. Dicho funcionario fundamenta la Resolución N° DNMYN 3504 de 18 de junio de 1996 en lo dispuesto en los artículos 36, 37, 60, 65 y 66 del Decreto Ley N° 16 de 30 de junio de 1960. El párrafo II del artículo 65 del decreto en mención, autoriza al Ministerio de Gobierno y Justicia a cancelar los permisos definitivos, provisionales o de visitante temporal, así como los permisos o visas de transeúntes, turistas, visitantes temporales o de tránsito cuando sus tenedores se encuentren en cualquiera de los casos contemplados en los artículos que antes citamos.

No obstante lo anterior, se observa que el funcionario demandado afirma en el punto segundo del informe de conducta citado, que la señora CARMEN MORÁN DE ROSAS, de nacionalidad dominicana, portaba un Permiso Provisional de Permanencia en calidad de casada con panameño, lo que indica, a juicio del Pleno, que al momento de ser detenida dicha señora estaba legalmente en el país.

En razón de lo antes anotado, se pone de manifiesto que la detención de la señora CARMEN MORÁN DE ROSAS es ilegal toda vez que no se han configurado los presupuestos legales en que se fundamenta la resolución que cancela definitivamente la condición de residencia de dicha señora y que ordena su deportación.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ILEGAL la detención de CARMEN MARISOL MORÁN DE ROSAS ordenada por el Director Nacional de Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia, y ORDENA su inmediata libertad si no existe orden de detención en su contra por otra causa.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FERNANDO MARTH SALDAÑA CONTRA LA DIRECTORA NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Fernando Marth Saldaña, actuando en su propio nombre y representación interpuso recurso de habeas corpus a su favor y contra la Dirección Nacional de Corrección.

El recurrente solicitó que se le conceda libertad condicional en virtud de lo estipulado en los artículos 80 y 85 del Código Penal ya que según afirma ha cumplido dos terceras partes de su condena.

El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante Resolución de 8 de julio de 1996 (fs. 8 a 9), se abstuvo de conocer de la acción de habeas corpus promovida por el señor Fernando Marth Saldaña, en su propio nombre y contra la Directora Nacional de Corrección y ordenó remitir el negocio ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, previa la siguiente consideración:

> "Como quiera que la acción de habeas corpus está interpuesta en contra de una autoridad con mando a nivel nacional como es la Directora del Departamento Nacional de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia, y por ende esta superioridad no es competente para decidir la acción interpuesta en su contra, sino que tal competencia es del Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia y en ese sentido, lo que procede jurídicamente es inhibirse de tramitar y decidir la acción de habeas corpus que nos ocupa y remitir los a esa alta Corporación de justicia ..."

Acogido el presente recurso de habeas corpus, se libró el mandamiento correspondiente contra el Director Nacional de Corrección. La licenciada Rosa E. Cárdenas V., Directora interina de esta institución, mediante la nota 2556-DNC de 16 de julio de 1996, rindió oportunamente el informe de conducta requerido, en los siguientes términos:

> "A. En ningún momento la suscrita ha ordenado la detención del señor FERNANDO MARTH SALDAÑA, ni verbalmente, ni por escrito.
>
> B. No podemos hacer referencia a motivos o fundamentos de hecho o de derecho de la detención, porque no la hemos ordenado.
>
> C. El recurrente, señor FERNANDO MARTH SALDAÑA con cédula de identidad personal N° 4-227-23, se encuentra guardando detención en la cárcel de Puerto Armuelles, a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección, debido a la sentencia N° 44 de 23 de mayo de 1994, proferida por el Juzgado Sexto del Circuito Judicial de la Provincia de Chiriquí, el cual le condenó a la pena de veinte (20) meses de prisión y se le reemplazó por la conversión a 50 días-multas, como no cumplió con la medida antes mencionada se dejó sin efecto el reemplazo de la pena y ordenó a cumplir la totalidad de la supracitada condena, mediante Auto N° 267 de 4 de abril de 1995, del Juzgado en mención." (Foja 13).

El informe rendido por la Dirección Nacional de corrección del Ministerio

de Gobierno y Justicia, pone de manifiesto que el señor Fernando Marth Saldaña fue condenado a 20 meses de prisión mediante sentencia N° 44 de 23 de mayo de 1994, dictada por el Juzgado Sexto del Circuito Judicial de la Provincia de Chiriquí. Además señala que en este caso se procedió a reemplazar la pena de prisión a 50 días-multa, pero el imputado no cumplió con esta medida por lo que se dejó sin efecto y se ordenó el cumplimiento de la totalidad de la pena.

Adicionalmente, a foja 5 del expediente reposa un Informe Secretarial fechado 8 de julio de 1996, emitido por la secretaria interina del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, en el cual consta que, el señor Fernando Marth Saldaña actualmente está cumpliendo pena en la Cárcel de Puerto Armuelles, desde el 15 de abril de 1994 sindicado por el delito de hurto en perjuicio de Inés Quijano de Torres. Señala que toda esta información ha sido confirmada por el Capitán Vernaza del centro penitenciario del distrito de Barú.

De lo expuesto hasta el momento, se desprende que Fernando Marth Saldaña está cumpliendo pena de prisión órdenes de la Dirección Nacional de Corrección, que le fue impuesta por sentencia ejecutoriada y por lo tanto su detención es legal.

La acción de habeas corpus está destinada a preservar la libertad ambulatoria de los ciudadanos, contra cualquier orden de detención que no reúna las exigencias que la Constitución y la Ley señalan, sin embargo mediante esta acción la parte actora pretende obtener el beneficio de la libertad condicional, por haber cumplido las dos terceras partes de la condena.

Existen dos normas de nuestro ordenamiento jurídico que rigen esta materia, que para mayor claridad, se transcriben a continuación.

El artículo 85 del Código Penal establece lo siguiente:

> "ARTÍCULO 85. El sancionado con pena de prisión que haya cumplido dos tercios de su condena con índices de readaptación, buena conducta y cumplimiento de los reglamentos carcelarios, podrá obtener la libertad condicional".

El artículo 179 de la Constitución Nacional preceptúa:

> "ARTÍCULO 179. Son atribuciones que ejerce el Presidente de la República con la participación del Ministro respectivo:
> ...
> 12. Decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos de los delitos comunes."

El artículo 85 del Código Penal consagra el derecho del condenado a obtener la libertad condicional, sujeto a la satisfacción de varios requisitos, que consisten en haber cumplido con los dos tercios de la pena y la comprobación hecha por el Departamento de Corrección debidamente acreditada por el director del centro penitenciario o del Consejo Técnico, de que el internamiento se cumplió con un adecuado índice de readaptación, buena conducta y acatamiento de los reglamentos carcelarios.

La norma constitucional transcrita se refiere a las atribuciones que ejerce el Presidente de la República con la participación del Ministro respectivo, entre las cuales está la de conceder libertad condicional a los reos de los delitos comunes. Esta norma no contempla condicionamiento alguno al ejercicio de la atribución presidencial, por lo que el reconocimiento del beneficio depende exclusivamente del cumplimiento de los requisitos previstos en la norma citada del Código Penal.

De lo anteriormente expuesto, se desprende que no basta el mero transcurso del tiempo exigido por las normas para obtener la libertad condicional, sino que es imprescindible que se den los otros requisitos ya mencionados. Además esta libertad la otorga exclusivamente el Órgano Ejecutivo según lo preceptuado en nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto esta Corporación de Justicia no está facultada para resolver la pretensión del recurrente.

De consiguiente, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la orden de detención interpuesta por el señor Fernando Marth Saldaña.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUPERTINO TORRES ATENCIO EN CONTRA DE LA JUEZ DÉCIMO QUINTA DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, OCHO (8) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Lcdo. Miguel Deen ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia expedida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial el 15 de julio de 1996, mediante la cual se declara legal la detención preventiva de la cual es objeto el señor LUPERTINO TORRES ATENCIO.

El Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial estima que existe la concurrencia de un concurso material delictivo, toda vez que se deduce como elementos o presupuestos de la acción, la participación de varias personas en asociación para dedicarse a la comisión de hurto de vehículos y lograr la inscripción fraudulenta en los registros municipales, por tanto, se trata de asociación ilícita para delinquir, hurto de vehículos, forzando, rompiendo o destruyendo obstáculos establecidos para proteger la persona o la propiedad y falsificación de documentos públicos, pues, para su registro es necesario incorporar a esos documentos, hechos que no son ciertos por lo que reviste características del delito denominado en la doctrina "Falsedad Ideológica".

El Lcdo. Deen sustenta su apelación en los siguientes términos:

"ILEGALIDAD DE LA DETENCIÓN

La sentencia apelada en sus motivaciones sostiene que en el proceso sub-judice al imputado se le vincula con el delito de falsedad de documentos y que ese hecho punible está sancionado con pena mínima no inferior de dos años de prisión y permite a la detención preventiva.

A este respecto cabe apuntar que el artículo 2159 del Código Judicial establece como presupuestos de la orden de detención preventiva, los siguientes elementos:

1. El hecho imputado
2. Los elementos probatorios allegados para la comprobación del hecho punible, y
3. Los elementos probatorios que figuran en el proceso contra la persona cuya detención se ordena."

En el proceso bajo examen no existe elemento probatorio alguno que pueda sustentar la detención preventiva del LUPERTINO TORRES ATENCIO por delito de Falsedad de Documentos. La medida cautelar personal que se impugna a través de la presente acción de habeas corpus fue decretada en primer lugar por la Fiscalía Auxiliar de la República a través de la diligencia que se consulta de fojas 60

a 62 y en la que el agente de instrucción resuelve:

> "1. Decretar la aplicación de la medida cautelar personal de detención preventiva al sindicado LUPERTINO TORRES VÁSQUEZ (sic) (a) "Junier", por su gravísima vinculación con el delito de hurto que denunciara JOAQUÍN JOSÉ MÉNDEZ POLANCO.
>
> Por otra parte, la Fiscalía Octava del Primer Circuito Judicial que finalmente tuvo a su cargo la instrucción del sumario, en diligencia que se consulta a fojas 117 **mantiene la detención preventiva de LUPERTINO TORRES ATENCIO** por delito contra el patrimonio. Y mas aún, en el acto conclusivo de la fase de investigación, al emitir la Vista Fiscal N° 219 de 31 de mayo de 1996 consultable a fojas 241 y s.s. la Fiscal Octava sostiene: "Es por lo antes expuesto que la suscrita fiscal recomienda que al momento de valorar el mérito legal de la presente encuesta de ley, lo haga dictando un auto de llamamiento a juicio en contra del prenombrado LUPERTINO TORRES ATENCIO por presunto infractor de las normas penales consagrada en el Título IV, Capítulo I del Libro II del Código Penal.
>
> De igual manera solicitamos que se compulsen copias a la esfera correspondiente a fin de que sea investigado CHUENG CHEE HO, por presunto infractor de las normas penales consagradas en el Título XI, Capítulo V del Libro II del Código Penal.
> ...
> No es cierto, como lo afirma el Segundo Tribunal Superior que en el proceso bajo examen existen elementos que vinculen a LUPERTINO TORRES ATENCIO con el delito de Falsedad de Documentos y que sustentan su detención preventiva pues, como queda expuesto, la posible comisión de un hecho punible en tal sentido no ha sido objeto de la instrucción del sumario de marras al punto que, la propia agencia de instrucción solicita que se compulsen copias para que, en la esfera correspondiente, se inicie la investigación respectiva."

Se trata de un proceso iniciado a raíz de la denuncia interpuesta por el ciudadano JOAQUÍN JOSÉ MÉNDEZ POLANCO por el hurto de su vehículo marca Mitsubishi Montero, Placa N° 100592, color Verde Arena, con N° de Chasis DONV44ONJOO752 y motor N° EE8831, año 92, Sedan con teléfono interno y cuyo valor oscila en B/.30,000.00. Dicho vehículo fue hurtado, según consta en autos, en las instalaciones del Club Unión.

Una vez efectuado el estudio de las sumarias, el Pleno de esta Corporación de Justicia coincide con los criterios expuestos por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dado que, efectivamente, existen fuertes indicios que vinculan al señor LUPERTINO TORRES VÁSQUEZ (A) JUNIER con los hechos que se le imputan. Lo anterior es así, por un lado, pues constan las declaraciones juradas de José Dolores Castillo Mendieta, dueño del Taller Casticeli y la de su hija, Cinthya Noemí Castillo Atencio quienes afirman que un sujeto apodado "Junier" que conducía un vehículo taxi, marca Toyota Tercel de color verde y con una placa que dice "Necio" fue la persona que llevó a revisar tanto el vehículo que fue objeto de la denuncia, como otros vehículos bastante nuevos entre los meses de marzo a noviembre de 1995. Vale destacar que los declarantes afirman que el sujeto apodado "Junier" llevó al taller Casticeli alrededor de diecinueve (19) carros sin placa, con las respectivas tarjetas de traspaso y el recibo de inscripción en el Municipio (Ver fojas 14-15 y 48-49). Por otro lado, también constan los informes de seguimiento y posterior ratificación de los Agentes de la Sección de Hurto de Autos y Accesorios que "Junier" es el alias que corresponde al sindicado LUPERTINO TORRES ATENCIO quien manejaba el vehículo que funcionaba como taxi antes descrito, en horas de la mañana y parte de la tarde. Igualmente, pesa en su contra el informe de allanamiento suscrito por el Inspector I Hermelo Altamiranda y los Detectives Hipólito Cedeño y Raúl Rodríguez, en el cual se observa fueron encontradas en la residencia del señor LUPERTINO TORRES ATENCIO evidencia que lo vincula fuertemente con los hechos que se le imputan, aunado a que también consta que para el provecho final de los

actos ilícitos en referencia, fueron falsificados documentos públicos. (Ver de foja 17 a 26 y de foja 36 a 37 de las sumarias).

Ante tales circunstancias, el Pleno estima, prima facie, que si bien es cierto el delito de hurto de automóvil previsto en el artículo 183 numeral 4 del Código Penal, contempla antes de la entrada en vigencia de la Ley 53 de 1995 una pena mínima inferior a dos años, no es menos cierto que existen fuertes evidencias que presumiblemente subsumen la conducta del señor LUPERTINO TORRES ATENCIO en los tipos penales previstos en los artículos 265 y 266 del Código Penal relativos a la falsificación de documentos públicos, cuya pena oscila entre 3 a 6 años de prisión y que permiten aplicar la medida cautelar personal de detención preventiva.

Finalmente, en cuanto a los argumentos alegados por la parte actora y que sustentan el recurso de apelación interpuesto, el Pleno reitera que la esfera de conocimiento de este tribunal al conocer de una acción de habeas corpus, encuentra sus límites en la prohibición para valorar aspectos de fondo, tales como si el detenido es culpable o no o si hubo dolo o culpa al momento de los hechos como en este caso se pretende.

En virtud de lo antes anotado, el Pleno concluye que en la detención preventiva del señor LUPERTINO TORRES ATENCIO, no se ha infringido el debido proceso establecido en la Constitución Nacional y en las leyes de la República, ni tampoco las normas que regulan la detención preventiva que fue ordenada por autoridad competente, razón por la cual lo procedente es, pues, confirmar la decisión del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor LUPERTINO TORRES ATENCIO y dispone que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes de la autoridad competente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JACQUELINE FABIÁN EN CONTRA DEL DIRECTOR DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, OCHO (8) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado ISMAEL RODRÍGUEZ E., ha promovido acción de habeas corpus en favor de la ciudadana dominicana JACQUELINE FABIÁN contra el Director Nacional del Departamento Nacional de Migración y Naturalización.

Repartida y acogida la presente acción, se solicitó del funcionario demandado el informe respectivo, el cual en su parte medular expresa lo siguiente:

"...
Procedemos a rendir nuestro informe sobre los puntos requeridos en los siguientes términos:

a) Es cierto que ordenamos la detención de la señora JACQUELINE FABIÁN, de nacionalidad dominicana. La misma fue remitida a este Despacho por la Corregiduría de San Felipe, el día 30 de junio de

1996.

b) Los motivos de hecho en que se basa la aprehensión de dicha ciudadana son:

PRIMERO: Que, el día 30 de junio de 1996, la ciudadana JACQUELINE FABIÁN, fue detenida y remitida a este Despacho por la Corregiduría de San Felipe.

SEGUNDO: Que, al momento de su detención dicha ciudadana no portaba documentos válidos que acreditaran su residencia legal en el país.

Los motivos de derecho están fundamentados en los preceptos legales contenidos en el Decreto Ley N° 16 del 30 de junio de 1960, modificado por el Decreto Ley N° 13 del 20 de septiembre de 1995 y la Ley 6ª, del 5 marzo de 1980, específicamente los Artículos 36, 65 y 85, que al tenor establecen lo siguiente:

ARTÍCULO 36: El Ministro de Gobierno y Justicia podrá negar la entrada al país o el tránsito por el mismo a cualquier extranjero que se encuentre residiendo en él, siempre que ello sea necesario o conveniente por razones de seguridad, salubridad o de orden público.

ARTÍCULO 65: Los extranjeros que hubieren llegado al país sin haber llenado los requisitos legales de ingreso o que permanecieren en el mismo después de vencer sus visas de transeúntes, turismo o de tránsito, o visitante temporal, o sus tarjetas de turismo o de tránsito sin residencia autorizada, serán puestos a órdenes del Ministerio de Gobierno y Justicia para ser deportados o para tomar, respecto de ellos cualquier otra medida que sea de lugar.

El Ministerio de Gobierno y Justicia podrá cancelar los permisos definitivos, provisionales o de visitante temporal, así como los permisos o visas de transeúntes, turistas, visitantes temporales o de tránsito cuando sus tenedores se encuentren en cualquiera de los casos contemplados en los Artículos 36, 37 y 38 de este Decreto Ley. Estos extranjeros serán puestos a órdenes del Ministerio de Gobierno y Justicia, de acuerdo con el primer inciso de este Artículo.

ARTÍCULO 85: El Director del Departamento de Migración decidirá y despachará en primera instancia, los asuntos relacionados con la migración en general.

c) La señora JACQUELINE FABIÁN de nacionalidad dominicana, se encuentra a nuestras órdenes para su deportación mediante Resolución N° 4138 del 1° de julio de 1996.

Por el imperio de la Ley, ponemos a órdenes de la Suprema Corte a la ciudadana JACQUELINE FABIÁN de nacionalidad dominicana.

Atentamente,

(Fdo.)
LICDO. GERMÁN G. SÁNCHEZ T.
DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN
Y NATURALIZACIÓN".

De la transcripción del informe se deduce que el elemento fundamental, que utilizó el funcionario acusado para ordenar la detención de la señora FABIÁN, es la indocumentación de la misma.

La señora JACQUELINE FABIÁN, fue detenida y puesta a órdenes del Director Nacional de Migración y Naturalización, el 30 de junio de 1996. Al día siguiente (1° de julio de 1996), se dictó la Resolución N° DNMyN 4138, mediante la cual resuelve DEPORTAR del territorio nacional a la ciudadana JACQUELINE FABIÁN.

No obstante lo anterior, el Pleno observa que no existe dentro del expediente remitido por el Departamento de Migración, copia de una orden de detención por escrito, que se debió hacer a la Señora JACQUELINE FABIÁN. La Corte Suprema en recientes fallos ha establecido que, aunque el director de Migración esté legalmente facultado para realizar detenciones, a personas que no se encuentren legalmente autorizados para estar en el país, las mismas deben realizarse por escrito, y facilitárselas al detenido si así lo requiriese éste.

En fallo del 12 de julio de 1996, esta Corporación de Justicia se pronunció al respecto en los siguientes términos:

> "... No discute el Pleno que el DIRECTOR GENERAL DE MIGRACIÓN tenga facultades para detener a extranjeros dentro del territorio nacional en los casos previstos por el ordenamiento jurídico migratorio aplicable, no obstante que este Pleno, en reiteradas ocasiones ha señalado la ilegalidad de tales órdenes en la medida en que no se profieran por escrito ni se faciliten al detenido, si así lo requiriese. Reitera nuevamente el Pleno, que el ejercicio de la facultad de realizar detenciones por parte del DIRECTOR DE MIGRACIÓN está sujeto al respeto de los derechos fundamentales de los detenidos, señalados singularmente por el artículo 21 de la Constitución Política, por lo que, de mediar detenciones con infracción del referido derecho fundamental o sin el cumplimiento de los procedimientos correspondientes, es decir, sin la expedición de una orden de la detención escrita que debe ser entregada al detenido, si éste la requiriese, dichas detenciones carecen de sustento en el ordenamiento jurídico y constituyen, por lo tanto, actos ilegales, y así debe declararlo este Pleno. ..."
>
> (FALLO DE 12 DE JULIO DE 1996, DEL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA).

Como es claramente visible, el Pleno de la Corte Suprema, ha reiterado la necesidad de la expedición de la orden de detención escrita, para que así pueda proceder la detención en forma legal, hacerlo de forma contraria a la establecida por la ley, generará la ilegalidad de la detención, aunque estas personas, en efecto, no posean los documentos que acrediten su residencia legal en el país.

Por todo lo antes expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ILEGAL la detención de la señora JACQUELINE FABIÁN, por lo que ORDENA su inmediata libertad, de no existir otra causa penal en su contra.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE VLADIMIR QUINTANA BONILLA CONTRA EL DIRECTOR DE MIGRACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, OCHO (8) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado HORACIO RAMSEY MORALES, promovió acción de habeas corpus en favor de VLADIMIRO QUINTANA BONILLA, quien se encuentra detenido a órdenes del Departamento Nacional de Migración y Naturalización. En esa solicitud manifiesta

el licenciado RAMSEY MORALES que la detención no tiene fundamento legal ya que, según él, la Ley de Migración, en su artículo 22, contempla que todo extranjero que fuere encontrado sin documentos válidos que acrediten su ingreso, residencia o permanencia en el país, el Director de Migración deberá concederle un máximo de treinta (30) días para que puedan regular su status jurídico, lo cual no se ha cumplido en el caso de su cliente.

Librado el mandamiento, el funcionario demandado informa a esta Corporación que efectivamente el día 25 de junio de 1996, el ciudadano VLADIMIRO QUINTANA BONILLA, fue detenido y remitido a ese Despacho por la Policía Metropolitana del Área A, San Felipe. En cuanto a los motivos de la detención, sostiene el funcionario, que los mismos se dieron por no encontrarse el señor VLADIMIRO QUINTANA, debidamente documentado.

El 2 de julio de 1996, se dicta Resolución N° 4169, mediante la cual se ordena la deportación de QUINTANA BONILLA, siendo ésta, confirmada en todas sus partes, por la Resolución N° 4625, de 16 de julio de 1996.

Después de una atenta lectura del expediente enviado a esta Corporación, el Pleno advierte, que no consta en el mismo, orden de detención escrita contra el señor VLADIMIRO QUINTANA BONILLA, lo cual, como ya ha dicho el Pleno de la Corte, es necesario para que proceda la legalidad de la detención.

La Corte Suprema de Justicia en reiterados fallos ha manifestado que es necesario que la orden de detención se haga por escrito; el no hacerlo, viola los principios fundamentales que consagran nuestra constitución y la ley, tal como lo señala el reciente fallo del 12 de julio de 1996, y que al respecto expone:

> "... No discute el Pleno que el DIRECTOR GENERAL DE MIGRACIÓN tenga facultades para detener a extranjeros dentro del territorio nacional en los casos previstos por el ordenamiento jurídico migratorio aplicable, no obstante que este Pleno, en reiteradas ocasiones ha señalado la ilegalidad de tales órdenes en la medida en que no se profieran por escrito ni se faciliten al detenido, si así lo requiriese. Reitera nuevamente el Pleno, que el ejercicio de la facultad de realizar detenciones por parte del DIRECTOR DE MIGRACIÓN está sujeto al respeto de los derechos fundamentales de los detenidos, señalados singularmente por el artículo 21 de la Constitución Política, por lo que, de mediar detenciones con infracción del referido derecho fundamental o sin el cumplimiento de los procedimientos correspondientes, es decir, sin la expedición de una orden de la detención escrita que debe ser entregada al detenido, si éste la requiriese, dichas detenciones carecen de sustento en el ordenamiento jurídico y constituyen, por lo tanto, actos ilegales, y así debe declararlo este Pleno. ..."
>
> (FALLO DE 12 DE JULIO DE 1996, DEL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA).

De lo anterior se desprende claramente que, aunque el Director de Migración, tiene facultad para ordenar la detención de personas extranjeras que se encuentran sin los documentos legales correspondientes, la misma debe realizarse por escrito, y darle copia al detenido, si así lo requiriese. En el presente caso no se ha cumplido con tal disposición legal, por lo que este Pleno, no puede más que declarar ilegal la detención del señor VLADIMIRO QUINTANA BONILLA, por las razones antes expresadas.

Este Pleno debe de llamar de manera enérgica la atención a la Dirección de Migración, en el sentido de abandonar la práctica, contraria al artículo 21 de la Constitución de detener a personas indocumentadas con fines de deportación, sin ponerles de manifiesto en el acto de la detención o dentro de un término perentorio después de la misma, la respectiva orden, debidamente fundamentada, de su detención.

Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ILEGAL la detención de

VLADIMIRO QUINTANA BONILLA y ORDENA su inmediata libertad, si no existe otra causa penal en su contra.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE REX JANSEN ROBERTS, EN CONTRA EL JUEZ TERCERO DEL CIRCUITO DE COLÓN, RAMO PENAL, MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante oficio N° 2504-S de 19 de julio de 1996, ingresó a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, en grado de apelación, el expediente que contiene la acción de Habeas Corpus presentada por el Dr. Renato Pereira a favor del señor **REX JANSEN ROBERTS**, contra el Juzgado Tercero del Circuito de Colón, al cual se adjuntan cuatro tomos que comprenden el expediente principal, con un total de 1436 folios.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia al fallar la acción de Habeas Corpus en primera instancia, señala que el análisis de la actuación demuestra que no se registra ilegalidad en la detención del accionante porque se mantienen algunos elementos incriminatorios como es el hecho de que "era la persona que tenía guardado el sello frío Barwill III en una caja fuerte situada dentro de su oficina, cuya custodia bajo estricta seguridad le había sido confiada y pese a que alega que muchos empleados le vieron cuando abría dicha caja y que las llaves de la misma estaban al alcance de todos, ello constituye un indicio que lleva a ubicarle como posible partícipe del ilícito" y como uno de los cargos imputados era el de hurto con fractura, que tiene pena mínima superior a dos años, su detención es legal.

Por su parte, el abogado que representa al detenido Hansen Roberts, al sustentar la apelación sostiene que en el presente caso no se dan las dos condiciones indispensables para adoptar una medida cautelar personal de la gravedad de la privación de libertad, como son: el "fumus boni iuris" que no sólo exige la comprobación de la existencia del hecho punible, sino también elementos de convicción suficientes que vinculen el comportamiento del imputado al ilícito investigado, en cualquier categoría de autoría o participación. Como consecuencia, estima que se ha violado el artículo 2147-A del Código Judicial.

Se refiere el recurrente a la versión dada por los testigos en el sentido de corroborar lo afirmado por el señor Hansen Roberts en cuanto al acceso que tenían otras personas a las llaves de la caja fuerte en la que se guardaba el sello frío, pero además se han incorporado documentos que demuestran que ese tipo de sellos pueden ser fabricados en Panamá. Alude el apelante también a las declaraciones de Dania Argelis Norris De Reid (fs. 72-74) y Erick Javier Robinson Santamaría (fs. 75-78), quienes mencionan a Jorge Bustos como uno de los empleados de la empresa Barwill, quien había llevado a su casa el sello de goma y el sello frío falsificados y había falsificado la firma de uno de los empleados con el fin de ayudar a los clientes.

CONSIDERACIONES DEL PLENO

En el presente caso se han presentado tres acciones de Habeas Corpus. La primera de ellas ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia, basada en que en

este caso se daba el principio de inmunidad consular, dada la prerrogativa funcional del Cónsul Honorario del Reino de Suecia, al tenor de los convenios internacionales, razón por la cual se le otorgó la libertad. Posteriormente, el Fiscal a cargo de la fase instructoria del proceso penal a que dio lugar el hurto de un contenedor de la empresa Marlex, con mercancía marca Panasonic valorada en B/.186,000.00, advirtió que habían elementos de juicio para investigar conjuntamente los delitos de falsificación de documentos, asociación ilícita y corrupción de servidores públicos, por lo que el 8 de febrero de 1996 (fs. 31-42), ordenó nuevamente la detención del accionante. Ello dio lugar a una demanda de Habeas Corpus ante el Segundo Tribunal Superior, pero en ese lapso el expediente fue solicitado por la Procuraduría General de la Nación y se declinó el caso ante esta Corporación Judicial. Al momento en que circulaba un proyecto de sentencia, el abogado defensor del Cónsul Honorario de Suecia, desistió del mismo, de manera tal que se acogió el desistimiento y se ordenó el cese del procedimiento y el consecuente archivo del caso.

La acción de Habeas Corpus que ahora se analiza, se apoya en otros elementos que aparecen en el expediente y que obligan a determinar si, en efecto, se registran los presupuestos que la Ley y la doctrina establecen para la adopción de las medidas cautelares personales.

Según Coral Arangüena Fanego, son presupuestos de las medidas cautelares, tanto en el ámbito civil como en el penal, el "fumus boni Iuris" y el "periculum in mora", que consisten en la razonable atribución a una persona determinada de la comisión de un hecho punible. Literalmente se podría afirmar que es la apariencia de buen derecho, sujeto a un juicio de probabilidad y verosimilitud. El periculum in mora se refiere al riesgo de un daño marginal ulterior, derivado de la lentitud del proceso o de la infructuosidad del resultado.

En el caso de la medida cautelar personal de privación provisional de libertad, Cafferata Nores sostiene que su adopción tiene como propósito "asegurar los fines del proceso, se caracterizan por su instrumentalidad, provisionalidad y revocabilidad, pero al afectar directamente la libertad personal y a quien goza de la presunción de inocencia, reconocida como garantía constitucional, su imposición sólo puede darse cuando sea necesaria, proporcionada a los peligros que se tratan de eludir y aplicada restrictivamente" (Cfr. "Medidas de coerción en el proceso penal" Córdoba, 1983, p. 27).

En diferentes resoluciones expedidas por la Fiscalía Tercera del Circuito de Colón, calendadas el 17 de noviembre de 1995 (fs. 550-556), 29 de noviembre de 1995 (fs. 663-674), 8 de febrero de 1996 (fs. 799-811), 28 de marzo de 1996 (fs. 909-911), 11 de abril de 1996 (fs. 984- 989) y en la Vista N° 178 de 28 de junio de 1996 (fs. 1429-1433), se afirma que los elementos probatorios que vinculan a Rex Hansen Roberts a los delitos de hurto, asociación ilícita, falsedad documental y corrupción de servidores públicos, emanan de su condición de Gerente de la empresa Barwill Agencies, S. A. de 1991 hasta el 3 de mayo de 1995 (el hurto del contenedor ocurrió el 5 de mayo de 1995) y de acuerdo con el funcionario de instrucción "para la tramitación de documentos referentes a la llegada de un contenedor procedente del extranjero una de las personas que formaba parte del reducido grupo que tenía esa responsabilidad, era precisamente Rex Jansen. Como parte de ese pequeño grupo, tenía conocimiento de la llegada de un determinado contenedor, de la manera de tramitar todos los documentos, qué sellos estampar, qué correcciones y anotaciones hacer, para que se retiraran del Puerto de Cristóbal sin dificultad alguna" (Cfr. Tomo II, pág. 551 552). Además consideró el hecho que el sello frío de la empresa estaba bajo la custodia del Cónsul Honorario de Suecia y era la persona que podía usar dicho sello.

Respecto a la detención de una persona, rigen los artículos 2147-A, 2148 y 2159 del Código Judicial. La primera norma enfatiza el requerimiento del presupuesto de toda medida cautelar, esto es,"el fumus boni iuris",al señalar lo siguiente:

> **"ARTÍCULO 2147-A.** La libertad personal del imputado sólo podrá ser limitada mediante la aplicación, por el Juez o por el funcionario de instrucción, de las medidas cautelares previstas en esta sección.

> Nadie será sometido a medidas cautelares si no existen graves indicios de responsabilidad en su contra. Tampoco podrán ser aplicadas si concurrieren causas de justificación, eximentes de punibilidad o causas de extinción del delito o de la pena que pudiere serle impuesta".

Obsérvese que en el segundo párrafo se insiste en la comprobación de "graves indicios de responsabilidad" contra el imputado.

> **"ARTÍCULO 2148.** Cuando se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de dos años de prisión, o cuando el autor o partícipe ha sido sorprendido en flagrante delito, se podrá decretar su detención preventiva previo cumplimiento de las formalidades previstas en este Código.
>
> En ningún caso podrá decretarse detención preventiva cuando se proceda por delitos contra el honor".

El segundo artículo citado determina como otro presupuesto ineludible para la adopción de una medida cautelar personal, el quántum del mínimo del intervalo penal señalado para el delito que motiva la investigación de que se trate.

El tercer artículo mencionado, reza así:

> **"ARTÍCULO 2159.** En todo caso la detención preventiva deberá ser decretada por medio de diligencias so pena de nulidad en la cual el funcionario de instrucción expresará:
>
> 1. El hecho imputado;
>
> 2. Los elementos probatorios allegados para la comprobación del hecho punible; y
> 3. Los elementos probatorios que figuran en el proceso contra la persona cuya detención se ordena".

Según el texto transcrito, en desarrollo de los principios garantistas del artículo 21 constitucional, se requiere que en la resolución o diligencia que ordena la privación de libertad de una persona, como medida cautelar, tres elementos:

a) La identificación del hecho punible que dio origen a la investigación;
b) La enumeración de los medios de convicción con idoneidad probatoria para acreditar el delito; y
c) La base probatoria que sustenta la vinculación causal de la conducta realizada por el sindicado con el hecho punible motivo de la instrucción.

En el curso de la instrucción del sumario, extendida por 13 meses y el cual se encuentra en fase intermedia de calificación por el Tribunal jurisdiccional competente, aparecen debidamente cumplidos los dos primeros requerimientos normativos citados, pero en relación con el tercero, contenido en el numeral 3 del artículo 2159, en autos consta que como autor material del hurto, de falsedad documental y de corrupción de funcionarios no hay prueba fehaciente vinculante, salvo indicios, que se han debilitado con testimonios y documentos posteriores que señalan la posibilidad de fabricación de sellos fríos en Panamá, el acceso a la combinación y a las llaves de la caja fuerte donde se guardaba el sello frío por otras personas y el antecedente de uso de documentación falsificada por empleados de la empresa naviera Barwill Agencies, S. A., con el propósito de ayudar a los clientes.

Según Asencio Mellado, en su obra "La Prisión Provisional", las finalidades de esta medida cautelar son: evitar la frustración del proceso evitando la fuga del reo, asegurar el éxito de la instrucción y evitar la ocultación de futuros medios de prueba, evitar la reiteración delictiva del imputado y satisfacer las demandas sociales de seguridad (Cfr. ob. cit. Edit. Civitas, 1987, pág. 32).

De conformidad a la realidad procesal al momento en que se tramita este medio de impugnación, sin perjuicio de la calificación y valoración del sumario que haga el juzgador en la audiencia preliminar, el Pleno estima que los indicios que fundamentaban la medida cautelar personal contra el señor Rex Jansen Roberts se han debilitado con elementos probatorios incorporados con posterioridad, por lo que no cabe el mantenimiento de esta medida cautelar personal.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA el fallo de 10 de julio de 1996 emitido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia en este caso, DECLARA ILEGAL la detención de REX JANSEN ROBERTS, la sustituye por las medidas cautelares personales previstas en los literales a) y b) del artículo 2147-B y ORDENA SU INMEDIATA LIBERTAD si no existe otra causa penal en su contra.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE SANTA METZ, CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Antonio Méndez interpone recurso de habeas corpus a favor de **SANTA METZ**, ciudadana dominicana con pasaporte N° 1008098 y contra el **DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN**, licenciado Germán G. Sánchez T.

FUNDAMENTO DE LA DEMANDA

El señor Carlos Antonio Méndez solicita se revoque las resoluciones emitidas por el Director de Migración y que al emitir concepto se ordene la libertad de la señora Santa Metz. Las razones de hecho en que fundamenta el recurso son las siguientes:

> "PRIMERO: En horas de la tarde del día viernes siete (7) de junio de 1996, la Sección de Investigaciones de Migración, realiza un operativo tendiente a la aprehensión de personas extranjeras indocumentadas o de mal vivir.
>
> SEGUNDO: La señora SANTA METZ, para la fecha arriba indicada, fue aprehendida por inspectores de Migración aproximadamente a las 4:30 p. m., en un lugar de libre acceso al público, toda vez que su captura fue en acera o entrada del almacén el Machetazo, ubicado en Calidonia, lo que demuestra que la señora Metz no estaba realizando ninguna conducta o acto de tipo ilícito.
>
> TERCERO: El informe de comisión, de la sección de Investigación de Migración, es la mejor defensa de la señora SANTA METZ, por tanto que establece, que la única responsabilidad en su contra, lo es el no portar documentación legal en el territorio Nacional.
>
> CUARTO: A la prenombrada le ha sido a la fecha imposible legalizar

su status migratorio, por razones estrictamente económicas, pues apenas gana lo necesario para sufragar sus necesidades básicas, realizando labores domésticas, de vendedora ambulante y en ocasiones ha recibido apoyo económico de paisanos dominicanos.

QUINTO: Nos parece que la labor que viene realizando el Departamento de Migración, a fin de depurar la prostitución clandestina, u otros delitos comunes que puedan cometer los extranjeros, es loable y altruista, sin embargo somos del criterio, que la medida de Deportación adoptada en el caso específico de SANTA METZ, debe ser evaluada considerablemente, la prenombrada es una persona honrada, responsable y trabajadora, cuyo único delito, y por falta de recursos económicos, en el peor de los casos, quizás lo ha sido el no portar su documentación migratoria legalmente, por lo que, debe brindársele el beneficio que recoge el artículo 58 del Decreto Ley N° 16 de 1960 (Ley Migratoria), es decir el término de treinta (30) días para que legalice su status migratorio".

Por otra parte, señala que no obstante que la Resolución N° 3312 de 13 de junio de 1996, emitida por el Departamento de Migración, ordena la deportación de señora SANTA METZ, la misma se mantiene detenida desde el 7 de junio a la fecha, en el Centro Femenino de Rehabilitación, sin existir orden escrita de autoridad competente que ordene su detención preventiva. Invoca así, como razones de derecho los artículos 21, 22 y 23 de la Constitución Nacional. Además de indicar, que el no portar documentos migratorios legales es una falta de carácter administrativo, cuya sanción no conlleva la detención preventiva (fs. 3-7).

SUSTANCIACIÓN

El licenciado Germán G. Sánchez T., Director Nacional de Migración y Naturalización contesta el libramiento de habeas corpus, en los términos siguientes:

"a) Es cierto que ordenamos la detención de la señora SANTA METZ, de nacionalidad dominicana. Dicha detención se efectúo durante el operativo conjunto realizado entre la policía Nacional del Área A., San Felipe y la Dirección Nacional de Migración, el día 7 de junio de 1996. Los motivos de hecho en que se fundamenta la detención de dicha ciudadana son:

PRIMERO: Que, el día 7 de junio la ciudadana SANTA METZ, fue detenida en el operativo conjunto efectuado entre la Policía Nacional del Área A., San Felipe y la Dirección Nacional de Migración, en las inmediaciones del Almacén El Machetazo, de Calidonia.

SEGUNDO: Que, al momento de su detención dicha ciudadana no portaba documentos válidos que acreditaran su residencia legal en el país. Los motivos de derecho están fundamentados en los preceptos legales contenidos en el Decreto Ley N° 16 del 30 de junio de 1960, modificado por el Decreto Ley N° 13 del 20 de septiembre de 1965 y la Ley 6ª, del 5 de marzo de 1980, específicamente los artículos 36, 65 y 85, que al tenor establecen lo siguiente:

ARTÍCULO 36: El Ministro de Gobierno y Justicia podrá negar la entrada al país o el tránsito por el mismo a cualquier extranjero, así como expulsar del territorio nacional a cualquier extranjero que se encuentre residiendo en él, siempre que ello sea necesario o conveniente por razones de seguridad, de salubridad o de orden público.

ARTÍCULO 65: Los extranjeros que hubiesen llegado al país sin haber llenado los requisitos legales de ingreso o que permanecieren en el mismo después de vencer sus visas de transeúntes, turismo, tránsito o visitante temporal, o sus tarjetas de turismo o de tránsito sin residencia autorizada, serán puestos a órdenes del Ministerio de

Gobierno y Justicia para ser deportados o para tomar, respecto de ellos, cualquier otra medida que sea de lugar.

El Ministerio de Gobierno y Justicia podrá cancelar los permisos definitivos, provisionales o de visitante temporal, así como los permisos o visas de transeúntes, turistas, visitantes o de tránsito, cuando sus tenedores se encuentren en cualquiera de los casos contemplados en los artículos 36, 37 y 38 de este Decreto Ley. Estos extranjeros serán puestos a órdenes del Ministerio de Gobierno y Justicia para su deportación, salvo los casos en que ésta sea decretada por el Ministro de Gobierno y Justicia, de acuerdo con el primer inciso de este artículo.

ARTÍCULO 85: El Director del departamento de Migración decidirá y despachará en primera instancia, los asuntos relacionados con la migración en general.

c) La señora SANTA METZ de nacionalidad dominicana, se encuentra a nuestras órdenes para su deportación, mediante Resolución N° 3312 del 13 de junio de 1996. Por imperio de la Ley, ponemos a órdenes de la Suprema Corte a la ciudadana SANTA METZ, de nacionalidad dominicana" (fs. 10-11).

CONSIDERACIONES DEL PLENO

Cotejado lo expuesto con las constancias procesales advierte el Pleno lo siguiente:

Si bien es cierto, que la señora METZ no ha cometido delito alguno, desde que ingresó al país el 9 de noviembre de 1994, no ha tramitado su documentación migratoria; infringiendo de esa manera, las normas nacionales a ese respecto.

Consta además la resolución de fecha 13 de junio de 1996 en donde la autoridad demandada, en uso de las facultades que le confiere el Decreto Ley N° 16 del 30 de junio de 1960, ordena deportar a la señora Metz (fs. 14-15). Dicha resolución al ser impugnada mediante recurso de reconsideración presentado a través de su abogado, fue confirmada el 3 de julio (f. 17-18).

Se colige así, que la señora METZ está a órdenes de funcionario competente y que si bien no existe en los antecedentes remitidos escrito que ordene su privación de libertad, ésta es el resultado de un operativo realizado por la Dirección Nacional de Migración de manera conjunta con la Policía Nacional, el Ministerio de Salud y la Junta Comunal, llevada a cabo en el Corregimiento de Calidonia y San Felipe, que tenía como objetivo perseguido por la Dirección de Migración detectar y detener a los extranjeros indocumentados.

De manera, que como se observa que la prenombrada durante dos años que ha permanecido en nuestro país, no se ha acercado a las autoridades con el propósito de tramitar la documentación sobre su calidad migratoria. Como quiera que la acción de habeas corpus ha sido presentada con posterioridad a la resolución que mantuvo la orden de deportación, cabe deducir que la misma se dirige a esa orden conforme al numeral 5° del artículo 2566 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención de la ciudadana dominicana SANTA METZ.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (Con Salvamento de Voto)
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO EDGARDO MOLINO MOLA

Este salvamento de voto es muy sencillo. No existe orden de detención. La propia Resolución que declara legal la detención la reconoce cuando expresa: "no existe en los antecedentes remitidos escrito que ordene su privación de libertad, éste es el resultado de un operativo realizado por la Dirección Nacional de Migración de manera conjunta con la Policía Nacional, el Ministerio de Salud y la Junta Comunal, llevada a cabo en el Corregimiento de Calidonia y San Felipe, que tenía como objetivo perseguido por la Dirección de Migración detectar y detener a los extranjeros indocumentados". A pesar de este reconocimiento, de faltar la orden escrita, se declaró legal la detención, por esta razón me aparto de la decisión de la mayoría, ya que en mi opinión la detención sin orden escrita es una violación flagrante del artículo 21 de la Constitución Nacional.

Fecha ut Supra.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS ERNESTO MOSQUERA Y JAIRO JACOB ORTEGA POVEDA, CONTRA EL FISCAL SEGUNDO DE CIRCUITO DE SAN MIGUELITO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado a esta Corporación el expediente contentivo de la acción de habeas corpus promovida a favor de **CARLOS ERNESTO MOSQUERA y JAIRO JACOB ORTEGA POVEDA**, contra el **FISCAL SEGUNDO DEL CIRCUITO DE SAN MIGUELITO**.

La sentencia apelada declaró legal la detención de los accionantes, fundamentada en el hecho de que el automóvil denunciado como hurtado fue localizado en la barriada La Verbena de la ciudad de Colón, el cual fue abandonado junto a dos vehículos cuya investigación se hizo en otro proceso, una vez se formó una balacera por un allanamiento simulado para cometer delito contra la propiedad en la casa B-36 de ese lugar. Tanto Ortega Poveda como Mosquera fueron sorprendidos por agentes de la Policía Nacional cuando en compañía de otros sujetos se dieron a la fuga y después fueron capturados tras un extenso operativo policial.

El abogado defensor al oponerse a la resolución del a-quo señala que contra sus representados no existen elementos probatorios graves que los vinculen al hurto de los automóviles denunciados como hurtados y que en relación con el hurto calificado cometido en la residencia de Francisco Garcés Arrocha, en el expediente consta que se dio el desistimiento de la pretensión punitiva por el afectado, quien fue indemnizado por el daño causado, razón por la cual no cabe mencionar este hecho. Insiste la defensa que contra Carlos Ernesto Mosquera y Jairo Ortega sólo existen los informes policivos sobre su captura, los cuales son contradictorios.

Si bien es cierto, que de conformidad con los antecedentes remitidos por la autoridad demandada, contra los accionantes sólo existe el cargo de hurto de un Toyota Tercel alquilado por el señor Jesús Santana Cano a la empresa Budget Rent a Car, la ley penal en esta materia, de conformidad a la última reforma señala pena mínima superior a dos años, lo que obedece a una política criminal dirigida a controlar y detectar el hurto de automóviles que es un mal criminógeno endémico de la región.

En las copias remitidas como antecedentes aparecen documentos que se prestan a confusión, ya que las Fiscalías Primera y Novena decretaron la libertad de los sindicados en dos procesos que se adelantaron por separado con motivo del hurto de los otros dos automóviles que encontraron en la barriada La Verbena de Colón. La orden de detención que se cuestiona emana de la Fiscalía Auxiliar y de la Fiscalía Segunda de Circuito, siendo la última posterior a las fechas de las notas que se leen a fojas 8 y 9 de este cuaderno.

En autos consta la existencia del delito de hurto y hay elementos probatorios que así lo acreditan. En relación con la vinculación causal del comportamiento de los sindicados, sólo existen indicios de presencia en el lugar, lejano a sus respectivas residencias, el hecho de haberse dado a la fuga y ser capturados en el monte después de registrado el allanamiento simulado antes mencionado. En la etapa de la fase instructoria en que se encuentra el caso, los elementos de juicio incorporados al expediente permiten constatar el cumplimiento de los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, de allí que el Pleno considere que son jurídicos y acorde a la realidad procesal tanto la motivación como la parte resolutiva del fallo recurrido.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el fallo apelado.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS ALCIDES GUERRERO CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor **CARLOS ALCIDES GUERRERO GONZÁLEZ** presentó escrito dirigido a la Corte Suprema de Justicia, que puede considerarse como una acción de Habeas Corpus, la cual está encaminada contra el Fiscal Especial en Delitos relacionados con Drogas, licenciado ROSENDO MIRANDA, por considerar que la detención que sufre, es ilegal.

En el escrito expresa que se encuentra a órdenes de la "Fiscalía de Droga" (sic) y que está siendo procesado por el genérico delito de Posesión Ilícita de Droga, del cual se considera confeso.

Librado el mandamiento en fecha de 16 de julio de los corrientes, el funcionario demandado, rindió el informe de actuación al día siguiente en los términos que a continuación transcribimos:

> "A. Si, es cierto que este Despacho ordenó la detención del señor CARLOS ALCIDES GUERRERO GONZÁLEZ, mediante resolución calendada siete (7) de mayo de mil novecientos noventa y seis (1996).
>
> B. FUNDAMENTOS DE HECHO:
>
> Los hechos se inician el día cuatro (4) de mayo del año que decurre, cuando agentes de la Policía Nacional, del SUB-DIIP del Área "A", San Felipe, visualizan a la altura de la Casa de Piedra, en la

> escalera, a un sujeto en actitud sospechosa, procediendo a identificarse como Policía y le solicitan sus documentos de identidad personal, al proceder al registro de rigor, le solicitan al sujeto que sacara lo que tenía en el bolsillo trasero derecho, sacando del mismo una cartera color crema con flores de color chocolate, dentro de la cual mantenía veinticinco (25) carrizos plásticos transparentes que en su interior contienen cada uno, una sustancia blanca que se presume sea droga".

Esta Superioridad procede en primer término al estudio de los elementos que constan en el cuadernillo contentivo de la instrucción sumarial iniciada contra **CARLOS ALCIDES GUERRERO GONZÁLEZ.**

Consta a fojas 36-40 del sumario la Declaración Jurada, rendida por el Cabo 2° OMAR GONZÁLEZ, quien afirma y ratifica el informe de novedad, fechado 4 de mayo de 1996, agregando que fue él quien realizó el registro al señor **GUERRERO** y le encontró la sustancia ilícita motivo de su detención. A la sustancia incautada al señor **CARLOS ALCIDES GUERRERO GONZÁLEZ**, se le realiza además el respectivo análisis por parte del Laboratorio Técnico Especializado, de la Policía Técnica Judicial, el cual arroja un resultado positivo para la presencia de COCAÍNA, en un peso de 2.00 gramos.

Efectivamente, del expediente enviado por la Fiscalía Auxiliar se desprende que el mismo se inicia con el informe de novedad rendido por la **POLICÍA NACIONAL, SUB-D. I. I. P. ÁREA "A", SAN FELIPE,** fechado 4 de mayo de 1996, y suscrito por el Cabo 2° 10993 OMAR GONZÁLEZ, en el cual hace constar que le incautó al señor **CARLOS ALCIDES GUERRERO GONZÁLEZ** veinticinco (25) carrizos plásticos contentivos de una sustancia blanca que en ese momento se presumió fuera COCAÍNA.

Del informe de novedad (f. 2 del expediente) rendido por la Policía Nacional SUBS. I. I. P. ÁREA "A", San Felipe, se desprende claramente que la sustancia incautada era blanca, a la que posteriormente se le practicó la prueba de campo correspondiente, la cual arrojó resultados positivos para el reactivo que determina la droga conocida como COCAÍNA. (F. 6 el expediente). Sin embargo, es indudable que la sustancia incautada representa una porción mínima que no es indicadora de un destino comercial y la misma no sobrepasa la cuantía superior a la dosis posológica personal.

La droga incautada a pesar de la forma en que fue hallada, por la poca cantidad, da margen a suponer que estaba destinada para su consumo, cuya penalidad mínima es inferior a dos años de prisión.

Considera la Corte además que no hay evidencias graves de que dicha droga fuera ser utilizada para el tráfico de la misma, considerando que se puede subsumir este caso dentro del párrafo del artículo 260 del Código Penal como posesión simple, que tiene una pena de prisión de 1 a 3 años.

En estas circunstancias resulta pertinente invocar el texto legal del artículo 2148 del Código Judicial que ha dispuesto que la medida cautelar personal de detención preventiva sólo procede en aquellos casos en que el delito investigado tiene pena mínima de prisión de dos años, y en el caso sub-júdice la pena mínima no es mayor de dos años, lo que evidencia que el supuesto delito no excede la punibilidad mínima asignada en la ley.

Por las anteriores consideraciones, se evidencia que la detención decretada contra el señor **CARLOS ALCIDES GUERRERO GONZÁLEZ**, no se ajusta a la legitimidad formal que debe revestir la medida preventiva, y así procede a declararlo esta Superioridad.

En vista de las consideraciones anteriores, como la pena mínima no excede de dos años es procedente considerar ilegal la detención.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ILEGAL la detención de señor CARLOS ALCIDES GUERRERO GONZÁLEZ, y ORDENA su inmediata libertad si no tiene otra

causa penal en contra.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ISABEL EDITH RODRÍGUEZ MACÍAS EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada Asunción Alonso de Montalvo ha interpuesto ante esta Corporación de Justicia acción de habeas corpus, a favor de Isabel Edith Rodríguez Macías y contra el señor Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Manifiesta la parte actora que Isabel Edith Rodríguez Macías fue detenida preventivamente el 23 de mayo de 1996, en calle 17 Barraza, por la supuesta comisión de delito contra la salud pública. Señala también, que en la declaración indagatoria su representada declaró que la droga a ella incautada era de su propiedad y para su consumo.

La defensora de oficio afirma que, si bien es cierto que la cantidad de sustancia ilícita incautada era de 1.74 gramos de cocaína (crack) la cual sobrepasa la medida posológica establecida por el Instituto de Medicina Legal, a su juicio, no existen evidencias en el sumario que determinen que Isabel Edith Rodríguez Macías pretendiese vender o traspasar dicha droga, lo que indica que el delito cometido por su representada es el de posesión ilícita de drogas cuya penalidad no conlleva detención preventiva.

Dictado el mandamiento de habeas corpus correspondiente se solicitó un informe al señor Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, quien lo rindió en los siguientes términos:

> "A. La orden de detención de la ciudadana ISABEL EDITH RODRÍGUEZ MACÍAS, fue decretada mediante providencia razonada de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, de fecha veintisiete (27) de mayo de 1996. (Fs. 17-18).
>
> B. Los fundamentos de hecho para ordenar la detención preventiva de ISABEL RODRÍGUEZ, se reflejan en que el día 23 de mayo de 1996, siendo las 2:15 horas, agentes de la policía de recorrido por Calle 17 Barraza, visualizaron a una ciudadana en actitud sospechosa, razón por la cual procedieron a solicitarle su cédula identidad personal. Al momento de la ciudadana abrir su cartera, el agente Vargas visualizó dentro de la misma un envoltorio de papel plateado, el cual al ser abierto contenía cierta cantidad de sustancias sólidas color crema, la cual se presumía fuera droga (piedra).
>
> Al momento de rendir declaración indagatoria, la ciudadana manifestó que sufre de esquizofrenia y consume drogas desde hace cuatro a cinco meses, cuando está deprimida. Además señaló que había comprado siete balboas en drogas, la cual se la habían entregado envuelto en papel de aluminio. A fojas 24-25 del dossier se observa el análisis

practicado por el Laboratorio Especializado de la Policía Técnica Judicial, donde describe la evidencia como veintinueve (29) fragmentos de sustancia compacta color crema, para la determinación de COCAÍNA (CRACK), en la cantidad de 1.74 gramos.

El fundamento de derecho para ordenar la detención preventiva de la señora ISABEL EDIHT RODRÍGUEZ MACÍAS, se encuentra consagrado en los Artículos 2148 y 2159 del código judicial.

C. La señora ISABEL EDITH RODRÍGUEZ MACÍAS, se encuentra recluida en el Centro Femenino de Rehabilitación, a órdenes de este Despacho mediante Oficio N° 4911-96, del 28 de mayo de 1996, quien a partir de este momento es puesto a disposición de ese Augusto Tribunal mediante el oficio N° 7786 de 29 de julio de 1996."

A foja 1 del sumario reposa un informe fechado 23 de mayo de 1996, el cual se refiere a la detención de Isabel Edith Rodríguez Macías en los predios de Calle 17 de Barraza, por los agentes de la Policía Bernal Ovalle y Vergara del Área de San Felipe. Además se informa que, al momento de la detención, Isabel E. Rodríguez Macías estaba en actitud sospechosa por lo que procedieron a solicitarle su cédula de identidad personal, cuando los agentes de policía notaron dentro de su cartera un envoltorio de papel plateado el cual en su interior contenía una cantidad de sustancia sólida que se presumió era droga (crack) y luego fue trasladada al puesto de policía de Barraza para someterla a una revisión minuciosa, encontrándole dentro de la cartera un collar con un dije. Adicionalmente señala la agente de Gracia que la ciudadana portaba cinco sortijas, una pulsera y un par de argollas con dijes todos de metal amarillo.

El funcionario instructor, mediante Providencia del 27 de septiembre de 1996, ordenó la indagatoria de Isabel Edith Rodríguez Macías, diligencia en la que la imputada manifiesta que la droga a ella incautada era de su propiedad y para su consumo. Mediante providencia de la misma fecha dicho funcionario ordenó la detención preventiva de la ciudadana por estar vinculada al delito contra la Salud Pública. (Fs. 9-18).

A foja 25 del sumario se lee el Dictamen Pericial del Laboratorio Técnico Especializado en Drogas del Departamento de Criminalística de la Policía Técnica Judicial, en el cual consta que la sustancia incautada es **cocaína (crack)** con un peso de 1.74 gramos.

De foja 28 a 30 se lee la declaración del agente Carlos Luis Vargas Cerrud, en la cual ratifica el informe rendido por él y el cabo Leonardo Bernal, ambos de servicio en el Área de San Felipe con motivo de la detención de Isabel Edith Rodríguez Macías.

Los hechos investigados configuran el delito de posesión de drogas ilícitas tipificado en el primer párrafo del artículo 260 del Código Penal sancionado con prisión de 1 a 3 años y de 50 a 250 días multas; y a la detenida se le ha vinculado claramente con la comisión de este delito. Esto es así porque en su poder se encontró una sustancia que después de ser analizada por el Laboratorio Técnico Especializado en drogas de la Policía Técnica Judicial resultó ser cocaína (crack) con un peso de 1.74 gramos, a pesar que tal cantidad sobrepasa el límite que establece el Instituto de Medicina Legal para una dosis de consumo mínima en los adictos, los hechos que rodearon la detención de la imputada no revelan en forma alguna que la droga poseída fuera a ser traficada.

Ante los elementos de prueba examinados debe concluirse que la orden de detención infringe el artículo 2148 del Código Judicial el cual establece que se podrá decretar la detención preventiva, previo cumplimiento de las formalidades previstas en la ley procesal, **cuando se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de dos años de prisión**, y el delito de simple posesión de drogas ilícitas está sancionado con prisión cuyo mínimo es de un año.

En reiterados fallos el Pleno de esta Corporación de Justicia ha expresado que es legal la detención de una persona sorprendida en flagrante delito, pero

que al ponderar la autoridad competente la actuación para determinar si debe o no mantener esta medida cautelar, la misma debe revocarse en aquellos casos en que, como el que nos ocupa, el delito investigado está sancionado con prisión cuyo mínimo sea menos de dos años de prisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la detención de ISABEL EDITH RODRÍGUEZ MACÍAS, ordenada por el señor Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas mediante diligencia fechada el 27 de mayo de 1996 por el Delito contra la Salud Pública, y ORDENA su libertad si no existe orden de detención en su contra por otra causa.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DEL SEÑOR RENÉ MIRÓ, CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Gonzalo Antonio Moncada Luna, se apersonó ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, con la finalidad de presentar acción de Habeas Corpus a favor del señor **RENÉ MIRÓ**, y contra la **DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL**, el día 2 de agosto de 1996.

Cumplidos los trámites del reparto, se libró mandamiento de Habeas Corpus contra la autoridad acusada quien, mediante escrito N° A. L. 1032-96, de fecha 5 de agosto de 1996 (f. 4), manifestó:

> "1. No es cierto que hemos ordenado la detención del señor **RENÉ MIRÓ**.
> 2. No tiene razón de ser en base al punto anterior.
> 3. No tenemos bajo custodia ni a nuestras órdenes al prenombrado **RENÉ MIRÓ**; el mismo fue puesto en libertad por así ordenarlo el Fiscal Auxiliar de la República mediante Oficio N° 11750 FAR de 2 de agosto de 1996, en el cual deja sin efecto la aprehensión del precitado."

Del informe transcrito se observa que contra el señor **RENÉ MIRÓ**, no hay orden de detención y el mismo se encuentra en pleno goce de su libertad ambulatoria, por la cual no hay razón para continuar la actividad procesal de la acción interpuesta.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECRETA EL CESE de procedimiento en el presente caso y ORDENA el archivo del mismo.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR GUILLERMO BONILLA GARCÍA EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **Ciro Morales Alvarado** presentó Recurso de Habeas Corpus en favor de **GUILLERMO BONILLA GARCÍA** y contra el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas, por considerar que la detención preventiva que sufre su patrocinado es ilegal.

Librado el mandamiento de habeas corpus el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas lo contestó así:

> "PRIMERO: Si es cierto que ordené la DETENCIÓN PREVENTIVA de GUILLERMO BONILLA GARCÍA, mediante providencia fechada doce (12) de julio del año en curso, lo cual corre de fojas 42 a fojas 44 del expediente principal.
>
> SEGUNDO: Los fundamentos de hecho y de derecho que nos llevaron a tomar la decisión de ordenar la DETENCIÓN PREVENTIVA de GUILLERMO BONILLA GARCÍA, se basa en el hecho de que el señor BONILLA GARCÍA, fue retenido junto a DOMINGO BRÍAS PEDROZA, LUIS ALBERTO SÁNCHEZ y ORGELIO BONILLA GARCÍA los cuales viajaban a bordo del vehículo Cherokee modelo Jeep Sport, en las cercanías del sector conocido como la "Y" de Chilibre, por efectivos policiales por la colisión y posible fuga con un auto bus, al momento de hacerse una revisión en el auto se logró encontrar debajo del asiento del copiloto, una bolsa plástica de regular tamaño la cual contiene una sustancia en polvo de color blanco que se presumía en esa fecha era droga ilícita.
>
> La sustancia incautada fue sometida a los análisis de PRUEBA DE CAMPO, arrojando resultados positivos en la determinación de la droga conocida como COCAÍNA. (Ver folios 8).
>
> Al ser cuestionado sobre los hechos, el señor GUILLERMO BONILLA, quien rinde declaración en esta oficina del Ministerio Público, acepta que la droga encontrada dentro del vehículo le pertenece, que la compró en la ciudad de Colón en la suma de veinte dólares y que estaba destinada para su uso personal. (Ver folios 36-41).
>
> Los fundamentos de derecho para ordenar la DETENCIÓN PREVENTIVA del señor BONILLA GARCÍA se basan en el contenido de los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.
>
> TERCERO: Actualmente el detenido GUILLERMO BONILLA GARCÍA ha sido puestos a órdenes de la Corte Suprema de Justicia para los fines legales pertinentes".

El abogado de **GUILLERMO BONILLA GARCÍA** sostiene que la ilegalidad de la detención preventiva que invoca consiste en lo siguiente:

> "El señor GUILLERMO BONILLA GARCÍA confesó que el sobre encontrado por los agentes del orden público debajo del automóvil en que viajaba era de su propiedad y que la droga que el mismo contenía era

suyo y para su uso o consumo personal; también confesó ser consumidor habitual desde que tenía 16 años de edad.

Las disposiciones legales que a continuación le señalo disponen la interposición de medidas distintas a la detención preventiva para las personas adictas al uso o consumo de drogas.

EN QUE CONSISTE LA ILEGALIDAD QUE SE ADUCE O SE INVOCA.

1. El artículo 260 del Código Penal, subrogado por el artículo 5 de la Ley 23 de 1986 dispone: `El que con fines ilícitos posea droga, será sancionado con prisión de 1 a 3 años y de 50 a 250 días-multa . La detención preventiva procede por delito que tenga señalada pena mínima de dos (2) años de prisión, según lo dispuesto en el artículo 2148 del Código Judicial, conforme fue subrogado por el artículo 38 de la Ley 3 de 1991.

2. El artículo 2147 D) del Código Judicial dispone que `La detención preventiva en establecimientos carcelarios solo podrá decretarse cuando todas las otras medidas cautelares resultaren inadecuadas . Esta misma excerta legal establece que `tampoco se decretara la detención preventiva, salvo en caso de exigencias cautelares excepcionales, cuando el imputado sea una persona tóxico dependiente ... .

3. Según el artículo 263 F del Código Penal `Si el que adquiere o posea drogas, depende físico o psíquicamente de las mismas y la cantidad es escasa, de modo que acredite que es para su uso personal, se le aplicaran únicamente medidas de seguridad .

4. El artículo 21 de la constitución claramente consigna que `Nadie puede ser privado de su libertad, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, expedido de acuerdo con las formalidades legales y por motivo previamente definido de la ley .

Por su parte, el artículo 2159 del Código Judicial, requiere que la detención preventiva sea decretado por medio de diligencia so pena de nulidad.

5. Tanto el artículo 21 de la Constitución como los artículos 2152 y 2568 del Código Judicial establecen la obligación en que está el funcionario en entregarle al detenido copia de la orden de detención, copia que he solicitado con resultado negativos.

En atención a que no se nos ha proporcionado la orden de detención, no nos es posible acompañarla (artículo 2574 Código Judicial).

Es por lo anterior que consideramos ilegal al amparo de lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución Política la detención del señor GUILLERMO BONILLA GARCÍA, razón por la cual respetuosamente le solicito al Honorable Magistrado Presidente del Pleno de la Corte Suprema de Justicia que así sea declarada y que ordene su inmediata libertad".

La doctora **Nilda Santamaría de Medina**, psiquiatra forense del Instituto de Medicina Legal, en un informe al Licenciado **Rosendo Miranda** Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas estableció que en relación con un examen médico psiquiátrico de **GUILLERMO BONILLA GARCÍA:**

"1. No sufre actualmente de enfermedad mental.
2. Prueba positiva de cocaína indica que ha consumido esta droga. No obstante, no tiene evidencia médica de dependencia a esta u otras drogras".

Un examen de la incipiente investigación muestra que el joven **GUILLERMO**

BONILLA GARCÍA es consumidor de la droga cocaína sin llegar a ser dependiente de la misma. La cantidad de 6.22 gramos que fue la cantidad de cocaína que acepta era de su propiedad, si bien supera la medida posológica limitada a una dosis, también considera la Corte que no hay evidencias graves que dicha droga fuera a ser utilizada para el tráfico de la misma, considerando que se puede subsumir este caso dentro del primer párrafo del artículo 260 del Código Penal como posesión simple, que tiene una pena de prisión de 1 a 3 años.

En vista de las consideraciones anteriores, como la pena mínima no excede de dos años, es procedente considerar ilegal la detención.

Por lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ILEGAL la detención de GUILLERMO BONILLA GARCÍA y ORDENA su inmediata libertad, sino tiene otra causa pendiente.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE YAHAIRA CRISTIN MORRIS CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOCE (12) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ante la Corte Suprema de Justicia fue interpuesta acción de habeas corpus a favor de YAJAIRA CRISTIN MORRIS y contra el Director General de la Policía Nacional.

Por acogida la demanda, se libró el respectivo mandamiento de habeas corpus, según lo dispuesto en los artículos 2576, 2577, 2578 del Código Judicial. La autoridad acusada, mediante Nota N° DAL-0698-96 de 31 de julio del año que decurre, informó que Morris fue transferida a las instalaciones de la Policía Técnica Judicial de San Miguelito y que en la actualidad "se encuentra bajo custodia de la Policía Técnica Judicial de Ancón" (f. 8).

Con vista de esta información se enderezó el mandamiento de habeas corpus contra el Director General de la Policía Técnica Judicial, quien en el informe de conducta rendido mediante Nota A. L. 1016-96 de 1° de agosto del año en curso, indica que: a. no ha ordenado la detención de Morris; b. quien no se encuentra bajo custodia de esa institución y c. "la misma fue puesta en libertad, en el día de hoy, ya que el Fiscal Auxiliar de la República, mediante Oficio N° 11613 FAR, de 31 de julio de 1996 dejó sin efecto la aprehensión de la misma" (f. 10, subraya la Corte).

Por acreditado el hecho de que Morris no se encuentra privada de su libertad personal, la presente acción constitucional carece de objeto, por lo que, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 2572 del Código Judicial, es procedente decretar el cese de este procedimiento y el consecuente archivo del expediente.

Por las razones expuestas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA EL CESE del procedimiento en la presente acción de habeas corpus.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FELIPE CAMARGO AMAYA CONTRA EL JUEZ SEGUNDO DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TRECE (13) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado CARLOS EUGENIO CARRILLO GOMILA, interpuso ante esta Superioridad, acción de habeas corpus en grado de apelación, a favor de el señor FELIPE CAMARGO AMAYA, con respecto a tal solicitud el Pleno de la Corte Suprema de Justicia se pronunció, en resolución del 26 de julio de 1996, en los siguientes términos:

> "Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución apelada de 18 de junio de 1996, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante la cual DECLARA LEGAL la detención preventiva de FELIPE CAMARGO AMAYA; y, en consecuencia ORDENA que sea filiado nuevamente en el respectivo centro penitenciario, a órdenes de la autoridad competente."

El licenciado CARLOS EUGENIO CARRILLO GOMILA, ha presentado una solicitud de aclaración de sentencia, en donde pide sea aclarada la frase "ORDENA que sea FILIADO nuevamente en el respectivo centro penitenciario a órdenes de la autoridad competente" El accionante desea que este tribunal aclare a qué autoridad competente se refiere la parte resolutiva.

El Pleno desea dejar claro que la aclaración de las sentencias sólo son posibles con respecto a la parte resolutiva, cuando la misma sea contradictoria o ambigua. Ahora bien, en la presente solicitud, el petente desea que la Corte especifique cuál es la autoridad competente que tendrá a órdenes a su defendido.

La autoridad demandada es el Juez Segundo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, por lo que es esa la "autoridad competente", a que se refiere la parte resolutiva del fallo de la Corte.

La ley es clara al señalar que de encontrarse legal la detención de un detenido, éste será puesto a órdenes del funcionario contra el cual se libro el mandamiento. Lo anterior esta claramente establecido en el artículo 2592 del Código Judicial, en su segundo párrafo:

> "...
> Si la detención o prisión es legal, así lo reconocerá en el fallo y el detenido será puesto de inmediato a órdenes de la autoridad o funcionario contra la cual se libró mandamiento; a fin de que le reintegre a su estado de detención original".

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, Aclara la resolución del 26 de julio de 1996, en el sentido de que la autoridad competente es el Juzgado Segundo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) YANIXA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDUARDO MALCOLM MOSQUERA CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La doctora Asunción Alonso de Montalvo James ha interpuesto ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, recurso de Habeas Corpus a favor del señor Eduardo Malcolm Mosquera y contra el Fiscal especializado en delitos relacionados con drogas.

Librado el mandamiento de Habeas Corpus contra el Fiscal especializado en delitos relacionados con drogas, el mismo dio respuesta por medio del Oficio N° 7102-96 de 9 de julio de 1996, en los siguientes términos:

> "A. La orden de detención del ciudadano EDUARDO MALCOM (sic) MOSQUERA, fue decretada por este despacho, mediante resolución de fecha 9 de abril de 1996.
>
> B. Los fundamentos de hecho para ordenar la detención preventiva de EDUARDO MOSQUERA, se reflejan en que el día 4 de abril pasado, el Sargento 826 HARRIS, se encontraba se (sic) servicio en el patrulla #107 conducido por el Agente MORALES, cuando a la altura de Calle 22 Pueblo Nuevo, frente al Super Mercado Pueblo Nuevo, observaron a una ciudadana que responde al nombre de ISIDRA GÁLVEZ CASTRELLÓN, la cual al ser entrevistada se saco del busto izquierdo (ceno) (sic) dos (2) bolsitas plásticas trasparentes; una (1) contenía un polvo blanco que se presume sea Cocaína y la otra contenía veinticinco (25) pedacitos de una sustancia sólida color cremoso que se presume sea piedra. La ciudadana Isidra se encontraba en compañía del señor EDUARDO MALCOLM MOSQUERA.
>
> Al ser indagado el señor MOSQUERA, manifestó que él no tenía plata para comprar droga y que además a él no encontraron nada encima, que sí consume cocaína desde hace varios años y que además el venía de la Barraca La Porqueriza, cuando Isidra lo llamó para darle un bote en el taxi donde venía ella.
>
> El fundamento de derecho para ordenar su detención preventiva se consagra en el Artículo 2148 y 2159 del Código Judicial.
>
> Visible a fojas 37 y 38 del sumario se encuentra el resultado del análisis de drogas realizando por el Laboratorio Técnico Especializada en Drogas, el cual dio como resultado Positivo para cocaína Crack con un peso de 7.59 gramos y para Cocaína 3.51 gramos, haciendo un total de 11.20 gramos.
>
> C. El señor EDUARDO MALCOLM MOSQUERA, se encuentra recluido en la Cárcel Modelo, a órdenes de este Despacho mediante Oficio No. 3280 del 9 de abril de 1996, quien a partir de este momento es puesto a disposición de ese Augusto Tribunal, mediante Oficio N° 7101-96 de esta misma fecha ..."

Por su parte la doctora Asunción de Montalvo considera a que la detención del señor Mosquera es ilegal pues, a su juicio, su defendido no ha cometido ningún hecho delictivo ya que la droga incautada al momento de la detención, estaba en posesión de la señora Isidra Gales y ésta incluso confesó que la droga era para la venta.

En este momento, corresponde determinar si la medida cautelar de carácter personal atacada cumple con los requisitos que al efecto establecen los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

En las sumarias consta como elemento que comprueba la existencia del hecho punible, el informe del incidente policivo suscrito por el Sargento I° 825 RICARDO HARRIS en el que resultan detenidos los señores Isidra Gálvez Castrellón y Eduardo Malcolm Mosquera. En dicho informe se señala que se le encontró a la señora Gálvez dos bolsitas transparentes plásticas, una de las cuales una contenía una sustancia en forma de polvo de color blanco que se presume cocaína y la otra tenía en su interior veinticinco (25) pedacitos de una sustancia sólida de color crema que se presume piedra. Sometida la evidencia a las pruebas técnicas de rigor, resultó positiva para la determinación de COCAÍNA (CRACK), en la cantidad de 7.59 gramos y COCAÍNA en la cantidad de 3.61 gramos.

Seguidamente, se aprecia de fojas 17 a 20 de las sumarias, la Indagatoria rendida por la señora Isidra Gálvez , quien expresó que la droga incautada no era suya sino del señor Eduardo Mosquera, quien se la dio para que se la guardara y que esta acompañó al señor Mosquera a comprar la droga pues por ello le daría diez balboas.

Por otro lado, de fojas 14 a 17 de los antecedentes se encuentra la indagatoria rendida al señor Eduardo Mosquera, quien estableció que al momento de la detención, no le encontraron droga alguna y que la droga pertenecía a la señora Gálvez.

Con fundamento en lo anterior la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas ordenó la detención preventiva de los señores Isidra Gálvez y Eduardo Mosquera, por considerar que existían suficientes pruebas que los involucraran en delitos relacionados con drogas.

Del estudio del expediente, el Pleno de esta Corporación estima que, el informe del Sargento I° RICARDO HARRIS, así como la declaración indagatoria rendida por la señora Isidra Gálvez, constituyen hechos suficientes para vincular al señor Eduardo Mosquera con los hechos a él imputados, ya que pesan sobre éste graves indicios de presencia y oportunidad, aunado a que la droga incautada excede visiblemente la dosis mínima para el consumo que establece el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, lo que justifica la aplicación de la detención preventiva decretada por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

En virtud de lo antes expuesto, el Pleno de esta Corporación estima que, en la detención preventiva del señor Eduardo Malcolm Mosquera no se ha infringido el debido proceso establecido en la Constitución Nacional y en las leyes de la República ni tampoco las normas jurídicas que regulan la detención preventiva y por lo tanto, es procedente declarar legal dicha detención.

En consecuencia, el PLENO de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención de la señor Eduardo Malcolm Mosquera, y por lo tanto, dispone que el detenido sea puesta a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ

Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DIEGO FERNANDO AGUIRRE EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Miguel Deen Rodríguez, actuando en representación de DIEGO FERNANDO AGUIRRE QUINTERO, ha interpuesto acción de habeas corpus contra el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Encontrándose en estado de resolver la acción de habeas corpus que nos ocupa, observa el Pleno que el Lcdo. Miguel Deen Rodríguez presentó el día 5 de agosto de 1996, escrito mediante el cual desiste de la acción interpuesta. Dado que el artículo 1073 del Código Judicial le otorga el derecho para desistir expresa o tácitamente del incidente, recurso o la demanda que haya interpuesto una persona, es perfectamente viable el desistimiento de la presente acción.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento de la acción de habeas corpus interpuesto por el Lcdo. MIGUEL DEEN RODRÍGUEZ en representación de DIEGO FERNANDO AGUIRRE.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JAVIER PORTABLES Y TOMMY ROY CRUZ VILLARREAL EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

El licenciado **RODRIGO RIERA** con cédula de identidad personal N° 2-81-995, se apersonó con el fin de presentar recurso verbal de Habeas Corpus a favor de los ciudadanos **JAVIER PORTABLES Y TOMMY ROY CRUZ VILLARREAL**. La acción se promueve contra el Fiscal Auxiliar de la República, Licenciado Carlos Augusto Herrera.

El recurrente a foja 4 del expediente, mediante llamada telefónica manifestó desistir del recurso interpuesto.

La Corte ha sostenido que en materia de Habeas Corpus es viable el desistimiento, siempre y cuando quien lo manifieste sea el detenido o la persona que interpuso la acción.

Al analizar la situación planteada por el Licenciado Rodrigo Riera, el Pleno nada tiene que objetar y, por tanto, procede a admitir el desistimiento.

En tales circunstancias, la Corte Suprema PLENO administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley ADMITE el desistimiento de la

acción de habeas corpus interpuesta a favor de JAVIER PORTABLES Y TOMMY ROY CRUZ VILLARREAL; en consecuencia, ORDENA el archivo del expediente.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE JULIANA FOX, ROBERTO ORTIZ, RODOLFO FOX Y ALFREDO SIMPSON EN CONTRA DEL FISCAL TERCERO DEL CIRCUITO DE COLÓN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La señora Nidia Jiménez Fox presentó acción de habeas corpus a favor de los señores **ROBERTO ORTIZ FOX, JULIANA FOX, RODOLFO FOX y ALFREDO SIMPSON**, contra la Fiscalía Tercera del Circuito de Colón.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante resolución fechada 25 de julio de 1996 se inhibió, por razones de competencia, de conocer del habeas corpus interpuesto a favor del señor ROBERTO ORTIZ FOX y ordenó su remisión al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. En relación con los señores JULIANA FOX SALAZAR, ALFREDO SIMPSON GORDÓN y RODOLFO FOX ATHERLY, declaró el cese de la acción de habeas corpus, en vista de que no se encuentran detenidos en ninguna cárcel del país.

Como consecuencia de lo anteriormente señalado, el Segundo Tribunal Superior de Justicia remitió la acción de habeas corpus presentada a favor del señor ROBERTO ORTIZ FOX, al igual que el expediente contentivo de las sumarias que se adelantan contra el mencionado señor y otros, por el supuesto delito contra la vida y la integridad personal en perjuicio del señor SALOMÓN ALFREDO LESLIE QUIJANO.

La presente acción guarda relación con la denuncia interpuesta por la señora JANET REBECA MARTEZ DE LESLIE el día 3 de diciembre de 1995, ante la Policía Técnica Judicial, Agencia de Cristóbal, en la que señala que el día anterior se produjo una fuerte discusión entre su esposo, el señor SALOMÓN ALFREDO LESLIE QUIJANO y su vecina, la señora Juliana. Mientras esto sucedía, se presentó el esposo de la señora Juliana, el señor Alfredo Simpson y un joven que se encontraba en estado de ebriedad, quien descendió del automóvil en que viajaban y le efectuó un disparo al señor LESLIE QUIJANO que lo mantenía, hasta ese momento, recluido en el hospital. Posteriormente, en ampliación de su denuncia el día 5 de diciembre de 1995, la señora Martez de Leslie manifestó que luego de haber preguntado a algunos de sus vecinos, se había enterado que el sujeto que le disparó a su esposo es uno de los hijos de la señora Juliana que responde al nombre de ROBERTO ORTIZ. (Fojas 2-4 y 6).

A fojas 35 y 36 del cuaderno principal consta la orden de detención preventiva dictada el 6 de diciembre de 1995, por la Fiscalía Tercera del Circuito de Colón, Área de Cristóbal, contra el señor ROBERTO ORTIZ FOX por la supuesta comisión de delito contra la vida y la integridad personal en perjuicio del señor SALOMÓN ALFREDO LESLIE QUIJANO e, igualmente, se le ordena que rinda declaración indagatoria, la cual consta de foja 51 a 54 de ese mismo expediente.

Posteriormente, mediante resolución fechada 27 de diciembre de 1995, consultable de foja 96 a 100, el Segundo Tribunal Superior de Justicia otorgó fianza de excarcelación a favor de los señores FLORENTINO FOX ATHERLY y ROBERTO ORTIZ FOX, "imputados por delito de homicidio en grado de tentativa". No

obstante, la fianza fijada a favor del señor ORTIZ FOX no ha sido consignada hasta este momento, por lo que aún se encuentra privado de su libertad.

De lo anteriormente expuesto y de las constancias procesales se colige que estamos en presencia del delito de homicidio, pero en la figura autónoma de la tentativa, contemplada en el artículo 44 del Código Penal, que es del tenor siguiente:

> **"ARTÍCULO 44:** Hay tentativa cuando se inicia la ejecución de un hecho punible por actos idóneos encaminados a su consumación y que no se produce por causas independientes del agente."

El artículo 131 del Código Penal sanciona el delito de homicidio con prisión de cinco (5) a doce (12) años. Por su parte, el artículo 60 de ese mismo código dispone que en los casos de tentativa de delito, se disminuirá a un tercio la pena prevista para el delito principal. En el caso que nos ocupa, sería de un (1) año y seis (6) meses.

Consecuentemente, la detención preventiva que sufre el señor ROBERTO ORTIZ FOX no se ajusta a lo dispuesto por el artículo 2148 del Código Judicial, ya que el delito por el cual se encuentra privado de su libertad, no tiene pena mínima de prisión de dos años.

En mérito de lo expuesto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la detención preventiva del señor ROBERTO ORTIZ FOX y ORDENA que sea puesto inmediatamente en libertad, si no existe otra causa penal en su contra.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HERACLIO PEREA MOSQUERA EN CONTRA DE LA FISCALÍA CUARTA SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor Heraclio Perea Mosquera presentó ante esta Corporación de Justicia, acción de Habeas Corpus a su favor, y en contra del Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial.

Seguidamente se libró el mandamiento de Habeas Corpus en contra del Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial quien contestó mediante oficio N° 2971 31 de julio de 1996, lo siguiente:

> "Ponemos en su conocimiento que esta Agencia del Ministerio Público, instruí el sumario seguido a PEREA MOSQUERA, fase durante la cual, permaneció bajo detención preventiva el imputado, medida precautoria de tipo personal basada en lo establecido en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.
>
> El citado sumario fue remitido al Segundo Tribunal Superior de Justicia mediante vista fiscal N° 24 de octubre de 1994 y se puso a disposición del mismo, mediante oficio N° 2274 de la misma fecha,

dirigido a la Dirección de la Cárcel Modelo. Esa agencia jurisdiccional, luego de un decreto ampliatorio, dictó autos de llamamiento a juicio contra PEREA MOSQUERA, decisión que fue recurrida vía apelación.

Según información obtenida vía telefónica en la tarde del día de hoy, de la Secretaría del Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante Oficio N° 152 O. V. de 26 de julio de 1996, ese tribunal ordenó la libertad del imputado por la presente causa, en virtud de que la Sala de los Penal de la Corte Suprema de Justicia, como tribunal **ad quem**, decretara el sobreseimiento provisional de PEREA MOSQUERA, mediante resolución de 10 de julio de 1996."

Del informe presentado por el Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial, se colige claramente que el señor HERACLIO PEREA MOSQUERA ha recuperado su libertad, por lo que debe procederse entonces con lo dispuesto en el artículo 2572 del Código Judicial.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL CESE del procedimiento en vista de que no existe fundamento legal para continuar con los trámites de la acción de Habeas Corpus interpuesta en este caso a favor del ciudadano HERACLIO PEREA MOSQUERA y DISPONE el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARLON LARA PALACIOS EN CONTRA DEL JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **JOSÉ RAMIRO FONSECA PALACIOS** ha interpuesto Recurso de Apelación contra la Resolución de 9 de julio de 1996, dictada por el Segundo Tribunal Superior en virtud de la **Acción de Habeas Corpus** que interpuso a favor de **MARLON LARA PALACIOS** contra el Juez Primero del Circuito de lo Penal.

El Pleno de la Corte procede a decidir lo de lugar, previo el examen de los aspectos de fondo del fallo recurrido y de los cargos que se le imputan.

Veamos, en primer lugar, lo medular de la resolución que resolvió la presente acción de habeas corpus:

"...
II- ASPECTOS DE FONDO

La controversia jurídico penal planteada en el Juicio Especial Constitucional de Habeas Corpus bajo examen, se circunscribe a un asunto estrictamente procesal y, deducimos de los cargos de injuricidad planteados por el demandante, que cuestiona la actuación del Tribunal de Instancia, bajo el concepto de considerar suspendidos los efectos de la medida cautelar personal de detención preventiva contra el procesado MARLON LARA PALACIOS, debido al

recurso de casación anunciado, sustentado y en trámite, porque el artículo 2457 del Código Judicial contempla que interrumpe la prescripción de la pena y tiene efectos suspensivos.

No obstante, esa tesis es inadmisible porque el recurso extraordinario de casación suspende los efectos de la sentencia penal en cuanto a las decisiones de fondo, es decir, aquello referente a la declaratoria de culpabilidad, para debatir a través de la instancia superior con motivo del recurso de casación, sobre los cargos de injuricidad y determinar si la persona declarada culpable está vinculada en forma objetiva y subjetiva con el hecho punible.

Siendo ello así, no se está debatiendo lo referente a la aplicación de la medida cautelar personal de la detención preventiva, porque ésta está ejecutoriada, surte todos sus efectos, el recurso de casación no la suspende, porque ese aspecto no se debate en la sentencia, pues fue motivo de discusión al momento de calificar la fase intermedia y, en el negocio bajo examen observamos que el procesado MARLON LARA PALACIOS fue enjuiciado por un delito contra la salud pública relacionado con drogas y mantenida la detención preventiva, resolución confirmada por este Tribunal Superior, por tanto, la misma no pierde vigencia y en nada le afecta el recurso extraordinario de casación penal.

Ante tales circunstancias, es incuestionable que la detención preventiva del señor procesado MARLON LARA PALACIOS, satisface los requisitos legales contemplados en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, porque emana de autoridad competente; el delito imputado permite aplicar la detención preventiva; el recurso extraordinario de casación no suspende sus efectos; al procesado se le ha garantizado el debido proceso legal y la medida de detención preventiva fue confirmada por este Tribunal Superior."

El apelante, en síntesis, alega que la privación de libertad de su cliente es ilegal pues dicha detención debió ser suspendida por el Juzgado Primero del Circuito de lo Penal, desde que se anunció el Recurso de Casación contra la sentencia de 15 de abril de 1994 dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que confirmó la resolución de 15 de abril de 1994 dictada en primera instancia, puesto que es claro que el recurso de casación "suspende el trámite del proceso e interrumpe la contabilidad de la prescripción de la pena, según reza el artículo 2457 del Código Judicial.

Para resolver, el Pleno de la Corte considera lo siguiente:

Según se desprende de autos, el favorecido con esta acción de habeas corpus fue detenido en forma preventiva el 25 de julio de 1989 (fs. 39-antecedentes), por estar vinculado a delitos relacionados con drogas; posteriormente, el Juzgado de Circuito accedió a conceder la libertad caucionada del sindicado **LARA PALACIOS** (fs. 115), esta decisión fue apelada por el agente del Ministerio Público, por lo que el Segundo Tribunal Superior resolvió revocar dicho Auto y en su lugar declaró que el imputado no tenía derecho a disfrutar de la libertad bajo fianza (fs. 133 a 136).

Seguidamente, el juzgado de instancia dictó resolución de 17 de diciembre de 1990, mediante la cual abrió causa criminal contra **MARLON ALBERTO LARA PALACIOS**, por el delito genérico contra la Salud Pública, y reiteró su detención preventiva (fs. 242 a 249).

Finalmente, el proceso fue resuelto en primera instancia mediante resolución de 4 de enero de 1994, que **condenó** al procesado **LARA PALACIOS**. Esta sentencia, a su vez, fue confirmada por el Tribunal de segunda instancia, mediante fallo de 15 de abril de 1994, visible de fojas 533 a 553.

Contra esta última resolución se encuentra pendiente de decisión, ante la

Sala Penal de la Corte, recurso de casación, luego de haber sido corregido.

Vistos los antecedentes del caso, el Pleno de la Corte comparte el criterio del a-quo en el sentido de que el recurso de casación suspende los efectos de la sentencia penal que decidió el fondo del proceso, es decir, en lo que respecta al cumplimiento de la pena por la declaratoria de culpabilidad. Por lo que no se puede detener a una persona en virtud de tal condena, si aún está pendiente de decisión el recurso de casación que le dará firmeza a la misma. Sin embargo, la situación del que se encuentra detenido en forma preventiva, de conformidad con los presupuestos legales (arts. 2148 y 2159 del Código Judicial), no varía por la interposición de dicho medio extraordinario de impugnación, pues dicha situación es independiente y distinta a la descrita por el artículo 2457 del Código Judicial, que atribuye a la interposición de la casación el efecto suspensivo y el coetáneo de suspender el término para la prescripción de la pena, pero sin que ello implique la suspensión de los efectos de la detención a que se encuentra sometida la persona a favor de la cual haya sido interpuesto el recurso.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución de 9 de julio de 1996, dictada por el Segundo Tribunal Superior, que declara LEGAL la medida cautelar personal de detención preventiva decretada contra MARLON LARA PALACIOS.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARÍA EDITH ARIZA DE MACHADO EN CONTRA DEL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **CARLOS RANGEL CASTILLO** ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de **MARÍA EDITH ARIZA de MACHADO** contra el **Director de Migración y Naturalización**.

Librado el mandamiento de habeas corpus, el funcionario demandado procedió a rendir informe sobre los puntos requeridos por esta Corporación, en los siguientes términos:

"...

a) Es cierto que ordenamos la detención de la señora MARÍA EDITH ARIZA DE MACHADO, de nacionalidad colombiana. Dicha detención se efectúo durante el operativo conjunto realizado entre la Policía Nacional del Área A., San Felipe, y la Dirección Nacional de Migración, el día 7 de junio de 1996.

b) Los motivos de hecho en que se fundamenta la detención de dicha ciudadana son:

PRIMERO: Que el día 7 de junio la ciudadana MARÍA EDITH ARIZA DE MACHADO, fue detenida en el operativo conjunto efectuado entre la Policía Nacional del Área A, San Felipe y la Dirección Nacional de Migración, dentro de la Cantina La Aurora.

SEGUNDO: Que, si bien es cierto que dicha ciudadana tiene presentada solicitud de Permanencia Definitiva en base a la Ley N° 17 del 10 de agosto de 1994, es más cierto aún, que de acuerdo a nuestra ley migratoria, la inmigración al país de extranjeros que se dediquen a este tipo de actividades está totalmente prohibida.

Los motivos de derecho están fundamentados en los preceptos legales contenidos en el Decreto Ley N° 16 del 30 de junio de 1960, modificado por el Decreto Ley N° 13 del 20 de septiembre de 1965 y la Ley 6ª, del 5 de marzo de 1980, específicamente los Artículos 36, 37 literal a), 38 y 65, que al tenor establecen lo siguiente:

ARTÍCULO 36: El Ministerio de Gobierno y Justicia podrá negar la entrada al pías o el tránsito por el mismo a cualquier extranjero que se encuentre residiendo en él, siempre que ello sea necesario o conveniente por razones de seguridad, de salubridad o de orden público.

ARTÍCULO 37: Queda prohibida la inmigración al país de los extranjeros que se encuentren en cualquiera de las condiciones que se pasan a enumerar:

a) Las mujeres que se dediquen a la prostitución; los que trafiquen con la prostitución o con estupefacientes y las personas de conducta inmoral;

ARTÍCULO 38: El matrimonio de extranjero o extranjera con nacional panameño no otorga de por sí derecho a la residencia en la República de Panamá. El Ministerio de Gobierno y Justicia podrá por razones de salubridad, moralidad, seguridad publica, economía nacional o necesidad social, negar la entrada o la permanencia en el país, a los extranjeros casados con nacional panameño.

ARTÍCULO 65: Los extranjeros que hubieren llegado al país sin haber llenado los requisitos legales de ingreso o que permanecieren en el mismo después de vencer sus visas de transeúntes, turismo, tránsito o visitante temporal, o sus tarjetas de turismo o de tránsito sin residencia autorizada, serán puestos a órdenes del Ministerio de Gobierno y Justicia para ser deportados o para tomar, respecto de ellos, cualquier otra medida que sea de lugar.

El Ministerio de Gobierno y Justicia podrá cancelar los permisos definitivos, provisionales o de visitante temporal, así como los permisos o visas de transeúntes, turistas, visitantes temporales o de tránsito cuando sus tenedores se encuentren en cualquiera de los casos contemplados en los Artículos 36, 37 y 38 de este Decreto Ley.

Estos extranjeros serán puestos a órdenes del Ministerio de Gobierno y Justicia para su deportación, salvo los casos en que ésta sea decretada por el Ministerio de Gobierno y Justicia de acuerdo con primer (sic) inciso de este Artículo.

c) La señora MARÍA EDITH ARIZA de nacionalidad colombiana, se encuentra a nuestras órdenes en espera de ser deportada del territorio nacional mediante Resolución N° 4238 del 4 de julio de 1996.

Por imperio de la Ley ponemos a órdenes de la Suprema Corte a la ciudadana MARÍA EDITH ARIZA VALENCIA de nacionalidad colombiana.

Atentamente,

(fdo.) LICDO. GERMÁN G. SÁNCHEZ T.
DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN".

Con el informe transcrito el Director de Migración aportó la documentación

que demuestra lo expresado, entre la que se encuentra copia de la orden de detención (fs. 9), fundamentada en que la ciudadana colombiana no portaba documentos que acreditaran su permanencia en el país (arts. 60 y 62 de la Ley N° 16 del 30 de junio de 1960); igualmente, figura copia de la resolución mediante la cual se ordena su deportación (fs. 13), en base al hecho de haber sido detenida en el Área de Santa Ana y calle 12 en la Cantina LA AURORA encontrándose indocumentada. También se refiere a que su permanencia en el país atenta contra la seguridad, salubridad o el orden público, por dedicarse a la prostitución (arts. 36, 37 (lit. a), 38 y 65 ibídem).

Tal como lo ha sostenido el Pleno de esta Corporación Judicial, la adopción de una medida cautelar de carácter personal que limite o restrinja la libertad ambulatoria de las personas debe estar debidamente sustentada. Por tanto, en este caso la detención de la ciudadana extranjera es legal, pues fue ordenada mediante resolución escrita, por la autoridad correspondiente y al tenor de las formalidades que establece la ley.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención de MARÍA EDITH ARIZA DE MACHADO.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE VICTORINO DE LA CRUZ EN CONTRA DEL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTE (20) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Al Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha ingresado la acción de habeas corpus presentada por la señora VILMA ENEIDA ORNANO AGUILAR a favor de su concubino el ciudadano dominicano **VICTORINO DE LA CRUZ**, contra quien pesa una orden de Deportación expedida por el Director Nacional de Migración y Naturalización.

La recurrente alega en su manuscrito de habeas corpus que **VICTORINO DE LA CRUZ** se encuentra detenido a órdenes de la Dirección de Migración, ya que se ha ordenado su deportación; que el Pleno de la Corte Suprema declaró ilegal la orden de detención preventiva mediante Resolución de 26 de julio de 1996; que cuando se acercó a las oficinas de Migración para hacer efectiva la boleta de libertad, el señor MISAEL CÓRDOBA, encargado del Departamento de Investigaciones, "en forma grosera y prepotente me dijo que en la Corte mandaban los Magistrados y en Migración mandaban ellos". Considera la recurrente que la orden de deportación es ilegal ya que al señor **DE LA CRUZ** "le dijeron que se notificara porque igual lo iban a deportar"; por último, solicita que se **declare ilegal la deportación** de VICTORINO DE LA CRUZ, "ya que es un hombre honrado y trabajador".

Librado el respectivo mandamiento de habeas corpus, el funcionario acusado remitió mediante nota N° DNMYN-256-96 de 5 de agosto de 1996, su informe de conducta en los siguientes términos:

"b) Los motivos de hecho en que se fundamenta la detención de dicho ciudadano son:

> PRIMERO: Que, el señor VICTORINO DE LA CRUZ de nacionalidad dominicana, fue detenido en el área de los Correos Nacionales en el Área A, San Felipe, el día 6 de julio de 1996.
>
> SEGUNDO: Que, al momento de su detención, dicho ciudadano no portaba documentos válidos que acreditaran su residencia legal en el país.
>
> Los motivos de derecho están fundamentados en los preceptos legales contenidos en el Decreto Ley N° 16 del 30 de junio de 1960, modificado por el Decreto Ley N° 13 del 20 de septiembre de 1965 y la Ley 6ª, del 5 de marzo de 1980, específicamente los Artículos 36, 65 y 85, ...
>
> c) No tenemos bajo nuestra custodia ni a nuestras órdenes al señor VICTORINO DE LA CRUZ, de nacionalidad dominicana. Al mismo **se le concedió libertad y Citación N° 02800 válida hasta el 2 de septiembre de 1996**, en vista de que mediante Oficio N° 1222 del 1° de agosto de 1996 de la Corte Suprema de Justicia se decretó ilegal la detención del mencionado ciudadano. El señor VICTORINO DE LA CRUZ debe presentarse a nuestras oficinas a más tardar el 2 de septiembre de 1996, a fin de acatar lo dispuesto en la Resolución N° 4362 del 8 de julio de 1996, por medio de la cual se ordena su deportación del territorio nacional, habiéndo (sic) agotado todos los recursos posibles en su favor, tal cual lo expresa el Artículo 86 del Decreto Ley N° 16 del 30 de junio de 1960 y consta en la copia de la mencionada resolución, la cual adjuntamos." (Lo resaltado es nuestro).

El Director de Migración acompañó a su informe de conducta, copia de la orden de detención girada el día 2 de agosto de 1996, copia de la nota por la cual se pone al ciudadano **VICTORINO DE LA CRUZ** a órdenes del Director de Migración, copia de su Registro de Inmigrante, copia de los Informes de Novedad fechados 6 de julio de 1996, copia de la Resolución N° 4362 de 8 de julio de 1996 expedida por el Director Nacional de Migración mediante la cual se ordena la deportación.

Para resolver la presente acción, consideramos oportuno hacer algunas consideraciones respecto a la acción de habeas corpus.

El artículo 23 de la Constitución Nacional, tomado literalmente, describe al habeas corpus como una acción reparadora, concepto éste aceptado por la doctrina, y que procede cuando la persona ya ha sido físicamente privada de su libertad corporal. No obstante, la jurisprudencia de la Corte ha estimado que, puesto que el espíritu de esta norma es proteger y ampliar las garantías fundamentales de los asociados, no solo es procedente el habeas corpus reparador, sino también el conocido en la doctrina como "preventivo", el cual puede ser ejercido como mecanismo para evitar que la detención se concretice, cuando exista una orden en ese sentido. Es decir, la persona que tenga conocimiento, por cualquier medio, que en su contra se ha proferido una orden de detención puede interponer un recurso de habeas corpus preventivo.

En el presente caso se ha presentado acción de habeas corpus **contra la orden de deportación** del ciudadano dominicano **VICTORINO DE LA CRUZ**, sin que en estos momentos se encuentre privado físicamente de su libertad corporal.

Mediante Resolución fechada 26 de julio de 1996, esta Corporación DECLARO ILEGAL la detención que sufría mientras esperaba ser deportado para dar cumplimiento de la Resolución N° 4362 de 8 de julio de 1996. La Corte estimó en esa ocasión, que la ausencia de mandamiento escrito en el cual se motivara y ordenara la detención preventiva de dicho ciudadano, violaba las garantías fundamentales consagradas en la Constitución Política, y por tanto, la detención en que se le mantenía devino en ilegal y así fue declarado. Por ello, el Director Nacional de Migración le concedió libertad y entregó una citación para que el señor **DE LA CRUZ** se presente a más tardar el día 2 de septiembre del presente año para hacer efectiva la orden de deportación; contra dicha orden la recurrente ha

interpuesto acción de habeas corpus.

La presente acción procede como habeas corpus preventivo, según se desprende de los artículos 2566 y 2594 del Código Judicial:

> "Artículo 2566. Para los efectos del Artículo anterior se consideran, además, como acto sin fundamento legal:
> ...
> 5. El confinamiento **la deportación** y la expatriación sin causa legal." (Lo resaltado es nuestro).

De modo pues, que la presente acción contra la orden de deportación del ciudadano dominicano **VICTORINO DE LA CRUZ** es perfectamente viable, y por tratarse de una autoridad con mando y jurisdicción en toda la República, le corresponde al Pleno de la Corte conocer de ella.

En el recurso extraordinario de habeas corpus, cuando éste se interpone contra una orden de detención, corresponde al tribunal evaluar si dicha orden cumple con los requisitos y elementos formales que a tal efecto indican la Constitución y el Código Judicial, esto es, que emane de autoridad competente, que contenga fundamentos de hecho y de derecho, que se trate de delito con pena mínima de dos años o que haya flagrancia, que esté comprobada la comisión del hecho punible, y que exista una vinculación del sujeto con el ilícito. Por analogía, cuando el habeas corpus es presentado contra una orden de deportación, el tribunal evaluará si dicha orden fue expedida *sin causa legal*, esto es, examinará si la deportación es arbitraria e injustificada a la luz de las garantías constitucionales (que conste por escrito de autoridad competente, debidamente motivada, que contenga fundamentos de hecho y de derecho, y que haya sido notificada en debida forma al interesado, etc.). De lo anterior se desprende que el Tribunal de habeas corpus no está facultado para evaluar cuestiones de criterio interpretativo de la ley o de política migratoria que establezca el Ejecutivo; sino más bien deberá confrontar la deportación con la ley como un todo, es decir, con las líneas gruesas y principales del sistema jurídico, que le garanticen al beneficiario del habeas corpus el derecho que resulte violado por la conducta arbitraria de la autoridad.

Del informe rendido por el Director de Migración se desprende que **VICTORINO DE LA CRUZ**, efectivamente, fue detenido y conducido ante dicha autoridad por no portar los documentos que acreditaran legalmente su estadía en el país. La orden de deportación del ciudadano en cuestión, cumple con los requisitos de forma que ordena la ley, respecto a las actuaciones de todo funcionario público, esto es, constar por escrito (Resolución N° 4362 de 8 de julio de 1996, visible a foja 13 del cuadernillo de habeas corpus).

Fue expedida por la autoridad competente, el Director Nacional de Migración, quien firma el documento en cuestión; esto, sin perjuicio de que por ser un documento expedido por funcionario público se debe presumir su legalidad.

La aludida Resolución se encuentra debidamente motivada, el fundamento de hecho de la misma, es que los ciudadanos extranjeros YENNY HARCIRA CHAHUA VALVERDE, RAFAEL MUESES ACEVEDO y **VICTORINO DE LA CRUZ**, se encuentran en el territorio nacional sin documentos que los acrediten legalmente a tal efecto. VICTORINO DE LA CRUZ ingresó a territorio panameño desde el 14 de junio de 1994 y sus documentos se vencieron desde el 14 de agosto del mismo año.

En cuanto los fundamentos de derecho de dicha Resolución, lo son los artículos 36, 60, 65 y 66 del Decreto Ley N° 16 del 30 de junio de 1960:

> "Artículo 65: Los extranjeros que hubieren llegado al país sin haber llenado los requisitos legales de ingreso o que permanecieren en el mismo después de vencer sus visas de transeúntes, turismo o de tránsito sin residencia autorizada, serán puestos a órdenes del Ministerio de Gobierno y Justicia **para ser deportados o para tomar, respecto de ellos, cualquier otra medida que sea de lugar.**" (Lo resaltado es nuestro).

No obstante, el artículo anterior indica que respecto a los extranjeros indocumentados se podrá tomar "cualquier otra medida que sea de lugar", como sería una prórroga para poner al día sus documentos, dichas medidas son a discreción del Director de Migración, que es quien se encuentra autorizado legalmente para resolver los asuntos migratorios en primera instancia (artículo 85) cuando se trate de deportaciones de extranjeros indocumentados o que permanezcan ilegalmente en el país. Esto hace que la motivación de la Resolución de deportación de **VICTORINO DE LA CRUZ** sea adecuada pues efectivamente en su registro de inmigrante visible a fojas 9 y 10 se observa que ingresó al país con visa de turista el 14 de junio de 1994, y el último trámite que hizo en Migración fue la presentación de una prórroga para la visa de turista, fechada 14 de julio de 1994.

En cuanto a la notificación de la Resolución en comento, observamos que aparece en la parte posterior de la misma, debidamente firmada por **VICTORINO DE LA CRUZ** (foja 13). En vista de que éste no anunció su intención de hacer uso de ninguno de los medios de impugnación que le concede la ley migratoria en su artículo 86, la Resolución quedó debidamente ejecutoriada, sin que contra ella proceda recurso alguno.

En vista de lo anterior, y puesto que el Director de Migración tiene la autoridad para decidir esta clase de asuntos y ya que la Resolución cumple con todos las exigencias de la ley, lo que procede es declarar legal la orden de deportación que pesa sobre **VICTORINO DE LA CRUZ**, y que deberá hacerse efectiva el dos (2) de septiembre próximo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la Deportación del ciudadano dominicano VICTORINO DE LA CRUZ.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE SANTO DOMINGO RAMOS CONTRA EL JUEZ DE CIRCUITO DE DARIÉN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado JOSÉ ANTONIO HENRÍQUEZ SOLANO ha interpuesto **Recurso de Apelación** contra la sentencia de 29 de julio de 1996, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante la cual **DECLARA LEGAL** la detención preventiva que actualmente sufre **SANTOS DOMINGO HERRERA RAMOS** como imputado por el delito **"Contra el Patrimonio"** en perjuicio de FERMÍN VARGAS MARTÍNEZ.

La resolución apelada fue dictada por razón de la acción de habeas corpus incoada contra el Juez de Circuito de Darién, toda vez que su proponente señaló que la orden de detención emitida por el Ministerio Público no cumplía con los presupuestos del artículo 2159 del Código Judicial. El funcionario acusado envió al tribunal de habeas corpus los antecedentes del caso relativos a la actuación del Fiscal del Circuito Judicial de Darién sobre la detención de Herrera, concluyendo, luego de su análisis, que la detención es legal, por las siguientes razones:

Ante la Fiscalía de Circuito de Darién compareció FERMÍN VARGAS MARTÍNEZ a denunciar el hurto de un novillo de su propiedad, el cual se encontraba en su potrero ubicado en el Regimiento de Metetí, Corregimiento de Yaviza, Distrito de Pinogana, Provincia de Darién. Señaló que posteriormente vio el novillo en el potrero de **SANTOS HERRERA**, ubicado a unos 25 minutos del suyo. Por esa razón acudió a dicho lugar con el Corregidor Auxiliar y miembros del orden público, verificando que el animal descrito por Vargas tenía un ferrete fresco con el nombre de "Santos", puesto sobre otros dos, uno con el número 4 y el otro con una "G". También se observó al inspeccionar la finca de Vargas que el alambre había sido cortado, de forma que resultaba fácil sacar una res.

Sobre la propiedad y preexistencia del novillo se alude al testimonio de DIÓGENES MORENO UREÑA, quien se lo vendió a Vargas y a lo dicho por el hermano de éste último; además, sostiene el tribunal, que según se desprende de autos, el ganado de FERMÍN VARGAS MARTÍNEZ está distinguido con el ferrete de GRACIELA DE LÓPEZ, registrado en el Municipio de Pinogana.

Así, la resolución apelada finaliza expresando que la detención preventiva procede conforme al artículo 2148 del Código Judicial, ya que el delito imputado es el **"hurto pecuario"**, cuya pena es de prisión que va de 4 a 6 años. Y, tampoco se aprecia que con la actuación del Ministerio Público se hayan violado los derechos constitucionales y legales que SANTOS HERRERA tiene a su favor.

Por su parte el procurador judicial del sindicado cuestiona la resolución dictada por motivo de esta acción constitucional, por las siguientes razones:

> "En el caso que nos ocupa, la sentencia impugnada da por establecida la propiedad y preexistencia del ternero supuestamente hurtada con la declaración de Fermín Vargas Martínez, Diógenes Moreno Ureña (supuesto vendedor del ternero); sin embargo, ninguno de estos dos señores tiene registrado ferrete en la Alcaldía, Cómo puede acreditar el señor Moreno Ureña la propiedad de un animal si él no tiene un ferrete?
>
> Está plenamente establecida la distancia existente entre la finca del señor Vargas Martínez y la del señor Herrera Ramos, la cual se calculó en veinticinco minutos viajando en carro y es necesario atravesar varias fincas y durante ese trayecto NADIE SEÑALA AL SEÑOR HERRERA RAMOS COMO AUTOR DEL CORTE DE LOS ALAMBRES DE LA FINCA DE VARGAS, NI NADIE LO VIO CARGANDO CON EL TERNERO QUE SE DICE HURTADO. Es decir, no hay señalamiento directo.
>
> Otro hecho ignorado por la sentencia recurrida, durante la inspección ocular a las fincas de los señores Vargas y Herrera SE DEMOSTRÓ PLENAMENTE QUE EL SEÑOR HERRERA POSEE VARIOS TERNEROS DE LA MISMA CALIDAD Y COLOR DEL INVESTIGADO COMO HURTADO; sin embargo, en la finca del señor Vargas NO EXISTÍA NI UN SOLO ANIMAL DE ESA CALIDAD Y COLOR.
>
> Otra omisión de la sentencia consiste en ignorar el contenido del certificado expedido por el Alcalde Chepigana donde CERTIFICA que los señores DIÓGENES MORENO UREÑA Y LA SEÑORA GABRIELA DE LÓPEZ NO TIENEN REGISTRO ALGUNO DE FERRETE; sin embargo, le da fuerza legal al telegrama de Pinogana que trae tachado la palabra antecesora de la palabra está; es decir ese telegrama carece de valor probatorio, pero el borrón que bien pudiera ser NO ESTA REGISTRADO EL FERRETE DE LA SEÑORA GABRIELA DE LÓPEZ; porque el adverbio negativo es el desaparecido del mencionado telegrama. Me afirmo en esta idea, porque el alcalde de Pinogana prometió enviar la copia del mismo y nunca cumplió esta promesa. (Ver fojas 42 y 55 del expediente). (F. 33 y 34).

Según se aprecia, las argumentaciones anteriormente transcritas se centran en la incorrecta valoración de las pruebas que obran en el sumario que, a juicio del recurrente, realizó el tribunal de habeas corpus.

El Pleno de la Corte ha reiterado que a través de la acción de habeas corpus no se pueden revisar actuaciones propias del juzgador que ha de resolver la respectiva causa penal, tales como el mérito y el alcance de los diversos medios de prueba.

En consecuencia, a juicio de esta Corporación, la resolución dictada por el a-quo ha evaluado la situación planteada, mediante esta acción constitucional, de acuerdo a los parámetros que para tal fin establece la ley. Es decir, de conformidad con lo preceptuado por los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial. Determinando, en ese sentido, que la detención preventiva es legal, ya que el delito imputado está penalizado con prisión, que supera el mínimo de dos años (hurto-pecuario); fue decretada mediante resolución dictada por autoridad competente (fs. 24), decisión que posteriormente fue mantenida por el mismo funcionario del Ministerio Público, en virtud de todas las pruebas aportadas al expediente que acreditan el cuerpo del delito y vinculan al favorecido con esta acción, Santos Herrera, como autor material del ilícito, según se lee a fojas 38 del expediente antecedente.

Por lo expresado, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de 29 de julio de 1996 dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que declara legal la detención preventiva de SANTOS DOMINGO HERRERA RAMOS.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE HENRY LARRY GARCÍA CONTRA LA FISCAL PRIMERA SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La señora DORIS TELVA VÁSQUEZ ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de **HENRY LARRY GARCÍA** contra la Fiscal Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial.

Librado el mandamiento de habeas corpus, la funcionaria demandada envió a esta Corporación el expediente contentivo de las sumarias que por el delito contra la SALUD PÚBLICA se le sigue a HENRY LARRY GARCÍA y, el informe que a continuación se transcribe:

> "A. Sí, es cierto que ordené la detención preventiva del señor GARCÍA VÁSQUEZ, mediante la resolución calendada cinco (5) de marzo de este año y visible de fojas 39 a 41 del proceso principal, que en su contra se instruye ante esta Agencia del Ministerio Público.
>
> B. Los motivos de Hecho, que dieron origen a la decisión de privar de la libertad preventivamente al señor GARCÍA VÁSQUEZ, se dieron por, o a través de un Operativo encubierto autorizado por esta Fiscalía Superior en Resolución calendada tres (3) de marzo del presente año y en donde se lograra la captura de los señores UBALDINO GARCÍA FIGUEROA, MINERVA FIGUEROA DE INESTROZA (sic) y HENRY LARRY GARCÍA VÁSQUEZ, así como la incautación de dineros y drogas ilícitas (diez envoltorios), tal cual se observa en la diligencia de Allanamiento y Registro y la transcripción de fojas 16

a 20 del proceso principal.

Con respecto a la persona del accionante adicional a lo anterior, existía informe de carácter confidencia que un sujeto el cual se verificó respondía al nombre de HENRY LARRY GARCÍA VÁSQUEZ, con cédula 6-700-1531, era la persona que cooperaba con el trasiego de drogas en el área de la Barriada El Renacimiento y la Esquinas de los Billares Nery (lugar donde se efectuó el operativo antes indicado), haciendo las labores de vigilante y delatando a las unidades de Policía que se acercaban hacia la misma. (Ver fojas 2).

También tenemos que en primera instancia ninguno de los imputados al momento del Operativo y hallazgo de la sustancia ilícita se hizo cargo de la misma, negando su vinculación con el ilícito.

Tomando en consideración todo lo anterior, la Fiscalía consideró que existían adicional a ello indicios de oportunidad, presencia física, móvil delictivo y mala justificación para decretar en base a las pruebas de campo de fojas 12 y 21, las detenciones de todos los implicados, entre ellos el señor HENRY LARRY GARCÍA VÁSQUEZ,

Como constancia a los Honorables señores Magistrados, les indicamos que a los imputados se les recibió declaración indagatoria en sus respectivo momento y todos incluyendo el accionante, negaron la comisión del hecho delictivo en investigación.

Posteriormente, las unidades de Policía que participaron en la investigación y detención de los sumariados, señalan en sus respectivas declaraciones que, todos los implicados tenían relación y conocimiento con el ilícito objeto de instrucción por la Fiscalía.

A páginas 131 se observa el análisis químico de la sustancia encontrada a los implicados GARCÍA y DE INESTROZA (SIC), que arrojó la certificación de Cocaína positiva para 1.43 gramos, en once (11) sobrecitos de la misma.

Por último, podemos revisar una ampliación del señor UBALDINO GARCÍA FIGUEROA, quien dice después de cinco meses de investigación ser el propietario de la droga, pero no explica cómo obtuvo la misma, ni la justificación del porqué se encontraron los billetes autorizados por la Fiscalía en su persona. (F. 10 a 12).

Lo dicho por el funcionario de instrucción se ha podido verificar en los antecedentes adjuntos al expediente contentivo de esta acción de habeas corpus, circunstancias, que a juicio de la Corte, son suficientes para mantener la detención preventiva de HENRY LARRY GARCÍA, puesto que cumple con lo normado en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

En tal sentido, se tiene que el hecho punible es el delito contra la SALUD PUBLICA; que la detención del favorecido con esta acción se efectuó, debido a que se encontraba en el lugar donde se efectuaba una operación encubierta de compra simulada de drogas a otro individuo que estaba con él, aunado al hecho de que en su contra existen informes de inteligencia que lo señalan como colaborador en el trasiego de drogas que se verifica en dicha área.

Debido a que el hecho investigado trata sobre actividades ilícitas de tráfico y venta de drogas y por los graves indicios que existen contra el prenombrado HENRY LARRY GARCÍA VÁSQUEZ (a) ÑOPO, considera la Corte que su detención preventiva es legal, sin perjuicio de que posteriormente puedan surgir hechos que varíen su condición actual.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención de HENRY LARRY GARCÍA VÁSQUEZ y ordena que sea puesto nuevamente a órdenes de la FISCAL PRIMERA SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE KWOK HUNG LEÓN NG Y WING LEUNG LEÓN YIP EN CONTRA DEL DIRECTOR DE MIGRACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Gonzalo Antonio Moncada Luna ha promovido acción de habeas corpus a favor de los señores KWOK HUNG LEÓN NG y WING LEUNG LEÓN YIP, quienes permanecen detenidos a órdenes de la Dirección Nacional de Migración.

Mediante auto de 25 de julio de 1996 se libró mandamiento de habeas corpus y se le requirió al funcionario demandado, que en el término de la Ley rindiera un, informe sobre las causas de la detención.

El funcionario demandado contestó el mandamiento de habeas corpus librado, mediante Nota N° DNMYN-253-96 de 31 de julio de 1996, recibida en este despacho el 7 de agosto de 1996.

Estando el presente negocio en el despacho del Magistrado ponente, el licenciado Gonzalo Antonio Moncada Luna desistió de la acción de habeas corpus promovida, mediante escrito fechado 31 de julio de 1996 y presentado en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia el 7 de agosto de 1996.

Como quiera que toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente conforme lo establece el primer párrafo del artículo 1073 del Código Judicial, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considera que debe acogerse el desistimiento presentado, no sin antes dejar constancia de que el Pleno de esta Corporación de Justicia resolvió otro recurso de habeas corpus promovido a favor de los señores Kwok Hung León NG y Wing Leung León Yip, contra el señor Director Nacional de Migración, por medio de Sentencia fechada el 6 de junio de 1996.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado por el licenciado Gonzalo Antonio Moncada Luna dentro de la acción de habeas corpus promovida a favor de los señores Kwok Hung León NG y Wing Leung León Yip.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EVELIO JIMÉNEZ EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR

DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada ENEIDA YEPES RODRÍGUEZ, solicitó a la Corte Suprema de Justicia presentó recurso de habeas corpus en favor del señor EVELIO JIMÉNEZ en contra del FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA.

Librado el mandamiento pedido contra el funcionario, se le ordenó poner a los detenidos a órdenes de esta Corporación. A su vez, se le mandó, dentro del término de dos (2) horas contados a partir de la notificación, presentar el informe escrito al que hace referencia el artículo 2582 del Código Judicial.

El Fiscal Auxiliar de la República rindió el informe solicitado en donde expresa:

"...

A) No fue ordenada la detención preventiva del señor EVELIO JIMÉNEZ, ni verbalmente ni por escrito. El prenombrado se encuentra en libertad desde el 8 de los corriente, en virtud de Oficio N° 11947 de esa fecha, girado por esta Agencia del Ministerio Público.

B) No al lugar en virtud del punto A).

C) No al lugar en virtud del punto A).

..."

Como se desprende de lo expresado por el funcionario contra quien se libró el mandamiento de habeas corpus, contra EVELIO JIMÉNEZ, no se ha ordenado detención preventiva, por lo que se debe entender, que los mismos, no se encuentran privados de su libertad corporal, motivo por le cual debe declararse terminado este procedimiento extraordinario.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EL CESE del procedimiento en esta acción de habeas corpus presentada a favor del señor EVELIO JIMÉNEZ.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ARCELIO ELÍAS BERNAL ÁVILA, CONTRA EL FISCAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Gloria Conte de Quirós, Defensora de Oficio del Circuito de Coclé, en representación del señor **ARCELIO ELÍAS BERNAL ÁVILA**, sindicado por supuesto delito contra la salud pública, presentó acción de Habeas Corpus contra el **FISCAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL** con motivo de la resolución emitida el 13 de abril de 1996, mediante la cual se decreta la privación de libertad de su

representado.

El Pleno de la Corte mediante fallos de 18 y 31 de julio del año en curso, ha tenido la oportunidad de examinar la misma orden de detención preventiva decretada por la Fiscalía Superior del Segundo Distrito Judicial, al resolver sendas acciones de habeas corpus presentadas por Tomás Arnulfo Ábrego Rivera y José Antonio Sánchez Sánchez, quienes fueron afectados en su libertad ambulatoria por medidas cautelares personales expedidas por la misma autoridad y por el mismo acto.

Como respuesta al mandamiento de Habeas Corpus, el Fiscal Rolando Rodríguez Chong, señaló que expidió la orden de detención conforme lo exige el artículo 21 constitucional, a través de providencia razonada y debidamente motivada, con fecha de 13 de abril de 1996 y en el caso específico de ARCELIO ELÍAS BERNAL ÁVILA, a quien apodan "Planeta", fue detectado e identificado por varios agentes de la policía cuando lanzó un cartucho en las inmediaciones del puente de la Barriada San José de la ciudad de Penonomé, el cual contenía 31 envoltorios de papel amarillo con hierba seca que se presume sea marihuana y una cajeta de fósforos contentiva de 10 carrizos plásticos transparentes con polvo blanco, que dio como resultado en el examen de laboratorio especializado en drogas del Departamento de Criminalística de la Policía Técnica Judicial, la cantidad de 24.47 gramos de marihuana y 0.70 gramos de cocaína (fs. 149). Adjunto al informe se remitió el expediente que recoge las diligencias de investigación, propias de la fase instructoria del proceso penal, en las que se incluye un número considerable de declaraciones de los agentes captores y de otras personas que fueron mencionadas porque tenían conocimiento de lo sucedido el día de la aprehensión.

Las declaraciones de los agentes son contestes en señalar que fue ARCELIO ELÍAS BERNAL ÁVILA quien arrojó la bolsa que contenía la droga antes descrita y que el seguimiento de su persona se debió a informes previos recibidos sobre su posible vinculación a actividades ilícitas.

La accionante al fundamentar su pretensión se refiere a la violación del derecho a circular libremente y a la mala práctica de la policía del lugar de considerar que toda persona que tiene un antecedente penal cuya sentencia ha cumplido, es un sospechoso de cualquier acto ilícito que se investigue.

Al tenor de la legislación vigente, sobre delitos contra la seguridad colectiva, en su modalidad de infracciones contra la salud pública por posesión, tráfico o consumo de drogas ilícitas, se han incorporado variantes que difieren de algunos principios procesales y que permiten acciones encubiertas, inversión de la carga de la prueba, vigilancia estacionaria, seguimiento y hasta escuchas telefónicas con miras a perseguir la nueva criminalidad que ha penetrado todas las capas sociales, en todas las edades, profesiones y oficios y que se ha convertido en un flagelo social de cuidado. Sólo esta amenaza permite que se proceda en la forma censurada, siempre que no se registren excesos, abusos o violaciones flagrantes de la ley por parte de los investigadores.

En el presente caso, BERNAL ÁVILA ha sido identificado por varios agentes y se le señala como la persona que arrojó la bolsa plástica que contenía la droga. Corresponderá, en el momento procesal oportuno, a la autoridad competente, determinar si la cantidad incautada es demostrativa de que se destinaba a traspaso o venta y su calificación conforme a la ley penal.

En la etapa de la investigación, la medida cautelar adoptada resulta legal por cuanto fue decretada en resolución motivada, por la autoridad competente y por un hecho que lo permite.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la orden de detención preventiva decretada contra ARCELIO ELÍAS BERNAL ÁVILA en este caso y dispone que sea puesto nuevamente a órdenes de la FISCALÍA SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS A. CERA RODRÍGUEZ EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Edilberto Vásquez Atencio, actuando en representación de CARLOS A. CERA RODRÍGUEZ, ha interpuesto acción de habeas corpus contra el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Encontrándose en estado de resolver la acción de habeas corpus que nos ocupa, observa el Pleno que el Lcdo. Edilberto Vásquez Atencio presentó el día 16 de agosto de 1996, escrito mediante el cual desiste de la acción interpuesta. Dado que el artículo 1073 del Código Judicial le otorga el derecho para desistir expresa o tácitamente del incidente, recurso o la demanda que haya interpuesto una persona, es perfectamente viable el desistimiento de la presente acción.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento de la acción de habeas corpus interpuesto por el Lcdo. Edilberto Vásquez Atencio en representación de CARLOS CERA RODRÍGUEZ.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE AVELINO ASPRILLA EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La señora NATIVIDAD CRUZ NAVARRO, promovió acción de habeas corpus a favor del señor AVELINO ASPRILLA, quien se encuentra detenido a órdenes de la Fiscalía Auxiliar de la República, acusado de participar en la comisión de delito homicidio de quien en vida se llamó RUBÉN DARÍO ORTEGA GÓMEZ, hecho ocurrido el 4 de julio de 1996. Librado el mandamiento, se ordenó al funcionario demandado pusiera a órdenes de la Corporación al detenido y rindiera, en el término de dos horas, contados a partir de la notificación, el informe correspondiente y remitiera la actuación.

La Fiscalía remitió copia del expediente e informó que efectivamente se mantenía la detención de AVELINO ASPRILLA VÁSQUEZ. Así manifiesta:

"...

a. Si, es cierto que se ordenó la detención del señor AVELINO ASPRILLA VÁSQUEZ (a) "Chichi"; y se ordenó por escrito, tal y como consta en el proveído fechado seis (6) de agosto del presente año. (Cfr. fojas 97 a 100).

b. Constan en el sumario, diversos informes realizados por los miembros de la Policía; así como la declaración jurada del señor JOSÉ AMET RODRÍGUEZ MORALES, también miembro de la Policía Nacional, y quien corrobora, que al momento de los intercambios de disparos, era el señor ASPRILLA VÁSQUEZ (a) "Chichi", quien disparaba desde la azotea. (Cfr. fojas 64 y 76).

c. No se encuentra bajo nuestra custodia, más, sin embargo, fue puesto a órdenes de ésta Agencia del Ministerio Público, en virtud al oficio N° 1451-96, de la Policía Técnica Judicial, con fecha del día seis (6) de agosto del presente año, y en el cual se nos indicara que el mismo se encuentra recluido en el Hospital Santo Tomás." ..."

Al revisar las constancias procesales enviadas a esta Corporación, encuentra la Corte que en la investigación que realiza el Ministerio Público por el delito contra la Vida y la Integridad Personal en perjuicio de RUBÉN DARÍO ORTEGA GÓMEZ, se advierte que el 15 de julio el Director General de la Policía Nacional, recibe oficio N° 1202-DIIP-96, el cual en su parte medular expresa lo siguiente:

"...
Una fuente de mucha confianza que se encontraba en la azotea del edificio el día del homicidio del Cabo ORTEGA en Curundú, manifiesta que había una aproximado de 25 personas en la misma, y que al lugar subió el sujeto apodado "CHICHI", el cual vestía pantalón negro con camiseta blanca y quien escondía un bulto entre la pretina de su pantalón, manifestándole a los que se encontraban en la azotea que "Estaban mal ubicados", retirándose ese personal progresivamente, quedando en la misma "CHICHI". A los pocos segundos se escucharon varias detonaciones en ese lugar. ..."

No resulta inadvertido para el Pleno, la declaración jurada del señor JOSÉ AMET RODRÍGUEZ MORALES, quien asegura haber visto al sujeto de apodo "chichi", hacer disparos desde la azotea. Y así lo expresa:

"... Resulta señor Inspector, que el día miércoles tres de julio del presente (3-7-96), yo me fui temprano en la tarde hacer unas compras a el Machetazo, compre unos alimentos para mi casa y llevarme algo para el interior ya que entré en Vacaciones, me iba para Juan Díaz de Antón ya que mis padres viven allá luego que hice la compra llegué como a las cinco y treinta con unas cajetas y las dejé en la tienda de Kiue, eso es abajo del edificio Verde donde yo vivo, dejé eso ahí para recogerla en Viernes que me iba para el interior, el jueves me queda todo el día en la casa. Al parecer ese día jueves cuatro (4), mi señora me hizo un comentario de que habían tirado a un miembro de la Policía en la Multi amarilla porque parece que habían robado, eso fue como a las seis y algo de la tarde (6:?? p. m.), de ahí había un operativo por parte de la Policía, luego ya pasado cierto tiempo yo escuché una ráfaga de tiros y entonces noté que uno de mis hijos no estaba, era mi hijo POCHOLO de 12 años al ver que no estaba ahí y lo halé por el brazo, se trataba de que en la azotea había un sujeto disparando hacia abajo, es más mi hijo se cayó y se raspó el brazo, y el sujeto que disparaba era el mentado "chichi", lo hacía de la azotea hacia abajo, de ahí me fui para mi apartamento con el niño y ahí nos quedamos, eso fue lo que yo vi. ..."

Por otra parte, es importante destacar que dentro del sumario, reposa un informe de novedad fechado el 9 de julio de 1996, enviado por el TENIENTE DAVID RAMOS, al CAPITÁN OMAR ALVARADO, el mismo se refiere a los detalles de la captura del sujeto AVELINO ASPRILLA, y en su parte final, con el subtítulo de **NOTA** nos

dice:

> "NOTA: Cabe señalar que el sujeto ABELINO ASPRILLA manifestó en todo momento que el sujeto de nombre PLUTARCO SAAVEDRA "alias" HUESITO, tiene en su poder el Arma Homicida. ..."

De lo anterior se desprende que el sindicado AVELINO ASPRILLA, es sospechoso del delito que se le imputa, él mismo reconoce que hubo un hecho delictivo, que existe un arma homicida, y da el nombre de quien posiblemente la tiene en su poder, lo cual lo involucra directamente con el hecho punible a él adjudicado.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención de AVELINO ASPRILLA y ORDENA que el mismo sea puesto nuevamente a órdenes de la Fiscalía Auxiliar.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HIPÓLITO MARTÍNEZ, JULIO JALLER Y ELIGIO MARTÍNEZ EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Adolfo Mejía Cáceres presentó acción de habeas corpus a favor de los señores **HIPÓLITO MARTÍNEZ, JULIO JALLER y ELIGIO MARTÍNEZ**, quienes se encuentran detenidos a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, por la supuesta comisión de delito contra la salud pública.

El apoderado judicial de los beneficiarios de la presente acción constitucional sostiene que la detención de sus representados es ilegal, porque no existen elementos probatorios que los vincule con el delito por el cual se les investiga.

Acogido el recurso, se libró mandamiento contra la autoridad acusada, quien respondió mediante Oficio N° 8109 de 1° de agosto de 1996, en el que informa lo siguiente:

> "PRIMERO: Sí es cierto que ordené la **DETENCIÓN PREVENTIVA** de los señores **HIPÓLITO MARTÍNEZ, JULIO JALLER y ELIGIO MARTÍNEZ** mediante providencia fechada veinte (20) de julio de mil novecientos noventa y cinco (1995).
>
> SEGUNDO: Los fundamentos de hecho y de derecho que nos llevaron a tomar la decisión de ordenar la **DETENCIÓN PREVENTIVA** de los señores **HIPÓLITO MARTÍNEZ, JULIO JALLER y ELIGIO MARTÍNEZ**, radica en lo siguiente:
>
> Este proceso penal se inicia con las informaciones que recibe la Policía Técnica Judicial de Panamá en el sentido de que en un taller

ubicado en la calle P del Distrito de San Miguelito, existe un taller en donde están ocultas dentro de automóviles, sustancias ilícitas, que a dicho taller acuden sujetos de nacionalidad colombiana quienes se entrevistan con el propietario del referido taller.

Por lo anterior se monta un operativo de vigilancia del lugar, en donde detectives de la División de Narcóticos de la Policía Técnica Judicial, logran detectar la llegada al citado lugar, de un vehículo de color blanco, anotan la matrícula del mismo, y observan cuando los ocupantes entablan conversación con dos sujetos que custodiaban la entrada al inmueble.

Por lo anterior el despacho lleva a cabo diligencia de allanamiento al taller señalado, lográndose incautar dentro de un auto marca Chevrolet Blazer veintidós (22) paquetes de COCAÍNA, se llevan a cabo las detenciones de los señores FRANCISCO ANTONIO RODRÍGUEZ y FRANCISCO LIGUAS BATISTA, quienes se encontraban en las inmediaciones del lugar, y fueron las personas que se entrevistaron con los individuos del auto color blanco que había llegado al lugar con anterioridad, se determina que el propietario del mencionado lugar es el señor ROBERTO ANTONIO PIMENTEL.

Las investigaciones revelaron que el automóvil que llegó al taller antes del allanamiento registrado con la matrícula de circulación número 061710 es propiedad de la empresa de alquileres Hertz ubicada en la calle 55 El Cangrejo, de esa forma logran obtener información en el sentido de que la persona que hizo el contrato de alquiler del vehículo fue el ciudadano colombiando HIPÓLITO MARTÍNEZ y como conductor adicional JULIO JALLER GONZÁLEZ, los cuales residen en el Edificio Villa del Carmen, Calle J. Fábrega apartamento número 3-E, teléfono 263-3198.

Consecuentemente el despacho lleva a cabo diligencia de allanamiento al referido apartamento, se logra la detención de los señores colombianos HIPÓLITO MARTÍNEZ, JULIO JALLER y ELIGIO MARTÍNEZ, se encuentra dentro del inmueble una llave de un auto Toyota, el cual se ubica en los estacionamientos y al ser revisado se encuentran dentro del mismo cuarenta (40) fusiles AK-47, cajas de municiones y accesorios de guerra.

El vehículo en donde se incautan las armas, es una camioneta Toyota Land Cruiser, al verificar la matrícula de la misma resultó alquilada por el ciudadano colombiano CÉSAR ECHEVERRY URIBE y como segundo conductor el señor JULIO JALLER. (Fojas 18 y 19).

Adjunto al informe parcialmente transcrito, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas remitió copia autenticada del sumario que se adelanta contra los beneficiarios del presente habeas corpus y otras personas, por delito contra la salud pública.

Dentro de ese expediente, de foja 266 a 224, consta providencia dictada por esa Fiscalía el 20 de julio de 1995, mediante la cual se ordena la detención preventiva de los señores HIPÓLITO MARTÍNEZ, JULIO JALLER, ELIGIO MARTÍNEZ y otros y se dispone, igualmente, tomarles declaración indagatoria, las cuales son consultables de foja 314 a 347 de ese mismo cuaderno.

Es preciso, entonces, que la Corte realice un análisis del proceso, con el objeto de determinar si la detención preventiva que sufren los señores MARTÍNEZ, MARTÍNEZ y JALLER, cumple con lo que establecen los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

En relación con la primera disposición legal se observa que se trata de delito contra la salud pública, con características de tráfico internacional de drogas y contrabando de armas que tiene pena mínima privativa de libertad superior a dos años.

Por su parte, el artículo 2159 del Código Judicial exige que la detención preventiva debe ser decretada por medio de providencia en la que se debe expresar: 1) el hecho imputado; 2) los elementos probatorios para la comprobación del hecho punible y; 3) los elementos probatorios que figuran en el proceso contra la o las personas cuya detención se ordena.

A foja 358 se encuentra el dictamen pericial de la droga incautada, realizado por el Laboratorio Técnico Especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial, en el que se certifica que "las muestras analizadas resultaron POSITIVAS, para la determinación de COCAÍNA, en la cantidad de 22,630.00 Gramos." Además, de foja 83 a 86 consta informe de comisión de la División de Estupefacientes de la Policía Técnica Judicial, fechado 20 de julio de 1995, en el que se da cuenta de la diligencia de allanamiento practicada en el Apartamento 3-E del Edificio Villa del Carmen, ubicado en la Calle J. Fábrega, como consecuencia de la cual se incautaron cuarenta (40) fusiles AK-47 y varias cajas de municiones vivas y se detuvo a los señores HIPÓLITO MARTÍNEZ, ELIGIO MARTÍNEZ y JULIO JALLER.

De lo anteriormente expuesto se colige que se ha cumplido con los elementos que requiere el citado artículo 2159 del Código Judicial, ya que existen suficientes elementos probatorios que vinculan a los beneficiarios del presente habeas corpus como miembros de una organización destinada al tráfico internacional de sustancias ilícitas y de armas y, por tanto, con el delito que se investiga.

En consecuencia, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de los señores ELIGIO MARTÍNEZ, HIPÓLITO MARTÍNEZ y JULIO JALLER y ORDENA que sean puestos, nuevamente, a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROSA PEÑA DE FERNÁNDEZ EN CONTRA DEL DIRECTOR DE MIGRACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Ricardo Julio Malek Bourdett, en ejercicio del poder conferido por Alfonso Fernández Delgado, interpuso acción de habeas corpus a favor de la señora **ROSA PEÑA DE FERNÁNDEZ**, por considerar que fue privada de su libertad personal en forma ilegal por unidades de la Sección de Investigaciones del Departamento Nacional de Migración.

Acogida la acción de habeas corpus, se libró el mandamiento correspondiente, respondiendo el funcionario acusado de la siguiente forma:

> "a) Es cierto que ordenamos la detención de la señora ROSA PEÑA DE FERNÁNDEZ, de nacionalidad dominicana. La misma fue detenida por la Policía Nacional del Aérea A, San Felipe y puesta a nuestras órdenes mediante nota del 16 de junio de 1996.
>
> b) Los motivos de hecho y de derecho en que se fundamenta la

detención de dicha ciudadana son:

PRIMERO: Que, el día 5 de junio de 1996, la señora ROSA PEÑA DE FERNÁNDEZ fue detenida por unidades de la Policía Nacional dentro del Bar Las Vegas, ejerciendo la prostitución clandestina, según el informe que dichos funcionarios nos remitieran.

SEGUNDO: Que, posteriormente esta Institución procedió a detener a dicha ciudadana a fin de verificar el status migratorio de la misma, encontrando que desde septiembre de 1992, la señora Peña se ha encontrado indocumentada y por lo tanto, sin contar con ningún documento que acredite su residencia legal en el país, mucho menos podría ejercer la profesión de alternadora.

TERCERO: Que, para poder ejercerla legalmente, debe de llenarse ciertos requisitos que esta Institución exige, los cuales en ningún momento han sido presentados ante esta institución a favor de la mencionada ciudadana.

CUARTA: Que, sí es cierto que la señora ROSA PEÑA DE FERNÁNDEZ, contrajo matrimonio con el señor Alfonso Fernández Delgado el día 6 de marzo de 1996, tampoco es menos cierto que la misma haya tenido intenciones de arreglar su status de casada con panameño, ya que ante esta Dirección no hubo muestra alguna de arreglar su legalidad en el país por parte de la señora antes mencionada.

QUINTA: Que, además el hecho de estar casada con nacional no le da derecho por sí solo a optar por la residencia en el país.

SEXTO: Que, es importante mencionar que frente a lo dispuesto por esta Dirección, la señora ROSA PEÑA DE FERNÁNDEZ, hizo uso de todos los recurso a los que tenía derecho, de acuerdo a lo establecido por el artículo 86 del Decreto Ley, tal cual consta en las copias que adjuntamos."

Consta a fojas 16 del expediente que la señora **ROSA PEÑA DE FERNÁNDEZ**, de nacionalidad dominicana, fue detenida por miembros de la Policía Metropolitana en operativo realizado el día 6 de junio de 1996, dentro del Bar las Vegas por estar practicando la prostitución clandestinamente (en áreas rojas). Posteriormente, verificado el status migratorio de la detenida, la Dirección Nacional de Migración y Naturalización mediante resolución de 10 de junio de 1996 libra orden de detención en contra de su persona, por no portar documentos que acreditaran su permanencia legal en el país, hasta tanto fuera aclarado su status migratorio o se tomara cualquiera de las medidas establecidas en el Decreto Ley N° 16 de 30 de junio de 1960.

Es así como a foja 15 del expediente consta que la señora **ROSA PEÑA DE FERNÁNDEZ** fue puesta a órdenes del Director de Migración y Naturalización el día 16 de junio de 1996, y mediante resolución 3579 de 19 de junio de 1996 se resuelve deportarla a su país de origen.

Igualmente consta a foja 12 del expediente que la última prórroga concedida a **ROSA PEÑA**, tenía plazo de vencimiento para el día 14 de septiembre de 1992, y no hay prueba alguna que acredite que desde entonces haya realizado trámite alguno para legalizar su status migratorio y más aún su status de casada con panameño, ya que, sin embargo, sí adjunta certificado de matrimonio contraído con el señor **ALFONSO FERNÁNDEZ DELGADO**, de nacionalidad panameña, el día 6 de marzo de 1996.

Al respecto debe reiterar este Tribunal que el matrimonio de extranjera o extranjero con nacional panameño no otorga de por sí derecho a residencia en la República de Panamá; y que por razones de salubridad, moralidad, seguridad pública, economía nacional o necesidad social, se podrá negar la entrada o permanencia en el país a los extranjeros casados con nacional panameño de conformidad con lo preceptuado en el artículo 38 del Decreto Ley 16 de 1960.

Por su parte el artículo 53 del Decreto Ley 16 de 1960, reformado por el artículo 20 del Decreto Ley 13 de 1965, autoriza la aprehensión de los extranjeros que se encuentren en el territorio nacional sin ser residentes autorizados, a lo que la Corte sólo añade que tales detenciones han de efectuarse de conformidad con las formalidades legales y constitucionales consagradas en nuestro ordenamiento, como lo ha sido la realizada contra la señora **ROSA PEÑA DE FERNÁNDEZ**, hasta tanto se aclare su status migratorio o se tome cualquiera de las medidas establecidas para estos casos.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención de ROSA PEÑA DE FERNÁNDEZ y ordena que sea puesta nuevamente a órdenes del Director Nacional de Migración.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DAYANARA GARCÍA Y ALEXIS BRITTON EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **Carlos Herrera Morán** ha interpuesto recurso de habeas corpus a favor de **DAYANARA GARCÍA y ALEXIS BRITTON**, quienes se encuentran supuestamente involucrados en un delito contra la salud pública, y contra el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas, dado que considera que la detención de que fueron objeto es ilegal.

ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA

Señala el interesado que el día 17 de julio de 1996, en horas de la tarde, se produjo un hurto en la residencia de la familia García ubicada en el Distrito de San Miguelito. Que al momento de perpetrarse el ilícito se encontraba dentro de la residencia la joven **Bertina García**, quien fue golpeada y ultrajada por los delincuentes. Que del inventario de los bienes que se encontraban dentro del inmueble al momento del acto delictuoso, se estableció que los autores del hurto, se apoderaron de tres collares de oro y de quinientos balboas (B/.500.00). Que el mismo 17 de julio, **DAYANARA GARCÍA**, propietaria de los bienes afectados, compareció a la agencia de la Policía Técnica Judicial (P. T. J.) para presentar denuncia criminal y colaborar con la captura de los malhechores.

Sigue manifestando el recurrente, que la joven **DAYANARA GARCÍA**, encontró que en la Policía había un cuaderno que los autores del ilícito habían dejado en la escena del crimen, y con esa pista dio con el señor **Ventura Delgado Olivero**, quien era el dueño del automóvil que se utilizó para el hurto. Que el señor **Delgado Olivero** le prestó el auto a **José Luis Delgado Lewis**, quien aceptó haber participado en el hurto. Que de la declaración rendida por el señor **Delgado Lewis**, éste insinúa que el hurto tenía como móvil apoderarse de cierta droga que se encontraba en la vivienda afectada, y que sus cómplices le remuneraron su colaboración con una porción de droga. También señaló el precitado que nunca entró a la casa, y que en todo momento se mantuvo a más de 100 metros del lugar

con el automóvil encendido para la fuga.

Indica igualmente el demandante, que de manera insólita los agentes de la Policía Técnica Judicial (P. T. J.) de San Miguelito le dieron credibilidad a las declaraciones de **José Luis Delgado** y así de manera inesperada las víctimas-denunciantes del hurto pasaron a procesados e imputados, es decir se ordenó la detención de **DAYANARA GARCÍA y ALEXIS BRITTON.** Que la Fiscalía de Delitos relacionados con Drogas, al ordenar la detención preventiva de **GARCÍA Y BRITTON** lo hizo apoyándose en dos informes rendidos por la Policía Técnica Judicial (P.T.J) de San Miguelito, en donde se afirma que los menores **Bertina García y Javier García** habían aceptado en entrevista la existencia de drogas; y que también se apoyó en la declaración de **José Luis Delgado**, cómplice del hurto quien manifestó que las personas que lo acompañaron en este acto delictuoso, le dijeron que en la casa había droga, y al momento de ser recompensado por su colaboración, le hicieron entrega de unos gramos de droga.

Finalmente concluye el actor, que la detención preventiva que padecen los jóvenes **DAYANARA GARCÍA y ALEXIS BRITTON** es arbitraria, ilegal y violatoria de claras garantías constitucionales, ya que el artículo 2416 del Código Judicial establece que `si resulta del proceso que se ha cometido algún otro delito, se compulsará copia de lo conducente y se remitirá al agente del Ministerio Público respectivo para que lo investigue luego de que se dicte la sentencia de primera instancia y que en este negocio el partícipe del ilícito transformó al denunciante en procesado; que la orden de detención preventiva no reúne los requisitos de que trata el artículo 2159 del Código Judicial. Que no existen elementos probatorios que comprometan a **DAYANARA GARCÍA y ALEXIS BRITTON**, dado que el artículo 907 del Código Judicial preceptúa que no tendrá fuerza la declaración del testigo que depone sobre algún hecho oído a otros; y que las declaraciones vertidas por **Bertina García y Javier García** fueron recibidas en contravención del artículo 528 del Código de Familia, ya que esta disposición prohíbe a los agentes de la Fuerza Pública y de la Policía Técnica Judicial (P. T. J.) realizar interrogatorio a los menores, y sus declaraciones juradas deben ser recibidas con las garantías legales. Además de que los menores al declarar dijeron que nunca hablaron de asuntos relacionados con narcóticos, por lo que no se puede dar valor legal al informe de la Policía.

INFORME DEL FISCAL ESPECIAL

Acogido el presente recurso de habeas corpus, el Sustanciador procedió a librar mandamiento de habeas corpus contra el Fiscal Especial en Delitos de Droga, quien contestó a las interrogativas elaboradas por este Tribunal, mediante oficio N° 8193 de 12 de agosto de 1996. Efectivamente, el funcionario de instrucción indicó, que el 25 de julio de 1996 fue decretada la orden de detención preventiva de **DAYANARA GARCÍA y ALEXIS BRITTON.** Que los fundamentos de hecho que obligaron a tomar dicha medida, obedeció a que el 17 de julio de los corrientes los jóvenes **DAYANARA DEL CARMEN GARCÍA PÉREZ, y Bertina Heidi García Pérez**, esta última menor de edad, presentaron una denuncia ante la Policía Técnica Judicial (P. T. J.) en San Miguelito, relacionado con la posible existencia de un delito de robo a mano armada del que fueron objeto por dos sujetos el día anterior e informaron que los desconocidos lograron llevarse tres (3) collares de oro y la suma de quinientos balboas (B/.500). Que la joven **DAYANARA GARCÍA**, indicó que los asaltantes olvidaron un cuaderno con números telefónicos, entre los cuales estaba uno que correspondía a **Ventura Delgado**, quien acude a la Policía Técnica Judicial (P. T. J.) en San Miguelito, y señala que es el dueño de la camioneta Toyota Corolla color celeste la cual el día anterior se la había prestado a su nieto de nombre **José Luis Delgado Lewis. Delgado Lewis** al ser investigado, manifestó que había participado en los hechos que daban inicio a esta investigación, pero que el móvil del asalto no fueron los artículos denunciados (collares, dinero), sino el robo o **tumbe** de cierta cantidad de droga que las jóvenes denunciantes mantenían en su casa. Que posteriormente **Bertina Heidi García Pérez** se retracta de lo denunciado en un principio, e indicó que su hermana mayor, le guardaba dos (2) Kilos de cocaína a su novio de nombre **ALEXIS BRITTON**, lo que motivó que **Bertina García**, se lo comunicara a su novio de nombre **Eduardo Basil**, quien a su vez busca a los señores **José Luis Delgado** y a **Michael Altamirano** y a otros más para hacer ver a los vecinos que se estaba efectuando

un robo a mano armada, y así justificar ante su hermana mayor y ante el novio de ésta la pérdida de la droga.

Al rendir declaración indagatoria el señor **Delgado**, señaló que **Michael Altamirano** lo solicitó para que transportara a unos sujetos con el fin de dar un **tumbe** de drogas, ya que el asunto era fácil, puesto que la dueña de la casa estaba anuente a tal acción, por lo que luego procedieron y se repartieron la droga. Que el señor **Delgado Lewis** escondió parte de la mercancía en la nevera de su casa, y la misma fue entregada posteriormente a la Policía Técnica Judicial (P. T. J.).

Que el fundamento de derecho para ordenar y mantener la detención preventiva de los señores **DAYANARA GARCÍA y ALEXIS BRITTON** se encuentra consagrado en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

Para finalizar, señala el fiscal Especial que **ALEXIS BRITTON** se le encontró en posesión de la tarjeta de crédito American Express N° 3726 984508 01023 a nombre de Gabriel Dean, que de acuerdo a las investigaciones que adelanta Policía Técnica Judicial (P. T. J.), fue reportada como robada.

ANÁLISIS DEL TRIBUNAL DE HABEAS CORPUS

El Pleno de la Corte al examinar los argumentos expuestos por el apoderado judicial de los jóvenes **DAYANARA GARCÍA y ALEXIS BRITTON**, y al verificar el informe del Fiscal Especial de Drogas, es del criterio que le asiste la razón a la parte actora, en el sentido de que la detención preventiva decretada contra los precitados, no reúne los requisitos mínimos para que la medida cautelar mencionada proceda. Esto lo decimos por dos razones: en primer lugar, y esto está bien claro dentro del expediente, proveniente del Ministerio Público, y en el informe del Fiscal Especial de Drogas, el fundamento utilizado para ordenar la detención de **GARCÍA y BRITTON**, es el informe de entrevista de la menor **Bertina Heidi García Pérez**, quien tiene 17 años de edad. Este informe fue presentado por varios inspectores y detectives de la Policía Técnica Judicial (P. T. J.), Agencia de San Miguelito, y en el mismo se señala que la joven **Bertina Heidi García Pérez** declaró que todo fue planeado por un primo de su novio, llamado Michaell Altamiranda, para que todo pareciera un robo a mano armada, ya que ella había detectado que el novio de su hermana **DAYANARA**, de nombre **ALEXIS BRITTON**, había llevado dos bultos de color chocolate, los cuales escondió debajo de la cama.

Dentro del expediente no consta que la precitada menor haya manifestado directamente los hechos arriba mencionados, al contrario, consta a foja 93 que **Bertina Heidi García**, ante el Fiscal de Drogas, indicó que jamás había declarado lo que reposa en el informe de entrevista antes citado.

Por otro lado, en lo que respecta a la declaración de **José Luis Delgado**, quien participó del supuesto robo, no señala directamente a **DAYANARA GARCÍA y ALEXIS BRITTON** como involucrados en el hecho ilícito de tenencia de drogas, más bién sólo se limita a indicar que un joven llamado **Michael** le dijo que una muchacha tenía guardada droga en su casa y que le pertenecía a su cuñado. Inclusive él no vio a la persona o a las personas que se encontraban en el inmueble en donde se llevó el supuesto robo a mano armada, pues como lo indica en sus declaraciones, él se encontraba lejos del lugar, cincuenta metros (50) y que lo que sabe, lo escuchó de los otros compañeros que perpetraron el acto delictivo.

Estas afirmaciones por parte del joven **José Luis Delgado Lewis** no constituyen fundamento suficiente para ordenar un arresto, y menos cuando las personas que se presumen involucradas no han sido determinada claramente como las responsables del delito que se les imputa.

Por último, cabe destacar que se llevó a cabo una diligencia de allanamiento, por orden del Fiscal Especial de Drogas, en casa de **DAYANARA GARCÍA**, y no se encontró nada dentro de la residencia, que relacionara a la joven precitada con el ilícito que se le atribuye (ver foja 24). Hay que recordar que

parte de la droga fue entregada a las autoridades por **Delgado Lewis**, quien participó en el robo.

En conclusión, en el expediente no consta prueba alguna que incrimine a los detenidos por orden del Fiscal Especial de Drogas, como lo son **DAYANARA GARCÍA y ALEXIS BRITTON**, esta situación vulnera los requisitos previos estatuídos en el artículo 2159 del Código Judicial, por lo que a esta Superioridad no le queda otra alternativa que considerar ilegal la detención.

Por las consideraciones expuestas, los Magistrados que integran el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARAN ILEGAL la detención ordenada por el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas contra DAYANARA GARCÍA y ALEXIS BRITTON.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DOMINICA BERTRE EN CONTRA DEL DIRECTOR DE MIGRACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Lcdo. Gastón G. Garrido, actuando en representación de DOMINICA BERTRE, ha interpuesto recurso de habeas corpus contra el Director Nacional de Migración y Naturalización.

Librado el mandamiento de habeas corpus, dicho funcionario contestó mediante la Nota N° DNMYN-245-96 de 24 de julio de 1996, lo siguiente:

> "a) Es cierto que ordenamos la detención de la señora DOMINICA BERTRE, de nacionalidad dominicana. La misma fue remitida a este Despacho por la Corregiduría de Pueblo Nuevo, el día 13 de julio de 1996.
>
> b) Los motivos de hecho en que se fundamenta la detención de dicha ciudadana son:
>
> PRIMERO: Que, el día 13 de julio de 1996, la ciudadana dominicana, fue detenida y remitida a este Despacho por la Corregiduría de Pueblo Nuevo.
>
> SEGUNDO: Que, al momento de su detención dicha ciudadana no portaba documentos válidos que acreditaran su residencia legal en el país.
>
> Los motivos de derecho están fundamentados en los preceptos legales contenidos en el Decreto Ley N° 16 del 30 de junio de 1960 modificado por el Decreto Ley N° 13 de 20 de septiembre de 1965 y la Ley 6ª, del 5 de marzo de 1980, específicamente los Artículos 36, 37 literal a), y 65, que al tenor establecen lo siguiente:
>
> ARTÍCULO 36: El Ministerio de Gobierno y Justicia podrá negar la entrada al país o el tránsito por el mismo a cualquier extranjero que se encuentre residiendo en él, siempre que ello sea necesario o

conveniente por razones de seguridad, salubridad o de orden público.

ARTÍCULO 37: Queda prohibida la inmigración al país de los extranjeros que se encuentren en cualquiera de las condiciones que se pasan a enumerar:

a) Las mujeres que se dediquen a la prostitución; los que trafiquen con la prostitución o con estupefacientes y las personas de conducta inmoral;

ARTÍCULO 65: Los extranjeros que hubieren llegado al país sin haber llenado los requisitos legales de ingreso o que permanecieren en el mismo después de vencer sus visas de transeúntes, turismo, tránsito o visitante temporal, o sus tarjetas de turismo o de tránsito sin residencia autorizada, serán puestos a órdenes del Ministerio de Gobierno y Justicia para ser deportados o para tomar, respecto de ellos, cualquier otra medida que sea de lugar. El Ministerio de Gobierno y Justicia podrá cancelar los permisos definitivos, provisionales o de visitante temporal, así como los permisos o visas de transeúntes se encuentren en cualquiera de los casos contemplados en los Artículos 36, 37 y 38 de este Decreto Ley. Estos extranjeros serán puestos a órdenes del Ministerio de Gobierno y Justicia para su deportación, salvo los casos en que ésta sea decretada por el Ministerio de Gobierno y Justicia de acuerdo con primer inciso de este Artículo.

ARTÍCULO 85: El Director del Departamento de Migración decidirá y despachará en primera instancia, los asuntos relacionados con la migración en general.

c) La señora DOMINICA BERTRE, de nacionalidad dominicana, se encuentra a nuestras órdenes para su deportación mediante Resolución N° 4594 del 15 de julio de 1996."

Por su parte, el Lcdo. Garrido afirma en su escrito, que la ciudadana dominicana DOMINICA BERTRE, se encuentra en Panamá desde hace varios años y que convive con CARLOS MARTÍNEZ, panameño, quien se hace responsable de la estadía de su representada en Panamá. Afirma igualmente el Lcdo. Garrido, que al momento de la detención de su representada, no mediaba orden detención alguna de la autoridad de migración ni de la Policía Nacional.

Observa el Pleno, que como consecuencia de operativos efectuados, el Director Nacional de Migración expide la Resolución N° DNMYN 4594 de 15 de julio de 1996 cuya copia aparece a foja 13 del expediente. En dicha resolución, se resuelve deportar del territorio nacional entre otros a DOMINICA BERTRE de nacionalidad dominicana, por no portar la documentación que acredite su residencia en el país. Dicho funcionario fundamenta la Resolución N° DNMYN 4594 de 15 de julio de 1996 en lo dispuesto en los artículos 36, 60, 65 y 66 del Decreto Ley N° 16 de 30 de junio de 1960. El párrafo II del artículo 65 del decreto en mención, autoriza al Ministerio de Gobierno y Justicia a cancelar los permisos definitivos, provisionales o de visitante temporal, así como los permisos o visas de transeúntes, turistas, visitantes temporales o de tránsito cuando sus tenedores se encuentren en cualquiera de los casos contemplados en los artículos que antes citamos.

Observa el Pleno que, efectivamente, no consta en el expediente documento alguno que demuestre que al momento de ser detenida la señora DOMINICA BERTRE se encontraba legalmente en el país, o documentación mediante la cual se evidencie alguna tramitación para su legal permanencia en nuestro país.

En razón de lo antes anotado, se pone de manifiesto que la medida cautelar expedida y practicada por la Dirección Nacional de Migración contra la señora DOMINICA BERTRE es legal toda vez que se han configurado lo presupuestos legales en que se fundamenta la resolución que ordena su deportación, la cual está ejecutoriada.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención de DOMINICA BERTRE, y DISPONE que sea puesta nuevamente a órdenes del Director Nacional de Migración y Naturalización.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE WEN KUNFENG O WAN KWANG CONTRA EL INSPECTOR DEL CENTRO CARCELARIO DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado a conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de habeas corpus presentada por el licenciado Carlos Sumosa a favor de WEN KUNGFENG o WAN KWANG o ZUNG KUNG FUNG, quien se encuentra a órdenes de la Dirección Nacional de Migración y Naturalización.

Por acogida la iniciativa procesal, se libró el respectivo mandamiento de habeas corpus de conformidad con los artículos 2576, 2577 y 2578 del Código Judicial. El funcionario demandado, en el informe que rinde mediante nota N° DNMYN-265-96 de 16 de agosto del año que decurre, admite que a sus órdenes está detenido "ZHUNG KUNG FENG o CHUNG TING FENG o WAN KWANG FONG o WEN KONG FUNG" (f. 35), quien fue aprehendido por unidades de la Policía Técnica Judicial el 24 de julio de 1996. Acepta igualmente haber ordenado la detención que se impugna, medida que fundamenta en las siguientes consideraciones de hecho: a) que al momento de la captura le fueron ocupados documentos de identidad falsos y alterados, b) que la cédula de identidad personal que portaba era la N° E-8-52771, bajo el nombre de ZHONG JING FENG, identidad con la que fue remitido por Policía Técnica Judicial a la Dirección de Migración, c) que de conformidad con los archivos de la institución el verdadero nombre del detenido es WAN KWANG FONG, quien se encuentra en Panamá desde el 9 de octubre de 1983 "y nunca ha arreglado su status migratorio en el país" (f. 35). Aunado a lo anterior, se afirma en el informe de rigor que se tenía conocimiento de que el agraviado "estuvo involucrado en actos que constituyen un peligro inminente para la sociedad panameña" (f. 36). Por último, informa que el ciudadano de nacionalidad china está en espera de su deportación, "para así dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución N° 4895 Bis del 31 de julio de 1996" (f. 36).

Es preciso indicar que, junto con la contestación del mandamiento, la autoridad demandada remitió fotocopias de documentos que se presume conforman el expediente migratorio de Wan Kwang; de entre ellos, concretamente con la hoja de filiación del Registro de Inmigrantes, se comprueba que el detenido es nacional de la República de China y que ingresó a Panamá el 9 de octubre de 1983 en calidad de turista (f. 44).

Como viene dicho, el informe del funcionario acusado indica que, al momento de su captura, efectuada por agentes de la Policía Técnica Judicial, además de no tener su situación migratoria en orden, el detenido portaba documentos de identidad falsos y alterados, conducta reprochable y a todas luces contraria a la legislación vigente sobre la materia.

Observa la Corte que la detención fue ordenada mediante diligencia

calendada 25 de julio de 1996, la cual le fue comunicada al agraviado (f. 38).

Por las consideraciones expuestas, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención provisional que se impugna en esta causa y, en consecuencia, ORDENA que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes del Director Nacional de Migración y Naturalización.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GENARO PALACIOS LUJÁN EN CONTRA DEL FISCAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de habeas corpus interpuesta por el Licenciado ARIEL ALEXIS HERRERA a favor de **GENARO PALACIOS LUJÁN**, en contra del Fiscal Superior del Primer Distrito Judicial.

Librado el mandamiento respectivo, el funcionario acusado rindió su informe de conducta en los siguientes términos:

> "1. Esta agencia del Ministerio Público no ordenó la detención preventiva de **GENARO PALACIO LUJÁN**. La Personería Primera Municipal de Colón, ... decretó la detención preventiva de **PALACIO LUJÁN** mediante resolución atendible a FS. 74 de 25 de junio de 1996.
> 3. ...
> El día 8 de agosto de 1996, esta Agencia del Ministerio Público, luego del correspondiente examen de la legalidad de la orden de detención preventiva de **PALACIO LUJÁN**, a fin de decidir o no, su prolongación, ordenó su revocatoria, en base a los principios de provisionalidad y mutabilidad que caracterizan al instituto cautelar. La revocación ex-oficio de esta medida, fue comunicada a la Cárcel Pública de Colón, mediante oficio N° 2567 del día 8 de agosto de 1996." (Fs. 11 y 12).

De lo anterior se desprende que mediante Providencia de 8 de agosto de 1996, la Fiscalía Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial, dispuso concederle libertad al precitado **GENARO PALACIOS LUJÁN**. Sumado al informe de conducta, consta en el expediente principal fotocopia del Oficio N° 2567 de 8 de agosto de 1996 dirigido al Ingeniero ALVIS MORALES, Director de la Cárcel Pública Nueva Esperanza, corregimiento de Cristóbal (f. 101).

Es notorio, pues, que se ha producido el fenómeno jurídico conocido como sustracción de materia; y consecuentemente sería infructuoso iniciar un procedimiento de habeas corpus, ya que contra **GENARO PALACIOS LUJÁN** no pesa ya orden de detención preventiva alguna, como hemos visto. Procede entonces, ordenar el cese del procedimiento.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA el CESE del procedimiento en la presente acción de habeas corpus; y en consecuencia, DISPONE

EL ARCHIVO del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE PEDRO SAAD ARAÚZ EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor Darío Morice Carrillo ha interpuesto recurso de habeas corpus preventivo a favor de Pedro Saad Araúz y contra el Director de la Policía Técnica Judicial, porque según afirma, el día 19 de agosto de 1996, el señor Pedro Saad Araúz fue citado para que acudiera a la División de Delito Contra la Fe Pública de la Policía Técnico Judicial y se le manifestó que el objeto de la citación era remitir a la Fiscalía el expediente N° 4-110-95 concerniente a una investigación que se sigue, a raíz de una denuncia recibida en la Policía Nacional, relacionada con el abandono de un automóvil en los Talleres de la empresa que administra el señor Saad , como también detener al prenombrado señor por existir una supuesta orden de detención preventiva en su contra.

Mediante Auto de 20 de agosto de 1996 se libró mandamiento de habeas corpus correspondiente y se la requirió al funcionario demandado que informara si había ordenado la detención del señor Pedro Saad Araúz, los motivos y fundamentos de hecho y de derecho que tuvo para ello y si el mismo está detenido a sus órdenes o a órdenes de otra autoridad.

El funcionario demandado contestó el mandamiento de habeas corpus librado mediante Nota A. L. 1154-96 de 21 de agosto de 1996, en la cual informó lo siguiente:

> "1. No es cierto que hemos ordenado la detención del señor **PEDRO SAAD ARAÚZ.**
> 2. No tiene razón de ser en base al punto anterior.
> 3. No tenemos bajo custodia ni a nuestras órdenes al prenombrado **PEDRO SAAD ARAÚZ."**

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia estima que debe ordenarse el cese de procedimiento de conformidad con el artículo 2572 del Código Judicial, ya que no existe orden de privación de libertad girada contra el señor Martínez, ni ha sido detenido.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA EL CESE del procedimiento en la acción de habeas corpus promovido por el señor Darío Morice Carrillo a favor de Pedro Saad Araúz y contra el Director de la Policía Técnica Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROBERTO SANGUILLÉN EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Teófanes López Ávila promovió acción de habeas corpus a favor del señor Roberto Sanguillén y contra el Director de la Policía Técnica Judicial.

Manifiesta el recurrente que su representado fue detenido el día 9 de agosto de 1996, por agentes de la Policía Técnica Judicial y que actualmente permanece ilegalmente privado de su libertad en las celdas de la Policía Nacional sin formularle cargos concretos, ni haber sido puesto a órdenes de autoridad competente.

El recurso se admitió y se libró el mandamiento de habeas corpus correspondiente contra el Director de la Policía Técnica Judicial, quien oportunamente rindió un informe en el que señaló que el señor Roberto Sanguillén está bajo su custodia, pero a órdenes de la Fiscalía Auxiliar de la República desde el 11 de agosto de 1996, debido a esta circunstancia se libró nuevo mandamiento de habeas corpus en contra del señor Fiscal Auxiliar, quien rindió el informe solicitado y en el cual indica lo siguiente:

> "C) No tenemos bajo nuestra custodia o a nuestras órdenes al prenombrado **ROBERTO FELIPE SANGUILLÉN**, ya que mediante Oficio N° 12306, del 16 de agosto de 1996, fue enviado bajo custodia a la Cárcel Modelo y puesto a órdenes de la Fiscalía Tercera del primer Circuito Judicial de Panamá, la cual actualmente continúa la instrucción del sumario." (Foja 9).

Como el detenido Roberto Sanguillén está a órdenes de la Fiscalía Tercera del Primer Circuito Judicial de Panamá, debe declinarse en el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial el conocimiento del presente habeas corpus, de conformidad con los artículos 2602 numeral 2) y 2588 del Código Judicial.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLINA en el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial el conocimiento de la acción de habeas corpus promovida por el licenciado Teófanes López Ávila a favor de Roberto Sanguillén.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretario General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE REBECA ZAMBRANO DE GONZÁLEZ EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ,

VEINTISÉIS (26) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado RAFAEL A. CARVAJAL ARCIA, promovió acción de habeas corpus en favor de REBECA ZAMBRANO DE GONZÁLEZ, quien se encuentra detenida a órdenes de la Fiscalía Especial en Delitos Relacionados con Drogas. En esa solicitud manifiesta el licenciado CARVAJAL ARCIA que la detención no tiene fundamento legal ya que en el apartamento de la familia GONZÁLEZ ZAMBRANO no se encontró droga ni billetes marcados. Por otra parte, en los allanamientos practicados a los apartamentos N° 36 y 39 del Edificio Algarrobo se logró incautar droga y la detención de las personas que allí estaban, por lo que al parecer, son ellas las responsables. Considera el licenciado CARVAJAL que se trata de un error en los trámites iniciales del proceso, es pues una circunstancia de modo tiempo y lugar totalmente independiente y que no guarda relación con el caso que nos ocupa.

Librado el mandamiento, el funcionario demandado informó a esta Corporación que, efectivamente, el día 17 de mayo de 1996, mediante resolución motivada, se decretó la detención de la citada REBECA ZAMBRANO DE GONZÁLEZ.

Afirma que la detención de la sindicada se realiza con base a los siguientes fundamentos:

"...
Para el catorce (14) de mayo del año en curso, se programó una compra simulada, donde el agente encubierta de la División de Narcótico y un Secretario de éste Despacho se apersonan al area (sic) del Chorrillo, ingresando el agente al edificio Begonia, apartamento N° 13, y se entrevista con la esposa del sospechoso la señora **REBECA ZAMBRANO DE GONZÁLEZ**, la cual le manifiesta a la misma que quería hablar con Patricio, donde ella entró y salió **"Cholo"**, manifestándole el agente que quería comprar "Pichi" o sea Cocaina (sic), a lo que el mencionado señor le dijo que el ya no vendía droga desde la última vez que le vendió, contestándole el agente que necesitaba la droga para fabricar "Piedra" o sea Crack, la cual le dijo que cuanto quería comprar, contestándole el agente que cincuenta gramos (50), por lo cual traía la cantidad de ciento cincuenta dólares ($.150.00), respondiendole (sic) el señor Patrocinio que la bolsa de cincuenta gramos costaba ciento setenta dolares (sic) ($.170.00), donde nuestro agente le insistió que vendiera cuarenta y cinco (45) gramos, lo cual le dijo que lo esperara dentro del apartamento, el cual entró y se sentó en la sala del referido inmueble, el cual contaba con un altillo, donde estaban las recámaras, y abajo la sala y cosina (sic) juntos, al rato entró una muchacha menor de edad, de nombre MELVIS DEL CARMEN Mc. FARLENE, (yerna del señor Patrocinio González) de cabello amarillo, la misma venía con un cartucho de plástico, luego "Cholo" le pidió el dinero, donde el agente encubierta le entregó la suma de ciento cincuenta dolares (sic) ($.150.00) le señor Patrocinio le dijo al agente de que "allí esta" refiriendose (sic) a la droga, señalando en una esquina del lavamanos en donde se encontraba una bolsita plástica transparente conteniendo en su interior una sustancia en forma de polvo de color blanco que se presume sea Cocaína, y a pocos pies de distancia se encontraba parada la señora REBECA ZAMBRADO (sic) DE GONZÁLEZ, el señor Patrocinio, le manifestó que envolviera la bolsita en papel de aluminio que se encontraba a un lado, agregando que esa droga era buena para "Piedra", donde le entregó el dinero a su yerna Melvis Mc.Farlane, que le guardara la plata, saliendo el agente del departamento en compañía de Patrocinio, quien lo acompaño, para verificar que no hubiera ningún policía en el área, haciéndole señales para que saliera del edificio, una vez llegado el agente encubierta con la droga que le había vendido el prenombrado Patrocinio, el secretario de este despacho ordena el allanamiento del inmueble, en el lugar se encontraba la señora REBECA ZANBRANO

GONZÁLEZ y su hija Rosa González Zambrano, quienes se le mostraron la orden de allanamiento, por lo que se dio inicio a la revisión, no encontrando sustancias ilícitas, logrando encontrar en la residencia **una bolsita de plástico transparentes que en su interior habían gran cantidad de bolsitas de plásticos vacias (sic) del mismo tamaño a la que tenía la droga,** se detectó además el rollo de papel aluminio de marca "MARK" que según el agente encubierta, era el que utilizó el señor Patrocinio González para envolver la droga, y la cantidad de docientos (sic) ochenta y nueve dolares (sic) con ochenta y cinco centavos (B/.289.85). ..."

Recibida la copia auténtica de la instrucción sumarial, a foja 119 aparece la resolución de 17 de mayo de 1996, en la cual el representante del Ministerio Público cumple a cabalidad con el mandato del artículo 2159 del Código Judicial, y ordena la detención preventiva de la señora REBECA ZAMBRANO GONZÁLEZ, entre otras.

En ella se establece en forma precisa cual es el hecho imputado. Así, explica que al realizar la operación encubierta, en la casa de la familia GONZÁLEZ ZAMBRANO, el señor PATROCINO GONZÁLEZ, vende la cantidad de cuarenta y cinco gramos de "pichi", a el agente encubierta. Inmediatamente se ordenó el allanamiento al respectivo apartamento, en donde son atendidos por una señora de cabello amarillo, la cual responde al nombre de REBECA ZAMBRANO DE GONZÁLEZ. En dicho allanamiento se detectó el papel aluminio que se utilizó para la venta de la sustancia ilícita y una carterita de color chocolate contentiva en su interior de dinero el cual asciende a la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES ($.289.00), en billetes de diferentes denominaciones y monedas fraccionadas, finalizada la diligencia no se encontró los billetes utilizados para la compra ni sustancia ilícita adicional.

Por otra parte, en la misma resolución, el Fiscal de Drogas, establece que de acuerdo al informe de relación efectuado por el detective GREGORIO CASTRO, luego de intensas vigilancias, existe relación de la señora REBECA ZAMBRANO DE GONZÁLEZ, ya que, como esposa del señor PATROCINO GONZÁLEZ, le ayuda a la venta de estupefacientes y es la encargada de custodiar el dinero de la venta de drogas.

El mencionado informe de relación consta a fojas 34 y 35 del expediente, y el mismo establece:

"...

Señor Inspector:

Por medio de la presente me permito saludarlo y a la vez le hago llegar a su despacho todo lo relacionado a la OPERACIÓN BEGONIA.

ANTECEDENTES:

Esta operación dio inicio en el mes de Enero hasta el momento se ha logrado determinar la existencia de una red local dedicada al Tráfico Ilícito de Drogas, que se dedica a la venta de estupefacientes en el Corregimiento del Chorrillo, exactamente en los alrededores de la Calle 25 Oeste. Después de intensas vigilancias y compras simuladas se ha logrado determinar la identificación de estos traficantes del polvo de la muerte (cocaína).

INVOLUCRADOS:

PATROCINIO GONZÁLEZ (a) cholo: Ciudadano panameño, es el cabecilla de esta red de traficantes de droga. Organiza toda acción que ejecute esa banda de vendedores de drogas.

REBECA ZAMBRANO DE GONZÁLEZ: Ciudadana panameña esposa del sujeto arriba en mención, la misma lo ayuda en la venta de estupefacientes y es la encargada de custodiar el dinero de la venta de drogas para

luego entregárselo al señor PATROCINIO GONZÁLEZ.

ROSA GONZÁLEZ ZAMBRANO: Ciudadana panameña hija de PATROCINIO y REBECA, la misma es utilizada como (mula) por sus padres para buscar droga a los diferentes caletos que tiene esta red en el edificio ALGARROBOS.

MELVIS DEL CARMEN RODRÍGUEZ: Ciudadana panameña yerna del Señor Patrocinio se dedica a custodiar dinero y hace la labor de (mula) busca droga lo mismo que la joven ROSA GONZÁLEZ.

La joven MELVIS, junto con los arriba anotados residen en el apartamento N° 13 del Edificio BEGONIA del Corregimiento del CHORRILLO.

MARISELA LINET Mc. FARLANE alias (meche): Residente en el Edificio ALGARROBO, tercer piso apartamento N° 36, se dedica a guardar toda clase de sustancia ilícita (drogas) en su apartamento.

MODUS OPERANDI:

Esta organización labora de la siguiente manera, al momento que se le solicita mercancía (droga) al señor PATROCINIO, este inmediatamente busca a una de las jóvenes que trabajan como (mulas) y las mismas van al edificio ALGARROBO y consiguen la mercancía (droga) la guardan entre sus partes, senos u otro lugar donde puedan pasar desapercibida (según la cantidad de droga) para que luego el señor GONZÁLEZ haga entrega de la misma a la persona que la solicita. Luego de ello las jóvenes retienen el dinero e inmediatamente se ubican en los alrededores del edificio para evitar cualquiera acción Policial. ..."

Por otra parte si observamos la declaración de indagatoria rendida por la señora REBECA ZAMBRANO DE GONZÁLEZ, a fojas 87 a 94 del expediente, en una de sus partes finales, ella acepta que su esposo esta participando en la venta de drogas, y lo expresa de la siguiente manera:

"... Señor Fiscal, deseo agregar que finalizando el mes de enero, había discutido con su padre y se había para CHAME a donde una prima de nombre CLEMEN y allí estube (sic) por tres meses, regresando en primero de mayo, que ina (sic) a regresar a su trabajo de belleza, por lo tanto no pude estar involucrada en esto, creo que mi detención y la de mi hija, se debe a que no se logro la detención de PATROCINIO y MELVIS, ya que ellos son los que están participando en la venta de droga y que fueron ellos, los que se llevarón (sic) el dinero marcado. ..."

También es importante que veamos la declaración del agente encubierta que realizó la operación, el manifiesta en la parte final de su declaración que tanto la señora REBECA ZAMBRANO DE GONZÁLEZ, como su hija ROSA, se dieron cuenta de la transacción ilícita. Y así lo expresa:

"... Señor Fiscal, ellas si se dieron cuenta ya que la joven Rosa, estaba en el sillón y la señora Rebeca estaba en el fregador, aparentemente arreglando una comida y la droga la pusieron allí mismo al lado de ella como a dos pies de distancia en un mueble al lado lavamanos. ..."

Al analizar el contenido probatorio del expediente, se puede concluir, que, efectivamente, surge vinculación el delito de tráfico de droga. La misma no sólo presencia la transacción ilícita, sino que además, por los informes de los agentes de la Policía Técnica Judicial, División de Estupefacientes, la señora ZAMBRANO es, junto a su esposo, el señor PATROCINIO GONZÁLEZ, parte de una red local de tráfico de sustancias ilícitas.

Por otra parte, la aceptación por parte de la favorecida con la acción de Habeas Corpus, en cuanto al hecho de que su marido se encuentra vinculado a la venta de estupefacientes, y que él se llevó los billetes marcados, dejan claro dos cosas: que ella esta al corriente del ilícito negocio de su esposo, y que, en efecto, hubo una venta simulada de drogas, la cual ella presenció. Además, producto del allanamiento se encontraron bolsitas plásticas recortadas, y el papel aluminio que describió el agente encubierta, como el que utilizó para envolver la droga.

Definitivamente, el modo en que le fue vendida la a los agentes de la policía técnica judicial, coincide con el modus operadi que describe el Detective GREGORIO CASTRO B., en su informe de relación, no obstante, no existe vinculación directa en la comisión del delito de tráfico de droga, pero si complicidad en grado secundario con el autor del ilícito penal, no obstante, la penalidad en este caso es superior a los dos años.

Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención de REBECA ZAMBRANO GONZÁLEZ, y ORDENA sea puesto nuevamente a órdenes del Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LOS CIUDADANOS CHINOS LIN HONGIAO (NOMBRE LEGAL) O ZHEN KE ZHONG (USUAL) Y ZHEN DEXING (NOMBRE LEGAL) O ZHEN PENG CHAN (USUAL), CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El abogado Ubaldino Rodríguez Botello, ha presentado acción de Habeas Corpus a favor de los ciudadanos chinos **LIN HONGIAO (nombre legal) o ZHEN KE ZHONG (usual) y ZHEN DEXING (nombre legal) o ZHEN PENG CHAN (usual)**, contra la autoridad que ordenó su detención.

Según el escrito presentado por el accionante, los ciudadanos de nacionalidad china antes mencionados, fueron detenidos por unidades de la Policía Nacional después de que fueron lanzados a las aguas de la bahía de Panamá desde una embarcación, conjuntamente con otras personas. Se sostiene que contra estas personas no se ha librado orden de detención por autoridad alguna, por lo que estima se ha violado el artículo 21 de la Constitución Nacional.

Librado el mandamiento de Habeas Corpus, el Director Nacional de Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia, remitió a la Corte, el 16 de agosto el oficio N° DNMYN-261-96 que se aprecia a fojas 6-8 de este cuaderno, en el cual señala que los ciudadanos de nacionalidad china que responden a los nombres de Lin Hongiao, Zhen Ke Zhong y Zhen Dexing fueron detenidos en la inmediaciones del parque Anayansi en la Avenida Balboa, el 4 de mayo, en horas de la madrugada, conjuntamente con cinco chinos más y un hondureño, quienes desembarcaron de manera ilegal de la embarcación Sonora II, procedente del puerto de Buenaventura, Colombia. Se trata de un ingreso ilegal

al territorio de nuestro país, fuera de los puestos de control migratorio, sin llenar ninguno de los requisitos establecidos por la legislación vigente en esta materia, lo que dio lugar a que se les expidiera las resoluciones correspondientes para su deportación del país.

Con el informe se adjuntaron fotocopias de los documentos de filiación, de las órdenes de detención, de las resoluciones de deportación y los informes de aprehensión de la Policía Nacional. Se demuestra así que no sólo se expidió una orden de detención, sino que se les comunicó mediante nota personal a cada uno de los accionantes las razones por las cuales se les privaba de libertad.

Por otra parte, en relación con las resoluciones de deportación dictadas por la Dirección General de Migración y Naturalización, se advierte que las mismas fueron expedidas desde el 16 de julio, notificadas a los interesados desde el 17 del mismo mes, sin haber hecho uso del término para presentar los recursos legales correspondientes, omisión que ha dado lugar a que dichas resoluciones se encuentren debidamente ejecutoriadas.

Tratándose pues de materia migratoria, compete a la Dirección Nacional de Migración y Naturalización conocer y decidir todos los casos que tengan que ver con el movimiento migratorio y adoptar las medidas legales que salvaguarden la seguridad, el orden, la moralidad y la salubridad pública.

No se advierte la violación constitucional indicada por el demandante.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la órdenes de detención provisional dictadas por el Director de Migración y Naturalización en este caso.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ABRAHAM DE LAS MERCEDES FUENTES, CONTRA EL JUEZ SEGUNDO DE CIRCUITO RAMO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia el expediente que contiene la acción de Habeas Corpus presentada por la firma forense Quiroz, Murillo & Asociados, en representación de **ABRAHAM DE LAS MERCEDES FUENTES** y contra la orden de detención decretada por el Juez Segundo de Circuito de lo penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

La sentencia impugnada, emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia el 29 de julio de 1996, declara legal la detención del accionante al considerar que la orden que se ataca -que no fue emitida por el Juzgado Segundo de Circuito, sino la dictada por la Fiscalía Primera de Circuito al negar una medida cautelar sustitutiva de la detención- es legal porque se apoya en medios de convicción que permiten deducir su participación en un delito contra el patrimonio en forma agravada.

Una revisión del expediente permite constatar que el 2 de marzo de 1996,

agentes de la policía interceptaron un vehículo que salía de la parte de atrás de la piquera de buses de Bethania, al momento en que acudieron a dicho lugar después de escuchar la detonación de un disparo. En ese vehículo, marca Mitsubishi, con placa 088004 iban cuatro personas: Alexis Laguna García que fungía como conductor, Eloy Enrique Laguna García, John Sebastián Campuzano y Abraham de las Mercedes Fuentes, este último se encontraba herido. Ese mismo día Agustín Atencio Romero acudió a la agencia de la Policía Técnica Judicial en Bethania y denunció haber sido víctima de un robo a mano armada.

Atencio Romero describe los hechos ocurridos esa noche y manifiesta que 7 personas estuvieron jugando a los dados, apostando dinero y como él y su compañero Sandoval Murillo Peñalba estaban ganando, los otros jugadores se retiraron en un auto manejado por uno de los hijos del ex-campeón de boxeo, Ismael Laguna, después aparecieron haciéndose pasar por agentes de la P. T. J. y los encañonaron y obligaron a entregar el dinero que se habían ganado en el juego. Esta versión la corrobora Sandoval Murillo en su declaración jurada, señalando a John Sebastián Campuzano Acevedo como la persona que lo encañonó con un revólver, mientras Abraham Fuentes lo sujetaba por los brazos, pero al momento en que aquel hizo el disparo hirió a Fuentes en el costado y no a su persona. Posteriormente, Sandoval Murillo declara ante Notario y dice que Fuentes no le robó el dinero, pues la plata se perdió durante el forcejeo.

En autos consta la declaración indagatoria de Campuzano quien acepta haber utilizado el revólver del que salió el disparo que hirió a su amigo Abraham Fuentes, pero que esto sólo fue una riña de juego, pues él se percató que Sandoval Murillo había hecho uso de dados cargados y cuando él se lo enrostró e hizo el reclamo frente a los compañeros de juego, tanto Murillo como Atencio entregaron el dinero mal ganado, según las reglas del juego. Por su parte, Fuentes manifiesta que si bien es cierto que ellos estaban jugando a los dados, al terminar el juego advirtió que Campozano le hacía un reclamo a Sandoval Murillo y al ver que éste había sacado un cuchillo y Campuzano esgrimía un revólver, intervino entre ambos para evitar la pelea, no con el propósito de agredir a ninguna persona ni de despojar a Murillo del dinero que ganó en el juego, sino para mediar entre ambos, pero en ese momento a Campuzano se le salió un disparo del arma que lo hirió en el costado y por ello los hermanos Laguna que tenían un carro lo trasladaron al mismo para llevarlo al hospital pues se estaba desangrando; indica que en ese momento agentes de la policía acudieron al lugar cuando escucharon el disparo y los interceptaron e hicieron bajar del auto y luego los condujeron a la estación de policía, sin recibir él primeros auxilios y resultando la víctima de los hechos, pero se le quiere involucrar en un delito contra el patrimonio cuando su intervención no tenía tal finalidad.

La acción de Habeas Corpus es la vía procesal idónea para lograr una acción inmediata de la autoridad competente en tutela de la libertad. La misma permite examinar si los actos, resoluciones u órdenes mediante las cuales se priva de libertad a una persona han sido expedidas por la autoridad competente y mediante el debido cumplimiento de los requerimientos formales que la ley establece. En el caso subjúdice, la orden fue decretada por el agente del Ministerio Público que tiene asignada la instrucción del caso y la providencia expedida reúne los requisitos señalados por el artículo 2159 del Código Judicial.

Es en otra etapa procesal y a través de otros medios de impugnación que se logra instar al Tribunal jurisdiccional competente a examinar el caudal probatorio, hacer la correcta valoración del mismo y deducir la culpabilidad de los imputados.

Por las razones antes señaladas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el fallo apelado en el presente caso.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALEXANDER JESÚS BONILLA GUERRA CONTRA EL FISCAL SEGUNDO DE CIRCUITO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ. VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado a esta Corporación la acción de habeas corpus interpuesta a favor de **ALEXANDER JESÚS BONILLA GUERRA** contra el Fiscal Segundo de Circuito de Panamá.

El recurso de apelación, formalizado por el sindicado, está dirigido contra la Resolución de 1 de agosto de 1996 proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante la cual se **declara legal** la detención que en su contra decretó el Fiscal Auxiliar de la República y que fue mantenida por el Fiscal Segundo del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá.

El apelante fundamenta su recurso en los siguientes hechos:
"...
PRIMERO: El Tribunal Superior para decidir el Habeas Corpus no consideró la advertencia del recurrente en el sentido de que se instruye un proceso distinto por la misma causa en el Juzgado Catorce Penal del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, que el que se instruye en la Fiscalía Segunda del mismo Circuito judicial. Por lo cual, no solicito ni informe, ni el expediente al Juzgado Catorce que le hubiera permitido ver la duplicidad.

SEGUNDO: El Tribunal Superior, a pesar de observar que la denuncia que origina el proceso de la Fiscalía Segunda es la misma denuncia que origina el proceso del Juzgado Catorce, no observó, ni solicitó informe a ninguno de los dos despachos (Fiscalía Segunda y Juzgado Catorce, ambos de Circuito) acerca de si las órdenes de detención tenían como base o no los mismos hechos. El supuesto ofendido en ambos casos es el señor Julio Díaz, el denunciante es Nelson Guerra Navarro y el vehículo supuestamente hurtado es un Nissan Terrano año 1992, color azul-gris.

TERCERO: Lo que el recurso de Habeas Corpus afirma es precisamente la ilegalidad de la Orden de detención dictada por la Fiscalía Auxiliar de la República que fuera mantenida por la Fiscalía Segunda del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá por cuanto se refiere a los mismos hechos por los cuales la Fiscalía Primera de Veraguas dictó orden de detención y por la cual el Juzgado Catorce del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá concedió y recibió la consignación de Fianza de Excarcelación. ... (F. 33).

La resolución objeto del presente recurso de apelación que decidió la acción de habeas corpus, en síntesis, hace un recuento de los antecedentes del caso señalando que **NELSON JOSÉ GUERRA NAVARRO** formuló denuncia ante la autoridad competente por el hurto del vehículo Nissan-Terrano, matrícula 68129, del año 1992, ocurrido el 21 de mayo de 1996 en los estacionamientos del Supermercado El Rey de la Avenida 12 de octubre, cuyo propietario es **JULIO LIAO MEN DÍAZ CHAN.**

Así, sostiene que la detención preventiva de **ALEXANDER JESÚS BONILLA GUERRA** fue decretada por la Fiscalía Auxiliar de la República por medio de diligencia de fecha 12 de julio de 1996, debido al hecho de que en su contra constan graves indicios de responsabilidad penal en relación a la comisión del delito de hurto

del vehículo de propiedad de JULIO LIAO MEN DÍAZ. En ese sentido, destaca que automóvil fue encontrado en poder del sindicado, siendo que tal apoderamiento ilícito se encuentra tipificado en el artículo 184-A del Código Penal, cuya pena mínima no es menor de dos años de prisión. Por tanto, a juicio del a-quo, quedan satisfechos los requisitos legales previstos en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

La Corte ha podido corroborar las conclusiones a las que ha arribado el Segundo Tribunal Superior sobre la legalidad de la detención preventiva decretada en este caso, pues la resolución que la ordena, suscrita por el Fiscal Auxiliar de la República, cumple con los presupuesto legales, según se infiere a fojas 35 a 36 de los antecedentes adjuntos a la presente acción de habeas corpus.

Asimismo, la resolución de 17 de julio de 1996 dictada por el Fiscal Segundo del Primer Circuito Judicial, a cuyas órdenes se encuentra en la actualidad el imputado, al avocar el conocimiento de esta encuesta penal expresa similares motivaciones e iguales fundamentos de derecho a los manifestados en la primera resolución, para decidir, en consecuencia, mantener la detención preventiva de **BONILLA GUERRA** (fs. 24 a 26 expediente principal).

Por tanto, en atención a las argumentaciones sostenidas por la censura contra el a-quo, la Corte se permite señalar que el habeas corpus fue interpuesto contra el Fiscal Segundo del Primer Circuito Judicial; por esa razón el sentenciador solicitó al mismo, como funcionario demandado, el informe de rigor, requerimiento con lo cual éste cumplió. De modo que no existía razón para solicitar otro tipo de documentación al Juzgado Catorce, como pretende el apelante.

Luego entonces, el sentenciador no tenía razón para verificar si existía otra orden de detención en otro juzgado en base a los mismos hechos expresados en la diligencia acusada mediante esta acción constitucional.

En todo caso, de lo sostenido por el recurrente en relación con que el recurso de habeas corpus bajo examen afirma la ilegalidad de la orden de detención emitida por el Fiscal Auxiliar y mantenida por el Fiscal Segundo de Circuito "por cuanto se refiere a los mismos hechos por los cuales la Fiscalía Primera de Veraguas dictó la orden de detención ...", habría que inferir que esta última orden, de la cual no hay constancia de su existencia, está legalmente fundamentada por basarse en las mismas consideraciones de la previamente examinada, la que tiene pleno fundamento en la ley.

Finalmente, cabe agregar que el tribunal de habeas corpus no puede entrar a conocer asuntos relativos al otorgamiento de fianzas de excarcelación u otras materias procesales que deben ventilarse ante las instancias pertinentes.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución de 1° de agosto de 1996, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GUILLERMO ARTURO PORTE ALVARADO CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Edilberto Vásquez Atencio ha interpuesto ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de habeas corpus contra el Director de la Policía Técnica Judicial y a favor de GUILLERMO ARTURO PORTE ALVARADO, quien se encuentra recluido en la Cárcel Modelo.

Según se afirma en el libelo de demanda, el agraviado fue condenado a pagar una multa de B/.180.00 por un juez nocturno de policía. Luego de realizado el respectivo pago el 22 de agosto del año que decurre, se le otorgó una boleta de libertad, la que no pudo hacerse efectiva "debido a que el Juez Nocturno Licenciado WENCESLAO BREMNER dispuso que el mismo debía mantenerse detenido en dicho centro carcelario, en vista de que existía en contra del mismo denuncia N° 2A-354 de fecha 18 de agosto del año en curso, por el delito de Intento de Violación Carnal" (f. 2). Se acompañó con la demanda copia de la boleta de libertad N° 12254 de 22 de agosto de 1996.

Por acogida la iniciativa constitucional, se libró el respectivo mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada, quien contestó mediante oficio N° A. L. 1166-96 de 23 de agosto de 1996. En su informe, el funcionario demandado manifiesta no haber ordenado la detención de Porte Alvarado y que no está bajo su custodia ni a sus órdenes (f. 6).

Considera la Corte que, en vista de que la Dirección General de la Policía Técnica Judicial no ha proferido orden de detención alguna contra Porte Alvarado, según se explica en el informe de rigor, y que el juez nocturno de policía ha girado boleta de libertad a su favor, según consta a foja 3 del cuaderno, lo que corresponde entonces es hacer efectiva la orden de libertad que lo beneficia.

Por lo expuesto, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ILEGAL la detención de Guillermo Arturo Porte Alvarado y, en consecuencia, ORDENA la inmediata libertad del detenido, si no tiene otra causa pendiente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDUARDO ANTONIO ROSE JULIO EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema la acción de habeas corpus interpuesta por el señor SAMUEL H. MATHEWS en favor de **EDUARDO ANTONIO ROSE JULIO**, y contra el Fiscal Especializado en Delitos relacionados con drogas.

Librado el mandamiento respectivo, el funcionario acusado rindió su informe de conducta en los siguientes términos:

> "... 2. La orden decretada contra el señor **EDUARDO ANTONIO ROSE JULIO**, surge de los señalamientos formulados en su contra por parte de las unidades captoras de la Policía Nacional, del Área "F" de Don Bosco, mediante informe de novedad, fechado 25 de abril del presente

año, de fojas dos (2) del expediente.

Refieren los captores en su informe, que el día 25 de abril del presente año, en momentos en que se encontraban de ronda motorizada, en el sector de calle primera, Ciudad Radial, Juan Díaz, frente al colegio Bilingue (sic), visualizaron a dos sujetos en una bicicleta Montañera, por lo que procedieron a su detención para solicitarle la cédula de identidad personal. Al efectuarle el registro de rigor al Agte. 16208 RUIZ le encontró en el bolsillo derecho delantero del pantalón de color negro, corto, una cartera que en su interior contenía cien (100) carrizos de plástico transparente que a su vez tenía una sustancia en forma de polvo de color blanco que se presume sea droga (Cocaína), así como la suma de treinta dólares (B/.30.00) en billetes de diferentes denominaciones.

Al rendir declaración indagatoria el señor EDUARDO ANTONIO ROSE JULIO, niega dedicarse a la venta de sustancias ilícitas, pero si acepta consumir la misma desde hace algún tiempo.

Como elemento probatorio que acredita la existencia del hecho punible que nos ocupa, consta de fojas 27-28 del expediente, el resultado del análisis de la droga incautada, emitida por el Laboratorio Especializado de la Policía Técnica Judicial, el cual arrojó resultado positivo para la determinación de COCAÍNA en la cantidad de 13.0 gramos, distribuidos en cien carrizos.

Cabe señalar que además de acreditarse la comisión de un hecho punible, existen dentro de las piezas procesales que conforman el presente cuaderno penal, elementos tales como los señalamientos directos por parte del agente captor EDGARDO HUMBERTO RUIZ MORENO, que nos llevan a establecer una vinculación directa por parte del señor ROSE JULIO con la comisión del ilícito investigado, cuando manifiesta en su ratificación que encontró la droga en poder del mismo ...". (Fs. 7-8).

Del anterior informe y de lo obrado en el expediente principal, se desprende que, el día 25 de abril de 1996 fue detenido el ciudadano **EDUARDO ANTONIO ROSE JULIO** en momentos en que viajaba en una bicicleta montañera por el área de Ciudad Radial, a la altura del Colegio Bilingüe; encontrándose en su poder cien (100) carrizos plásticos transparentes con un polvo en su interior, que al realizársele la prueba de campo (f. 7) y luego el informe del Laboratorio Técnico Especializado en Drogas (f. 28) dió resultado positivo para 13.0 gramos de COCAÍNA, cantidad que excede la dosis para los adictos a esta droga, tal como se observa a foja 30 del cuaderno principal en la certificación del Instituto de Medicina Legal.

Observa esta Corporación que **ROSE JULIO** no niega la posesión de la sustancia, sino más bien indica, en ampliación de indagatoria, que se la sustrajo a su proveedor (fs. 46-47); sin embargo en su primera indagatoria (f. 12) declaró: "yo me dedico a el consumo de estas sustancias 'COCAÍNA', además de dedicarme a la venta de estas sustancias".

Por otro lado, contra **ROSE JULIO** milita lo declarado por **EDGARDO HUMBERTO RUIZ MORENO** el agente de la Policía que llevó a cabo la detención (f. 39-40), quien lo señala como el sujeto al que se le incautó la droga.

A foja 49 se lee el informe del psiquiatra forense, Dr. ALEJANDRO PÉREZ, quien indica lo siguiente:

"2. **No hay evidencia de dependencia a droga alguna**; 3. Hay historia de abuso de droga." (Lo resaltado es nuestro).

El artículo 2148 del Código Judicial establece que cuando se trate de delitos que tengan señalada pena mínima de dos (2) años, se podrá decretar la detención preventiva de los sindicados, previo cumplimiento de las formalidades

establecidas en dicho cuerpo de leyes.

Hasta el momento tenemos que el delito por el cual se encuentra detenido **EDUARDO ANTONIO ROSE JULIO** es de aquellos que atentan contra la Salud Pública relacionados con drogas, específicamente el de tráfico tipificado en el artículo 258, Libro II, Título VII, Capítulo V del Código Penal, en el que se establece una pena mayor de dos (2) años de prisión. De modo tal que se encuentran cumplidos los requisitos para decretar legalmente la detención preventiva del prenombrado **ROSE JULIO.**

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva decretada contra EDUARDO ANTONIO ROSE JULIO y en consecuencia, ORDENA sea filiado nuevamente a órdenes del Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JAIRO OSVALDO BELLO LÓPEZ EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor Jairo Osvaldo Bello López, actuando en su propio nombre, ha interpuesto acción de Habeas Corpus a su favor contra el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Acogida la acción se libró mandamiento de habeas corpus contra el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas, quien mediante Oficio N° 8176 de 14 de agosto de 1996 expuso lo siguiente:

> "A. La orden de detención del ciudadano JAIRO OSVALDO BELLO LÓPEZ, fue decretada mediante providencia razonada de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con drogas, de fecha veintisiete (27) de mayo de 1996. (Fs. 17-18).
>
> B. Los fundamentos de hecho para ordenar la detención preventiva de JAIRO BELLO, se reflejan en que el día 24 de junio, siendo aproximadamente las doce medio día, en compañía de los agentes de la Policía Técnica Judicial, se procedió a realizar Diligencia de Allanamiento en el sector de Calidonia, calle 30, casa 883, cuarto 30, debido a información obtenida de que en dicho lugar se dedican a la venta de sustancias ilícitas. Al llegar al lugar se observó que un sujeto que vestía pantalón largo color crema sin camisa, al notar la presencia de la autoridad arrojó de forma precipitada al techo del inmueble una bolsita plástica transparente, que al verificar su interior contenía dos compartimientos los cuales contenían uno la cantidad de cuarenta y ocho (48) sustancias sólidas de color crema que se presumía fuera droga (piedra), y el otro compartimiento contenía cincuenta y un (51) sustancias sólidas color crema, presumiblemente droga (piedra). El sujeto señalado por los agentes captores que tiró el objeto responde al nombre de JAIRO OSVALDO

BELLO con cédula de identidad 5-22-986.

A fojas 31-34 se observa la declaración indagatoria rendida por el señor JAIRO BELLO, el cual negó todos los cargos que se formulan en su contra. A fojas 26-27 del dossier se observa el análisis practicado por el Laboratorio Especializado de la Policía Técnica Judicial, donde describe la evidencia como veintinueve (sic) (99) fragmentos de sustancia compacta color crema, para la determinación de COCAÍNA (CRACK), en la cantidad de 13.16 gramos.

El fundamento de derecho para ordenar la detención preventiva del señor JAIRO OSVALDO BELLO LÓPEZ, se encuentra consagrado en los Artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

C. El señor JAIRO OSVALDO BELLO LÓPEZ, se encuentra recluido en la Cárcel Modelo, a órdenes de este despacho, mediante oficio N° 6811-96, del 25 de junio de 1996, quien a partir de este momento es puesto a disposición de ese Augusto Tribunal, mediante el oficio N° 8417 de 14 de agosto de 1996." (Fs. 6-7).

Por su parte, el señor Jairo Osvaldo Bello López, sostiene en su escrito, que no hay pruebas contundentes que justifiquen su detención, dado que al momento del allanamiento, se encontraba dentro del perímetro de su cuarto. También señala que hasta la fecha no se le ha llevado a rendir declaratoria, ya que está supuestamente en proceso de investigación.

En este momento, corresponde determinar si la medida cautelar de carácter personal atacada, cumple con los requisitos que al efecto establecen los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

De conformidad con la diligencia que ordena la detención preventiva del señor Jairo Osvaldo Bello López, la medida se fundamenta en la supuesta comisión de delitos contra la salud pública relacionado con drogas.

La Corte observa a fojas 3 y 4 consta diligencia de allanamiento con fecha de 24 de junio de 1996, suscrita por Gabriel Pinzón, secretario de la Fiscalía Especial en Delitos Relacionados con Drogas, en sus funciones de "agente especial", en la que se destacan las circunstancias que culminaron con la detención del ciudadano Jairo Osvaldo Bello López.

Igualmente, consta a fojas 5 y 6 de las sumarias, el Informe de Comisión de la División de Estupefacientes de la Policía Técnica Judicial de fecha 24 de junio de 1996, suscrito por los Detectives I Gilberto Torrero M., Irving Francis F., César Castillo V. en el cual se destaca que la detención se debió a la actitud sospechosa del señor Jairo Bello López, pues, observaron que al dirigirse a la casa N° 833, un sujeto que vestía pantalón largo color crema y sin camisa, arrojó de manera precipitada en el techo del inmueble una bolsita plástica transparente que al ser verificada en su interior contenía repartida en dos compartimientos cuarenta y ocho (48) fragmentos de sustancias compactas de color crema presumiblemente piedra, y en el otro compartimiento la cantidad de cincuenta y uno (51) de sustancias compactas de color crema presumiblemente droga. También señalan que al detener al sujeto, el mismo manifestó llamarse Jairo Osvaldo Bello con cédula de identidad personal N° 5-22-986 y que reside en el inmueble N° 833 y en el cuarto N° 30 en compañía de su concubina.

Consta igualmente, a foja 27 de las sumarias, el informe de laboratorio que certifica que la sustancia incautada es la droga conocida como COCAÍNA (CRACK) en la cantidad de 13.16 gramos. También consta la Declaración Indagatoria rendida el 14 de agosto de 1996 por Jairo Osvaldo Bello López (fs. 31-34) en la que se declara inocente de cualquier acusación en su contra.

Del estudio de las sumarias, el Pleno estima que el Informe de Comisión y el informe de laboratorio constituyen indicios suficientes que vinculan al señor Jairo Osvaldo Bello López con los hechos a él imputados. Lo anterior, aunado al hecho de que el mismo fue detenido **in fraganti**, ya que arrojó de manera precipitada en el techo del inmueble una bolsita plástica transparente que

contenía droga, justifica la aplicación de la medida cautelar de la detención preventiva decretada por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, por cuanto el artículo 2148 del Código Judicial es claro en señalar que la misma sólo procede por delitos que tengan señaladas pena mínima de dos años de prisión, o cuando el autor o partícipe ha sido sorprendido en flagrante delito.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor JAIRO OSVALDO BELLO LÓPEZ, y por lo tanto, DISPONE que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes del Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALONSO BROWN WRIGHT EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TREINTA (30) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada ASUNCIÓN ALONSO DE MONTALVO, promovió acción de habeas corpus en favor de ALONSO ALFREDO BROWN WRIGHT, quien se encuentra detenido a órdenes de la Fiscalía Especial en Delitos Relacionados con Drogas. En esa solicitud manifiesta la defensora de oficio que la detención no tiene fundamento legal ya que la droga y el dinero encontrados en casa del señor ALONSO BROWN WRIGHT, no es de su propiedad, sino del señor JOSÉ FRANCISCO BROWN WRIGHT, hermano del favorecido con la presente acción de habeas corpus.

Librado el mandamiento, el funcionario demandado informó a esta Corporación que, efectivamente, el día 6 de junio de 1996, mediante resolución motivada, se decretó la detención del señor ALONSO ALFREDO BROWN WRIGHT.

Afirma que la detención de la sindicada se realiza con base a los siguientes fundamentos:

"...
La presente causa penal se inició con el Informe de Vigilancia suscrito por miembros de la Policía Técnica Judicial de Panamá, fechado el 3 de junio del año en curso, específicamente a las actividades que desarrolla un sujeto llamado JOSÉ en el cuarto número uno (1) de la casa 2927 de la calle 14 del Corregimiento de Río Abajo.

Posterior a ello, se solicita la autorización de una compra simulada y allanamientos en el citado lugar. Se observa Informe de Compra Simulada en donde se expone que un sujeto salió de la casa 2927, conversó con el informante, luego cruzó la calle hacia la casa del frente, regresó y le entregó la sustancia al parecer ilícita, que indicó que es la casa de su hermano, como en la primera vivienda no tenía suficiente droga, fue a buscar el resto al segundo inmueble. (Ver folios 7-8).

Se lleva a cabo una primera diligencia de allanamiento al cuarto número uno de la casa 2927 de la calle 14 del Corregimiento de Río

> Abajo, que es el lugar de donde sale inicialmente el señor JOSÉ FRANCISCO BROWN HOYTE al momento de hacer la venta de la droga, allí se logra ocupar cierta cantidad de una sustancia que se presume sea CANABIS SATIVA y residuos de posible "CRACK" (piedra) (ver folios 10-13).
>
> Al momento del allanamiento al cuarto número uno de la casa 2928, en donde el funcionario de instrucción fue recibido por el señor ALONSO ALFREDO BROWN WRIGHT, se logró ocupar un envase que contenía en su interior CIEN (100) fragmentos de la droga conocida como "piedra" (CRACK) y la suma en efectivo de SESENTA Y CINCO DÓLARES (B/.65.00), de los cuales diez billetes de un dolar corresponden al dinero entregado al momento de la compra simulada. (Ver folios 16-19).
>
> JOSÉ FRANCISCO BROWN HOYTE al momento de rendir indagatoria reconoce que se dedica a la venta de droga, que además consume marihuana, que su hermano ALONSO BROWN no tiene vinculación alguna con el delito, que aprovechó que éste no se encontraba en la (sic) su habitación y guardó y el dinero producto de la venta, sin el consentimiento del mismo. (Ver folios 26-34).
>
> Por su parte ALONSO ALFREDO BROWN WRIGHT al ser cuestionado sobre el hecho bajo examen señala que no sabía que en su residencia había droga. (Ver folios 35-41).
>
> Como se observa se trata de una actividad ilícita de venta de droga, en donde se utilizan dos habitaciones, una ubicada frente a la otra, en la calle 14 del Corregimiento de Río Abajo, con la participación de una u otra forma, de varios integrantes de una misma familia.
>
> Nótese que el vendedor, al momento del requerimiento del informante, busca el resto de la sustancia en el cuarto número uno de al casa 2928, es decir, en el inmueble de ALONSO ALFREDO BROWN.
>
> La sustancia incautada al ser analizada en el Laboratorio Técnico Especializado en Drogas de la División de Criminalística de la Policía Técnica Judicial de Panamá, resultó ser COCAÍNA (CRACK) con un peso de 16.69 gramos y MARIHUANA en la cantidad de 0.48 gramos.
>
> Los fundamentos de hecho y de derecho para ordenar la DETENCIÓN PREVENTIVA del señor BROWN WRIGHT se basan en el contenido de los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial. ..."

Recibida la copia auténtica de la instrucción sumarial, a foja 46 aparece la resolución de 6 de junio de 1996, en la cual el representante del Ministerio Público cumple a cabalidad con el mandato del artículo 2159 del Código Judicial, y ordena la detención preventiva del señor ALONSO ALFREDO BROWN WRIGTH, entre otras.

En el informe enviado por el Fiscal Especial de Delitos Relacionados con Drogas, se establece en forma precisa cuál es el hecho imputado. Así, explica que al realizar el registro del cuarto N° 1 de la casa N° 2928, donde reside el señor ALONSO ALFREDO BROWN WRIGHT, se encontró en el tablillero del cuarto del prenombrado señor, un envase contentivo de cien (100) sustancias sólidas color crema, las cuales fueron presumidas como droga COCAÍNA (CRACK). De igual manera se encontró una carterita contentiva de sesenta y cinco balboas (B/.65.00) desglosados en billetes de baja denominación, diez (10) de los cuales fueron utilizados en la operación de compra simulada.

Sin embargo, si observamos la declaración indagatoria rendida por el señor ALONSO BROWN WRIGHT, podemos apreciar que niega toda participación con el ilícito a el adjudicado, y que, además, desconocía de la existencia de esos elementos (droga y dinero) en su residencia, durante el operativo realizado.

De igual manera, en la declaración indagatoria rendida por el señor JOSÉ FRANCISCO BROWN, hermano del favorecido con esta acción, el mismo niega que el

señor ALONSO BROWN este involucrado en la venta de drogas.

No obstante lo anterior, el Pleno considera que en el presente sumario existe el suficiente caudal probatorio, que lo constituye especialmente la diligencia de allanamiento realizada en el inmueble de propiedad del beneficiado con esta acción y en la cual se incautó sustancia ilícita, e inclusive, se encontró el dinero que utilizó el agente encubierta en la compra simulada de droga, todo ello vincula al señor ALONSO BROWN WRIGHT, por lo que debe mantenerse su detención preventiva, sin que esto signifique que posteriormente pueda ser demostrada su inocencia.

Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención de ALONSO ALFREDO BROWN WRIGHT y ORDENA sea puesto nuevamente a órdenes del Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ROLANDO VILLALAZ GUERRA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR TOMÁS EMILIO DE SEDAS RAMOS, CONTRA EL ACTO DE NOTIFICACIÓN DEL AUTO N° 11 DE 12 DE ENERO DE 1988, EXPEDIDO POR EL JUZGADO CUARTO DE TRABAJO DE LA PRIMERA SECCIÓN, Y EL POSTERIOR ACTO DE ARCHIVAR EL EXPEDIENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 4, CONTENTIVO DEL PROCESO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO, PROMOVIDO POR TOMAS DE SEDAS RAMOS CONTRA EL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado ROLANDO VILLALAZ GUERRA, apoderado del señor TOMÁS DE SEDAS RAMOS, ha promovido proceso de inconstitucionalidad para que se declare que son inconstitucionales "los actos ocurridos en la etapa de ejecución de una sentencia", singularmente la debida notificación del Auto N° 11, de 12 de enero de 1988, mediante la cual ordena el cumplimiento de la orden de reintegro, en fase de la ejecución de la sentencia PJ-4, de 30 de septiembre de 1987. La demanda de inconstitucionalidad fue admitida por el Magistrado Ponente, mediante resolución de 17 de enero de 1994.

Mediante la Vista N° 96, de 3 de enero de 1996, la Procuradora de la Administración, contestó la demanda de inconstitucionalidad planteada, la que, en esencia, comparte el criterio del demandante, en el sentido de que el acto impugnado es violatorio del artículo 32, sobre debido proceso, por entender que al notificar el auto N° 11 mediante notificación personal, en lugar de hacerlo mediante edicto, se violó la garantía del debido proceso.

El demandante fundamenta la acción constitucional en los siguientes hechos:

"Primero: Los procesos laborales de ejecución de sentencia se encuentran delimitados en el Capítulo IV, del Título VIII, del Libro IV del Código de Trabajo. Las normas procesales de dicho Capítulo constituyen esa **institución instrumental** que en diversas

resoluciones la Corte Suprema de Justicia ha definido como la que asegura a las partes en los procesos establecidos de acuerdo a la ley, que los mismos se desarrollen sin dilaciones injustificadas, aportándose y contradiciéndose las pruebas presentadas y haciendo uso debido y oportuno de todos los medios de impugnación que proceden contra las resoluciones, en defensa de sus intereses. Son normas legales que dentro de estos procesos de ejecución, desarrollan la garantía consagrada en la Constitución Nacional del **debido proceso.**

Segundo: Que el 12 de enero de 1988 el Juzgado Cuarto de Trabajo de la primera sección infringiendo el procedimiento establecido, cuando emite el Auto de ejecución de sentencia N° 11 con el cual se ordena al IRHE, el cumplimiento de la orden judicial de reintegro del trabajador TOMAS EMILIO DE SEDAS RAMOS contenida en la sentencia PJ-4 de 30 de septiembre de 1987 de la Junta de Conciliación y Decisión N° 4, y sin ninguna justificación **se omite** fijar una vez profiere dicha resolución, el **Edicto** que en una forma clara le exige la norma contenida en el artículo 896 del Código de Trabajo para notificar a las partes y desfijarlo veinticuatro (24) horas después.

Tercero: El 18 de enero de 1988, luego de seis (6) días de haberse expedido la resolución anteriormente mencionada, se viola expresamente lo establecido, notificando de manera **personal** al Director General del IRHE, quien evidentemente y con deliberada intención se niega a notificarse de esa resolución, **excusándose** que en lugar del reintegro, ellos pagarían todas sus prestaciones.

Cuarto: El 19 de enero de 1988, la persona encargada de notificar en el Juzgado Cuarto de Trabajo de la primera sección, infringió la norma procesal que con carácter general esta descrita en el artículo 886 del Código de Trabajo, ya que frente a la renuencia del Director General del IRHE a notificarse de esa resolución, no se hizo acompañar de ningún testigo que le firmara esa diligencia y que se anotara en el expediente esa situación, detallando la fecha en que ocurrió, de manera que para todos los efectos legales quedara constancia de que se había hecho esa notificación.

Quinto: Que en el proceso de ejecución de sentencia que se tramitó en el Juzgado Cuarto de Trabajo de la primera sección, resultó clara dilación para hacer cumplir la sentencia PJ-4 de 30 de septiembre de 1987 expedida por la Junta de Conciliación y Decisión N° 4, ya que durante **veintisiete (27)** meses se mantiene pendiente la notificación y el cumplimiento de la resolución, sin encontrarse durante todo ese lapso, alguna constancia que intentara conminar al IRHE para que cumpliera la orden judicial de reintegro.

Sexto: El Juzgado Cuarto de Trabajo de la primera sección omite decretar de oficio el apremio corporal en contra del Director General del IRHE por haber incurrido en desacato frente a la orden judicial de reintegro que se encontraba contenida en la sentencia PJ-4 de 30 de septiembre de 1987 de la Junta de Conciliación y Decisión N° 4 y por su manifiesta renuencia a evadir la notificación del Auto de ejecución N° 11 de 12 de enero de 1988. A pesar de que el apoderado legal del trabajador solicita el apremio corporal por desacato en contra de dicho funcionario, el 24 de junio de 1988, este Juzgado no resuelve y luego de 22 meses ordena su archivo.

Séptimo: La tramitación del proceso de ejecución de sentencia, debidamente descrito con el Auto N° 11 ya señalado, infringe claras disposiciones constitucionales y se proyecta en una serie de normas legales que tampoco se les tomó en cuenta en el juzgado Cuarto de trabajo de la primera sección.

Octavo: Al emitir sentencia la Junta de Conciliación y Decisión N°

> 4 en el proceso laboral por despido injustificado instaurado por el trabajador De Sedas Ramos en contra del IRHE, dispuso condenar a esa institución del Estado, ordenando el reintegro a sus labores habituales y el pago de los salarios caídos hasta la fecha de su efectiva reincorporación.
>
> Noveno: Al no haber cumplido el IRHE dentro de los términos legales correspondientes con la orden judicial de reintegro, se debió solicitar la remisión del expediente al Juzgado seccional de Trabajo de turno, a fin de que se surtiera el trámite de ejecución de dicha sentencia, correspondiéndole al Juzgado Cuarto de la primera sección, efectuar dicha diligencia. Cuando dicho Juzgado emite el Auto N° 11 de ejecución de dicha sentencia, nunca se efectúa la notificación correspondiente, no cumpliéndose las disposiciones contenidas en el mismo.
>
> Décimo: El 30 de abril de 1990 el Juzgado Cuarto de Trabajo de la primera sección luego de mantener sin ejecutar por 27 meses esa sentencia ni notificar el Auto N° 11 de 12 de enero de 1988, decide **archivar** el expediente que provenía de la Junta de Conciliación y Decisión N° 4 y que solamente se le había remitido para que ordenara cumplir la sentencia PJ-4 del 30 de septiembre de 1987, con lo cual colocó en una **total indefensión** a nuestro mandante.
>
> Décimo Primero: Que el proceso de ejecución de sentencia y lo dispuesto en el Auto N° 11 de 12 de enero de 1988 quedó inconcluso, sin que se cumpliera lo allí contenido". (Págs. 23-26).

Las disposiciones constitucionales violadas son, en apreciación del demandante, los artículos 32 y 212 de la Constitución Política, el primero de ellos el derecho fundamental al debido proceso, y el segundo, el artículo 212 sobre el contenido que deben contener las leyes procesales.

El artículo 32, como se dijo, instituye el derecho fundamental al debido proceso, garantía procesal de rango constitucional, que ha sido concretada y precisada en copiosa jurisprudencia por parte de este Pleno, el que ha hecho suyo el contenido del debido proceso, como lo señala el Magistrado ARTURO HOYOS, y que ha incorporado en su reciente monografía sobre dicho derecho fundamental, en la forma que se reproduce.

> "De esta forma, nosotros entendemos que la garantía constitucional del debido proceso es una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso -legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas- oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos".
>
> (ARTURO HOYOS, El Debido Proceso. Editorial Temis. Santa Fe de Bogotá-Colombia. 1996, pág. 54).

Es evidente que la notificación constituye parte medular del proceso, porque constituye el acto de comunicación mas importante para ejercer, en la debida oportunidad, el derecho de defensa y garantizar el principio de bilateralidad, esencial en todo proceso, y en el constitucional con mayor razón. Para determinar, sin embargo, si se ha violado la citada garantía procesal, conviene analizar el acto de notificación defectuosa, que es, como ya ha quedado establecido, en el auto N° 11, de 12 de enero de 1988. La puesta en conocimiento de la citada resolución judicial fue debidamente realizada al demandante en el

proceso de ejecución de la sentencia laboral, y no fue sino al demandado, la institución autónoma del Estado denominada INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE), en quien se produjo la anomalía por lo que el derecho subjetivo violado o pretermitido, fue el derecho fundamental a la notificación que tenía, en la fase de ejecución ya dicha, el I. R. H. E., y no el ejecutante. Este fue notificado en forma personal, y en el acto de notificación ha podido utilizar todos los recursos y medios de impugnación que el ordenamiento jurídico pone a su disposición, por lo que se descarta el estado de indefensión en el que, aparentemente, se colocó al trabajador.

Resulta oportuno, destacar algunas actuaciones jurisdiccionales que pueden coadyuvar para analizar, en su conjunto, si se han violado, efectivamente, los derechos del trabajador que integran la garantía del debido proceso, cuyo contenido ya a sido expuesto. La secuencia inicial del proceso, accede a una demanda contra la destitución realizada por la entidad autónoma al trabajador, contenida en la Nota DAL-CALP-09-87, la que motivó un proceso de despido injustificado, instaurado por el trabajador, que fue resuelto en forma favorable al trabajador, mediante la sentencia PJ-4, proferida por la Junta de Conciliación y Decisión, de 30 de septiembre de 1987, resolución jurisdiccionl que fue objeto de apelación, y que fue decidida mediante resolución de 10 de diciembre de 1987, que la negó. Mediante auto N° 11, de 12 de enero de 1988, se ordenó al INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE) el cumplimiento de la decisión jurisdiccional que motivó su ejecución. Y es notificación de la resolución de la orden de cumplimiento de la primera resolución la que motivó la lesión al debido proceso, en apreciación del recurrente.

Se aprecia que, a foja 139, el ejecutado promovió acción de amparo de garantías constitucionales, el cual fue desestimado por este Pleno, mediante resolución de 13 de mayo de 1988. El Director General del INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE), según manifiesta la propia sentencia, demandó en amparo la revocatoria de la sentencia PJ-4, por violar reglas del debido proceso, con lo que acreditó que, en efecto, tenía conocimiento de la referida sentencia. Con posterioridad, el trabajador, por entender que el reintegro que había ordenado a la entidad demandada, no se había cumplido en forma adecuada, presentó demanda por despido indirecto, el que fue finalmente resuelto por la sentencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, al desatar recurso de casación laboral, contra la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo, de 30 de octubre de 1991, recurso de casación que revocó dicha sentencia, y condenó al INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE), a pagar la indemnización por despido indirecto, en razón de la renuncia por causa justificada que presentó el trabajador a la entidad autónoma en cuestión.

Con los antecedentes ya indicados se tienen los elementos indispensables para dilucidar, si, en efecto, se produjo una violación al debido proceso, de tal magnitud, que colocó al trabajador en un estado de indefensión, producto de la notificación defectuosa e incompleta al INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE).

El Código de Trabajo regula lo relativo a las notificaciones, en los artículos 877 a 889 del Código de Trabajo, dentro de cuyo procedimiento, el artículo 885 establece la regla que se transcribe a continuación:

> "Artículo 885. Si la persona a quien deba notificarse una resolución en escrito suyo, o en otra forma se manifestare sabedora o enterada de ella por cualquier medio escrito, o hace gestión en relación con la misma, dicha manifestación o gestión surtirá desde entonces, para la persona que la hace, los efectos de una notificación personal".

Es evidente que, en la secuencia reseñada, el INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE) se manifestó sabedora del auto N° 11, en razón de que reintegro al trabajador a dicha empresa pública, por lo que, ante discrepancias con respecto al cumplimiento de la sentencia, obligó al trabajador a formular renuncia al cargo, después de haber sido reincorporado, y a presentar demanda de pago de indemnización por despido injustificado, demanda ésta que fue decidida en forma final por el recurso de casación antes aludido, indemnización

que fue pagada por la empresa pública, si bien existen discrepancias con respecto al monto pagado por la expresada empresa, lo que cae por fuera del proceso de inconstitucionalidad, que recae sobre al auto N° 11 de 12 de enero de 1988, cuando, con posterioridad se produce el ejercicio de acciones procesales que dejan sin efecto el propósito perseguido por la demanda de inconstitucionalidad. En efecto, el citado proceso perdió su razón de ser cuando, ante la renuncia del trabajador por causa justificada, ésta fue decretada y se condenó a la empresa pública al pago de la indemnización que corresponde por despido injustificado.

En base a las consideraciones que anteceden, resulta en verdad inocua la pretensión de inconstitucionalidad sobre un proceso que ya ha perdido su razón de ser, por las consideraciones que anteceden, por cuanto el interés patrimonial del trabajador ya ha sido satisfecho por la empresa pública en mención. Resulta, pues, evidente que la empresa pública en referencia conocía el contenido del Auto N° 11, el que perdió su razón de ser con el cumplimiento de la orden de reintegro. El cuestionamiento de la forma en que la empresa pública demandada cumplió con la orden judicial, y que desembocó en un nuevo proceso, cuya pretensión era el pago de las indemnizaciones, en virtud del despido indirecto que motivó la renuncia por causas justificadas del trabajador, el denominado despido indirecto, es indicativo del conocimiento de la entidad demandada de la notificación que se le debía hacer, y, por lo tanto, ante el cumplimiento del presupuesto de hecho contenido en la disposición del Código de Trabajo que ha sido reproducida, es obvio que no se ha pretermitido las normas sobre notificaciones, por cuanto los actos propios posteriores de la empresa pública, han saneado la defectuosa notificación que ha motivado este proceso constitucional. No se ha producido, por tanto, la violación al debido proceso.

La otra disposición constitucional que se estima vulnerada por el recurrente es el artículo 212 de la Ley Fundamental. Una simple lectura de dicho precepto nos indica que constituye una norma programática, que le indica al Órgano Legislativo, cuales han de ser los principios que han se presidir la adopción de la legislación procesal panameña, norma programática ésta que no puede incidir, de manera directa, en una pretensión de inconstitucionalidad de un acto procesal singular, como ocurre en la presente encuesta.

Los autores colombianos, GASPAR CABALLERO SIERRA y MARCELA ANZOLA GIL, en su "Teoría Constitucional" se han referido a la problemática de las normas programáticas contenidas en el ordenamiento constitucional, en la siguiente forma:

> "Entre los principios constitucionales y las normas programáticas no existe una línea divisoria clara. Muchas veces las normas programáticas se toman como principios generales, y los principios generales, cuando en cierta forma despliegan una cierta eficacia directa, adquieren el valor programático respecto a la disciplina legislativa.
>
> A pesar de lo anterior existen diferencias. Mientras los principios generales se refieren a la coherencia interna del ordenamiento jurídico y actúan al inicio de la acción normativa; las normas programáticas apuntan hacia los fines político-sociales del ordenamiento y a la finalidad misma de la acción normativa. Los principios se refieren a los límites internos de la acción normativa, y a la manera en que esta se desarrolla; en tanto que los preceptos programáticos conciernen a los fines que deben buscarse o perseguirse a través de la llamada actividad normativa.
>
> Las normas programáticas están llamadas más que a regular la materia de que se trata, a dirigir la actividad estatal en lo que concierne a la consecución de determinados fines. En tal circunstancia, de la propia observancia por los organismos estatales de dichas normas programáticas y de la orientación de los fines que sean del caso, depende la mejor satisfacción de los intereses protegidos por aquellas.
>
> Las normas programáticas no se limitan a definir los fines que deben

presidir la gestión de los poderes públicos, ya que también determinan, aunque sea en términos genéricos los medios que deben utilizarse para tales efectos, reduciéndose así la capacidad discrecional del normativismo legislativo".

(CABALLERO SIERRRA Y ANZOLA GIL. Teoría Constitucional. Editorial Temis. Santa Fe de Bogotá-Colombia. 1995. Pág. 44).

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el licenciado ROLANDO VILLALAZ GUERRA, en nombre y representación del señor TOMÁS EMILIO DE SEDAS RAMOS contra el acto de notificación del Auto N° 11 de 12 de enero de 1988, expedido por el Juzgado Cuarto de Trabajo de la Primera Sección, y el posterior acto de archivar el expediente de la Junta de Conciliación y Decisión N° 4, contentivo del proceso laboral por despido injustificado, promovido por TOMÁS DE SEDAS RAMOS contra EL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO JORGE M. AGUILERA, EN REPRESENTACIÓN DE EITEL E. AGUILERA, CONTRA LOS ARTÍCULOS 4 Y 6 DEL DECRETO DE GABINETE N° 86 DE 30 DE MAYO DE 1969. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, OCHO (8) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Llegó a conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de inconstitucionalidad interpuesta por el licenciado Jorge M. Aguilera C., actuando en representación de EITEL E. AGUILERA B., con el objeto de que se declaren contrarios a nuestro ordenamiento constitucional los artículos 4 y 6 del decreto N° 86 de 30 de mayo de 1969, expedido por la Junta Provisional de Gobierno por conducto del Ministerio de Agricultura, Comercio e Industrias, mediante el cual se ordena la expropiación de la Finca N° 861, inscrita en el Registro Público a tomo 117, folio 500, Sección de la Propiedad, Provincia de Coclé.

HECHOS DE LA DEMANDA

Según se manifiesta en el libelo, Eitel E. Aguilera B. era propietario de una quinta parte de la finca N° 861, inscrita al tomo 117, folio 500, Sección de la Propiedad, Provincia de Coclé, del Registro Público, según escritura pública N° 894 de 7 de marzo de 1962, inmueble que fue expropiado por el gobierno nacional "con fundamento en el Artículo 49 de la Constitución Nacional de 1946 y el Artículo 32 del Código Agrario alegando motivos de `interés social urgente " (f. 13), mediante el Decreto N° 86 de 30 de mayo de 1969.

Agrega el demandante que el artículo 4 del referido decreto fijó "de manera unilateral y arbitraria" (f. 14), sin que se siguiera el procedimiento establecido en la ley N° 57 de 1946 y en el Código Judicial de 1917, el monto de la respectiva indemnización, por la suma de sesenta y dos mil doscientos noventa y siete Balboas con nueve centésimos (B/.62,297.09), cantidad que debía ser cancelada con bonos agrarios, todo ello sin que Aguilera manifestara su consentimiento. Aunado a lo anterior, afirma el demandante que el Gobierno Nacional no promovió proceso alguno para la determinación del monto de la

indemnización.

DISPOSICIONES VULNERADAS Y CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

El demandante aduce como vulnerados los artículos 19, 32, 45 y 49 de la Constitución de 1946.

Sostiene que el acto atacado infringe directamente el artículo 19 de la Constitución Nacional de 1946, cuyo tenor es el que sigue:

> **"ARTÍCULO 19.** Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley."

Al explicar el concepto de la infracción, afirma el demandante que las autoridades no aseguraron la efectividad del derecho al debido proceso que tiene su representado y que no se cumplió con el deber de cumplir con la legislación vigente sobre la materia, concretamente la ley N° 57 de 1946.

Se alega también como infringido el artículo 32 de la Carta de 1946, que preceptúa:

> **"ARTÍCULO 32.** Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa."

Según el demandante se vulneró la norma citada al decretarse, en forma "unilateral y arbitraria", la expropiación y el monto de la indemnización por pagar al propietario del inmueble expropiado, sin que se hubiere llevado a cabo el proceso que a tales efectos ordena la ley.

En cuanto a la violación del artículo 45 de la Constitución, consagratorio del derecho a la propiedad privada y de la función social que ésta debe llenar, se afirma que el actor fue despojado de su propiedad y que, si bien es cierto que el Órgano Ejecutivo está facultado constitucionalmente para decretar la expropiación y hasta la ocupación de bienes privados en circunstancias especiales, "debemos reconocer que esto solamente es procedente siempre y cuando se garantice al propietario una justa y correcta indemnización, de modo que represente un adecuado resarcimiento por la propiedad tomada por el Estado" (fs. 18-19).

Se aduce como vulnerado también el artículo 49 de la Constitución de 1946, cuyo texto es el siguiente:

> **"ARTÍCULO 49.** En caso de guerra, de grave perturbación del orden público o de interés social urgente, que exijan medidas rápidas, el Ejecutivo puede decretar la expropiación u ocupación de la propiedad privada y la indemnización puede no ser previa.
>
> Cuando fuese factible la devolución del objeto ocupado, la ocupación será sólo por el tiempo que duren las circunstancias que la hubieren causado.
>
> El Estado es siempre responsable por toda expropiación que así lleve a cabo el Ejecutivo y por los daños y perjuicios originados por la ocupación, y pagará su valor tan pronto como haya cesado el motivo determinante de la expropiación u ocupación."

Sostiene el demandante que las disposiciones atacadas infringen los incisos primero y tercero de esta norma fundamental, ya que se fijó el monto de la indemnización sin que el Órgano Ejecutivo tuviere la facultad para ello. Añade que el monto fijado no representa el valor del bien expropiado ni el "daño moral y económico sufrido por el propietario como consecuencia de la irrisoria y

arbitraria indemnización fijada en dicho Decreto" (f. 20).

OPINIÓN DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

La Procuradora de la Administración, a quien correspondió recibir el traslado de la demanda, rindió su opinión conforme lo dispuesto por el artículo 2554 del Código Judicial, mediante la Vista N° 100 de 5 de marzo de 1996, en la que manifiesta su conformidad con dos de los cargos de inconstitucionalidad formulados. Considera infringidos los artículos 32 y 19, no así el 45 ni el 49 de la Constitución de 1946.

En su opinión el acto atacado estableció la cuantía de la indemnización inoída parte y sin el cumplimiento de las previsiones de la ley N° 57 de 30 de septiembre de 1946, reguladora de las expropiaciones ordinaria y extraordinaria.

Sobre los requisitos condicionantes de la expropiación que instituye el referido cuerpo legal, manifiesta la funcionaria:

> "se desprende la obligación del Estado de llamar al propietario de una finca, notificarle de la intención de expropiar y fijar, de mutuo acuerdo, la cuantía de la indemnización antes de proceder al hecho material de la expropiación, y en caso de no lograrse una determinación del valor de la propiedad, se debía iniciar el juicio de expropiación conforme a las normas procedimentales del Código Judicial de 1917, vigente a la fecha de la expropiación" (fs. 31 y 32).

Estima la Procuradora que el decreto acusado conculca el debido proceso consagrado en el artículo 32 de la Constitución de 1946, "ya que al imponerse el pago de la indemnización de la expropiación en bonos agrarios hasta la cuantía de B/.62,297.09 infringe el procedimiento legal aplicable, toda vez que el Ejecutivo no estaba facultado para determinar unilateralmente el valor de la propiedad expropiada" (fs. 32 y 33), lo que conlleva también como consecuencia la vulneración del artículo 19 de la mencionada Carta Política, por lo que finaliza su Vista solicitando al Pleno la declaratoria de inconstitucionalidad del acto impugnado.

DECISIÓN DE LA CORTE

De conformidad con las normas procedimentales vigentes, luego de devuelto el expediente por la Procuraduría de la Administración se fijó en lista el negocio por el término de 10 días, contados a partir de la última publicación del edicto correspondiente en un diario de circulación nacional, para que el peticionario y las personas interesadas presentaran argumentos escritos (a. 2555 C. J.), trámite que, por cumplido, coloca el negocio en estado de resolver.

Como cuestión preliminar, es preciso formular algunas consideraciones sobre el objeto de la calificación demandada, que lo son disposiciones de la derogada Constitución Política de 1946.

El que se invoquen como infringidas normas superiores ya derogadas constituye una situación perfectamente viable en virtud de la doctrina del **bloque de la constitucionalidad**, la que, al delimitar un conjunto normativo en sede constitucional, constituye un parámetro utilizado por la Corte Suprema, en tanto que máximo operador-intérprete de la Carta Política, para la emisión de sus decisiones en materia de la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución.

En efecto, la Corte tiene establecido que integran el bloque de constitucionalidad las normas de las constituciones derogadas, como ocurre en este caso con las del texto fundamental de 1946, cuando las disposiciones o actos atacados han sido expedidos y han surtido efectos bajo la vigencia del ordenamiento constitucional derogado, siempre y cuando el contenido de dichas normas fundamentales no haya cambiado sustancialmente en virtud de modificaciones formales de la Carta o por mutaciones constitucionales, de manera que no hayan

sido afectadas por la cláusula derogatoria contenida en el artículo 320 de la Constitución vigente.

Como quiera que los elementos normativos integradores del bloque de la constitucionalidad complementan nuestra Carta Política a los efectos de la interpretación constitucional, resulta entonces importante la confrontación del acto demandado con la normativa superior derogada, por tratarse de un acto surgido a la vida jurídica bajo su vigencia. Por lo dicho hasta ahora, la labor de interpretación dependerá, entonces, de la adecuación de tales normas a la Constitución vigente; si le son contrarias, ésta prevalecerá en virtud de su supremacía y de los efectos derogatorios que le son implícitos, ya sea en virtud de la disposición derogatoria expresa, ora por la derogación orgánica y el principio lex posterior derogat priori, o tácitamente, producto de la incompatibilidad de contenido que surge entre las normas constitucionales previas y el nuevo régimen normativo superior.

El criterio interpretativo expuesto aparece consignado en sentencia de 3 de agosto de 1990, en la que se expresó:

> "Entre los actos sujetos al control de la constitucionalidad no se excluyen los dictados con anterioridad a la vigencia de la Constitución, ya que tal exclusión significaría que esos actos serían inatacables y, por tanto, superiores y por encima de la Constitución ...
>
> En el caso que nos ocupa, la Constitución de 1946, ya derogada, es un elemento de este conjunto normativo ya que los autos de 28 de julio de 1969 y 26 de febrero de 1971, proferidos por el Juez Primero del Circuito de Panamá, surtieron sus efectos en el tiempo en que se encontraban vigentes las normas de la Constitución de 1946 que se invocan como violadas en la demanda. Por esta razón, los autos impugnados, al momento de ser dictados y de agotar sus efectos, se encontraban sometidos a la Constitución de 1946, que era la norma jerárquicamente superior y, por tanto, es a la luz de las normas constitucionales vigentes en ese momento que la Corte debe proferir su juicio sobre la constitucionalidad de estos autos".

Los artículos 19, 32, 45 y 49 de la Constitución derogada de 1946, invocados como infringidos, no resultaron modificados por la Constitución vigente, y su contenido corresponde a los textos de los actuales artículos 17, 32, 44, 45 (primer párrafo) y 47, lo que autoriza su confrontación con el acto impugnado, a lo que se procede.

El demandante acusa de inconstitucional los artículos 4 y 6 del Decreto N° 86 de 30 de mayo de 1969, expedido por la Junta Provisional de Gobierno por conducto del Ministerio de Agricultura, Comercio e Industrias, cuyos textos se transcriben a continuación:

> **"ARTÍCULO 4.** Ordénase pagar en bonos agrarios a los que aparecen inscritos como propietarios o acrediten derechos como tales, en la proporción correspondiente, en concepto de indemnización la suma de B/.62,297.09".
>
> **"ARTÍCULO 6.** Encárguese a la Contraloría General de la República, para que cancele el valor de la indemnización conforme lo ordenado en este Decreto tan pronto se inscriba el mismo en el Registro de la Propiedad".

El artículo 19 de la Carta de 1946, de igual contenido que el 17 de la vigente, es de carácter programático, de lo que se colige la imposibilidad de su vulneración en forma directa. Su infracción, en todo caso, dependerá de que se acredite la violación de otra disposición fundamental de naturaleza normativa y perfectamente justiciable, lo que trae como consecuencia, por el momento, la desestimación del cargo de inconstitucionalidad endilgado.

Estima la Corte que le asiste razón tanto al demandante como a la Procuradora de la Administración, en el sentido de que las disposiciones atacadas son violatorias del derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 32 de ambos textos constitucionales. En efecto, de conformidad con el ordenamiento vigente en 1969 sobre la materia en debate, esto es, la ley N° 57 de 1946, la fijación del monto de la indemnización en los casos de expropiaciones extraordinarias requiere de un proceso judicial, en caso de no existir acuerdo entre el Estado y el dueño del inmueble acerca de la cuantía de la indemnización. De conformidad con esa ley:

> "**ARTÍCULO 3.** Cuando el Estado necesite en todo o en parte de una finca de propiedad particular para una obra de utilidad pública o de beneficio social, llamará al propietario y le notificará el propósito del gobierno, a fin de señalar, de mutuo acuerdo, el precio razonable de la misma.
>
> Si el propietario y el representante del gobierno no llegasen a convenir en el valor de la propiedad, la Nación promoverá el juicio de expropiación correspondiente. En caso de necesidad urgente al tenor del artículo 49 de la Constitución el gobierno procederá a tomar posesión del bien inmediatamente.
>
> Ocupado ya el bien y convenido el precio con el propietario, la Nación o el Municipio, según el caso, efectuarán los pagos en los términos del convenio o sentencia, según proceda.
>
> En caso de acción judicial, el Ministro de Gobierno y Justicia impartirá instrucciones a los representantes de la Nación a fin de que gestionen ante el tribunal donde sea instaurada la demanda, que en la sentencia respectiva se declare también el aumento del valor adquirido por la propiedad beneficiada por razón de la vía pública o de la obra ejecutada o en proyecto (plusvalía) ..." (subraya la Corte).

Mediante el Decreto N° 86 de 30 de mayo de 1969, la Junta Provisional de Gobierno señaló unilateralmente la cuantía de la indemnización, pretermitiendo así lo normado en la citada disposición legal. No se le brindó la oportunidad al dueño del inmueble para que la materia fuera deslindada por el tribunal competente, conculcándose de este modo su **derecho a la jurisdicción**. Esto trajo como consecuencia lógica también que se le coartara el **derecho a ser oído** y a **oponerse** a la pretensión del Estado en cuanto al aspecto económico de la controversia, elementos estos inherentes al concepto de debido proceso legal.

Este mismo criterio ya ha sido sostenido en sentencias de la Corte Suprema de 23 de noviembre de 1992, de 19 de noviembre de 1993, de 26 de noviembre de 1993, de 31 de enero de 1994, de 12 de agosto de 1994, de 31 de agosto de 1994, 7 de diciembre de 1995 y de 1° de marzo de 1996.

Por comprobado el desconocimiento del derecho constitucional del debido proceso, consagrado en el artículo 32 de la Constitución de 1946 (32 de la vigente), se produce también la infracción alegada del artículo 19 de la misma excerta fundamental (17 de la actual), por lo que deviene innecesaria la confrontación del acto atacado con las demás disposiciones de la Constitución que se aducen como violadas en este proceso, por lo que se procede a resolver de conformidad.

Por las anteriores consideraciones, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE SON INCONSTITUCIONALES los artículos 4 y 6 del Decreto N° 86 de 30 de mayo de 1969, expedido por la Junta Provisional de Gobierno, por conducto del Ministerio de Agricultura, Comercio e Industrias, por infringir los artículos 32 y 19 de la Constitución Nacional de 1946, así como las disposiciones 32 y 17 de la Carta vigente.

Notifíquese y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (CON SALVAMENTO DE VOTO)
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(CON SALVAMENTO DE VOTO)

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS
ELIGIO A. SALAS Y RAFAEL A. GONZÁLEZ

En dos procesos anteriores, iguales al presente en sus notas esenciales, salvamos el voto. Se trata de las demandas de inconstitucionalidad resueltas por: 1) Sentencia N° 806-94, de 1 de marzo de 1996 y 2) Sentencia N° 830-95, de 1 de marzo de 1996.

En resumen, el motivo de salvar el voto consiste en que a diferencia de la mayoría del PLENO, de acuerdo con nuestro criterio lo que se plantea en la demanda y el conflicto sobre el cual resuelve la sentencia no tiene rango constitucional. Se trata de que el precio de un bien expropiado se fijó unilateralmente por parte del Estado, violando -según la mayoría- el artículo 3 de Ley 57 de 1946, que dice así:

> "**ARTÍCULO 3**. Cuando el Estado necesite en todo o en parte de una finca de propiedad particular para una obra de utilidad pública o de beneficio social, llamará al propietario y le notificará el propósito del gobierno, a fin de señalar, de mutuo acuerdo, el precio razonable de la misma.
>
> Si el propietario y el representante del gobierno no llegasen a convenir en el valor de la propiedad, la Nación promoverá el juicio de expropiación correspondiente. En caso de necesidad urgente al tenor del artículo 49 de la Constitución el Gobierno procederá a tomar posesión del bien inmediatamente.
>
> Ocupado ya el bien y convenido el precio con el propietario, la Nación o el Municipio, según el caso, efectuarán los pagos en los términos del convenio o sentencia, según proceda.
>
> En caso de acción judicial, el Ministerio de Gobierno y Justicia impartirá instrucciones a los representantes de la Nación a fin de que gestionen ante el tribunal donde sea instaurada la demanda, que en la sentencia respectiva se declare también el aumento del valor adquirido por la propiedad beneficiada por razón de la vía pública o de la obra ejecutada o en proyecto (plusvalía ...)" (Subrayó la mayoría del Pleno).
>
> "Parágrafo: En todos los casos de indemnización por expropiación se establecerán las compensaciones a que haya lugar al tenor del artículo 7°".

Esta no es disposición de fácil interpretación. Habría que interpretarla con conciencia de que es una disposición legal, a diferencia de constitucional. Sin perjuicio de que se hiciera a la luz de las disposiciones constitucionales pertinentes en los distintos períodos, de acuerdo con las constituciones que han regido en Panamá. Pero, se insiste, como disposición legal, no constitucional.

Trataremos de precisar en qué relación se encuentra con el orden constitucional.

La Constitución de 1904, artículo 42, era rígida y absoluta en materia de propiedad.

> **"ARTÍCULO 42.** Nadie podrá ser privado de su propiedad, ni en todo ni en parte, sino en virtud de pena o de contribución general con arreglo a las leyes.
>
> Por graves motivos de utilidad pública definidos por el Legislador, podrá haber lugar a enajenación forzosa de bienes o derechos, mediante mandamiento judicial, pero el pago de su valor declarado se hará antes de desposeer de ellos al dueño".

La Constitución de 1941, en su artículo 48 disponía:

> **"ARTÍCULO 48:** Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el Legislador, podrá haber expropiación, mediante sentencia judicial y justa indemnización previa.
>
> En caso de guerra, grave perturbación del orden público, epidemias, desastres o calamidades y otros casos de emergencia que exijan medidas rápidas, la expropiación u ocupación podrá ser decretada por el Poder Ejecutivo y podrá no ser previa la indemnización. Cuando fuere factible la devolución del objeto ocupado, la ocupación será temporal y sólo por el tiempo que existan las circunstancias que las motivaron.
>
> El Estado será siempre responsable por toda expropiación que así lleve a cabo el Poder Ejecutivo o por los daños y perjuicios causados por la ocupación, pagará su valor dentro de un término no mayor de cinco años."

Concierne al caso, por ser dentro de su vigencia cuando se dictó y cumplió el acto demandado de inconstitucional, lo que al respecto dispone la Constitución de 1946, artículos 45, 46, 47 y 49:

> **"ARTÍCULO 45:** Se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la ley por personas jurídicas o naturales, la cual no podrá ser desconocida ni vulnerada por leyes posteriores.
>
> La propiedad privada implica obligaciones para su dueño por razón de la función social que debe llenar.
>
> **ARTÍCULO 46:** Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos en la Ley, puede haber expropiación, mediante sentencia judicial e indemnización previa.
>
> **ARTÍCULO 47:** Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o de interés social, resultaren en conflicto los derechos de particulares con la necesidad reconocida por la misma ley, el interés privado deberá ceder al interés público o social.
>
> **ARTÍCULO 49:** En caso de guerra, de grave perturbación del orden público o de interés social urgente, que exijan medidas rápidas, el Ejecutivo puede decretar la expropiación u ocupación de la propiedad privada y la indemnización puede no ser previa.
>
> Cuando fuese factible la devolución del objeto ocupado, la ocupación será sólo por el tiempo que duren las circunstancias que la hubieren causado.
>
> El Estado es siempre responsable por toda la expropiación que así lleve a cabo el Ejecutivo y por los daños y perjuicios originados por la ocupación, y pagará su valor tan pronto como haya cesado el motivo determinante de la expropiación u ocupación".

Como se sabe, los autores del Anteproyecto de la Constitución de 1946 fueron los Doctores José Dolores Moscote, Ricardo J. Alfaro y Eduardo Chiari. Ellos representaban muy balanceadamente la conciencia de la nación panameña en

cuestiones de propiedad, ajustada al tiempo.

El Código Judicial de 1916, reflejando su época, trata el juicio de expropiación como uno de "Juicios Especiales Relacionados con el Libro II del Código Civil.

El Libro II del Código Civil se denomina "De los Bienes y de su Dominio, Posesión, Uso y Goce".

Por muchas razones, entre las cuales el nivel de desarrollo científico, como disciplina independiente, alcanzado por el derecho procesal, este proceso (la expropiación) (regulado por los artículos 1467 - 1488 del Código Judicial de 1917) no estaba calificado ni clasificado conforme a consideraciones y conceptos propios del derecho procesal, sino únicamente en función de la materia de que trataba. Por eso el proceso de expropiación aparecía, como se ha dicho, bajo el Título de "Juicios Especiales Relacionados con el Libro II del Código Civil." O sea, el Libro "De los Bienes y de su Dominio, Posesión, Uso y Goce", con un criterio privatista.

Contrariamente, ahora en el Código Judicial de 1987, los procesos y sus distintas clases responden a criterios y conceptos institucionales de la disciplina procesal, que los clasifica de acuerdo con su naturaleza. Llama la atención al respecto que el Código Judicial de 1987, no clasifica la expropiación como un proceso de conocimiento. De estos se ocupa el Título XII de Libro Segundo; en cambio el proceso de expropiación aparece en último lugar, en Título XVI.

Cabe la discusión si por su naturaleza, procesalmente hablando, es un proceso de conocimiento. Aún si lo fuera, es indudable, sobre todo tratándose de la expropiación en casos de urgencia (una de las dos variedades), que el campo de la actividad procesal de conocer, o sea de establecer la verdad de los hechos que sirvan de fundamento al derecho, es muy limitada.

Estas consideraciones son pertinentes para interpretar el mencionado Artículo 3 de la Ley 57 de 1946, que se refiere a juicios de expropiación, lo que refleja un amplio campo a la jurisdicción civil ordinaria, no constitucional, en donde corresponde discutir el conflicto de intereses que se quiere ventilar aquí, en el proceso que nos ocupa, en la jurisdicción constitucional.

La jurisdicción ordinaria civil a la cual corresponden como atribución estos procesos, sentarán jurisprudencia en su oportunidad. Pero no se trata, ciertamente, de cuestiones constitucionales.

Otro aspecto de interés es el hecho de que el artículo 3 de la Ley 57 de 1946 ya fue objeto de examen constitucional, resuelto por la Corte Suprema de Justicia, mediante Acuerdo N° 74 de 2 de febrero de 1954 (G. O. 12,316 de 12 de marzo de 1954).

Allí la Corte precisó su significado cuya violación, según la mayoría del Pleno, fundamenta la declaración de inconstitucionalidad de que disentimos.

En líneas generales la Corte estimó que el artículo 3° de ley 57 de 1946, ya transcrito establece:

> 1) Que su primer inciso no trata de expropiación, sino de conversaciones previas para llegar a un acuerdo, que de producirse evita la expropiación.
>
> 2) El segundo inciso trata primeramente de que, a falta de acuerdo, la Nación debe o puede promover el juicio de expropiación (entonces no existía el juicio de expropiación en caso de urgencia, C. J. 1987, artículos 1951 a 1955).
>
> 3) Pero (en el inciso segundo) se excluyen las expropiaciones que se hagan conforme el artículo 49 de la Constitución de 1946; o sea en caso de guerra, grave perturbación del orden público o de interés

social urgente, casos en los cuales decía (y dice la Constitución de 1972) "el Ejecutivo puede decretar la expropiación u ocupación de la propiedad privada".

A este último caso, según el Acuerdo N° 74, de 2 de febrero de 1954, de la Corte Suprema de Justicia, no se refería la frase "juicio de expropiación correspondiente" del segundo inciso del artículo 3 de la Ley 57 de 1946, frase de acuerdo con la cual la mayoría declara la inconstitucionalidad, sin notar que es ajena al presente caso, en donde se trata de una expropiación por razón de interés social urgente.

Amerita transcribir el Acuerdo 74 aludido:

"El citado artículo dice así:

"ARTÍCULO 3°: Cuando el Estado necesite en todo o en parte una finca de propiedad particular para una obra de utilidad pública o de beneficio social, llamará al propietario y le notificará el propósito del gobierno, a fin de señalar, de mutuo acuerdo, el precio razonable de la misma. Si el propietario y el representante del gobierno no llegasen a convenir en el valor de la propiedad, la Nación promoverá el juicio de expropiación correspondiente. En caso de necesidad urgente al tenor del artículo 49 de la Constitución el gobierno procederá a tomar posesión del bien inmediatamente.

Ocupado ya el bien y convenido el precio con el propietario, la Nación o el Municipio, según el caso, efectuarán los pagos en los términos del convenio o sentencia, según proceda.

En caso de acción judicial, el Ministerio de Gobierno y Justicia impartirá instrucciones a los representantes de la Nación a fin de que gestione, ante el Tribunal donde sea instaurada la demanda, que en la sentencia respectiva se declare, también, el aumento del valor adquirido por la propiedad beneficiada por razón de la vía pública o de la obra ejecutada o en proyecto (plus valía).

Parágrafo: En todos los casos de indemnización por expropiación se establecerán las compensaciones a que haya lugar al tenor del artículo 7°".

No debe perderse de vista que la Ley 57 de 1946, de la cual forma parte esta disposición, fue dictada en desarrollo del artículo 46 de la Constitución y, por consiguiente, no debe interpretarse sin referirse a él.

El citado artículo constitucional es el siguiente:

"ARTÍCULO 46: Por motivo de utilidad pública o de interés social definidos en la Ley, puede haber expropiación, mediante sentencia judicial e indemnización previa".

Estudiemos ahora, frase por frase, la disposición acusada para ver si en alguna forma infringe el precepto constitucional transcrito:

Comienza por decir que "cuando el Estado necesite en todo o en parte una finca de propiedad particular para una obra de utilidad pública para un beneficio social, llamará al propietario y le notificará el propósito del gobierno, a fin de señalar, de mutuo acuerdo, el precio razonable de la misma".

Nada hay en esto que infrinja el artículo 46 de la Constitución. Se trata simplemente de que ante la necesidad de una obra de utilidad pública, se evite la expropiación con sus correspondientes procedimientos dilatorios, y se compre al propietario el bien que se necesita, pagándole el precio correspondiente. Y eso lo contempla la

misma Constitución Nacional cuando faculta al Órgano Legislativo para conceder autorizaciones al Ejecutivo para celebrar contratos (Art. 118, ordinal 7°) o para aprobar o improbar los contratos o convenios que celebre el Ejecutivo con cualquiera persona naturales o jurídicas (Ord. 6°).

No se trata, pues, de expropiar un bien sin intervención del Órgano Judicial. Expropiar es desposeer a una persona de su propiedad aunque a esa se le indemnice; no celebrar con ella un contrato para adquirirla mediante el pago de un precio convenido. No hay, ni puede haber en esto nada que infrinja el artículo 46 de la Constitución.

Continúa diciendo la disposición impugnada: "Si el propietario y el representante del gobierno no llegasen a convenir en el valor de la propiedad, la Nación promoverá el juicio de expropiación correspondiente".

Es claro que al disponer lo anterior el artículo 3° de la Ley 57 de 1946 está cumpliendo estrictamente el precepto constitucional; porque establece que si es necesario expropiar la propiedad que la Nación necesita por no llegarse con su dueño a acordar un precio razonable para adquirirla en la forma que antes se ha contemplado, entonces la Nación promoverá el juicio de expropiación correspondiente, lo que tiene que hacer precisamente para que se dicte la sentencia judicial que para expropiar un bien exige el artículo 46 de la Constitución.

Tampoco, pues, el párrafo transcrito, infringe en forma alguna el precepto constitucional.

Continúa diciendo, el artículo 3° de la Ley 57: "En caso de necesidad urgente al tenor del artículo 49 de la Constitución, el gobierno procederá a tomar posesión del bien inmediatamente".

Se contempla que esta inmediata posesión se hace al tenor del artículo 49 de la Constitución Nacional que establece que, "en caso de guerra, de grave perturbación del orden público o de interés social urgente, que exijan medidas rápidas, el Ejecutivo puede decretar la expropiación u ocupación de la propiedad privada y la indemnización puede no ser previa". Y es claro que la posesión inmediata que toma el gobierno del bien que necesita, lo hace sometido a las reglas que establece el artículo 49, es decir, que "cuando fuese factible la devolución del objeto ocupado, la ocupación será sólo por el tiempo que duren las circunstancias que la hubieren causado". Y que "El Estado es siempre responsable por toda expropiación que así lleve a cabo el Ejecutivo y por daños y perjuicios originados por la ocupación, y pagará su valor tan pronto como haya cesado el motivo determinante de la expropiación u ocupación".

Sigue diciendo el artículo 3°: "Ocupado ya el bien y convenido el precio con el propietario, la Nación o el Municipio, según el caso, efectuarán los pagos en los términos del convenio o sentencia, según proceda".

En lo anterior no puede existir infracción constitucional. Se explica simplemente que si se llega a un convenio con el propietario, como antes se ha explicado, se paga el precio convenido, evitando así las dilaciones de un juicio de expropiación. Y si ésto se lleva a cabo se paga el precio contemplado en la sentencia que dicte el Órgano Judicial.

Por último, agrega el artículo 3° de la Ley 57: "En caso de acción judicial, el Ministro de Gobierno y Justicia impartirá instrucciones a los representantes de la Nación a fin de que gestionen, ante el Tribunal donde sea instaurada, la demanda, que en la sentencia

> respectiva se declare también, el aumento del valor adquirido por la propiedad beneficiada por razón de la vía pública o de la obra ejecutada en el proyecto". Y termina: "Parágrafo: En todos los casos de indemnización por expropiación se establecerán las compensaciones a que haya lugar al tenor del artículo 7°".
>
> Estos últimos parágrafos de la disposición impugnada no hacen otra cosa que reglamentar la expropiación que, mediante sentencia judicial autoriza el artículo 46 de la Constitución a fin de que se cumpla con la indemnización que él mismo establece".

Debe señalarse que al regular la expropiación el Código Judicial de 1987 lo hizo en contradicción, hasta cierto punto, de la línea de pensamiento de la Corte, expresada en el Acuerdo N° 74 aludido, porque establece (artículos 1951 a 1955) un proceso de expropiación en caso de urgencia. Si los casos de urgencia no requieren proceso ¿por qué un proceso? ¿Es optativo?

La realidad jurídica de las expropiaciones en casos de guerra, perturbaciones de orden público y de interés social urgente (llamada expropiación extraordinaria) es, pues, que se perfeccionan y cumplen inmediatamente. No resulta cierto que se requiera promover un juicio alguno, ni siquiera, en estos casos, "para la fijación del monto de la indemnización".

Tanto la Constitución de 1946 (Artículo 49) como la de 1972 (Artículo 47) establecen que el Ejecutivo, puede "decretar la expropiación u ocupación", y repiten "toda expropiación que así se lleve a cabo". Así las cosas puede dejarse en firme que la expropiación se cumplió de manera absoluta por acto del Ejecutivo, y que, como cuestión distinta, lo que merecería discusión es el pago de la indemnización. Pero es evidente que esto no es cuestión de inconstitucionalidad, mucho menos, no la negación de principio de dicho pago, sino la forma (bonos) o la cuantía del pago.

Al respecto, puede afirmarse que parece ser que tanto la demanda como la Sentencia de mayoría, se refieren únicamente a ese punto del monto de la indemnización. No obstante, incurren en la contradicción flagrante de concluir en que el Ejecutivo debía promover un juicio de expropiación. El juicio de expropiación a que se refiere el segundo inciso del artículo 3 de la Ley 57 de 1946, como hemos visto anteriormente, dispone ese proceso para la expropiación ordinaria, no para la extraordinaria.

El propietario del bien expropiado en la situación que se examina tenía indudablemente derecho a que se le indemnizara, y podía recurrir a los tribunales a tales efectos. No es cierto por tanto, como expresa la Sentencia que:

> "No se le brindó la oportunidad al dueño del inmueble para que la materia fuera deslindada por el tribunal competente, conculcándose de este modo su derecho a la jurisdicción. Esto trajo como consecuencia lógica también que se le coartara el derecho a ser oído y a oponerse a la pretensión del Estado en cuanto al aspecto económico de la controversia, elementos estos inherentes al concepto de debido proceso legal".

La pretensión de promover intereses particulares patrimoniales luego de transcurridos 27 años, mediante consideraciones de carácter constitucional requeriría una motivación palmaria, que difícilmente se produce.

Por estas consideraciones salvamos, respetuosamente, el voto.

Fecha ut supra.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA LICDA. KENIA ELIZABETH CÁRDENAS APOLAYO EN REPRESENTACIÓN DE FEDERICO SOLÍS EN CONTRA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA N° 71-01-491DGA DEL 25 DE MAYO DE 1995. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Los señores Federico Alberto Solís, Antonio Lagin Palau, Franklin González y Agustín Jurado, han promovido, por intermedio de la licenciada Kenia Elizabeth Cárdenas, proceso constitucional en el cual se pide a la Corte que declare que es inconstitucional el acto administrativo contenido en la Nota N° 701-01-491DGA y 701-01-493 DGA de 25 de mayo de 1995; N° 701-01-492 DGA y N° 701-01-94 de 23 de mayo de 1995, todas proferidas por el Presidente de la Junta de Evaluación de la Dirección General de Aduanas. Mediante Resolución de 21 de junio de 1995, los Magistrados sustanciadores decidieron acumular las demandas presentadas por los accionantes a efecto de que se sustancien y se fallen en una sola instancia.

Se trata de una acción de inconstitucionalidad interpuesta con el propósito de que se declaren inconstitucionales las notas arriba citadas, por haber infringido los artículos 17, 18, 43 y 60 de la Constitución Nacional, al aplicar retroactivamente la Ley 20 de 11 de agosto de 1994 y no la que debió estar vigente cual es la Ley 60 de 1° de septiembre de 1978.

I. LOS FUNDAMENTOS DE LA PRETENSIÓN.

La parte demandante considera que las notas por ellos impugnadas han infringido los artículos 17, 18, 43 y 60 de la Constitución Política.

La parte actora considera que se ha infringido de manera directa, por falta de aplicación, el artículo 17 de la Constitución Política por cuanto si bien el mismo es de carácter enunciativo y programativo lo que implica que su violación no es susceptible si no se infringen otros artículos de la norma constitucional, en el presente caso se infringen junto a dicha norma los artículos 18, 43 y 60 de la Constitución Política. Asimismo, considera la parte actora, se ha violentado el contenido de la Ley 20 del 11 de agosto de 1974, la Ley 61 de 1978 y el artículo 32 del Código Civil, por cuanto la Ley 20 de 11 de agosto de 1994 no es de orden público ni de interés social. A pesar de lo antes expuesto, señalan los demandantes, esta última se aplica a las actuaciones realizadas bajo el imperio de la Ley 61 de 1978 de modo que el Director General de Aduanas incumple con lo estatuido en el Artículo 43 de la Constitución y las leyes citadas.

La infracción del artículo 18 se produce, a juicio de la parte actora, al no cumplir el Director General de Aduanas con los artículo 17, 43 y 60 de la Constitución Nacional y al darle efecto retroactivo a una ley que no lo tiene, como lo es la Ley 20 de 11 de agosto de 1994. A juicio de los actores dicho funcionario se extralimita en sus funciones, por cuanto que los demandante realizaron todas las actuaciones que le imponía la Ley 61 de 1978 para obtener su licencia de Agente Corredor de Aduanas, situación esta que no prohibía bajo ningún motivo la Ley 20 de 1994, ni el Artículo 32 del Código Civil.

En cuanto a la violación al artículo 43, la misma ocurre, en opinión de la parte actora, al aplicarse el literal b) del artículo 642 del Código Fiscal, modificado por la Ley 20 del 11 de agosto de 1994, que cambia la exigencia del título de terminación de estudios secundarios en un plantel de enseñanza reconocido por la obtención de diploma o licenciatura universitaria en Administración Pública con especialidad en Aduanas o de Técnico Aduanero y eliminar lo estipulado en la Ley 61 del 1° de septiembre de 1978 en lo que se refiere a la aprobación de materias correspondientes a los tres primeros años de la Universidad en las carreras de Comercio, Administración Pública, economía, contabilidad, Derecho y carreras afines o en su defecto, de tener experiencia mínima de diez años como aforador, evaluador o liquidador, se violenta igualmente el artículo 32 del Código Civil.

Por último, el accionante señala violado en forma directa, por falta de aplicación, el artículo 60 de la Constitución Política, puesto que le cercena el derecho al trabajo de agente corredor de aduanas a quien haya cumplido con todos los requisitos que la ley vigente exigía al momento de su tramitación.

II. LA OPINIÓN DEL PROCURADOR DE LA ADMINISTRACIÓN.

La Procuradora de la Administración después de estudiar los precedentes del caso, consideró que no se da la violación al artículo 43 de la Constitución Nacional, pues no se ha vulnerado el principio de retroactividad de la ley al estar ante una simple expectativa y no un derecho adquirido, además que no estamos ante una ley de orden público o interés social.

En cuanto a la violación de los artículos 17 y 18 de la Constitución Política, señala que no se da y los cargos deben ser desestimados puesto que, tanto como el Ministerio de Hacienda y Tesoro, como la Dirección General de Aduanas han cumplido con el texto de la ley.

Por último, la Procuradora de la Administración difiere con la parte actora "cuando se señala la violación del artículo 60 de la Carta Fundamental, toda vez que esta norma requiere la implementación de los programas económicos y sus respectivas políticas para que pueda desarrollarse a cabalidad" y "en consecuencia, al ser la norma de carácter programática, no es dable señalar o exigir su cumplimiento", por lo que no cabe el vicio de inconstitucionalidad que se quiere imputar al acto acusado y, por ende, debe desestimarse el cargo de inconstitucionalidad.

III. DECISIÓN DE LA CORTE.

El Pleno pasa a examinar las infracciones que los demandantes le endilgan a los actos impugnados y a confrontar éstos con el resto de las normas de la Constitución Política.

A través de las notas impugnadas, el Director General de Aduanas, en su calidad de Presidente de la Junta de Evaluación, comunica a los demandantes que no le han sido aprobadas las licencias solicitadas por cada uno de ellos para ejercer las funciones de Agente Corredor de Aduana, basadas en la Ley 61 de 1978, en vista de que la misma había sido modificada por la Ley 20 del 11 de agosto de 1994, a pesar de que la Junta de Evaluación había aprobado los exámenes amparados bajo la ley anterior, vigente a la época en que se examinó la documentación, requisitos y aplicación de los exámenes. Ello es así, expresan las notas, debido a que por decisión del Ministerio de Hacienda y Tesoro, no se otorgaría licencias fundamentadas en la Ley 61 de 1978, anterior a la Ley 20 de 1994.

A nuestro juicio, resulta evidente que el punto central de la controversia se reduce a determinar si, efectivamente, la Ley 20 de 1994 ha sido aplicada de manera retroactiva, lo cual conlleva la violación del artículo 43 de la Constitución Nacional y, por ende, la infracción a los artículo 17, 18 y 60 constitucionales.

En este sentido, ya el Pleno de la Corte Suprema se ha pronunciado con anterioridad en torno al tema de los efectos de la ley en el tiempo de conformidad con el principio de la retroactividad que consagra el artículo 43 de nuestra Constitución en fallo del 30 de mayo de 1995.

El Pleno de la Corte al referirse a los efectos retroactivos del Decreto de Gabinete N° 43 de 17 de febrero de 1990, el cual decretaba, a partir de su promulgación, la reducción de las jubilaciones de vejez al límite de B/.1,5000.00, sostuvo el criterio de que si bien dicho instrumento legal altera las situaciones reconocidas al amparo de la legislación anterior, únicamente en cuanto a sus efectos futuros, para la doctrina moderna ello no entraña retroactividad de la ley en sentido estricto.

En el caso que nos ocupa, si bien la Ley 20 de 1994 altera para el futuro algunos de los requisitos exigidos para la concesión de las licencias de agente corredor de aduanas, la misma reconoce como válidas aquellas **concedidas** al

promulgarse la ley, por lo que en el presente negocio los efectos de la situación creada bajo el amparo de la ley anterior se prolonga durante la vigencia de la nueva ley. De modo, pues, que no se produce la retroactividad de la ley por lo que tampoco se viola el principio de la irretroactividad de la ley que consagra el artículo 43 de la Constitución Política.

Y es que si bien la Ley N° 20 de 1994 reconoce como válidas las licencias autorizadas al momento de su promulgación, la misma exige ciertos nuevos requisitos como por ejemplo la elevación del monto de la fianza o garantía y otros que deben cumplir inmediatamente los que aspiren a dicha licencia como también la propia ley les concede un plazo a quienes les fueron aprobadas su licencia con anterioridad, para actualizar, en el ejemplo antes aludido, el monto de la fianza o garantía, lo cual, a juicio del Pleno de la Corte Suprema en fallo de 30 de mayo de 1995, tampoco entraña retroactividad.

En el caso que nos ocupa, las licencias para ejercer la profesión de corredores de aduanas aún no habían sido concedidas a los demandantes. Estos, habían aprobado los exámenes y cumplido con los requisitos establecidos en la ley vigente al momento de su solicitud de concesión de la licencia en cuestión. Sin embargo, una vez aprobada la Ley N° 20 de 1994, que exige nuevos requisitos para la obtención de la licencia de corredor de aduanas, todas aquellas licencias en trámite, como es el caso de los demandantes, deben cumplir con las exigencias de la nueva ley. Es el criterio del Pleno de esta Corporación que no hay retroactividad si la nueva ley se aplica desde su vigencia hacia el futuro. En el presente negocio, las licencias de los demandantes se encontraban pendientes de aprobación cuando entró a regir la nueva ley y por ende la misma es aplicable a éstas y a todas las demás solicitudes de concesión de licencia para corredor de aduanas desde el momento de la promulgación de la Ley N° 20 de 1994 en adelante. Al no resultar infringido el artículo 43 de la Constitución Política, tampoco se vulneran los artículos 17 y 18 constitucionales. No proceden, pues, los cargos alegados.

Por último, cabe agregar que concordamos con la Procuradora de la Administración al señalar que el artículo 60 de nuestra Carta Magna no ha sido violado puesto que estamos ante una norma de carácter programático la cual requiere para su implementación de programas económicos con sus respectivas políticas para las condiciones sociales y económicas favorables para el progreso de los pueblos, ya sean necesidades materiales o culturales. Ha dicho la Corte en múltiples ocasiones que las normas de carácter programático no pueden ser invocadas por la parte actora en este tipo de proceso constitucional. Por esta razón, se desestima el cargo.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que NO SON INCONSTITUCIONALES los actos administrativos contenidos en las notas N° 701-01-491DGA del 25 de mayo de N° 701-01-493 DGA del 23 de mayo de 1995, N° 701--01-492 del 25 de mayo de 1995, N° 701-01-490 DGA de 23 de mayo de 1995, emitidas todas por el Ministerio de Hacienda y Tesoro y por lo tanto, NO ACCEDE a las otras peticiones formuladas en la demanda.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(Con Salvamento de Voto) (Con Salvamento de Voto)

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

Por no compartir el criterio de la mayoría del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, respetuosamente salvo el voto.

En este caso se trata de unas licencias de corredor de aduana cuya expedición no se había perfeccionado cuando entró en vigencia la Ley 20 de 1994, que establece requisitos que no cumplen los interesados.

La sentencia, en síntesis, sostiene que como no se habían otorgado todavía las licencias, no es inconstitucional la negación de las mismas. A contrario sensu, que si se hubieran otorgado sí adolecerían de ese carácter.

Habla de que la licencia otorgada, constituye "un derecho adquirido".

No comparto este criterio. Aún otorgada la licencia, si la nueva ley requiere otros requisitos que no cumple el beneficiario de la licencia, la autorización que se le haya extendido se extingue. Carece de valor a partir de la nueva ley, salvo que se haya dispuesto, como excepción, por estimarlo conveniente o justo, que las licencias expedidas de conformidad con la ley anterior continúan siendo válidas.

Se trata de disposiciones de orden público y de interés social. No se puede hablar de derechos adquiridos en estos casos. No hay retroactividad si la nueva ley se aplica desde su vigencia hacia el futuro.

Estoy, pues, de acuerdo con la parte resolutiva; pero no con el razonamiento aludido y, por esas consideraciones, salvo el voto.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

En la sentencia que antecede se niega la pretensión al considerar que no hay retroactividad de una ley si ésta se aplica desde su vigencia hacia el futuro y como en este caso las licencias de Corredores de Aduanas se encontraban pendientes de aprobación cuando entró a regir la nueva ley N° 20 de 1994, la misma les es aplicable desde su promulgación.

La demandante en sus escritos ha señalado que no se trata del fenómeno de la retroactividad, sino de la ultractividad en asuntos procesales, al tenor de lo dispuesto por el artículo 32 del Código civil. En efecto, ante el principio general del "tempus regit actum" pueden darse tres excepciones, a saber: la retroactividad que permite aplicar la nueva ley a hechos anteriores a su vigencia, cuando se trata de materia criminal favorable al reo o asuntos de orden público o interés social; la ultractividad, que permite mantener la vigencia de la ley derogada hasta concluir el caso que comenzó a regular y la prescripción que produce la extinción de obligaciones o la adquisición que produce la extinción de obligaciones o la adquisición de derechos por el solo transcurso del tiempo, en las condiciones previstas por la ley.

En el fallo se debió abordar el tema de la ultractividad, que era el pertinente y que fue alegado, no así el de la retroactividad que no guarda relación con los hechos planteados.

Lo anterior motiva mi salvamento de voto, lo que hago con el debido respeto al criterio mayoritario del Pleno.

Fecha ut supra.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA POR MARIO JULIO GIRÓN CONTRA EL PROCESO

PENAL QUE SE LE SIGUE POR EL SUPUESTO DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Ronald Martin Hurley Noville, actuando en nombre de MARIO JULIO GIRÓN, ha presentado ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de inconstitucionalidad contra el "PROCESO PENAL SEGUIDO EN CONTRA DE MI REPRESENTADO POR PARTE DEL JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL, RAMO PENAL; DEL DISTRITO DE DAVID" (f. 92).

El demandante acusa como violatorios del ordenamiento jurídico-político superior, las siguientes resoluciones proferidas todas dentro del mencionado proceso penal: 1) Providencia de 7 de agosto de 1991, dictada por el Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial; 2) Auto de 1° de agosto de 1991, proferido por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial; 3) Auto de 27 de julio de 1992, dictado por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia; 4) Providencia de 8 de agosto de 1991, emitida por la Fiscalía Primera Superior del Tercer Distrito Judicial; 5) Vista Fiscal N° 68 de 30 de abril de 1993, suscrita por la Personería Segunda Municipal del Distrito de David; 6) Auto de proceder N° 939 de 8 de septiembre de 1993, proferido por el Juzgado Primero Municipal del Distrito de David, ramo penal; 7) Auto N° 5 de 5 de julio de 1995, dictado por el Tribunal de Apelaciones y Consultas del Circuito de Chiriquí; 8) Resolución de 28 de diciembre de 1995, suscrita por el Juzgado Primero Municipal del Distrito de David, ramo penal; 9) Auto N° 125 de 29 de abril de 1996, proferido por el Juzgado Primero Municipal del Distrito de David, ramo penal; 10) Auto N° 2 de 14 de junio de 1996, emitido por el Tribunal de Apelaciones y Consultas del Circuito de Chiriquí, ramo penal.

De acuerdo con los planteamientos del actor, los actos atacados violan los artículos 17, 19 y 32 de la Constitución Política vigente.

El negocio se encuentra en la fase de calificación preliminar, a efectos de decidir sobre la admisibilidad de la acción, lo que debe hacerse a la luz de lo establecido por el artículo 2551 del Código Judicial, que señala los requisitos de forma que debe reunir el libelo de inconstitucionalidad para que la acción pueda ser acogida, en concordancia con el artículo 654 de la mencionada excerta procesal.

Observa la Corte que la demanda adolece de defectos que conllevan a su inadmisibilidad.

En primer término, el escrito no se encuentra dirigido al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, contravención clara de lo dispuesto por el artículo 102 del Código Judicial. En segundo lugar, se omite la transcripción de los actos judiciales que el peticionario acusa de contrarios al texto constitucional, primero de los requisitos formales, de obligatorio cumplimiento, que establece el artículo 2551, el cual lee: "1.Transcripción literal de la disposición, norma o acto acusados de inconstitucionales" (subraya la Corte).

Por otra parte, la redacción que trae el libelo de demanda en cuanto a los hechos y el concepto de infracción de las disposiciones fundamentales supuestamente vulneradas (art. 2551, numeral 2, C. J.) es confusa, lo que dificulta la hermenéutica del intérprete-operador de la Constitución. En este sentido, como clara deficiencia técnica de redacción de la demanda, el letrado, luego de enumerar las pruebas que adjunta, al final del escrito presenta como "OTROS HECHOS" una especie de alegato en el cual manifiesta que no tiene la intención de dilatar el proceso penal que se le sigue a su representado (f. 110).

Contrario a lo manifestado por el apoderado judicial del demandante, del libelo se desprende que se pretende atacar en sede constitucional todo un proceso penal que se le sigue a Girón por el supuesto delito de homicidio ante los tribunales competentes de la jurisdicción ordinaria, pretendiendo convertir la

acción de inconstitucionalidad en un recurso ordinario más, so pretexto de que se someta a nuevo examen la actuación de la jurisdicción penal.

A efectos de cumplir con los requisitos formales que exige la ley para la demanda, es ineludible el deber del actor de referirse, por separado, a cada uno de los actos que considera infringen la normativa constitucional, indicando de igual manera y claridad el concepto de la infracción que se aduce. Como viene dicho, en la demanda se solicita la abrogación global de diez resoluciones en su conjunto, lo cual desatiende la exigencia antes señalada.

Observa la Corte que se ataca el auto de 27 de julio de 1992, proferido por la Sala Segunda de esta Corporación de Justicia, situación a todas luces inadmisible, de conformidad con el claro mandato del artículo 204 del Texto Fundamental, cuyo tenor es el que sigue:

> "No se admitirán recursos de inconstitucionalidad ni de amparo de garantías constitucionales contra los fallos de la Corte Suprema de Justicia o sus Salas".

Por último, presenta el letrado una "SOLICITUD ESPECIAL EXPRESO (sic) Y URGENTE" en el sentido de que el tribunal constitucional proceda a "SUSPENDER LOS EFECTOS QUE PUEDA TENER EN LA ACTUALIDAD EL PROCESO PENAL INCONSTITUCIONAL IMPUGNADO, POR MEDIO DE CERTIFICACIÓN PROVISIONAL DE SUSPENSIÓN" con el fin de "garantizar la no continuación de los perjuicios graves e inminentes que tendrían un impacto devastador sobre mi Representado" (f. 108), lo que constituye una pretensión totalmente extraña a la acción autónoma de inconstitucionalidad como mecanismo directo para acceder a la jurisdicción constitucional, que también debe desestimarse.

Es preciso reiterar que los procesos constitucionales son de naturaleza extraordinaria, y las acciones que les dan origen deben interponerse cuando los actos, de índole objetiva o subjetiva expedidos por la autoridad, vulneran de manera clara u ostensible la Constitución Política. Se actúa con temeridad cuando se recurre a las Instituciones de Garantía, no porque exista una real contradicción entre una norma fundamental y la legal o reglamentaria o el acto acusado, sino como un medio dilatorio utilizado con la intención de entorpecer la recta administración de justicia.

Por las consideraciones expuestas, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el licenciado Roland Martin Hurley Noville, en representación de Mario Julio Girón.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD, PROPUESTA POR EL LICENCIADO EDUARDO E. RÍOS MOLINAR, EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR JOSÉ DEL ROSARIO MUÑOZ, CONTRA LA SENTENCIA DE 30 DE MAYO DE 1995, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO (CASO JOSÉ DEL ROSARIO MUÑOZ CONTRA PARTES Y SERVICIOS TOYOPAN, S. A.). MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Admítase la demanda de inconstitucionalidad presentada por el licenciado Eduardo E. Ríos Molinar, en representación del señor **JOSÉ DEL ROSARIO MUÑOZ,** contra la sentencia de 30 de mayo de 1995, dictada por el **TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO.**

Córrase en traslado a la Procuradora de la Administración para que emita concepto, por el término de diez (10) días contados a partir del recibo del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA POR ALBERTO PÉREZ DENTRO DEL PROCESO DE AYUDA PRENATAL SOLICITADO POR GLORIA GÓMEZ EN REPRESENTACIÓN DE YISKA GÓMEZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Dentro del Proceso de Protección Prenatal instaurado por GLORIA GÓMEZ en representación de YISKA GÓMEZ contra ALBERTO PÉREZ, el licenciado ARCENIO GARCÍA VALDÉZ en su condición de apoderado judicial del demandado presentó escrito de **Advertencia de Inconstitucionalidad**, el cual ha sido elevado en **Consulta** al Pleno de esta Corporación por el Juzgado Seccional de Menores de la Provincia de Veraguas.

Seguidamente, la Corte procede a determinar si la presente advertencia de inconstitucionalidad cumple con los presupuestos y requisitos formales que señalan la Constitución y la ley, para que esta forma de control se haga efectiva.

El artículo 203 de la Constitución y el 2549 del Código Judicial regulan la advertencia de inconstituciona-lidad en términos similares, de los cuales se infieren los presupuestos para su viabilidad. Así, la aludida norma constitucional expresa:

> "ARTÍCULO 203. ...
> Cuando en un proceso el funcionario público encargado de impartir justicia advirtiere o se lo advirtiere alguna de las partes que la disposición legal o reglamentaria aplicable al caso es inconstitucional, someterá la cuestión al conocimiento del pleno de la Corte, salvo que la disposición haya sido objeto de pronunciamiento por parte de ésta, y continuará el curso del negocio hasta colocarlos en estado de decidir.
>
> Las partes sólo podrán formular tales advertencias una vez por instancia." (Art. 203 de la Const.).

Según se observa de la norma transcrita, el ejercicio de la advertencia está condicionado, entre otras cosas, a que se realice dentro de un **proceso** en el que un funcionario público esté administrando justicia; que quien advierta sea **parte** en el proceso; que esté dirigida contra una **disposición legal o reglamentaria** aplicable al caso.

En el caso que no ocupa, según se desprende del escrito de advertencia y de la resolución que envió el funcionario elevando la Consulta, si bien se ejerce dentro de un proceso de protección prenatal, siendo el advertidor una de las partes que participan en el mismo, sin embargo no está dirigida contra ningún

precepto, sino contra la forma como el Juez dirigió una diligencia de interrogatorio realizada en dicho proceso. En tal sentido, solamente en una parte del escrito de advertencia se hace alusión a una norma legal, pero sin siquiera imputarle algún cargo de inconstitucionalidad. En el hecho quinto se dice:

> "QUINTO: **Que conforme al artículo N° 926 del Código Judicial la parte que presentó el testigo podrá preguntarlo y concluido el interrogatorio podrá la contraparte repreguntarlo, el JUEZ permitirá preguntas adicionales a la parte que presentó el testigo siempre que estén relacionadas con las repreguntas, igualmente permitirá nuevas preguntas relacionadas con las últimas respuestas, en base a esta excerta el JUEZ hará las preguntas adicionales que considere necesarias. Como queda claro el JUEZ tiene la facultad de preguntar lo que estime conveniente, pero, la ley no le permite al que repregunta preguntas que no se relacionen con el interrogatorio por lo que consideramos que aquí a (sic) habido violación al debido PROCESO y a las formalidades legales que lo regula, entrando en clara contradicción con el artículo N° 31 y 32 de la Constitución de Panamá."**

De lo expuesto se ve claramente que lo que se pretende atacar son las **actuaciones** del funcionario judicial y la del abogado de la contraparte, lo que es totalmente ajeno a la materia sobre la que debe recaer la advertencia y subsiguiente consulta que son **disposiciones legales (leyes formales o materiales) o reglamentarias**, por lo que no cabe contra resoluciones o actuaciones de funcionarios.

Aunado a lo expuesto, conforme a reiterada jurisprudencia de esta Corporación, al escrito de advertencia se le exigen las formalidades propias de la demanda de inconstitucionalidad, establecidas en el artículo 2551, en concordancia con los artículos 654 y 102 del Código Judicial y, evidentemente en este caso se han omitido algunos de los más importantes, como el señalamiento de un petitum en que se exprese lo que se pretende se declare inconstitucional; citar y transcribir la disposición acusada; y, citar y transcribir las normas constitucionales violadas expresando el concepto de su infracción.

Finalmente, como se ha dicho en otros casos, cabe reiterar al funcionario respectivo la instrucción de abstenerse de elevar consultas producto de advertencias evidentemente improcedentes, efectuadas con el fin de paralizar y dilatar el proceso, que en ocasiones como esta es lo que pretende una de las partes al utilizar en forma indebida este mecanismo de control. Para el Pleno resulta palpable que la parte recurrente, utilizando métodos cuyo propósito es dilatar en forma manifiesta e ineficaz el litigio, ha incurrido en la conducta procesal censurada por el artículo 462 del Código Judicial, por lo que esta Corporación estima que el abuso cometido por el apoderado judicial de Alberto Pérez justifica la aplicación de la sanción contemplada por el numeral 15 del artículo 199 del Código de Procedimiento.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la Advertencia de Inconstitucionalidad y, SANCIONA con multa de B/.200.00 al abogado ARCENIO GARCÍA VALDÉS.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA POR MIGUEL DEGRACIA CASTRO EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES 157 DE 28 DE ABRIL DE 1995, 234 DE 15 DE JUNIO DE 1995, RESOLUCIÓN DE 18 DE AGOSTO DE 1995, TODAS EMITIDAS POR EL JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO DE VERAGUAS, RAMO CIVIL Y LA RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 1995, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **Arsenio García Valdez** en nombre y representación de **MIGUEL DEGRACIA CASTRO** , ha propuesto demanda de inconstitucionalidad contra el Auto N° 157 del 28 de abril de 1995, el Auto N° 234 del 15 de junio de 1995, la Resolución de 18 de agosto de 1995, proferidas por el Juez Primero del Circuito de Veraguas, Ramo Civil y la Resolución de 12 de diciembre de 1995, emitida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial.

El Pleno de la Corte procede a examinar el recurso presentado, en vías de determinar si el libelo cumple con los requisitos formales de admisión exigibles para este tipo de procesos.

En este punto se percata este Cuerpo Colegiado, que se ha planteado la inconstitucionalidad contra cuatro actos judiciales a saber: Auto N° 157 de 28 de abril de 1995, el cual decreta secuestro contra **MIGUEL DEGRACIA CASTRO**, sobre el vehículo Marca Izusu, Tipo Pick-Up, cabina doble, color blanco, placa del año 1995 N° 9T-136 y 948628 y sobre el certificado de operación o cupo N° 9T-136 del mencionado vehículo, hasta la concurrencia de doce mil doce con doce (B/.12,012.12), que incluyen costas gastos e intereses legales; el Auto N° 234 del 15 de junio de 1995 amplía el secuestro decretado mediante el Auto N° 157 de 28 de abril, a la administración del bien; la Resolución de 18 de agosto de 1995, resuelve un incidente de levantamiento de secuestro propuesto por **MIGUEL DEGRACIA CASTRO**, en el sentido de que niega dicho levantamiento; y la Resolución de 12 de diciembre de 1995, la cual resuelve el recurso de apelación contra el Auto de 18 de agosto de 1995, propuesto igualmente por el señor **DEGRACIA CASTRO**, confirmándose el referido Auto.

De acuerdo a lo anterior, este Tribunal se percata de que la demanda incoada no puede ser admitida por varias razones: en primer lugar se observa que el actor no ha agotado los medios de impugnación que prevé la ley para los casos como el que se ha sometido a consideración de este Pleno de la Corte; es decir, el Auto proferido por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, que mantiene el secuestro contra Miguel De Gracia Castro, sobre el vehículo Marca Izusu, Tipo Pick-Up, cabina doble, color blanco, placa del año 1995 N° 9T-136 y 948628 y sobre el certificado de operación o cupo N° 9T-136 del mencionado vehículo, hasta la concurrencia de doce mil doce con doce (B/.12,012.12), a propósito de un incidente de levantamiento de medida cautelar propuesto en la primera instancia, era susceptible del recurso de casación civil. Efectivamente el artículo 1149, ordinal 4 del Código Judicial, confirma nuestra aseveración, ya que la excerta legal señala que los autos, dictados por los Tribunal Superiores de Justicia, que decidan oposiciones o levantamientos o exclusiones en procedimientos cautelares son susceptibles del recurso de casación.

Esta Superioridad ha venido reiterando la **imperatividad** del **agotamiento de los medios de impugnación** que la ley ha previsto para enervar actos, sean de carácter administrativo o jurisdiccional, previo a la presentación de la acción de inconstitucionalidad, tal como se colige de las Resoluciones calendadas 16 de diciembre de 1994; 2 de julio de 1994; 12 de mayo de 1993 y 10 de diciembre de 1993. Para mayor ilustración reproducimos la parte pertinente de las resoluciones de mayo y diciembre de 1993, respectivamente:

> "Estas razones impiden darle curso legal a la demanda presentada, toda vez que en estos procesos la Corte Suprema no actúa como Tribunal de Justicia, sino como un Organismo de Derecho Público, y

como garante de la integridad de la Constitución. En este orden de ideas, el libelo no sólo debe presentarse en debida forma y en consonancia con los requisitos formales que la ley prevé, sino también debe la demanda estar dirigida contra un acto o resolución que vulnere de manera directa y flagrante nuestra Carta Magna, y constatarse el agotamiento de los medios de impugnación respectivos, antes de acudir a este máximo Tribunal de Justicia." (Subrayado es nuestro).

"... tampoco se cumplió con el requisito del agotamiento de los medios de impugnación correspondientes, antes de acudir ante la Corte Suprema, lo cual es imperativo dado que la Corte actúa en estos procesos, no como Tribunal de Justicia, sino como un Organismo de Derecho Público garante de la integridad de la Constitución." (Subrayado es nuestro).

Finalmente, el interesado no cumple con lo estatuído en el artículo 102 del Código Judicial, el cual señala que "las demandas, recursos, peticiones e instancias formuladas ante la Corte Suprema de Justicia y los negocios que hayan de ingresar por alguna razón en ella, deberán dirigirse al Presidente de la Corte si le compete al Pleno de ésta", dado que dirige la acción de inconstitucionalidad a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Por todo lo expuesto los Magistrados de la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el Auto N° 157 del 28 de abril de 1995, el Auto N° 234 del 15 de junio de 1995, la Resolución de 18 de agosto de 1995, proferidas por el Juez Primero del Circuito de Veraguas, Ramo Civil y la Resolución de 12 de diciembre de 1995, emitida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTO POR JOSÉ RAMIRO FONSECA PALACIOS CONTRA LOS ARTÍCULOS 25 Y 26 DE LA LEY 1 DE 3 DE ENERO DE 1995, MEDIANTE LOS CUALES SE ADICIONAN AL CÓDIGO JUDICIAL LOS ARTÍCULOS 2528-A Y 2528-E. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado José Ramiro Fonseca ha presentado ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de inconstitucionalidad contra los artículos 25 y 26 de la Ley N° 1 de 3 de enero de 1995, mediante los cuales se adicionan al Código Judicial vigente los artículos 2528-A y 2528-E.

El negocio se encuentra en la fase de calificación preliminar, a los efectos de decidir sobre la admisibilidad de la demanda, lo que debe hacerse según lo normado por los artículos 2551 y 2552 del Código Judicial, que señala los requisitos de forma que debe reunir el libelo de inconstitucionalidad para que la acción pueda ser acogida, en concordancia con el artículo 654 de la mencionada excerta procesal.

El examen del libelo presentado permite determinar que la demanda cumple

con los requisitos que señala el artículo 2551, no así con los del artículo 2552, antes indicados. En efecto, el libelo contiene la transcripción de las disposiciones acusadas de inconstitucionales, e indica la disposición fundamental que se estima infringida, así como el concepto de la infracción. No obstante, se omite el cumplimiento del requisito consistente en el deber de acompañar "copia debidamente autenticada de la ley, decreto de gabinete, decreto ley, orden, acuerdo, resolución o acto que se considere inconstitucional ...", tal como expresamente lo ordena el inciso primero del artículo 2552. A la omisión de cumplir con esta exigencia de carácter formal, el demandante le agrega otra, por cuanto no indica, por lo menos, el número de la gaceta oficial donde aparecieron publicadas las normas atacadas.

El inciso final de la última norma en cita sanciona de manera categórica este incumplimiento, al establecer que "La inobservancia de los requisitos a los que se refieren los artículos anteriores producirá la inadmisibilidad de la demanda" (subraya la Corte).

Por lo antes expuesto, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda de inconstitucionalidad presentada por el licenciado José Ramiro Fonseca, contra los artículos 25 y 26 de la Ley N° 1 de 3 de enero de 1995.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA POR ALBERTO A. ORTEGA CONTRA SENTENCIA DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1992, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Alberto A. Ortega, actuando por intermedio de su apoderado judicial, el licenciado Eduardo E. Ríos Molinar, ha presentado ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de inconstitucionalidad contra sentencia de 30 de noviembre de 1992, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo dentro del proceso laboral que propusiera contra el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE).

De acuerdo con lo que sostiene el actor, el acto atacado vulnera los artículos 17, 18 y 32 de la Constitución Política vigente.

El negocio se encuentra para decidir sobre la admisibilidad de la demanda, a la luz de lo que establecen los artículos 2551 y 654 del Código Judicial, consagratorios de los presupuestos procesales que debe reunir el libelo de inconstitucionalidad para que la acción pueda ser acogida, así como con los establecidos por la jurisprudencia de esta Corporación.

En cuanto al requisito común a toda demanda concerniente a la "cosa, declaración o hecho que se demanda", que exige el numeral 5 del artículo 654 del Código Judicial, observa el Pleno que el demandante anuncia una pretensión a todas luces extraña a la naturaleza de los procesos constitucionales, los cuales, valga recordar, son aquellos instituidos para la impugnación, con carácter preventivo o reparador, de las normas o actos que se consideren contrarios a la Constitución (jurisdicción constitucional objetiva) y para la tutela o defensa

de los derechos fundamentales consagrados, en forma expresa o implícitamente, en la Ley Suprema (jurisdicción constitucional subjetiva), así como también los relativos a la función jurisdiccional constitucional, como el juicio político o "Impeachment", los conflictos de competencia entre órganos constitucionales y los conflictos entre poderes del Estado.

En efecto, se solicita en el libelo de demanda que la Corte Suprema "revoque, previa declaratoria de Inconstitucionalidad, de la sentencia de 30 de noviembre de 1992, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial y a su vez declare injustificado el despido de mi mandante" (f. 13, subraya la Corte), de donde, en conjunción con los hechos de la demanda y las pruebas aportadas, se desprende de manera diáfana que la pretensión va encaminada a que se revise en sede constitucional, a través de una acción constitucional objetiva o vía principal de control de constitucionalidad, un asunto que atañe exclusivamente a la jurisdicción especial de trabajo, de conformidad con el artículo 73 de la Carta Fundamental, con la agravante de que el asunto ya fue deslindado en el aludido proceso laboral.

Conviene reiterar lo ya sostenido en profusa jurisprudencia de este tribunal, en el sentido de que la acción de inconstitucionalidad no es un mecanismo procesal idóneo o una vía abierta para promover una tercera instancia, como manera de obtener que el tribunal constitucional examine nuevamente el caudal probatorio de un proceso, como tampoco para que se adentre en consideraciones sobre interpretación de la ley, tareas que corresponden únicamente al juez de la causa y al tribunal de alzada. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete-operador de la Ley Fundamental, no puede pasar entonces a la verificación de supuestos de errores in iudicando, tal como se pretende en esta iniciativa procesal.

Por las consideraciones que anteceden, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda de inconstitucionalidad presentada por el licenciado Eduardo E. Ríos, actuando en representación de Alberto Ortega, contra la sentencia de 30 de noviembre de 1992, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DENTRO DE LA ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA VILLALAZ Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE ÁLVARO PINO, HUMBERTO RUIZ, JOSÉ R. BRENES, CELESTE DE ARAÚZ, LUIS SANTIZO, FIDEL MARTÍNEZ Y OTROS, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA NOTA ARI/AG-DL/433-96 DE 22 DE MAYO DE 1996, EXPEDIDA POR EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Magistrada MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA, ha presentado solicitud de impedimento, para que se le separe del conocimiento del amparo de garantías constitucionales interpuesta contra el Administrador de la Autoridad Interoceánica.

La Magistrada MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA, fundamenta su solicitud de impedimento en los siguientes términos:

> "Manifiesto a ustedes que estoy impedida para conocer de esta acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por arrendatarios de la Autoridad de la Región Interoceánica contra su administrador porque soy inquilina de uno de los bienes que administra esta entidad gubernamental y como tal tengo, interés en la decisión del caso.
>
> Por lo tanto, pido a los honorables Magistrados declaren legal el impedimento que manifiesto y me separen del conocimiento del presente negocio, con fundamento en los artículos 749 (6) y 2562 (3) del Código Judicial.
>
> Panamá, 24 de julio de 1996.
>
> fdo.
> MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA"

La circunstancia invocada por la Honorable Magistrada, es causal de impedimento y la misma está consagrada en el numeral 6 del artículo 749 del Código Judicial.

El Pleno decide llamar al Magistrado Suplente para que asuma el conocimiento del negocio.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento invocado por la Magistrada MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA, para actuar en el amparo de garantías constitucionales interpuesta contra el Administrador de la Autoridad de la Región Interoceánica. Lo separa del conocimiento del mismo y DESIGNA llamar al Magistrado Suplente, para que asuma el conocimiento del proceso antes mencionado.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS MUÑOZ POPE (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELOY ALFARO DE ALBA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO JOSÉ MANUEL FAÚNDES DENTRO DE LA ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR JOSÉ MANUEL FAÚNDES RODRÍGUEZ EN CONTRA DE LA COMISIÓN DE CREDENCIALES, JUSTICIA INTERIOR, REGLAMENTO Y ASUNTOS JUDICIALES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, CATORCE (14) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Magistrado JOSÉ MANUEL FAÚNDES, ha presentado solicitud de impedimento, para que se le separe del conocimiento del amparo de garantías constitucionales por él interpuesto contra la Comisión de Credenciales, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Judiciales de la Asamblea Legislativa.

El Magistrado JOSÉ MANUEL FAÚNDES, fundamenta su solicitud de impedimento en los siguientes términos:

"Con todo respeto solicito al resto de los Magistrados que integran el Pleno de esta Corte Suprema de Justicia, se me declare impedido para conocer de la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por mi persona en contra de la Comisión de Credenciales, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Judiciales de la Asamblea Legislativa.

La razón para mi impedimento es que soy quien interpuso la presente acción de índole constitucional.

Estoy impedido, para conocer de la misma, en virtud de lo dispuesto en las normas concernientes a los impedimentos de los Magistrados y Jueces consagradas en el Código Judicial.

Por lo tanto, solicito al resto de los Magistrados que componen el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que DECLAREN LEGAL el impedimento advertido y, en consecuencia, me separen del conocimiento del presente negocio.

Panamá, 9 de agosto de 1996.

Fdo.
JOSÉ MANUEL FAÚNDES"

La circunstancia invocada por el Honorable Magistrado, es causal de impedimento y la misma está consagrada en el numeral 2 del artículo 749 del Código Judicial.

El Pleno decide llamar al Magistrado Suplente para que asuma el conocimiento del negocio.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento invocado por el Magistrado JOSÉ MANUEL FAÚNDES, para actuar en el amparo de garantías constitucionales interpuesto por su persona contra la Comisión de Credenciales, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Judiciales de la Asamblea Legislativa, lo separa del conocimiento del mismo y DESIGNA llamar al Magistrado Suplente, para que asuma el conocimiento del proceso antes mencionado.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) YANIXA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DENUNCIA CRIMINAL PROPUESTA POR JOSÉ MANUEL FAÚNDES RODRÍGUEZ CONTRA EL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO SOSSA R. POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE DELITOS EN SU PERJUICIO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante escrito calendado 13 de agosto de 1996, el Honorable Magistrado JOSÉ MANUEL FAÚNDES, manifiesta impedimento para conocer la presente DENUNCIA CRIMINAL, propuesta por el licenciado JOSÉ MANUEL FAÚNDES RODRÍGUEZ, contra el licenciado JOSÉ ANTONIO SOSSA R. por la supuesta comisión de delitos en su perjuicio.

La manifestación de impedimento está concebida en los siguientes términos:

"Con todo respeto solicito al resto de los Magistrados que integran el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, se me declare impedido para conocer de la denuncia criminal propuesta por mi persona en contra del licenciado JOSÉ ANTONIO SOSSA R. por la posible comisión de delitos en mi perjuicio.

Estoy impedido, para conocer de la misma, en virtud de lo dispuesto en las normas concernientes a los impedimentos de los Magistrados y Jueces consagradas en el Código Judicial.

Por lo tanto, solicito al resto de los Magistrado que componen el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que DECLAREN LEGAL el impedimento advertido y, en consecuencia, me separen del conocimiento del presente negocio. Panamá, 13 de agosto de 1996.

(Fdo.)
MAGISTRADO JOSÉ MANUEL FAÚNDES"

Examinada la circunstancia anotada por el Magistrado Faúndes, el Pleno considera que la misma constituye la causal de impedimento invocada, por lo que considera que es del caso acceder a su solicitud.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el Magistrado JOSÉ MANUEL FAÚNDES, lo separa del conocimiento del presente negocio y DISPONE que asuma el conocimiento del mismo su suplente personal Dr. HUMBERTO A. COLLADO T.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN EN CONTRA DEL HONORABLE LEGISLADOR ALBERTO ALEMÁN BOYD, POR EL DELITO EN QUE HUBIERA INCURRIDO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Procedente de la Procuraduría General de la Nación, ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el expediente contentivo de las sumarias en averiguación contra el Honorable Legislador **ALBERTO ALEMÁN BOYD**, por el delito en que hubiera incurrido, con la finalidad de que esta Corporación Jurisdiccional ordene su archivo, en base a las consideraciones siguientes:

"Mediante sentencia de 21 de junio de 1991, la Corte Suprema de Justicia declaró nulo todo lo actuado dentro del proceso seguido al H. L. ALBERTO ALEMÁN BOYD, por el delito en que hubiera incurrido, al resolver el Incidente de Controversia promovido por el licenciado Carlos Carrillo Gomila en contra del Fiscal Octavo del Primer Circuito Judicial de Panamá. El Pleno consideró que el prenombrado legislador se encontraba revestido del fuero electoral al momento en que el Ministerio Público inició la respectiva investigación sumarial." (F. 104).

A foja 40, consta nota dirigida al Procurador General de la Nación, suscrita por el licenciado ALBERTO ALEMÁN BOYD, mediante la cual notificó formalmente su decisión de renunciar al fuero parlamentario a partir del día 18 de septiembre de 1990. En tal sentido, la Procuraduría General del la Nación, mediante Providencia de 17 de octubre de 1990 (f. 60), dispuso continuar, de acuerdo con el procedimiento penal, la presente actuación, relacionada con nueve (9) sellos del Tribunal Electoral encontrados en diligencia de allanamiento practicada a las oficinas del Legislador **ALEMÁN BOYD.**

En relación con dichas sumarias, el Pleno de la Corte, había resuelto incidente de controversia, mediante Resolución de 21 de junio de 1991 (fs. 96 a 103), en la cual declaró nulo todo lo actuado por el Fiscal Octavo del Primer Circuito Judicial dentro del proceso seguido contra **ALBERTO ALEMÁN BOYD.**

Observa la Corte, que el delito que se atribuye en esta encuesta, por la posesión de nueve (9) sellos del Tribunal Electoral por parte de **ALBERTO ALEMÁN BOYD**, quien fuera candidato a Legislador por uno de los circuitos electorales, en las elecciones de mayo de 1989, es un delito electoral contra la libertad y pureza del sufragio, de los que tipifica nuestro Código Electoral en el Título VII, Capítulo I, Sección 1a., con un máximo de tres (3) años de prisión como sanción, de donde se colige que el caso ya prescribió y, por ende, de haberse producido delito electoral alguno, cualquier acción se encuentra prescrita, conforme a lo establecido en el artículo 93 del Código Penal, que es del siguiente tenor:

> "Artículo 93: La acción penal prescribe:
> ...
> 3. Cumplidos los 6 años después de la comisisón del hecho punible, si la pena señalada en la ley es mayor de 6 meses y no excede de 6 años de prisión, ..." .

En este orden, el delito que pudo haberse cometido ocurrió hace ya siete (7) años y tres (3) meses -mayo de 1989; esto hace que la acción haya prescrito a los seis (6) años de la ocurrencia del hecho punible, según el artículo 93 del Código Penal antes transcrito, cuya aplicación en este caso se desprende del artículo 315 del Código Electoral.

Por lo anterior, resulta evidente que la acción penal se encuentra prescrita, por lo que no es procedente siquiera, atendiendo a que es nulo todo lo actuado anteriormente, por disposición del Pleno, determinar si el negocio se archiva o si continúa a partir del punto donde el proceso fue anulado, toda vez que, dichas sumarias no requieren de pronunciamiento por parte de la Corte Suprema en cuanto al mérito legal de las mismas, en virtud del agotamiento de la instrucción sumarial, es decir, entrar a analizar si el Honorable Legislador **ALBERTO ALEMÁN BOYD** incurrió en delito, sino que lo que procede es declarar la prescripción de la acción penal, con base en lo establecido en el artículo 1982 del Código Judicial.

Por lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA PRESCRITA la acción penal en las sumarias en averiguación contra el Honorable Legislador ALBERTO ALEMÁN BOYD, por el delito en que hubiera incurrido y, en consecuencia, SOBRESEE DEFINITIVAMENTE a ALBERTO ALEMÁN BOYD en el presente proceso penal.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (CON SALVAMENTO DE VOTO)
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

Por no compartir el criterio de la mayoría, respetuosamente, salvo el voto.

Mi posición en el fondo es que el Pleno de la Corte no tiene competencia en el presente negocio.

Como consta a f. 104, la Procuraduría General de la Nación lo ha enviado "con la finalidad de que esa Corporación jurisdiccional (la Corte) ordene su archivo".

Mediante sentencia del 21 de junio de 1991 el PLENO decidió incidente de controversia, que "DECLARA NULO todo lo actuado por el Fiscal Octavo del Primer Circuito Judicial dentro del proceso seguido en contra del señor ALBERTO ALEMÁN BOYD".

Al dictar dicha sentencia en el incidente y quedar ejecutoriada, la Corte perdió competencia en el negocio. Era, la Procuraduría quien debía ponderar la situación, tomando en cuenta todos los factores que fueran pertinentes, entre ellos lo resuelto por el PLENO de la Corte, y decidir qué se debía hacer.

La resolución del PLENO entra a decidir sobre la prescripción de la acción penal en las sumarias de que se trata. Considero que lo procedente es remitir el expediente, sin resolver nada, a la Procuraduría, para que sea ésta la que tome las medidas correspondientes.

Por estas consideraciones, salvo el voto.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DENTRO DE LA DEMANDA DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE ENRIQUE ALBERTO BRENNAN BRAVO Y CONTRA LA FISCAL PRIMERA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El magistrado Eligio A. Salas ha solicitado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia se le separe del conocimiento de la presente acción de habeas corpus, y en apoyo de su petición manifiesta que actuó "como abogado defensor de las aludidas empresas denunciantes de la extorsión que se le imputa al favorecido con esta acción constitucional, ante la Dirección General de Ingresos, antes de ejercer el cargo de Magistrado de la Corte".

Analizada la solicitud, la Corte considera fundada la inhabilitación en que se encuentra el magistrado Salas para conocer de la situación procesal del detenido, por lo que corresponde resolver de conformidad.

Por lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el magistrado Eligio A. Salas y, en consecuencia, ORDENA sea llamado su suplente personal, el doctor Eloy Alfaro de Alba, para que conozca de esta causa.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PRIMERA DE LO CIVIL

AGOSTO 1996

APELACIONES MARÍTIMAS

JESÚS ARTIACH, PANAVENT HOLDING, SERVICIOS ALVARADOS, MARINE SUPPLIERS, DISTRIBUIDORA MARINA, S. A. Y HONOR IMPORT APELAN CONTRA LA SENTENCIA DE 28 DE DICIEMBRE DE 1995 DICTADA POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ESPECIAL DE CONCURSO DE ACREEDORES DEL PACÍFICO C. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DOCE (12) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro del proceso marítimo especial de concurso de acreedores contra la nave PACIFIC C, el señor JESÚS ARTIACH, representado por la firma forense MONCADA y MONCADA, y PANAVAENT HOLDING, SERVICIOS ALVARADO, MARINE SUPPLIERS y DISTRIBUIDORA MARINA, representado por la firma forense CARREIRA PITTÍ, P. C. ABOGADOS, han apelado contra la sentencia del Tribunal Marítimo, de 28 de diciembre de 1995, mediante la cual se califican los créditos privilegiados con derecho al pago en las proporciones que correspondan, apelaciones que fueron admitidas mediante resolución de 23 de febrero de 1996, y remitidas a esta Sala, para que se decidieran los aludidos recursos, en virtud de la competencia que, como Tribunal de Apelación, ostenta esta Sala.

Resulta pertinente, si bien sea de manera breve y escueta, hacer un recuento de este proceso, así como un análisis de las argumentaciones de los apelantes y de las oposiciones de éstos, que consten en el expediente.

ANTECEDENTES

La firma forense CARREIRA PITTÍ P. C. ABOGADOS, en carácter de apoderados judiciales de la sociedad GANDARA PANAMÁ, S. A., elevaron ante el Tribunal Marítimo de Panamá, petición de apertura del concurso de acreedores privilegiados de la M/N PACÍFICO C.

Se expresa en el libelo de demanda que contra la referida motonave existe un proceso especial de ejecución de crédito marítimo privilegiado que la administración judicial del I. R. H. E. le sigue a la M. N. PACIFIC C; así como también pesan dos embargos en el Tribunal Marítimo de Panamá, los cuales fueron decretados por el Juzgado Tercero de Trabajo, en los procesos denominados JOSÉ A. OSTIZ y otros contra COPROSA; y LUIS A. RODRÍGUEZ y otros contra TUNA MEDITERRANEAN SERVICES CORP. y/o COPROSA. (Fs. 12-15).

El Juzgado Marítimo de Panamá, mediante Auto de 10 de diciembre de 1993, DECRETA ABIERTO el Concurso de Acreedores Privilegiados de la nave de bandera panameña PACIFIC C, propiedad de COMERCIO Y PROMOCIONES, S. A. (COPROSA), en base al artículo 529 del Código de Procedimiento Marítimo.

A fojas 352 y 353, el Tribunal Marítimo señala los créditos que fueron presentados en tiempo, que pasamos a transcribir:

> "1. A fjs. 21-30 CASAMAR BONDED WARENHOUSE, S. A., con sentencia del Tribunal Marítimo de Panamá por aprovisionamiento al buque "PACÍFICO C" (presentado el 10 de marzo de 1994);
>
> 2. A fjs. 58-59 FRANCISCO BASALDELLA presenta alegado (sic) título por acreencia laboral por trabajo a bordo del buque (presentada el día 26 de abril de 1994);
>
> 3. A fjs. 60-61, se presentan el 26 de abril de 1994, títulos de acreencias laborales BARTOLO MORENO, LUIS RODRÍGUEZ D. y ALDO G. RAMPOLLA, sin embargo éstos posteriormente desistieron expresamente (v. fjs. 330-335);
>
> 4. A fjs. 99-100, el 30 de mayo de 1994, PANAVENT HOLDING, S. A., presenta título por alegada acreencia en base a la Ley de Privilegios e Hipotecas Navales de Venezuela, específicamente

conforme al artículo 5, numeral 7.

5. A fjs. 108-110, el 30 de mayo de 1994, HONOR IMPORT & EXPORT, INC., presentan alegado (sic) título de acreencia privilegiada de acuerdo con el Artículo 7, numeral 7 de la Ley de Privilegios e Hipotecas Navales de Venezuela.

6. A fjs. 160-161, el 30 de mayo de 1994, SERVICIOS ALVARADO, S. A., presentan alegado (sic) título justificativo de acreencia privilegiado de acuerdo con el Artículo 5, numeral 7 de la Ley de Privilegios e Hipotecas Navales de Venezuela.

7. A fj. 173, el 30 de mayo de 1994, DISTRIBUIDORA MARINA, S. A. presenta alegado (sic) título justificativo de acreencia privilegiada en base al artículo 5, numeral 7 de Ley de Privilegios e Hipotecas Navales de Venezuela.

8. A fjs. 180-182, el 30 de mayo de 1994, MARINE SUPPLIERS, S. A., presenta alegado (sic) título justificativo de acreencia privilegiada en base al artículo 5, numeral 7 de la Ley de Privilegios e Hipotecas Navales de Venezuela.

9. A fjs. 226-227, el 30 de mayo de 1994, SERVICIOS MARÍTIMOS DEL PACIFICO, S. A. (SERMAR), presenta alegado título justificativo de acreencia privilegiada en base al artículo 5, numeral 6 de la Ley de Privilegios e Hipotecas Navales de Venezuela."

El Tribunal Marítimo de Panamá, en resolución de fecha 28 de diciembre de 1995, expresa que el remanente líquido por la venta judicial de la motonave PACIFIC C, lo constituye la suma de CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS BALBOAS CON NOVENTA Y UN CENTÉSIMOS (B/.52,936.91), que serán prorrateados según los pagos que se deben hacer conforme las relaciones que se establecen y resuelven a continuación:

"1. PAGAR al señor FRANCISCO BASALDELLA la suma de NUEVA MIL CIENTO VEINTE BALBOAS (B/.9,120.00), en concepto de honorarios por servicios de custodia y mantenimiento de la motonave "PACÍFICO C" mientras estuvo bajo custodia legis desde el 16 de marzo de 1992 al 14 de enero de 1993 a razón de TREINTA BALBOAS POR DÍA (B/.30.00), suma esta que debe ser cancelada del fondo líquido con prioridad e independencia a los créditos marítimos privilegiados por considerarla el Tribunal dentro de los gastos de custodia y mantenimiento del buque durante el secuestro, más los intereses correspondientes a esta suma que haya generado el certificado de garantía.

2. Pagar como primera prelación en el Concurso por crédito marítimo privilegiado conforme al numeral 4 del artículo 1507 del Código de Comercio a DESCARGADORES DE TUNIDOS, S. A. (DESTUN) la suma de ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS BALBOAS CON SESENTA Y SEIS CENTÉSIMOS (B/.11,686.60), más los intereses correspondientes a esta suma que haya producido el certificado de garantía.

3. Pagar como segunda prelación por crédito marítimo privilegiado conforme al numeral 8 del artículo 1507 del Código de Comercio a CASAMAR BONDED WAREHOUSE, S. A., la suma de VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO BALBOAS CON CINCUENTA Y CINCO CENTÉSIMOS (B/.20,725.55), más los intereses correspondientes a esta suma que haya generado el certificado de garantía.

4. Pagar como tercera prelación por crédito privilegiado conforme al numeral 8 del artículo 1507 del Código de Comercio en relación con el segundo párrafo del artículo 1505 del mismo Código a SERVICIOS MARÍTIMOS DEL PACIFICO, S. A. (SERMAR) la suma de TRES MIL DIECISÉIS BALBOAS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTÉSIMOS (B/.3,016.59), más los intereses correspondientes a esta suma que haya generado el

certificado de garantía.

5. Pagar como cuarta prelación conforme el numeral 8 del artículo 1507 del Código de Comercio en relación con el segundo párrafo del artículo 1505 del mismo Código HONOR IMPORT & EXPORT INC. en suma de TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE BALBOAS CON QUINCE CENTÉSIMOS (B/.37,409.15) el remanente del fondo líquido, es decir la suma de OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO BALBOAS CON 17 CENTÉSIMOS (B/.8.388.17), más los intereses correspondientes a esta suma que haya generado el certificado de garantía."

Contra la sentencia que profiriera el Tribunal Marítimo de Panamá, apelaron la firma forense MONCADA & MONCADA, apoderados judiciales de JESÚS ARTIACH; así como también, la firma forense CARREIRA PITTÍ P. C. ABOGADOS, quienes representan a las empresas MARINE SUPPLIERS, DISTRIBUIDORA MARINA, SERVICIOS ALVARADO y PANAVENT HOLDING. Sobre ambas apelaciones procederemos a hacer un breve análisis de la sustentación de cada una de ellas, en el orden de presentación:

ESCRITO DE APELACIÓN DE LA FIRMA
FORENSE MONCADA & MONCADA

Se plasma en este escrito la disconformidad del apelante, en virtud de que en la sentencia apelada no se tomó cuenta el crédito laboral que le correspondía a su representado, señor JESÚS ARTIACH, quien al momento de decretarse la Apertura del Concurso de Acreedores, no le había sido reconocido su condición de trabajador de la motonave "PACIFIC C". Tal derecho le fue conferido mediante sentencia de 12 de julio de 1994, proferida por la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema de Justicia.

Sostiene la apelante que el Juzgado Primero de Trabajo de la Primera Sección mediante Auto N° 238 decretó embargo contra la motonave "PACIFIC C", hasta la concurrencia de la suma de TRECE MIL CINCUENTA Y TRES BALBOAS CON SEIS CENTÉSIMOS (B/.13.053.06) y se oficia al Tribunal Marítimo de Panamá, en calidad de funcionario de ejecución, procediera a efectuar dicho embargo.

Concluye la parte recurrente que se han infringido los artículos 1507, ordinal 3 del Código de Comercio, así como también, los artículos 166, y 167 del Código de Trabajo, que guardan relación con los créditos preferentes.

ESCRITO DE APELACIÓN DE LA FIRMA FORENSE
CARREIRA PITTÍ P. C. ABOGADOS

Esta apelación está sustentada en dos elementos que se circunscriben en valoración probatoria.

Considera el apelante que el error en la apreciación de la prueba en el caso de las empresas PANAVENT HOLDING y SERVICIOS ALVARADO, por parte del juzgador, al decidir que no había constancia de que los artículos descritos en las facturas y que fueran emitidos por estas empresas, hubieren sido entregadas a M/N PACIFIC C. Con respecto a ello, manifiesta que la costumbre del mar y más propiamente en la industria de pesca del atún, "se han desarrollado a través de la costumbre una serie de procedimientos a fin de abastecer a las naves que se encuentran en plena faena" (f. 413). Por otra parte, sostiene que no se presentaron objeciones de ningún tipo a las facturas presentadas por sus representados.

El segundo elemento señalado es la indebida aplicación del texto del artículo 1505 del Código de Comercio a las pruebas aportadas por la empresa DISTRIBUIDORA MARINA, MARINE SUPPLIERS. Expresa que en las facturas se establece el nombre de la nave, de fecha 29 de octubre de 1991, que es la fecha más reciente de todos los créditos aprobados por el Tribunal Marítimo. Seguidamente se refiere a que "el hecho que no aparezca el sello de la embarcación en el recibo de la mercancía, no implica que la misma no haya sido entregada, por el contrario se observa en la misma un sello de aduanas del Puerto de Balboa y tiene una forma ilegible, lo que hace presumir la entrega". Reitera que no fueron rebatidas las pruebas aportadas por la parte demandada.

Por último en el análisis efectuado, tenemos el escrito de oposición formulado por CARREIRA PITTÍ ASOCIADOS, P. C. ABOGADOS, al recurso de apelación presentado por la representación del Sr. JESÚS ARTIACH, que corre de fojas 421 a 432 del expediente, que sintetiza en la denominada CONCLUSIÓN, lo siguiente:

"Para concluir tenemos lo siguiente:

1. La recurrente debió haber presentado su crédito litigioso al momento de la apertura del concurso de acreedores de la M. N. PACÍFICO C.

2. La notoriedad judicial no es aplicable al caso del señor ARTIACH, por cuanto que su crédito surgió con posterioridad a la apertura del concurso, no siendo presentado como crédito litigioso en el momento procesal adecuado.

3. La aplicabilidad de los artículos 166 y 167 del Código Laboral resulta improcedente, por cuanto que COPROSA no fue declarada en quiebra o insolvencia, por tanto el señor ARTIACH se encontraba en la obligación de someterse a los rigores del procedimiento especial para el concurso de acreedores establecidos en la Ley 8ª".

Como ha quedado señalado, el apoderado de Jesús Artiach plantea como argumento del recurso de apelación, que el crédito marítimo privilegiado, representado por la sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, de 12 de julio de 1994, fue totalmente ignorado por la sentencia del Tribunal Marítimo antes mencionada. El señor JESÚS ARTIACH presentó dos cuentas, una, para cobrar los costas judiciales a consecuencia de secuestro sobre la nave concursada, la que le fue pagada, como consta a foja 279 del expediente; y la segunda, el crédito privilegiado reconocido mediante la sentencia de 12 de julio de 1994. No obstante, la obligación que ostentaba la nave hacia el trabajador, no existía a la fecha de la apertura del concurso de acreedores, y, además, fue presentada en forma extemporánea por la recurrente. Efectivamente, el término para la presentación de créditos contra la nave venció el 30 de mayo de 1994, y la recurrente presentó su crédito el día 2 de agosto de ese mismo año, en escrito recibido por insistencia del recurrente, por lo que era claramente extemporánea dicha presentación. Debe, por tanto, esta Sala determinar la situación jurídica de los créditos presentados en forma extemporánea. El proceso especial de concurso de acreedores contra buques en razón de créditos marítimos privilegiados no regula, de manera explícita, dicha situación, la cual, por lo demás, no está contemplada por el artículo 533 del Código de Procedimiento Marítimo, toda vez que dichos créditos no fueron declarados inadmisibles ni se les negó la prelación que ostentan, sino sencillamente no fueron tomados en cuenta en el análisis que realizó el Tribunal. La Sala estima que, frente a esa situación no prevista en el ordenamiento procesal marítimo, lo procedente resultaría considerar que se han agotado, para ese peticionario, los recursos que caben ante el tribunal de instancia, por lo que resulta procedente el recurso de apelación ante la Sala (Código Marítimo, artículo 482, numeral 1°). Y llega a esa conclusión en virtud de que, aplicando los principios del Derecho Procesal contenidos en el Código Judicial (arg. artículo 31 del Código Procesal Marítimo), el remedio procesal que le quedaría al afectado sería someter el asunto a la Junta de Acreedores (artículo 1.885 del Código Judicial), organismo éste que no se encuentra previsto en la legislación procesal marítima para los concursos de acreedores de créditos marítimos privilegiados, en que la decisión del citado organismo colegiado integrado por los acreedores es sustituido por la aprobación o desaprobación el Juez marítimo.

La Sala estima que la procedencia del recurso de apelación (que no cabe cuando esté previsto el recurso de reconsideración) es la interpretación correcta de la anterior situación, como se desprende de su doctrina en esta materia, como lo acreditan, entre otras, las sentencias de 16 de agosto de 1994 y de 13 de octubre de 1992.

Conviene deslindar si resulta aplicable el principio de notoriedad judicial (artículo 406 del Código de Procedimiento Marítimo), invocado por la apelante, ante lo cual debe precisar la Sala que prevalecen sobre una norma general, como

es la que consagra el artículo 406, las reglas especiales aplicables a los procesos de concurso de acreedores contra la nave, singularmente la presentación dentro de término de los créditos y el mecanismo procesal diseñado en el caso de presentación tardía de créditos contra la nave, que ya ha sido analizado por la Sala.

El segundo recurso de apelación fue promovido, como se ha dicho, por la firma forense CARREIRA PITTÍ, P. C. ABOGADOS, y en el mismo, se señalan como argumentos, aspectos de valoración probatoria, que, en principio, le están vedados conocer al Tribunal de Apelación, cuya competencia se circunscribe a asuntos de derecho. Como quiera que el recurrente manifiesta, apoyado en jurisprudencia de esta Sala, que las pruebas deben ser valoradas por la Sala, en virtud de que el error en la valoración tiene como consecuencia inmediata el desconocimiento de los derechos sustantivos que la ley establece a favor de alguna de las partes, a ello procede la Sala.

La Sala considera que, en la presente encuesta, no se dan los supuestos de hecho que la Sala, en fallos anteriores, considera que constituye una excepción para el conocimiento de asuntos probatorios, y no de derecho, a lo que debe avocarse el Tribunal de Apelación. Y esta conclusión de la Sala se encuentra apoyada en las siguientes consideraciones:

Con respecto a pruebas de Panavent Holding y Servicios Alvarado, invoca el recurrente la costumbre de mar, la cual entraría o sería aplicable en virtud de que la costumbre de mar puede enmarcarse dentro de los usos de comercio. No obstante, tal fuente supletoria está sujeta a que la ley comercial no disponga otra cosa, dado que, en materia de aplicación de la ley, la primera fuente la constituye la ley escrita; y sólo en ausencia de ésta cabe aplicar, supletoriamente, los usos de comercio, conforme se desprende claramente de los artículos 5 y 194 del Código de Comercio, que, para mayor ilustración, la Sala se permite reproducir:

> "Artículo 5. Si las cuestiones sobre derechos y obligaciones comerciales no pudieren ser resueltas ni por el texto de la ley comercial, ni por su espíritu, ni por los casos análogos en ellas previstos, serán decididos con arreglo a los usos del comercio observados generalmente en cada plaza; y a falta de éstos, se estará a lo que establezca el derecho civil".
>
> "Artículo 194. En cuanto no esté dispuesto en el presente Código en materia de contratación mercantil, deberá estarse a los usos del comercio generalmente observados en cada plaza, y a falta de éstos a las prescripciones del derecho común relativas a las obligaciones y contratas en general".

La segunda infracción que la atribuye el recurrente a la sentencia impugnada, es que ha infringido el artículo 1505 del Código de Comercio, con respecto a unas facturas, que se trata de facturas donde no aparece acreditado que han sido aceptadas, invocándose, en este evento, también el tema del uso de comercio y de las presunciones, no obstante que el Código de Comercio señala como fuente de las obligaciones las "facturas aceptadas" (artículo 244, numeral 4), por lo que a dicha situación de las facturas como prueba de las obligaciones señaladas en la Ley, no puede oponérsele los usos de mar o las presunciones.

Por tal motivo, no resultan valederas las argumentaciones del recurrente, por lo que procede la confirmación de la sentencia recurrida.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA en todas sus partes la resolución de 28 de diciembre de 1995, proferida por el Tribunal Marítimo de Panamá.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN CIVIL

FINANCIERA LA HISPANOAMERICANA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A ASEGURADORA MUNDIAL DE PANAMÁ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Contra la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 10 de enero de 1996, dentro del proceso ordinario instaurado por **FINANCIERA LA HISPANOAMERICANA, S. A.** contra **ASEGURADORA MUNDIAL DE PANAMÁ, S. A.**, el apoderado judicial de la parte demandante presentó recurso de casación. Dicho recurso se encuentra en trámite de admisibilidad, por lo que la Sala procede a pronunciarse en relación con ella.

Se trata de resolución que admite casación, en su condición de sentencia proferida en segunda instancia, dentro de un proceso de conocimiento que tiene cuantía superior al mínimo que establece la ley.

Consta en el expediente que el recurrente anunció y formalizó la casación en tiempo oportuno y que es persona hábil para ello.

En cuanto al escrito contentivo del recurso, se observa que se trata de casación en el fondo en la que se invoca una sola causal: la infracción de normas sustantivas de derecho por interpretación errónea, que influyó sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

No se trata de una de las causales probatorias, lo que significa que el recurrente está de acuerdo con los hechos como los ha planteado la Sentencia recurrida.

No obstante, en los motivos se señala lo siguiente:

> **"MOTIVO PRIMERO**: Para absolver a la ASEGURADORA MUNDIAL DE PANAMÁ, S. A. la sentencia recurrida interpretó erróneamente la ley, la cual fue reconocida en la sentencia, pero interpretada de forma errónea cuando dijo que la demandada estaba en la obligación de notificar al asegurado el no pago del seguro, pero no al beneficiario que en este caso lo es la FINANCIERA LA HISPANOAMERICANA, S. A.
>
> **MOTIVO SEGUNDO**: La sentencia impugnada al absolver a la ASEGURADORA MUNDIAL DE PANAMÁ, S. A. no interpretó, como debió hacerlo según la ley, las normas de derecho aplicables al caso en estudio.
>
> **MOTIVO TERCERO:** La sentencia recurrida, al absolver a la ASEGURADORA MUNDIAL DE PANAMÁ, S. A. sostuvo que al momento de la muerte de JAIME ORTEGA GONZÁLEZ REVILLA la FINANCIERA LA HISPANOAMERICANA, S. A. no era la beneficiaria de las pólizas de vida, con lo cual no interpretó como lo exige la ley, las normas de derecho sustantivas que regulan la materia.
>
> **MOTIVO CUARTO:** La sentencia recurrida, al absolver a la **ASEGURADORA MUNDIAL DE PANAMÁ, S. A.** sostuvo que en el expediente no existe constancia que la aseguradora se haya obligado para con el beneficiario de la póliza a notificarlo de la vigencia o terminación de la póliza, con lo cual no interpretó, tal cual lo exige la ley, las normas de derecho que tratan la materia." (Lo subraya la Sala).

En su conjunto los motivos son ambiguos. No reflejan una realidad (causa petendi), la de la Sentencia recurrida, que signifique un desconocimiento de los derechos de la parte recurrente. No ubican a la Sala en terreno alguno.

El MOTIVO PRIMERO, en síntesis, dice que la Sentencia sostiene que la compañía de seguros (demandada) no estaba obligada a notificar al beneficiario "el no pago del seguro". Esta afirmación la hace en el aire, sin que sepamos a qué situación (de hecho) se refiere. Lo que hace difícil comprender, por más esfuerzos, qué es lo que pretende el recurrente.

Debe tener en cuenta el recurrente que la casación no es una tercera instancia. Lo que significa que debe formular una proposición jurídica que tenga significado completo.

El MOTIVO SEGUNDO no es más que la afirmación abstracta de que la Sentencia interpretó equivocadamente la ley. Ninguna justificación tiene este "motivo".

El MOTIVO TERCERO se aleja notoriamente de la causal (interpretación errónea de la norma sustantiva), se refiere a un hecho: si al momento de la muerte de Jaime Ortega González Revilla, Financiera Hispanoamericana era su beneficiaria, en un contrato de seguro que cubría a Jaime Ortega González Revilla.

No se entiende cómo el hecho en sí, signifique que la Sentencia "no interpretó como exige la ley, las normas de derecho sustantivas que rigen la materia".

En verdad el motivo no guarda relación con la causal; en tanto que la causal, como hemos visto, no es probatoria (interpretación errónea), que supone acuerdo en cuanto a los hechos.

El MOTIVO CUARTO también parece referirse a una causal probatoria, cuando no se trata de una causal de esa naturaleza. En efecto, contiene la expresión: "La sentencia recurrida ... sostuvo que en el expediente no existe constancia (de) que la aseguradora se haya obligado con el beneficiario de la póliza a notificarlo de la vigencia o terminación de la póliza".

Al expresarse el recurrente de esa manera justifica que se pueda pensar que se refiere a un orden de cosas que no armoniza, como debiera, con la causal que se invoca.

El escrito de formalización del recurso de casación requiere rigor, precisión y claridad al expresar un planteamiento jurídico con sentido completo, en sus aspectos de hecho (motivos) y de derecho (disposiciones legales violadas) referidos a la enunciación, en nivel mayor de abstracción, de la violación de la ley, que constituye la causal de que se trate. Todo debidamente relacionado entre sí. Sin olvidar el carácter práctico de la actividad de la función jurisdiccional.

Los motivos expuestos por el recurrente son deficientes en ese sentido. No reflejan una situación de hecho, necesaria para completar la proposición que se formula contra la sentencia recurrida.

Tanto ello es así, que se ve obligado a exponer los enunciados de hecho que omitió en los motivos al expresar el concepto en que fueron violadas las normas, lo que hace in extenso, inoportunamente.

En la primera disposición: "Jaime Ortega González Revilla solicitó y obtuvo un préstamo con nuestra representada ... por la cantidad de B/.30,000.00"; "para garantizar el préstamo otorgado el día 3 de octubre de 1985 el Sr. Jaime Ortega González Revilla endosó a favor de la Financiera La Hispanoamericana, S. A., mediante el endoso N° 33, la cantidad de B/.20,000.00 ..." etc., etc.

Lo mismo ocurre con las otras disposiciones violadas, en las cuales también se extiende en enunciados de hecho, al explicar el concepto de la violación.

La estructura del recurso de casación establecida por la ley no pretende constreñir como camisa de fuerza, sino ayudar a organizar la expresión del planteamiento que se desea hacer, de manera que se logre comunicarlo con precisión.

Las causales de fondo pretenden agotar los casos en que se violan las normas (sustantivas) que consagran derechos. Por su naturaleza son abstractas en grado absoluto. Los motivos concretan el caso, al poner de presente cómo el fenómeno abstracto de la causal ha ocurrido en la realidad. Y las normas legales son la regulación de los hechos, violadas, explicando sucintamente cómo.

Debe el recurrente hacer las correcciones para atender las deficiencias señaladas.

Por tanto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA LA CORRECCIÓN del presente recurso de casación en el fondo, para lo cual le concede al recurrente el término establecido en el artículo 1166 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ELIGIO MARÍN C.
Secretario Interino

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LESTER CASH KNIGHT RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A JORGE LUIS BAZÁN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro del proceso ordinario instaurado por el señor **LESTER CASH KNIGHT** contra el señor **JORGE LUIS BAZÁN**, el apoderado judicial del demandante anunció y formalizó en tiempo oportuno recurso de casación en el fondo, contra la sentencia que decidió el negocio en segunda instancia, proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial el 11 de marzo de 1996.

Mediante resolución de 25 de julio de 1996, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia ordenó la corrección del escrito de formalización del mencionado recurso, en vista de que contenía errores formales subsanables.

Según se hace constar en el informe secretarial consultable a foja 195, ha transcurrido el término concedido para que el recurrente en casación efectuara la corrección ordenada, sin que ésta se hubiere realizado. Esta situación conlleva la declaratoria de inadmisibilidad del recurso de casación, de conformidad con el artículo 1166 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación en el fondo, interpuesto por el apoderado judicial del señor LESTER CASH KNIGHT.

Las costas, a cargo de la parte recurrente, se fijan en setenta y cinco balboas (B/.75.00) solamente.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AGNES ESTHER BRIN SALAZAR DE CHIARI RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE RODOLFO CHIARI DE LEÓN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, TRECE (13) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Familia el 19 de enero de 1996, dentro del proceso de divorcio instaurado por el señor **RODOLFO CHIARI DE LEÓN** contra la señora **AGNES ESTHER BRIN SALAZAR DE CHIARI**, la apoderada judicial de la parte demandada anunció y presentó en tiempo oportuno recurso de casación en el fondo.

Mediante resolución fechada 12 de julio de 1996, esta Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible la primera causal y ordenó la corrección de la segunda, en virtud de que contenía errores formales subsanables.

El recurrente en casación ha presentado nuevo escrito dentro del término estipulado por el artículo 1166 del Código Judicial, razón por la cual debe decidirse en forma definitiva su admisibilidad, confrontando el nuevo libelo con lo señalado por esta corporación judicial en la resolución que ordenó la corrección.

La lectura del escrito corregido pone en evidencia que no se dio cabal cumplimiento a lo ordenado por la Corte, en relación con los motivos y las disposiciones legales infringidas. En la resolución de la Sala se señaló lo siguiente:

> "En cuanto a los motivos, el recurrente en casación debe ser más preciso en su enunciado, de manera que expresen con claridad en qué consiste el error de valoración que le imputan a la sentencia de segunda instancia. Los motivos dentro del recurso de casación no deben contener alegaciones, ya que ellos constituyen los hechos que le sirven de soporte. Además, específicamente en los motivos quinto y sexto, el recurrente se refiere a que la sentencia atacada disolvió el vínculo matrimonial "sin suficientes elementos probatorios", lo cual no es congruente con la causal de error de derecho."

Se advierte que los motivos se mantienen en el mismo grado de imprecisión que le fuera censurado en la resolución parcialmente transcrita, ya que el recurrente en casación se limitó a añadir unas cuantas consideraciones que no plantean en qué consiste la violación en la que supuestamente incurrió la sentencia atacada. Hay que recordar que los motivos deben precisar los hechos concretos que conducen, en el caso de las causales de fondo, a la infracción de la norma o normas sustantivas de derecho, por parte de la resolución proferida en segunda instancia, lo que no se logra en el caso que nos ocupa.

Así, en el motivo primero se hace alusión a que la sentencia de segunda instancia declaró disuelto el vínculo matrimonial, "dándole valor de convicción a los testimonios" y "asignándole mérito probatorio a los documentos", sin indicar cómo se produjo la violación de derecho; situación que se repite en los motivos segundo, tercero y cuarto. En este último motivo cita disposiciones legales violadas y es contradictorio cuando expresa a una prueba pleno valor y, allí mismo se agrega que el propio Tribunal admitió que la prueba no aportó nada como tal. Por último, presenta características de alegato.

En cuanto a los motivos quinto y sexto, el recurrente en casación insiste en señalar que se disolvió el matrimonio "sin suficientes elementos probatorios", lo cual es incongruente con la causal invocada, como ya se le había señalado en

la resolución anterior. Además es profuso en la cita de disposiciones legales, aquí fuera de lugar. Por último, con tono de alegato toca tema ajeno a la causal, como lo es que la Sentencia pretermitió la declaratoria de culpabilidad.

Finalmente, en los motivos séptimo y octavo, simplemente se alega que el Tribunal Superior les da un valor distinto al que establece la ley, a algunos documentos que fueron aportados al proceso.

De esta manera no se puede saber qué es lo que se pretende en el recurso de casación.

Ahora bien, en relación con las disposiciones legales que se consideran infringidas la Corte había indicado ciertos errores que, igualmente, debían ser corregidos. Específicamente, en cuanto al ordinal 9 del artículo 114 del Código Civil, se le había censurado el hecho de que dentro de la explicación de su infracción se señalaba que había sido violada directamente por omisión cuando, en realidad, había sido aplicada por el Tribunal Superior, ya que la disolución del vínculo matrimonial se decretó sobre la base de la causal de divorcio contenida en esa norma legal. El recurrente en casación debía, entonces, explicar correctamente en qué consistía la violación de dicho artículo.

En el nuevo escrito presentado se señalan como normas legales infringidas los artículos 770, 904 y 905 del Código Judicial. No incluye el ordinal 9 del artículo 114 del Código Civil ni ninguna otra norma sustantiva, lo que hace inadmisible el presente recurso de casación, ya que las causales de fondo implican, necesariamente, la infracción de normas sustantivas de derecho. Cuando se trata de las causales probatorias, como en el presente caso, es necesario que se mencionen tanto las normas probatorias como las disposiciones legales sustantivas que se han violado, indirectamente, como consecuencia del error de hecho o de derecho en que ha incurrido la sentencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación presentado por la señora AGNES ESTHER BRIN SALAZAR DE CHIARI, dentro del proceso de divorcio que le sigue el señor RODOLFO CHIARI DE LEÓN.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

FINANCIERA LA HISPANOAMERICANA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A ASEGURADORA MUNDIAL DE PANAMÁ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro del proceso ordinario instaurado por **FINANCIERA LA HISPANOAMERICANA, S. A.** contra **ASEGURADORA MUNDIAL DE PANAMÁ, S. A.**, el apoderado judicial de la parte demandante formalizó recurso de casación contra la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, el 10 de enero de 1996.

En virtud de que el recurso de casación presentaba errores formales, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia ordenó su corrección, mediante resolución fechada 2 de agosto de 1996.

Según hace constar la Secretaría de la Sala en informe consultable a foja 318, ha transcurrido el término concedido al recurrente para efectuar la

corrección, sin que se hubiese efectuado la misma. De conformidad con el artículo 1166 del Código Judicial, esta situación conlleva la declaratoria de inadmisibilidad del recurso de casación.

Por tanto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación en el fondo, interpuesto por el apoderado judicial de FINANCIERA LA HISPANOAMERICANA, S. A.

Las costas de casación se fijan en setenta y cinco balboas (B/.75.00) solamente.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AGROPECUARIA COMERCIAL, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A PORCINOCULTORES UNIDOS DE AZUERO, S. A. Y PRODUCTORES ASOCIADOS DE AZUERO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTE (20) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro del proceso ordinario propuesto por AGROPECUARIA COMERCIAL, S. A., ha sido enderezado recurso extraordinario de casación en el fondo contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, de 2 de febrero de 1996, mediante la cual, previa revocatoria de la sentencia apelada, se resolvió declarar probada la excepción de compensación, alegada por la parte demandada en la oposición al recurso de apelación promovido por la parte actora, a quien le era adversa la sentencia objeto del recurso extraordinario de casación. El recurso, que había sido objeto de una orden de corrección por parte de la Sala, fue finalmente admitido por cuanto, en apreciación de la Sala, cumplía con los requisitos y presupuestos que gobiernan este recurso extraordinario, mediante Resolución de 26 de junio de 1996.

El recurso de casación es, como ha quedado precisado, en el fondo, invocándose la causal de violación de las normas substantivas de derecho, en concepto de violación directa.

Los motivos en que se fundamenta el recurso, son los siguientes, visibles a foja 485 y 486, que se transcriben:

> **"PRIMERO**: La sentencia impugnada se fundó en que la Sociedad PORCINOCULTORES UNIDOS DE AZUERO, S. A. había resuelto que las obligaciones de dicha sociedad con terceros vinculaban a los socios de la misma.
>
> **SEGUNDO**: La sentencia impugnada, para decidir lo resuelto, se fundó en que en dos sesiones de accionistas se había acordado que las resoluciones dictadas por la mayoría de los accionistas vinculaba a la sociedad demandante, aún cuando no hubiese participado en dichas sesiones.
>
> **TERCERO**: La sentencia impugnada se fundó en que el instrumento constitutivo de la sociedad (Contrato de Sociedad, foja 325 vuelta) impone a los socios la obligación de acatar las resoluciones que se acuerden por mayoría de la Junta de Accionistas.

CUARTO: La sentencia impugnada violó la ley substantiva al imponerle a Agropecuaria Comercial una obligación de asumir a prorrata (20%) las obligaciones de PORCINOCULTORES UNIDOS DE AZUERO, S. A., sin que existiera aceptación de Agropecuaria Comercial.

QUINTO: La sentencia impugnada reconoció eficacia vinculante en contra de AGROPECUARIA COMERCIAL, S. A., a las sesiones de las Juntas de Accionistas de PORCINOCULTORES UNIDOS DE AZUERO, S. A., que imponía obligaciones a cargo de Agropecuaria Comercial, mediante acuerdos (fojas 306-307) sin que hubiere participado en dicha sesión AGROPECUARIA COMERCIAL, S. A. y sin que se hubieren cumplido los requisitos establecidos en la ley respecto a la citación mediante entrega personal o por correo.

SEXTO: La sentencia impugnada violó la ley substantiva al imponerle a Agropecuaria Comercial una obligación sin que tal obligación fuere establecida por la ley, contrato, cuasicontrato o acto ilícito.

SÉPTIMO: La sentencia impugnada interpretó erróneamente el contrato de sociedad (fojas 324 a 327), a partir de la premisa, que dicho contrato en su cláusula 7°, parágrafo 4 (fojas 325 vuelta) imponía a los accionistas las obligaciones de la sociedad hacia terceros, siendo que dicha cláusula 7°, parágrafo 4, del contrato de sociedad (fojas 325 vuelta) dispone que los socios no responden de las obligaciones de la sociedad, y que la frase de que los accionistas deben aceptar lo resuelto por la Junta de Accionistas sólo se refiere al régimen interno de PORCINOCULTORES UNIDOS DE AZUERO, S. A. y no a las obligaciones personales de los accionistas a pagar por deudas de dicha sociedad a terceros.

OCTAVO: La sentencia impugnada desconoció un principio fundamental de que los accionistas no responden por las obligaciones de la sociedad.

NOVENO: El anterior error incidió en la parte resolutiva de la sentencia ya que estableció obligaciones a cargo de Agropecuaria Comercial sin fuente de obligaciones".

Las normas que se estiman violadas, por su parte, son los artículos 974 y 1082 del Código Civil y los artículos 40 y 44 de la Ley 32 de 1927, sobre sociedades anónimas.

Los autos de la presente litis informan que la parte recurrente, por conducto de la firma forense PINILLA Y ASOCIADOS, instauró proceso ordinario, con acción de secuestro en contra de las sociedades PORCINOCULTORES UNIDOS DE AZUERO, S. A. y PRODUCTORES ASOCIADOS DE AZUERO, S. A., a fin de que sean solidariamente responsables a pagar a la sociedad demandante la suma de NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BALBOAS CON CATORCE CENTÉSIMOS (B/.96,754.14), que le adeudan, más los intereses, costas y gastos del proceso.

Correspondió al Juzgado Primero del Circuito de Herrera, el conocimiento de este negocio, en la primera instancia. Este Despacho procedió a dar traslado de la demanda, apreciándose de fojas 193 a 200 del expediente, la contestación del libelo por intermedio del apoderado judicial de PORCINOCULTORES UNIDOS DE AZUERO, S. A. y PRODUCTORES ASOCIADOS DE AZUERO, S. A., negándose los hechos y el derecho invocado por el actor.

Cumplidos los trámites procedimentales inherentes a este proceso, el Juzgado Primero del Circuito de Herrera, mediante sentencia de 4 de julio de 1995, visible de fojas 371 a 376, "FALLA A FAVOR DE LA SOCIEDAD DEMANDANTE Y CONDENA EN COSTAS A LAS SOCIEDADES DEMANDADAS EN LA SUMA DE OCHO MIL BALBOAS B/.8,000.00". Contra esta sentencia, el apoderado judicial de las sociedades demandadas interpuso recurso de apelación, el cual le fue concedido en el efecto suspensivo, ingresado el negocio al Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, para que decidiera la alzada.

Por su parte, el Tribunal Superior de la instancia, en sentencia de 2 de febrero de 1996 (fs. 437-445), RESUELVE: "PREVIA REVOCATORIA de la sentencia apelada, declara probada la excepción de compensación de deudas, con costas que se fijan en la suma de cuatro mil cuatrocientos balboas (B/.4,400.00)."

El recurso de casación interpuesto por la parte demandante, es contra esta resolución de segunda instancia, por tanto, es tarea de la SALA pronunciarse sobre el mismo.

Como se aprecia, el recurso va enderezado a cuestionar la existencia de los presupuestos para que se produzca la compensación legal y, además, cuestiona la validez de las actas que han quedado mencionadas, ambos aspectos que habían sido resueltos favorablemente a favor de los demandados en la sentencia de segunda instancia, censurada por la parte recurrente.

La obligación reclamada, surge de una decisión contenida en sendas actas de reuniones de la Junta de Accionistas de la sociedad, en la que se impone a todos los socios la asunción de deudas en proporción a los cerdos vendidos a las sociedades demandadas, siendo así que no está acreditada la participación, en esa cesión, a uno de los socios, AGROPECUARIA COMERCIAL, S. A. Y es de presumir, que no estaban presentes, por haber justamente cuestionado el punto de la validez de las obligaciones a quien no ha sido parte en el citado compromiso, por no haber asistido a las referidas reuniones de accionistas.

Es un punto muy elemental en materia de obligaciones y contratos, que los contratos surten efectos, en principio, entre quienes han contratado, por cuanto una de las fuentes de obligaciones, y sin duda la más importante, son los contratos o convenios, y en virtud del principio de autonomía de la voluntad y del principio lex contractu, ellos imponen obligaciones a las partes que han voluntariamente aceptado las mismas.

Conviene analizar este tema con particular detenimiento, por cuanto es la parte medular de las pretensiones de la parte demandada, a cuyo cargo correspondía la carga de la prueba en virtud del principio contenido en el artículo 773, sobre la materia.

Señala el prestigioso civilista LUIS DIEZ-PICAZO en punto a los efectos entre las partes y dichos efectos respecto a terceros:

> **"8. Efectos entre las partes y efectos para terceros**
>
> Del concepto mismo de contrato deriva una natural consecuencia en orden a sus efectos. Si el contrato se considera como una manifestación de voluntad privada, tal manifestación de voluntad no puede producir sus efectos más que en relación con las personas que han realizado dicha manifestación. Si el contrato se considera como una manifestación de la autonomía privada, en orden a la reglamentación de los propios intereses, resulta claro que dicha reglamentación ha de afectar, en línea de principio, tan sólo a la esfera jurídica de sus autores, porque sólo respecto de ellos por hipótesis la autonomía existe. De aquí se ha deducido la idea de que todo contrato limita su eficacia a la esfera de las partes que lo han celebrado y que, en cambio, no produce ningún efecto respecto a terceros. Por ahora basta retener que el ámbito de eficacia de un contrato tiene un diferente grado, según que afecte o incida en la situación jurídica de las personas que le han dado vida o que son destinatarias del mismo o en la situación de otras personas que han sido ajenas a su celebración. En el primer caso hablamos de una <<eficacia interpartes>>. En el segundo caso de una <<eficacia respecto a terceros>>.
>
> ...
>
> **9. La regla general de la eficacia relativa de los contratos y el criterio de delimitación entre partes y terceros en materia contractual.**

> Por regla general, el contrato restringe su eficacia al círculo de las partes y no afecta a la esfera jurídica de los terceros. Este principio se funda, como es lógico, en la conexión misma del contrato como acto o precepto con la autonomía privada. La regla contractual así concebida sólo puede vincular a sus autores. Si vinculara a otras personas, dejaría de ser verdadera regla de autonomía privada y para los vinculados no autores constituiría un precepto heterónomo.
>
> Esta distinción de ámbitos de eficacia del contrato exige deslindar claramente los sujetos que se encuentran en cada uno de ellos. Como partes del contrato han de considerarse lógicamente las personas que han emitido las declaraciones de voluntad o han realizado los comportamientos constitutivos del negocio y que son además titulares de los intereses reglamentados por él. En los contratos concluidos por medio de representante con poder de representación suficiente o, en otro caso, ratificados por el principal, la parte del contrato es el representado o dominus negotii. Si el contrato se ha celebrado en virtud de representación indirecta y oculta o si el representante directo carecía de poder de representación, es el representante quien es parte del contrato. En el amplio concepto de partes del contrato han de englobarse asimismo los herederos de los autores, una vez producida la sucesión mortis causa, y los causahabientes a título particular, cuando sean cesionarios del contrato o de derechos de origen contractual. ...".
>
> (LUIS DIEZ-PICAZO. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Tomo I. Editorial Civilistas. Madrid, 1993. Pág. 393 a 395).

Es pues, elemental destacar, con respecto a la exigibilidad de los pactos, que son terceros quienes no han sido partes en un acuerdo de voluntades, reflejado en un compromiso adquirido por los accionistas de una determinada sociedad, en este caso, PORCINOCULTORES UNIDOS DE AZUERO, S. A., en la que la demandante AGROPECUARIA COMERCIAL, S. A. se limita a demandar el pago completo que le adeudaba PORCINOCULTORES UNIDOS DE AZUERO, S. A., sin deducción alguna. Es la parte demandada la que invoca, como excepción, la existencia del citado compromiso, sin que el mismo haya sido acreditado, correspondiéndole, por cuanto interesada con respecto a la defensa de sus derechos, la carga de la prueba.

Con independencia de lo anterior, conviene deslindar si se han cumplido los presupuestos materiales para acreditar la existencia de una compensación. La compensación, como es notorio, constituye una forma de extinción de una obligación. La explicación de este fenómeno extintivo no es tanto el de economía, en el sentido de que se reduzca el monto de la obligación por la existencia de una acreencia de naturaleza similar de la contraparte, sino un caso de prevención de enriquecimiento por quien es, a su vez, con respecto al acreedor, deudor por otra obligación principal que sea cierta, líquida y exigible. Así lo exige, de manera precisa, el artículo 1082, literal c), del Código Civil, que es concordante y consecuencia del principio general contenido en el artículo 1081, anterior.

Conviene reproducir ambas normas:

> **"Artículo 1081**. Tendrá lugar la compensación cuando dos personas, por derecho propio, sean recíprocamente acreedoras y deudoras la una de la otra".
>
> **"Artículo 1082**. Para que proceda la compensación es preciso:
>
> 1. que cada uno de los obligados lo está principalmente, y sea a la vez acreedor principal del otro;
>
> 2. que ambas deudas consistan en una cantidad de dinero o, siendo fungibles las cosas debidas, sean de la misma especie y también de la misma calidad, si ésta se hubiese designado;

3. que las dos deudas estén vencidas;

4. que sean líquidas y exigibles;

5. que sobre ninguna de ellas haya retención o contienda promovidas por terceras personas y notificada oportunamente al deudor".

De los citados artículos se desprende nítidamente que para que exista compensación, en este caso legal, se requiere:

1. Que existan dos acreedores:

2. Que cada uno de ellos sea, a su vez, deudora y acreedora de la otra parte, y la otra parte, sea a su vez, deudora de aquélla, y que tales créditos y deudas accedan a obligaciones propias de las partes, lo que excluye las obligaciones que no sean propias de una de ellas, por ejemplo, la proveniente de la asunción de deuda en virtud de un contrato de mandato, en que la deuda propia no es la del mandatario, sino la del mandante.

3. Que entre cada uno de ellos existan créditos y deudas entre sí, que resulten de obligaciones ciertas, líquidas y exigibles. Obligación líquida consiste, en apreciación de la Sala, aquélla que tenga una cifra predeterminada o, al menos, que pueda ser determinable mediante una simple operación matemática, no así la que se encuentre en una situación de indeterminación. Por su parte, exigible es aquella obligación que pueda ser reclamada en un proceso jurisdiccional. Así lo ha entendido la doctrina española, con respecto a los artículos 1195 y 1196, de idéntica redacción a los artículos 1081 y 1082, de nuestro Código Civil (cfr. Comentarios al Código Civil, dirigidos por Manuel Albaladejo y Silvia Díaz Alabart, Tomo XVI, páginas 502 y ss.).

Esta Sala, en sentencia de 5 de abril de 1983, citada por el eminente civilista DULIO ARROYO, arribó a idénticas conclusiones, al decir:

> "...
> La Corte no compartió el anterior criterio, y estimó que sí operaba en este caso la compensación. Para ello, se basó en un fallo pronunciado por el Tribunal Supremo de España en el cual este alto Tribunal sostuvo que "La compensación no viene a ser más que un pago abreviado, sin que a ella obste que los créditos que concurran nazcan de distintos contratos y consten en diferentes títulos que el cedido, cosa que ordinariamente acontece, por ser acreedor y deudor la una de la otra parte, si en todo caso concurren los demás requisitos exigidos en el Artículo 1196 del Código Civil aplicable a la extinción de las obligaciones mercantiles ..." (RODRÍGUEZ NAVARRO: Doctrina Civil del Tribunal Supremo, T. III, p. 3,648).
>
> Y agrega la Corte que nuestra jurisprudencia ha sostenido que la compensación opera entre dos personas que son recíprocamente deudores; que cada una de ellas lo sea principalmente, y sean a la vez acreedor principal del otro; esto en cuanto a la persona; y en lo referente a las deudas, que éstas sean de dinero o de cosas fungibles del mismo género y calidad y que sean líquidas y exigibles. ...".
>
> (DULIO ARROYO CAMACHO. 5 Años de Jurisprudencia de las Salas Primera (De lo Civil) y Tercera (De lo Contencioso-Administrativo) de la Corte Suprema de Justicia de Panamá: 1981-1985. Panamá, 1988, p. 92).

De lo expuesto anteriormente, se desprende que en el caso que nos ocupa no se dan los presupuestos para que exista la compensación, sin perjuicio del ejercicio de otras pretensiones de la demandada contra la demandante, que no provengan de la compensación de créditos y deudas. Y ello es así porque no se ha acreditado la condición de acreedor por razón de las deudas de la sociedad de los socios, por lo que no ha sido acreditada la condición de acreedor de una de las partes, en la relación obligacional.

El otro aspecto de la censura dice relación con la validez y exigibilidad de determinados créditos de la sociedad contra uno de los socios, AGROPECUARIA COMERCIAL, S. A., acordados por la Junta de Accionistas de dicha sociedad. Es evidente que los socios de una sociedad anónima pueden perfectamente, en armonía con el principio espiritualista de la autonomía de la voluntad, adquirir como propias las obligaciones de dicha persona jurídica, pero tal asunción no es por su condición de socio, sino por la aceptación de esa obligación. Al hacer efectiva dicha obligación, resulta evidente que existe una relación obligatoria entre la sociedad y el socio, cuyo fundamento no es la posición que dicho socio ocupa en la sociedad, por cuanto, como es sabido, las obligaciones de los socios se encuentran limitadas a los aportes de las acciones que han adquirido y no pagado. Esto constituye un principio general de las formas asociativas en las cuales al resultado de dicha asociación el ordenamiento le concede personalidad jurídica distinta a la de los socios, por lo que las obligaciones de la sociedad no puedan, en principio, ser reclamadas a los socios, en su calidad de tales, y que ha sido incorporada a nuestro ordenamiento, singularmente en materia de sociedades anónimas, como lo son las que nos ocupan, por el artículo 39 de la Ley 32 de Sociedades Anónimas, que la Sala se permite transcribir:

> "Artículo 39. Los accionistas sólo son responsables con respecto a los acreedores de la compañía hasta la cantidad que adeuden a cuenta de sus acciones; pero no podrá entablarse demanda contra ningún accionista por deuda de la compañía hasta que se haya dictado sentencia contra ésta cuyo importe total no se hubiere cobrado después de ejecución contra los bienes sociales".

Sobre este aspecto medular en materia de Derecho de Sociedades, se ha pronunciado el licenciado RICARDO A. DURLING, en su conocida monografía "La Sociedad Anónima en Panamá", en la siguiente forma:

> **"RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS.**
>
> Uno de los principios casi universalmente admitidos por las diferentes legislaciones, es el de la responsabilidad limitada del accionista. Dicho principio consiste en que el accionista sólo es responsable ante los acreedores de la sociedad, por la cantidad que adeude a cuenta de sus acciones. Este principio lo consagra nuestra Ley en el artículo 39 que dice: "Los accionistas sólo son responsables con respecto a los acreedores de la compañía hasta la cantidad que adeuden a cuenta de sus acciones ...".
>
> Tiene su fundamento este principio en el hecho de que las obligaciones y responsabilidades no son contraídas por los accionistas, sino por una entidad jurídica, distinta que la ley reconoce. De ahí se deriva una doble personalidad: la del accionista considerado individualmente y la de los accionistas considerados como grupo corporativo. Lo anterior tiene como consecuencia que las obligaciones contraídas por los accionistas individualmente no serán imputables a la sociedad y viceversa. Por tal razón se afirma que la responsabilidad personal de los accionistas es incompatible con la naturaleza del grupo corporativo.
>
> A pesar de ser éste el principio general, algunas legislaciones admiten ya sea opcional o compulsivamente, la responsabilidad personal del accionista. En los Estados Unidos, las leyes bancarias de los diversos Estados, generalmente contemplan una doble responsabilidad. Los accionistas de las entidades bancarias responden personalmente por las deudas y obligaciones del banco hasta por una suma igual al valor nominal de sus acciones, además de la suma invertida en dichas acciones".
>
> (DURLING, Ricardo A. La Sociedad Anónima en Panamá. Panamá, 1986. Págs. 252-253).

Por su parte, el mercantilista español Jesús Rubio analiza este aspecto de la responsabilidad de los socios en la sociedad anónima, de la siguiente forma:

"...
c) Los socios no responderán personalmente de las deudas sociales. Característica de la sociedad anónima como titular de un patrimonio separado, a diferencia de las sociedades de comercio personalistas y de los patrimonios privados no privilegiados con separación patrimonial. Sin duda el patrimonio de la sociedad responde - conforme al principio del artículo 1911 del C. civ. ilimitadamente. Pero los socios asumen una deuda limitada, un deber de aportación determinado, por el que responden, claro está, con arreglo al mismo principio también ilimitadamente. Ahora bien, las deudas de la sociedad no son deudas de los socios. A diferencia de lo que ocurre en la sociedad civil o en las sociedades privadas en general, donde existe una comunicación de patrimonios. La sociedad anónima resulta, en este sentido, una sociedad privilegiada, porque el patrimonio separado no es consecuencia sin más de la personalidad jurídica. Este sólo opera, en nuestro Derecho, una gradación entre los acreedores de la sociedad y los particulares del socio. Sólo en virtud de una excepcional concesión del ordenamiento resulta posible establecer por voluntad privada un sistema de limitación de responsabilidad".

(JESÚS RUBIO. Curso de Derecho de Sociedades Anónimas. Editorial de Derecho Financiero. Madrid, 1964. Págs. 40-41).

De lo dicho hasta ahora, se desprende que la fuente de las obligaciones objeto de la compensación, es un convenio asumido por los accionistas en sendas reuniones de la Junta de Accionistas de la sociedad PORCINOCULTORES UNIDOS DE AZUERO, S. A. con respecto al pago de las deudas de dicha sociedad frente a terceros. De allí a que sea pertinente analizar la legalidad de las decisiones contenidas en las actas de la sociedad, visibles en foja 306 y 307 del expediente, en relación con la decisión unilateral de la Junta de Accionistas de la sociedad hacia todos los socios, sin que aparezca acreditado el consentimiento de asunción de deudas de una persona, la sociedad, por todos o alguno de sus socios, sin que el consentimiento del obligado resulte acreditado en el expediente de manera indubitable. La respuesta negativa por parte de la Sala es evidente, después de las consideraciones que preceden.

En radical contraste con esta posición de la Sala, la sentencia impugnada por medio de esta vía extraordinaria, en ese punto, señala:

"...
Como advierte la parte demandante, las demandadas después de aceptar la deuda que esta reclama presentan compensación, para lo cual se fundamentan en las actas visibles a fojas 306-307. Las cuales hacen alusión a reuniones extraordinarias, celebradas los días 26 de mayo y 25 de agosto de 1993, por los accionistas de la sociedad PORCINOCULTORES DE AZUERO, S. A.

Nos corresponde analizar la validez de las actas de 26 de mayo y 25 de agosto de 1993, confrontando las pruebas aportadas a este proceso con las exigencias de la Ley 32 de 26 de febrero de 1927, sobre sociedades anónimas, la Ley N° 9 de 3 de julio de 1946 y el Decreto N° 130 de 3 de junio de 1943 que la complementa y el pacto social de PORCINOCULTORES DE AZUERO, S. A.

En las citadas reuniones extraordinarias efectuadas por PORCINOCULTORES UNIDOS DE AZUERO, S. A. y para los efectos de este proceso, se acordó que la demandante AGROPECUARIA COMERCIAL, S. A., como accionista de un 20% de PORCINOCULTORES UNIDOS DE AZUERO, S. A. asumía deudas por ciertos compromisos pendientes de pago, sobre diversos renglones y de acuerdo a la cantidad de los cerdos embarcados por cada uno de los socios en el año 1992, además asumían compromisos pendientes de pago, como cuentas malas, pérdidas bancarias, depreciación de equipo rodante y pérdida acumulada de operaciones, además se autorizó a la gerencia de esta sociedad para prorratear entre los accionistas, la totalidad de la cuantía a que ascienden los tres procesos laborales, en que estará involucrada

esta sociedad.

> Esta Sala Civil, puede apreciar que la parte demandante no aportó pruebas para desvirtuar la validez, de las prenombradas actas, por lo que no logra superar la presunción iuris tamtum, establecida en la ley sobre la validez y valor probatorio del contenido de los documentos privados firmados ante Notario; por lo que el a-quo debió reconocer su valor probatorio, ya que la actora en ningún momento tachó de falsas las mismas". (Págs. 442-443).

No es objeto del presente debate la validez de las Actas, sino las obligaciones que, para los socios, emanan de las decisiones de la Junta de Accionistas, reflejada en las mencionadas Actas. Ha estado acreditado en las mismas Actas que a las citadas reuniones no acudió la totalidad de los socios de la sociedad, sino solamente el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) ni que, para tal efecto, se haya renunciado al aviso de convocatoria previa, que ha de ser expresada por escrito; o puesto en otro giro: toda reunión de la Junta de Accionistas de una sociedad anónima ha de ser previamente convocada, y puede realizarse sin la presencia de todos los accionistas, en virtud de renuncia escrita de éstos. Por su parte, una forma extraordinaria de reunión de dichas sesiones, lo considera el caso de que se encuentren todos los accionistas, en cuyo caso, bien se puede prescindir, mediante su renuncia, del requisito de convocatoria previa. A estos dos particulares aspectos, se refieren los artículos 40 y 44 de la Ley de Sociedades Anónimas, invocados por la recurrente.

No obstante, la validez de tales reuniones no es materia cuestionada en este proceso, por cuanto ni la parte actora ni las partes demandantes han impugnado las decisiones adoptadas en dicha acta, sea a través de un proceso sumario dentro del término fatal de TREINTA (30) días si asistieron a la reunión o de un proceso ordinario con un término sine die si no asistieron, sino un aspecto muy diferente, es decir: si puede decretarse el pago de deudas de la sociedad, acordada en una reunión de la sociedad, en la cual no aparece acreditado el consentimiento de los socios, en su defecto, el nombre de los socios que participaron en la misma o, por lo menos, que en dicha sesión participaron los socios contra los cuales se pretende invocar la compensación legal a que se refieren los artículos 1081 y 1082 del Código Civil. La anterior circunstancia es decisiva, por cuanto se ha podido constatar que la Junta de Accionistas de la sociedad no puede imponer a los socios, sin su consentimiento, obligaciones de la sociedad; o, puesto en otro giro, si forma parte del plexo de derechos y obligaciones de los socios de una sociedad anónima, la asunción de obligaciones de la sociedad por parte de dichos socios sin haber sido tomados en cuenta.

Como derivación de lo anterior, es evidente que para que un socio asuma la obligación de pagar una deuda de la sociedad hacia terceros, es menester que exista la aceptación o el consentimiento de dicha obligación por parte del socio, sin que pueda suplirse este consentimiento por la decisión corporativa de la mayoría de los socios de la Junta de Accionistas de una sociedad, en cuya decisión no aparece acreditado el consentimiento de ese socio.

De allí a que la existencia de esa obligación hacia uno de los accionistas ha de ser acreditada por la parte demandada, sobre la cual recae la carga de la prueba, contrariamente a lo que afirma el Tribunal Superior en la sentencia impugnada.

Sobre este aspecto de la carga de la prueba, el maestro JAIME GUASP ha expresado:

> "...
> c) Por ello, renunciando a toda consideración aislada de los elementos de la prueba, es preciso fijarse únicamente en la situación relativa del sujeto y el tema probatorio, es decir, en la posición que el dato a probar ocupa respecto a las partes sobre las que la carga de la prueba pesa en concreto. Como la carga de la prueba no consiste sino en el riesgo que corre un litigante de que el Juez no se convenza de ciertos datos procesales, el perjuicio no puede sufrirlo sino la parte a quien favorezca el convencimiento del

> Juez sobre tal dato. Esto quiere decir que cada una de las partes tiene la carga no sólo de alegar los datos que le interesen, sino, en segundo lugar, de probarlos, determinándose su interés por el hecho de que el dato en cuestión funcione como supuesto de hecho de una norma cuya aplicación le interesa, lo que equivale en definitiva a decir que cada parte soporta la carga de probar los datos que constituyen el supuesto de hecho de las normas que le son favorables. Ello se traduce en definitiva en el principio, sentado de antiguo, según el cual affirmantis est probare y, sobre todo, incumbit probatio ei qui decit, non ei qui negat".
>
> (JAIME GUASP. Derecho Procesal Civil. Tomo I. Madrid, 1968. Págs. 326-327).

Dicha concepción de la prueba, es, por lo general, adoptada en términos generales por el Derecho Comparado y por la doctrina procesalista, y ha sido incorporada a nuestro derecho, cuyo artículo 773 señala, en su primer párrafo, que corresponde a la partes "probar los hechos o datos que constituyen el supuesto de hecho de las normas que le son favorable." (El énfasis es de la Sala).

En base a las consideraciones que preceden, es evidente que son de atender las censuras que le formula el casacionista a la sentencia de segundo grado, y esta Sala de la Corte Suprema en su posición de tribunal de instancia, estima probadas.

Estima la Sala, en base a las consideraciones que anteceden, que no se ha acreditado en este proceso la existencia de compensación de obligaciones entre la parte demandante AGROPECUARIA COMERCIAL, S. A. y la parte demandada, PORCINOCULTORES UNIDOS DE AZUERO, S. A. y PRODUCTORES ASOCIADOS DE AZUERO, S. A., por lo que no resulta procedente que el Tribunal Superior de Justicia del Cuarto Distrito Judicial, haya reconocido y declarado que se encuentra probada la aludida compensación de créditos, como lo hace en la sentencia recurrida en casación. Por ello, debe la Sala anular dicha sentencia.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia recurrida, de dos de febrero de 1996, dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Cuarto Distrito Judicial: y, actuando como tribunal de instancia,DECLARA NO PROBADA LA EXCEPCIÓN DE COMPENSACIÓN Y CONFIRMA en todas sus partes la decisión del Juzgado Primero del Circuito de Herrera, contenida en sentencia de 4 de julio de 1995, mediante la cual "FALLA A FAVOR DE LA SOCIEDAD DEMANDANTE Y CONDENA EN COSTAS A LAS SOCIEDADES DEMANDADAS EN LA SUMA DE OCHO MIL BALBOAS (B/.8,000.00)".

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ANA VICTORIA POSSE DE VALLARINO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE LOUIS MARTINZ ANDERSEN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante resolución fechada 28 de mayo de 1996, esta Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia admitió el recurso de casación presentado por la firma forense Alfaro, Ferrer, Ramírez & Alemán, en representación de la señora **VICTORIA**

POSSE DE VALLARINO, contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 16 de febrero de 1996, dentro del proceso de sucesión testamentaria del señor **LOUIS MARTINZ ARDENSEN.**

Encontrándose el negocio pendiente de resolver en el fondo, se adjuntó escrito de desistimiento en los siguientes términos:

> "Nosotros, ALFARO, FERRER, RAMÍREZ & ALEMÁN y SOLÍS, ENDARA, DELGADO & GUEVARA, en nuestra condición de apoderados especiales de los herederos testamentarios y cesionarios de derechos herenciales ANA VICTORIA POSSE DE VALLARINO, SONIA POSSE DE MELGAR y ALEJANDRO POSSE MARTINZ, comparecemos por este medio a fin de manifestar lo siguiente:
>
> PRIMERO: Declara la señora ANA VICTORIA POSSE DE VALLARINO que desiste del recurso de casación interpuesto contra la resolución de fecha 16 de febrero de 1996 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia y a través de la cual se confirmó en segunda instancia el auto de adjudicación de bienes herenciales proferido por el Juzgado Primero del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, de fecha 22 de noviembre de 1995.
>
> SEGUNDO: Declaran SONIA DE MELGAR y ALEJANDRO POSSE MARTINZ que aceptan el desistimiento del recurso de casación expresado por la señora ANA VICTORIA POSSE DE VALLARINO.
>
> TERCERO: Ambas partes manifiestan su deseo de que se admita el desistimiento antes indicado, de manera que se dé inmediato cumplimiento al auto de adjudicación de bienes hereditarios que con fecha 22 de noviembre de 1995 expidió el Juzgado Primero del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil.
>
> Las partes reconocen que no tienen absolutamente algún derecho, acción o reclamo entre sí por razón de las controversias suscitadas en este proceso, con ocasión del referido auto de adjudicación de bienes hereditarios.
>
> Finalmente, las partes manifiestan que se dan por notificadas y se allanan de la resolución que admita el referido desistimiento."

El texto transcrito pone de manifiesto que el apoderado judicial de la parte recurrente en casación desiste del recurso y la apoderada judicial de los opositores acepta dicho desistimiento. Al respecto, el artículo 1073 del Código Judicial establece la posibilidad de que toda persona que haya interpuesto un recurso, desista de él. Aceptado el desistimiento del recurso, queda ejecutoriada la resolución contra la cual se había interpuesto, al tenor de lo dispuesto por el artículo 1084 del Código Judicial.

En el caso que nos ocupa, la Sala estima que el desistimiento reúne los requisitos que la ley exige. Así, la apoderada judicial de la parte recurrente en casación tiene facultad expresa para desistir, como se desprende del poder consultable a foja 1. Además, el escrito de desistimiento se encuentra autenticado por el Notario Público Noveno del Circuito de Panamá, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1075 del Código Judicial.

Por último, las partes manifiestan que no tienen reclamo alguno en relación con el presente proceso, por lo que no debe condenarse en costas a la parte recurrente.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el desistimiento del recurso de casación presentado por la señora ANA VICTORIA POSSE DE VALLARINO y ORDENA la devolución del expediente al juzgado de origen.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO

BANCO GENERAL, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A MARDEN TORRIJOS HERRERA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Honorable Magistrado **ROGELIO A. FÁBREGA Z.**, ha manifestado impedimento para conocer del recurso de casación interpuesto por **BANCO CENTRAL, S. A.** en el Proceso Ordinario que le sigue a **MARDEN TORRIJOS HERRERA.**

La circunstancia alegada por el Magistrado Fábrega Z. la manifiesta en escrito que corre a fojas 314, que a la letra dice:

"...
Solicito de la manera más respetuosa a los Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se me separe del conocimiento del proceso ordinario interpuesto por MARDEN TORRIJOS HERRERA contra BANCO CENTRAL, S. A.

La presente solicitud obedece al hecho de que, antes de ser designado Magistrado de esta Alta Corporación, asesoré profesionalmente al señor MARDEN TORRIJOS HERRERA en la demanda que promoviera contra la institución bancaria antes mencionada.

La solicitud de impedimento la formulo, basado en el hecho, de que ha sido principio invariable de los miembros de esta Sala, alejar la más leve sospecha de parcialidad o interés particular, en cada uno de sus pronunciamientos.

Por las razones antes mencionadas, solicito a mis distinguidos colegas me declaren impedido en base al artículo 749 numeral 5 del Código Judicial.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
MAGISTRADO

Luego de lo expuesto, el hecho alegado por el Magistrado Fábrega Z. ciertamente configura la causal de impedimento contemplada en la citada excerta legal, razón por la cual estima el resto de la Sala que el impedimento manifestado es procedente.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el Magistrado Rogelio A. Fábrega Z., lo separa del conocimiento de este negocio y DISPONE que se llame al Magistrado de la Sala Segunda que le corresponda, conforme al orden alfabético de apellidos, que siga en turno.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INSTITUTO DE INVERSIONES EUGANA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE FINA CAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Honorable Magistrado **RAFAEL A. GONZÁLEZ**, ha manifestado impedimento para conocer del recurso de casación interpuesto por **INSTITUTO DE INVERSIONES EUGANA, S. A.** en el Proceso Ordinario que le sigue **FINA CAL, S. A.**

La circunstancia alegada por el Magistrado González la manifiesta en escrito que corre a fojas 1320, que a la letra dice:

"...

Respetuosamente solicito al resto de los Magistrados que integran la Sala Civil, me separen del conocimiento del recurso de casación interpuesto por **INSTITUTO DE INVERSIONES EUGANA, S. A.** dentro del proceso ordinario que le sigue **FINA CAL, S. A.**

Esta solicitud se debe a que soy primo del Licenciado Octavio Amat, socio de la firma forense Arias, Fábrega y Fábrega, apoderada de la parte recurrente en casación y quien suscribe, entre otros documentos que constan en el expediente, la demanda que dio inicio al presente proceso.

En vista de lo anterior, considero que en este caso se configura la causal contenida en el numeral 5 del artículo 749 del Código Judicial, ya que me une parentesco de cuarto grado de consanguinidad con el Licenciado Amat, por lo que solicito se declare legal esta manifestación de impedimento.

Panamá, 21 de agosto de 1996.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ"

El hecho alegado por el Magistrado González, ciertamente configura la causal de impedimento contemplada en la citada excerta legal, es decir, el parentesco en cuarto grado de consanguinidad del Magistrado con uno de los socios de la firma de abogados recurrente, razón por la cual estima el resto de la Sala que el impedimento manifestado es procedente.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el Magistrado RAFAEL A. GONZÁLEZ, lo separa del conocimiento de este negocio y DISPONE que se llame al Magistrado de la Sala Segunda que le corresponda, conforme al orden alfabético de apellidos.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HECHO

EL LICENCIADO ROLANDO A. SANTAMARÍA INTERPONE RECURSO DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 19 DE JULIO DE 1996, DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO INSTAURADA POR VICTORIANO GONZÁLEZ ORTEGA CONTRA ANTHONY LIM Ó ANTHONY PATRICK LIM, DAMARIS CHONG DE LIM, HORACIO CHIAL Y ADRIENNE PEARL LIM DE CHIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE AGOSTO DE MIL

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado ROLANDO A. SANTAMARÍA, en su condición de apoderado especial de la parte demandada, ha interpuesto Recurso de Hecho contra la Resolución del 10 de julio de 1996, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial en el proceso ordinario de prescripción adquisitiva de dominio instaurado por VICTORIANO GONZÁLEZ ORTEGA contra ANTHONY LIM ó ANTHONY PATRICK LIM, DAMARIS CHONG DE LIM, HORACIO CHIAL Y ADRIENNE PEARL LIM DE CHIAL.

Cumplidas las reglas de reparto, el negocio de fijó en lista para que las partes alegaran en el término de tres días, lo que fue aprovechado solamente por el recurrente en casación. (Fs. 27-30).

Seguidamente, la Sala de la Corte procede a decidir si admite el recurso de hecho en atención al cumplimiento de los presupuestos que determina el artículo 1141 del Código Judicial, que a la letra dice:

> "Para admitir un recurso de hecho se necesita que la respectiva resolución sea recurrible, que el recurso se haya interpuesto oportunamente y lo haya negado expresa o tácitamente el Juez, que la copia se pida y retire en los términos señalados y se ocurra con ella ante el superior en la debida oportunidad".

El presente recurso de hecho ha sido interpuesto contra la resolución de 10 de julio de 1996, mediante la cual el Tribunal Superior NIEGA el término para la formalización del recurso de casación, por considerar que, si bien la respectiva resolución es de las que determina el artículo 1149, ordinal 1, como susceptibles de ese extraordinario medio de impugnación, la misma no cumple con el artículo 1148 del Código Judicial, toda vez que la cuantía no excede la suma de B/.5,000.00.

Con el recurso de hecho se aportaron algunas copias de piezas que figuran en el expediente principal, pero las mismas no son suficientes para producir certeza respecto a la cuantía del proceso.

Por tanto, en atención a lo preceptuado por los artículos 1138 y 1139 del Código Judicial, al requerirse más información para decidir la admisión del recurso de hecho, el despacho sustanciador dispone completar las copias mediante el envío del expediente contentivo del proceso ordinario.

Por lo expuesto, el Magistrado que suscribe, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA la suspensión del procedimiento y SOLICITA el ENVÍO del expediente contentivo del proceso ordinario de prescripción adquisitiva de dominio instaurada por VICTORIANO GONZÁLEZ ORTEGA contra ANTHONY LIM ó ANTHONY PATRICK LIM, DAMARIS CHONG DE LIM, HORACIO CHIAL Y ADRIENNE PEARL LIM DE CHIAL.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

APELACIÓN INTERPUESTA POR SEABOARD MARINE LIMITED CONTRA EL AUTO DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 1994, DICTADO POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ORDINARIO MARÍTIMO QUE LE SIGUE COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTE (20) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

A este Despacho ingresó, en virtud de reparto el recurso de apelación interpuesto por SEABOARD MARINE LIMITED contra la sentencia dictada por el Tribunal Marítimo con fecha de 25 de febrero de 1994, dentro del proceso ordinario marítimo seguido por la COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS, S. A. a SEABOARD MARITIME INC.

Encontrándose el presente negocio con un proyecto en lectura, se recibió en la Secretaría de la Sala escrito de desistimiento presentado por el licenciado PEDRO A. VÁSQUEZ ARROCHA, en carácter de apoderado especial de COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS, S. A., (ahora) ASSA CÍA. DE SEGUROS, S. A. (por fusión). Dicho desistimiento, a su vez, fue aceptado por la doctora CELMA MONCADA, en calidad de apoderada judicial de SEABOARD MARINE LTD., tal como consta en el expediente (f. 1304) y cuyo contenido nos permitimos transcribir:

> "Yo, PEDRO ANTONIO VÁSQUEZ ARROCHA, abogado en ejercicio, portador de la cédula de identidad personal N° 8-155-555, con oficinas profesionales en Vía Porras, Edificio Don Antonio, Planta Baja, ciudad de Panamá, donde recibo notificaciones personales, Apoderado Legal de la parte Demandante en el proceso enunciado en el marginal superior derecha, por este medio acudo respetuosamente ante vuestro Despacho con el propósito de desistir de la demanda interpuesta en el presente Proceso Ordinario, como en efecto hago, de forma total e irrevocable, a fin de poner fin al mismo, con el consentimiento de la parte Demandada, quien acepta mediante este documento, renunciar expresamente a cualquier reclamación en contra de los Demandantes, como consecuencia de la interposición de esta demanda en el presente proceso, inclusive en lo referente a las costas, gastos y perjuicios ocasionados.
>
> Asimismo mediante este escrito las partes se dan por notificadas y se allanan del Auto que se dice admitiendo el desistimiento, solicitando la devolución de la fianza consignada para la apelación y el archivo del expediente.
> Panamá, 15 de julio de 1996.
>
> POR LA PARTE DEMANDANTE:
> (fdo.)
> LIC. PEDRO A. VÁSQUEZ ARROCHA
>
> POR LA PARTE DEMANDADA:
> (fdo.)
> DRA. CELMA MONCADA".

Esta Sala advierte que la parte demandante puede desistir del proceso o de la pretensión, con requerimiento de la aceptación de la demandada después de que se haya entablado la litis, no obstante que, tanto el Código Procesal Civil, como la Ley procesal Marítima advierten la improcedencia de dicho desistimiento después que se haya dictado sentencia de primer grado, conforme se aprecia de la lectura del artículo 1080 de la ley procesal ordinaria y del artículo 451 de la legislación procesal marítima. Una lectura del denominado impropiamente desistimiento pone de manifiesto que, mas que un desistimiento, el escrito refleja la existencia de una transacción judicial, entendida por ésta como el convenio mediante el cual las partes acuerdan evitar el inicio de un proceso o de ponerle fin a un litigio ya comenzado (artículo 1500 del Código Civil).

De otra suerte, constituye un principio de derecho procesal, derivado de la finalidad de obtener la verdad material del asunto ventilado en un proceso, que el tribunal le debe dar el trámite que corresponda a una petición o recurso, atendiendo de la naturaleza de la petición o recurso derivada, de manera inequívoca, del querer de las partes, con independencia de la denominación con que éstas hayan bautizado el recurso o la petición, principio de derecho procesal

elevado a la categoría de norma de derecho positivo por el artículo 469 del Código Judicial, aplicable a las causas marítimas por disposición del artículo 30, a sensu contrario y 35 de la legislación procesal marítima.

Es evidente la voluntad de las partes de ponerle fin al proceso por transacción, por cuanto el escrito lo denominan solicitud de "desistimiento y acuerdo expreso", y el cuerpo del escrito refleja que la intención de las partes es el de ponerle fin al proceso en forma total e irrevocable, renunciando la demandada a cualquier reclamo contra la parte demandante y señalando, además, no haber sufrido perjuicio alguno por razón o como consecuencia de la demanda interpuesta.

Por lo demás, consta en el expediente que ambas partes tienen facultades expresas para transigir y desistir.

La Sala no debe dejar de pasar la presente coyuntura para señalarle a las partes la conveniencia de utilizar un mayor rigor técnico en las actuaciones, solicitudes o recursos promovidos ante los oréganos jurisdiccionales del Estado.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, APRUEBA LA TRANSACCIÓN entre las partes COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS, S. A. y SEABORD MARINE LIMITED, y ordena la devolución de la fianza y el archivo del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LA LICENCIADA ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO, MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MENORES ELEVA CONSULTA A LOS HONORABLES MAGISTRADOS DE LA SALA PRIMERA, DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La Licenciada **ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO**, en su condición de Magistrada del Tribunal Superior de Menores, ha elevado consulta ante esta Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, "a fin de dilucidar algunos aspectos procedimentales respecto a los casos que se ventilan dentro de nuestra Jurisdicción de Menores, solicitando respetuosamente su criterio". (Foja 2).

La lectura de la solicitud presentada por la Magistrada Arosemena de Troitiño revela que lo que pide a esta corporación judicial es que emita concepto en relación con la interpretación del artículo 1122 del Código Judicial, lo cual resulta manifiestamente improcedente, ya que la Sala carece de competencia para ello.

Así, en primer lugar,los artículos 93 y 94 del Código Judicial establecen taxativamente los negocios que debe conocer la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia:

"ARTÍCULO 93. La Primera Sala conocerá en una sola instancia:

1. De los recursos de Casación y Revisión en procesos civiles;

2. De los recursos de hecho contra las resoluciones de los Tribunales Superiores; y

3. De las cuestiones de competencia en materia civil suscitadas entre Tribunales que no tengan otro superior común.

ARTÍCULO 94. La Primera Sala conoce en segunda instancia:

1. De los negocios civiles de que conocen en primera instancia los Tribunales de Distrito Judicial en los cuales haya lugar a consulta, o apelación de autos y sentencias; y,

2. De las apelaciones contra las resoluciones del Director del Registro Público."

En segundo lugar, el artículo 207 de la Constitución Nacional, al igual que el artículo 2 del Código Judicial, consagran el principio de que los Magistrados y Jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y no están sometidos más que a la Constitución y la Ley. En otras palabras, se excluye la interpretación por parte del superior de las disposiciones legales que deban ser aplicadas dentro de los procesos. Discretamente el artículo 1147 del Código Judicial dispone que el recurso de casación tiene también por objeto procurar la exacta observación de las leyes por parte de los tribunales y uniformar la jurisprudencia. Así, tres decisiones uniformes de la Corte, como tribunal de casación, constituyen doctrina probable y los jueces podrán aplicarla a los casos análogos.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SE INHIBE de conocer la consulta elevada por la Licenciada ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO, Magistrada del Tribunal Superior de Menores.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA SEGUNDA DE LO PENAL

AGOSTO 1996

ACUSACIÓN PARTICULAR

ACUSACIÓN PARTICULAR PRESENTADA POR LA LCDA. OMAYRA GARCÍA DE BERBEY CONTRA LA LICENCIADA MARCELA DE ANTINORI, JUEZ OCTAVO (SIC) DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, POR EL SUPUESTO DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de apelación ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Auto de 10 de enero de 1996, proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia (fs. 15-16), que admite la acusación particular promovida por la licenciada **OMAYRA GARCÍA DE BERBEY**, en su propio nombre y representación, contra la licenciada **MARCELA GÓMEZ DE ANTINORI**, Juez Octava de Circuito de lo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, por supuesto delito contra la Administración Pública.

Primeramente, para resolver la presente alzada, la Sala prestará exclusiva atención a los puntos a que se refiere la recurrente, según lo establecido en el artículo 2428 del Código Judicial.

La recurrente, Licenciada **MARCELA GÓMEZ DE ANTINORI**, Juez Octava de Circuito de lo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, en su escrito de sustentación de la apelación, solicita que se revoque la Resolución impugnada y en su lugar se ordene el archivo del cuadernillo de acusación particular instaurado en su contra, toda vez "... que no existe la requerida prueba sumaria, esencial al momento en que se acusa a un Juez o Magistrado." (f. 21), y sostiene que:

> "No puede ser entonces que se considere prueba sumaria la propia resolución emitida por la suscrita, ya que esto solo es el cumplimiento de sus funciones. Por cuanto que no existe ninguna otra prueba, lo que esta (sic) claro es que no se sustentó a tiempo y no se presentó el recurso de hecho que hubiera podido corresponder." (F. 22).

Además, según narra la recurrente, las razones de la acusadora para instaurar la presente acción, se deben a que se le declaró desierta una apelación y dicha decisión se hizo a través de Providencia de 23 de junio de 1995, emitida por el Juzgado Octavo de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, en virtud de que dicho recurso no fue sustentado en el término correspondiente. Según señala la recurrente, la acusadora alega que la falta de sustentación se debió a que la Secretaria del Juzgado le había negado la presentación del escrito que, según ella misma refiere, incluía frases como "deslealtad procesal", "falta de probidad en el desempeño de funciones públicas", y "el estado calamitoso en que se encuentra la Administración de Justicia en Panamá".

El Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, Licenciado DIMAS E. GUEVARA G., mediante contestación de traslado N° 23 de 18 de marzo de 1996 (fs. 25 a 30), realiza las siguientes consideraciones:

> "PRIMERO: Luego de que ingresó a este Despacho a través del trámite de reparto la denuncia que interpusiera la LICDA. OMAYRA GARCÍA DE BERBEY en contra de MARCELA DE ANTINORI, este Despacho a través de Providencia de tres (3) de agosto de 1995 aprehendió el conocimiento de la denuncia dado que a la misma habían sido incorporadas ciertas actuaciones autenticadas lo que motivó a obtener de dicha Juez la actuación principal en su conjunto para determinar si los documentos aportados como prueba al igual que los procedimientos de la Juez que se instaura la denuncia se podían configurar como prueba sumaria que diese lugar, a la investigación plena de cualquier acción ilícita que se hubiese cometido y argumentaba la denunciante.

> SEGUNDO: Esta Superioridad luego de incorporar la actuación del sumario también procedió a tomar ciertas declaraciones con aras de determinar si los hechos que argumentaba en la denuncia daba o no lugar a la infracción de la Ley.
> ...
> CUARTO: A pesar que junto al libelo acusatorio como la interpopsición a prima fase de la denuncia suscrita por la LICDA. OMAYRA GARCÍA DE BERBEY son incorporadas un sin número de actuaciones autenticadas no revistan dichas actuaciones un carácter de ilegalidad opinión esta (sic) que será debidamente analizada al momento de emitir una opinión referente a la investigación que realiza este Despacho." (Fs. 28-29).

El agente del Ministerio Público es de la opinión de que, el Auto recurrido debe ser modificado por no estar debidamente demostrada la existencia plena de una prueba sumaria, toda vez que,

> "... en aquellos casos en que la acción instaurada va en contra de un funcionario público la naturaleza del acto atribuido debe estar debidamente configurado que a pesar que no queremos adelantar en la opinión que debemos vertir; en dicho sumario no se dan los parámetros exigidos por nuestra ley que la prueba sumaria aportada contribuye a demostrar el hecho punible." (F. 29).

En este orden de ideas, la licenciada **OMAYRA GARCÍA DE BERBEY**, presentó su escrito de objeciones a la apelación (fs. 32 a 41), en el cual desarrolló las consideraciones jurídicas, en las cuales sustentó la petición de que se confirme la Resolución apelada, en los términos siguientes:

> "La carencia de **LEGITIMIDAD** de la acusada Juez para sustentar el Recurso de Apelación impetrado contra el auto admisorio de la Acusación Particular hace que el mismo se tenga por ineficaz, como no presentado y, a tales efectos, debe ser declarado desierto por falta de sustentación, por haber sido presentado por persona inhábil para ejercer la profesión de abogado y sustentar recursos legales, por disposición expresa de la Ley." (F. 33).

En este primer aspecto, la acusadora se refiere a la incompatibilidad del cargo en el Órgano Judicial con respecto al ejercicio de la abogacía, según los artículos 46 y 611 del Código Judicial. A juicio de la Sala, este argumento carece de validez jurídica, ya que por el hecho de ser la licenciada **MARCELA GÓMEZ DE ANTINORI**, la parte acusada en el presente negocio, ésta puede valerse de todos los medios consagrados en la Ley para la defensa de sus derechos individuales como es el caso; por otro lado, nada impide que tales medios sean instaurados por la propia Juez Octava de Circuito de lo Penal, toda vez que la misma posee la idoneidad de abogada, y su propia defensa no puede ser considerada como una actuación en el ejercicio de la abogacía vista ésta como una profesión. En el caso bajo estudio, no se infringe la disposición contenida en el artículo 46 del Código Judicial antes mencionado, en concordancia con los artículos 205 y 209 de la Constitución Nacional, cuyo propósito real no es más que evitar la corrupción en el sector estatal, prohibiendo que los Jueces y Magistrados reciban ingresos adicionales a los que perciban por el desempeño de su cargo como funcionarios del Órgano Judicial, con el deber de desempeñarse como profesionales del bien común, y con el objeto de que no realicen ninguna otra actividad, aunque no sea retribuida, que sea contraria al interés general de la sociedad, o sea a los interese públicos del Estado.

Por otra parte, la acusadora se refiere al carácter de prueba sumaria, de la Resolución Judicial de 31 de marzo de 1995 y, en tal virtud, transcribe el artículo 2477 del Código Judicial, que es del siguiente tenor:

> "Cuando el hecho por el que se trata de hacer efectiva la responsabilidad penal de un servidor público fuera referente a **SENTENCIA AUTO O PROVIDENCIA JUDICIAL**, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal de la causa deben **PEDIR EL**

> **PROCESO EN QUE SE HALLA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE MOTIVA LA RESPONSABILIDAD, SI LA CAUSA EN QUE SE DICTA ESTA FENECIDA, Y SI NO LO ESTUVIERE, COPIA DE LO CONDUCENTE, A COSTA DEL INTERESADO O DE OFICIO."** (Lo resaltado es de la parte acusadora).

En este sentido, la licenciada **GARCÍA DE BERBEY**, esboza el siguiente razonamiento:

> "Se deriva de la norma transcrita que la **SENTENCIA, AUTO O PROVIDENCIA que motiva el hecho y por la que se trata de hacer efectiva la responsabilidad penal por infracción de la Constitución Nacional y las leyes, es una resolución judicial que viene a constituir LA PRUEBA SUMARIA del hecho atribuido**, porque es del contenido de la resolución de que se trate que se pretende hacer efectiva la responsabilidad penal por las violaciones a la Ley y a la Constitución Nacional." (F. 34).

La Sala considera que, si bien del artículo antes transcrito, se desprende que debe presentarse la Resolución en la cual supuestamente se ha dado la comisión de un delito de abuso de autoridad o extralimitación de funciones, esto no significa que tal prueba sea idónea para acreditar dichos delitos, ya que deben presentarse todos los medios probatorios que cumplan con tales fines, lo que se tendrá entonces, como prueba sumaria.

La acusadora en su escrito expone una serie de consideraciones con respecto a la cosa juzgada, toda vez que, la apelación declarada desierta por la Juez Octava de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, fue interpuesta contra la Resolución de 31 de marzo de 1995, en la cual no se admitía la acusación particular interpuesta por la licenciada **OMAYRA GARCÍA DE BERBEY**, en la cual se consideró que había lugar a lo dispuesto en el artículo 1969 del Código Judicial, sobre la cosa juzgada.

Luego, la licenciada **GARCÍA DE BERBEY**, se refiere a la deserción del recurso de apelación por ella presentado, razón fundamental para que la misma presentara la presente acusación particular, contra la Juez Octava de Circuito de lo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Y, finalmente, la acusadora argumenta sobre la improcedencia del recurso de hecho -sugerido en su escrito por la Juez Octava de Circuito de lo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá-, contra la deserción del recurso de apelación dentro de la acusación particular por ella presentada.

Así, pues, para determinarse la admisibilidad de la acusación, la misma ha de atenerse a los requisitos consignados en el artículo 2013 del Código Judicial -subrogado por la Ley 3 de 22 de enero de 1991. En este sentido, el libelo acusatorio bajo estudio, cumple con los requisitos de forma exigidos por la Ley.

Sin embargo, es un hecho público y notorio que la acusada en el presente negocio, Licenciada **MARCELA GÓMEZ DE ANTINORI**, actualmente se encuentra desempeñando el cargo de Juez Octava de Circuito de lo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, por lo que, por poseer la calidad de servidor público debe aplicársele lo dispuesto en el Capítulo II, Título IX, Libro III del Código Judicial, sobre los Procesos Contra Servidores Públicos.

Por lo tanto, se procederá a resolver la admisibibilidad de la presente acusación particular en base a la prueba sumaria presentada por la parte acusadora, toda vez que nos encontramos ante una acusación particular contra un servidor público, caso en el cual corresponde a la parte acusadora aportar tales pruebas.

Por su parte, la parte acusadora, en su escrito, denuncia como pruebas las presentadas con el libelo de denuncia criminal interpuesta por la licenciada **OMAYRA GARCÍA DE BERBEY**, contra la licenciada **MARCELA GÓMEZ DE ANTINORI**, expediente que cursa en la Fiscalía Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá.

En tal virtud, a juicio de la Sala, cabe la aplicación del artículo 2471 del citado Código Judicial, del cual se desprende que, toda persona que promueva acusación o denuncia contra algún servidor público deberá acompañar la prueba sumaria de su relato, entendiéndose como tal, cualquier medio probatorio que acredite el hecho punible atribuido, los cuales deben ser idóneos, es decir, que por sí solos acrediten el hecho punible que se le imputa a la acusada.

Por lo tanto, luego de analizados tanto el libelo de la acusación particular como las consideraciones realizadas por el Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, Licenciado DIMAS E. GUEVARA G., mediante contestación de traslado N° 23 de 18 de marzo de 1996 (fs. 25 a 30), con respecto al expediente contentivo de la denuncia mencionada, a falta de prueba sumaria eficaz que demuestre que el acto atribuido a la acusada constituye delito, lo procedente es revocar el Auto que admite la presente acusación particular.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA el Auto apelado de 10 de enero de 1996, proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia (fs. 15-16) y, NO ADMITE la acusación particular promovida por la licenciada OMAYRA GARCÍA DE BERBEY, en su propio nombre y representación, contra la licenciada MARCELA GÓMEZ DE ANTINORI, Juez Octava de Circuito de lo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, por supuesto delito contra la Administración Pública; por consiguiente, remite el expediente al Segundo Tribunal Superior de Justicia, para los trámites legales correspondientes.

Notifíquese, Devuélvase y Archívese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO APELADO

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 9 DE AGOSTO DEL 1995, PROFERIDA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, QUE SOBRESEE EN FORMA PROVISIONAL A EDGAR RENTERÍA HURTADO Y A ALEJANDRO MOYA ALLEN, SINDICADOS POR EL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE DAYANARA VIQUEZ MORENO Y ABDIEL ZACARÍAS CHAVERRA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, OCHO (8) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Conoce esta Sala de los recursos de apelación presentados por el Fiscal Segundo Superior del Primer Distrito Judicial y por la defensa técnica de Eleiter Antonio Gamboa Blandón, contra auto de 9 de agosto de 1995, emitido por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que decreta sobreseimiento provisional en favor de Edgar Rentería Hurtado y de Alejandro Moya Allen, sindicados del delito de homicidio cometido en perjuicio de Dayanara Viquez Moreno y Abdiel Zacarías Chaverra. La decisión en comento decretó adicionalmente un sobreseimiento provisional en forma objetiva e impersonal en las mismas sumarias.

El representante del Ministerio Público apelante sostiene que en la fase sumarial se ha comprobado que Eliécer A. Gamboa Blandón es la misma persona que dice llamarse "José Manyoma", por lo que solicita sea reformado el auto impugnado para que, en su lugar, se abra causa criminal contra "ELIÉCER A. GAMBOA BLANDÓN (A) MANYOMA" toda vez que contra este encartado existe "el señalamiento ... realizado por LEIKA JUDITH HIDALGO PALACIO ", y las pruebas e indicios allegados al proceso (f. 258).

Por su parte, el defensor técnico de "Eleiter Gamboa" solicita que se

elimine el nombre "José Manyoma" de la resolución atacada, por considerar que "el señalamiento del nombre de José Manyoma ... puede ... involucrar a mi representado en el proceso". En el mismo sentido considera que se debe suprimir el nombre de "José Manyoma" de la resolución emitida por el a-quo, ya que "... supedita la reapertura del proceso a la detención del mismo, con el consiguiente riesgo de que se incurra en un error en la identificación del sujeto, pues en este expediente se ha pretendido identificar a mi representado con el alias Manyoma" (f. 261).

Por conocidos los argumentos de los recurrentes, se pasa a resolver la alzada, de conformidad con el caudal probatorio obrante en autos y en atención a los preceptuado por el artículo 2428 del Código Judicial.

El cuaderno penal permite determinar que en la noche del 16 de febrero de 1993, vecinos del sector N° 2, Nueva Libia, ubicado en el Distrito de San Miguelito, Provincia de Panamá, escucharon varios disparos de arma de fuego. Al día siguiente, los residentes del lugar hallaron los cuerpos sin vida de Abdiel Zacarías Chaverra Espinoza y de Dayanara Viquez Moreno. En autos aparecen los protocolos de necropsia de los occisos, en los que se detalla que Chaverra Espinoza y Viquez Moreno presentaban orificios de entrada por proyectil de arma de fuego en el área de la cabeza, y que fallecieron a consecuencia de "LACERACIÓN HEMORRÁGICA DEL CEREBRO - HERIDA PENETRANTE POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO" (fs. 72-88).

Para la correcta comprensión de los argumentos planteados por los recurrentes, se pasa a examinar algunos elementos probatorios allegados al cuaderno penal.

Tenemos así la declaración jurada de Leyka Judith Hidalgo Palacio, quien sostiene que en la noche de los hechos "... escuchamos como ocho detonaciones pero no sabíamos de que se trataba hasta el día siguiente cuando me enteré de lo que había sucedido ..." (f. 46). En ampliación su declaración, Hidalgo Palacio agrega que, luego de escuchar las detonaciones "... corrí hacia arriba inmediatamente y cuando iba llegando a la tienda vi que JOSÉ MANYOMA corría hacia arriba, con un arma de fuego en la mano ..." (f. 127). Cabe advertir que es en esta última deposición cuando Leyka Judith Hidalgo Palacio hace constar la identificación de José Manyoma, agregando "dicen que el se cambio de nombre que ahora se llama LEITER GAMBOA y trabaja actualmente en la construcción" (f. 128).

Por su parte Nilda Edith Espinosa de Sánchez, madre del fallecido, declara que una vecina de nombre "CARMEN ... me dijo que ... la noche del dieciséis de febrero de 1993 ... vio a JOSÉ MONAYOMA, que le tocaba la puerta a mi hijo, él salió y al salir le dijo que saliera y que fueran a hablar a la parte de atrás de la casa ... cuatro sujetos que estaban en la parte de atrás ... lo apuntaban con el revólver ..." (f. 116).

El cuaderno penal también recoge el testimonio de Victoria Chaverra de Magallón, hermana del fallecido, quien sostiene que "los vecinos me han estado dando información sobre lo ocurrido ... me han contado que la noche que los mataron vieron al tal `José ... es de apellido `MAYOMA de nacionalidad colombiana y el otro es un tal `CECILIO ..." (f. 42).

Como se puede advertir, las anteriores deposiciones están dirigidas a vincular a "José Manyoma" con la autoría del doble homicidio, sin que ninguna de ellas invoque la percepción directa de los hechos. En cuanto a los testigos de referencia, según lo dispuesto en el artículo 907 del Código Judicial su versión carece de fuerza probatoria. Aunado a ello, resulta cuestionable la credibilidad de la declaración de Leyka Judith Hidalgo Palacio ya que, en una primera declaración, sólo sostiene que escuchó las detonaciones producidas por armas de fuego "pero no sabíamos de que se trataba hasta el día siguiente ..." (f. 46), y en una última declaración, sin ofrecer justificación alguna, amplía su versión para afirmar que, luego de escuchar los disparos, "... vi que JOSÉ MANYOMA **corría hacia arriba ...** con un arma de fuego en la mano ..." (f. 127), señalamiento del que, si se tiene presente que es la misma dirección en que la testigo corría, no parece derivarse necesariamente una incriminación válida.

Siendo esta la situación procesal, la Corte es del criterio de que las pruebas que aparecen en el cuaderno penal no permiten arribar fundadamente, hasta ahora, a la identificación de Eliécer A. Gamboa Blandón con José Manyoma. Por tanto, la Sala comparte el criterio del a-quo en cuanto a la medida de cerrar la encuesta penal con un sobreseimiento provisional, objetivo e impersonal, calificación que permitiría la reapertura de este proceso en el evento de que se descubrieran otros elementos de convicción sobre las personas vinculadas a la comisión del hecho punible.

Por lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA auto de 9 de agosto de 1995, proferido por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que decreta sobreseimiento provisional en favor de Edgar Rentería Hurtado y de Alejandro Moya Allen, por el delito de homicidio cometido en perjuicio de Dayanara Viquez Moreno y Abdiel Zacarías Chaverra, y decreta sobreseimiento provisional, objetivo e impersonal, en las sumaria.

Duevuélvase y Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO

SUMARIO INCOADO CONTRA CARLOS ANTONIO SHERLEY (A) "PICOLO", SINDICADO POR EL HOMICIIDIO DE JAVIER HINESTROZA ANGULO (A) "ARDILLA". MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de apelación ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Auto de 23 de enero de 1996 (fs. 179 a 190), proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante el cual se abre causa penal y se mantiene la detención preventiva contra **CARLOS ANTONIO SHERLEY MOSQUERA (a) "PICCOLO"**, por el delito de homicidio cometido en perjuicio de JAVIER HINESTROZA ANGULO (a) "ARDILLA", hecho ocurrido la noche del sábado 10 de septiembre de 1994, en el sector de Vista Alegre N° 2 (Chorrillito), Calle 4ta. final, frente a la casa N° 173, Distrito de Arraiján.

El propio sindicado **CARLOS ANTONIO SHERLEY**, presentó escrito de apelación (fs. 192 a 194), en el cual manifestó que el hoy occiso se encontraba utilizando drogas afuera de su residencia, por lo que le reclamó ya que él no quería que sus hijos lo vieran; pero, como JAVIER HINESTROZA ANGULO (a) "ARDILLA" hizo caso omiso a su solicitud de que se retirara del área, se originó la riña, que tuvo como resultado la muerte de este último. Luego, el sindicado en su escrito, señaló que el hoy occiso, que se encontraba afectado por las drogas, lo atacó, y él tuvo que defenderse.

Por su parte, el Defensor de Oficio, **Luis Carlos Arosemena Ramos**, presentó escrito de sustentación de apelación (fs. 196 a 198), en el cual argumentó que la Resolución impugnada debe ser revocada, toda vez que se da una de las causas de justificación contempladas en el Capítulo II del Título II del Libro I del Código Penal, es decir que su defendido obró en defensa de sus propios derechos dentro de los límites de su propiedad, cuando el hoy occiso intentó lesionarlo con su navaja, lo cual se desprende de la Diligencia de reconstrucción que reposa a foja 125, en la cual **CARLOS SHERLEY** manifestó: "... tuve que defenderme si no hoy día yo fuera el occiso, mi intención no era hacerle daño a nadie, sino defenderme, fue en defensa propia." Además, indicó el recurrente que **CARLOS**

SHERLEY declaró en diversas ocasiones el hecho de que JAVIER HINESTROZA ANGULO se encontraba drogado, lo cual explica la agresividad de éste. Lo anterior se comprueba en el Protocolo de Necropsia, en la parte del examen de laboratorio del occiso (f. 67), a saber:

"...
MARIHUANA: Positiva (+) Mayor 300 ng/m/
COCAÍNA: Positiva (+) Mayor 5,000 ng/m/
... ." (F. 67).

Por último, se refiere el recurrente a la delincuencia primaria de **CARLOS SHERLEY**, lo cual se desprende de su record policivo, a foja 71. Y, hace alusión a la nota (f. 133-136), firmada por residentes del barrio del imputado, donde éstos expresan que **CARLOS ANTONIO SHERLEY** siempre ha sido una persona pacífica, cooperadora, respetuosa, atenta, bondadosa, con todos los que ha convivido.

Por otro lado, la Fiscal Segunda Superior del Primer Distrito Judicial, de Panamá, Licenciada GEOMARA GUERRA DE JONES, mediante contestación de traslado de 23 de mayo de 1996 (fs. 200 a 203), en razón de la apelación bajo estudio, consideró que debe mantenerse el Auto recurrido, en base a lo siguiente:

"En autos percibimos que aún cuando el imputado en la Diligencia de Reconstrucción señala el lugar donde se dieron los hechos, esta aseveración, que es única en cuanto al desarrollo de los acontecimientos y el lugar, no encuentra sustento cuando la señora SABINA YARIELA VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, señala que el occiso no tenía cuchillo, ni otra arma alguna, y que el forcejeo se dio en la calle y no dentro de los predios de la casa del imputado, amén cuando ésta fue precisamente la persona que auxilió al occiso inmediatamente después de recibir la lesión, que según su relato al identificar su concubino cuando se encontraba peleando, se acercó al lugar donde este (sic) fue herido mortalmente, que caminaba hacia ella, en la dirección por donde iba, es decir, la calle y no como el imputado ha sostenido.

También la investigación recogió la declaración de LUIS GABRIEL FIDELS WILBURS y LAURA ESPERANZA OBANDO PALACIOS, quienes son contestes en advertir que el occiso no portaba arma blanda alguna. La Desaveniencia del acusado con el occiso, en relación a la presencia del interfecto en su propiedad, no puede ser un factor que determine la legitimidad de defensa, en sus diferentes formas de aparición, puesto que existen los medios legales y las autoridades competentes que están facultados por Ministerio de Ley, para dilucidar este tipo de conflictos. La situación producida según señala el imputado no exigía conducta necesaria de defensa, conforme lo exige el artículo 21 del Código Penal, entre cuyos requisitos figura principalmente el 'medio racional para impedir o repeler la agresión' y 'la imposibilidad de evitarla o eludirla de otra manera'.
...
Huelga advertir que antecedió a este hecho de sangre, otras peleas y discusiones entre CARLOS ANTONIO CHERLY (SIC) y JAVIER HINESTROZA ANGULO (A) ARDILLA, indicio que es también fuerte indicador de la conducta que desarrolló el imputado, respecto al occiso." (Fs. 201-202).

ANTECEDENTES:

Mediante Resolución de 14 de septiembre de 1994 (fs. 31 a 33), la Personera Municipal del Distrito de Arraiján, Licenciada VIELKA CUNNINGHAM DE RODRÍGUEZ, decretó la detención preventiva de **CARLOS ANTONIO SHERLEY**, y dispuso recibirle declaración indagatoria al imputado.

Posteriormente, mediante Vista N° 159 de 31 de julio de 1995 (fs. 140 a 147), la Fiscal Segunda Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, Licenciada GEOMARA GUERRA DE JONES, solicitó el llamamiento a juicio de **CARLOS**

SHERLEY, por infractor de las normas contenidas en el Capítulo I, Título I del Libro II del Código Penal vigente, es decir, por el delito genérico de homicidio. En este orden, mediante Resolución de 6 de octubre de 1995 (f. 150), el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial ordenó la ampliación del presente sumario. Luego, mediante Vista de ampliación N° 254 de 30 de noviembre de 1995 (fs. 176-177), la Fiscalía Segunda Superior del Primer Distrito Judicial remitió lo actuado al Segundo Tribunal Superior de Justicia, reiterando los conceptos vertidos en su Vista Fiscal anterior.

Obran como prueba en el sumario, luego de la ampliación llevada a cabo por los agentes del Ministerio Público, una serie de elementos probatorios los cuales señalaremos a continuación.

La comisión del hecho punible ha quedado acreditada en el proceso con la Partida de defunción de JAVIER HINESTROZA ANGULO (fs. 50 y 96), quien falleció de choque hemorrágico en Bella Vista, Distrito de Panamá, el 10 de septiembre de 1994. También constan en autos, la Diligencia de reconocimiento de un cadáver (f. 53); y el Protocolo de necropsia N° 49-13-651, de 13 de septiembre de 1994, del Hospital Santo Tomás, suscrito por el doctor JAIME E. ARIAS MORENO (fs. 56 a 68), cuya parte pertinente transcribimos a continuación:

> "CONSIDERACIONES MÉDICO LEGALES
> Se trata de un varon (sic) adulto con herida inciso penetrante supraclavicular izquierdo que compromete vena subclavia izquierda y pulmón izquierdo.
> El paciente fallece por exanguinación (choque hemorrágico (sic).
> La herida es de tipo grave, severa y mortal por si (sic) misma y por sus consecuencias o complicaciones.
>
> CAUSAS DE LA MUERTE
>
> A) CHOQUE HEMORRÁGICO.
> B) HERIDA INCISO PENETRANTE EN CUELLO (IZQUIERDO)." (F. 68).

De fojas 81 a 86, constan vistas fotográficas del cadáver de JAVIER HINESTROZA ANGULO, en la morgue del Hospital General Nicolás A. Solano, de la Chorrera.

El hoy occiso JAVIER HINESTROZA ANGULO, fue identificado dactiloscópicamente dentro de la clasificación deca-dactilar, del archivo criminal de la División de identificación criminal de la Policía Técnica Judicial, según consta en la Nota suscrita por el Perito en Dactiloscópia, Inspector I ROBERTO SMITH THOMAS (f. 76-77).

De fojas 78 a 80, constan vistas fotográficas del lugar donde se dio el homicidio.

También, se realizó la Diligencia de reconstrucción e inspección ocular (fs. 117 a 124; -transcripción- fs. 125 a 127), y son visibles en el expediente las respectivas vistas fotográficas relacionadas con la diligencia de reconstrucción de los hechos (fs. 159 a 168), al igual que los Planos de la reconstrucción de los hechos (f. 156).

Según se desprende del Informe de comisión de 11 de septiembre de 1994 (f. 20), de la P. T. J., Sub-Agencia de Vacamonte, el arma blanca -cuchillo- con que se cometió el homicidio, no logró encontrarse.

Se encuentra en el sumario, el Oficio/411-19445 de 12 de diciembre de 1994 (f. 72), suscrito por la Médico Psiquiatra Forense del Instituto de Medicina Legal, Doctora ELAINE BRESSAN, que se refiere a la evaluación médica social (fs. 73-74), efectuada a **CARLOS ANTONIO SHERLEY MOSQUERA**, de donde se desprende que éste no tenía alteradas sus facultades mentales al momento de ocurrir los hechos que se le imputan ni se enmarca en las prerrogativas de los artículos 24 y 25 del Código Penal, por lo que psíquicamente es imputable.

Consta en autos el historial policivo y penal de CARLOS ANTONIO SHERLEY (a) "PICOLO" (f. 71), quien no ha sido penado por contravenciones de policía ni por delito común alguno.

Mediante Oficio 57-14113 de 11 de agosto de 1995 (fs. 157 y 158), suscrito por el doctor JAIME E. ARIAS MORENO, Médico Forense Patólogo del Instituto de Medicina Legal, se establece lo siguiente:

> "Tomando en consideración los hallazgos de la Necropsia N/49-13-851, la indagatoria y lo escrito en la reconstrucción de los hechos, consideramos que la herida que presenta la víctima (región supraclavicular y las consecuentes lesiones internas) son compatible (sic) con lo manifestado por el imputado.".

Al rendir declaración jurada (fs. 170-171), el doctor JAIME ENRIQUE ARIAS MORENO, Médico Forense Patólogo del Instituto de Medicina Legal, quien realizó la necropsia del cadáver de JAVIER HINESTROZA ANGULO, manifestó entre otras cosas, que la herida definitivamente fue mortal ya que lesionó una vena de gran calibre y, además, lesionó el pulmón izquierdo, que es un órgano igualmente vital; en estos casos, la muerte se produce por sangramiento más o menos lento o rápido de sangre, a lo cual se suman las lesiones del pulmón, que también es una herida grave y de consideración.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia, en la Resolución apelada, realizó un resumen de los diversos testimonios recabados durante las investigaciones, entre los que se encuentran las declaraciones juradas de SABINA YARIELA VÁSQUEZ RODRÍGUEZ (a) "YAYITA" (fs. 2 a 4; -ampliación- fs. 97-98); LUIS GABRIEL FIELDS WILDURN (a) "GORDO" (fs. 5-6;-ampliación- f. 99); DAVID ULISES ACHURRA QUINTERO (fs. 7 a 10); MARTA ELENA MOSQUERA (fs. 11-12); LAURA ESPERANZA OBANDO PALACIO (a) "ROSA" (fs. 137-138); RITA SMITH AYARZA (fs. 174-175), a saber:

> "Se inicia la encuesta penal el 10 de septiembre de 1994 cuando la Policía Técnica Judicial, Sub-Agencia de Vacamonte recibe la declaración de Sabina Yariela Vásquez Rodríguez quien da a conocer que su señor fue muerto ese día en horas de la noche en el sector de Vista Alegre N° 2 (Chorrillito). Dice que a eso de las 9:00 p. m. dejó a su señor, Javier Hinestroza Angulo, sentado en la cuneta donde Felipín, casa N° 175. Agrega que de pronto miró hacia atrás y vio a Piccolo forcejeando con su señor, regresó corriendo pero ya su señor venía con la mano en el pecho sangrando, lado izquierdo, al tratar de agarrarlo se le cayó, lo agarró, cargó y pidió ayuda a personas pero no querían. Dice que despertaron a un señor de un taxi y éste los transportó pero falleció en el trayecto. Señala que la acompañó el señor David Achurra y el joven Luis Gabriel Fields, que al momento del hecho no vio otras personas. Expresó que el lugar exacto del hecho es calle cuarta frente a la casa 175 y 158. Explica que no vio cuando su señor fue apuñaleado pues estaba como a 160 mts. y cuando su señor fue apuñaleado pues estaba como a 160 mts. y cuando vio forcejeo corrió pero ya su señor venía herido. Señala a Piccolo como el autor del hecho, ignora el nombre de éste pues sólo lo conoce por el apodo (fs. 2-4).
>
> LUIS GABRIEL FIELDS WILBURN declara y expone que GARY HERLEY involucrado en el hecho es su cuñado. Luego de darle a conocer el contenido del artículo 25 de la Constitución Nacional el señor FIELDS dijo que continuará declarando. Expresó que como a las 9:00 p. m. su cuñado, Gary Sherley, se presentó a su residencia y le dijo a la mamá, señora Marta Elena Mosquera, 'Mami' llévame a la Policía Técnica Judicial que maté a Ardilla. Dice que él ya estaba acostado pero se levantó y fue al sitio del hecho, al llegar vio a la señora Sabina Vásquez que pedía ayuda, él levantó al herido y lo llevó a la casa del señor DAVID ACHURRA, quien tiene un taxi y prestó el apoyo para el traslado al hospital Santo Tomás pero saliendo de la autopista, en el sector de Arraiján, dio el último suspiro. Explica que la herida estaba arriba de la tetilla izquierda. Dio la dirección donde localizan a Gary Sherley (a) Piccolo (fs.5-6).

DAVID ULISES ACHURRA QUINTERO, conductor del taxi, al declarar expone que al (sic) día del hecho alrededor de las 9:30 p. m. se encontraba durmiendo en su casa cuando oyó que lo llamaban, al abrir, una señora le dijo si podía llevarla afuera con una persona que se desangraba, en principio le dijo que buscara otra persona pero vio una multitud de personas que se acercaban y decidió llevarlo pidiendo lo envolvieran en una sábana. Dice que llevó al herido, la señora y otro joven. Agrega que en le camino el joven y la señora comentaban que estaba vivo, luego el muchacho se quedó callado y al llegar al hospital el joven le dijo a la hermana que no se lo dijo en el camino para que no se alterara, pero el herido ya había muerto. Un médico se acercó con una camilla pero al tocar al herido dijo que ya estaba muerto. Dijo que al occiso no lo conocía pero a la señora sí. Señaló que el joven que los acompañó, LUIS FIELDS. W., dijo en el trayecto que el responsable era su cuñado CARLOS ANTONIO SHERLEY (a) Piccolo. ... .

MARTA ELENA MOSQUERA madre de CARLOS ANTONIO SHERLEY, luego de conocer el contenido del artículo 25 de la Constitución Nacional decidió seguir declarando e indicó que el sábado diez (10), su hijo, CARLOS ANTONIO SHERLEY fue a su casa a eso de las 8:00 p. m. y le dijo que acababa de apuñalear al señor de apodo ARDILLA. Ignora la causa y el arma que usó su hijo a quien desde chico se le apoda Piccolo (fs. 11-12).

...

SABINA YARIELA VÁSQUEZ RODRÍGUEZ amplía su declaración para indicar que el día del incidente estaba en la esquina con unos vecinos, al mirar hacia atrás vio a su señor 'Ardilla', forcejeando con Piccolo, corrió hacia él y al acercarse vio como que Piccolo lo empujó y salió corriendo y su señor caminó hacia ella quitándose la camisa y ella le vio sangre en la camiseta, al llegar donde ella trató de agarrarlo pero se le cayó boca abajo, al tratar de alzarlo vio que sangraba como una pluma, gritó pdiendo ayuda y diciendo 'fue Piccolo'. Dice que llegó un muchacho que conoce por 'Gordo' y se lo quitó de los brazos llevándolo corriendo hacia donde vive el taxista quien los llevó al hospital Santo Tomás. Ignora los motivos que originaron el hecho y sabe que antes pelearon sólo una vez, una discusión, pero se sobrellevaban. Asevera que su señor nunca cargaba armas, era trabajador, laboraba en la Compañía Econoplade de Vacamonte. Dice que consumía cuando estaba con los amigos pero no aclara si droga o alcohol o ambas cosas, e indica que nunca tuvo problemas con la justicia (fs. 97-98).

LUIS GABRIEL FIELDS WILBURN también amplía e indica que a él lo apodan 'Gordo' y corrobora lo expuesto por la señora Sabina en cuanto a que él llegó y le quitó al herido y lo llevó hasta la casa del taxista (fs. 99).

...

LAURA ESPERANZA OBANDO PALACIO al declarar expone que es amiga del imputado, quien es marido de una tía suya, explicando que para la fecha y hora del hecho estaba en la recámara de su casa, luego escuchó una bulla y se asomó a la ventana, viéndolos pelear en la calle, hasta que 'Piccolo' se fue huyendo. Aclara que no alcanzó a ver bien porque la pesiana tiene malla. Dice que cuando Piccolo se fue, salió y vio al difunto tirado, sangrando. Informa que a ella le dicen ROSA de apodo y vive casi frente a la casa del sindicado, señalando que su abuela es la que se llama Rosa Herrera pero no vive allí y no estaba ese día. Manifestó además que el difunto no tenía arma al producirse la pelea pero Carlos Antonio Sherley sí estaba armado. Aclara que primero pelearon a las manos, hasta que Carlos sacó el arma (fs. 137-138).

...

Compareció ante la agencia de instrucción la señora RITA SMITH AYARZA, quien se ratificó del documento por ella suscrito, visible de folios 133 a 136, relacionado (sic) sobre la conducta del imputado en la comunidad (fs. 174-175). ... ." (Fs. 179 a 188).

Aunado a lo anterior, consta en el proceso lo declarado por **CARLOS ANTONIO SHERLEY** (-informativo- fs. 13 a 17; -indagatoria- fs. 36 a 39), quien primeramente confesó haber apuñaleado en el hombro izquierdo a "ARDILLA" -JAVIER HINESTROZA ANGULO-, frente a la casa N° 173 del Chorrillito, propiedad de su concubina BERTA PALACIOS, porque éste estaba sentado en la esquina de la residencia; le pidió que se fuera, y éste comenzó a dar vueltas alrededor de la casa, él lo empujó, y "ARDILLA" molesto, se le abalanzó y empezaron a pelear a puños. Además, en esta versión inicial de los hechos, señaló que el occiso tenía algo que le brillaba en la cintura, en el lado izquierdo, pero no pudo identificar qué era. Y, finaliza diciendo que cometió el hecho en defensa propia, porque el finado tenía un arma.

Posteriormente, **CARLOS ANTONIO SHERLEY**, cambió su versión de los hechos en la indagatoria, indicando que, como siete u ocho veces le había pedido a "ARDILLA" que se fuera, pero éste se disgustó y se le abalanzó porque estaba drogado, y cuando empezaron a forcejear el hoy occiso sacó un arma cortante que tenía en la parte delantera de la pretina del pantalón, y luego él sacó su puñal; el occiso lo atacó, por lo que él tuvo que defenderse.

Luego del análisis de los argumentos presentados por los recurrentes, la Sala pasará a decidir la alzada en los términos previstos en el artículo 2428 del Código Judicial, es decir, que tendrá conocimiento del proceso, sólo sobre los puntos de la Resolución a que se refieran los recurrentes.

Siendo que la apelación en ambos escritos, se fundamenta en la causa de justificación contenida en el artículo 21, Capítulo II, Título II del Libro Primero del Código Penal, es decir, la legítima defensa, consideramos oportuno mencionar que para la concurrencia de dicha causa de justificación es necesario que se den cuatro (4) requisitos que la configuran como tal, los cuales son: Una agresión injusta, actual o inminente; que se utilice un medio racional para impedir la agresión; que no se pueda evitar de otra manera; y, falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende.

En tal sentido, a juicio de la Sala, el elemento subjetivo del delito, es decir, la presunta responsabilidad de **CARLOS ANTONIO SHERLEY**, emana principalmente de la confesión hecha inicialmente en el informativo rendido ante la Policía Técnica Judicial, Sub-Agencia de Vacamonte (fs. 13 a 17), el día 11 de septiembre de 1994, a las 12:30 p. m., donde el imputado acepta ser el responsable de la muerte de JAVIER HINESTROZA, y narra con lujo de detalles como se desarrollaron los hechos, y a la vez excepciona a su favor haber actuado en defensa propia. Con respecto a las primeras declaraciones hechas por los testigos -en este caso por el imputado-, consideramos oportuno citar el criterio doctrinal, que guarda relación con la materia:

> "Las primeras declaraciones de los testigos que se recogen en el procedimiento escrito deben tenerse como las más verídicas, porque no hay tiempo de engañarlos o apartarlos de su deber, mientras en la discusión pública los testigos pueden, si están comprados o se les ha inducido a apartarse de su deber, retractarse impunemente de las declaraciones escritas en el expediente." (EUGENIO FLORIAN, De Las Pruebas Penales, Tomo II, pp. 75-76).

Además, es importante el hecho de que en el informativo rendido ante la P. T. J. el día de los hechos, **CARLOS SHERLEY** coincide con lo declarado por los testigos del hecho y con lo investigado a lo largo del sumario; a pesar, de que al ser indagado cambió su versión inicial.

Esta segunda versión del sindicado es desvirtuada por las declaraciones de los testigos, principalmente, por los señalamientos directos de la concubina de JAVIER HINESTROZA, SABINA YARIELA VÁSQUEZ; y, LAURA ESPERANZA OBANDO, quien aseguró que el occiso no portaba arma alguna al momento de los hechos. Por lo tanto, queda descartada la supuesta defensa personal alegada por el sindicado, puesto que ni siquiera podemos hablar en este caso de una agresión actual, injusta e inminente, ni mucho menos de los demás elementos que componen la legítima defensa como causa de justificación.

De la declaración indagatoria rendida por **CARLOS SHERLEY**, se desprende una cierta enemistad entre éste y el occiso; cuando el imputado señaló que anteriomente había tenido ciertas diferencias con JAVIER HINESTROZA.

Por lo expuesto, existe hasta el momento, mérito suficiente para el llamamiento a juicio de **CARLOS ANTONIO SHERLEY MOSQUERA (a) "PICCOLO"**, según lo establecido en el artículo 2222 del Código Judicial, debido a que se ha comprobado plenamente la existencia del hecho punible, aunado al hecho de que existen graves indicios contra el mencionado imputado, lo cual se desprende tanto de la propia declaración -confesión- del mismo, como de las demás declaraciones recabadas durante la instrucción del presente sumario. En razón de esto, se colige que el delito por el cual se llama a juicio a **CARLOS ANTONIO SHERLEY**, es el de homicidio, contenido en el Capítulo I, Título I del Libro II del Código Penal, sobre delitos contra la vida y la integridad personal.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el Auto de 23 de enero de 1996, proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante el cual se abre causa penal y se mantiene la detención preventiva contra CARLOS ANTONIO SHERLEY MOSQUERA (a) "PICCOLO", por el homicidio cometido en perjuicio de JAVIER HINESTROZA ANGULO (a) "ARDILLA", hecho ocurrido el día sábado 10 de septiembre de 1994, en el sector de Vista Alegre N° 2 (Chorrillito), Calle 4ta. final, Distrito de Arraiján.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO DE PROCEDER APELADO EN EL PROCESO SEGUIDO A ESTEBAN POLANCO MARQUÍNEZ, ELIÉCER RIVERA DE GRACIA, LUIS ALBERTO VARELA RUDAS, LUIS ANTONIO CÓRDOBA Y DEMETRIO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, SINDICADOS POR LOS DELITOS DE HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL Y ROBO EN PERJUICIO DEL DOCTOR MAURO JOSÉ ZÚÑIGA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Procedente del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, con sede en Penonomé, ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema, en grado de apelación, las sumarias contentivas del proceso que se le instruye a **ESTEBAN POLANCO MARQUÍNEZ, ELIÉCER RIVERA DE GRACÍA, LUIS ALBERTO VARELA RUDAS, LUIS ANTONIO CÓRDOBA y DEMETRIO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ**, sindicados por los delitos de homicidio en grado de tentativa, contra la Libertad Individual y robo, en perjuicio del Doctor MAURO JOSÉ ZÚÑIGA ARAÚZ, hecho ocurrido aproximadamente a la una y cincuenta minutos de la tarde (1:50 p. m.) del día 21 de agosto de 1985.

Mediante Auto de 6 de septiembre de 1995, se abrió causa criminal contra **ELIÉCER RIVERA DE GRACIA, ESTEBAN POLANCO MARQUÍNEZ, LUIS ALBERTO VARELA RUDAS, DEMETRIO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ (A) PALÉ, y LUIS ANTONIO CÓRDOBA (A) PAPO**; mientras que dictó un sobreseimiento provisional a favor de **ADÁN PITTY GUERRA e IGNACIO FRANCO GONZÁLEZ**, y sobreseimiento definitivo a favor de **ARLES MUÑOZ GUERRA**.

El Tribunal a-quo ponderó entre otros, los siguientes aspectos:

-que la tentativa de homicidio se encuentra probada con las declaraciones del propio ofendido sobre lo que le hicieron y dijeron sus captores, y con los exámenes y certificaciones médicas del estado de salud del doctor ZÚÑIGA al momento de ser abandonado a orillas de la carretera, que demuestran claramente

que la intención era acabar con su vida;

-que se encuentran igualmente probados los delitos contra la libertad individual con los múltiples testimonios de los presentes al momento de ser sacado violentamente del Restaurante QUO VADIS;

-también se ha comprobado la preexistencia y propiedad de los bienes que les fueron sustraidos al Doctor ZÚÑIGA mientras se le golpeaba dentro del automóvil, con la declaración de la víctima y con la del doctor **DIÓGENES AROSEMENA.**

En cuanto a la vinculación de los sindicados con los ilícitos, el a-quo estimó que la misma se demuestra, en el caso de **LUIS ANTONIO CÓRDOBA**, con la declaración de **BAUDILIO JORDAN SANTOS**, con el hecho de ser el Jefe de la Zona Militar de Chiriquí al 21 de agosto de 1985 y tener bajo su mando a los miembros del S-2 que cometieron los delitos, por su interés en mantener calladas a las personas que tenían conocimiento de ellos, y por el papel de la víctima en los organismos gremiales y políticos de oposición al régimen imperante. En el caso de **DEMETRIO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ**, él era el Jefe del S-2 en Chiriquí, fue quien envió al Sargento **POLANCO** a investigar lo sucedido al doctor ZÚÑIGA "pues todo indica que lo que deseaba era saber si el ofendido había reconocido a alguno de sus agresores o victimarios y si alguien del sector de Las Lajas había identificado el vehículo y sus ocupantes" (f. 2742). Contra **RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ** pesa igualmente el señalamiento que le hace **BAUDILIO JORDÁN SANTO**S de haber estado presente cuando el Mayor **CÓRDOBA** le amenazó, y el hecho de haber tenido a su entera disposición el vehículo Mitsubishi Lancer utilizado para llevar a cabo los delitos investigados, sin contar que por ser el Jefe del S-2 y de la denominada "Fuerza Octava" (F8) tenía pleno conocimiento de la acción perpetrada por los autores de estos hechos delictivos.

Respecto a **LUIS ALBERTO VARELA RUDAS**, el Tribunal consideró, que se encuentra demostrado que era el conductor y hombre de confianza del Mayor CÓRDOBA; que aunque niega los cargos afirmando que viajó el día de los hechos a la ciudad de Panamá, ésta versión no se encuentra demostrada ya que los testigos que la apoyan son sospechosos por ser sus familiares más cercanos; que contra él milita el señalamiento directo que le hace el ofendido doctor ZÚÑIGA, tanto en la denuncia como en el careo, de ser la persona que condujo el vehículo en el cual se le intentó asesinar el 21 de agosto de 1985.

Aunque el recurso de apelación contra el Auto de llamamiento a juicio de 6 de septiembre de 1995, fue anunciado por todos los encausados, únicamente fue sustentado a favor de **LUIS ALBERTO VARELA RUDAS**, **LUIS ANTONIO CÓRDOBA y DEMETRIO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ**, a través de sus respectivos defensores: el licenciado **HORACIO RAMSEY MORALES** abogado del primero, y el licenciado **MARCO TULIO HERNÁNDEZ VIRVIESCAS**, por los dos últimos.

En cuanto a las razones que explica el licenciado **HORACIO RAMSEY MORALES**, en su escrito de sustentación de la apelación, en defensa de **LUIS ALBERTO VARELA RUDAS**, transcribimos lo siguiente:

> "... Que después de siete años de imposibilidad de identificación, un buen día el Dr. MAURO ZÚÑIGA ARAÚZ, envía una nota al Señor Procurador General de la Nación, ROGELIO CRUZ RÍOS, manifestando que reconocío por medio de una entrevista por televisión al inspector LUIS ALBERTO VARELA RUDAS, como el conductor del vehículo donde había sido plagiado el 21 de agosto de 1985.
>
> QUINTO: Que fuera del señalamiento hecho por el DR. MAURO ZÚÑIGA ARAÚZ, no existe ningún otro elemento de prueba contundente que vincule a nuestro defendido con el supuesto ilícito investigado.
>
> SEXTO: Que nuestro defendido al momento de rendir declaración indagatoria manifestó que se encontraba camino a la Ciudad Capital en compañía de sus dos hijos y su concubina acatando una orden dada por el Tribunal de Menores de Panamá, en relación de un reintegro de sus menores hijos.

> ...
> aportó las declaraciones de sus parientes, quienes coincidieron en circunstancias de tiempo, modo y lugar con lo manifestado por este (sic).".

Sigue diciendo el abogado que en el expediente no se ha comprobado que la vida del Dr. ZÚÑIGA haya estado en peligro y por tanto no entiende por qué se tipifica el delito como tentativa de homicidio; tampoco está comprobada la propiedad y preexistencia de las pertenencias de las cuales el ofendido alega haber sido despojado. Manifiesta que el principio de la unidad de pruebas no se ha cumplido pues contra su defendido se ha tramitado un tomo aparte a pesar de que existen cuatro tomos de investigación; opina que el único que se contradice es el presunto ofendido que "de la total imposibilidad de reconocer a sus agresores cambia al reconocimiento total y sin lugar a dudas de los mismos, a pesar del larguísimo período de tiempo transcurrido"; que **FRANCISCO ELIÉCER BONILLA** ha confesado lisa y llanamente que los fiscales lo incitaron a mentir para implicar a **LUIS ALBERTO VARELA RUDAS**. Que habiendo pasado diez años y nueve meses desde que se dieron los hechos, ya han prescrito las denuncias por los delitos de robo y privación de libertad sin que el Tribunal o el Ministerio Público hayan hecho nada al respecto. Solicita el abogado que a favor de **LUIS ALBERTO VARELA RUDAS** se dicte un sobreseimiento definitivo y por ende su inmediata libertad y reintegro a su lugar de trabajo.

Por su parte, el Licenciado MARCO TULIO HERNÁNDEZ manifiesta su inconformidad con el auto apelado indicando que en el expediente no constan indicios o pruebas que vinculen directa o indirectamente a sus defendidos con los delitos que se les imputan, lo cual evidencia que el proceso tiene un trasfondo político dado el grado militar de los imputados a la fecha de la comisión del ilícito. Considera el jurista que la calificación que contra sus defendidos hace el Tribunal es puramente subjetiva cuando los identifica como autores de un hecho sin estar vinculados al mismo. Que la aseveración de que **LUIS ANTONIO CÓRDOBA** debía estar instigando o apoyando la acción delictiva solo por que quienes supuestamente realizaron el hecho trabajaban o tenían alguna relación con la Zona Militar de Chiriquí, a su cargo, resulta totalmente alejada de la realidad, pues ni siquiera se ha acreditado que los autores materiales del hechos sean las personas que se señalan en el presente proceso, y que supuestamente eran sus subalternos. Opina el abogado que en iguales condiciones se encuentra su otro cliente, **DEMETRIO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ**, pues el hecho de que para el tiempo en que se suscitaron los ilícitos ocupara una posición de cierta relevancia dentro de la organización administrativa de la zona militar de la provincia de Chiriquí, no quiere decir que esa posición le permitiera tener el dominio total y absoluto de los demás funcionarios y mucho menos de sus actividades. Que lo anterior demuestra que a sus defendidos se les ha involucrado mal intencionadamente en este proceso, lo cual es "improcedente injusto y fuera de todo contexto legal". Finalmente llama la atención sobre la competencia del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, pues considera que no se ha determinado el lugar donde se produjo la tentativa de homicidio y dentro del expediente existen "una serie de inconsistencias, contradicciones y deformaciones jurídicas"; tampoco se ha determinado, a su parecer, el lugar donde se produjo el robo si la víctima fue encontrada en Chiriquí, área bajo la jurisdicción del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial. Solicita que se dicte a favor de sus defendidos un sobreseimiento definitivo.

LOS HECHOS:

De las piezas procesales obrantes en el extenso sumario, se colige que, mientras que un grupo de dirigentes de la ASOCIACIÓN DE MÉDICOS ODONTÓLOGOS Y AFINES DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL (A. M. O. A. C. S.) realizaban una gira por los diversos centros hospitalarios del interior del país, fue privado ilegalmente de su libertad el Doctor MAURO JOSÉ ZÚÑIGA ARAÚZ, por sujetos desconocidos, que además lo torturaron y le robaron artículos de su propiedad.

El día 21 de agosto de 1985, aproximadamente a la una y cincuenta minutos de la tarde (1:50 p. m.), mientras almorzaba junto a un grupo de personas en el Restaurante QUO VADIS, ubicado en la ciudad de Santiago en la Provincia de

Veraguas, fue sacado violentamente el ofendido por dos sujetos a mano armada, quienes irrumpieron en el reservado del aludido restaurante y a las voces de "ESTO ES UN ASALTO", uno de ellos tomó por el cuello al doctor ZÚÑIGA mientras que el otro se quedó en la puerta apuntándoles y ordenando mantenerse quietos a los presentes.

RUFINO ERMOCILLA (f. 2-4), **DIÓGENES AROSEMENA RIVERA** (f. 15-17), **HAYDEE DELGADO ALVAREZ** (f. 27-31), **RAQUEL SALINAS** (f. 52-56), **FAUSTINO PARDO** (f. 7-8;59-63) y **BERNARDINA GÓMEZ** (f. 80-84), coinciden en afirmar que el sujeto que tomó al Doctor ZÚÑIGA ARAÚZ por el cuello de la camisa y le apuntó con un arma era: trigueño, atlético, musculoso, alto, de 25 a 30 años de edad, peso aproximado de 160 lbs., usaba sweter o camisa oscura, pantalón jeans o camuflage y gorra oscura tipo boina. Respecto al sujeto que permaneció apuntando a los presentes en el lugar desde la puerta del reservado, **TRINIDAD RAMÍREZ** (f. 22-26), **HAYDEE DELGADO ALVAREZ, ARCELIS GUTIÉRREZ** (f. 44-48), **FAUSTINO PARDO, BERNARDINA GÓMEZ Y RUFINO ERMOCILLA**, declararon que se trataba de un hombre bajo, medio gordo, blanco, con barba, de 35 a 40 años, que usaba un sweter blanco y que no llevaba nada en la cabeza. Los testigos indicaron que el automóvil en que fue sacado el Doctor ZÚÑIGA era un auto entre blanco y gris, chico, tipo sedan, sin placa, con vidrios ahumados que tomó por la Vía Interamericana rumbo a la provincia de Chiriquí. Una de las marcas de auto que más se mencionó fue: "Mitsubischi".

Habiéndose dado aviso a las autoridades, se montó inmediatamente un operativo en la Patrulla de Camino de los Ruices, en donde se logró avistar el vehículo, que en lugar de hacer el alto que se le ordenó, aceleró la velocidad y se le abalanzó al agente del tránsito, quien hubo de lanzarse a la cuneta para evitar ser arrollado (ver declaraciones de **JOSÉ HILARIO TRUJILLO (f. 237-240), AURELIO NAVARRO ALVARADO (f. 241-242), JESÚS DUKEN HERRERA (f. 261-263), ELIÉCER MORALES VARGAS (f. 264-266), DOMINGO CASTOR TAPIA (f. 283-286), y MANUEL ANTONIO CAMPOS** (f. 287-288).

Ese mismo día, aproximadamente a las tres y veinte minutos de la tarde (3:20 p. m.), **ARGEMIRO PRIETO LOO y JOSÉ ODILO CARRERA DE GRACIA** encontraron en una carretera vieja que conduce a Remedios, antes de entrar en la carretera principal, al Doctor ZÚÑIGA quien estaba tirado boca abajo, semidesnudo, con un trapo en la boca y sangre en la oreja. Pensando que había fallecido, dieron aviso a las autoridades, quienes al apersonarse al lugar se percataron de que ya no estaba allí, sino que había caminado hasta la carretera y pedía transporte para ir al Hospital de San Félix, al cual fue conducido y posteriormente al Hospital Regional de David.

Preguntado sobre los delitos de que fue víctima, el Doctor MAURO ZÚÑIGA declaró que fue sacado violentamente del Restaurante QUO VADIS por un sujeto que lo tomó por el cuello y encañonó con un revolver calibre 38, llevándolo hasta un automóvil que estaba estacionado un poco distante a la entrada del restaurante, en donde lo introdujeron en el asiento de atrás,

> "... yo quedé en medio de los dos, inmediatamente me empujaron hacia los muslos del primer sujeto que entró al carro, el carro arrancó y los sujetos que estaban al lado mio (sic) empesaron (sic) a golpearme en la parte posterior de la cabeza, en el cuello y en la región lumbar, yo comenzé a notar que me bajaba mucha sangre por la cabeza, la sangre goteaba en el piso, habían puesto el radio del carro a todo volumen, ellos me golpeaban desde que entré al carro. Mientras me golpeaban me decían que yo hablaba mucho, que me iban a tirar de un helicóptero, que me iban a llevar a un puerto, que me iban a descuartizar antes de llegar, esto último me lo repitieron varias veces, me cortaban en la oreja y me decían: TE VAMOS A DESCUARTIZAR. ...
>
> Con un objeto cortante me laceraban la espalda y me echaban alcohol. Cuando ellos me golperaon en la cabeza que me salió sangre, inmediatamente me vendaron los ojos con un trapo, me puse flácido, me relajé y no les hice ninguna resistencia ni les dije palabra alguna. ...

> Hubo un momento en que perdí el sentido. También tengo golpes en la cara enterior del tórax, me pegaban con objetos duros, posiblemente con la cacha de un revólver.
> ...
> Pude darme cuenta que el carro tenía un radio trasmisor y en una parte del trayecto ellos hablaron por radio, pero no pude escuchar
> ...
> En el trayecto me quitaron el reloj dorado de cuarzo, mi cartera con todos mis documentos, mi cédula, Licencia de conductor, tarjeta de Diner Club, tarjeta de crédito del Hotel Panamá Hilton, del Holiday INN y de la National Renta a Car, me quitaron los zapatos, un par de botas de color negras y me rompieron la camisa y el pantalón, todo eso ocurrió en el trayecto, no portaba dinero en efectivo en la cartera. Yo sentí que el carro transitó muy pocos metros sobre una carretera de piedra, bajaron la velocidad del auto y me arrojaron a la carretera por la puerta derecha trasera, caí boca abajo lo que puede explicar el golpe que siento en el pecho, ...". (Fs. 93-95).

Transcurridos tres años desde la comisión del hecho punible, sin que se hubiesen identificado ni el vehículo ni sus ocupantes, el Juzgado Segundo Penal del Veraguas mediante auto de 23 de noviembre de 1988, dictó un sobreseimiento provisional de las sumarias que por los delitos de Robo y contra la Libertad Individual se instruían.

No obstante, a raíz de los indicios surgidos de las declaraciones, que para el proceso del homicidio del Doctor HUGO SPADAFORA FRANCO rindiera **FRANCISCO ELIÉCER GONZÁLEZ BONILLA**, el mismo Juzgado que decretara el sobreseimiento provisional, ordenó mediante Auto de 18 de julio de 1990 la reapertura del presente proceso.

En vista de que el recurso de apelación que nos ocupa fue interpuesto únicamente a favor de **LUIS VARELA**, **DEMETRIO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ y LUIS ANTONIO CÓRDOBA**, esta Sala se limitará a examinar los detalles de la ocurrencia de los hechos investigados, solo en cuanto dicen relación con la posible responsabilidad de los recurrentes; omitiendo así abundar en detalles sobre la participación de los otros sindicados que no apelaron del llamamiento a juicio.

De fojas 1345 a 1349 del sumario se lee la declaración que rindiera **BAUDILIO JORDAN SANTOS**, miembro de las Fuerzas de Defensa que laboraba en el aeropuerto de Las Lajas para la fecha de marras, en donde manifiesta que vió pasar dos autos, uno de los cuales tenía la descripción del que estaba involucrado en el secuestro del Doctor ZÚÑIGA, por lo que salió en dirección al aeropuerto para identificar a las personas y a los vehículos, pero en el camino se cruzó con un carro blanco tipo jeep de doble tracción, en el cual viajaba el Sargento **POLANCO** y un Cabo posiblemente de apellido **FRANCO**. El Sargento **POLANCO** bajó el vidrio del auto y después que **JORDAN SANTOS** le indicara que estaba asignado a cuidar el aeropuerto, le dijo: "ya tu sabes, no has visto nada, de nada o sino te atienes a las consecuencias". Sigue narrando este testigo que,

> "como al mes o mes y medio, me citaron al G-2 de David, me atendió el Capitán Palé que no recuerdo su nombre y me condujo directamente a la oficina del Mayor Papo Córdoba y éste me interrogó sobre lo que yo había visto el 21 de agosto de 1985 y yo le dije la verdad o sea que había visto al Sargento POLANCO y a otra unidad de apellido Franco y el mayor se mostro (sic) disgustado y me dijo, 'eso no lo digas en ningún lado más y si te llaman tu no sabes nada o ya sabes lo que te puede pasar', esto lo tomé como una amenaza directa, ... Córdoba me habló fuerte, con el tono de ellos, bravo, también noté que a partir de esa fecha, me tenían marginado, por esos campos por allá y era turno tras turno y esa situación no se la comenté a nadie debido a lo amenazado que me encontraba."

Por otro lado, **HERNANDO MARCUCCI ATENCIO** (fs. 568-569; 1660-1663) declaró ser dueño del vehículo Mitsubishi Lancer Tredia, tipo sedan, cuatro puertas, vidrios ahumados, color gris, que presumiblemente fue el utilizado en los delitos

investigados. **MARCUCCI ATENCIO** explicó que dicho automóvil se lo alquiló al señor ALGIS ó BELGIO CASTRO, como parte de su actividad comercial de alquiler de automóviles, pero que dicho sujeto nunca le devolvió el vehículo, por lo cual puso una denuncia ante las autoridades, y fue encontrado abandonado en Mata del Nance, Corregimiento de Las Lomas por agentes del G-2, quienes lo trasladaron al Cuartel de David y no se lo entregaron sino hasta después del secuestro del Doctor ZÚÑIGA. Al respecto, **JUAN ANTONIO ARJONA VACA** (fs. 2227-2232) indica que el aludido vehículo Mitsubishi Lancer lo usaba el G-2 de Chiriquí que se lo habían decomisado a HARMODIO MARCUCCI ATENCIO, dueño de Auto Class, S. A. También afirma que cuando tuvo conocimiento del secuestro del doctor ZÚÑIGA supo que se trataba del mismo vehículo y que posteriormente lo mantuvieron estacionado dentro del Cuartel.

DEMETRIO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ (A) PALÉ, encargado del S-2 en Chiriquí para la fecha que nos ocupa, en indagatoria rendida el 27 de febrero de 1992, a pregunta que se le hiciera respecto al automóvil Mitsubishi Lancer, color gris del año 1985, vidrios ahumados, de cuatro puertas, que permanecía siempre estacionado frente a la oficina del S-2, declaró:

> "Ese era mi carro y permanecía estacionado allí en frente de la oficina del S-2, siempre permanecía allí estacionado." (F. 1618).

No obstante, se retracta líneas adelante e indica que el auto aludido era de su propiedad, y que no era gris, sino blanco y agrega que nunca fue utilizado para realizar acción ilícita alguna. Aclara igualmente que "todas estas cosas han venido, después de haber dicho la verdad sobre el caso Spadafora y en donde directamente dijimos que González había matado a dicho señor porque él mismo nos lo confesó, he allí que sale ahora que el carro Mitsubishi gris que estaba parado frente a la oficina del S-2".

Consta también en el sumario que fue **DEMETRIO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ** quien envió al Sargento POLANCO y al Cabo FRANCO a que investigaran lo sucedido al Doctor ZÚÑIGA (ver fojas 859 y 993).

El 18 de noviembre de 1992, el Doctor MAURO ZÚÑIGA, presentó formal denuncia ante la Fiscalía Superior del Segundo Distrito Judicial, contra el señor **LUIS VARELA**, quien en ese momento fungía como Jefe de Homicidios de la Policía Técnica Judicial, y a quien identificó, al verlo en una noticia de televisión, como el sujeto que conducía el vehículo en el cual fue transportado y torturado el día 21 de agosto de 1985. El Doctor ZÚÑIGA afirmó que reconoció a **LUIS VARELA** porque el día del secuestro, éste miraba para atrás frecuentemente, se reía burlonamente y fue quien preguntó a los otros dos individuos si ya él (ZÚÑIGA) estaba muerto. El ofendido indica que la única diferencia es que para esa época VARELA no usaba bigotes y al momento de reconocerlo sí.

Al rendir indagatoria, **LUIS ALBERTO VARELA RUDAS**, negó los cargos que le formula el doctor ZÚÑIGA, alegando que para dicha fecha, si bien se desempeñaba como Secretario del Mayor **CÓRDOBA**, se encontraba viajando en compañía de su concubina **BUENAVENTURA MORALES**, la empleada y sus dos hijos, hacia la ciudad capital, para cumplir con una orden del Tutelar de Menores. Con lo anterior coinciden **EVILA FUENTES CASTILLO DE VARELA (fs.2237-2242)**, **SOFÍA RUDA DE VARELA (fs.2243-2245)**, **MARCO ANTONIO VARELA RUDA (fs. 2246-2248)**, **y BUENAVENTURA MORALES SÁNCHEZ** (fs. 2384-2387). No obstante, **ROBERTO BONILLA PITTI y ANA LICEA ROMERO**, ante señalamiento que hiciera este imputado de haberle pedido un favor al primero y haber encargado la casa a la segunda el día 21 de agosto de 1985, dicen no recordar haber visto a **LUIS ALBERTO VARELA** para esa fecha. VARELA indicó que para ese entonces no usaba bigotes, coincidiendo con la identificación del doctor ZÚÑIGA.

En diligencia de careo, imputado y ofendido mantienen sus dichos; el primero en que viajó a la ciudad de Panamá ese día como a la una y media (1:30 p. m.) o dos de la tarde (2:00 p. m.); y el segundo en que nunca se le iba a olvidar su rostro y su cara y que se trata de la misma persona que condujo el vehículo en que se le intentó asesinar (fs. 2214-2220).

JOSÉ ABDIEL DE GRACIA ARENAS y ELIÉCER GONZÁLEZ BONILLA declaran que **LUIS VARELA** era uno de los hombre de confianza del Mayor **CÓRDOBA** y que tenía a su cargo el manejo de informaciones, tanto documentales como telefónicas, las cuales eran obtenidas a través de intervenciones que se realizaban desde el lugar conocido como "El Bunker", en donde laboraba el señor VARELA. En el mismo sentido declara el Licenciado **RODRIGO MIRANDA MORALES** (fs. 2362-2368), cuando indica haber conocido a **LUIS VARELA** cuando éste laboraba en las Fuerzas de Defensa y "formaba parte de un grupo especial de tareas, de carácter represivo" que organizó el Mayor CÓRDOBA y que luego se conoció como F-8 y que fueran autores de crímenes, atentados y violaciones a los derechos humanos en la Provincia de Chiriquí. **MIRANDA MORALES** afirma que **LUIS VARELA** era "uno de los más allegados subalternos de Córdoba y para poder trabajar con un individuo que se caracterizó por sus métodos brutales y por su despiadada crueldad como fue Luis A. Córdoba, había que tener también similares cualidades.".

Para resolver el presente recurso hacemos las siguientes consideraciones.

De lo hasta aquí examinado, se colige que, en efecto, el 21 de agosto de 1985 se cometieron contra el Doctor MAURO JOSÉ ZÚÑIGA los delitos de tentativa de homicidio, contra la Libertad Individual y robo. El primero y más grave de estos delitos, el homicidio en grado de tentativa, así como la clara intención de darle muerte al doctor ZÚÑIGA, se desprende de los múltiples golpes inflingidos en su anatomía y de sus propias declaraciones, cuando manifiesta:

> "Yo no tenía la menor duda de que los captores me iban a ejecutar, ellos me dijeron que me iban de descuartizar y en efecto empezaron a cortarme por las orejas y en la región posterior del tronco. Me amenazaron que me iban a tirar de un helicóptero, lo que me hizo recordar al Padre HÉCTOR GALLEGOS, medieron tanta cantidad de golpes que pensé que era a través de este medio que me iban a matar, y yo empecé a prepararme para ese evento de tal suerte, que logré un estado de máximo relagamiento (sic) al punto que no expreaba ninguna manifestación de dolor. En un momento escuché a unos de mis captores preguntar si yo estaba muerto y yo permanecía inmóvil ante todas las agresiones de ellos." (F. 1238)

> "Los captores tenían el cuidado de taparme los oidos (sic) cuando el señor Varela se comunidaba por la radio con otra estación (sic) Recuerdo que en una ocasión cuando yo logré el estado de máxima relajación, que el señor Luis Varela que conducía el automovil (sic) preguntó si ya yo estaba muerto, a lo que le contestaron los otros dos, que aun no y siguieron golpeándome." (f. 2054).

El Doctor CARLOS AROSEMENA NAVARRO, certifica que al momento de ingresar al Hospital Regional de David, el Doctor MAURO ZÚÑIGA presentaba el siguiente diagnóstico:

> "1. Traumatismos múltiples.
> 2. Conmoción Cerebral.
> 3. Heridas cortantes en ambos pabellones auriculares; y en región occipital izquierda.
> 4. Heridas superficiales cortanes múltiples en región dorso lumbar.
> 5. Observación por fractura de arco posterior de la 10ª costilla izquierda." (F. 172).

Por otro lado, el examen médico practicado a la víctima, por parte del Doctor JOSÉ HERRERA V., Médico Forense Auxiliar, reveló lo siguiente:

> "... Politraumatismos diversos que consisten en herida cortante suturada en región parieto occipital izquierda de 4 cm. de longitud. Herida cortante en región retroauricular derecha de 3 cm. de longitud. Hematomas y escoriaciones a nivel de columna cervical, en región lumbo sacra, en todo el torax posterior y anterior. Escoriaciones lineales en el torax posterior paralelas de 23, 12, 7 y 8 cms. de longitud respectivamente,(sic) Presentaba escrito

> aparentemente con tinta de bolígrafo a nivel del torax posterior y abdomen posterior lo siguiente "F E 8 TERRORISTA" Y "M O E" y algunas otras letras ya borrosas." (F. 138).

Respecto a cuando se configura la tentativa de homicidio, esta Sala se ha pronunciado con anterioridad:

> "Las múltiples lesiones producidas al infante que van desde fractura del aspecto externo de la 3ª., 4ª., 5ª., 6ª., 7ª., 8ª. y 9ª., costilla izquierda, con callo óseo antiguo a nivel de las 6ª., y 7ª., sumado a ello todas las cantidades de laceraciones y excoriaciones en tronco, extremidades, cuello y cabeza, nos llevan a compartir el criterio de la recurrente en el sentido de que hubo más que un acto accidental de caída de la cama, pues **la severidad de las lesiones demuestran la intención de causarle la muerte al menor.**". M. P. AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL. FEBRERO 28 DE 1992. (Lo resaltado es nuestro).

La cantidad de golpes, escoriaciones y heridas cortantes que recibió el doctor ZÚÑIGA evidencian claramente que la intención de sus captores no era otra sino la de causarle la muerte. Ello también está comprobado por los cuestionamientos que hiciera uno de ellos sobre si ya estaba muerto, y la respuesta negativa de los otros dos que reanudaron inmediatamente la tarea de golpearlo, con la clara intención de acabar con su vida.

En cuanto al delito contra la Libertad Individual, éste se encuentra comprobado igualmente, con las declaraciones de las personas presentes en el Restaurante QUO VADIS, al momento en que el Doctor ZÚÑIGA fuera sacado por dos sujetos armados, que según las descripciones de los testigos y la diligencias de reconocimiento, uno de ellos es **ELIÉCER RIVERA DE GRACIA** y el otro sería posiblemente **ADÁN PITTI GUERRA**, de quien el Tribunal estimó no se encuentra debidamente comprobada su participación en este ilícito y le sobreseyó provisionalmente.

Por otro lado, tenemos que el delito de robo se encuentra igualmente demostrado con el testimonio del propio ofendido, en el sentido de que fue despojado de su billetera de cuero, sus documentos personales, sus tarjetas de crédito, un par de botas acabadas de comprar y un reloj quarzo OMEGA, todo valorado aproximadamente en dos mil balboas (B/.2,000.00). De la propiedad y preexistencia de estos objetos dá fe el doctor **DIÓGENES AROSEMENA** (f.15-17).

Con relación a la vinculación de los recurrentes con la comisión de los ilícitos, esta Sala estima necesario hacer las siguientes consideraciones.

En lo que al ex-Mayor **LUIS ANTONIO CÓRDOBA (A) PAPO**, se refiere, el hecho de ser el Jefe de la Zona Militar de Chiriquí, de la cual formaba parte el S-2, es un indicio suficientemente vinculante de que este sindicado tenía pleno conocimiento de la acción ilícita que sus subalternos habían llevado a cabo, y por ello buscó impedir por todos los medios que ello saliera a la luz pública.

La aseveración que hace la defensa de CÓRDOBA, en el sentido de que el Tribunal ha hecho una valoración subjetiva involucrándolo en un hecho del cual no es parte ya que no existe en el expediente prueba alguna de su participación, queda descartada ante la reveladora declaración de **BAUDILIO JORDAN SANTOS** que señala a CÓRDOBA como la persona que le amenazó para que no dijera nada de lo que había visto el día 21 de agosto de 1985.

No puede el juzgador, en casos como el presente, ignorar la situación política imperante en el país a esa fecha; la condición de la víctima de ser un dirigente político y gremial de la oposición, y la labor que realizaba al momento de ser privado de su libertad. Tampoco escapa a esta Sala que el Mayor CÓRDOBA es señalado como la persona que coordinó la operación de que fue víctima MAURO ZÚÑIGA, pues una acción como esa no podía ser llevada a cabo por propia iniciativa de sus subordinados, menos tratándose de un sujeto tan conocido y las

consecuencias políticas que ello podría producir entre los opositores al régimen.

Lo anterior constituye, a nuestro parecer, indicios suficientes para que el señor **LUIS ANTONIO CÓRDOBA** sea llamado a responder en juicio, en donde se determine si efectivamente participó o no en los ilícitos que se investigan.

Contra **DEMETRIO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ (A) PALÉ**, milita también la declaración de **BAUDILIO JORDAN SANTOS**, quien afirma que fue RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ quien lo citó a las oficinas del G-2 en David, lo llevó para que se entrevistara con el Mayor CÓRDOBA y estaba presente cuando éste último lo amenazó para que no dijera nada de lo que había visto en el aeropuerto de Las Lajas el día de marras.

También está comprobado que para esa época era quien tenía el control sobre el automóvil Mitsubishi Lancer involucrado en los ilícitos, y así lo reconoció en su declaración indagatoria, aunque también haya dicho que el color del auto de su propiedad no era gris sino blanco, lo cual en nuestra opinión es dudoso, ya que el propietario del vehículo afirma que el mismo se encontraba estacionado en las oficinas del S-2 en David (del cual era RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ el Jefe) y que no le fue entregado sino hasta mucho después del secuestro del doctor ZÚÑIGA.

Las opiniones vertidas respecto a la situación política y la autoridad que dentro de las Fuerzas de Defensa ejercía el Mayor CÓRDOBA son igualmente aplicables a **DEMETRIO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ**, dado el hecho de que los autores materiales eran también sus subordinados y el vehículo utilizado fue el que él mismo señalara como de su propiedad. Un dato revelador de que los autores materiales no actuaron por propia iniciativa sino que alguien les daba instrucciones, lo son las comunicaciones que por radio mantuvieron en varias ocasiones mientras la víctima permaneció en el vehículo.

Estimamos que los indicios que vinculan a este imputado con los delitos de que trata este sumario, son suficientes para que un jurado de conciencia decida si le cabe o no responsabilidad sobre ellos.

Esta Sala comparte el criterio del Tribunal a-quo respecto a **LUIS ALBERTO VARELA RUDAS**, en el sentido de que se debe abrir causa criminal en su contra por existir indicios suficientes y por haberlo señalado el Doctor ZÚÑIGA como el conductor del vehículo en el que fuera privado de su libertad ilegalmente y torturado.

Si bien es cierto que **VARELA RUDAS** niega la comisión de los delitos que se le imputan, la mayor prueba en su contra lo es el reconocimiento que de él hiciera la víctima al verlo en una noticia de televisión, y posteriormente, en diligencia de careo, al mantener los cargos en su contra.

Los testimonios que, respecto al viaje y estadía de **VARELA RUDAS** en la ciudad capital para el 21 de agosto de 1985, dieran sus familiares más cercanos deben ser considerados, tal como lo hizo el a-quo, como sospechosos en vista del parentesco que les une; máxime cuando las otras personas que en su indagatoria señaló este imputado como testigos no recuerdan haberlo visto para esa fecha.

Lo manifestado por el Licenciado RAMSEY MORALES en el sentido de que **FRANCISCO ELIÉCER BONILLA** se ha retractado de los señalamientos que hizo contra **LUIS VARELA RUDAS**, carece de fundamento, pues BONILLA nunca hizo señalamientos contra **VARELA RUDAS**, sino contra **ADÁN PITTY GUERRA y ELIÉCER RIVERA DE GRACIA.**

En cuanto a la prescripción que alega el aludido jurista, debe la Sala indicar que el artículo 95 del Código Penal es claro al establecer:

> "Artículo 95: La prescripción de la acción penal se interrumpe por el auto de enjuiciamiento. ...".

De modo que, habiéndose emitido ya un auto de llamamiento a juicio, se encuentra interrumpida la prescripción a que alude la defensa.

La defensa de **VARELA RUDAS** ha manifestado que a su defendido se le

instruyó, violando las normas de procedimiento, un tomo o sumario aparte de los otros sindicados. Respecto a esto, es necesario indicar que no es cierto que a **VARELA RUDAS** se le haya instruido sumario aparte, pues si se observa con detenimiento la investigación, se evidencia que fue cuando estaba pendiente la calificación de las sumarias, que el Doctor ZÚÑIGA presentó la denuncia contra **VARELA RUDAS**, de modo que la investigación que a continuación se realizó, básicamente se limitó a tratar de determinar la responsabilidad que le pudiera caber a este sindicado, puesto que respecto a los demás ya el agente del Ministerio Público había agotado la instrucción. De cualquier modo, no es del todo cierto que el tomo quinto (V) del sumario, que abarca de la foja 2040 a la 2709 trate únicamente de la participación de **VARELA RUDAS** en los ilícitos investigados, sino que allí se encuentran otras piezas procesales no relacionadas directamente con él.

Por lo anterior, estimamos que respecto a **VARELA RUDAS** existen suficientes indicios para que se determine en juicio público si le cabe o no responsabilidad en los delitos imputados.

El Licenciado MARCO TULIO HERNÁNDEZ ha llamado la atención sobre la competencia del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial para conocer del presente proceso. Al respecto, la Sala estima necesario hacer algunas consideraciones.

La competencia, en el presente caso, se ha determinado por la calidad que tienen los delitos investigados, de ser conexos. El fenómeno de la conexidad se presenta cuando existen delitos que aparecen ligados, unidos, concatenados de tal forma que se hace necesario investigarlos y resolverlos en un mismo proceso en aras de la economía procesal y una adecuada dosificación de la pena.

El artículo 2001 del Código Judicial enumera los supuestos en que se dan los delitos conexos, mientras que el artículo 2002 indica qué Tribunales son competentes para conocer de ellos. De ambos artículos se desprende que el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial es el competente para conocer de estos delitos, por ser:

-el de mayor jerarquía;
-el que primero aprehendió el conocimiento de los delitos (a prevención). Sobre esto, nos dice LONDOÑO JIMÉNEZ en su *Tratado de Derecho Procesal Penal*:

> "... esta competencia (a prevención) surge cuando el hecho punible se haya realizado en varios sitios o en lugar incierto o en el extranjero, en cuyo caso conocerá del respectivo proceso el juez competente por la naturaleza del hecho, del territorio en el que primero se formule la denuncia o en el que primero se haya iniciado la investigación." (P. 167).

Consta en autos que fue en la Fiscalía Primera del Circuito de Veraguas, donde se presentó la denuncia de los hechos de que fue víctima el doctor MAURO ZÚÑIGA, de modo que la circunscripción territorial es la del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial que abarca las provincias de Veraguas y Coclé.

Por todo lo anterior, estimamos necesario confirmar el llamamiento a juicio de **LUIS ALBERTO VARELA RUDAS**, **DEMETRIO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ (A) PALÉ y LUIS ANTONIO CÓRDOBA (A) PAPO**, por encontrarse cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 2222 del Código Judicial para que los imputados de haber cometido un delito puedan ser llamados a juicio.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA en todas sus partes el Auto de 6 de septiembre de 1995, emitido por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, mediante el cual se ABRE CAUSA CRIMINAL contra LUIS ALBERTO VARELA RUDAS, DEMETRIO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ (A) PALÉ y LUIS ANTONIO CÓRDOBA (A) PAPO, por los delitos de homicidio en grado de tentativa, robo y contra la Libertad Individual en perjuicio del Doctor MAURO JOSÉ ZÚÑIGA.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SUMARIAS SEGUIDAS A LUIS GABINO DE LA ROSA RODRÍGUEZ, MARCOS ARAÚZ MORENO, ALEX ANTONIO LACAYO FONA Y LIBRADO ZAMBRANO BARRIOS POR LOS DELITOS DE HOMICIDIO, LESIONES PERSONALES, ROBO A MANO ARMADA Y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR EN PERJUICIO DE AGAPITO RIVERA AVILÉS (OCCISO), DOMITILA HERRERA TUÑÓN Y LUIS MIGUEL RIVERA HERRERA (LESIONADOS). MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de apelación ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Auto de 18 de septiembre de 1995 (fs. 517 a 529), proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante el cual se abre causa criminal contra MARCOS ARAÚZ MORENO (a) "MARQUITOS" y LUIS GABINO DE LA ROSA RODRÍGUEZ (a) "GABINITO"; y se sobresee de manera provisional a LIBRADO ZAMBRANO BARRIOS, y de manera definitiva a **ALEX ANTONIO LACAYO FONA**, por los delitos de homicidio, lesiones personales, robo a mano armada y asociación ilícita para delinquir, cometidos en perjuicio de AGAPITO RIVERA AVILÉS (occiso), DOMITILA HERRERA TUÑÓN y LUIS MIGUEL RIVERA HERRERA (lesionados), en horas de la madrugada del 16 de agosto de 1991, en la Comunidad de Caimitillo Abajo, Corregimiento De Obaldía (residencia N° 11), Distrito de La Chorrera, Provincia de Panamá.

El licenciado **Hermes Alvarado Ortega**, en su condición de acusador particular, presentó la sustentación de la apelación (fs. 549 a 551), con respecto al sobreseimiento definitivo de **ALEX ANTONIO LACAYO FONA (a) "GORDO"**, toda vez que éste fue señalado reiteradamente como partícipe en el crimen del señor AGAPITO RIVERA, por los señores GESTEÉ ALBERTO AGUILAR MARTÍNEZ (fs. 376-377 y fs. 421 a 426), GIL CRISTÓBAL HERRERA AMAYA (fs. 186 a 187) y MARCO ARAÚZ MORENO (a) "MARQUITOS" (fs. 195 a 199 y fs. 338 a 340). También, el recurrente alegó que el Departamento de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia, no ha certificado si **ALEX ANTONIO LACAYO FONA** se encontraba detenido para la fecha del crimen.

Finalmente, el recurrente alegó que el día 27 de mayo de 1994, solicitó a la Fiscalía Cuarta Superior que se tomara declaración, entre otras personas, al señor TONY BARRÍA, quien reside en el Distrito de La Chorrera, Corregimiento de Barrio Colón, y puede dar fe de que el señor **ALEX ANTONIO LACAYO FONA**, sí estaba en La Chorrera para la fecha del precitado homicidio, ya que según el recurrente, después de la invasión norteamericana a Panamá, una gran cantidad de detenidos escaparon y muchos registros y controles no fueron celosamente atendidos.

Por otro lado, el Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, Licenciado DIMAS E. GUEVARA G., mediante contestación de traslado N° 40 de 14 de mayo de 1996 (fs. 555 a 558), en razón de la apelación bajo estudio, consideró que debe mantenerse el Auto recurrido, en base a lo siguiente:

> "... tal y como se aprecia en nuestra vista 136 de 21 de agosto de 1995 atendible a fojas 510-512, donde se deja clara la situación del señor ALEX ANTONIO LACAYO FONA (a) "GORDO", con la incorporación de las notas de los diferentes centros carcelarios como la MODELO, COIBA, LA CHORRERA visibles a fojas 362, 418, 427 respectivamente, los cuales dejan sentado claramente que para la fecha del 16 de agosto de 1991, el señor ALEX ANTONIO LACAYO FONA (a) "GORDO", se encontraba detenido, por lo cual no pudo haber participado en los

> referidos ilícitos que se le imputaban, situación que ha sido aclarada en diferentes etapas de instrucción, ampliación e incluso en agotamiento, lo cual hizo variar la situación del prenombrado LACAYO FONA, a quién (sic) en un inicio en nuestra primera opinión Fiscal se le solicitó APERTURA DE CAUSA CRIMINAL." (F. 557).

Por su parte, el licenciado **Danilo Montenegro**, Defensor de Oficio, en oposición al recurso de apelación presentado por el representante de la acusación particular, solicitó también la confirmación del Auto recurrido, concluyendo que para la fecha del 16 de agosto de 1991, **ALEX ANTONIO LACAYO FONA** se encontraba en la Isla Penal de Coiba; en tal sentido, señaló que la solicitud de llamamiento a juicio hecha por el apelante se fundamenta en los testimonios de GESTEÉ ANTONIO AGUILAR MARTÍNEZ, CRISTÓBAL HERRERA AMAYA y MARCOS ARAÚZ MORENO; y se le pretende restar valor a documentos oficiales expedidos por los Directores de las Cárceles de La Chorrera, la Modelo y la Isla Penal de Coiba, que dan fe de que **ALEX ANTONIO LACAYO FONA** para la fecha del 16 de agosto de 1991, se encontraba detenido. Además, el Defensor de Oficio de **ALEX ANTONIO LACAYO FONA**, en su escrito de oposición, señaló:

> "Sobre las pruebas testimoniales aducidas por el representante de la acusación particular debemos resaltar lo siguiente: GIL CRISTÓBAL HERRERA AMAYA (fs. 186-187) es un testigo referencial y cita como fuente de su información a MARCOS ARAÚZ (A) MARQUITO (SIC); refiere que éste le informó sobre un hecho que cometió en el año 91, sin recordar el mes, en donde además de MARQUITO participaron **Gabinito**, **ALEX LACAYO y 'el gordo de la (sic) herradura'**. Este testimonio carece de fuerza legal de conformidad con el Código Judicial.
>
> JOSÉ ALBERTO AGUILAR MARTÍNEZ (fs. 276 y 421) no formula cargo alguno contra **ALEX ANTONIO LACAYO FONA** y hace alusión a los hechos de manera referencial también. Y sobre MARCOS ARAÚZ MORENO recordemos que este es uno de los principales involucrados y refiere que en el hecho participaron él, **Gabinito De La Rosa y 'gordo'** dando a entender que GORDO es uno de los **LACAYO**; pero obsérvese que sobre ésta declaración el propio MARCOS ARAÚZ MORENO a fs. 339 señala que fue dada bajo coacción por parte de un Licenciado Salcedo, quien además le prometió dejarlo en libertad (fs. 195 y 338).
>
> Se desprende también de éstas (sic) declaraciones que existen dos personas apodadas 'Gordo' y que ambos viven en el Sector de La Herradura, uno es al parecer ALEX LACAYO y el otro 'el gordo de La Herradura' quien posee un carro de color chocolate marca Mustang (fs. 186), y se le describe como traficante de drogas, es gordo, cara redonda, con barba en la quijada, cree que le hace falta un diente, pelo duro color canela, ojos negros y tiene bigotes (fs. 423). Esta descripción la da JOSÉ ALBERTO AGUILAR MARTÍNEZ y obviamente no se refiere a ALEX LACAYO pues a éste lo conoce desde hace cuatro a cinco años por ser hermano de FANOR LACAYO quien estuvo con él en la escuela (fs. 421).
>
> Como es fácil apreciar tales testimonios carecen de fuerza, para contradecir la contundencia de los informes expedidos por tres centros penitenciarios del país, los cuales certifican que ALEX LACAYO FONA estaba preso para la fecha de este **HOMICIDIO.** Obsérvese que el informe de la cárcel pública de La Chorrera coincide con el del centro penal de Coiba, donde el primero certifica que **ALEX** fue trasladado a Coiba el 3 de mayo de 1991 y el segundo certifica que ingresó a Coiba al día siguiente o sea el 4 de mayo de 1991. Por otro lado el de la Cárcel Modelo coincide también con el de Coiba sobre la fecha de salida ya que viajó a la Cárcel Modelo el 7 de noviembre del 91, y ésta cárcel a su vez le otorgó libertad 8 días después es decir el 15 de noviembre de 1991 (fs. 362,418 y 427)." (Fs. 559-560).

En cuanto a lo argumentado por el recurrente sobre la situación que se dio

después de la invasión norteamericana, con respecto a los registros de detenidos, el Defensor de Oficio manifestó:

> "Esto podríamos aceptarlo si estuviéramos hablando de finales del año 89, incluso durante el año 1990, pero no del año 1991 cuando esta situación estaba perfectamente controlada." (F. 561).

ANTECEDENTES:

Mediante Vista Penal N° 39 de 28 de febrero de 1992 (fs. 162 a 164), la Fiscalía Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial, solicitó que se dictara Auto de sobreseimiento provisional a favor de LIBRADO ZAMBRANO BARRIOS, por no haberse podido obtener indicio alguno que permitiera el esclarecimiento del delito de homicidio cometido en perjuicio de AGAPITO RIVERA AVILÉS, con relación a los autores del mismo; y, solicitó que se investigaran por separado las lesiones sufridas por DOMITILA HERRERA TUÑÓN y MIGUEL RIVERA, y el robo efectuado en la residencia de la familia RIVERA.

En Resolución de 28 de mayo de 1992 (fs. 167 a 178), el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, sobreseyó de manera provisional a LIBRADO ZAMBRANO BARRIOS, por carecer la encuesta del aspecto subjetivo, es decir, de los elementos que incriminen a sujeto alguno en la ejecución del hecho de sangre, por cuanto que de la encuesta no se desprenden mayores elementos vinculantes en su contra; sin embargo, la decisión adoptada no significa la conclusión definitiva de la causa, porque no hace tránsito a cosa juzgada, y por ser temporal, permite en un futuro la reapertura del proceso, dentro de la vigencia de la acción penal, siempre y cuando logren obtenerse elementos probatorios que así lo ameriten.

Posteriormente, se solicitó la reapertura del sumario seguido a "el" o "los" responsables del homicidio en perjuicio de AGAPITO RIVERA AVILÉS, mediante Vista N° S/N de 30 de septiembre de 1993 (fs. 212-213), de la Fiscalía Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial, por haberse recibido un cuaderno contentivo de diligencias adelantadas en la Agencia de la Policía Técnica Judicial de La Chorrera en torno a la muerte del señor AGAPITO RIVERA AVILÉS, de las cuales se desprende la vinculación de los sujetos MARCOS ARAÚZ MORENO (a) "MARQUITOS", GABINO DE LA ROSA (a) "GABINITO" y **ALEX LACAYO (a) "GORDO"**, con el hecho de sangre antes referido.

En este orden, mediante Resolución de 21 de octubre de 1993 (fs. 216 a 219), el Segundo Tribunal Superior de Justicia, conforme a lo establecido en los artículos 2213 y 2214 del Código Judicial, declaró que en el negocio bajo examen no estaba prescrita la acción penal y decretó la apertura de las presentes sumarias.

Mediante Resolución de 16 de diciembre de 1993, la Fiscalía Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá (fs. 227 a 232), dispuso mantener la orden de detención preventiva de LUIS GABINO DE LA ROSA RODRÍGUEZ (A) "GABINITO", MARCOS ARAÚZ MORENO (a) "MARQUITOS" y **ALEX LACAYO (a) "GORDO"**. Y, mediante Resolución de 17 de diciembre de 1993 (fs. 233-234), dicha Agencia del Ministerio Público ordenó tomarle declaración indagatoria a los prenombrados.

Consta en el expediente (fs. 250 a 254), el libelo de acusación particular presentada por el licenciado **Hermes Alvarado Ortega**, en representación de GENARINA RIVERA HERRERA, hija del hoy occiso, contra MARCOS ARAÚZ MORENO, LUIS GABINO DE LA ROSA RODRÍGUEZ y ALEX ANTONIO LACAYO FONA, por los delitos de homicidio doloso cometido en perjuicio de AGAPITO RIVERA AVILÉS, asalto a mano armada y asociación ilícita para delinquir. Se ordenó la corrección de dicha acusación particular, mediante Resolución de 27 de octubre de 1993 (fs. 258 a 261), del Segundo Tribunal Superior de Justicia. En tal virtud, el licenciado **Hermes Alvarado Ortega**, en representación de GENARINA RIVERA HERRERA, LUIS MIGUEL RIVERA HERRERA y DOMITILA HERRERA TUÑÓN, presentó la corrección del libelo acusatorio (fs. 263 a 269), incluyendo además de los delitos de homicidio doloso, asalto a mano armada y asociación ilícita para delinquir, el delito de lesiones personales, contra los precitados. En este orden, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante Resolución de 9 de diciembre de 1993 (fs. 272 a 273),

admitió el libelo acusatorio mencionado.

Mediante Vista N° 114 de 29 de julio de 1994 (fs. 381 a 394), el Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, solicitó que se abriera causa criminal contra MARCOS ARAÚZ MORENO (a) "MARQUITOS", **ALEX ANTONIO LACAYO FONA (a) "GORDO"** y LUIS GABINO DE LA ROSA RODRÍGUEZ (a) "GABINITO", y solicitó que se mantuviera el sobreseimiento provisional de LIBRADO ZAMBRANO BARRIOS, haciéndose la salvedad de que por haberse cumplido el término para el perfeccionamiento del sumario, conforme con el artículo 2060 del Código Judicial, no se le pudo tomar declaración al sospechoso CÉSAR LEYOS, quien fue señalado por JOSÉ ALBERTO AGUILAR MARTÍNEZ (fs. 376-377).

Mediante Resolución de 21 de septiembre de 1994 (fs. 398 a 407) y, posteriormente, mediante Resolución de 16 de junio de 1995 (fs. 484 a 494), el Segundo Tribunal Superior decretó la ampliación de las presentes sumarias. Y, mediante Vista N° 216 de 29 de diciembre de 1994, el Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial, Doctor MILCIADES A. MÉNDEZ V. (fs. 441 a 443), remitió nuevamente las sumarias al Segundo Tribunal Superior. En Resolución de 16 de junio de 1995, el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial (fs. 484 a 494), devolvió el expediente bajo estudio para el cumplimiento de las diligencias ampliatorias respectivas.

Luego, mediante Vista N° 136 de 21 de agosto de 1995 (fs. 510 a 512), el Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial, solicitó emitir un auto de sobreseimiento definitivo a favor de **ALEX ANTONIO LACAYO FONA (a) "GORDO"**, pues el día de los hechos, es decir, el 16 de agosto de 1991, **ALEX ANTONIO LACAYO FONA (a) "GORDO"** se encontraba detenido y, por lo tanto, no participó en el ilícito.

Obran como prueba en el sumario, luego de la ampliación llevada a cabo por los agentes del Ministerio Público, una serie de elementos probatorios los cuales señalaremos a continuación.

La comisión del hecho punible ha quedado acreditada en el proceso con el Certificado de defunción y la partida de defunción de AGAPITO RIVERA AVILÉS, expedida por la Dirección General del Registro Civil (fs. 121 y 158, respectivamente).

También constan en autos, la Diligencia de reconocimiento del cadáver de AGAPITO RIVERA (fs. 44-45), efectuada en la morgue del Hospital Nicolás A. Solano, quien falleció camino al Hospital Solano; y el Protocolo de necropsia N° 16-8-91, correspondiente a AGAPITO RIVERA AVILÉS, de 16 de agosto de 1991, de la Medicatura Forense de La Chorrera, suscrito por el doctor ALFREDO RODRÍGUEZ LAY (fs. 109 120), del cual se desprende que logró extraerse el proyectil durante la autopsia del señor AGAPITO RIVERA, y cuya parte pertinente transcribimos a continuación:

"CONSIDERACIONES MÉDICO LEGALES

> ... Las lesiones traumáticas externas fueron hechas en vida y ocasionadas por proyectil de arma de fuego en región precordial (orificio de entrada) y heridas tipo cortantes superficiales. La lesión de carácter mortal es la ubicada en la región precordial, el proyectil penetró delante-atrás (sic) y de arriba-abajo y en su trayectoria perforó a órganos (sic) vitales torácico (sic) (corazón y pulmón izquierdo) y abdominal (bazo). La lesión cardiaca produjo masiva hemorragia que le conllevó a la muerte por shock o choque. El disparo se realizó a corta distancia, se deduce por el anillo de fish u orificio de entrada; no hubo orificio de salida y se recuperó el proyectil.
>
> CAUSA DE MUERTE
>
> SHOCK HEMORRÁGICO
> -Perforación cardiaca por proyectil de arma de fuego." (F. 120).

A foja 41, consta el Oficio N° 1221 de 20 de agosto de 1991, suscrito por el Médico Forense Patólogo del Instituto de Medicina Legal, Doctor ALFREDO RODRÍGUEZ LAY, mediante el cual informó que del examen médico legal realizado en la persona de DOMITILA HERRERA TUÑÓN, se desprende que las lesiones fueron causadas con objeto contuso-contundente, que no pusieron en peligro la vida de la paciente, y se estimó una incapacidad definitiva por espacio de dos (2) semanas a partir del día del incidente. Luego, a foja 42, consta el Oficio N° 1242 de 21 de agosto de 1991, sobre el examen médico legal efectuado en la persona de LUIS MIGUEL RIVERA, de donde se colige que las lesiones fueron ocasionadas por el paso de proyectil de arma de fuego, que las lesiones no pusieron en peligro la vida del paciente, y se estimó una incapacidad provisional por espacio de ocho (8) semanas, a partir del día del incidente.

De fojas 52 a 54, constan croquis del lugar donde se dieron los hechos. Y, de fojas 55 a 66, constan vistas fotográficas de la parte exterior e interior de la residencia de la familia RIVERA, de los lesionados, LUIS MIGUEL RIVERA HERRERA y DOMITILA HERRERA, hijo y esposa del occiso -AGAPITO RIVERA AVILÉS-, respectivamente; del palo de aguacate donde fue encontrado el occiso; de la carretera que conduce hacia las afueras, por donde se fueron los asaltantes; del gallinero y del depósito de agua, ubicados a la orilla de la carretera.

Se realizó la Diligencia de inspección ocular a un vehículo a motor (vehículo marca Toyota, Land Cruser, matrícula N° 8C-13326, tipo pick-up, color blanco, con carrocería de color azul, año 1989) y a la residencia donde ocurrieron los hechos (fs. 47 a 51); y son visibles en el expediente las respectivas vistas fotográficas relacionadas con la diligencia de reconstrucción de los hechos (fs. 159 a 168), al igual que los Planos de la reconstrucción de los hechos (f. 156) y los documentos que prueban la propiedad del vehículo, como la certificación expedida por el Tesorero Municipal del Distrito de La Chorrera (fs. 71-72).

Se encuentran en autos, vistas fotográficas del vehículo del occiso donde los asaltantes escaparon después de cometidos los delitos (fs. 74 a 76).

Se encuentran en el sumario, los Oficios N (/) 44-5279 de 27 de abril de 1994 (fs. 342-343) y 44-52 80 de 28 de abril de 1994 (fs. 346-347), suscritos por la Médico Psiquiatra Forense del Instituto de Medicina Legal, Doctora NILDA SANTAMARÍA DE MEDINA, que se refiere a las evaluaciones médico sociales (fs. 344-345; y, fs. 348-349), efectuadas a **ALEX ANTONIO LACAYO FONA (a) "GORDO"** y LUIS GABINO DE LA ROSA RODRÍGUEZ (a) "GABINITO", de donde se desprende, entre otras cosas, que éstos no tenían alteradas sus facultades mentales al momento de ocurrir los hechos que se les imputan ni se enmarcan en las prerrogativas de los artículos 24 y 25 del Código Penal, por lo que psíquicamente son imputables, y ambos presentan tendencias de tipo psicopático antisociales, por lo cual no puede descartarse que tengan tendencia a mentir.

Consta a foja 350, la Nota N° DG-2771 de 12 de mayo de 1994, suscrita por el licenciado JAIME OCTAVIO ABAD E., Director General de la Policía Técnica Judicial, quien informó que **ALEX ANTONIO LACAYO FONA (a) "GORDO"** y LUIS GABINO DE LA ROSA RODRÍGUEZ (a) "GABINITO", se encuentran reseñados en los Archivos Criminales de dicha Institución con los números A-50065 y A-2164 ó A-46913, respectivamente. También, constan a fojas 351 y 352 fotografías de los mismos.

Y, a foja 308 del sumario se encuentra el Oficio N° 503 de 5 de abril de 1994, suscrito por el Fiscal Tercero Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, Licenciado ANDRÉS COLLADO MITRE, quien informó que en su despacho se instruyó sumario contra LUIS GABINO DE LA ROSA RODRÍGUEZ y **ALEX ANTONIO LACAYO FONA**, sindicados por el delito de homicidio cometido en perjuicio de CHONG YU CHOI, el cual fue remitido al Segundo Tribunal Superior para su calificación legal, acompañado de la Vista Fiscal N° 207 de 31 de diciembre de 1993, en la que se solicitó el sobreseimiento definitivo de los sindicados, cuyas copias autenticadas constan de fojas 309 a 324 del expediente.

Consta a foja 483, Carta de conducta N° 72-CPLJ-TS-CT de 5 de mayo de 1995, suscrita por el Director del Centro Penitenciario LA JOYA, Licenciado AZAEL P.

TSIMOGIANIS, que certifica que LUIS GABINO DE LA ROSA RODRÍGUEZ, en el tiempo que ha permanecido en dicho Centro Carcelario, ha demostrado un alto sentido de responsabilidad, disciplina e índices de resocialización, y que el mismo labora en la barbería desempeñándose a cabalidad. Además, se certifica que GABINO DE LA ROSA RODRÍGUEZ ingresó al Sistema Carcelario el día 7 de septiembre de 1993 y al Centro La Joya, el día 4 de mayo de 1994, totalizando veinte (20) meses de estar detenido.

Consta a foja 282 el historial policivo de MARCOS ARAÚZ MORENO, quien no registra antecedentes policivos ni penales. A fojas 297-298, se encuentra inserto el historial policivo de **ALEX ANTONIO LACAYO FONA**, quien estuvo arrestado veinte (20) meses por delito de hurto y fue sobreseído provisionalmente en otros delitos. Y, a fojas 299-300, consta el historial policivo de LUIS GABINO DE LA ROSA RODRÍGUEZ (a) "GABINITO", quien estuvo arrestado sesenta (60) días y, posteriormente, quince (15) días e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por delitos de hurto, y también fue sobreseído provisionalmente en otros delitos.

En la Diligencia de identificación realizada ante la Policía Técnica Judicial, por DOMITILA HERRERA TUÑÓN y LUIS MIGUEL RIVERA (f. 135), éstos no lograron identificar a persona alguna en los libros de delincuentes de la Sección de Archivos de Identificación de la Dirección de Criminalística, ni se pudo confeccionar un retrato hablado, por razón de la oscuridad existente al momento en que se dieron los hechos.

Durante las investigaciones, en una primera etapa, se recabaron diversos testimonios de las personas que se encontraban presentes en el lugar de los hechos, entre los que se encuentran, los informativos rendidos por DOMITILA HERRERA TUÑÓN, esposa del occiso (f. 4; -ampliación- fs. 5 a 8; -ratificaciones- fs. 78 a 82); LUIS MIGUEL RIVERA HERRERA, hijo del occiso (fs. 21 a 25; -ratificación- fs. 97 a 100); GENARINA RIVERA HERRERA, hija del occiso (fs. 14 a 16; -ratificación- fs. 90 a 92); JOSÉ REGINO JIMÉNEZ MORENO (fs. 9-10; -ratificación- fs. 83-84; -ampliaciones- fs. 128-129 y fs. 146-147); DIOMEDES REYNA RODRÍGUEZ (a) "JUNIOR"(fs. 11 a 13; -ratificación- fs. 85 a 87); RICARDO SALCEDO (fs. 17 a 20; -ratificación- fs. 93 a 96); TEODORO SÁENZ AGUILAR (a) "CHATO" (fs. 27 a 28; -ampliación- f. 29). De dichos informativos se desprende que, en horas de la madrugada del día 16 de agosto de 1991, varios sujetos desconocidos, fuertemente armados, asaltaron la residencia N° 11, ubicada en la Comunidad de Caimitillo Abajo, Corregimiento De Obaldía, Distrito de La Chorrera, Provincia de Panamá, apoderándose de B/.1000.00 en efectivo, prendas valoradas en la suma de B/.500.00, y un vehículo marca Toyota, Land Cruiser, estilo "pick up", hecho en el cual perdió la vida como consecuencia de un disparo con arma de fuego, el señor AGAPITO RIVERA AVILÉS, y donde resultaron lesionados su cónyuge DOMITILA HERRERA y su hijo LUIS MIGUEL RIVERA HERRERA.

También, se tomaron las declaraciones de LIBRADO ZAMBRANO BARRIOS (a) "TITO" (fs. 30 a 32; -indagatoria- fs. 140 a 145); JUAN VERGARA SAMANIEGO, concubino de la amante del occiso (fs. 33 a 34; -ratificación- fs. 106-107); y, CECILIA MARTÍNEZ, amante del occiso (fs. 35 a 37; -ratificación- fs. 103 a 105), quienes tampoco aportaron mayores indicios sobre los autores del hecho investigado.

Al rendir declaración jurada GIL CRISTÓBAL HERRERA AMAYA (a) "MARQUELDA", hermano de "MINERVA" (fs. 186-187), dio lugar a la reapertura del presente sumario, al hacer señalamientos contra los sindicados; así, pues, declaró que en el mes de abril de 1992 en su residencia en Altos de San Francisco, conocida como "la casa de madera", MARCOS ARAUZ (a) "MARQUITOS" y LUIS GABINO DE LA ROSA RODRÍGUEZ (a) "GABINITO", se encontraban narrando sus hazañas delictivas, y "MARQUITOS" dijo que en una ocasión él, **ALEX LACAYO**, que está detenido en La Chorrera, y un "GORDO" que vive por La Herradura, quien tenía un carro Mustang, color chocolate, intentaron asaltar un carro de reparto, pero no pudieron llevarlo a cabo. También, "MARQUITOS" -que vive en el sector de los Chorrillitos, calle principal- dijo que en el año 1991, por el sector de Cerro Cama, él, **ALEX LACAYO**, "GABINITO" -que vive por Guadalupe, y el "GORDO" de La Herradura, habían asaltado a un señor y se lo llevaron en su carro, dejándolo por Villa Carmen de

Capira, y después ellos se regresaron en el carro Mustang, color chocolate, del "GORDO" de La Herradura.

Por su parte, JOSÉ ALBERTO AGUILAR MARTÍNEZ (a) "CHECA" (fs. 376-377 y fs. 421 a 426), manifestó que en una ocasión escuchó a "MARQUITOS" contar el hecho anterior, diciendo que él, "GABINITO" y CESAR LEYOS -que reside en La Mitra y trabaja en Playa Leona-, fueron los que cometieron el hecho descrito en líneas anteriores, en el cual "GABINITO" le disparó a su pariente. JOSÉ ALBERTO AGUILAR MARTÍNEZ, manifestó que conocía a **ALEX LACAYO**, porque estaba en la escuela con su hermano FANOR LACAYO, y lo describe alto, con cara achinada, con un tigre en el pecho. También, señaló que a los que siempre veía en el carro Mustang era a LUIS GABINO DE LA ROSA, MARCOS ARAUZ y CÉSAR LEYOS, y que siempre manejaban CÉSAR LEYOS y "MARQUITOS", y nunca vio a **ALEX LACAYO** en ese carro. Dijo que había escuchado hablar del "GORDO" de La Herradura, y que según los comentarios de las demás personas éste se dedica al tráfico de drogas, y vive en La Herradura; y, que es gordo, cara redonda, con barba en la quijada, bigotes, pelo crespo, color canela y ojos negros.

ESMERALDA COLLAZO COMELY (A) "MILLIN" (fs. 188 a 190; -ampliación- f. 206) declaró, entre otras cosas, ser residente en La Chorrera, La Herradura, calle principal, casa #5311; y señaló que conocía a un sujeto apodado "**GORDO**", cuyo nombre es **ALEX LACAYO**, quien reside por el área de La Herradura, a quien le arrendaba una habitación, y quien se encontraba detenido en la Cárcel Pública de La Chorrera. Además, declaró que nunca había visto un carro Mustang, color chocolate, por los alrededores de su residencia.

MARCOS ARAUZ MORENO (a) "MARQUITOS" (fs. 195 a 198 y fs. 203 a 204; -ampliación- f. 199; -indagatoria- fs. 338 a 340), primeramente manifestó que el día de los hechos se encontró con "GABINITO" DE LA ROSA y un sujeto llamado "GORDO", que creía que era uno de los LACAYO, quienes querían cobrar un dinero en Caimitillo, y querían que les manejara el carro porque ellos no sabían manejar. Se dirigieron a La Herradura, y a un costado de la calle y de la residencia de la señora "MILLIN", estaba estacionado un carro color celeste, seis cilindros, de cambio, entonces, "GABINITO" le entregó las llaves y lo instó a manejar; en un lugar se bajaron "GABINITO" y "GORDO", quienes estaban armados, y él se quedó esperándolos en el carro con las luces apagadas, luego escuchó un disparo y dio la vuelta en el auto y cuando llegó a la calle principal dejó el carro y se fue. Después, "MARQUITOS" se retractó y manifestó que el inspector RUBÉN SALCEDO lo indujo a declarar lo anterior. Esto último fue desvirtuado, en virtud de las ratificaciones de los informes y las declaraciones de los agentes de la Policía Técnica Judicial, a saber: Detective TEODOLOINDA DEL CARMEN MARTÍNEZ PÉREZ (fs. 365-366); Inspector RUBÉN SALCEDO (fs. 367 a 370); Detective EDDIE GILBERTO PÉREZ ACOSTA (fs. 371 a 373); y, CAMILO FERNÁNDEZ CASTILLO (fs. 378-379).

Constan también en autos las declaraciones rendidas por ISLANDER MORALES ORTEGA (fs. 433 a 435), y CÉSAR ARTURO MARENGO GUERRERO (fs. 436-437), las cuales no aportan mayores datos a la investigación.

LUIS GABINO DE LA ROSA RODRÍGUEZ (a) "GABINITO", ahijado del occiso (-informativo- f. 202; -indagatoria- fs. 244 a 246 y fs. 292 a 296) y **ALEX ANTONIO LACAYO FONA (a) "GORDO"**, residente en La Herradura N° 2, La Chorrera (-indagatoria- fs. 247 a 249 y fs. 301 a 306), niegan ambos toda vinculación con los hechos imputados, exceptuando este último que se encontraba detenido en la Isla Penal de Coiba para el día en que se suscitaron los hechos.

Luego del análisis de los argumentos presentados por el recurrente, la Sala pasará a decidir la alzada en los términos previstos en el artículo 2428 del Código Judicial, es decir, que tendrá conocimiento del proceso, sólo sobre los puntos de la Resolución a que se refiera el recurrente.

En cuanto a los señalamientos contra **ALEX LACAYO**, a los que se refiere la acusación particular, primeramente podemos decir que, de la declaración jurada rendida por GIL CRISTÓBAL HERRERA AMAYA (a) "MARQUELDA" (fs. 186-187), se desprende la existencia de dos personas distintas, siendo **ALEX LACAYO** una, y el

"GORDO" de La Herradura otra, supuestamente vinculadas ambas en el delito investigado. No obstante, JOSÉ ALBERTO AGUILAR MARTÍNEZ (a) "CHECA", señaló a un sujeto llamado CESAR LEYOS como la persona que cometió los delitos en compañía de "GABINITO" y "MARQUITOS", excluyendo tanto a **ALEX LACAYO** como al "GORDO" de La Herradura, del ilícito bajo estudio, a quienes dice conocer pero sin relacionarlos con los hechos. Y, ESMERALDA COLLAZO COMELY (A) "MILLIN" reafirmó el hecho de que **ALEX LACAYO** se apoda "**GORDO**".

GIL CRISTÓBAL HERRERA AMAYA no se ha ratificado de lo declarado, siendo que en informe del citador Heriberto Concepción, de 30 de junio de 1995 (f. 503), consta que en las instalaciones de la P. T. J. de La Chorrera, donde fue iniciado el expediente en el cual se pretendía citar a GIL CRISTÓBAL HERRERA AMAYA y CESAR LEYOS, los agentes informaron que GIL CRISTÓBAL HERRERA AMAYA estuvo detenido y salió libre, pero que es un drogadicto empedernido -"piedrero"-, que no tiene casa fija, por lo que es imposible su ubicación. Y, en cuanto al señor CÉSAR LEYOS, se informó que desde el inicio de la investigación no se ha podido encontrar su ubicación. Por lo cual lo dicho por GIL CRISTÓBAL HERRERA adolece de la eficacia requerida para tener valor probatorio.

El sindicado MARCOS ARAUZ MORENO (a) "MARQUITOS", no sólo se retractó de lo declarado sino que en la declaración inicial se refirió a un carro celeste, y habló del "**GORDO**" **LACAYO**, indiferentemente sin hacer alusión a otra persona apodada igual, lo cual se diferencia de las declaraciones de las dos deposiciones anteriores que se refieren a un carro color chocolate y a dos personas con el mismo apodo.

Si bien asiste razón al recurrente en el hecho de que el Departamento de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia, no ha certificado si **ALEX ANTONIO LACAYO FONA** se encontraba detenido para la fecha del ilícito, por el contrario, en el expediente se encuentran insertas una serie de certificaciones de la Cárcel Modelo, de la Cárcel Pública de La Chorrera y de la Isla Penal de Coiba, las cuales mencionaremos a continuación, que constituyen medios probatorios idóneos para demostrar el hecho de que el día 16 de septiembre de 1991, **ALEX LACAYO** se encontraba detenido en la Isla Penal de Coiba, además de que se presume la legalidad de dichos documentos por haber sido emitidos por entidades públicas y por ser medios racionales que sirven para la libre convicción del juzgador.

En este sentido, mediante Nota de 5 de abril de 1994 (f. 341), suscrita por el doctor JUAN JOSÉ ORTEGA T., Director de la Cárcel Modelo, se informó al Fiscal Cuarto Superior, que el día 30 de marzo de 1994, reingresó de la Isla Penal de Coiba, MARCO ARAÚZ MORENO, a disposición de su despacho; y, mediante Nota de 28 de abril de 1994 (f. 355), se informó que el 26 de abril de 1994, LUIS GABINO DE LA ROSA RODRÍGUEZ fue trasladado al Centro de Rehabilitación El Renacer.

En Nota N° 4507-SJ de 28 de junio de 1994 (fs. 361-362), suscrita por el Mayor ORIEL GONZÁLEZ, Director de la Zona de Policía La Chorrera, se suministró información sobre los internos MARCOS ARAÚZ, GIL CRISTÓBAL HERRERA AMAYA, LUIS GABINO DE LA ROSA y ALEX LACAYA; de este último se informó que el mismo,

> "ingresó el 1-3-90, procedente de Coiba donde cumplía 80 meses de prisión a disposición de Corrección, trasladado para Coiba el 3-5-91, existe en nuestros archivos telegrama de Corrección que le otorga Libertad a partir del 7-9-91, pero el mismo no está firmado por ALEX LACAYO. No existe registro de ingreso para esa fecha. ... ." (F. 362).

En Nota 0892-SJM de 1° de julio de 1994, suscrita por el Director de la Cárcel Modelo, Doctor JUAN JOSÉ ORTEGA T., se informó que:

> "ALEX LACAYO FONA: Ingresó por primera vez a éste (sic) Centro Penal el 29/03/90, sindicado por el delito de ROBO Y LESIONES PERSONALES en perjuicio de Aurelio Ortega R., a órdenes del Juez 1ro. de Cto. de la Chorrera. Puesto en LIBERTAD el 15/11/91, según boleta N° 393 de la Dirección de Corrección.

> Reingresa a éste (sic) Centro el 15/09/93, sindicado por los delitos de HOMICIDIO en perjuicio de Agapito Rivera Avilés, actualmente a órdenes de la Fiscalía 4ta. Superior, y HOMICIDIO en perjuicio de Chow Yu Choi, actualmente a órdenes del 2do. Tribunal Superior de Justicia." (F. 418).

Mediante Oficio # 143-CPIC-SJ de 17 de noviembre de 1994 (f. 427), suscrito por el Director del Centro Penal Isla de Coiba, Licenciado JOSÉ I. DUTARY, informó que el interno ALEX ANTONIO LACAYO FONA, ingresó a dicho Centro Penitenciario el día 4 de mayo de 1991, sindicado por el delito de robo en perjuicio de AURELIO ORTEGA RUIZ, condenado a sufrir la pena de cuarenta (40) meses de prisión a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección; y viajó hacia la Cárcel Modelo el día 7 de noviembre de 1991.

En Nota N° 2367-DNC. 95. S. de 2 de agosto de 1995 (f. 504), suscrita por el Director Nacional de Corrección, Licenciado ENRIQUE MON PINZÓN, se informó que el interno ALEX ANTONIO LACAYO FONA, estuvo detenido desde el 27 de agosto de 1984 hasta el día 15 de noviembre de 1995, por el delito de hurto.

Mediante Resolución de 21 de agosto de 1995, la Fiscalía Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá (fs. 508 a 509), se decretó la inmediata libertad de ALEX ANTONIO LACAYO FONA (a) "GORDO", quien se encontraba recluido en la Cárcel Modelo de la Ciudad de Panamá, luego de las consideraciones siguientes:

> "Al rendir indagatoria LACAYO FONA, refiere que para el día de los hechos se encontraba privado de su libertad por una condena que pesaba en su contra. Al proceder a oficiar a los diferentes Centros Carcelarios (Modelo, La Chorrera y Coíba (sic)), tal y como constaa (sic) fojas 362, 418 y 427 del infolio penal se obtuvo resultado positivo que determina que dicho imputado estaba detenido.
>
> Analizada todas y cada uno de las certificaciones de los Centros penales hemos llegado a la clara convicción de que el señor ALEX LACAYO FONA (a) GORDO, para la fecha de la comisión de los hechos punibles que nos ocupan se encontraba recluido en la Isla Penal de Coíba (sic), desde el día 3 de mayo de 1991, cuando fue trasladado a la misma, hasta el día 7 de noviembre que regreso, debido a que se había decretado su libertad." (F. 508).

Luego del análisis de los argumentos presentados por el recurrente, la Sala pasará a decidir la alzada en los términos previstos en el artículo 2428 del Código Judicial, es decir, que tendrá conocimiento del proceso, sólo sobre los puntos de la Resolución a que se refiera el recurrente.

A juicio de la Sala, la presunta responsabilidad de **ALEX ANTONIO LACAYO FONA (a) "GORDO"**, ha sido desvirtuada, puesto que de autos se desprende que el mismo se encontraba detenido en la Isla Penal de Coiba, el día 16 de septiembre de 1991.

Por lo expuesto, procede un sobreseimiento provisional, a favor de **ALEX ANTONIO LACAYO FONA**, según lo establecido en el artículo 2211 del Código Judicial, ya que no puede decirse que la investigación tendiente a determinar la identidad de los imputados se encuentra agotada, aunque se encuentre comprobado el hecho punible.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REFORMA el Auto de 18 de septiembre de 1995, proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, y SOBRESEE PROVISIONALMENTE a ALEX ANTONIO LACAYO FONA, de generales conocidas en el proceso; y, lo CONFIRMA en todo lo demás.

Notifíquese, Cúmplase y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO CONSULTADO

CONSULTA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ARIEL JOSÉ TUÑÓN LOAIZA Y RICAUTER JARAMILLO SAMANIEGO, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL, EN PERJUICIO DE ZURDAN ANTONIO RECUERO MENDOZA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante auto calendado el 28 de junio de 1996, el Segundo Tribunal Superior de Justicia dictó sobreseimiento definitivo en beneficio del agente de la Policía Nacional, **RICAURTE JARAMILLO SAMANIEGO** y sobreseimiento de manera provisional a favor de **ARIEL JOSÉ TUÑÓN LOAIZA**. Dicha resolución fue dictada dentro de la investigación a la que fueron sometidos por el homicidio de Zurdan Antonio Recuero Mendoza y Ulises Magnor Mena De León.

De conformidad con lo normado en el artículo 2481 del Código Judicial la resolución en comento ha sido enviada para su consulta.

HECHOS

La presente investigación se refiere a la muerte violenta de los jóvenes Zurdan Antonio Recuero y Ulises Magnor Mena De León, como consecuencia de heridas producidas con arma de fuego, hechos ocurridos en horas de la madrugada del día 25 de septiembre de 1994 con motivo de un enfrentamiento armado entre pandillas y en el cual intervino Ricaurte Jaramillo Samaniego, como miembro de la Policía Nacional.

El agente Ricaurte Jaramillo Samaniego, con ocho años de servicio en la Fuerza Pública, al rendir declaración indagatoria acepta que disparó contra Recuero Mendoza. Relata en su declaración que se encontraba de turno desde las ocho de la noche del 25 de septiembre de 1994 hasta las ocho de la mañana del día siguiente, recorriendo el sector de la avenida Ancón, cuando a temprana hora de la madrugada escuchó unas detonaciones por lo que se acercó, en compañía de la unidad que estaba con él ese día, al lugar de donde provenían dichos disparos y pudo observar a un sujeto que disparaba contra otro que se encontraba en el suelo. Al apreciar esta situación, le dio la voz de alto ordenándole que soltara el arma, pero en respuesta a su mandato el sujeto se dio la vuelta y le disparó. A objeto de defenderse, él le hizo dos disparos con su arma de reglamento, que era un revólver calibre .38, cañón largo, color negro. Cuando el sujeto cayó, tomó el arma de fuego que éste portaba. A escasos minutos las unidades de apoyo llegaron y en compañía de personal de la Cruz roja le brindaron los primeros auxilios.

El agente Jaramillo Samaniego, manifiesta que salió en persecución del sujeto que momentos antes estaba siendo agredido por Recuero Mendoza, y al capturarlo lo llevó al Hospital Santo Tomás (cfr. 95-99).

Por su parte, Ariel José Tuñón Loaiza, quien fue el sujeto a quien Recuero Mendoza le disparaba, señala que el problema surgió por una discusión que se suscito entre ellos. Afirma que Recuero Mendoza lo hirió en el costado derecho, y que en el momento que era agredido llegó el agente Jaramillo Samaniego quien le ordenó a Recuero Mendoza que dejara de disparar, pero éste no hizo caso y disparó contra el agente quien le respondió. También sostiene que fue Recuero Mendoza quién disparó contra Ulises Magnor Mena De León (cfr. 70-72), cuya investigación sobre su muerte también aparece en este expediente.

Del informe de Novedad signado por el agente Jaramillo Samaniego, se desprende que el joven Mena De León fue encontrado herido por otras unidades de la Policía Nacional a la altura de la calle 17 y que falleció posteriormente en el Hospital Santo Tomás (fs. 23-24).

El Informe de Experticia Balística P. B. N° 597-94 (cfr. fs. 128-130) por su parte, determina que el proyectil calibre 38 especial no deformado fue disparado por el revólver calibre .38 especial, marca Smith and Wesson, serie N° K-806550 y que este proyectil según el protocolo de necropsia fue extraído del cadáver de Recuero Mendoza (f. 111).

ANÁLISIS DE FONDO

Luego de examinar el presente caso, observa la Sala que si bien la acción del agente Jaramillo Samaniego al causar la muerte de Zurdan Antonio Recuero es típica del delito de homicidio de que trata el artículo 131 del Código Penal, su conducta no es contraria a derecho, porque está amparado por una causa de justificación como lo es el cumplimiento de un deber legal, de que trata el artículo 19 de nuestro código punitivo. Hizo uso racional de la fuerza y sólo disparó cuando fue agredido con arma de fuego.

Por otra parte, las pruebas allegadas a la investigación, permiten avalar las otras dos decisiones jurisdiccionales emitidas por el auto mixto consultado, en cuanto a declarar extinguida la acción penal con relación a Recuero Mendoza y el sobreseimiento provisional a favor de Tuñón Loaiza.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Confirma el auto consultado.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN PENAL

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A ÁNGEL SANTIAGO SÁNCHEZ FLORES, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante auto calendado el 16 de julio del año en curso, esta Sala dispuso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 2444 del Código Judicial, mantener en Secretaría a disposición del recurrente, el expediente contentivo del recurso de casación, a fin de que se enmendaran los defectos formales que se habían advertido al momento de examinar el escrito presentado.

Dentro del término conferido, según consta a folio 174 vuelta, se recibió por Secretaría el escrito que obra de folios 173 a 174, mediante el cual el licenciado Víctor Javier Almengor Torres, de la firma forense Almengor, Caballero y Asociados hace las correcciones antes indicadas.

Los puntos objeto de enmienda se circunscribían a la debida ordenación de los motivos que le sirven de fundamento a la primera causal y al complemento normativo que debe ofrecerse en relación con las disposiciones legales

infringidas cuando se alega que dicha violación es por indebida aplicación. Con relación a la segunda causal se anota la necesidad de hacer un reajuste en la redacción de los motivos que deben contener cargos de injuridicidad contra la sentencia impugnada, presentados en forma ordenada sin caer en alegaciones subjetivas. Al revisar el nuevo escrito, en cuanto a los puntos observados se advierte que en principio, desde el punto de vista formal se atendieron las observaciones hechas en el auto de 16 de julio y por tanto cabe proceder al tenor de lo dispuesto por el artículo 2445 del Código Judicial.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, representada por la Magistrada Sustanciadora, en Sala Unitaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el recurso de casación en el fondo presentado en este caso y ORDENA dar traslado del proceso al Procurador General de la Nación por el término de cinco (5) días a fin de que emita concepto.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A ERIC BEY MOSCOSO TORRERO, POR DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA, EN PERJUICIO DE LA EMPRESA TADIBE, S. A. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CINCO (5) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Una vez vencido el término de lista al que se refiere el artículo 2443 del Código Judicial, ha ingresado al despacho el proceso penal seguido a **ERIC BEY MOSCOSO TORRERO** por delito contra la fe pública, a fin de resolver la admisibilidad del recurso de casación formalizado por el licenciado Eliécer A. Pérez Sánchez contra la sentencia de segunda instancia, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, el 15 de febrero de 1996.

Prima facie, se examina el expediente con el fin de corroborar si en este caso se le ha dado cumplimiento al artículo 2441 del Código Judicial, en lo que respecta a la resolución impugnada, a la interposición oportuna del recurso y a la legitimación activa. Se trata de un proceso penal por delito contra el patrimonio y contra la fe pública con penalidad de prisión que excede de dos años; consta en autos que el recurrente anunció y formalizó el medio de impugnación extraordinario en tiempo oportuno y que es persona hábil para interponerlo en su calidad de abogado defensor del sentenciado.

En lo que hace relación con los requerimientos formales que la ley exige deben concurrir en el escrito contentivo del recurso de casación, la Sala se percata que la historia concisa del caso, responde aceptablemente a tal exigencia y en cuanto a la única causal que se invoca, la misma la consagra el numeral 9° del artículo 2434 del Código Judicial.

Respecto a los motivos, tanto el primero como el tercero aluden a fases del proceso que no armonizan con la causal invocada.

En lo que se refiere a las disposiciones infringidas y el concepto en que lo han sido, se cita el artículo 66 con sus ocho numerales, sin precisar cuál o cuáles de las atenuantes fue interpretada erradamente en este caso y al explicar el concepto de la infracción se afirma que la violación fue de manera directa por interpretación errónea, lo que incluye dos conceptos de infracción, además de omitir la mención de la regla hermenéutica que se violó por razón de la causal enunciada.

Por otra parte, salta de bulto el hecho mencionado por el casacionista al sustentar el concepto de la infracción del artículo 69 del Código Penal, en el sentido de que el Tribunal de segunda instancia confundió la figura del delito continuado con una atenuante, no obstante ello, no incluye el artículo 62 de la legislación penal como infringido en el texto del escrito de formalización del recurso.

Al no observar el recurrente en su escrito cada uno de los requisitos que de manera clara y expresa establece el artículo 2443 del Código Judicial, tal incumplimiento conlleva la inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación presentado por el licenciado Eliécer A. Pérez Sánchez, en representación de ERIC BEY MOSCOSO TORRERO en este proceso penal.

Base legal: artículos 2434, 2441, 2443 del Código Judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A ENRIQUE SEGURA O ENRIQUE SINISTERRA, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CINCO (5) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El 24 de junio del año que decurre, ingresó a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, con motivo del recurso de casación promovido por la defensa de **ENRIQUE SEGURA**, el expediente que contiene el proceso penal seguido a **JEFFERY GLENN MEJÍA CASTAÑEDA y ENRIQUE SEGURA** por delito contra la salud pública.

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 2443 del Código Judicial, se fijó en lista el negocio a efecto de poner en conocimiento de las partes interesadas el ingreso del proceso al Tribunal de casación.

A la fecha, de acuerdo con el informe secretarial que aparece a fojas 283 vuelta, ha transcurrido el término de lista y por tanto, corresponde decidir sobre la admisibilidad del medio de impugnación extraordinario presentado por la licenciada Rosario Granda de Brandao, Defensora de Oficio, a favor de su representado.

Siguiendo la metodología que ordena la ley, cabe examinar en primer término el cumplimiento de los llamados requisitos externos de la casación, los que en materia penal tienen que ver con la legitimación material u objetiva, la oportunidad en la presentación y formalización del recurso y la legitimación subjetiva.

Según constancia de autos, el presente proceso se sigue por delito contra la salud pública en su modalidad de narcotráfico, cuya pena supera los dos años de prisión, cumpliéndose así con la exigencia normativa que establece ese tramo penal como requisito para recurrir en casación. También consta en autos que tanto el anuncio como la formalización y presentación del recurso, tuvo lugar dentro de los términos que señala el Libro III del Código Judicial. Con relación a si la recurrente es persona hábil, en el expediente aparece su designación como defensora.

Con respecto a la concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 2443, como elementos formales del escrito mediante el cual se formaliza el recurso de casación, la Sala observa que la primera causal enunciada contiene dos causales de fondo: violación directa de la ley sustancial y aplicación indebida de la misma. Este es un error insubsanable que no permite su admisión.

En cuanto a la segunda causal, que es de tipo probatorio, en reiterada jurisprudencia de la Sala se ha recomendado como una correcta enunciación de la misma: "error de derecho en la apreciación de la prueba que implica violación de la ley sustancial y ha influido en lo dispositivo de la sentencia impugnada".

Respecto a los motivos de esta causal, el segundo de ellos incurre en la impropiedad de transcribir textualmente parte de una declaración, cuando basta con indicar el folio donde ésta aparece.

Con relación a las disposiciones legales infringidas, sólo se citan artículos contentivos de principios generales de valoración, sin referencia a la prueba concreta que se arguye fue erradamente apreciada por el juzgador, además, se omite señalar la disposición sustantiva que se infringió como consecuencia del error en la valoración probatoria cometido.

Cabe recordar que el orden en que se presentan los elementos del recurso son: Historia concisa del caso, causal, motivos, disposiciones legales infringidas y concepto de la infracción. En este caso la recurrente a continuación del concepto de la infracción señaló los motivos en que se fundamenta la causal invocada, lo que también es un error.

Consecuentemente, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación presentado por la defensa de ENRIQUE SEGURA o ENRIQUE SINISTERRA en este proceso penal.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADMISIBILIDAD DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A IRMTRAUD INGELORE GRAHT, SINDICADA POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante auto mixto de 16 de julio del presente año, este despacho en Sala Unitaria, dispuso no admitir la segunda causal de fondo alegada y mantener el negocio en Secretaría a fin de que el recurrente enmendara los defectos formales observados en relación con la formalización de la primera causal invocada.

De acuerdo al informe secretarial que se lee a fojas 238 vuelta del expediente, a esta fecha ha vencido el término de corrección de cinco días concedido al casacionista, por lo que se da el momento procesal de resolver en definitiva sobre la admisibilidad del recurso extraordinario de casación presentado por el **FISCAL SEGUNDO DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ** en este caso.

Al revisar el nuevo escrito corregido por el agente del Ministerio Público, se puede apreciar que eliminó la segunda causal antes invocada y mantuvo el texto de la primera causal, al igual que los motivos y las disposiciones infringidas,

corrigiendo en cuanto a los dos primeros artículos (44 y 60 del Código Penal) el concepto de la infracción, no obstante, en el tercer artículo optó por variar el concepto de la infracción y en vez de mantener la indebida aplicación del mismo al caso en estudio, señala ahora que la violación se da en el concepto de interpretación errónea, concepto éste que también exige en la técnica casacionista la cita de la norma contentiva del principio de hermenéutica infringido.

En las condiciones indicadas, el recurso de casación es viable y por ello, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, representada por la suscrita Magistrada Sustanciadora, en SALA UNITARIA, ADMITE, el recurso de casación presentado en este caso y DISPONE correr traslado del negocio penal al Procurador General de la Nación por el término de cinco (5) días, para que emita concepto.

Notifíquese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A FRANCISCO CÓRDOBA, ANA LUISA LASSO Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El 24 de junio de 1996, ingresó a esta Corporación Judicial, con motivo de la presentación de tres recursos de casación, el expediente que contiene el proceso penal seguido a **FRANCISCO CÓRDOBA, ROSA TULIA MARTÍNEZ DE PARRADO, NELSON DE JESÚS CARRILLO VÉLEZ, ASDRUBAL PARRADO MARTÍNEZ y JAIME REVELO ALBAN** por delito contra la salud pública.

Una vez ingresado el expediente, se procedió de conformidad a lo dispuesto por el artículo 2443 del Código Judicial, fijando en lista el proceso con la finalidad de que las partes interesadas tuvieran conocimiento del ingreso del expediente al tribunal de casación.

A esta fecha, una vez vencido el término de lista es necesario resolver sobre la admisibilidad de cada uno de los recursos de casación presentados oportunamente en este caso. Con esa finalidad y siguiendo el orden de presentación, se pasa a analizar cada uno de ellos.

RECURSO DE CASACIÓN PRESENTADO POR EL
LICENCIADO GILBERTO GÓMEZ CAZORLA

Con relación a los requisitos externos que deben cumplirse en la presentación de este medio de impugnación extraordinario, la Sala está de acuerdo con el criterio externado por el Segundo Tribunal Superior en el sentido de que la sentencia de segunda instancia impugnada es de aquellas que permiten ser recurridas por esta vía, en virtud de que se trata de delito sancionado con pena privativa de libertad mayor de dos (2) años. También consta que el anuncio y formalización del recurso, se llevó a cabo dentro de los parámetros temporales fijados por la ley y que estuvo a cargo de persona hábil para ello por tratarse del apoderado judicial del sentenciado Jaime Revelo Alban, debidamente reconocido en el expediente.

Respecto al cumplimiento de las exigencias taxativas fijadas en la ley sobre el orden formal en que debe presentarse el escrito, se advierte lo siguiente: la historia concisa del caso recoge una relación breve del desarrollo del proceso en sus diferentes etapas, a la par que se hacen los cargos de

injuridicidad contra el fallo censurado. La única causal de fondo que se alega, se ajusta a la denominación que le da el Código Judicial y por tratarse de una causal de carácter probatorio, en los motivos se anotan con precisión los medios de prueba que se dice fueron apreciados erradamente. En cuanto a las disposiciones legales infringidas, tanto las normas adjetivas como las sustantivas guardan relación con la naturaleza de la causal de fondo invocada.

No hay objeciones que hacer en relación con este recurso.

RECURSO PRESENTADO POR EL LICENCIADO
JUSTINIANO CÁRDENAS BARAHONA

En cuanto al recurso presentado por el licenciado Cárdenas Barahona, abogado defensor de Rosa Tulia Martínez Parrado, la Sala advierte que el mismo se ajusta a los requisitos externos referidos al principio de oportunidad, a la legitimación material y objetiva y a la presentación del recurso por persona hábil.

En cuanto a los requisitos señalados de manera clara y precisa por el artículo 2443 del Código Judicial, los cuales deben concurrir en el texto del escrito mediante el cual se formaliza el recurso de casación, la Corte advierte que en cuanto a la historia breve del caso, el abogado resume los puntos relevantes y someramente plantea los vicios que le imputa a la sentencia de segunda instancia. Respecto a las causales invocadas, la primera de ellas responde a la denominación que le señala la ley, pero en cuanto a los motivos 1°, 2° y 3°, mediante los cuales se fundamenta esta causal, se plantean conceptos subjetivos que en estricto derecho no guardan la coherencia debida con la naturaleza de la causal invocada.

En cuanto a las disposiciones legales infringidas, el recurrente anota una disposición de carácter general en materia de interpretación y omite señalar las disposiciones legales sustantivas sobre participación y responsabilidad, que son los elementos fundamentales de esta causal.

Con relación a la segunda causal, su enunciado es correcto porque responde a la denominación que le asigna la ley. En lo que se refiere a los motivos señalados como fundamentación de esta causal, el recurrente incluye apreciaciones subjetivas, contrarias a la técnica que rige este medio de impugnación y a la jurisprudencia nacional mantenida de manera reiterada.

Respecto a las disposiciones legales infringidas y al concepto en que lo han sido, al invocar el artículo 41 del Código Penal y señalar que dicha norma fue infringida en forma directa y por aplicación indebida, se están planteando en forma simultánea dos conceptos de infracción de la ley contradictorios y se olvida que cada vez que se invoque la aplicación indebida de una norma es necesario que de inmediato se señale cuál es la norma específica que debió aplicarse en sustitución de aquella.

Los defectos antes anotados no permiten la admisión de este recurso.

RECURSO PRESENTADO POR EL LICENCIADO
CARLOS EUGENIO CARRILLO GOMILA

El tercer recurso presentado en este proceso está a cargo del licenciado Carrillo Gomila en su condición de apoderado especial del señor Jesús Anaya Caraballo.

Al igual que los dos recursos anteriores, este cumplió con las exigencias externas, por razón de que se presentó contra sentencia de segunda instancia, en proceso cuyo delito es susceptible de este medio de impugnación, se hizo en tiempo oportuno y quien lo promovió es persona hábil, al tenor de lo que dispone la ley procesal.

Con relación a las otras exigencias formales que debe reunir el escrito contentivo del recurso de casación en lo penal, la Sala se percata de que el casacionista al momento de presentar la historia concisa del caso, lo hizo de

conformidad a los criterios que mantiene la doctrina y la jurisprudencia sobre este punto. En cuanto a la causal de fondo invocada, se optó por una de carácter probatorio, la cual está prevista por el numeral primero del artículo 2434 del Código Judicial y su enunciado es correcto.

Respecto a los motivos, el casacionista decide impugnar la valoración de varios medios de prueba y por tanto al señalar las disposiciones legales infringidas y su concepto, invoca varios artículos del Código Judicial sobre materia probatoria, al igual que dos normas del Código Penal que estima violadas como consecuencia del error de derecho en la apreciación de la prueba, que dice cometió el tribunal de segunda instancia al expedir la sentencia condenatoria contra su representado. Como no es esta la etapa de examinar a fondo cada uno de los motivos y de las normas que se anotan como violadas, al cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 2443 del Código Judicial, cabe la admisibilidad "in limine" de este recurso.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE los recursos presentados por el licenciado Gilberto Gómez Cazorla en representación de JAIME REVELO ALBAN y por el licenciado Carlos Eugenio Carrillo Gomila, como defensor de OMAR DE JESÚS ANAYA CARBALLO y NO ADMITE el recurso presentado por el licenciado Justiniano Cárdenas Barahona, abogado defensor de ROSA TULIA MARTÍNEZ DE PARRADO.

Fundamento Legal: artículos 2434, 2441, 2443 y 2444 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A LUIS ALBERTO GONZÁLEZ MEJÍA, POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El 24 de julio de 1996, tuvo lugar la audiencia oral programada en el presente caso, a fin de que las partes sustentaran el recurso de casación en el fondo presentado contra la sentencia de segunda instancia, proferida por el **SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA** el 18 de septiembre de 1995 y que condenó a **LUIS ALBERTO GONZÁLEZ MEJÍA** a cinco (5) años de prisión por delito contra la salud pública.

En uso del derecho que le concede el artículo 2446 del Código Judicial, el recurrente, licenciado Julián García Trejos, aportó escrito contentivo del resumen de sus alegatos presentados durante la audiencia (cfr. fs. 175-182).

A fin de dictar la sentencia que corresponde, se pasa a examinar cada una de las causales invocadas, al igual que los motivos y las disposiciones legales que se anotan como infringidas por la sentencia bajo censura.

1. Primera Causal: Infracción de la ley sustancial por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, lo cual ha influido en lo dispositivo de la resolución recurrida (artículo 2434, numeral 1° del Código Judicial).

La causal invocada se apoya en un motivo solamente y se refiere al hecho de que el Tribunal le dio valor al reporte de informe de allanamiento realizado

por la Policía de La Chorrera, en el cual se incluye seis centésimos de gramos de cocaína como parte de la droga decomisada al sentenciado GONZÁLEZ MEJÍA.

Al constatar la afirmación anterior con el texto de la sentencia impugnada, se advierte que si bien se hace mención de la cocaína, las consideraciones fácticas se acentúan en los 44 envoltorios contentivos de marihuana en la cantidad de 419,72 gramos. No es la apreciación sobre la cantidad de cocaína encontrada en el allanamiento de la casa D-45, lo determinante en la decisión de segunda instancia y por ello, mal puede formularse tal cargo de injuridicidad sobre un medio probatorio que no tuvo incidencia relevante en lo dispositivo del fallo impugnado.

En cuanto a las disposiciones legales que se dicen violadas, se citan los artículos 769 y 823 del Código Judicial. Con relación al primero, es una norma enunciativa que enumera los medios probatorios más importantes que reconoce el ordenamiento procesal y abre el compás para una interpretación analógica de cualquier otro medio racional que contribuya a la formación de la convicción del juzgador. La sentencia no ha infringido ese artículo, pues no regula principios de valoración probatoria.

En cuanto al artículo 823, en autos constan dos aspectos de la diligencia de allanamiento. Por un lado, el sentenciado fue sorprendido in fraganti con una cajeta de ropa que sacaba de la residencia por la parte de atrás y en la misma localizaron el maletín que contenía los 44 envoltorios de yerba seca, que resultó ser marihuana en la cantidad de 419,72 gramos y luego en el allanamiento de la casa donde cohabitaba con su concubina, encontraron en el botiquín localizado en el baño, tres carricitos de plástico, en uno de los cuales había un polvo blanco que resultó ser cocaína en la cantidad de 0,06 gramos. Esto significa, que por un lado hay un informe de flagrancia y por el otro, el de allanamiento, siendo el primero el que incrimina a GONZÁLEZ MEJÍA.

Respecto a la cita del artículo 260 del Código Penal, por tratarse de una causal probatoria, su violación se da en forma indirecta, como consecuencia de la violación de las normas adjetivas. Al no producirse la infracción de aquellas, no es posible la violación alegada de ésta.

2. La segunda causal está comprendida en el numeral 10° del artículo 2434 del Código Judicial y se refiere a "la infracción de la ley sustancial penal por indebida aplicación de la misma al admitir o calificar los hechos constitutivos de circunstancias atenuantes de responsabilidad criminal".

Un motivo le sirve de fundamento y se refiere a que el Tribunal señaló en la parte motiva de la sentencia impugnada, que no existían atenuantes a favor de GONZÁLEZ MEJÍA, a pesar de que -en opinión del casacionista- el procesado no es reincidente. El representante del Ministerio Público al comentar en el traslado del recurso el contenido de este motivo, llama la atención sobre el hecho de que mientras la causal hace referencia a una indebida aplicación de la ley, el recurrente anota en este motivo un medio probatorio que no fue reconocido o se ignoró su existencia, lo que demuestra una clara incongruencia entre el motivo y la causal de fondo alegada.

En cuanto a las disposiciones legales que se consideran violadas por la sentencia de segunda instancia, se mencionan los artículos 56, 66 y 260 del Código Penal. Respecto al primero, cabe recordar que el mismo enumera los factores que debe tomar en cuenta el juzgador al momento de la individualización judicial de la pena, y respecto a la delincuencia primaria, que responde a la conducta anterior del agente, tal aspecto es válido al momento de dosificar la pena y dirige al Juez a comenzar con el mínimo del tramo penal, atendiendo la gravedad del hecho punible y los otros factores que establece el legislador, pero no es una atenuante propiamente tal.

El artículo 66 en su numeral octavo contiene las atenuantes genéricas, que guardan relación con las peculiaridades que emergen del ambiente en que se desenvuelve el agente activo del delito, siempre que no estén previstas por la ley.

Con relación al artículo 260 del código punitivo, señalado como infringido, su armónica vinculación a la causal invocada, obliga a que el resto de las disposiciones señaladas como infringidas, guarden relación con los hechos constitutivos de circunstancias atenuantes, lo que no ha ocurrido en el caso bajo examen.

3. La tercera causal de fondo invocada por el recurrente, es "la infracción de la ley sustancial penal cuando la sanción impuesta no corresponda a las circunstancias que modifiquen la responsabilidad del imputado".

El cargo de injuridicidad que se le hace a la sentencia recurrida en el motivo que fundamenta la causal invocada, es el de haber desconocido el contenido del reporte de allanamiento llevado a cabo por la Policía de La Chorrera, en el que se aclara que la cocaína fue incautada a persona distinta a la de GONZÁLEZ MEJÍA. Una lectura de la sentencia de 18 de noviembre de 1995 nos indica que el Segundo Tribunal Superior de Justicia, si bien hace mención en la sentencia de segunda instancia sobre la cocaína, pondera como una cantidad de consideración para fines distintos al de consumo, la posesión de 44 envoltorios de marihuana en la cantidad de 419,72 gramos. En ningún momento confunde los cuatro cartuchos de una libra en los que se encontraban los 44 envoltorios de canyac, como si se tratara de cuatro libras y 419,72 gramos, ni deduce los fines de venta o suministro de los 0,06 gramos de cocaína. Este cargo no se adecúa a la parte motiva de la resolución judicial impugnada.

La única disposición que se menciona como infringida es el artículo 260 del Código Penal en el concepto de violación directa por comisión, al aplicar el segundo párrafo de esa norma sin haber acreditado previamente que, dada la cantidad de marihuana decomisada, a juicio del Tribunal, cabe deducir su suministro a título de venta o traspaso a terceros.

Si bien es cierto que la droga conocida como marihuana se encuentra catalogada entre las sustancias ilícitas contra la salud pública de menor efecto dañoso y que el sentenciado es delincuente primario, la imposición de la sanción en el mínimo del tramo penal establecido por el artículo 260 del Código Penal, se adecúa a la situación procesal recogida en autos, esencialmente porque el casacionista no hizo la más correcta selección de las causales, ni invocó el artículo 264 del Código Penal que podría dar pábulo a los argumentos esgrimidos en las distintas fases de la sustanciación de este recurso.

Por las razones expuestas, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia impugnada.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A ROLANDO CHELO LEGISTER BULLER, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Con fundamento en lo que preceptúa el artículo 2444 del Código Judicial, la Sala Segunda de la Corte, en funciones de Tribunal de Casación, concedió a la parte recurrente un término de cinco días para que enmendara los errores formales notados en el escrito de formalización del recurso de casación presentado por la Dra. Asunción Alonso de Montalvo, Defensora de Oficio de ROLANDO CHELO LEGISTER

BULLER, contra la sentencia de segunda instancia emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia el 11 de septiembre de 1995, en el proceso penal seguido por delito contra la salud pública.

De conformidad al informe secretarial que se lee a fojas 144 vuelta, la casacionista presentó el escrito corregido en tiempo oportuno y vencido el mismo corresponde decidir en definitiva sobre la admisibilidad del recurso de casación antes descrito.

Tomando en cuenta las observaciones que se hicieron en el auto calendado el 17 de julio del año en curso, se constata que el nuevo escrito se ajusta a las mismas y enmienda los aspectos puntuales mencionados sin entrar a otras consideraciones que se pasaron por alto por el Tribunal, a fin de permitir un examen de fondo de las causales invocadas en el momento procesal correspondiente.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, representada por la suscrita Magistrada Sustanciadora, en Sala Unitaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación presentado y ORDENA el traslado del proceso al Procurador General de la Nación, por el término de cinco días, a fin de que emita concepto.

Base Legal: artículos 2444 y 2445 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL QUE SE SIGUE A NARCISO BASTO DÍAZ Y MIGUEL ÁNGEL QUINZADA, SINDICADOS POR LA COMISIÓN DE DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOCE (12) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Humberto Andrés Collado Castillo, Fiscal de Circuito en la provincia de Los Santos, ha interpuesto recurso de casación contra auto de 29 de abril de 1996, proferido por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, que decreta sobreseimiento definitivo en favor de Narciso Basto Díaz y Miguel Ángel Quinzada, sindicados por la comisión de delito contra la administración pública.

El examen del libelo, a los efectos de decidir sobre la admisibilidad del recuso, permite advertir que la historia concisa del caso se presenta de manera deficiente, pues realiza la cronología del proceso pero no indica con claridad en qué consiste la infracción de la ley. De otra parte, se observa que el recurrente fundamenta el recurso extraordinario en una causal de casación en el fondo consagrada en el numeral 3 del artículo 2435 del Código Judicial, a saber: "Cuando no estime como delito, siéndolo, los hechos que aparecen en el sumario, sin que medien circunstancias posteriores que impidan su castigo". La doctrina patria entiende que el juzgador incurre en este vicio cuando apoya su decisión en "un error de juicio al no identificar como delito un hecho plenamente registrado en el expediente y que está recogido en un tipo penal" (PONCE FÁBREGA, Jorge, GUERRA de VILLALAZ, Aura Emérita, Casación. Primera edición. 1995. pág. 321). La causal viene sustentada en tres motivos. En el primero de ellos el casacionista plantea que del peritaje visible de folios 114 a 122, "se recogen elementos del delito investigado .. y la participación en él de Narciso Basto y Miguel Quinzada", sin precisar con debida claridad cuál es el cargo de injuridicidad que se alega, lo que constituye un obstáculo para formular juicio de valor en cuanto a la existencia de la causal aducida. En relación con el segundo y tercer motivos, el recurrente expone que el auto atacado "no valoró"

(f. 949) o que ha "pasado por alto" once declaraciones juradas y varios peritajes allegados al expediente (f. 949-950). Esta argumentación, lejos de probar la causal que alega, introduce otra, cual es la de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, toda vez que esta procede cuando el juzgador "fundamenta su decisión en prueba que no figura en el proceso o que, encontrándose acreditada, omite considerarla, o cuando el juzgador tiene la creencia equivocada de que un hecho ha ocurrido cuando en autos no se encuentra acreditado" (Sentencia de 5 de mayo de 1994, emitido por la Sala Penal de la Corte Suprema).

En cuanto a las disposiciones legales infringidas, se observa que el recurrente aduce que los artículos 769 y 2144 del Código Judicial han sido infringidos por omisión, por considerar que el Tribunal Superior "omitió la valoración" o "no apreció" once declaraciones allegadas al cuaderno penal (f. 951-953). Resulta evidente que los argumentos con los cuales el recurrente sustenta la supuesta infracción de cada norma alegada como infringida, no coincide con la causal que invoca (error de derecho en la apreciación de la prueba) pues, como viene indicado, el letrado insiste en exponer argumentos que se compadecen con la causal error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba.

El análisis de la causal invocada demuestra que las deficiencias anotadas desnaturalizan el recurso propuesto, lo que conduce a su inadmisión por incumplimiento de las formalidades previstas en el numeral 3 del artículo 2443 del Código Judicial.

Por lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación interpuesto por el Fiscal de Circuito en la provincia de Los Santos contra auto de 29 de abril de 1996, proferido por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A RAFAEL RENÉ UREÑA Y FRANCISCO ELÍAS VILLAVICENCIO GRANDA, SINDICADOS POR DELITO DE PECULADO EN PERJUICIO DEL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (I. R. H. E.). MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CATORCE (14) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Luis Alberto Martínez Sánchez, Fiscal Segundo de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, interpuso recurso de casación en el fondo contra la sentencia de segunda instancia emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, calendada 25 de septiembre de 1995, mediante la cual revocó parcialmente la sentencia emitida el 7 de marzo de 1995, por el Juzgado Undécimo de Circuito de lo Penal del primer Circuito Judicial de Panamá (fs. 459-479), en el sentido de absolver a **FRANCISCO ELÍAS VILLAVICENCIO GRANDA** de los cargos contra él formulados y reemplazó la pena de prisión impuesta a **RAFAEL RENÉ UREÑA** por su conversión a días-multa (fs. 199-505).

Corresponde a este Tribunal de Casación, en este momento procesal examinar si se encuentran reunidos los requisitos establecidos en el artículo 2443 del Código Judicial, referentes a la admisibilidad del recurso presentado.

Se observa que la resolución impugnada se adecúa a lo dispuesto en el

primer párrafo del artículo 2434 del Código Judicial, es decir, se trata de una sentencia de segunda instancia dictada por un tribunal superior, y dentro de un proceso donde se ha verificado la comisión de una conducta típica cuya pena de prisión es superior a los dos años.

Sin embargo, este Tribunal advierte que el escrito no cumple algunos de los requisitos de forma que señala el artículo 2443 del Código Judicial, detectándose también, errores de fondo. Veamos.

1. La causal invocada no está correctamente formulada, es decir, no corresponde a la denominación exacta que le asigna la ley en el numeral 1° del artículo 2434.

2. Los motivos no contienen cargos de injuridicidad coherentes con la causal que pretenden sustentar.

3. El recurrente hace mención de normas adjetivas, lo que no permite una correlación lógica con la causal invocada. Obsérvese que esta señala a la sentencia infractora de la ley sustancial penal por efecto de una interpretación errada de la Ley. Las normas citadas no tienen el carácter de sustanciales penales.

4. El recurrente expresa como norma legal sustantiva infringida el artículo 322 del Código Penal, no obstante omite hacer la transcripción debida de dicha disposición.

5. Por otra parte, en jurisprudencia uniforme se ha reiterado que es requisito indispensable al invocar esta causal, incluir la cita de la norma del Código Civil, que sustenta las reglas de hermenéutica que no se tomaron en consideración y que permiten conocer el sentido y alcance de la norma aplicada por el juzgador al caso concreto.

Si bien es cierto que el artículo 2444 del Código Judicial brinda la posibilidad de ordenar la corrección del recurso de casación cuando se cometen infracciones conceptuales de poca monta, el incumplimiento de los requisitos de forma resaltados en los párrafos precedentes, hacen inadmisible el recurso.

En virtud de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación presentado por el licenciado LUIS ALBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Fiscal Segundo de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A SILVINTON BARKER BAILEY, POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El 12 de Julio de 1996, este despacho expidió la providencia mediante la cual se fija en lista el recurso de casación presentado por el Fiscal Segundo de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, contra la sentencia de 13 de noviembre de 1995, expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que reforma la de primera instancia, en el sentido de rebajar la pena impuesta a SILVINTON BARKER BAILEY, por delito contra la salud pública.

A la fecha, ha vencido el término al que se refiere el artículo 2443 del Código Judicial, por lo que procede decidir sobre la admisibilidad del recurso de casación presentado.

Durante el período de lista, por secretaría se recibió una carta manuscrita, del reo Barker Bailey en la que pide la "abolición" del proceso de casación, en virtud de que él fue favorecido por la sentencia de segunda instancia recurrida (fs. 170-171) con una rebaja de la pena de 8 años a 72 meses de prisión.

Un examen detenido del expediente, nos permite corroborar que le asiste razón al Tribunal de segunda instancia al proferir el auto de 12 de abril de 1996 (fs. 163-165), en virtud de que tanto en el anuncio como en la fase de formalización del recurso, se cumplió con los términos de ley, la resolución impugnada es la de segunda instancia, emitida en un proceso por delito que tiene asignada pena privativa de libertad superior a dos años y en nuestra legislación, el Ministerio Público, como sujeto procesal penal, está dotado de legitimación activa para recurrir en casación, en interés de la Ley.

Con relación a los requisitos establecidos por el numeral 3° del artículo 2443 del Código Judicial, el recurrente plantea correctamente la historia del caso, invoca dos causales de fondo conforme a la denominación que le asigna la ley, anota los motivos que sirven de fundamento a cada una y, separadamente, señala las disposiciones legales que estima infringidas por la sentencia de 13 de noviembre de 1995 y a continuación plantea el concepto en que han sido violadas las normas sustanciales penales, citadas.

Procede entonces, la admisibilidad de este medio de impugnación extraordinario.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, representada por la Magistrada Sustanciadora, en Sala Unitaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación presentado por el Fiscal Segundo de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá en este proceso penal y dispone correr traslado del proceso al Procurador General de la Nación por el término de cinco días para que emita concepto.

Base Legal: artículos 2434, 2441, 2443 y 2445 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL QUE SE SIGUE A RIGOBERTO PEÑALOZA GUERRA, SINDICADO POR EL DELITO DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Para decidir sobre su admisibilidad, conoce la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de recurso extraordinario de casación promovido por el licenciado Gerardo Puerto Gordón en favor de Rigoberto Peñaloza Guerra, sindicado por la comisión de delito de venta ilícita de drogas.

A tales efectos, se observa que el letrado interpone el recurso de casación "contra ... la sentencia N° 88 del Juzgado Primero de Circuito de Veraguas dictado el 6 de septiembre de 1995 ..." (f. 186), con lo cual no satisface los requerimientos del artículo 2434 del Código Judicial, según el cual el recurso de casación en el fondo se interpone "contra sentencias definitivas de segunda

instancia, dictadas por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial".

Por otro lado, se advierte que el recurrente invoca dos causales de casación en el fondo contempladas en los numerales 10 y 12 del artículo 2434 del Código Judicial (fs. 186-189). Al revisar el cumplimiento del requisito concerniente a los motivos que le sirven de sustento a cada causal, se comprueba que en los mismos se exponen argumentos que no corresponden a las causales que apoyan. En adición, el letrado invoca la infracción de los artículos 258 y 260 del Código Penal y de los artículos 1968 y 1970 del Código Judicial (fs. 189-190), pero omite trascribir el texto de los preceptos legales que aduce como infringidos y el concepto de tales infracciones.

Como quiera que las deficiencias anotadas reflejan un manejo inadecuado de los requisitos y conceptos de fondo propios de la estructura formal del recurso de casación, es inevitable concluir que este recurso extraordinario no puede ser admitido.

Por las anteriores consideraciones, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE recurso de casación en el fondo presentado por el licenciado Gerardo Puerto Gordón contra la sentencia N° 88, calendada 6 de septiembre de 1995, proferida por el Juzgado Primero de Circuito de Veraguas, que condena a Rigoberto Peñaloza Guerra por la comisión del delito de venta ilícita de drogas.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ROBERTO DE ARCO, FISCAL DE CIRCUITO EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 31 DE ENERO DE 1996, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL, QUE ABSUELVE A LUIS SAMUDIO DE LOS CARGOS FORMULADOS EN SU CONTRA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Roberto de Arco, actuando en su condición de Fiscal de Circuito en la provincia de Bocas del Toro, ha interpuesto recurso de casación en el fondo contra sentencia de 31 de enero de 1996, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, que confirma la sentencia absolutoria dictada en favor Luis Alberto Samudio a quien se le sigue proceso por la comisión de delito relacionado con drogas.

Vencido el término de lista previsto en el artículo 2443 del Código Judicial, corresponde a la Sala decidir sobre la admisibilidad de este recurso extraordinario. Con tal propósito, se advierte que para formalizar correctamente el recurso en cuanto al cumplimiento del requisito legal concerniente a la historia concisa del caso, se requiere que se realice un esfuerzo de síntesis que permita deducir los vicios de injuridicidad en que ha incurrido el tribunal de segunda instancia al dictar la sentencia (Resolución de 10 de febrero de 1995, Sala Penal). Al examinar la historia que ofrece el libelo de casación, se observa que el casacionista, en lugar de limitarse a explicar en forma clara la situación jurídica ocasionada por la resolución que se impugna, lo que hace es presentar argumentos de censura contra la actuación del Tribunal Superior.

Por otro lado, se observa que el letrado recurre en casación en el fondo con apoyo en la causal prevista por el numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial, que se refiere a "error de derecho en cuanto a la apreciación de la

prueba" (f. 358). La causal viene fundamentada en un extenso motivo en el cual el recurrente, sin hacer la debida separación, se refiere a varios errores sobre valoración de la prueba en los que, según su parecer, ha incurrido la sentencia censurada. El defecto indicado habría podido ser corregido, de no ser que el casacionista plantea en esa misma sección del libelo la infracción de los artículos 904, 770, 769, 973 del Código Judicial, cuando para esos efectos debió seguir el orden de presentación de las disposiciones legales infringidas y el concepto en que lo han sido (fs. 358-367).

A propósito de las disposiciones legales infringidas, alega el casacionista que los artículos 770 y 973 del Código Judicial han sido infringidos en forma directa por comisión y por omisión, lo cual resulta contradictorio toda vez que una norma jurídica no puede considerarse simultáneamente violada en estos conceptos de infracción, distintos y excluyentes (fs. 368; 371). De igual manera, plantea el casacionista que el artículo 769 del Código Judicial ha sido infringido por omisión, por considerar que la resolución impugnada "no toma en cuenta los indicios, que fluyen ... de los dichos de María Duncan, Ricardo Pineda, Karem Brown ..." (f. 370). La Corte considera que la explicación en cita no se compadece con la causal invocada (error de derecho en la apreciación de la prueba), porque concierne otra causal de casación, cual es error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba.

Finalmente, se observa que el casacionista invoca la infracción del artículo 2073 del Código Judicial, en forma directa por omisión, pero no transcribe la norma adjetiva concomitantemente violada, y tampoco explica en forma clara cómo la infracción de ese precepto legal ha influido decisivamente en la sentencia que ataca (f. 372).

Por lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación en el fondo interpuesto por el licenciado Roberto de Arco, en su condición de Fiscal de Circuito de la Provincia de Bocas del Toro, contra sentencia de 31 de enero de 1996, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, que confirma la sentencia absolutoria dictada en favor Luis Alberto Samudio.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A FRANKLIN HERNÁNDEZ, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO COMETIDO EN PERJUICIO DE MARÍA ITZEL ALONSO DE THOMAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante resolución calendada 19 de julio de 1996, este despacho sustanciador ordenó que el libelo de formalización del recurso de casación propuesto por la licenciada Beatriz Herrera Peña permaneciera en Secretaría de la Sala Penal por el término de cinco días, a los efectos de que la recurrente realizara las correcciones que le fueron indicadas (fs. 157-158). En tiempo oportuno la casacionista presentó el libelo de corrección, por lo que le corresponde ahora a la Sala decidir sobre la admisibilidad del recurso interpuesto.

Con tal propósito, se observa que la defensora técnica invoca cinco causales de fondo, las cuales se pasan de inmediato a examinar. La primera causal alude a la situación de "ser la sentencia infractora de la ley sustancial penal

por indebida aplicación del caso juzgado" (f. 163). Aquí la recurrente cuestiona básicamente la apreciación que hizo el Ad-quem de las piezas que componen las sumarias, al sostener que "mi representado nunca tiró a la denunciante del bus, ya que se dice que el sujeto fue el que se tiró del bus y salió trotando ... por lo que al no haberse probado que la denunciada fue violentada físicamente no podemos hablar de delito de robo" (f. 164). La Sala debe advertir que este planteamiento no es atinente a la causal invocada, pues la doctrina jurisprudencial ha sostenido que quien alegue la infracción de la ley sustancial en concepto de indebida aplicación **"nada tiene que objetarle al aspecto probatorio**, puesto que se parte del supuesto de que el elemento fáctico se encuentra correctamente plasmado en el proceso y que el material probatorio fue bien estimado -valorado- en su práctica" (Registro Judicial, marzo de 1990, pág. 180).

Unido a lo antes expuesto, observa la Corte que la casacionista no explica el concepto en que han sido infringidos los artículos 185 y 183 del Código Penal (fs. 164-165).

En la segunda causal aducida, la recurrente plantea que la sentencia atacada incurrió en "error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba" (f. 165). Para formalizar el recurso con base en esta causal, se exige que "al momento de exponer los motivos que le sirven de fundamento, se haga mención de la página en la que aparece la prueba que no fue estimada por el tribunal" (FÁBREGA P., Jorge y GUERRA DE VILLALAZ, Aura, Casación, Impresora Varitec, S. A., San José, Costa Rica, 1995, pág. 318).

Ahora bien, se advierte que en la fundamentación de la causal la recurrente sólo se limita a señalar que: a) "no se apreció ... el hecho que la denunciante sostiene que el sujeto ... llevaba consigo un cartucho gris, sin embargo, al momento que es detenido tenía era un maletín rosado"; b) "se apreció ... que mi defendido tiró del bus a la denunciante, situación ésta que jamás declaró la señora"; y c) "el señalamiento que hizo la denunciante no se llevó al proceso por los medios idóneos" (f. 165), sin determinar el infolio donde obra el medio probatorio que a su juicio, se ha dejado de apreciar.

En lo que respecta a las disposiciones legales infringidas, la casacionista aduce la vulneración de los artículos 770, 781 y 2135 del Código Judicial y 185 del Código Penal, sin exponer el concepto de la violación (f. 167).

En la tercera causal invocada, se cita el numeral 3 del artículo 2434 del Código Judicial: "Cuando se haya incurrido en error de derecho al calificar el delito, si la calificación ha debido influir en el tipo o en la extensión de la pena aplicable" (f. 167). Sin embargo, la recurrente no precisa cuál de las dos causales previstas en este numeral es la que se adecúa a la sentencia impugnada. Es decir, no se indica cuál es la causal que se invoca entre: a) cuando se haya incurrido en error de derecho al calificar el delito, si la calificación ha influido **en el tipo**, y b) Cuando se haya incurrido en error de derecho al calificar el delito, si la calificación ha influido **en la extensión de la pena aplicable**.

Otro defecto de que adolece el libelo, también relacionado con la tercera causal, consiste en que el motivo aducido no se compadece con el enunciado que trae el numeral 3 del artículo 2434 del Código Judicial. Aquí la casacionista plantea que no se ha "probado violencia sobre la denunciante ... Por ende no estamos ante un supuesto robo, sino un hurto del que tampoco se ha probado la vinculación de mi defendido con el hecho" (f. 167). Como se aprecia, la defensa no explica de qué manera el juzgador, al calificar el hecho punible, cometió el error de ubicarlo en un tipo penal diferente al que correspondía.

En lo que respecta a las disposiciones legales infringidas, la recurrente sólo hace mención de los artículos 183 y 185 del Código Penal, sin explicar el concepto de infracción (f. 168).

La cuarta causal invocada corresponde a: "Cuando se haya cometido error de derecho al determinar la participación y correspondiente responsabilidad del

imputado, en los hechos que la sentencia de por probados". Para sustentar esta causal la recurrente sostiene que "a mi defendido no se le ocupa bien alguno, y la forma de su aprehensión es muy dudosa" (f. 168). La Corte nota que este razonamiento pretende liberar de toda responsabilidad penal al procesado, lo que es incongruente con la finalidad que persigue la causal, cual es la de "determinar el grado de participación criminal que le corresponde al sentenciado, sin que sea parte de la discusión su responsabilidad penal" (Sentencia de 3 de octubre de 1995).

De la mano con lo anterior, se advierte que el sentenciado Franklin Hernández fue el único sujeto sancionado en el proceso, de modo que resulta improcedente aducir la causal bajo examen, puesto que la misma parte del supuesto de que en la conducta ilícita han intervenido varias personas y el juez comete un error al determinar el grado de participación del imputado.

Por otra parte, la defensa técnica manifiesta que la sentencia atacada ha infringido los artículos 770 y 2149 del Código Judicial, sin indicar el concepto en que ha resultado infringida cada una de esas normas procedimentales.

La quinta causal invocada por la casacionista es la prevista en el numeral 12 del artículo 2434 del Código Judicial, referente a: "Cuando la sanción impuesta no corresponda a la calificación aceptada respecto del delito" (f. 169), la cual viene apoyada en un solo motivo, expresado en términos de que "no hay pruebas que lo vinculen con el ilícito y despojar a alguien de esa forma de un collar no constituye robo sino hurto" (f. 169). Vemos que este argumento no guarda relación con la causal aducida, pues lo que con ella se discute no es la calificación del delito ni la responsabilidad del imputado, sino **la dosificación de la pena impuesta**. Asimismo, se advierte que, al igual que en las demás causales, la recurrente se ha limitado a indicar como norma legal violada el artículo 185 del Código Penal, sin señalar el concepto de violación de ese precepto sustantivo penal.

Cabe resaltar que no es sino hasta finalizar el libelo de formalización del recurso de casación, cuando la defensa técnica expone el concepto de infracción de las disposiciones violadas que habían sido aducidas en las cinco causales. En reiteradas ocasiones esta Superioridad ha sostenido que el escrito de casación debe seguir el orden o secuencia establecido en el numeral 3 del artículo 2443 del Código Judicial, "que se inicia con la presentación de la historia concisa del caso, continúa con la indicación de la causal o causales invocadas, para especificar luego los motivos, disposiciones legales infringidas y **el concepto en que lo han sido**" (Registro Judicial, agosto de 1994, pág. 261).

De igual manera, se debe destacar que, al explicar la vulneración de las normas legales, la casacionista incurre en otro error, pues invoca de manera simultánea conceptos de infracción totalmente opuestos. Así, señala que el artículo 770 del Código Judicial ha sido infringido "en forma directa por la indebida aplicación" (f. 170), el 781 "en forma directa por interpretación errónea" (f. 171), el 2135 "por indebida aplicación porque no fue aplicada" (f. 172), el 2149 "en forma directa por indebida aplicación" (f. 172), el 183 del Código Penal "en forma directa por indebida aplicación" (f. 173). Este procedimiento resulta extraño a la técnica empleada para formalizar el recurso de casación y pone de manifiesto que lo que pretende comprobar la recurrente es una infracción diferente a los conceptos de "violación directa, interpretación errada de la ley e indebida aplicación", establecidos en nuestro ordenamiento jurídico para fundamentar la violación de la ley.

Por las anteriores consideraciones, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación en el fondo interpuesto por la licenciada Beatriz Herrera Peña, defensora de oficio de Franklin Hernández, contra la sentencia de 28 de febrero de 1996 emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN EN EL PROCESO SEGUIDO CONTRA MARCO ANTONIO AYALA POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la corrección del recurso de casación interpuesto por el licenciado Roummel G. Salerno dentro del proceso penal que se le sigue a su representado, MARCO ANTONIO AYALA, por delito de Venta Ilícita de Drogas.

Consta en el expediente que el recurrente presentó escrito de corrección oportunamente. Sin embargo, dicho escrito contiene una serie de errores formales que no pueden corregirse y que producen la inadmisibilidad del recurso impetrado.

En efecto, el casacionista presenta 3 motivos los cuales no contienen cargos de injuridicidad que puedan ser atribuibles a la sentencia impugnada. Es decir, no hay relación entre los motivos y la causal invocada toda vez que en los tres motivos aducidos, el recurrente señala hechos y circunstancias que configuraron el caso, pero en ninguno revela verdaderos cargos que denotan como injurídica la sentencia de segunda instancia.

No cabe duda de que lo descrito contradice la técnica casacionista e impide que la Corte pudiera hacer, en su debida oportunidad, un análisis de los cargos de injuridicidad que se formulan contra la sentencia recurrida.

Siendo que no existe posibilidad legal que permita la corrección de un recurso de casación en más de una ocasión, no le queda otra opción a la Sala que declarar inadmisible el recurso interpuesto.

Por ello, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación interpuesto por el licenciado Roummel G. Salerno, en su condición de apoderado judicial de MARCO ANTONIO AYALA, contra la sentencia condenatoria de segunda instancia dictada dentro del proceso penal que se le sigue a su representado por el delito de Venta Ilícita de Drogas.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL DENTRO DEL RECURSO DE CASACIÓN EN EL PROCESO SEGUIDO A GUSTAVO ELIÉCER MELGAR FADUL, POR EL PECULADO EN PERJUICIO DE LA JUNTA COMUNAL DEL CHORRILLO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ante la secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el licenciado Carlos Eugenio Carrillo Gomila presentó solicitud de extinción de la

acción penal a favor de **GUSTAVO ELIÉCER MELGAR FADUL** cuyo proceso culminó con una sentencia condenatoria por el delito de peculado en perjuicio de la Junta Comunal del Chorrillo.

FUNDAMENTO DEL POSTULANTE

El licenciado Carrillo Gomila, solicita se ordene la extinción de la acción penal de su defendido y se le establezca el derecho del ejercicio de funciones públicas; para lo cual tiene como fundamento lo siguiente:

1. Que en auto de 17 de diciembre de 1991 se abrió causa criminal al señor Melgar Fadul por supuestas infracciones contra la Administración Pública.

2. Que el Juzgado Séptimo de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, condenó a Melgar Fadul a la pena de dos (2) años de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas.

3. Que al ser apelado ese fallo, el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial lo confirmó, mediante sentencia de 25 de octubre de 1993.

4. Que contra la resolución de segunda instancia anunció extraordinario recurso de casación, el cual se encuentra en trámite en la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.

5. Que el Presidente de la República en uso de sus facultades constitucionales, emitió el Decreto Ejecutivo N° 469 de 23 de septiembre de 1994, mediante el cual concedió indulto a un número plural de personas, entre las cuales se encontraba Melgar Fadul.

6. Que el Código Penal en su artículo 91 es claro al señalar que la amnistía y el indulto por delito político extinguen la acción penal y la pena.

Por tanto, por ser el caso seguido a su defendido de naturaleza política originaria, ha sido objeto de una decisión presidencial, la cual debe ser acatada en sus términos y contenido (fs. 1-2).

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

En respuesta al traslado, el Procurador General de la Nación, licenciado José Antonio Sossa R., estima que no se debe declarar extinguida la acción penal dentro del proceso que se le sigue al señor Melgar Fadul.

Señala que el indulto decretado por el Presidente de la República beneficia a aquellas personas que aparecen investigadas, sindicadas, enjuiciadas o condenadas debido, entre otros, por la comisión de delitos contra la Administración Pública.

Explica, que la norma constitucional -art. 179- que da fundamento al Presidente de la República a decretar indultos, determina que tal facultad sólo lo es para beneficiar, a las personas vinculadas a delitos políticos. Además, que de la norma en comento se colige, que las personas que han incurrido en la comisión de delitos comunes, sólo cabe rebaja de pena o la concesión de libertad condicional, pero no indulto.

En ese sentido, al ser Melgar Fadul procesado por un delito contra la Administración Pública, específicamente peculado en perjuicio de la Junta Comunal del Chorrillo, escapa del beneficio de ser indultado.

Añade que si bien en la doctrina no existe una posición clara y única sobre lo que son delitos políticos, resulta ilógico pensar, que a esa clasificación se puede incorporar cualquier acto ilícito.

No obstante, concluye que en nuestra legislación los delitos políticos serían los comprendidos en el Título IX del Código Penal, denominado "De los Delitos contra la Personalidad Jurídica del Estado", el cual contiene cuatro

capítulos y ninguno regula lo atinente al peculado; delito comprendido en el Título X, denominado "Delitos contra la Administración Pública".

Por tanto, siendo el ilícito cometido por Melgar Fadul un delito común y no político, no puede ser beneficiado con esa facultad constitucional del Presidente de la República (fs. 15-20).

ANÁLISIS DE FONDO

En primer lugar, el proceso seguido contra Melgar Fadul por el delito de peculado en perjuicio de la Junta Comunal del Chorrillo, se encuentra en esta Sala con motivo del recurso de casación en el fondo presentado por su abogado defensor, a objeto de determinar su admisibilidad, en virtud de que a raíz de la presentación del recurso en 1994 se suspendió el trámite procesal por cuanto se adujo inmunidad electoral de Melgar Fadul por su participación en los comicios electorales que lo beneficiaban con tal prerrogativa por el término establecido por el Tribunal Electoral.

El postulante anexó copia debidamente autenticada del Decreto Ejecutivo N° 469 de 23 de septiembre de 1994, del cual se observa, que el Presidente de la República en uso de la facultad que le concede el numeral 12 del artículo 179 de la Constitución Nacional, concedió indulto a varios ciudadanos, entre ellos, al señor Gustavo Melgar Fadul.

Ahora bien, la oposición de la máxima representación del Ministerio Público, se centra en el hecho que el delito por el cual fue procesado el señor Melgar Fadul es un delito común y no político.

Interesa precisar ¿qué debemos entender por delitos políticos?

Nuestra legislación penal no brinda una definición del término, lo cual es un problema de lege ferenda. No obstante, como bien lo anota el licenciado Sossa, no existe unificación de criterio que permita definir el término. Tal situación no ha impedido que dentro de la polémica doctrinal, se parta de un criterio objetivo para ubicar el concepto. Es así, que de conformidad con el bien jurídico que el legislador pretende proteger, se determina que están dentro de la categoría de delitos políticos los que atentan contra la personalidad jurídica interna del Estado.

El Código Penal patrio en su artículo 91 establece **"La amnistía y el indulto por delitos políticos extinguen la acción penal y la pena"**.

Nuestra Constitución Política determina que es atribución del Presidente de la República con la participación del Ministro respectivo, decretar indultos por delitos políticos (art. 179 ord. 12).

El Decreto Ejecutivo N° 469 de 23 de septiembre de 1994, en lo medular de su considerando, textualmente dice:

> "Que los delitos que se les imputan a las personas que más adelante se mencionan son perfectamente caracterizables como delitos políticos por su intención, su ejecución, la conexión con los hechos que rodearon su consumación, o por la condición del sujeto activo".

Siendo el indulto es **"un recurso extraordinario del Estado para establecer la tranquilidad pública alterada por hechos delictuosos de eminente contenido político"** (Alfonso Reyes Echandía. Derecho Penal. Editorial Temis. Bogotá-Colombia. 1990. pág. 293); se concluye, al tenor del diccionario de la Real Academia Española, que "es una gracia o privilegio por el cual se remite total o parcialmente una pena, o bien se exceptúa o exime a uno de la ley o de otra obligación cualquiera" (XXI edición, Tomo II, 1992).

El indulto como causa eficiente de extinción de la pena, se caracteriza por ser un acto particular, esto es, referido a un individuo determinado, por ser un acto de autoridad, que explica Jéze como "un acto jurídico de gracia", es un acto

discrecional y por ello no es un derecho de los sentenciados porque es de libre decisión del Ejecutivo y además, el indulto es irrevocable por cuanto no está sujeto a revocación o a condiciones de ninguna naturaleza (cfr. Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XV, pág. 589-609, 1989).

En caso similar, la Sala expidió su criterio sobre los efectos del indulto al tenor de la Constitución y la Ley en los términos siguientes:

> "El indulto en la doctrina y en las legislaciones, forma parte del antiguo derecho de gracia otorgado a los gobernantes, similar a los votos de indulgencia y de perdón que aún mantiene el Jefe del Ejecutivo en algunas latitudes. Esta institución se diferenció de la amnistía no sólo por razón del funcionario o entidad que la confiere, sino también porque ésta sólo es aplicable a los delitos políticos, mientras que el indulto afecta delitos comunes. Tanto la Constitución de 1972 como el Código Penal de 1982, a diferencia de los criterios doctrinales y del Derecho Comparado, han extendido el radio de acción del indulto, al permitir que el mismo se extienda a los delitos políticos al igual que a los comunes, pero con una modalidad con relación a los últimos, al convertirlo en otorgante de la individualización administrativa de la ejecución penal.
>
> Lo anterior significa que el Presidente de la República con la participación del Ministro respectivo, en este caso, el Ministro de Gobierno y Justicia, está facultado para: 1. Decretar indultos por delitos políticos, y 2. Otorgar libertad condicional y rebajar penas a los reos por delitos comunes. En el primer caso, el condicionante es que se trate de un delito político propiamente tal, no importa el estado procesal en que se encuentre, razón por la cual puede extinguir la acción penal o la pena, mientras que en el segundo caso, estamos ante un caso típico de individualización administrativa de la pena y por tanto, deben concurrir dos presupuestos, cuales son: que exista una sentencia condenatoria y el favorecido se encuentre cumpliendo la penalidad impuesta mediante el acatamiento de los reglamentos y demás disposiciones penitenciarias" (Reg. Jud. Dic., 1995, pág. 199-200).

En el presente caso MELGAR FADUL fue condenado a dos años de prisión por el delito de peculado en perjuicio de la Junta Comunal de Chorrillo, mediante sentencia de 14 de julio de 1993, misma que fue confirmada por el segundo Tribunal Superior el 25 de octubre de 1993. En enero de 1994 se recurrió en casación a la Sala Segunda de la Corte, donde permaneció suspendido el caso hasta el 14 de mayo de 1996 cuando se recibió información del Tribunal Electoral en el sentido de que había finalizado la inmunidad que lo protegía procesalmente.

Al advertir que la facultad de indultar concedida al Ejecutivo abarca delitos políticos y a delitos comunes para la rebaja de la pena y el otorgamiento de la libertad condicional, al tenor de la que establece el artículo 179 numeral 12 de la Constitución, con base al principio de favorabilidad, cabe interpretar que por ser el peculado un delito común, sancionado con pena de dos años de prisión, se trata del indulto en su modalidad de rebaja de pena, cuyos efectos jurídicos son los de extinción de la pena.

Es del caso aclarar que el indulto no hace desaparecer la condena misma como pronunciamiento jurisdiccional para los efectos de su responsabilidad civil derivada del delito (art. 101 y 130 del Código Penal).

Por tanto, corresponde a esta Sala, decretar la extinción de la acción penal solicitada.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA la Extinción de la Acción Penal a favor de GUSTAVO ELIÉCER MELGAR FADUL quien fue declarado responsable y condenado por el delito de peculado en

perjuicio de la Junta Comunal del Chorrillo.

Adiciónese este cuaderno al expediente principal.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

DESISTIMIENTO DE RECURSO DE RECONSIDERACIÓN ANUNCIADO POR EL LICENCIADO JACINTO CEREZO GÓNDOLA, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 15 DE JULIO DE 1996, PROFERIDA POR LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, QUE SANCIONA AL LETRADO CON MULTA DE B/.500.00. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A: ECHEVERS. PANAMÁ, OCHO (8) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Jacinto Cerezo Góndola, actuando en su condición de apoderado legal de Alfredo López Rodríguez, ha presentado escrito en el que comunica su desistimiento de recurso de reconsideración que anunciara contra resolución proferida por la Sala Penal el 15 de julio de 1996, mediante la cual rechaza de plano el recurso de reconsideración presentado y sanciona al letrado con multa de B/.500.00 (quinientos balboas).

La Sala considera que debe ser acogido el desistimiento presentado pues, conforme lo establece el artículo 1073 del Código Judicial, las partes se encuentran legalmente facultadas para desistir de los recursos que interpusieren.

Por lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento del recurso de reconsideración presentado por el licenciado Jacinto Cerezo Góndola.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HECHO

RECURSO DE HECHO, INTERPUESTO POR EL FISCAL SEGUNDO DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A BERTA SOLÍS DE ARCHIBOLD Y RICARDO ARCHIBOLD, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA, EXPEDICIÓN DE CHEQUES SIN LA SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante auto calendado 15 de julio de 1996, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia admitió el recurso de hecho interpuesto por el licenciado Luis Alberto Martínez Sánchez, Fiscal Segundo de Circuito del Primer Circuito

Judicial de la provincia de Panamá, contra la resolución de 15 de mayo del presente año, expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante la cual se negó el recurso de casación formalizado contra el fallo de segunda instancia, dictado en el proceso seguido a **BERTA SOLÍS DE ARCHIBOLD** y **RICARDO ARCHIBOLD** por el delito de expedición de cheques sin suficiente provisión de fondos.

Corresponde en este momento procesal sustanciar y decidir el recurso que se admitió, tal como lo dispone el artículo 1143 del Código Judicial.

Observa la Sala que el recurso de casación fue interpuesto por persona hábil y la resolución impugnada es susceptible de ser revisada por ese medio impugnativo, toda vez, que se trata de una sentencia definitiva de segunda instancia dictada por un tribunal superior de distrito judicial; y el hecho punible investigado, expedición de cheques sin suficiente provisión de fondo, es sancionado con pena privativa de libertad superior a dos años de prisión.

En razón de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la resolución de 15 de mayo de 1996, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial; y CONCEDE el recurso de casación.

Notifíquese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HECHO CONTRA RESOLUCIÓN PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO PENAL QUE SE SIGUE A ARISTIDES VEGA CORTEZ, SINDICADO POR EL DELITO DE HURTO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado José Luis Varela, actuando en su condición de apoderado judicial de Aristides Vega Cortez, ha presentado ante esta Sala recurso de hecho contra auto proferido por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, que niega recurso de casación anunciado contra resolución dictada por ese Tribunal, mediante la cual revoca la decisión del Juzgado Segundo del Circuito de Los Santos que sobreseyera definitivamente a su defendido (f. 1).

Vencido el término para que las partes presentaran sus respectivos alegatos por escrito, corresponde a la Sala Penal resolver en cuanto a esta iniciativa procesal.

A esos efectos, resulta necesario destacar que el artículo 1137 del Código Judicial establece como requisito de admisibilidad del recurso de hecho que el recurrente solicite las copias pertinentes "**al Juez que negó la ... concesión del recurso de casación**, antes de vencerse los dos días siguientes al día en que se notificó o se tuvo por notificada de la negativa".

Ahora bien, vemos que el letrado adjunta al libelo del recurso de hecho copia autenticada de un escrito en el que solicita al Juzgado Segundo de Circuito de Las Tablas que "se digne remitir el expediente al Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, a efectos de sacar unas copias, con la finalidad de interponer un recurso de hecho, ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia" (f. 4).

Como se puede apreciar, el recurrente no cumplió con el requisito de

procedibilidad antes indicado, toda vez que no solicitó oportunamente las copias pertinentes al Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial.

Por lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de hecho presentado por el licenciado José Luis Varela.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN PENAL

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ISABEL ELÍAS RODRÍGUEZ CORTEZ, POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE APODEMIO GUTIÉRREZ DELGADO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Luis Quintero Poveda, actuando en nombre y representación del ciudadano **ISABEL ELÍAS RODRÍGUEZ CORTEZ**, ha interpuesto ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema, recurso de revisión contra la sentencia de calendada 17 de noviembre de 1987 dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial que declaró responsable penalmente al señor Rodríguez Cortez por el delito de homicidio calificado cometido en perjuicio de Apodomio Gutiérrez Delgado y le condenó a la pena de 15 años de prisión; y la sentencia del 27 de abril de 1988 por medio de la cual la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Penal, confirma en todas sus partes la sentencia anterior.

SITUACIÓN PROCESAL

Se observa, que el postulante aporto como prueba, copia de la Gaceta Oficial N° 22.474 de viernes 11 de febrero de 1994, que contiene el Decreto Ejecutivo N° 1 de 5 de enero de 1994, por medio del cual se concede rebaja de pena a detenidos de delitos comunes, y aparece en dicha gaceta que el señor Isabel Elías Rodríguez Cortez fue favorecido con esa medida.

Luego entonces, se estima prudente, antes de decidir sobre la admisibilidad del recurso presentado, solicitar al Departamento Nacional de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia, información sobre el tiempo que lleva cumpliendo la pena de prisión impuesta el señor Isabel Elías Rodríguez Cortez.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, representada por la Magistrada Sustanciadora en Sala Unitaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, EMITE AUTO DE MEJOR PROVEER de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta resolución, para acopiar la información sobre el status penitenciario del recurrente.

Fundamento Legal: arts. 110 y 2410 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADMISIBILIDAD DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, INTERPUESTO POR RODRIGO ANTONIO HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante Nota P-S-03-96 de 24 de junio del año que decurre, la presidencia de la Corte Suprema de Justicia remitió a la Secretaría de la Sala Segunda de lo Penal, una nota manuscrita (fs. 1-4), procedente del Centro Penitenciario La Joya, firmada por el reo **RODRIGO ANTONIO HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ**, en la que solicita la revisión de caso.

Como quiera que el Pleno de la Sala Segunda había adoptado como criterio uniforme, que en casos de recursos extraordinarios, ya sea de revisión o casación, presentados por los reos, se le daría traslado de inmediato a un Defensor de Oficio circuital para que los asistiera técnicamente y examinara si se registraba una causa legal que fundamente el recurso; en este caso se procedió en igual forma y así como el 30 de julio de 1996, se recibió por secretaría, un escrito de formalización del recurso presentado por la licenciada Rosario Granda de Brandao, a nombre y representación de RODRIGO ANTONIO HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ para que revise el proceso seguido en su contra por el Juzgado Décimo de Circuito, Ramo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, con base en la causal primera contenida en el artículo 2458 del Código Judicial.

Si bien es cierto que el escrito de formalización no se adjuntan las pruebas que fundamenten la causal invocada, la Sala advierte que se trata de un reo privado de libertad, asistido por una Defensora de Oficio y por tanto basta aducir las pruebas correspondientes a la causal que en este caso solo exige un estudio comparativo de los expedientes para comprobar si la misma se ha dado o no.

En razón de lo anterior, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, representada por la suscrita Magistrada Sustanciadora, en SALA UNITARIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso extraordinario de revisión y lo ABRE a pruebas por el término de treinta (30) días para practicarlas.

BASE LEGAL: Artículos 2458, 2459 y 2460 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO QUE SE LE SIGUE A NICOMEDES CHANIS ARCIA, POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, OCHO (8) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Conoce la Sala Penal de libelo presentado Nicomedes Chanis Arcia, en su propio nombre, en el que solicita la revisión de la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial que lo condenó a la pena de 78 meses de prisión, por la comisión de delito contra la salud pública.

Como quiera que esta iniciativa procesal está sujeta al cumplimiento de estrictas formalidades legales, el 5 de julio de 1996 el despacho sustanciador

asignó como defensor de oficio del recurrente al licenciado Alcides Zambrano, con el propósito de que "lo asista en cuanto a la correcta formalización del recurso interpuesto, si se registra causal que lo fundamente" (f. 5). En cumplimiento de esta decisión, el defensor de oficio asignado, mediante escrito presentado el 15 de julio de 1996, informa que "el caso **sub judice** se encuentra radicado en esa Sala Penal, donde se admitió Recurso Extraordinario de Casación contra el Fallo de Segunda Instancia ... de lo que se infiere que la Sentencia no se encuentra ejecutoriada" (f. 8), por lo que "no existe causal alguna que permita la formulación del Recurso de Revisión" (f. 9).

En vista de que el defensor técnico considera que no es factible formalizar el recurso extraordinario de revisión que impetra el sentenciado, por cuanto no cumple con los requisitos que a tales efectos exigen los artículos 2458 y 2459 del Código Judicial, no es posible acceder entonces a la petición formulada.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de revisión anunciado por Nicomedes Chanis Arcia y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR HERÁCLITO PEREA MOSQUERA, SINDICADO POR EL DELITO HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, SECUESTRO Y ASOCIACIÓN ILÍCITA, COMETIDO EN PERJUICIO DE VÍCTOR LIAO CHUNG. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, OCHO (8) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Conoce la Sala Segunda de lo Penal de recurso de revisión que, en su propio nombre, ha interpuesto Heráclito Perea Mosquera contra la sentencia de 27 de junio de 1996, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que impone a Perea la pena de 12 años de prisión, como responsable de la comisión de los delitos de robo, secuestro y asociación ilícita para delinquir, cometidos en perjuicio de Víctor Liao Chung.

A los efectos de la formalización del recurso, la Sala asignó como defensor de oficio del recurrente al licenciado Rolando Marcos Hermoso, con el propósito de que "lo asista en cuanto a la correcta formalización del recurso interpuesto, si se registra causal legal que lo fundamente" (f. 12).

El defensor de oficio designado presentó ante la Secretaría de la Sala Penal escrito en el cual informa que "no hay lugar a la formalización" del recurso de revisión, por considerar que la sentencia que ataca el condenado, "aún no está ejecutoriada, pues está en la etapa de notificación de las partes, incluso falta notificar al propio PEREA MOSQUERA, momento en el que puede anunciar otro recurso más viable que el interpuesto y que nos ocupa" (f. 13).

En vista de que el no es posible formalizar el recurso extraordinario de revisión que anunciara el sentenciado, toda vez que no cumple con los requisitos que a tales efectos exige el artículo 2458 del Código Judicial, lo que procede es declararlo de conformidad.

En razón de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de revisión anunciado por Heráclito Perea Mosquera, contra la sentencia de 27 de junio de 1996, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer

Distrito Judicial, y ORDENA EL ARCHIVO del cuaderno.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO EN EL PROCESO SEGUIDO A UBALDO SÁNCHEZ DE LEÓN Y JOSÉ LUIS SAMANIEGO GUERRERO, SINDICADOS POR EL DELITO DE ROBO, COMETIDO EN PERJUICIO DE CATALINO GONZÁLEZ FRANCO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOCE (12) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Harmodio Ernesto Mariscal Ruiz, apoderado judicial de Ubaldo Sánchez de León y José Luis Samaniego Guerrero dentro del trámite de este recurso de revisión, ha presentado dos escritos en los que a) presenta pruebas documentales y b) solicita la práctica de las aducidas con el recurso.

Con el primer escrito el licenciado Mariscal acompaña "Dos recibos expedidos y sellados por la corregiduría de Pedregal" con los que, en su opinión, se comprueba la existencia de arreglo de pago entre Catalino Rodríguez y Roberto de León, este último en representación de los imputados Sánchez de León y Samaniego Guerrero. También se adjunta al primer escrito una boleta de citación expedida por la Fiscalía Octava del Primer Circuito Judicial, en la cual se solicitaba la comparecencia de Ubaldo Sánchez ante esa autoridad de investigación criminal (f. 146-148).

En el segundo escrito de pruebas el letrado solicita que se ratifiquen las declaraciones extrajudiciales de Roberto de León Castillo y de Archibaldo de León Urriola, las cuales fueron rendidas ante Notario Público. En igual sentido, el recurrente solicita que "se ratifiquen las declaraciones extrajudiciales, rendidas ante Notario Público autorizado" por Gilda Maurane, Eduardo Morán, Celmira Degracia, Alfredo Ramos, Gloria Gutiérrez y Lilia Cedeño (f. 149). Finalmente peticiona que se le reciba declaración jurada a Catalino González, para que informe si en su cartera "TENÍA ... UN RECIBO DE DOS (2) SORTIJAS EMPEÑADAS ..." ya que, según el recurrente, esa versión "nunca fue confirmada en todo el proceso de investigación" (f. 149-150).

Por conocido el contenido de los escritos de prueba presentados, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE, por conducentes, las pruebas documentales visibles a fojas 147-148 del cuaderno penal, la solicitud de ratificación de las declaraciones extrajudiciales rendidas por Roberto de León Castillo y Archibaldo de León Urriola, y la solicitud de que se cite a Catalino González para que rinda declaración jurada, y ORDENA que por Secretaría se giren las boletas de citación correspondientes.

SE DENIEGA la petición del recurrente, consistente en emplazar a Gilda Maurane, Eduardo Morán, Celmira Degracia, Alfredo Ramos, Gloria Gutiérrez y Lilia Cedeño, toda vez que el documento visible a fojas 141-142 del cuaderno de revisión no reúne las formalidades de una declaración que haya sido recibida ante Notario. En efecto, tal como se puede apreciar, el Notario Público Cuarto del Circuito de Panamá se limita a certificar que son auténticas las firmas que aparecen en documento que le fuera presentado (f. 142).

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA

Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JUICIO SEGUIDO A SATURNINO RODRÍGUEZ RAMOS Y OTRO, SINDICADOS POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE RUFINO PÉREZ MONTERO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Conoce la Sala Penal de recurso de apelación presentado por la licenciada María Estenia De Gracia Morales contra la sentencia 13 de mayo de 1996, emitida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, mediante la cual se impone a su representado Saturnino Rodríguez Ramos la pena de 10 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 5 años, como responsable del delito de homicidio cometido en perjuicio de Rufino Pérez Montero.

En el libelo de apelación se censura básicamente que la conducta de su defendido haya sido enmarcada en el numeral 3 del artículo 132 del Código penal, "toda vez que lo sucedido es una riña aceptada por ambos, en la que por las circunstancias ingesta de licor y peligrosidad de la agresión hace que el ser humano actúe en lo el (sic) considera en defensa de su integridad personal y jamás con motivos nimios o desprecio por la vida humana" (f. 360), por lo que, en su opinión, "si ha de imponersele (sic) una sanción a mi representado, la misma debe ser evaluada de conformidad con el artículo 131 del Código Penal" (fs. 364-365).

Conocidos los planteamientos de la recurrente, se pasa a resolver la alzada sólo sobre los puntos objetados, de conformidad con el mandato que trae el artículo 2428 del Código Judicial.

El examen de las constancias sumariales permite determinar que el deceso de Rufino Pérez Montero ocurrió en horas de la noche del 23 de noviembre de 1992, en la comunidad de Panamaito, corregimiento de San José, Distrito de Calobre, provincia de Veraguas, cuando Saturnino Rodríguez Ramos le ocasionó una herida con arma blanca. El dictamen médico-legal consigna como causas de la muerte: "Perforación del miocardio. Heridas por arma blanca. Intoxicación alcohólica" (f. 107).

El tribunal a-quo dictaminó que la conducta desplegada por el reo encuentra adecuación típica en la figura del homicidio calificado, de conformidad con el numeral 3 del artículo 132 del Código Penal, por considerar que el sentenciado "no tenía motivos determinantes ni convergentes para cometer el hecho punible realizado" (f. 350).

La doctrina jurisprudencial ha sostenido que "el motivo fútil ocurre en los casos de falta de proporcionalidad entre el estímulo y la reacción, la causa y el resultado, lo cual demuestra una personalidad peligrosa que por pequeñeces produce hechos graves que no se compadecen con lo que normalmente y en presencia del motivo debiera suceder" (Registro Judicial, mayo de 1994, pág. 296).

El imputado Rodríguez Ramos, al ser sometido a los rigores de la declaración indagatoria, aceptó haberle causado la muerte a Pérez Montero y explica que "llegó Rufino Pérez y sin decirme nada me empuñó por la cintura como que quería pelear conmigo y allí me acordé que tenía mi cuchillo en la pretina del pantalón y lo saqué ... le di dos golpes a Rufino Pérez de seguido, uno en el pecho y el otro a un lado, cerca al corazón ... nosotros no llegamos a discutir por nada, estábamos conversando solamente" (fs. 44-45).

Este relato de los hechos pone de relieve que la acción delictiva fue ejecutada por Rodríguez Ramos sin que mediara agresión alguna de parte de la víctima, quien sólo "me empuñó por la cintura" (f. 44). De allí que la Sala

considere que el proceder del imputado tuvo lugar sin justificación aparente e inmediata, es decir, con ausencia de un móvil concomitante que justificara su acción homicida.

De otra parte, con relación a la tesis de que el hecho de sangre fue producto de circunstancias especiales como la "ingesta de licor" (f. 360), valga recordar que el estado de embriaguez que padeció el imputado Rodríguez Ramos no excusa su conducta ilícita, pues esa embriaguez fue de naturaleza voluntaria, tal como él mismo lo explica: "nos fuimos todos los peones a casa del dueño de la peonada ... a cenar y a tomar chicha ... allí anochecimos tomando chicha ... no recuerdo cuantas totumadas de chicha me tomé, pero tomé bastante" (fs. 45-46).

Como quiera que se encuentra plenamente acreditada la responsabilidad criminal del sentenciado en el tipo penal de homicidio agravado, por motivo fútil, la Sala estima pertinente mantener la pena impuesta por el a-quo.

Por lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia del 13 de mayo de 1996 proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, mediante la cual se condena a 10 años de prisión a Saturnino Rodríguez Ramos, por la comisión del delito de homicidio, cometido en perjuicio de Rufino Pérez Montero.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A CARLOS PINTO SANTAMARÍA Y OTROS, SINDICADOS POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE BARTOLO DÍAZ M. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante providencia calendada 4 de junio de 1996, el despacho sustanciador asignó a la licenciada Micaela Morales, defensora de oficio del Tercer Distrito Judicial, la representación de Carlos Pinto Santamaría, para que "lo asista en cuanto a la correcta formalización" (f. 9) del recurso de revisión que fuera anunciado por el imputado, contra la sentencia que lo condena a 17 años y 6 meses de prisión.

En cumplimiento de la resolución antes indicada, la defensora de oficio designada presentó ante la Secretaría de la Sala Penal escrito en el cual informa que el Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial, previa audiencia ante jurados de conciencia, condenó a Carlos Pinto Santamaría y a sus hermanos Edilberto, Arcadio y Adán, a la pena de 17 años y 6 meses de prisión, por la comisión del delito de homicidio en perjuicio de Bartolo Díaz Morales. Agrega la defensora que, luego de "un estudio pormenorizado del expediente y de acuerdo al Art. 2458 C. J. consideramos que **NO EXISTE CAUSA LEGAL** que fundamente **LA REVISIÓN DEL PRESENTE PROCESO**, ya que encontramos que ninguna de las causales del Artículo antes señalado se aplican al proceso en estudio" (f. 15).

Por lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de revisión anunciado por Carlos Pinto Santamaría, y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A JOSÉ DE LA LUZ JIMÉNEZ PALACIOS, SINDICADO POR DELITO DE FALSEDAD DE DOCUMENTO PRIVADO (CHEQUE). MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El 22 de Febrero de 1996, la licenciada Teresa Ibañez, miembro del Instituto de Defensoría de Oficio, en representación del procesado **JOSÉ DE LA LUZ JIMÉNEZ PALACIOS**, presentó ante la secretaría de esta Sala recurso extraordinario de revisión contra la resolución Nº 73 del 28 de agosto de 1995, emitida por el **JUZGADO QUINTO DE CIRCUITO RAMO PENAL, DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ**, en la cual se condena a su representado a la pena de 30 meses de prisión por el delito de falsificación de cheques.

Como fundamento del recurso, el recurrente invocó la causal 5 del artículo 2458 del Código Judicial, y aportó como prueba nota del Juzgado Undécimo del Circuito Penal, que hace referencia a los procesos penales seguidos en ese despacho contra JIMÉNEZ PALACIOS por delitos contra la Fe Pública.

Al ser acogido el recurso mediante auto de 26 de marzo de este año, se abrió el proceso a pruebas por el término que establece la ley procedimental, período durante el cual la licenciada Ibañez presentó otras pruebas.

Luego, tanto el señor Procurador General de la Nación como el recurrente, presentaron sus escritos de alegatos.

Corresponde en este momento procesal, analizar el recurso interpuesto a objeto de establecer si procede.

HECHOS

Consta en autos, que el señor Roberto Mangravita Rago, presentó formal denuncia referente a la falsificación de tres cheques privados, en perjuicio de un establecimiento comercial de su propiedad. Como consecuencia de la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público, fue indagado JOSÉ DE LA LUZ JIMÉNEZ PALACIOS, quien aceptó los cargos, y al ser llevado al plenario, se declaró culpable en el acto de audiencia oral y Pública celebrada el 25 de mayo de 1995.

Mediante fallo Nº 73 de 28 de agosto de 1995, el Juzgado Quinto de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, declaró penalmente responsable a JIMÉNEZ PALACIOS y lo condenó a 30 meses de prisión, como autor del delito de falsificación de cheque privado y lo inhabilitó para el cargo de funciones públicas por igual período.

FUNDAMENTO DE LA POSTULANTE

La licenciada Ibañez al invocar el numeral 5 del artículo 2458 del Código Judicial, sostiene que existen pruebas, que fueron advertidas por el juzgador oportunamente, que contra Jiménez Palacios se siguen causas por la comisión de delitos similares en el Juzgado Décimo Primero del Circuito, entre otros. Por tal razón, era obligante para el juzgador ordenar la acumulación de los procesos, de conformidad con lo estipulado en el artículo 2003 del Código Judicial, a fin que a su patrocinado se le tasase la pena de conformidad con lo que establece el artículo 64 del Código Penal, lo cual resultaría en la imposición de una pena

menos rigurosa, comparada con las sanciones individualizadas de cada proceso.

OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

El licenciado José Antonio Sossa R., luego de hacer alusión a la sentencia recurrida y a los fundamentos de hecho del recurso, coincide plenamente con la posición de la solicitante, indicando que desde iniciado el proceso se advirtió la situación que JIMÉNEZ PALACIOS tenía otros procesos pendientes por el delito de falsificación y que se encontraban en otros despachos judiciales. Ante esa situación, el juzgador de instancia pudo, amparado en el artículo 2003 del código procedimental, ordenar la acumulación de tales procesos con el fin de aplicar una sola pena que resultaría más ventajosa para el procesado.

Por lo tanto, concluye su alegato, solicitando se ordene la revisión en el presente proceso.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La revisión del expediente principal, permite advertir, que Jiménez Palacios al ser indagado el 3 de febrero de 1993, manifestó que Juan Carlos Moreno Muñoz le ofreció trabajar en el negocio de introducir cheques ofreciéndole el 50% de cada cheque que cambiara, oferta que aceptó y por ello introdujo cheques en diferentes locales del país, incluyendo el distrito de La Chorrera.

El 4 de mayo de 1993, constituida la fianza de excarcelación, se ordena mediante oficio N° 859 la libertad de Jiménez Palacios, si no tuviere otra causa pendiente.

En resolución calendada el 17 de diciembre de 1993 se dictó encausamiento penal contra Jiménez Palacios, mientras a favor de Moreno Muñoz, se dictó un sobreseimiento.

Un día antes de la audiencia, la cual se celebró el 25 de mayo de 1995, la defensa técnica del procesado informó al juzgado que su defendido se encontraba detenido en la Cárcel Modelo por otra causa (fs. 110-111).

A ese respecto fue cuestionado el procesado en al acto de audiencia, quien respondió que su detención era consecuencia de un problema surgido con una vecina.

La sentencia condenatoria fue dictada el 28 de agosto de 1995 y casi al mes -27 de septiembre- el juzgador envió oficio N° 2387 al director de la Cárcel Modelo para que le informara los detalles de la reclusión de JIMÉNEZ PALACIOS (fs. 124). Como respuesta a dicha solicitud, se le comunicó por medio del oficio N° 3760-SJM, que JIMÉNEZ PALACIOS había ingresado a ese centro carcelario desde el 17 de abril de 1995 sindicado por delitos de falsedad que se le siguen en distintos Tribunales (f. 130).

En efecto, las pruebas aportadas por la recurrente son demostrativas que contra Jiménez Palacios se siguen otras causas por delitos contra la Fe Pública, como son la que se tramita en el Juzgado Undécimo de Circuito de lo Penal en perjuicio del almacén La Pantera Rosa y Fotokina (f. 9); en el Juzgado Segundo Municipal del Distrito de Panamá en perjuicio de Inés Barrios Cedeño (f. 19), y en el Juzgado Octavo de Circuito de lo Penal (f. 21).

Con ese conocimiento previo, correspondía al funcionario judicial, antes de dictar la sentencia, enviar de oficio, no sólo a la Cárcel Modelo para solicitar los motivos de la reclusión de Jiménez Palacios, sino también a los distintos juzgados, para establecer el estado procesal de los casos.

Una vez verificada la información, de conformidad con las normas de acumulación de procesos, contempladas en el Código Judicial, se debió suspender el proceso iniciado hasta ponerlos todos en estado de acumulación a fin de que puedan seguirse conjuntamente.

El sistema de acumulación jurídica consagrado en el artículo 64 de nuestro

ordenamiento penal, tiene por objeto sancionar el concurso real o material de hechos punibles, sistema que permite beneficiar al procesado con la unificación de penas, limitando la acumulación aritmética de las sanciones aplicables por cada caso.

Ahora bien, la causal 5 del artículo 2458 del Código Judicial, en materia de revisión, es del tenor siguiente:

> "Cuando después de la condenación se descubran nuevos hechos que por sí mismo o combinados con las pruebas anteriores, puedan dar lugar a la absolución del acusado o a una condena menos rigurosa, por la aplicación de una disposición penal menos severa".

Lo expuesto nos lleva a concluir, que de darse el mecanismo de la acumulación de procesos, lo cual es factible con las nuevas pruebas aportadas, permitiría aplicar al procesado JIMÉNEZ PALACIOS una sola pena, partiendo del tipo penal que contenga la pena más grave, que se incrementará hasta en otro tanto por los otros delitos, pero en ningún caso debe exceder del máximo legal de 20 años de prisión ni de 365 días multas (art. 64 del Código Penal).

Las pruebas contenidas en los antecedentes y las allegadas con la presentación del recurso, permiten acoger el planteamiento del postulante, ordenando la revisión del presente proceso.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE PROCEDE LA REVISIÓN de la sentencia ejecutoriada N° 73 del 28 de agosto de 1995, dictada por el Juzgado Quinto del Circuito Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, en lo que respecta a la responsabilidad penal de JOSÉ DE LA LUZ JIMÉNEZ PALACIOS y DISPONE: Que la revisión de la causa, según el artículo 2461 del Código Judicial, la haga el Juzgado de Circuito de lo Penal que sigue en turno.

Fundamento Legal: Artículos 2458 numeral 5 y 2461 del Código Judicial y 64 del Código Penal.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN INVOCADO POR ARCADIO PINTO SANTAMARÍA, REO DEL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE BARTOLO DÍAZ MORALES. PINTO SANTAMARÍA, ARCADIO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ingresó a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, el recurso extraordinario de revisión presentado en su propio nombre por **ARCADIO PINTO SANTAMARÍA**, detenido en la Cárcel Pública de David, contra la Sentencia de 31 de julio de 1987, del Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial, que lo condenó a la pena de quince (15) años de prisión, aumentada a diecisiete (17) años y medio de prisión, mediante Sentencia de 12 de febrero de 1988 de la Corte Suprema de Justicia (fs. 559-560 del sumario), por el delito de homicidio cometido en perjuicio de BARTOLO DÍAZ MORALES, hecho ocurrido el día 20 de octubre de 1985, en la Comunidad de San Valentín, Distrito de Barú.

Narró el recurrente, **ARCADIO PINTO SANTAMARÍA** en su escrito (fs. 2 a 6),

que se encontraba en la Comunidad de San Valentín, Distrito de Barú, en compañía de sus hermanos, EDILBERTO PINTO (fallecido), CARLOS PINTO y ADÁN SANTAMARÍA, en una fiesta, cuando se dio una riña entre el hoy occiso y sus hermanos, resultando el primero muerto de dos (2) pedradas. Señaló también, que el interfecto murió de dos (2) pedradas solamente, como así lo certificó el Médico Forense del Ministerio Público, por lo que cabe destacar que únicamente intervinieron una (1) o dos (2) personas, no más y, a pesar de esta coincidencia, se les condenó a los cuatro (4) hermanos a diecisiete (17) años y medio de prisión.

Cumplido lo normado por el artículo 2050 del Código Judicial -que impone a la Sala Penal de la Corte Suprema la obligación de poner en conocimiento de los Defensores de Oficio del Instituto de la Defensoría de Oficio los recursos de apelación, casación y revisión ingresados a dicha Superioridad, a fin de que éstos interpongan dichos recursos a favor de los reos que no tienen un abogado que los represente-, **Gabriel Elías Fernández M.**, resultó ser el Defensor de Oficio escogido por la Sub-Dirección de dicha Institución, para que llevara a cabo la representación judicial de **ARCADIO PINTO SANTAMARÍA**, según se desprende de Nota N° 0387 de 30 de junio de 1995 (f. 13), suscrita por el Director Nacional del Instituto de la Defensoría de Oficio, Licenciado ERNESTO MUÑOZ GAMBOA.

En virtud del informe secretarial de 26 de marzo de 1996 (f. 19), esta Colegiatura corrió traslado del presente negocio (f. 20) a la licenciada **Micaela Morales Miranda**, Sub-Directora Distrital del Instituto de Defensoría de Oficio del Tercer Distrito Judicial, quien en su escrito de fojas 24 a 27, luego de un estudio pormenorizado de las sumarias, manifestó lo siguiente:

> "Si bien es cierto la sentencia penal proferida por el Tribunal Superior de este Distrito Judicial, el Ministerio Público no apeló, tenemos que para la fecha en que los justiciados y sus apoderados apelaron, el Código Judicial no había sido reformado por la Ley 3 de 1991, en su Artículo 2428, lo que permitía al Tribunal de alzada el estudio del proceso en su totalidad y su modificación al no señalar expresamente los puntos de la resolución que se impugnaban, lo que permitió la reforma y aumento de la pena al Sr. ARCADIO PINTO de 15 años a 17 años de prisión.
>
> Consideramos, luego de lo anteriormente expresado, y del estudio del Artículo 2458 C. J., contentivo de las causales del Recurso de Revisión, **NO EXISTE EN ESTE PROCESO MERITO LEGAL PARA PROMOVER EL RECURSO DE REVISIÓN** pretendido por el Sr. **ARCADIO PINTO SANTAMARÍA**." (f. 27).

Observa la Sala que la licenciada **Micaela Morales Miranda**, Sub-Directora Distrital del Instituto de Defensoría de Oficio del Tercer Distrito Judicial, al hacer el estudio respectivo del caso, no encontró causal legal alguna para formalizar el presente recurso de revisión, según lo establecido en el artículo 2458 del Código Judicial, toda vez que al ser impugnada la Sentencia de 31 de julio de 1987, del Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial, que condenó a **ARCADIO PINTO SANTAMARÍA** a la pena de quince (15) años de prisión, por el delito de homicidio cometido en perjuicio de BARTOLO DÍAZ MORALES, hecho ocurrido el día 20 de octubre de 1985, en la Comunidad de San Valentín, Distrito de Barú, el artículo 2428 del Código Judicial no había sido reformado por la Ley 3 de 1991, en el sentido de incorporar a nuestro ordenamiento procesal penal el principio de la reformatio in pejus, cuyo fin es evitar que la situación jurídica del procesado sea modificada por el superior, de manera perjudicial a los intereses del reo, cuando éste es el único que ha apelado y, siendo que en este caso el Ministerio Público no apeló, a falta de dicha prohibición dentro de nuestro ordenamiento, el Tribunal de alzada -en este caso, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia- realizó un estudio del proceso en su totalidad y modificó la Sentencia apelada sobre puntos que no habían sido impugnados por los apelantes, siendo aumentada la pena de **ARCADIO PINTO SANTAMARÍA** a diecisiete (17) años y medio de prisión, mediante Sentencia de 12 de febrero de 1988 de la Corte Suprema de Justicia (fs. 559-560 del sumario), en virtud de que la confesión del mismo no fue oportuna ni espontánea.

A juicio de la Sala, cabe agregar, además, que el principio de la retroactividad de la Ley Penal a favor del reo, se aplica a las normas sustanciales penales, no así a las normas de procedimiento, como es el caso.

Por lo anterior, opina esta Sala, que no es posible ordenar la revisión del proceso, siendo que la misma Defensora de Oficio designada para interponer el presente recurso de revisión, advirtió que no procede formalizar el recurso que trató de impetrar el propio detenido **ARCADIO PINTO SANTAMARÍA**.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de revisión interpuesto por ARCADIO PINTO SANTAMARÍA y, por consiguiente, ORDENA el ARCHIVO del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA APELADA

APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ROSENDO SERNA VERGARA, SINDICADO POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE GLADYS NELDA MURILLO DE ARGUMEDEZ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante sentencia de 24 de julio de 1995, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, impuso a **ROSENDO SERNA VERGARA**, la sanción principal de siete (7) años y seis (6) meses de prisión y la sanción accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas por el término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del fallo, como autor del delito de homicidio en perjuicio de quien en vida se llamó GLADYS NELDA MURILLO DE ARGUMEDEZ, con base al veredicto de culpabilidad proferido por el cuerpo de jurado de conciencia (fs. 397-406).

Al momento de notificarse de esa resolución, la licenciada Geomara Guerra de Jones, Fiscal Segunda Superior del Primer Distrito Judicial, anunció recurso de apelación (f. 407) y dentro del término procesal oportuno presentó el escrito respectivo.

FUNDAMENTO DEL RECURSO

La licenciada Guerra de Jones, manifiesta estar convencida de que las circunstancias que rodearon el hecho por el cual fue declarado culpable Serna Vergara, lo convierten en un homicidio agravado y la pena debe ser consecuente con ello. Además opina, que en el presente caso no se ha podido apreciar el arrepentimiento como circunstancia atenuante, siendo que el procesado en ningún momento aceptó la comisión del hecho punible.

Es así que sustenta su inconformidad en tres puntos, que en resumen son:

Primero: Que el tipo aplicable no es el homicidio simple contemplado en el artículo 131 del Código Penal cuya pena de prisión es de 5 a 12 años, sino que debe ubicarse en el artículo 132 de la misma excerta legal que tipifica el homicidio agravado sancionando con pena de 12 a 20 años de prisión.

Ese criterio lo sustenta al indicar que el hecho punible se cometió en la persona de un pariente cercano con conocimiento del parentesco. Explica que la

señora Moreno de Argumedez era concubina del procesado, durante un período de más de cuatro años, según se desprende de las declaraciones del propio acusado; y si bien la occisa no era cónyuge de éste, quedó demostrada en autos la relación de convivencia en circunstancias de singularidad y estabilidad existente con la occisa y sus hijas.

Indica que la gran mayoría de los códigos modernos tienen prevista la circunstancia agravante por el vínculo familiar, entre el reo y la víctima, incluyendo a la concubina, según la doctrina predominante.

Segundo: Considera que se está ante la agravante contemplada en el numeral 3 del artículo 132, en el sentido de que el medio de ejecución atroz utilizado por el procesado -rociar gasolina y prender fuego- no admite discusión; la agonía padecida por la señora Murillo de Argumedez fue palpable durante su internamiento en el hospital.

Tercero: Considera que la circunstancia atenuante de arrepentimiento por la comisión del hecho punible no se ha demostrado. Cita un fallo de esta Sala referente a cómo se produce el arrepentimiento, indicando que de ello se concluye que el sujeto infractor debe ejecutar actos positivos que acrediten ese sentimiento de pesar o arrepentimiento y que ello presupone aceptar en cierta medida la comisión del hecho y expresarlo por medio de actos concretos, como son la indemnización del daño a los hijos de la víctima, lo que en ningún momento procuró.

En tanto, Serna Vergara no acepta que roció de gasolina e encendió el cuerpo de la señora Murillo de Argumedez afirmando aún en el plenario que fue un accidente.

La representación fiscal hace referencia a su alegato de conclusión ante el jurado de conciencia, donde expuso que el hecho que el procesado aparentaba apagar las llamas que consumían el cuerpo de su concubina, no era signo de arrepentimiento, sino de justificación de su proceder ante los testigos presenciales, situación que al haberse considerado en un veredicto de culpabilidad, demostró que fue asumido como cierto por el jurado de conciencia. Agrega que incluso el procesado le decía a la occisa "por qué lo hiciste" pensando que los testigos no habían visto el desarrollo de los hechos (fs. 409-414).

FUNDAMENTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

Luego de señalar los hechos y hacer una apreciación legal de las pruebas y circunstancias que de ellas deben deducirse para la imposición de la pena, el tribunal a-quo concluye que el actuar ilícito de Rosendo Serna Vergara se subsume en el artículo 131 del Código Penal y de conformidad con la discrecionalidad que le otorga al juzgador el artículo 56 del Código Penal fijó la sanción en 9 años de prisión.

En cuanto a las circunstancias que modifican la responsabilidad penal, estimó que no existen agravantes, pero sí la circunstancia atenuante común contemplada en el numeral 4 del artículo 66 del código punitivo referente al arrepentimiento. Lo cual motiva al explicar que el procesado luego que prendiera fuego al cuerpo de la víctima, trató de disminuir su consecuencia cuando de inmediato trató de apagarle las llamas, lo que se infiere de las declaraciones de los testigos.

Por lo que le rebaja 1/6 parte al tenor del artículo 69 del Código Penal, es decir, dieciocho (18) meses de prisión, que al deducirla de la pena base, la sanción impuesta quedó en siete (7) años y seis (6) meses de prisión.

FUNDAMENTO DE LA SALA

Con respecto al criterio del apelante en el sentido que se está ante el homicidio agravado a que se refiere el numeral 1 del artículo 132 del Código Penal, si bien el concepto "**pariente cercano**" exigido por el legislador no está definido en ese artículo, sí lo está en el artículo 68 de ese mismo código, que

señala que son parientes cercanos -para los fines de la ley penal- el cónyuge y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Lo que significa que el legislador patrio no comprende en la agravante bajo estudio, la muerte del concubino.

Entendemos el pensamiento del postulante, pero corresponde al juzgador aplicar la ley y es el legislador quien debe ponderar la realidad del país, en donde existe gran cantidad de hogares cuyas parejas viven en concubinato, y así extender la agravante, cuando la muerte se causa en detrimento de la persona con la que se hace vida marital.

Por otra parte, la agravante del empleo de los medios de ejecución atroces, tiene su fundamento en el hecho que el sujeto activo del delito actuó con excesiva crueldad, porque no sólo quiere matar sino torturar y causarle sufrimientos innecesarios a su víctima.

En el caso bajo estudio, Serna Vergara roció con gasolina a su concubina, buscó un fósforo, lo prendió y tiró al piso, donde se encontraba parada aquella e inmediatamente trató de auxiliarla y sofocar el fuego.

En cuanto al arrepentimiento, que es "**una actitud voluntaria del autor del delito quien, una vez consumado, demuestra contrición o pesar por el mal causado, pretendiendo en muchas ocasiones repararlo**" (Gil Miller Puyo Jaramillo. Diccionario Jurídico Penal. Ediciones Librería del Profesional. Bogotá, Colombia. pág. 41); las circunstancias en que se dieron los hechos no son demostrativas de arrepentimiento por parte del procesado o que su objetivo era intentar disminuir sus consecuencias. Por el contrario, trata de desvincularse de responsabilidad, lo cual se evidencia cuando le reprochaba a su víctima por qué se había prendido fuego y ésta le respondía "tú me quemastes", pero no contaba con la presencia de testigos oculares.

Si bien, el testigo Emérito Naranjo Villarrué, afirma que Serna Vergara comenzó a tratar de sofocar el fuego junto con otros vecinos cuando ella rodó y cayó en un lugar donde había arena; el procesado no ha reconocido que hizo un acto reprochable, no ha manifestado que dentro de su yo interno siente el pesar de su culpa.

Lo expuesto nos lleva a modificar la pena impuesta en el sentido de no reconocerle al procesado la circunstancia atenuante del arrepentimiento, por lo que la pena a imponer queda en nueve (9) años de prisión.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REFORMA la sentencia apelada, en el sentido de imponer a ROSENDO SERNA VERGARA, de generales conocidas en autos, la pena de NUEVE (9) años de prisión; y la CONFIRMA en cuanto a la pena de inhabilitación.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JUICIO SEGUIDO CONTRA EDILTRUDES HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE YANETH AMEIS CONTE ALVEO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de apelación ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Sentencia de 9 de octubre de 1995 (fs. 274 a 287), dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial, que declaró penalmente responsable a **EDILTRUDES HERNÁNDEZ MARTÍNEZ (A) "TULE"** del delito de homicidio en perjuicio de YANETH AMEIS CONTE ALVEO, y lo condenó a la pena principal de doce (12) años de prisión y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, que comenzará a contarse cumplida la pena principal, y se ordenó el comiso del puñal utilizado para cometer el hecho punible.

En el presente negocio penal, **EDILTRUDES HERNÁNDEZ MARTÍNEZ** fue declarado culpable en derecho y condenado por el delito homicido en perjuicio de YANETH AMEIS CONTE ALVEO, quien presentaba una diversidad de lesiones traumáticas externas, detallando que en el tórax, lado derecho, presentaba nueve (9) heridas, en el lado izquierdo cuatro (4) heridas, en el tórax posterior siete (7) heridas, una (1) herida en la muñeca de la mano derecha, escoriación en el hombro y en el tercio superior del antebrazo con desprendimiento de piel, así como dos (2) heridas en la rodilla de la pierna izquierda; y quien falleció a causa de herida en el miocardio la cual produjo una hemorragia irreversible que fue la causa directa de la muerte, según el Protocolo de Necropsia constante de fojas 111 a 122 del expediente, hecho ocurrido en la tarde del día 23 de diciembre de 1992, en el lugar conocido como Guabal, Corregimiento de Pajonal, Distrito de Penonomé.

En la Sentencia apelada, el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, señaló entre los hechos probados los siguientes:

> "...
> Quedó demostrado asimismo que el cuchillo que utilizara el encausado lo había comprado una hora antes en el Almacén Tito de Penonomé.
>
> También se ha logrado acreditar que la occisa y el procesado, antes de que ocurrieran los hechos, mantuvieron por más de un (1) año relación marital; sin embargo, para la fecha de autos, la occisa mantenía relaciones amorosas con el señor JORGE MARTÍNEZ (a) LIKY, primo del encausado.
>
> Se pudo determinar que el procesado para la fecha de autos salió de su trabajo a hacer unos mandados a las nueve y treinta de la mañana (9:30 a. m.) y nunca regresó. Comprobándose que estuvo libando licor desde las diez y treinta de la mañana (10:30 a. m.) hasta cerca del mediodía, así como también, cuando iba de regreso hacia su casa.
>
> Quedó establecido que el procesado, al momento de los hechos, no padecía de trastorno mental que le impidiese comprender la ilicitud de su conducta." (fs. 275-276).

El licenciado **Rolando A. Rodríguez Ch.**, Fiscal Superior del Segundo Distrito Judicial, Coclé- Veraguas, en su escrito de sustentación de la apelación (fs. 290-291), alegó que la dosificación de la pena impuesta es baja y, por tanto, debe incrementarse ya que debe tomarse en cuenta no solamente la gravedad del delito sino también la gran conmoción social que produjo a los vecinos del lugar y la comunidad en general, en este sentido señaló lo siguiente:

> "**PRIMERO:** Consideramos que la dosificación del quantum de la pena impuesta por este HOMICIDIO, no se ajusta a las constancias procesales ni a las circunstancias propias a la responsabilidad penal del autor de éste (sic) ilícito.
>
> **SEGUNDO:** Se trata de un delito que como bien lo consigna el Tribunal Superior, en la Resolución apelada enmarca su tipo dentro de lo dispuesto en el artículo 132 del Código Penal, esto es el HOMICIDIO AGRAVADO, ya que es cometido con premeditación, por motivos fútil, medios de ejecución atroces y sevicias.

TERCERO: Analizadas circuntancias que modifican la responsabilidad penal del encartado, consideramos que el Tribunal ha sido magnánimo ya que al imponer discrecionalmente la pena y circunstancia (sic) atenuantes,parte de una sanción baja y que al aplicar la operación aritmética hace que quede una (1) pena líquida de doce (12) años.

CUARTO: En cuanto a las agravantes que se dan en éste hecho es importante destacar que el imputado EDILTRUDIS, el día 23 concurre a una tienda a comprar el arma posteriormente ingiere bebidas alcohólicas con la finalidad de procurarse una excluyentes (sic) de inimputabilidad y asiste al lugar de los hechos y procediendo a asestarle un sin número de puñaladas a su víctima hasta cerciorarse que la misma estaba sin vida por el único motivo de que ya no era aceptado amorosamente.

QUINTO: La confesión dada por EDILTRUDIS no es espontánea ni oportuna sino producto del gran número de evidencias que apuntaban su responsabilidad en este ilícito." (Fs. 290-291).

Mediante Resolución de 21 de noviembre de 1995 (f. 296), del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, se declaró desierto el recurso de apelación anunciado por la Defensora de Oficio y el sindicado.

Por su parte, en la contestación de traslado, la licenciada Matilde Alvarenga de Apolayo, Defensora de Oficio del Segundo Distrito Judicial, presentó sus objeciones a la apelación en los términos siguientes:

"... consideramos que la pena impuesta es alta, pero se aplicó bajo el criterio que hubo premeditación y esa es la pena que se impone en homicidios calificados, sin agravantes.

Con respecto a la premeditación es algo tan difícil de determinar en casos como este (pasionales), en donde no se sabe si la persona ya estaba pensando en actuar de esta forma o fué (sic) un impulso repentino motivado por las circunstancias que rodearon esta relación. ... .

Por otro lado, tampoco consideramos que el Tribunal ha sido magnánimo, ya que nuestro representado no registra antecedentes penales (ver fs. 91), se ha distinguido por ser una persona problemática y sin embargo, el Tribunal Superior pese a que también consideró que' concurría en el encausado un motivo poderoso que le afectada (sic) su sentido de la razón' le impuso una pena discresional (sic) de 15 años. O sea no se tomó en consideración que es un delincuente primario de buena conducta anterior, y merecía la pena mínima de 12 años por lo menos; así (sic) que no entendemos lo magnánimo que apunta la Fiscalía.

Con respecto a las agravantes que solicita se considere el señor Fiscal en el hecho cuarto, consideramos que las mismas estan (sic) previstas como elementos constitutivos o agravantes específicas en la determinación que ha hecho este Trbbunal (sic) al considerar este hecho como homicidio agravado y de acuerdo a lo dispuesto en el art. 132 del Código Penal.

Finalmente se objeta la atenuante de confesión. Al respecto consideramos que la misma fué (sic) expontánea (sic) y oportuna ya que el hecho ocurrió el 23 de diciembre de 1992 como a eso de las 6 de la tarde y los informes de la P. T. J. de esa misma fecha a fs. 21 dan fé (sic) que el imputado se entregó y en la entrevista aceptó ser el autor del hecho. Consta también a fs. 27 que el día 24 de diciembre el joven rindió su declaración indagatoria, con asistencia de la suscrita y aceptó que fué (sic) la persona que ultimó a la señora CONTE o sea que aceptó su ilícito desde el inicio de su investigación." (Fs. 300-301).

En cuanto al segundo punto planteado por el recurrente, vale la pena aclarar el hecho de que si bien ha sido declarado en autos que el homicidio es agravado por haber sido ejecutado con premeditación (Art. 132, numeral 2 del Código Penal), lo planteado durante la Audiencia por el Fiscal Superior del Segundo Distrito Judicial, sobre que el homicidio fue cometido por motivo fútil, medios de ejecución atroces y sevicias, fue desvirtuado en la Sentencia apelada, a saber:

> "A pesar de que el Representante del Ministerio Público, al externar su alegato, considera que además de la premeditación, el hecho se cometió con sevicia, ensañamiento, por un motivo fútil y por medio (sic) de ejecución atroces, consideramos que no había un motivo fútil, porel contrario, concurría en el ánimo del encausado un motivo poderosos que le afectaba su sentido de la razón, sin que ello significara que no estaba plenamente consciente de lo que hacía y de lo que quería, lo que sí es claro es que, ante ese sentimiento pasional que lo envolvía, optó por dejarse llevar por los impulsos que por el razonamiento coherente y mesurado, a sabiendas de las consecuencias que su actuar impulsivo le acarrearía.
>
> En efecto, el actor, al verse desplazado sentimentalmente, decidió anticipadamente acabar con la vida de la mujer que lo había herido afectivamente y para ello, ejecutó ciertos actos que indican que hubo planeación del delito, es decir, obró con premeditación, prueba de ello es que, salió desde tempranas horas de la mañana de su trabajo y en vez de regresar a sus labores, prefirió entrar a una cantina a libar algunas copas de licor, acción que volvió a realizar cuando iba en el bus hacia la casa de la occisa, posiblemente para darse valor, sin llegar a perder su conciencia de la realidad y lo más significativo fue que, una hora antes de dirigirse a la casa de su víctima, decidió comprar el arma con la que ejercitó su acción punible, con una excusa totalmente pueril.
>
> La premeditación se caracteriza, porque la acción criminal que se comete va precedida de una deliberación o resolución previa a la ejecución material del hecho, plenamente consciente del resultado que persigue, el cual, una vez cometido, produce una frialdad de ánimo en el juzgador." (Fs. 284-285).

Sobre el tercer punto planteado por el Fiscal Superior del Segundo Distrito Judicial, en cuanto a la pena base fijada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, Coclé y Veraguas, la Sala ha manifestado en reiteradas ocasiones que el Tribunal del conocimiento toma en cuenta las circunstancias del artículo 56 del Código Penal al fijar la pena base en abstracto, y que la misma debe ser respetada por el Tribunal de alzada en aras de la independencia judicial y la discrecionalidad que tienen los jueces de instancia al momento de la dosificación de la pena, sin perjuicio de que existan circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que deban ser aplicadas al momento de la concretización de la pena.

Sin embargo, la Sala coincide con lo dicho por el recurrente sobre la atenuante común aplicada por el a quo, de la confesión oportuna y espontánea del agente, contenida en el numeral 5 del artículo 66 del Código Penal, toda vez que, ésta como una circunstancia atenuante del rigor punitivo, no sólo debe ser espontánea, es decir, sin apremio, ni cálculo alguno, sino oportuna, siendo que la misma debe ocurrir en la fase en que adquiera relevancia para el proceso. Y por lo tanto, la Sala considera que es procedente reconocer lo alegado por el recurrente al respecto, puesto que la confesión del agente no fue espontánea, entendiéndose como voluntaria, ni oportuna, entendiéndose como una contribución indispensable para el esclarecimiento y precisión sobre la ocurrencia de los hechos, puesto que el delito se perpetró delante de varias personas como testigos presenciales de los hechos -CARLOS CHARLE CHERIGO NÚÑEZ, primo de la occisa (fs. 5 a 11); BEIRA ESTHER MARTÍNEZ, de 16 años (fs. 83 a 85), y YARIELA MARISELA MARTÍNEZ CHERIGO, de 12 años (fs. 80 a 82), sobrinas de la occisa-, de tal manera que, independientemente de que el autor del ilícito lo hubiese negado ante las autoridades de policía, su autoría se habría determinado por los medios normales

utilizados por los agentes del Ministerio Público para la investigación de los diversos delitos y tal confesión es pues, como bien señaló el Fiscal Superior, "... producto del gran número de evidencias que apuntaban su responsabilidad en este ilícito".

Por último, nos referiremos a la agravante de responsabilidad penal alegada por el recurrente, contenida en el numeral 2 del artículo 29 del Código Penal, es decir, el caso de la embriaguez preordenada, cuando el agente se embriagara con el designio de cometer un hecho punible o procurarse una excusa. Para aclarar este punto, transcribiremos una parte del relato de los hechos, contenida en la Sentencia apelada:

> "Si bien es cierto el procesado se puso a libar licor en horas de la mañana y al irse para su casa continuó consumiendo, ...
>
> ... el hecho ocurrió en vísperas de Navidad, un día en que debía estar laborando; sin embargo, optó por salirse del trabajo e irse a libar licor aunque no se investigó qué hizo en horas de la tarde, de las doce (12:00) a las cinco (5:00 p. m.), lo que sí es cierto es que antes de irse para su casa, además de comprar dos botellas de licor para ir consumiendo por el camino, también compró un cuchillo, con el que se dirigió directamente hasta donde su víctima, a quien le propinó tantas heridas hasta asegurarse que la misma había fallecido, ..." (fs. 282-283). (Lo subrayado es de la Sala).

De lo anterior, se colige que el encausado primero ingirió bebidas alcohólicas y luego fue a comprar el arma blanca -cuchillo o puñal-, al Almacén Tito de Penonomé, una hora antes de cometer el homicidio; contrario a lo alegado por el recurrente, en el sentido de que primero compró el arma y posteriormente ingirió bebidas alcohólicas para procurarse un estado de inimputabilidad. En tal virtud, a juicio de la Sala, si bien cabe la posibilidad de que, como indicó el a quo, el victimario haya ingerido bebidas alcohólicas para darse valor para la comisión del ilícito, esto no ha sido acreditado fehacientemente en autos, ni siquiera las declaraciones de las personas que estuvieron con **EDILTRUDES HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**, dan lugar a tal presunción, en el sentido de que éste haya hecho alusión alguna a la occisa o a sus intenciones de causarle la muerte.

En la Sentencia apelada el Tribunal del conocimiento individualizó la pena en abstracto dentro del intervalo penal de doce (12) a veinte (20) años, por configurar la conducta delictiva, el tipo del homicido agravado del artículo 132, numeral 2 del Código Penal, es decir, por haber ejecutado el homicidio con premeditación.

Para la dosificación de la pena, el a quo tomó en cuenta los factores previstos en el artículo 56 de la excerta penal patria, es decir, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la calidad de los motivos determinantes, las condiciones personales tanto de la víctima como del actor, los elementos objetivos y subjetivos del hecho punible, la conducta del procesado, quien no registra antecedentes penales. Así, pues, el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, individualizó, la pena base por homicidio agravado, en quince (15) años de prisión, rebajada en una quinta parte, dada la confesión espontánea y oportuna vertida desde un inicio de la investigación, quedando la pena líquida a cumplir en doce (12) años de prisión.

También, se fijó la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por un término de cinco (5) años, que comenzará a contarse cumplida la pena principal.N

Al ser reconocido parte de lo alegado por el Fiscal Superior del Segundo Distrito Judicial -quien en este caso actuó como parte en el proceso al presentar su apelación-, sobre el desconocimiento de la atenuante común contenida en el numeral del Código Penal, la pena líquida a aplicar es la pena base fijada en un principio por el Tribunal de instancia, es decir, quince (15) años de prisión, por no existir circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.

Por lo anterior, estima la Sala que una pena base de quince (15) años de prisión es cónsona con la gravedad y condiciones en que se cometió el delito.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REFORMA la Sentencia apelada de 9 de octubre de 1995, dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial, Coclé y Veraguas, que declaró penalmente responsable a EDILTRUDES HERNÁNDEZ MARTÍNEZ (A) "TULE" del delito de homicidio en perjuicio de YANETH AMEIS CONTE ALVEO, en el sentido de que lo condena a la pena principal de quince (15) años de prisión; y la CONFIRMA en todo lo demás.

Notifíquese, Cúmplase y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA EN EL PROCESO SEGUIDO A RAFAEL REYNALDO TORRES IBAÑEZ POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE LUCRECIA INÉS GRANT SAMUELS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado a la Sala Penal de la Corte Suprema, la sentencia condenatoria dictada en el proceso que por el homicidio de LUCRECIA INÉS GRANT SAMUELS se le sigue a **RAFAEL REYNALDO TORRES IBAÑEZ**, hecho ocurrido en horas de la noche del 19 de noviembre de 1986 en el apartamento A-4 del Edificio Quince Pisos, ubicado en la ciudad de Colón, Provincia de Colón.

En audiencia pública celebrada el 25 de mayo de 1994, un jurado de conciencia encontró a **RAFAEL REYNALDO TORRES IBAÑEZ**, culpable del homicidio de LUCRECIA INÉS GRANT SAMUELS, por lo cual el Segundo Tribunal Superior procedió, mediante Sentencia de veintiocho (28) de septiembre de 1994, a condenarlo a la pena principal de quince (15) años de prisión y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por cinco (5) años, una vez cumplida la pena principal.

Al momento de dosificar la pena, el tribunal estimó que la conducta punible del procesado se ajusta al supuesto consagrado en el numeral 3 del artículo 132 del Código Penal, que trata del homicidio agravado por motivo fútil. En vista de que se trata de un hombre de 36 años de edad, sabía lo que hacía, no hay justificación del hecho, negó su responsabilidad y no registra antecedentes penales, el Tribunal fijó la pena base en quince (15) años de prisión sin que concurrieran circunstancias atenuantes o agravantes.

Por su parte el abogado defensor de **RAFAEL REYNALDO TORRES IBAÑEZ**, el Licenciado LUIS FELIPE VAUGHAM, sustentó el recurso de apelación visible a foja 674 del expediente, en los siguientes términos:

> "PRIMERO: No se ha establecido si en realidad las intenciones de RAFAEL TORRES de agredir a LUCRECIA GRANT, no lo hizo con el fin de uqe (sic) se desplomara al vacío del edificio quince piso; según la tanología (sic) moderna las precipitaciones suelen ser accidentes, (Dr. Eduardo Vargas Alvarado Medicina Legal), pero sin causa de justificación; porque el resultado fue: muerte.
>
> SEGUNDO: En cuanto a la dosificación se partió de la pena, de doce años como agravante mínima al considerar que el hecho se produjo por motivos fútiles y con atrocidaad; consideramos que hubo causalidad.

> TERCERO: No se ha tomado en cuenta su delincuencia primaria, no hubo el ánimo de causar un mal de tanta gravedad; su arrepentimiento y su propósito de indemnizar a la familia de la occisa, por lo cual pedimos la rebaja de la pena en base a esas circunstancias atenuantes.".

Corrido el traslado respectivo a la Fiscalía Segunda Superior del Primer Distrito Judicial, el agente instructor presentó contestación. Estima el agente de instrucción que el primer argumento de la defensa carece de relevancia jurídica, ya que el jurado de conciencia dictó veredicto de culpable, lo que implica que hubo intencionalidad en el comportamiento del procesado, "la capacidad de representación previsible y querer del resultado, en lo que la doctrina pudiera llamar dolo de ímpetu". Lo anterior hace no viable el debate sobre si hubo o no dolo en el condenado. Indica la Fiscal que de las declaraciones del imputado se desprende que se produjo una discusión entre él y la occisa porque ésta visitaba mucho a su hermana y no lo atendía el tiempo suficiente; tal razón, según el agente instructor, constituye un motivo fútil, tal como lo estimó el a-quo en la Sentencia.

Opina la Fiscal que la condición de delincuente primario, no constituye atenuante de derecho y no puede encuadrarse en el numeral 8 del artículo 66 del Código Penal; en cuanto a la atenuante del numeral 2 del artículo citado, considera que dicha solicitud es improcedente, puesto que es reñir con el sentido común sostener que no hubo intención de producir la muerte de una persona a la que se lanza al vacío desde una altura de quince pisos, ya que quien ejecuta tal hecho tiene una representación ampliamente probable de sus efectos. Con relación al arrepentimiento, señala que en el caso en estudio no hubo arrepentimiento, puesto que éste debe ser activo y desplegarse con acciones en el mundo externo del sujeto; además, **RAFAEL TORRES** no ha aceptado nunca ser el autor del hecho, lo cual indica ausencia de arrepentimiento. Tampoco constituye elemento de atenuación de la pena lo señalado por la defensa, sobre el propósito del procesado de indemnizar a la familia de la occisa. Finalmente, indica la agencia fiscal que la sentencia responde a los parámetros de adecuación de la pena.

De las constancias procesales se desprende que el día de marras, LUCRECIA INÉS GRANT SAMUELS sostuvo una discusión con **RAFAEL REYNALDO TORRES IBAÑEZ**, con quien mantenía relaciones maritales desde hacía varios años y con quien tenía un hijo pequeño. Al parecer, la discusión fue motivada por las constantes visitas que la occisa le hacía a su hermana y en consecuencia la poca atención que le brindaba a **TORRES IBAÑEZ**. Quedó comprobado en el proceso que la víctima y el autor del hecho tenían diferencias y peleas constantemente, lo cual los llevó incluso a concurrir ante las autoridades de policía, a fin de garantizar la paz entre ambos.

En primer término, compartimos con la Fiscalía que la culpabilidad del procesado fue decidida por el jurado de conciencia; veredicto que es de carácter autónomo y definitivo, no sujeto a censuras. Por lo tanto, los reparos que respecto a si hubo o no intención por parte del imputado formula el defensor, resultan improcedentes. Por tanto, nos limitaremos a resolver sobre los demás puntos de la apelación, comenzando por lo del motivo fútil.

Sobre lo que se debe entender por motivo fútil, esta Sala se ha pronunciado en innumerables ocasiones; veamos este fallo de 27 de noviembre de 1991, bajo la ponencia de la Magistrada Aura E. Guerra de Villalaz:

> "El motivo fútil es un elemento calificador del homicidio agravado, conceptuado por otras legislaciones como causa nimia, o ausencia de motivo real, atendible, es el factor móvil de poca importancia o poca seriedad que determina a la voluntad del agente para que haga o no haga alguna cosa."

Es evidente, lo único que explica la caída y por tanto el homicidio de LUCRECIA GRANT, lo es la discusión que momentos antes del hecho sostuviera con **RAFAEL TORRES IBAÑEZ**. De modo que, si dicha discusión, a su vez, estaba motivada por los reclamos que el imputado le hacía sobre las constantes visitas de la hoy

occisa a casa de su hermana y la poca atención que le brindaba a él, no podemos menos que concluir que se trata de un motivo fútil, pues una discusión por asunto tan baladí no puede desde ningún punto de vista justificar un homicidio, que además fue atroz.

Respecto al arrepentimiento, para que éste pueda ser considerado circunstancia atenuante deberá trascender del ser interno del autor del delito, a través de actos que disminuyan o traten de disminuir los efectos de su conducta punible, tales como socorrer a la víctima, conducirla al hospital, etc. Resulta ilógico pretender que la justicia reconozca un arrepentimiento simplemente porque el autor así lo manifiesta verbalmente, sin que en ningún momento se haya evidenciado fácticamente dicha circunstancia. Concluimos que no es aplicable al presente proceso, pues **RAFAEL TORRES IBAÑEZ** no demostró su arrepentimiento por actos externos posteriores al delito.

En cuanto a la delincuencia primaria del procesado, ya el tribunal consideró esta situación para efectos de fijar la pena base (ver foja 667).

La Sala comparte la opinión del agente del Ministerio Público, respecto a la atenuante alegada por el defensor que trata de "no haber tenido la intención de causar un mal de tanta gravedad". Es ilógico pensar que quien lanza a una persona desde el piso quince de un edificio, no tiene la intención de que muera con la caída; por tanto, no es viable aplicar dicha atenuante.

Respecto al propósito de **TORRES IBAÑEZ** de indemnizar a la familia de la víctima, no constituye de por sí una circunstancia atenuante, por tanto, tampoco se puede reconocer como tal.

Por todo lo anterior, lo que procede es confirmar la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA en todas sus partes la Sentencia de veinticinco (25) de mayo de 1994, proferida por el Segundo Tribunal Superior en el proceso seguido a RAFAEL REYNALDO TORRES IBAÑEZ, por el delito de homicidio cometido en perjuicio de LUCRECIA INÉS GRANT SAMUELS.

Notifíquese, Cúmplase y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ROMÁN ELEUTERIO SMYTHE GARAY, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ALBERTO JIMÉNEZ LOAIZA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Para resolver la alzada, han ingresado a esta Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, las sumarias instruidas a **ROMÁN ELEUTERIO SMYTHE GARAY (A) VLADIMIR**, sindicado por el delito de homicidio en perjuicio de ALBERTO JIMÉNEZ LOAIZA.

Celebrada la audiencia en derecho, el Segundo Tribunal Superior DECLARO CULPABLE a **ROMÁN ELEUTERIO SMYTHE GARAY** de homicidio agravado y lo condenó a la pena principal de quince (15) años de prisión y a la pena accesoria de diez (10) años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, una vez cumplida la pena principal.

Al sustentar el fallo condenatorio, el Tribunal consideró que aunque **SMYTHE GARAY** negó a lo largo del proceso la autoría del hecho,

> "existen en su contra los informativos que ante la Policía Técnica Judicial rindieran los menores ALFREDO NAVAS SÁNCHEZ y ANTONIO ALFONSO GONZÁLEZ, quienes coinciden en señalar que Smythe fue la persona que disparó al infortunado Jiménez Loaiza. Además, según estos mismos declarantes, hubo concierto previo y el objeto de esa asociación ilícita era obtener violentamente un auto para dedicarse a pasear, siendo elegido al azar el taxi conducido por el occiso Jiménez Loaiza." (F. 307).

Igualmente indica el a-quo que contra la retractación que posteriormente, a través de indagatoria, hiciera el menor **ANTONIO ALFONSO GONZÁLEZ**, se yergue la declaración de **LUIS ALFONSO PEÑALOZA MORENO**, quien les tomó los mencionados informativos y señala que inicialmente los menores negaban su participación en el ilícito, pero que luego de conversar con ellos declararon que un tal "Vladimir" fue la persona que disparó. El Tribunal calificó el olvido que manifiesta GONZÁLEZ en su retractación de "burdo, inaudito", pues primeramente señaló conocer a **SMYTHE** por el apodo de VLADIMIR y luego manifiesta no haberlo inculpado y no conocer ni a éste ni a NAVAS. Seguidamente, el ponente realiza un análisis de la confesión y la retractación citando a GORPHE y un fallo de ese mismo Tribunal Superior en el cual se indica que la retractación no resta eficacia a lo declarado si otras pruebas apuntan en dirección contraria; y que la retractación deberá calibrarse según las circunstancias.

Respecto a lo alegado por la defensa en el acto de audiencia sobre la validez de los informativos rendidos por los menores, el a-quo señaló que la Policía Técnica Judicial por ser un instrumento de auxilio en las investigaciones del Ministerio Público, está autorizado para recibir declaraciones, informativos e indagatorias, y que las actuaciones de sus funcionarios se presumen correctas, salvo demostración en contrario.

Para dosificar la pena, el a-quo estimó que el homicidio fue calificado, "pues con él se pretendía facilitar el robo del auto conducido por la víctima y cualquier otro valor que éste cargara", y le fijó una pena base de quince (15) años que quedó inamovible ante la ausencia de circunstancias agravantes o atenuantes.

Por su parte, el defensor de oficio de **ROMÁN ELEUTERIO SMYTHE GARAY**, Licenciado DANILO MONTENEGRO, sustentó su apelación de fojas 327 a 331 del sumario, indicando que su inconformidad con la sentencia radica, entre otras cosas, en que le resulta increíble que se utilize la prueba de los informativos rendidos por los menores ante la P. T. J. para justificar las deficiencias probatorias que debían subsanarse durante la etapa sumarial; que la declaración jurada del detective **LUIS ALFONSO PEÑALOZA** es referencial y carece de fuerza probatoria en virtud del artículo 907 del Código Judicial y que a la luz del derecho es una prueba completamente ineficaz, arbitraria e ilegal.

Sigue diciendo el defensor, que los artículos 2° y 52 de la Ley 16 de 9 de junio de 1991 (orgánica de la P. T. J.) señalan con claridad meridiana que las indagatorias y declaraciones tomadas en la fase preliminar deben ser presididas por el agente del Ministerio Público, requisito que no se cumplió en los aludidos informativos; que no hay una retractación por parte del menor, sino una manifestación en el sentido de que nunca declaró lo que consta en el informativo y que no existen en el expedientes pruebas que apunten en dirección contraria. También indica el jurista que la única prueba válida en este proceso, lo es la declaración indagatoria de su defendido de la que se desprende que en ningún momento **SMYTHE GARAY** planificó el apoderamiento del taxi, sino que dicho acto, así como el disparo al taxista, fueron decididos por el menor **ANTONIO ALFONSO GONZÁLEZ**; que lo dicho por su patrocinado no es desvirtuado a lo largo del proceso; que la sentencia no puede pronunciarse sino con base exclusivamente en los elementos probatorios acopiados en la fase sumarial; que "apartarse del caudal probatorio para fallar constituye una violación del principio de seguridad jurídica"; y que la presencia de **SMYTHE GARAY** en el lugar de los hechos y en

compañía de los menores no significa que es autor o coautor del delito de homicidio ejecutado materialmente por el menor **ANTONIO ALFONSO GONZÁLEZ.**

Finalmente, el defensor opina que no se ha probado en autos que hubiese un acuerdo previo entre los tres para realizar un robo, y aún suponiendo que así hubiera sido, debe responder únicamente el que lo realizó, criterio éste que rige en materia de participación y hacia la cual se orienta la jurisprudencia de la Corte Suprema. Por todo esto, sostiene el abogado, que su patrocinado debe ser absuelto pues no se da en su caso, el fenómeno de la codelincuencia en el robo, ni la tentativa de robo.

De las piezas procesales se desprende que el hecho que motivó la presente investigación ocurrió en horas de la noche del día 29 de junio de 1992, cuando perdió la vida el señor ALBERTO JIMÉNEZ LOAIZA, víctima de impacto de bala mientras conducía el taxi placa N° 8T-3617 por la Vía Domingo Díaz, cerca a la estatua Roosevelt. Todo indica que los menores **ANTONIO ALFONSO GONZÁLEZ (TOÑO), ALFREDO NAVAS SÁNCHEZ (GARRA),** acompañados del imputado **ROMÁN ELEUTERIO SMYTHE GARAY,** acordaron apoderarse de un vehículo para pasear, de modo que abordaron el taxi que conducía JIMÉNEZ LOAIZA indicándole al conductor que los llevara a Villa Lucre, sin embargo a la altura de la estatua Roosevelt, según lo declarado por los menores, "VLADIMIR" le disparó a JIMÉNEZ LOAIZA.

El procesado niega en todo momento haber disparado al taxista, pero reconoce que estuvo presente en el lugar de los hechos, puesto que iba a acompañar a los menores a Villa Lucre porque ellos le iban a prestar una cantidad de dinero.

Para resolver el presente recurso, la Sala estima necesario hacer ciertas consideraciones.

La prueba de mayor peso que vincula al procesado con el homicidio de JIMÉNEZ LOAIZA, lo es su propia declaración indagatoria en donde reconoce haber estado en el momento y lugar del hecho punible, lo cual hace que contra él pesen indicios de presencia y oportunidad que no pueden ser dejados de lado al examinar este caso. Por otro lado, las declaraciones que virtieran en informativo ante la Policía Técnica Judicial, los menores involucrados en el proceso, **ANTONIO ALFONSO GONZÁLEZ (TOÑO) y ALFREDO NAVAS SÁNCHEZ (GARRA)** , quienes son contestes al afirmar que fue **"VLADIMIR"** quien accionó su arma de fuego contra el taxista.

Si bien es cierto la defensa ha calificado dichas declaraciones como nulas e inválidas por no haber sido ratificadas en las respectivas indagatorias, esta Sala comparte el criterio esgrimido por el a-quo en el sentido de que es cuestión reconocida por la doctrina que los testimonios rendidos inmediatamente después de ocurrido un suceso, son las más acordes con la realidad percibida por el sujeto, y por tanto, son las más confiables. Sobre este tema, vale la pena citar a EUGENIO FLORIAN, quien en su obra "De las pruebas penales", tomo II, páginas 75 y 76 afirma:

> **"Las primeras declaraciones de los testigos que se recogen en el procedimiento escrito deben tenerse como las más verídicas,** porque no hay tiempo de engañarlos o apartarlos de su deber, mientras en la discusión pública los testigos pueden, si están comprados o se les ha inducido a apartarse de su deber, retractarse impunemente de las declaraciones escritas en el expediente.". (Lo resaltado es nuestro).

Respecto al valor probatorio de los informativos obtenidos ante los agentes de policía, esta Sala se ha pronunciado con anterioridad, veamos este fallo de nueve (9) de mayo de 1991, bajo la ponencia del Magistrado JOSÉ MANUEL FAÚNDES:

> En Panamá las declaraciones ante las autoridades de policía sólo sirven de base cierta al funcionario de instrucción para iniciar la investigación respectiva. Pero una cosa es que no posean valor procesal per se y otra es que no puedan ser apreciadas por el juzgador. A este respecto, los autores estiman que efectivamente

> tales manifestaciones pueden ser apreciadas por el juzgador, atendiendo las condiciones que rodearon su obtención y a las demás pruebas que se logren acopiar en el proceso.
>
> Todo lo anterior significa que las declaraciones suministradas ante las autoridades de policía pese a no tener valor procesal per se pueden ser valoradas por el juzgador, puesto que el sistema de la sana crítica así lo permite.
>
> **Como corolario las declaraciones hechas ante las autoridades de policía, aún cuando no poseen valor probatorio per se podrán ser apreciadas por el juzgador, de acuerdo a la sana crítica**, atendiendo las circunstancias en torno a su receptación y al acopio de elementos de convicción que se logren incorporar a la investigación.". (La negrita es nuestra).

El anterior razonamiento es válido para asumir que los informativos que rindieron los menores ante los agentes de policía, son perfectamente válidos, desde el punto de vista del análisis que de ellos haga el juzgador con base en la sana crítica. Aunado a que dichas declaraciones fueron hechas transcurrido muy poco tiempo después de la comisión del hecho punible, lo cual hace presumir que son las más acordes con la realidad.

Con relación a la circunstancia agravante especial considerada por el Tribunal Superior y que aparece contemplada en el numeral 5 del artículo 132, que trata del homicidio para preparar, facilitar o consumar otro hecho punible, estima la Sala que dicha circunstancia se encuentra debidamente probada en el sumario, por la forma como se desenvolvieron los hechos y por las declaraciones de los menores involucrados indican que la intención era robar el vehículo para "pasear". Consideramos adecuada la aplicación de dicha agravante que hiciera el tribunal, y por ello estimamos procedente confirmar la sentencia apelada. El hecho que se sanciona en el presente proceso, no deja de causar indignación, puesto que el occiso se dedicaba al momento del asalto a prestar un servicio al público, como lo es el servicio de taxi, y además consta en autos que era una persona estimada en su comunidad, lo cual hace más gravosa la situación.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA en todas sus partes la Sentencia de 19 de julio de 1994, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, en el proceso seguido a ROMÁN ELEUTERIO SMYTHE GARAY, por el delito de homicidio en perjuicio de ALBERTO JIMÉNEZ LOAIZA.

Notifíquese, Cúmplase y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JUICIO SEGUIDO A MARIO CHIN MARTÍNEZ, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE LUIS JIMÉNEZ RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de apelación ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Sentencia de 31 de agosto de 1995 (fs. 606 a 609), dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial, David, que condenó a **MARIO CHIN MARTÍNEZ** a la pena principal de diez (10) años de prisión; y, a las penas accesorias de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por

igual término que la pena principal, y al comiso del arma utilizada en el hecho, por el delito de homicidio en perjuicio de LUIS JIMÉNEZ RODRÍGUEZ.

Al culminar la Audiencia Pública, **MARIO CHIN MARTÍNEZ** fue declarado culpable por los Jueces de Conciencia a quienes correspondió juzgarlo (f. 484), de la muerte causada al señor LUIS JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, a consecuencia de herida producida con arma de fuego, hecho ocurrido en horas de la tarde del día 23 de febrero de 1993, en el sector de la Finca 12, Distrito de Changuinola, Provincia de Bocas del Toro.

Según se desprende de foja 457, **MARIO CHIN MARTÍNEZ** le revocó el poder especial al licenciado FERNANDO FABIÁN GUTIÉRREZ, otorgándoselo al licenciado RAFAEL ALBERTO SANTAMARÍA G, a fin de que este último continuara el proceso formulado en su contra.

El licenciado **Rafael Alberto Santamaría G.**, Defensor de Oficio Distrital, solicitó en su escrito de apelación (fs. 619-620), que se reforme la Resolución impugnada, en base a la conducta observada por su defendido en el establecimiento penal y por las razones siguientes:

> "**PRIMERO:** Que mi defendido es la primera vez que transgrede la Ley penal.
>
> **SEGUNDO**: Que mi defendido, fue agredido u ofendido, él su esposa y su menor hijo, el cual no alcanzaba la edad de un año.
>
> **TERCERO**: El hecho se produce en circunstancias muy dificiles (sic) de precisar al extremo que el médico forense indicó que pudo haberse suscitado el disparo accidentalmente.
>
> **CUARTO**: Que mi defendido confesó oportunamente el haber utilizado el arma aludiendo que pudo ser accidental." (f. 619).

Por su parte, en escrito de sustentación apelación (fs. 614 a 618), presentado por el propio **MARIO CHIN MARTÍNEZ**, éste señaló que la condena de diez (10) años de prisión es exagerada y, en tal sentido, manifestó que por las contradicciones de los testigos presenciales de los hechos, la duda debe favorecer al reo, y que el delito debe considerarse como homicidio culposo y no doloso.

Por último, en encausado se refiere a que deben ser consideradas las atenuantes por ser delincuente primario y por su confesión espontánea, "... mi confeción (sic) fue oportuna y espontánea, ya que después del lamentable caso, me dirigí directamente a mi humilde casa en espera de los acontecimiento (sic) posteriores." (F. 616).

En contestación de traslado de 29 de septiembre de 1995 (fs. 622-623), el licenciado EDWIN ALVAREZ CAMAÑO, Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial, solicitó que la Sentencia impugnada sea confirmada en todas sus partes. Y, en primer lugar se refirió al escrito presentado por el propio procesado, a saber:

> "En primer punto nos hemos de referir al escrito del imputado Chin Martínez. El mismo en lo medular hace referencia a que en el proceso que se le instruyó no se tomó en cuenta la verdad real sino la verdad procesal y que por lo tanto la pena impuesta a (sic) sido muy alta, solicitando por ende una rebaja de la misma, pues dice que confesó espontánea y oportunamente los hechos y la calificación legal de su conducta ha sido errada, dado que estima que ejecutó un homicidio culposo y no doloso.
>
> Esta apreciación del imputado en referencia la consideramos muy subjetiva, y de ninguna manera se puede tomar en cuenta porque ya el jurado de conciencia se pronunció sobre su responsabilidad en los hechos y lo que el (sic) alega en su defensa no es objeto de este

> recurso, razón por la cual opinamos no debe ser estimado. ... ." (F. 622).

El Agente del Ministerio Público, al referirse a lo argumentado por el Defensor de Oficio, señaló que la pena impuesta se ajusta a la verdad real y procesal conforme lo establece nuestro ordenamiento jurídico, y que:

> "Sobre lo anterior hemos de señalar que la agresión resaltada por la defensa no justifica la acción adoptada por el justiciado aunque se hayan (sic) dado en las circunstancias difíciles que este indica." (F. 623).

Para entrar a resolver la alzada, luego de la lectura de los respectivos escritos de apelación, la Sala colige que tanto el libelo presentado por el Defensor de Oficio como el presentado por el propio encausado, argumentan básicamente lo mismo y, en tal virtud analizaremos ambos escritos simultáneamente.

Sobre los dos primeros puntos planteados por los recurrentes en cuanto a la calidad de delincuente primario de **MARIO CHIN MARTÍNEZ**, a las circunstancias que rodearon el hecho, cabe indicar que estos factores se toman en cuenta para la individualización de la pena en abstracto partiendo de los intervalos fijados por la individualización legal, conforme el artículo 56 del Código Penal y, en tal virtud, en cuanto a la pena base fijada, debe respetarse la discrecionalidad del juez al fijar la pena base dentro del intervalo penal contentivo de la punibilidad aplicable al delito, o sea, la individualización judicial por antonomasia que hace el juez de la causa en uso de sus facultades legales, considerando además, los elementos de juicio del proceso respecto de la persona del sujeto activo del delito. Además, tales circunstancias no son elementos susceptibles de ser apreciados como atenuantes de la responsabilidad penal, puesto que ello significaría una doble valoración.

En cuanto a lo argumentado por los recurrentes al sugerir que la muerte fue causada de manera accidental, es decir, que se trata de un homicidio culposo y no doloso, advertimos que tal situación no puede ser modificada por el Tribunal de instancia, en razón de que el proceso fue llevado ante los Jurados de Conciencia, y finalizada la labor de los Jurados de Conciencia con el veredicto de culpabilidad contra el enjuiciado, por la conducta delictiva que se encuentra tipificada en el artículo 131 del Código Penal, el Tribunal Superior no hizo más que elaborar la Sentencia procedente, conforme a lo dispuesto en el artículo 2389, párrafo 2do. del Código Judicial.

Finalmente, los recurrentes sostienen que en el caso sub-judice, concurre la atenuante establecida en el numeral 5 del artículo 66 del Código Penal, es decir, la confesión espontánea y oportuna del agente. Sobre este último punto alegado, la Sala considera que no es procedente reconocerlo puesto que la confesión del agente no fue espontánea, entendiéndose como voluntaria, ni oportuna, entendiéndose como una contribución indispensable para el esclarecimiento y precisión sobre la ocurrencia de los hechos, puesto que el delito se perpetró delante de varias personas como testigos presenciales del hecho, durante las fiestas de Carnavales, de tal manera que, independientemente de que el autor del ilícito hubiese negado ante las autoridades de policía que utilizó un arma para causarle la muerte al hoy occiso, su autoría se habría podido determinar.

En la Sentencia apelada el Tribunal del conocimiento individualizó la pena en abstracto dentro del intervalo penal que oscila entre cinco (5) y doce (12) años de prisión, por configurar la conducta delictiva, el tipo del homicido simple del artículo 131 del Código Penal, es decir, la conducta de causar la muerte a otro.

Al fijar la pena base, el a quo tomó en cuenta los factores previstos en el artículo 56 de la excerta penal patria: "... las circunstancias de modo, tiempo y lugar que acompañaron el evento, es decir la celebración de las fiestas de carnaval que tornaba claramente factible y por ende previsible que incidentes como nuestras tradicionales mojaderas se sucedieran. En este mismo contexto el

tribunal no ha dejado de considerar la calidad de los motivos que, cuando menos como causa remota han incidido en el resultado antijurídico ahora sancionado, es decir el exagerado y desproporcionado reclamo hecho por un adulto a un niño por haberlo mojado." (F. 608).

El tribunal a quo individualizó la pena base por homicidio simple, en diez (10) años de prisión y, por no existir circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, ni atenuantes ni agravantes, que aplicar al momento de la concretización de la pena, fijó la pena líquida a cumplir en diez (10) años de prisión.

También, se fijaron las penas accesorias de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término que la pena principal, y el comiso del arma utilizada en el hecho.

Estima la Sala que una pena base de diez (10) años de prisión es cónsona con la gravedad y condiciones en que se cometió el delito.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Sentencia apelada de 31 de agosto de 1995, dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial, David, que condenó a MARIO CHIN MARTÍNEZ a la pena principal de diez (10) años de prisión; y, a las penas accesorias de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término que la pena principal, y el comiso del arma utilizada en el hecho, por el delito de homicidio en perjuicio de LUIS JIMÉNEZ RODRÍGUEZ.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA EN EL PROCESO SEGUIDO A AMADO SÁNCHEZ ORTEGA, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE OVIDIO PINEDA SANJUR, CAMILO CERRUD Y FIDEL DOMÍNGUEZ FRÍAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Para resolver la alzada, ha ingresado a este despacho el proceso seguido a **AMADO SÁNCHEZ ORTEGA**, sindicado por el delito de homicidio cometido en perjuicio de OVIDIO PINEDA SANJUR, CAMILO CERRUD Y FIDEL DOMÍNGUEZ FRÍAS, hecho ocurrido el día 22 de diciembre de 1989 en el Sector N° 3 de Villa Grecia de esta ciudad.

En un juicio por jurados de conciencia, el recurrente fue encontrado culpable por el homicidio de FIDEL DOMÍNGUEZ FRÍAS y declarado inocente por los de OVIDIO PINEDA SANJUR y CAMILO CERRUD. Por ello, el Segundo Tribunal Superior, mediante Sentencia de 8 de julio de 1994, lo condenó a la pena principal de veinte (20) años de prisión y la accesoria de dos (2) años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas una vez cumplida la pena principal.

Para dosificar la pena, el Tribunal consideró que el delito por el cual se procesa a **AMADO SÁNCHEZ ORTEGA** es de los que atentan contra la vida, específicamente el homicidio calificado que aparece contemplado en el numeral cinco (5) del artículo 132 del Código Penal (para facilitar la comisión de otro hecho punible). Fijó la pena base en el máximo, es decir, veinte (20) años, pues estimó que **SÁNCHEZ ORTEGA** le causó la muerte a otros para facilitar el robo del supermercado Yau Bic.

Otros criterios que fueron tomados en cuenta para fijar la pena base, además de los parámetros contemplados en el artículo 56 del Código Penal, fueron que "al momento de llevar a cabo el hecho punible tenía 44 años de edad, es decir, se trata de un hombre maduro, sabía lo que hacía, actuó con ventaja, no hubo justificación del hecho, ha terminado la escuela básica y estudios secundarios hasta el cuarto año, el sujeto pasivo no provocó la acción, ha negado la comisión del hecho punible".

Por su parte, el defensor de oficio del procesado, el Licenciado DANILO MONTENEGRO, sustentó recurso de apelación de fojas 319 a 322 del expediente, en el cual sostiene que la afirmación que se hace en la página 4 de la sentencia (foja 301), en el sentido de que su representado incurrió en el delito de homicidio para facilitar el robo del supermercado (homicidio agravado-numeral 5, artículo 132), resulta incongruente con la realidad procesal y jurídica que obra en éste proceso, por lo siguiente:

-porque en el expediente obra una serie de testimonios de personas que no presenciaron el hecho, sino que tuvieron conocimiento de él de manera referencial; por el contrario, afirma el jurista, de las declaraciones de los testigos presenciales no se desprende de ninguna manera lo que indica el tribunal respecto a que **SÁNCHEZ ORTEGA** cometió el homicidio para facilitar el robo;

-porque los testigos presenciales coinciden en afirmar que una de las personas que llegó al supermercado Yau Bic con el fin de violentar y robarlo fue el hoy occiso, FIDEL DOMÍNGUEZ FRÍAS, quien además amenazaba con un arma de fuego al hermano del procesado, **JOSÉ MERCEDES MONTERO TANFORD** para obligarlo a abrir el local comercial.

-que si bien es cierto, el fallo del jurado de conciencia es inalterable, "el Tribunal tiene la obligación funcional de expedir un fallo cónsono con la realidad que ofrecen las pruebas acopiadas".

Sigue diciendo el defensor que, esa realidad es que el imputado en ningún momento buscó la confrontación; que estando en peligro la vida de su hermano, **AMADO SÁNCHEZ ORTEGA**, se vio obligado a utilizar un arma de fuego que poseía, lo cual provocó una balacera, en la que resultó muerto FIDEL DOMÍNGUEZ FRÍAS. Finalmente, el defensor comparte y reitera los criterios que en su salvamento de voto expuso el Magistrado ANDRÉS ALMENDRAL, y solicita que se reconozcan las atenuantes que éste señalara.

Se hace necesario, pues referirnos al salvamento de voto que en la presente sentencia hiciera el Magistrado ANDRÉS ALMENDRAL, quien manifiesta su disconformidad con la sentencia e indica en lugar de veinte (20) años, la pena impuesta al procesado debió ser de veinte (20) meses de prisión. Dicha opinión está fundamentada en una serie de testimonios que se leen en el sumario, de los cuales concluye que **SÁNCHEZ ORTEGA** actuó en defensa de su hermano **JOSÉ MERCEDES MONTERO T.** en momentos en que era inminente su muerte en manos del sujeto que lo tenía apuntado en la cabeza, y que a la sazón resultó ser el Sargento FIDEL DOMÍNGUEZ FRÍAS. Que no puede el fallo de la mayoría adecuar dicho comportamiento al supuesto del numeral 5 del artículo 132, ya que está "hartamente comprobado" que **SÁNCHEZ ORTEGA** no estaba apoyando a los asaltantes, sino más bien combatiéndolos para evitar que su hermano saliera lesionado. Por todo esto concluye el Magistrado ALMENDRAL que el Tribunal debió imponer la pena mínima por el delito de homicidio simple, es decir, cinco (5) años, sin concurrir circunstancias agravantes, sino más bien dos atenuantes: la del numeral 1 del artículo 66 del Código Penal, haber actuado por motivos nobles (para salvar la vida de su hermano); y la del numeral 8 del mismo artículo, por las peculiares condiciones del ambiente (debido a las repercusiones de la invasión a Panamá del 20 de diciembre de 1989). De este modo, la pena base de sesenta (60) meses (5 años) de prisión se debió rebajar dos terceras partes (40 meses) por las dos atenuantes, quedando la pena líquida en veinte (20) meses, que según la opinión de este Magistrado podría ser reemplazada por alguna de las medidas enumeradas en el artículo 82 del Código Penal.

Corrido el traslado al señor Fiscal Tercero Superior del Primer Distrito

Judicial de Panamá, éste contestó el escrito de apelación en el cual expresa su opinión, en el sentido de que si bien es cierto que el jurado de conciencia encontró al procesado inocente de los cargos de homicidio en perjuicio de CAMILO CERRUD y OVIDIO SANJUR, no es menos cierto, que la balacera en la que ellos fallecieran fue iniciada por el sindicado; que no puede pasarse por alto que el jurado de conciencia condenó al sindicado por el homicidio de FIDEL DOMINGO FRÍAS, por lo cual concluyó que no existían causas de justificación en los actos cometidos en detrimento de aquel. También afirma el agente del Ministerio Público que, no puede pasarse por alto que el sindicado utilizó indiscriminadamente un arma de guerra sin meditar el peligro en que ponía a las demás personas presentes en el lugar; que los hechos ocurrieron por culpa del reo, ya que una persona que quiere ayudar a un pariente en inminente peligro jamás esgrimiría una frase como "APÁRTENSE TODOS QUE AQUÍ VA VER (SIC) GUERRA". Sigue manifestando el Fiscal que en el expediente no quedó comprobado que el sindicado tuviera la intención de combatir a los supuestos asaltantes, y que prueba de ello es que ante el hecho vio la oportunidad de usar su arma de guerra. Opina el Fiscal que tampoco está consignado en el expediente que el sindicado actuó por motivos nobles, tratando de salvar a su hermano; que el procesado no colaboró en la investigación y trató de cubrir sus acciones mintiéndole al despacho cuando negó su participación en los hechos. Finalmente, el funcionario instructor indica que no hay circunstancias que prueben que el sindicado tuvo la intención de propiciar el robo del supermercado YAU BIC, no obstante tampoco acuerpa la idea de una pena tan moderada como la pedida por el Magistrado ALMENDRAL; de modo que considera que una pena fijada en el tope del artículo 131 del Código Penal (12 años), sin ningún tipo de atenuantes, es lo que se debe aplicar.

De las constancias procesales se desprende que el hecho que provocó la investigación presente ocurrió el día 22 de diciembre de 1989 en el sector N° 3 de Villa Grecia, corregimiento de Alcalde Díaz, cuando varios hombres armados intentaban abrir el supermercado YAU BIC con el fin de saquearlo, acción que vecinos del lugar impedían, entre ellos el hermano del procesado, señor **JOSÉ MERCEDES MONTERO T.**, quien por su negativa a permitir el paso de los asaltantes, fue apuntado en la cabeza por uno de ellos que resultó ser el hoy occiso Sargento FIDEL DOMÍNGUEZ FRÍAS. El procesado **AMADO SÁNCHEZ ORTEGA** que vivía a unos veinte (20) metros del supermercado YAU BIC, empezó, luego de advertir a los presentes que se apartaran, a disparar un arma de alto calibre (AK-47) que poseía en virtud de su calidad de miembro de los Batallones de la Dignidad. Víctimas de esta acción resultaron OVIDIO SANJUR, CAMILO CERRUD y FIDEL DOMÍNGUEZ FRÍAS, quien fuera identificado por **JOSÉ MONTERO** como la persona que le apuntó a la cabeza con un arma justo antes del tiroteo.

En el expediente obra una serie de testimonios que, como bien indicara el defensor, son meramente referenciales y no coinciden exactamente con lo que declaran los testigos presenciales del hecho. Lo cierto es que no podemos afirmar que el sindicado estaba propiciando o facilitando la comisión del robo, puesto que no se encontraba presente al momento en que se iniciaron los hechos; más bien, todo parece indicar que realmente su acción iba dirigida a evitar que lesionaran o mataran a su hermano. No es admisible, pues la calificación del homicidio como agravado por el numeral 5 del artículo 132, sino la de homicidio simple al tenor de lo dispuesto en el artículo 131 del Código Penal. Por ello, estimamos que una pena base para el homicidio simple en nueve (9) años, es acorde con las circunstancias y la gravedad del hecho.

Respecto a las atenuantes a que hace referencia el salvamento de voto y que además son pedidas por el defensor de oficio, debemos indicar respecto a la que aparece contemplada en el numeral uno (1) del artículo 66 del Código Penal, que el actuar por motivos nobles o altruistas no puede servir como justificación cuando se produce la muerte de tres personas; el agente, debió prever la posibilidad de que personas inocentes salieran lesionadas con su actuar. No es posible aplicar esta atenuante, cuando se da un exceso como es el causar la muerte de tres personas para evitar la de una. Terminar con la vida de un ser humano, cuando se pudo evitar el daño de otra forma (inmovilizándolo o dejándolo fuera de combate) no puede, desde nuestro punto de vista, tomarse como un actuar por motivos nobles.

En cuanto a la segunda atenuante que se invoca, la del numeral 8 del artículo 66 que trata de las peculiares condiciones del ambiente, compartimos el criterio del apelante, respecto a que la situación imperante en el país causada por la invasión que ocurriera el 20 de diciembre de 1989, sumió a la ciudadanía en un estado de anarquía, barbarie y angustia que afectó evidentemente el actuar del sindicado, y provocó indirectamente el hecho de sangre que hoy se sanciona. Estima la Sala que respecto a esta atenuante procede rebajar una sexta parte de la pena base, es decir un año (1) y seis (6) meses, de modo que la pena líquida a imponer al procesado sería de siete (7) años y seis (6) meses de prisión, ya que no concurren circunstancias agravantes en su contra.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REFORMA la Sentencia emitida por el Segundo Tribunal Superior, con fecha 8 de julio de 1994, en el sentido de CONDENAR a AMANDO SÁNCHEZ ORTEGA a la pena principal de siete (7) años y seis (6) meses de prisión por el homicidio en perjuicio de FIDEL DOMÍNGUEZ FRÍAS, y CONFIRMA la sentencia en todo lo demás.

Notifíquese, Cúmplase y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO PENAL SEGUIDO A MEXI EVIDEL GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ JIMÉNEZ Y REGINO GRAJALES GONZÁLEZ, POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE LIBERATO CERRUD CEDEÑO Y AMINTA ESPINO DE DELGADO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial mediante sentencia dicta el 30 de mayo de 1994, condenó a **MEXI EVIDEL GUTIÉRREZ JIMÉNEZ**, a **MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ JIMÉNEZ** y a **REGINO GRAJALES GONZÁLEZ**, a la pena principal de veinte (20) años de prisión y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo período después de cumplida la pena principal, por el delito de homicidio agravado, luego que un jurado de conciencia los encontró culpables por la comisión de dicho ilícito.

Los antecedentes del caso revelan que el 9 de diciembre de 1990 en el Corregimiento de Cañas, Distrito de Tonosí, Provincia de Los Santos, se produjo un hecho de sangre en el cual perdieron la vida los señores **LIBERATO CERRUD CEDEÑO** y **AMINTA ESPINO DE DELGADO**, pareja de campesinos de la comunidad, a mano de desconocidos.

Sus cuerpos se encontraron al día siguiente -10 de diciembre- maniatados, amordazados, y sangrando abundantemente producto de los golpes recibidos que les produjeron el deceso.

Durante las pesquizas realizadas conjuntamente por la Policía Técnica Judicial, la Personería de Tonosí, la de Pedasí y la Fiscalía Superior, se detuvo -en la fecha señalada- un busito para su debida inspección, sospechándose que habían sido abordado por los presuntos autores del ilícito, puesto que había salido del Corregimiento de Cañas, con destino a Las Tablas, el día precitado en horas de la mañana, cuando ya la comunidad sabía el incidente.

La sentencia fue apelada por las partes perjudicadas, y el recurso en favor de **MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ** y **REGINO GRAJALES GONZÁLEZ** fue sustentado en tiempo por el Licenciado Efraín Eric Angulo, Defensor de Oficio Interino del Tribunal

Superior del Cuarto Distrito Judicial, mientras que la apelación en favor de **MEXI EVIDEL GUTIÉRREZ JIMÉNEZ** fue sustentada oportunamente por el Licdo. Alcides Gabriel Zambrano González, también Defensor de Oficio del Circuito Judicial de Los Santos.

El Licdo. Efraín Angulo presentó su recurso impugnativo en favor de **GUTIÉRREZ JIMÉNEZ** y **GRAJALES GANDULAS** fundamentado en los siguientes argumentos:

Que sus defendidos no son reincidentes;

Que las agravantes determinadas por el a-quo "no han sido comprobadas fehacientemente en el proceso, existiendo dudas en cuanto a la dosificación de la pena."

Que en base al principio "in dubio pro reo" y al no probarse claramente las agravantes reconocidas en la sentencia, es menester de esta Colegiatura atenuar la pena impuesta a los responsables del delito.

Por su parte, el Licdo. Alcides Zambrano esgrimió en su recurso los siguientes argumentos:

En relación al análisis de muestras de tierra encontradas en las zapatillas marca **Pro Specs** que usaba **MEXI GUTIÉRREZ**, comparadas por el Laboratorio de la Policía Técnica Judicial con los cúmulos de tierra recogidos en tres puntos distintos del lugar de los hechos -el 1° recogido en el lugar donde se encontraron las huellas de las zapatillas, el 2° obtenido en el lugar donde se halló el cuerpo de la occisa y el 3° encontrado en el lugar donde saltaron los sospechosos la cerca de la casa de los ofendidos- se concluyó que los componentes químicos de las muestras N° 1 y N° 2 difieren radicalmente de la tierra encontrada en las mencionadas zapatillas; empero, la muestra N° 3 es similar a la encontrada en las mismas.

Señala el apelante que dicha similitud no implica igualdad absoluta, sino una simple semejanza o parecido, que puede producirse con tierra de lugares aledaños o muy distantes del sitio de procedencia.

Los testimonios de los otros imputados, de la Corregidora de Cañas, el dueño de una abarrotería y su padre, demuestran que el precitado fue ese día a su casa, a varios lugares, por lo que la tierra encontrada en las zapatillas pudo ser de cualquiera de esos lugares, que -según el letrado- son de la misma configuración geográfica, por tratarse de un poblado costero y circunscrito a un área pequeña.

En el mismo sentido, cuestiona el apelante la inexistencia de las muestras de tierra N° 1 y N° 2 en las zapatillas de su defendido, toda vez que las huellas de zapatillas grandes enlodadas -de más de una persona- encontradas en la Diligencia de Reconocimiento y Levantamiento de los cadáveres se produjeron desde el interior de la casa, donde estaba el cadáver de **LIBERATO CERRUD CEDEÑO** y continuaron hasta el patio trasero de la casa colindante, dejando lodo a su paso.

Además, como un "número indeterminado" de personas llegaron al lugar de los hechos, nada garantiza que las huellas encontradas fueran la de los justiciados.

Sobre el punto, señala como circunstancia atenuante la no justificación de la tierra en las zapatillas, si se supone que lavaron sus ropas en el río en la mañana siguiente.

Esa circunstancia es apoyada -a juicio del Licdo. Zambrano- por el hecho de que el dictamen médico legal de **GUTIÉRREZ** descartó toda huella de violencia en el cuerpo de los ofensores -argumento utilizado como atenuante-, y las pruebas de laboratorio negaron la existencia de sangre oculta en las citadas zapatillas y en la ropa que llevaban éstos, pese a que en esa diligencia se mencionó un charco de sangre y una violenta lucha, y que en los protocolos de necropsia se dejó constancia de la existencia de múltiples heridas en las víctimas.

El protocolo de necropsia del occiso dictaminó que éste fue maniatado y amordazado, que las heridas cortantes en la mano izquierda demuestran maniobras de defensa antes de que fuera atado.

Otro punto atacado por el apelante, se refiere a la relación entre la hora en que **MEXI GUTIÉRREZ** manifestó haber llegado a casa de sus padres en compañía de los otros dos encartados, y la hora probable de la muerte de los finados -aproximadas a la verdad según el letrado- en razón al estado de los alimentos encontrados en los cuerpos exánimes.

La veracidad de la hora de muerte manifestada por **MEXI GUTIÉRREZ** se apoya -según el defensor- en que la hora probable de muerte parte del hecho incierto de la hora de ingestión de los alimentos encontrados en los estómagos de los cadáveres, siendo que, como la hora del óbito fue entre las 9:00 p. m. y 11 p. m., no hay base para conjeturar que fuera cerca de las 9:00 de la noche y no más tarde.

Otro indicio incriminatorio puesto en duda por el actor -y esgrimido como circunstancia atenuante-, es el atinente al habérsele incautado parte de las joyas a **MIGUEL ÁNGEL** lo cual es un indicio perjudicial para quien las poseía, pero la extensión de la sospecha a su hermano **MEXI** no tiene base jurídica, pues la responsabilidad de aquel por la posesión de las prendas es limitada a su persona, y su parentesco con **MEXI** no significa que éste tuviera conocimiento de ese hecho.

El hecho de que **MEXI GUTIÉRREZ** dijera que no tenía conocimiento de que su hermano poseía esas prendas demuestra su "buena fe", porque esa aseveración no beneficia a su hermano **MIGUEL ÁNGEL**, quien manifestó que era propietario de las mismas, al igual que **REGINO GRAJALES**, lo que demuestra la no intención de plantear una coartada a su hermano; ello vigoriza la presunción a su favor.

Otro argumento del a-quo atacado por el Licdo. Zambrano, es que por lógica **MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ** y **REGINO GRAJALES** fueron informados de que el difunto **LIBERATO CERRUD** tenía una buena suma de dinero producto de la reciente venta de ganado, y como el primero dijo que no se había comunicado con su hermano hacía aproximadamente un mes, se puede deducir que sí se produjo esa comunicación mientras estuvo en Cañas, porque llegó a ese lugar el 3 de noviembre y la declaración de **MIGUEL ÁNGEL** fue recibida el 12 de diciembre.

MEXI GUTIÉRREZ nunca aceptó haberse comunicado con su hermano **MIGUEL ÁNGEL**, quien tampoco afirmó haber hablado con **MEXI**.

Afirma el letrado que la respuesta de **MIGUEL ÁNGEL** a la pregunta de cuándo fue la última vez que había visto a su hermano fue mal respondida, pues contestó negativamente que no se había comunicado telefónicamente "un mes atrás", sin responder concretamente la pregunta; dicha respuesta debió originar una pregunta aclaratoria que no se hizo; en fin, no se afirmó la llamada telefónica sino lo contrario.

Incluso, de haberse hecho la llamada -afirma el letrado-, no hay manera de probar que se transmitió la información que dispuso a los encartados a cometer el ilícito, porque no consta que **MEXI GUTIÉRREZ** tuviera conocimiento de la venta de ganado que hizo el occiso dos semanas antes del hecho que nos ocupa, y que todos en el sector sabían. Además, es costumbre de los lugareños guardar su dinero en casa.

En otro orden de cosas, la relación de los golpes intensos que recibieron los finados en la parte superior del tronco, cuello, cara y cráneo, con el testimonio de **LUCAS NAVARRO VITAL** o **LUCAS GÓMEZ**, quien dijo haber visto al reo trotando por el callejón cercano a su casa -porque se dedicaba al boxeo- "no tiene cabida a la luz de las garantías constitucionales", tales como la presunción de inocencia y el "in dubio pro reo"; cualquier persona con fuerza física -y máxime siendo más de uno- pudo causarle el daño realizado a los campesinos asesinados.

El uso de armas pudo facilitar la comisión del ilícito en estudio, lo cual no fue descartado en ningún momento por las experticias médico legales; por ello, no hay razón -afirma el abogado defensor- para sostener que tuvo que ser un boxeador uno de los autores. En ese sentido, tanto **MIGUEL GUTIÉRREZ** como **REGINO GRAJALES**, como pescadores, tienen la contextura física apropiada para la comisión del ilícito.

Además, consideró el Licdo. Alcides Zambrano, entre las circunstancias atenuantes que benefician a su defendido y que no se han estimado, las siguientes:

La buena conducta del sentenciado, que no tiene antecedentes policivos ni penales.

Se justificaba su presencia en el bus, pues se dirigía de regreso a Panamá a continuar con sus labores de pesca.

A **GUTIÉRREZ** sólo se le encontró ochenta -0.80 ç- centésimos al momento de su captura.

Por su parte, la Licda. Nedelka Díaz de Castillo, Fiscal Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial, se opuso a la apelación presentada por los abogados defensores, refiriéndose primero a la del procurador judicial de **MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ JIMÉNEZ** y **REGINO GRAJALES GONZÁLEZ**, y luego se concentró en la impugnación del defensor de **MEXI EVIDEL GUTIÉRREZ JIMÉNEZ.**

En cuanto al primer recurso de apelación, considera la Funcionaria Instructora que al a-quo "... le faltó el mecanismo legal para aumentar la pena, ..." considerando que hubo premeditación, medios atroces, saña, alevosía, ventaja; hizo un "cuadro mental" de la situación en la que cometió el crimen, en el que las víctimas fueron sorprendidas por los sentenciados -jóvenes fuertes- a quienes conocían, razón por la que éstos les mataron, para no ser reconocidos.

Resalta el señor Procurador el hecho de que, por la manera en que están hechas las viviendas en el interior, era del conocimiento general la venta de ganado por parte del Sr. **LIBERATO CERRUD.**

Relaciona también las heridas producidas en las víctimas con las características de juventud, atletismo y profesión de los justiciados, como motivos suficientes para acreditar varias causales contenidas en el artículo 132 del Código Penal.

En cuanto al punto relacionado con la tierra encontrada en las zapatillas de **MEXI EVIDEL GUTIÉRREZ**, manifestó la Sra. Fiscal Superior que se le indicó en una capacitación a laboratoristas de la P. T. J., que ningún patio es igual al otro, pues cada uno tiene características propias; los técnicos también le dijeron -señala la Funcionaria- que utilizan el término "similar" en sus informes, y describen las características del suelo para que el mismo juzgador valore su pericia.

Cuestiona la representante del Ministerio Público la solicitud contenida en la foja 251 del expediente, en la que los abogados defensores solicitan realizar el peritaje con otra institución, prueba que fue admitida, pero que nunca la realizaron.

En cuanto al argumento del Licdo. Zambrano, atinente a que su representado fue a varios lugares esa noche y después se fue a dormir, considera la Licda. Nedelka Díaz de Castillo que no se puede saber lo que pasaba por su mente, aunque ello hubiese sido así; especula que el sentenciado estaba estableciendo una coartada.

En cuanto a las señales de defensa en las manos del occiso y la ausencia de lesiones en el inculpado, considera la Sra. Fiscal que dicho contraste se explica por ser **MEXI GUTIÉRREZ** boxeador, amén de que "... los golpes sugieren que el agresor tenía fuerza y vigor; ..."

Afirma la Opositora que fue **MEXI GUTIÉRREZ** quien convenció a su hermano **MIGUEL ÁNGEL** para cometer el ilícito, ya que conocía las costumbres de los **CERRUD**, sabía de la venta de ganado, de la casa y lugares aledaños.

También pudo constatar en la vista oral la mala conducta de los hermanos **GUTIÉRREZ JIMÉNEZ**, así como que los vecinos sabían que las víctimas tenían dinero en su casa, por dedicarse a la compra-venta de ganado.

En otro sentido, los culpados vestían prendas de color oscuro, mangas largas y guantes para no sufrir rasguños en su brazos y no dejar marcas de sus cuerpos en los de las víctimas, según su parecer.

Acepta la opositora que si el pueblo sabía que el Sr. **CERRUD** guardaba el dinero en su casa, todos eran sospechosos del crimen, pero resalta que los únicos que llegaron de Panamá en la noche y se regresaron en la mañana, llevándose la ropa mojada -la cual fue lavada por las manchas de sangre- fueron los justiciados.

Cuestiona la Licda. Díaz de Castillo la cantidad de dinero -ochenta centésimos- encontrados en poder de **MEXI GUTIÉRREZ**, considerando que no podía llegar hasta Panamá con esa cantidad de dinero; lo que ocurrió -según su opinión- es que uno de los tres delincuentes llevaba el botín y tenían que salir los tres del lugar.

En otro sentido, la etiqueta con la marca "HANG TEN" encontrada en el teatro de los acontecimientos, relacionada con un suéter de la misma marca que vestía uno de los involucrados -acreditada a fs. 250- constituye otro indicio grave de que los hermanos **GUTIÉRREZ** y **REGINO GRAJALES** estuvieron en casa de los **CERRUD** la noche de su desaparición.

Luego de vertidos los elementos más sobresalientes en el presente caso, se dispone esta Sala a emitir su decisión, para lo cual analizará primero la apelación del Licdo. Efraín Eric Angulo, y luego la del Licdo. Alcides Gabriel Zambrano, formulando las siguientes consideraciones:

Iniciando el estudio de la apelación presentada por el Licdo. Efraín Angulo en favor de **MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ JIMÉNEZ** y **REGINO GRAJALES GONZÁLEZ**, advierte esta Corporación de Justicia que el letrado alega que sus defendidos no son reincidentes.

Yerra el defensor con este argumento, pues ya esta Sala ha manifestado en diferentes fallos que la ausencia de reincidencia no constituye una circunstancia atenuante para el infractor de la norma penal, sino un criterio para la fijación de la pena.

Continuando con el segundo argumento del letrado, referente a que las agravantes reconocidas por el a-quo no se comprobaron de manera fehaciente en el proceso, por lo que existen dudas respecto a la dosificación de la pena impuesta.

Se observa que el argumento transcrito no es digno de análisis, ya que carece de especificidad; se entiende que el Licdo. Angulo impugna todas las circunstancias agravantes tomadas en cuenta en la sentencia; no señala por qué no se comprobaron de manera fehaciente, de manera individual ni en su conjunto; por ello no hay base -según su alegato- para considerar la existencia de dudas al respecto.

Finalmente, en cuanto a que en base al principio "in dubio pro reo" y que al no probarse con claridad las agravantes reconocidas en la sentencia se debe atenuar la pena, considera esta Colegiatura que el principio argumentado -interpretación a favor del detenido- debe tener un fundamento en hechos o razonamientos que guíen la percepción del juzgador de tal forma que justifique la interpretación de la norma en base al principio en mención; pero en el presente caso, al no demostrar el apelante en qué estriba la falta de claridad de las pruebas valoradas en la sentencia, le niega soporte al principio por él esgrimido, e imposibilita, por tanto, su consideración bajo dicho parámetro.

Por lo tanto, no le queda otro camino a esta Superioridad que el de confirmar la sentencia recurrida.

Corresponde ahora la apreciación de la apelación presentada por el Licdo. Alcides Gabriel Zambrano en representación de **MEXI EVIDEL GUTIÉRREZ JIMÉNEZ.**

En cuanto a la afirmación de que la tierra encontrada en las zapatillas de su defendido, diferían completamente de las dos primeras muestras de tierra -recogidas donde se encontraron las huellas y donde se halló el cuerpo de la occisa-, pero que la prueba N° 3 -recogida donde los homicidas saltaron la cerca- fue considerada "similar", observa esta Corporación de Justicia que si bien es cierto que la conclusión del informe rendido por el Laboratorio de la Dirección de Criminalística de la Polícita Técnica Judicial estableció dicha similitud, en el segmento titulado "RESULTADOS OBTENIDOS:" de dicho informe, afirmó que el contenido de Hierro encontrado en las zapatillas de **MEXI GUTIÉRREZ** era "muy semejante"; además, los índices de Calcio y Magnesio en la muestra de tierra N° 3 y los calzados analizados eran los más bajos, respecto a las otras muestras de tierra.

El informe que nos ocupa se basó en la separación de minerales y en la comparación de hierro, calcio y magnesio; deduce la Sala que éstos elementos fueron estimados por el Jefe de la División de Química de la P. T. J. como los más valederos para determinar si las trozos de tierra analizadas eran las mismas o no.

Por ello, si el contenido de hierro era muy semejante, y los de calcio y magnesio también lo eran, no cabe duda que los metales escogidos para deducir las diferencias estaban en las mismas porciones, y no cabe la imprecisión del término "semejantes", como afirma el apelante, ya que era la cantidad y no la clase de metal la que determinó la semejanza y por tanto, se considera la muestra N° 3 y la tierra de las zapatillas como del mismo lugar.

Por otro lado, argumentó el abogado defensor que está probado por varios testimonios que **MEXI GUTIÉRREZ** estuvo en varios lugares, razón por la que la tierra encontrada "pudo ser" de cualquiera de esos lugares, por ser de la misma configuración geográfica, en un poblado costero circunscrito a una pequeña área.

Se rechaza este argumento, porque no hay evidencias que prueben su afirmación, pues el señalar que la tierra encontrada en las zapatillas "pudo ser" la de cualquiera de los lugares mencionados por los testigos equivale realmente a una conjetura, ya que no aportó ninguna probanza que pudiese confirmar su afirmación.

El señalamiento del Licdo. Zambrano, en el sentido de que no se puede justificar que las zapatillas de **MEXI EVIDEL GUTIÉRREZ** solo tengan tierra semejante a la muestra N° 3, y no de la muestra N° 1 ni de la N° 2, se explica al tomar en cuenta que luego de la realización del hecho, los tres inculpados fueron temprano al río en la mañana del día siguiente, y además de limpiar la ropa, debieron limpiar las zapatillas, quedando fracción de la tierra analizada en la zuela de los calzados.

En cuanto a la aseveración referente a que no se puede asegurar si las huellas encontradas en la casa de los **CERRUD** eran de los inculpados o de vecinos que llegaron al lugar de los hechos, la misma pierde importancia, por la explicación del argumento anterior.

Las circunstancias esbosadas por el apelante, sobre la existencia del charco de sangre, una violenta lucha, de múltiples heridas en las víctimas según el protocolo de necropsia, relacionadas con el hecho de que no se encontró ningún indicio de violencia en el examen médico legal de **MEXI GUTIÉRREZ**, y los resultados negativos arrojados por las pruebas de laboratorio respecto a sangre oculta en las zapatillas de éste, ni en su ropa, es entendida por la Sala de la siguiente manera.

La relación planteada por el impugnante, entre el charco de sangre

encontrado en el lugar de los hechos, las múltiples heridas en las víctimas, vinculadas con la inexistencia de sangre en las zapatillas del sentenciado, así como en su ropa, se explica por cuanto no era necesario que éste pisara la sangre, porque un charco no se forma instantáneamente sino que el líquido corre por el cuerpo de la víctima, y buena parte es absorbida por la ropa; por ello, no considera esta Superioridad que el victimario tuviera necesariamente que pisar el charco de sangre formado.

Además, la lavada de la ropa en el río explica la ausencia de sangre en dichas prendas de vestir.

El contraste entre la violenta lucha establecida en el protocolo de necropsia con la ausencia de ésta en el cuerpo de **GUTIÉRREZ** se explica por el hecho de que los agredidos fueron los occisos, quienes carecían de oportunidades de inflingir alguna lesión a los agresores; sólo el sudor pudo ser la única señal de violencia en el cuerpo de **MEXI GUTIÉRREZ**, indicio rápidamente disipable -máxime con la bañada en el río. Ello sin tomar en cuenta su afición deportiva, así como su edad, y el supuesto número de agresores -tres atacantes.

Otra arista cuestionada por el apelante, es la relación entre la hora en que **MEXI GUTIÉRREZ** llegó a casa de sus padres con los otros justiciados, y la hora probable de la muerte de los finados.

Según el resultado del examen arrojado por el protocolo de necropsia, tanto **LIBERATO CERRUD** como **AMINTA ESPINO DE DELGADO** tenían aproximadamente entre 16 y 18 horas de muertos, al momento de rendir dicho informe, esto es, entre las 9:50 p. m. y las 11:50 p. m. del 9 de diciembre de 1990.

El Licdo. Zambrano cuestiona la exactitud del cálculo de la hora de muerte en base al estado de digestión de los alimentos encontrados en los estómagos de los dos campesinos.

El protocolo de necropsia fue realizado por médicos legistas, a quienes -en base a sus conocimientos acreditados- se les pide un informe del estado del cuerpo de los ultimados; por ello, no hay ningún motivo para poner en tela de duda el cálculo que hicieron de la muerte de los ancianos, en base al fundamento ya expresado.

El informe en comento afirmó que el óbito debió verificarse entre 4 y 6 horas después de haber cenado, o sea que dicha cena se ingirió alrededor de las cinco de la tarde, lo que disipa el argumento del Licdo. Zambrano, de que las víctimas cenaron excepcionalmente tarde.

En ampliación indagatoria rendida -a foja 78 del infolio- por el defendido, éste señaló que la distancia aproximada de la casa de sus padres a la de los desaparecidos, era de aproximadamente 500 metros, lo que sirve de base para concluir que la distancia permitía a los juzgados trasladarse a la casa de los padres de **MEXI GUTIÉRREZ** rápidamente.

Esto, aunado a que -como el mismo defensor dice- la hora señalada por el justiciado no es exacta sino aproximada a la verdad, si regresó a casa de sus padres en compañía de sus compañeros cerca de las 9:00 p. m., y el óbito ocurrió entre 9 y 11 de la noche, entonces sí era factible cometer el ilícito y regresar a dicha casa, ya que pudieron cometer el hecho punible cerca de las 9:00 p. m., y regresar rápidamente a casa de los **GUTIÉRREZ** a dormir inmediatamente.

En otro orden de cosas, manifiesta el Licdo. Zambrano que la responsabilidad por la posesión de las joyas incautadas a **MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ** dentro del bus en que se iban los tres sujetos de Cañas a Panamá, le cabe sólo a él y no es extensible a su hermano **MEXI**, como estableció la sentencia de marras.

Al respecto, cabe advertir que el apelante cuestiona el indicio que nos ocupa limitándose a la responsabilidad que cabe por la posesión personal de la prenda que le fue incautada a **MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ**; pero considera esta Corporación de Justicia que el indicio reconocido por el a-quo no se limita a la

persona a la que se le encontró la joya, sino que dicha conjetura es nutrida por una cadena de hechos que forman -a juicio del a-quo- una coartada, de la que la posesión de la joya encontrada a **MIGUEL ÁNGEL** es un eslabón, pues el hecho de que se unieran los tres sentenciados en el Corregimiento de Cañas, que salieran juntos, la existencia de la posibilidad de que justo antes de regresar a casa de los padres de los **GUTIÉRREZ** ocurrieran las muertes, que al amanecer del día siguiente los tres fueran encontrados en el bus de regreso a Panamá, permiten deducir una coartada para irse del lugar con las joyas, que no tenían por qué poseer los tres. Esa es la base jurídica de la sospecha de la extensión de la responsabilidad de **MEXI GUTIÉRREZ.**

En cuanto a la "buena fe" -presumida por el Licdo. Zambrano- de **MEXI** al afirmar que no sabía que su hermano tuviera en su poder las prendas mencionadas -porque ello no lo beneficia- observa la Sala que, dadas las características del caso, la afirmación en comento debió obedecer a la necesidad que sintió el justiciado de defenderse y desligarse de cualquier responsabilidad que le hubiese podido acarrear cualquier relación con la posesión de las prendas, pese al grado de parentesco con **MIGUEL ÁNGEL.** Por ello, el argumento no es contundente.

Otra arista a ventilar, es sobre la conclusión del a-quo de que por lógica **MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ** y **REGINO GRAJALES** fueron informados de que **LIBERATO CERRUD** era poseedor de un dinero por la venta de ganado, y que como **MIGUEL** dijo no haberse comunicado con su hermano hacía aproximadamente un mes, se podía deducir que se comunicaron mientras estuvo en Cañas, por haber llegado allí el 3 de noviembre, y que la declaración de **MIGUEL ÁNGEL** fue recibida el 12 de diciembre.

En declaración jurada, el Sr. **LUCAS NAVARRO** o **LUCAS GÓMEZ** -f. 519- señaló que "Miguel Ángel oí decir que estaba en Panamá, Méxi si estaba en Cañas; ...".

Esa declaración encaja de manera lógica con la conclusión del Tribunal Superior, pues si **MEXI GUTIÉRREZ** ya estaba en la comunidad de Cañas y **MIGUEL ÁNGEL** y **REGINO GRAJALES** recién llegaban, es de suponer que quien se encontraba en el lugar sabía si las víctimas tenían dinero, y debió transmitir la información a los recién llegados.

Tanto **MEXI** como **MIGUEL ÁNGEL** declararon que no se habían comunicado, pero la situación planteada en la misma declaración del citado **LUCAS NAVARRO O GÓMEZ** compagina perfectamente con el criterio sostenido por la sentencia.

En otro sentido, la pregunta inadecuadamente respondida -según el defensor- por **MIGUEL ÁNGEL** al ser cuestionado sobre la última vez que vio a su hermano, al contestar "... Inspector, no me había comunicado con mi hermano Mexi Evidel, hace aproximadamente un mes atrás.", respuesta que debió provocar la reformulación de la pregunta, considera esta Colegiatura que no hay base para considerar que la pregunta fue mal contestada; hay que estimar la manera de expresarse de la gente, y es sabido que aquí en Panamá las personas hablan de esa manera; se entiende claramente que, transcurrió aproximadamente un mes desde la última vez que **MIGUEL ÁNGEL** se comunicó con **MEXI**; por ello, se desestima el esfuerzo impugnativo del abogado defensor, en este aspecto.

Además, sobre el hecho afirmado en la declaración en comento, los indicios principales son las declaraciones de los imputados; ello quiere decir que los demás elementos gravitantes en el proceso determinarán la veracidad de las mismas.

Por consiguiente, todo indica que **MEXI EVIDEL GUTIÉRREZ** -quien ya se encontraba en el Corregimiento de Cañas- se enteró de que **LIBERATO CERRUD** había vendido el ganado y tenía la suma de dinero, informando a su hermano **MIGUEL ÁNGEL** y a **REGINO GRAJALES** de esa situación.

Señaló el defensor que no había manera de saber si su defendido, de haberse comunicado telefónicamente con los otros inculpados, tenía conocimiento de lo anterior.

No era determinante la llamada telefónica, ya que si **MEXI EVIDEL** se

encontraba en Cañas y los otros dos llegaron al lugar, pudo haberlos convencido de consumar el ilícito en el tiempo que transcurrió desde que se reunieron -al llegar **REGINO** y **MIGUEL ÁNGEL** de Las Tablas en el taxi- hasta que salieron de casa de los padres de los **GUTIÉRREZ.**

Sobre el mismo punto, afirma el Licdo. Zambrano que no consta que su defendido tuviera conocimiento que **LIBERATO CERRUD** poseyera el dinero por la venta de ganado.

Advierte la Sala que en el expediente se dejó en claro que el occiso era conocido en la comunidad, y que todos sabían cuándo vendía ganado, lo que no compagina con lo afirmado por el actor, quien además afirmó que era costumbre de los lugareños guardar su dinero en casa.

En otro sentido, señaló el impugnante que "no tiene cabida a la luz de las garantías constitucionales" -presunción de inocencia e in dubio pro reo- la conclusión del a-quo que relacionó el intenso daño físico producido en los finados con las condiciones físicas que gozaba **MEXI** -por practicar el boxeo- ya que cualquier persona con fortaleza física pudo ensañarse con las víctimas, máxime que era más de uno.

Es el criterio de la Sala, que si bien cualquier persona joven que goza de buenas condiciones físicas pudo haber ocasionado las heridas encontradas en los cuerpos sin vida de los ofendidos, también es cierto que los sentenciados entran dentro de esa categoría, demostrándose con ello que los ofensores estaban más capacitados que el común de la gente para efectuar el hecho que nos ocupa, con esas características.

Dijo el recurrente que las experticias médicas no descartaron en ningún momento que el hecho punible pudiera haberse cometido mediante el uso de arma, y por ello no puede sostener que un boxeador tuvo que ser uno de los autores.

Yerra el abogado defensor, toda vez que si las heridas se hubieran producido con arma, eso no excluiría a los justiciados por ser atletas.

El Licdo. Zambrano trató de hacer valer ciertas atenuantes en favor de **MEXI EVIDEL GUTIÉRREZ JIMÉNEZ**, las cuales no se han estimado y se pasan a analizar.

Menciona la buena conducta de su defendido, en el sentido de que no tenía antecedentes policivos ni penales antes de ventilar el negocio que nos ocupa; la Corte ha señalado repetidas veces que la falta de antecedentes policivos y penales no se considera una circunstancia atenuante para suprimir o reducir la pena, sino como uno de los elementos a considerar para establecer la pena base.

En cuanto al hecho de que no se le encontró nada relacionado con el delito -prendas-, se señaló que los indicios y circunstancias consideradas en la investigación -modo, tiempo y lugar- relacionan a los justiciados con el hecho que se les imputó; el hecho de que al precitado no se le encontrara en su poder ninguna prenda que fuere propiedad de quien en vida se llamó **AMINTA ESPINO DE DELGADO**, compagina con el argumento del Ministerio Público de que los tres se iban hacia Panamá, y que uno de ellos -**MIGUEL ÁNGEL**- llevaba las prendas, es decir, que no tenían por qué llevarlas los tres.

La justificación de su presencia en el bus, toda vez que regresaba a Panamá a continuar sus labores de pesca es relativa, porque también se adecúa al plan de abandonar el lugar luego de la comisión del ilícito.

A **MEXI GUTIÉRREZ** se le encontraron ochenta (0.80 ç) centésimos en su bolsillo cuando se le registró en el autobus en donde volvía a Panamá; los indicios respaldan el argumento de la Funcionaria Instructora, cuando señaló en su escrito de oposición que no podía regresar a la capital con esa cantidad de dinero, por lo que se deduce que quienes iban a pagar su pasaje eran los otros dos compañeros, específicamente su hermano **MIGUEL ÁNGEL**, quien traía en su poder las prendas.

Los indicios señalan que, si se encontró muestra de la tierra N° 3 -correspondiente al lugar donde estaba la cerca del patio de la casa de los desaparecidos- y no de las dos primeras muestras examinadas en el Laboratorio, es porque sí se lavaron los calzados, pero quedaron fragmentos en la zuela de las zapatillas.

En síntesis, el presente caso se caracteriza porque no se aprecian probanzas procesales que revelen de manera plena la responsabilidad de los reos; pero los elementos indiciarios inmersos en el expediente, se relacionan de tal manera que revelan la relación de los inculpados con el hecho punible, así como su responsabilidad por su comisión.

En ese sentido, hay que observar si se cumplen las circunstancias de modo, tiempo y lugar para atribuir la responsabilidad de la muerte atroz de los dos campesinos, a los apelantes.

La circunstancia de tiempo se cumple, toda vez que dos de los tres justiciados llegaron a Cañas el 9 de diciembre a principios de la noche y el tercero ya se encontraba en el lugar. El óbito se produjo entre las 9:00 y las 11:00 de la noche de ese día, mientras que los tres declararon que regresaron a la casa donde estaban hospedados cerca de las 9:00 de la noche; es decir, que ellos pudieron cometer el ilícito.

La circunstancia de lugar también es factible, toda vez que la casa de los padres de **MEXI** y **MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ** -donde estaban hospedados- quedaba aproximadamente a quinientos metros de la casa de los ofendidos; por estar relativamente cerca ambos lugares, considera esta Superioridad que era perfectamente factible la comisión del hecho punible por parte de los inculpados alrededor de las 9:00 de la noche, y regresar a la residencia rápidamente.

El hecho de que en el lapso de tiempo que los tres estuvieron en Cañas se cometiera el ilícito, definitivamente el mismo se traduce en un indicio primordial contra los recurrentes.

Referente a la circunstancia de modo, hay que destacar la manera violenta de muerte de los ofendidos que reveló el protocolo de necropsia; es sabido que las muertes violentas son más factibles de ser cometidas por personas jóvenes, que por lo general gozan de una buena condición física que de personas mayores, que se basan más en la experiencia y el intelecto que en la capacidad física.

Lo anterior circunscribe las posibilidades de responsabilidad al tipo de personas como los ya encartados; además, en toda la investigación no existe otro u otros sospechosos de causar la muerte de **LIBERATO CERRUD** y **AMINTA DE DELGADO**.

El operativo policial que descubrió las prendas de la occisa en poder de **MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ**, la forma como estaban guardadas las prendas en el bus, constituyen un indicio fuerte contra los sentenciados, ya que ello coincide con la intención de irse del lugar luego de cometer el hecho punible; el tener las prendas ocultas dentro de un compartimiento en el bus de regreso a Las Tablas -f. 238-, la salida temprano en la mañana siguiente a la noche en que se dieron los hechos, son todos indicios coincidentes que inducen a esta Corporación de Justicia a estimar la existencia de una coartada tendiente a salir de Cañas sin encarar la responsabilidad emanada de la comisión del ilícito.

También encuadra en la situación expuesta, que **MEXI EVIDEL GUTIÉRREZ JIMÉNEZ** se encontraba en la comunidad de Cañas un mes antes de los hechos que motivan la investigación desarrollada en este proceso; ello es así, porque consta en el expediente que los lugareños tenían conocimiento de que **LIBERATO CERRUD** había vendido un ganado, y por tanto tenía una considerable suma de dinero en su casa, ya que por costumbre -y máxime por ser una persona mayor- tenía la costumbre de guardar su dinero en su casa.

Todo lo anterior, relacionado con el ya mancionado elemento implícito consistente en la no existencia de otro u otros sospechosos en la comisión del crimen estudiado, restan efectividad a los argumentos de la defensa, que están

fundados en la lógica, y en algunas ocasiones en conjeturas.

Por lo tanto, no le queda a esta Colegiatura otra opción que confirmar la sentencia apelada.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia apelada.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA EN EL PROCESO SEGUIDO A ARCADIO ALVEO RODRÍGUEZ, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ALICIA VILLARRETA FLORES. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, CINCO (5) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Sentencia condenatoria dictada en el proceso seguido a **ARCADIO ALVEO RODRÍGUEZ**, sindicado por el delito de homicidio en perjuicio de ALICIA VILLARRETA FLORES.

Luego de celebrado el juicio en derecho, tal como lo solicitara el procesado, el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial dictó Sentencia de 22 de mayo de 1996, mediante la cual declaró penalmente responsable a **ARCADIO ALVEO RODRÍGUEZ** y lo condenó a la pena principal de catorce (14) años de prisión y la accesoria de cinco (5) años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.

Para motivar su decisión, el a-quo realizó un análisis del caudal probatorio que obra en autos y tomando en cuenta que el sindicado se declaró culpable del delito que se le imputa, estimó que dicha culpabilidad se encuentra comprobada, al igual que la ausencia de motivo suficiente que explique la conducta del homicida. Que si bien es cierto que **ARCADIO ALVEO RODRÍGUEZ** presenta signos de arañazos en el tórax y en la región abdominal, ni él ni los testigos señalan a qué se deben los mismos; quien inició el problema fue el procesado que además lesionó mortalmente a la víctima en momentos en que trataba de irse del lugar; que consta en autos que cuando convivían maritalmente, el procesado maltrataba físicamente a su concubina e incluso separados él seguía persiguiéndola y maltratándola llegando en una ocasión a amenazarla con matarla. Que en los elementos probatorios se evidencia el dolo y la intención manifiesta del procesado en querer quitarle la vida a la hoy occisa, sin tener motivos determinantes ni convergentes para ello. También queda de manifiesto en el hecho de que el imputado acepta finalmente haber cortado a ALICIA VILLARRETA, sin dar ninguna razón al respecto y por el contrario, alega como excusa no recordar lo sucedido. Considera el Tribunal que el desprecio o el poco importa que siente el victimario por la vida humana en el presente proceso se demuestra por el carácter violento del procesado, "a quien no le importaba maltratar a su concubina delante de quien fuera para demostrar su mal entendida hombría". Precisa que la hoy occisa fue víctima de un ataque sorpresivo que la puso en total indefensión y que aunque hubiese utilizado sus uñas, éstas no son comparables con un arma cortante. Que todas estas circunstancias llevan a concluir que se trata de un homicidio agravado, y que considerando los motivos determinantes, la huída del agente una vez cometido el delito, los testimonios que dan cuenta del comportamiento anterior del sindicado aún cuando éste no presenta antecedentes penales, llevan

al Tribunal a fijar discrecionalmente la pena base en catorce (14) años de prisión sin que haya circunstancias agravantes o atenuantes que aplicar. Finalmente, indica la Sentencia que si bien es cierto que la defensa solicitó el reconocimiento de las atenuantes que tratan de la confesión y el estado de embriaguez, en cuanto a la primera, ésta no fue ni espontánea, ni oportuna puesto que ocurrió en la fase plenaria; y respecto a la embriaguez, el Tribunal estima que dicho estado no está totalmente acreditado y de ser así, habría que determinante si sería agravante o atenuante, pero que lo cierto es que de haber embriaguez, fue voluntaria y no fortuita.

Por su parte, la defensora de oficio del procesado, la Licenciada MATILDE A. DE APOLAYO, sustentó recurso de apelación mediante escrito visible de fojas 460 a 462 del sumario. Manifiesta su disconformidad con la sentencia recurrida y con la calificación que del delito de homicidio hace el Tribunal en razón del motivo fútil. Estima la jurista que si el hecho se hubiese realizado por motivo fútil o sin ningún móvil, **ARCADIO ALVEO** se habría acercado a su víctima cuando la encontró en el baile y la hubiera matado de inmediato; que por el contrario, cuando él la ve, sigue bailando y es posteriormente cuando va donde su cuñado que se suscita la discusión entre él y la hoy occisa.

La defensora cuestiona la consistencia de los testimonios que obran en autos, pues señala que en la diligencia de reconstrucción de los hechos, el testigo **ANEL SÁNCHEZ** manifestó que al momento de la discusión entre ALICIA VILLARRETA y **ARCADIO ALVEO**, se encontraba presente **HÉCTOR SÁNCHEZ**, de quien ALICIA se abrazó llorando. Llama la atención también la defensora, sobre lo manifestado por los peritos en cuanto a que no hay coincidencia en las declaraciones sobre la dirección que tomó el sindicado para llegar hasta su víctima. Señala que no hubo motivo fútil, pues entre víctima y victimario se dió una riña que ALICIA VILLARRETA provocó, lo que se prueba por la cantidad de arañazos que presentaba **ARCADIO ALVEO**; que habría que determinar qué se le dijo a éste, quien estaba en estado de embriaguez, para que se sintiera injuriado, atacado y procediera a defenderse; que en vista de la comprobación de la riña, debe encuadrarse el homicidio como simple, pues no concurre ninguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 132 del Código Penal. Finalmente, indica que se debe analizar este caso en base a los hechos ocurridos y no en base a los problemas conyugales que llevaron a la pareja a una separación.

Corrido el traslado respectivo ante el agente del Ministerio Público, el señor Fiscal Superior del Segundo Distrito Judicial, manifestó su interés en que se confirme la sentencia recurrida. Indica así, que el Estado no exime de responsabilidad al cónyuge agresor y le aplica medidas de seguridad y sanciones agravadas con miras de evitar el maltrato y proteger la integridad física y mental de los miembros de la familia. Considera que la acción del sentenciado **ARCADIO ALVEO**, jamás tendrá justificación de Derecho, ya que el acto de truncarle la vida a ALICIA VILLARRETA no puede justificarse como móvil de defensa ni como consecuencia de provocación.

Finalmente indica el Fiscal que la pena impuesta se ajusta a las constancias procesales y al querer de la ley; que el a-quo justipreció adecuadamente las atenuantes y las agravantes, y por tanto estima que se debe confirmar la sentencia.

De las piezas procesales se desprende, que en horas de la noche del 23 de abril de 1994 en la comunidad de San Francisco de Qüira, Corregimiento de Toabré, Distrito de Penonomé, se realizaba una actividad bailable a la cual asistió la hoy occisa ALICIA VILLARRETA FLORES quien desde hacía un tiempo se encontraba separada de su concubino **ARCADIO ALVEO RODRÍGUEZ**. La mayoría de los testigos coinciden en afirmar que cerca de las once (11: p. m.) de la noche, cuando ya **ARCADIO ALVEO** se había tomado unos tragos con los hermanos de la hoy occisa, se produjo un incidente entre ella y el imputado debido a que éste último trató de atropellar al hermano de ALICIA, de nombre **ARIEL VILLARRETA**, y ella lo empujó para apartarlo. Aquí algunos testigos indican que el imputado le pegó a ella en la cara, por lo que ella salió llorando del lugar y que fue entonces cuando **ARCADIO ALVEO** se le acercó y le asestó las dos puñaladas que le causaron la muerte. Casi todos los testigos son contestes en indicar que **ARCADIO ALVEO**

RODRÍGUEZ estaba en tragos, pero no borracho.

La Sala observa que en realidad no existe en autos un motivo que explique la conducta del imputado, y ni siquiera cuando finalmente acepta la comisión del hecho punible, explica las razones de su proceder. Esto nos lleva a concluir que en realidad no hubo una razón de peso que justifique el actuar doloso de **ALVEO RODRÍGUEZ**, por lo cual estamos ante un homicidio agravado, tal cual tipifica el numeral 3 del artículo 132 del Código Penal.

Pese a que la defensa hace alusión a los arañazos que presenta su representado en diferentes partes del cuerpo, ello no es óbice para establecer con certeza que ALICIA VILLARRETA se los haya producido, ni tampoco consta en autos que se haya dado una discusión previa o un ataque previo de la hoy occisa que ameritara la acción violenta y desproporcionada de **ALVEO RODRÍGUEZ.**

En cuanto a la presencia de **HÉCTOR SÁNCHEZ** al momento del incidente inicial entre **ALVEO RODRÍGUEZ** y ALICIA VILLARRETA, al tenor de lo declarado por ANEL SÁNCHEZ, debemos señalar que es éste el único testigo que hace referencia a la supuesta presencia de **HÉCTOR SÁNCHEZ** y a que ALICIA se abrazó a él llorando. Incluso en su primera declaración **ANEL SÁNCHEZ** no hace alusión a este detalle, y curiosamente él fue el único en notarlo. Consideramos, que no se encuentra probada debidamente esta afirmación, y por tanto no sirve como motivo para explicar la conducta del imputado; y aun cuando **HÉCTOR SÁNCHEZ**, que en su declaración dice haber estado a cinco metros (5 mts.) de los protagonistas, hubiese abrazado a ALICIA VILLARRETA, no era ese tampoco motivo suficiente para que ARCADIO ALVEO la matara, máxime cuando HÉCTOR SÁNCHEZ era primo-hermano de la víctima.

No es posible obviar, tal como lo pide la defensa, los antecedentes del hecho trágico que hoy nos ocupa, pues el pasado es indicador claro de las razones que mueven a las personas a realizar dichos actos, y sirven como punto de apoyo al juzgador para conocer las actitudes que evidencian una historia de violencia que desencadena la muerte de un ser humano.

El delito que hoy estudiamos, mueve a la preocupación, pues se trata de un ejemplo más de violencia intrafamiliar y del resultado de las muchas agresiones, que de parte de **ARCADIO ALVEO** debió sufrir la víctima y que provocaron, primero la separación y por último su muerte. No es posible justificar una acción tan deplorable, pues sin mayores razones y sin permitirle defenderse, el homicida truncó la vida de ALICIA VILLARRETA, con quien además tenía un hijo pequeño.

No tenemos, pues nada que objetarle a la sentencia recurrida, por el contrario compartimos la opinión del agente instructor en cuanto a que se debe confirmar, ya que es acorde con la realidad procesal.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA en todas sus partes la Sentencia de 22 de mayo de 1996, dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial en el proceso seguido a ARCADIO ALVEO RODRÍGUEZ, sindicado por el delito de homicidio en perjuicio de ALICIA VILLARRETA FLORES.

Notifíquese, Cúmplase y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO SEGUIDO A EVARISTO ALFONSO GODOY, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE JUAN ANTONIO BATISTA. PROCEDENCIA: SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, SEIS (6) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de apelación ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Sentencia de 8 de agosto de 1995 (fs. 295 a 303), dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, que condenó a **EVARISTO ALFONSO GODOY** a la pena principal de nueve (9) años de prisión y cuatro (4) meses; y, a la pena accesoria de cinco (5) años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por el delito de homicido en perjuicio de JUAN ANTONIO BATISTA (a) "TOÑO".

Al culminar la Audiencia Pública, **EVARISTO ALFONSO GODOY** fue declarado culpable, por los Jueces de Conciencia a quienes correspondió juzgarlo (f. 244), de haber causado la muerte del señor JUAN ANTONIO BATISTA, quien falleció a consecuencia de: "A. SHOCK HEMORRÁGICO B. LACERACIÓN CARDÍACA, HEPÁTICA Y DE AMBOS PULMONES. C. HERIDAS MÚLTIPLES POR ARMA BLANCA", tal como consta en el Protocolo de Necropsia suscrito por el doctor Jorge Rodríguez C., Médico Forense del Instituto de Medicina Legal, Agencia de Chepo, visible de fojas 85 a 96 del expediente, todo lo cual fue el resultado de un hecho de sangre ocurrido aproximadamente a las 3:50 p. m. del sábado 2 de septiembre de 1989, en la Carretera que pasa afuera de la Abarrotería Xiomara, situada en la Barriada Higuera de la población de Chepo, Distrito de Chepo, Provincia de Panamá.

En contestación de traslado de 22 de marzo de 1996 (fs. 310 a 312), la licenciada CECILIA R. LÓPEZ, Fiscal Tercera Superior del Primer Distrito Judicial, recomendó que se mantenga la pena impuesta y objetó la pretensión del recurrente en los términos siguientes:

> "Como bien señala el Licdo. Montenegro, el abuso de superioridad es aplicable a casos donde hay diferencia notable de edades, fuerza física, sexo, etc. Sin embargo, otra modalidad del abuso de superioridad o utilización de medios que producen la indefensión es el ocultamiento de arma con que se cometerá el delito, situación dada en la presente causa penal, ya que el occiso Juan Batista jamás esperó el empleo de un cuchillo, ya que Evaristo lo llevaba oculto, colocándolo a todas luces en un estado de indefensión e inferioridad con respecto a su atacante.
>
> Así lo establece la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 19 de julio de 1993, al establecer que:
> '...
> ... El empleo de medios a que se refiere el numeral primero del art. 67 del Código Penal, debe tener como propósito ubicar a la víctima en condiciones de inferioridad o indefensión (v. gr. el agente suministra a la víctima un narcótico y luego le da muerte; la priva de fuerzas o de armas; ocultamiento del arma que utilizará en la ejecución del delito). El empleo de esos medios debe de estar encaminado a crear las circunstancias de debilitamiento de la defensa ...' (el subrayado es nuestro)." (F. 311).

Al reconocer la agravante común del abuso de superioridad, el Segundo Tribunal Superior en la Sentencia apelada expresó lo siguiente:

> "Es degradante que el imputado hubiese apelado a la utilización de un arma blanca cuando se encontraba enfrascado en una pelea a puño limpio con su rival, valiéndose sorpresivamente de un instrumento mortal, que le proporcionaba en esos momentos una ventaja desigual en comparación con lo que le presentaba su oponente. En una actitud que rebasa el más simple sentido de la sensatez y la ecuanimidad, ALFONSO GODOY apeló a un medio que a todas luces es negativo y digno de tomar en cuenta para esta graduación penal." (Fs. 301).

El recurrente manifestó en su escrito su disconformidad con la aplicación en este caso de la agravante común referente al abuso de superioridad, en primer

lugar, puesto que:

> "... los Magistrados del Segundo Tribunal Superior dejan entrever que el abuso de superioridad atribuido a **EVARISTO ALFONSO GODOY** consiste en 'la utilización de un arma blanca cuando se encontraba enfrascado en una pelea a puño limpio con su rival'; con lo cual pareciera que se está relacionando también la agravante contemplada en el numeral 7 del artículo 67 ya citado o sea perpetrar el hecho con arma." (Fs. 306-307).

En segundo lugar, el recurrente citó fallos de la Sala Penal de esta Corporación de Justicia, de los cuales se desprende que la agravante de la superioridad se refiere a la superioridad física, en el sexo, la edad y la robustez y, en tal sentido, señaló:

> "Tampoco existió nunca superioridad física del procesado sobre la víctima quien tenía de 29 a 30 años de edad, estatura alta y contextura maciza, según se describió en la diligencia de levantamiento del cadáver (fs. 3) y se confirma con el protocolo necróptico (fs. 86); incluso de él se llegó a decir que era boxeador (fs. 127 y vuelta), aunque ésta circunstancia nunca se logró acreditar. Mientras que **EVARISTO ALFONSO GODOY** tiene un peso de 149 lbs, talla 1.70 mts. (fs. 135)." (F. 308).

En cuanto a la utilización de un arma, esta Sala ha sostenido en diversas ocasiones, que ciertamente la agravante de perpetrar con armas el hecho punible (Art. 67, numeral 7 del Código Penal), no es aplicable a los casos de homicidio doloso, puesto que la utilización de armas en el delito de homicidio resulta un instrumento idóneo para tal fin, a diferencia de otros delitos en cuyo caso dicho instrumento constituiría una agravante del hecho. En el caso bajo estudio, somos de la opinión de que le asiste la razón al recurrente, en cuanto a que el Tribunal a quo justificó la aplicación de la agravante jurídica del abuso de superioridad (Art. 67, numeral 1 del Código Penal), en el hecho de que el procesado haya utilizado un arma blanca que portaba durante una riña que puede tenerse como consentida, entre el occiso y este último.

Aunado a lo anterior, vale la pena señalar que en la doctrina se ha discutido sobre la naturaleza jurídica de la agravante común del abuso de superioridad, es decir, el tipo de superioridad que es tomado en cuenta para determinar dicha agravación; inclinándose los autores por la superioridad física, entendiéndose como la utilización de la fuerza o de medios desproporcionados para contrarestar la agresión; no obstante, deben tenerse en cuenta las circunstancias de cada hecho en particular, siendo el caso no proceder al reconocimiento de la circunstancia agravante de la responsabilidad penal antes mencionada, por no existir a nuestro juicio el abuso de superioridad física, que según la doctrina dominante, busca debilitar a la víctima o su defensa ya que el procesado no utilizó fuerza física alguna de manera ventajosa, para dominar al agredido, sino que se valió de un medio idóneo para causarle la muerte, que en el caso de no haber sido utilizado hubiera podido dar lugar a una imputabilidad por delito de lesiones y no por el delito de homicido por el cual fue declarado culpable.

En la Sentencia apelada el Tribunal del conocimiento individualizó la pena en abstracto dentro del intervalo penal que oscila entre cinco (5) y doce (12) años de prisión, por configurar la conducta delictiva, el tipo del homicido simple del artículo 131 del Código Penal, es decir, la conducta de causar la muerte a otro.

Al fijar la pena base, el a quo tomó en cuenta los factores previstos en el artículo 56 de la excerta penal patria y, en tal virtud el Tribunal a quo individualizó la pena base por homicidio simple, en ocho (8) años de prisión. Y, al momento de la concretrización de la pena, el Segundo Tribunal Superior aplicó la circunstancia agravante común contemplada en el numeral 1 del artículo 67 del Código Penal, es decir abusar de superioridad, por lo que aumentó en una sexta parte la pena; incrementándose dieciséis (16) meses a la pena base de ocho (8) años, quedando la pena líquida a cumplir en nueve (9) años y cuatro (4) meses de

prisión.

También, se fijó la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el término de cinco (5) años.

Estima la Sala que una pena base de ocho (8) años de prisión es cónsona con la gravedad y condiciones en que se cometió el delito.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REFORMA la Sentencia apelada de 8 de agosto de 1995, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, en el sentido de que condena a EVARISTO ALFONSO GODOY a la pena principal de ocho (8) años de prisión, por el delito de homicido en perjuicio de JUAN ANTONIO BATISTA (a) "TOÑO"; y, la CONFIRMA en lo demás.

Notifíquese, Cúmplase y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A YISEICA CLARIBETH COBOS, POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE EDUVIGES RODRÍGUEZ DE OLEA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante sentencia calendada 21 de agosto de 1995, el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, condenó a **YISEICA CLARIBETH COBOS**, a la pena principal de doce (12) años de prisión y a las accesorias de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el término de cinco (5) años después de cumplida la anterior y a la de comiso del arma utilizada, quien un jurado de conciencia declaró culpable del delito de homicidio en la persona de Eduvigis Esther Rodríguez de Olea.

Al momento de notificarse de esa decisión jurisdiccional, la procesada y su abogado defensor, licenciado Eliécer Pérez Sánchez, anunciaron recurso de apelación, el cual fue sustentado por el letrado dentro del término legal.

FUNDAMENTO DEL RECURSO

El licenciado Pérez Sánchez solicita se condene a su representada dentro de los parámetros establecidos en el artículo 131 del Código Penal y además que se le reconozcan las atenuantes de arrepentimiento y la de confesión, consagradas en el artículo 66 ordinales 4° y 5° del Código Penal.

Como sustento a su petición, señala que la procesada en el acto de audiencia se consideró culpable y arrepentida, explicando detalladamente como sucedieron los hechos. Señala que en declaración consignada de fojas 45 a 50, la señora Cobos confesó haberle causado la muerte a la señora Rodríguez de Olea, lo que coincide con la reconstrucción de los hechos, la ampliación de su declaración y los testimonios de Armando Manuel Macre Salvatierra y Judith Falcón Ramos, testigos presenciales del hecho. Añade que al dosificar la pena imponible tampoco se le aplicó la circunstancia atenuante del arrepentimiento.

Por otra parte estima, que la conducta típica, antijurídica y culpable que debió aplicarse, lo es el tipo de homicidio simple que contempla el artículo 131 cuya penalidad es de 5 a 12 años de prisión (fs. 546-549).

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

La licenciada Geomara Guerra de Jones, Fiscal Segunda Superior del Primer Distrito Judicial, comparte plenamente la valoración de las circunstancias modificadoras de la responsabilidad penal que llevaron al tribunal de la causa a dosificar la pena en 12 años, por lo que recomienda se confirme la sentencia apelada.

Considera la agente del Ministerio Público que se está ante un homicidio calificado, porque la imputada pre-ordenó los medios adecuados para consumar el ilícito; que no cobra vigencia procesal la confesión en este caso, porque la encuesta tuvo que valerse de las deposiciones de Judy Ramos de Falcón (fs. 19-21), Luzmila Esther Rodríguez Díaz (fs. 22-23) como pruebas afines que señalan a Yiseica Claribeth Cobos como la responsable del ilícito; que ésta fue arrestada durante las diligencias investigativas preliminares; y que trató de justificar su conducta poniendo a la víctima como agresora.

En cuanto al arrepentimiento a que se refiere el postulante, sostiene que no corresponde al consignado en el ordinal 4° del artículo 66 del Libro I del Código Penal, toda vez que como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia, el arrepentimiento debe verificarse en acciones positivas, concretas, que demuestren que efectivamente se lamenta el hecho ocurrido porque se producen actos claros de aminorar los efectos dañosos del hecho punible cometido.

FUNDAMENTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

El juicio de tipicidad llevado a cabo por el tribunal a-quo fue el siguiente:

> "... la colegiatura es del concepto que la acción antijurídica de la imputada constituye homicidio calificado con premeditación, porque no es de otro modo como se explica que la sindicada COBOS se haya provisto de un arma mortal y hecho acompañar de una amiga, hasta el Multifamiliar donde residía la supuesta rival en lides amorosas, colocándose en un sitio en que necesariamente debía transitar ésta, para luego hacer uso del revólver que llevaba consigo y hacer los disparos repetidamente sobre su anatomía, sin fallar un solo tiro y hasta cerciorarse de que la había dejado mal herida. El comportamiento queda adecuado al artículo 132 numeral 2 del Código Penal, o sea, que al causarse la muerte con premeditación la legislación punitiva le reserva a la persona culpable pena de doce a veinte años de prisión" (f. 532).

Como pena base aplicó la mínima de doce años de prisión, al ponderar que la imputada es madre de dos criaturas pequeñas y que ha tenido una vida difícil desde el punto de vista emocional y económico.

Luego estimó el a quo que no se daban circunstancias agravantes o atenuantes comunes, por lo que la pena base quedó convertida en pena líquida.

FUNDAMENTO DE LA SALA

Observa la Sala que si bien el apelante está en desacuerdo con la ubicación de la conducta de su defendida en el tipo penal del homicidio agravado, ejecutado con premeditación, no señala razones fácticas y jurídicas que sustenten lo contrario.

De la lectura de las declaración rendida por la joven Mirtha Raquel Waith Hurtado se desprende que la procesada, unos días antes de cometer el homicidio, la confundió con la amante del marido, agrediéndola en un lugar público. Además, que la procesada la había amenazado con darle dos tiros en cada rodilla para dejarla inválida, lo que llegó a oídos de la abuela de Mirtha, quien se molestó. Ante eso, la procesada fue a conversar con la abuela de Mirtha y delante de ésta dijo que a iba seguir investigando quién era la joven que tenía amoríos con su marido (Cfr. fs. 51-55).

La versión anterior no fue desvirtuada por Yiseica Claribeth Cobos, cuando al rendir declaración indagatoria admite que se dio el incidente relatado, al igual que la conversación con la abuela de aquella.

El testigo presencial, Armando Manuel Macre, afirma que conversaba con Yiseica cuando Choli (occisa) pasó por el medio de ellos, para entrar a la casa de la señora Judith Falcón y acto seguido, de manera inmediata Yiseica fue tras aquella y le disparó.

La situación recogida en autos, permite concluir que es la procesada quien busca a la hoy occisa, que persiste en ello, demostrando una voluntad criminal pre-ordenada, un designio criminoso claro, el cual se materializa al ir en busca de una persona y sin reclamo alguno, con frialdad de ánimo, le dispara con un revólver por la espalda, descargando así su voluntad reprimida de hacerle daño. Esto se acredita por la cantidad de orificios de entrada de proyectiles de bala disparados con arma de fuego, que presentaba el cuerpo de la occisa.

La Sala, a diferencia del criterio del recurrente, ha logrado verificar así que la conducta de la procesada se adecúa en el tipo penal del homicidio agravado ejecutado con premeditación, supuesto que contempla el numeral 2° del artículo 132 del Código Penal.

El otro punto objetado por el apelante se refiere al reconocimiento de la confesión como atenuante.

En autos consta que luego de cometer el ilícito por el cual el jurado de conciencia la declaró culpable, la señora Yiseica Claribeth Cobos abordó un taxi, el cual fue detenido en el cruce de la Vía cincuentenario y Circunvalación. La detención de la procesada, a quien se le encontró en posesión del arma homicida, no se originó en su confesión, sino al hecho de haber sido identificada como la persona que realizó los disparos a la occisa y huyó del lugar.

Luego entonces, en este caso hubo testigos presenciales que identificaron a la procesada como la homicida y fue en tales circunstancias que admitió los hechos, alegando que su víctima fue quien en primer lugar, intentó agredirla.

Nuestro código punitivo establece que la confesión debe ser espontánea y oportuna. En ese sentido, la Sala de manera reiterada ha señalado que ésta **"es reconocida en los casos en que, de no ocurrir aquella situación, es imposible llegar a la verdad; por no existir otros medios o formas de esclarecer los hechos"** (Resolución de mayo 12 de 1992).

Finalmente, en cuanto a la circunstancia atenuante común del arrepentimiento, el Código Penal indica que ésta se da cuando por actos posteriores a la ejecución del hecho, el agente ha disminuido o intentado disminuir sus consecuencias (art. 66 ord. 4). Significa que **"el arrepentimiento debe ser activo y darse en un momento que demuestre su sinceridad y que beneficie al sujeto pasivo"** (Corte Suprema, Sala de lo Penal. Diciembre 13 de 1990).

En ese sentido, no se puede considerar como arrepentimiento el sólo hecho que la procesada respondiera durante el acto de celebración de la audiencia que se consideraba culpable y arrepentida.

Así las cosas, la Sala adopta la decisión del Tribunal a-quo, por cuanto la parte motiva de la misma ponderó jurídicamente aspectos de la vida de la procesada, y al dosificar la pena la fijó en un quántum adecuado al grado de culpabilidad de la sentenciada.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia apelada.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

APELACIÓN DE LA SENTENCIA EN EL PROCESO SEGUIDO A DAVID SU GONZÁLEZ, POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ALBERTO ARRITOLA PINEDA. SU GONZÁLEZ, ALBERTO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ M. FAÚNDES. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de apelación ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Sentencia de 30 de agosto de 1994 (fs. 216 a 220), dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, que condenó a **DAVID SU GONZÁLEZ** a la pena principal de veinte (20) años de prisión y, a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por el período de ocho (8) años contados a partir del cumplimiento de la pena principal, por el delito de homicidio cometido en perjuicio de ALBERTO ARRITOLA (a) "TITO".

Al culminar la Audiencia Pública, **DAVID SU GONZÁLEZ** (declarado reo rebelde) fue declarado culpable por los Jueces de Conciencia a quienes correspondió juzgarlo (f. 177), de haber causado la muerte del señor ALBERTO ARRITOLA PINEDA, quien falleció a consecuencia de: "SHOCK HEMORRÁGICO. a- Perforación cardiaca (sic). b- Herida por proyectil de arma de fuego.", tal como consta en el Protocolo de Necropsia suscrito por el doctor Alfredo Rodríguez Lay, Médico Forense-Patólogo del Instituto de Medicina Legal, área oeste, visible de fojas 64 a 75 del expediente, todo lo cual fue el resultado de un hecho de sangre ocurrido en horas de la noche del día 8 de abril de 1989, en la Comunidad de San José, Distrito de Arraiján, Provincia de Panamá.

El licenciado **Danilo Montenegro A.**, Defensor de Oficio,sostiene en su apelación de la sentencia (fs. 227 a 229), que estamos en presencia de un homicidio simple (Art. 131 del Código Penal), por considerar muy subjetiva la calificación del hecho como homicidio agravado por motivo fútil (Art. 132. numeral 3), hecha por el Tribunal del conocimiento en la Sentencia apelada. Además, sostiene el recurrente que, según se desprende de foja 54, su defendido tiene la calidad de delincuente primario. En tal sentido, en su escrito argumentó lo siguiente:

> "Nuestro defendido manifiesta desde el primer momento que vio al difunto **ALBERTO ARRITOLA** saliendo por la puerta de atras (sic) de su casa a eso de las 9:30 de la noche, y luego pudo percatarse que le habia (sic) sustraido (sic) un tanque de gas lleno, y en fecha anterior le habían hurtado ropa. Este es el motivo que tuvo **DAVID SU GONZÁLEZ** para cometer el hecho, ...
>
> De ninguna manera podemos admitir que tales motivaciones son de escasa importancia o insignificantes, si no (sic) todo lo contrario, estamos ante una persona de bajos recursos económicos que a (sic) sido victima (sic) del apoderamiento ilicito (sic) de bienes que para él y su familia tienen un gran valor económico y que han adquirido con gran esfuerzo y sacrificio. El que actúa por motivo **FUTIL** por regla general, sostiene la doctrina, revela una personalidad perversa, depravada, carente de valores éticos, que puede obrar con brutal furor, casi siempre de tipo sicopático; rasgos estos que no encontramos en **DAVID SU GONZÁLEZ**, quien es una persona que trabaja como técnico en soldadura, es católico y mantiene a su esposa y dos hijos. ... .
>
> Sobre estos aspectos sostiene **ORLANDO GÓMEZ LOPE** lo siguiente:

'Lo que paraun (sic) campesino representa un algo valioso, no tiene por qué tener el mismo significado para un intelectual, pues es la cultura la que suministra un grado de valor determinado a un hecho, situación, reacción o motivo. Así una palabra puede representar un móvil suficiente por su poder injuriante para las gentes de una región o clase, y no poseerlo para los individuos de otro grupo o región. El juez, entonces, debe examinar para justipreciar el significado del móvil, las circunstancias del hecho, las costumbres particulares del núcleo social al cual pertenece el individuo, así como también los valores más generalizados en la sociedad." (El Homicidio, tomo I, pág. (sic) 402).'" (Fs. 227-228).

Además, alega el recurrente que, a favor de su representado, concurre la atenuante establecida en el numeral 5 del artículo 66 del Código Penal, es decir, la confesión espontánea y oportuna del agente, por lo siguiente:

"... **DAVID SU GONZÁLEZ** rindió (sic) declaración ante las autoridades de la policía (sic) Técnica Judicial aproximadamente 3 horas después del hecho, confesando desde este primer momento de manera espontánea y oportuna, la autoria (sic) material del homicidio. Destacó que luego del hecho se fué (sic) a su casa, esperó quince (15) minutos, salio (sic) de la misma y a la altura de un puente guardo (sic) el arma en un matorral, siendo detenido por vecinos del lugar quienes lo golpearon tal como consta a fojas 31 del expediente. Inmediatamente guió a los agentes de la P. T. J. y fué (sic) recuperada el arma (fojas 2).

Es decir **DAVID SU GONZÁLEZ** nunca intento (sic) evadirse de las autoridades, confesó desde el primer momento y cooperó con las autoridades llevándoles (sic) al lugar donde guardo (sic) su arma. ... ." (Fs. 228-229).

Y, finalmente, el recurrente alega que es injusta "... la imposición de la pena máxima (sic) (20 años) a un ciudadano que no representa peligro alguna (sic) para la sociedad, si no (sic) que, por el contrario, es un hombre que trabaja, es útil a su familia y a la sociedad, y que en un momemto (sic) dado se vio envuelto en un hecho de sangre en defensa de bienes que le habían (sic) sido sustraidos (sic) de su humilde vivienda, lo cual, repetimos, aún cuando no se (sic) acreditado fehacientemente este hecho, tampoco fue desvirtuado." (F. 229).

En contestación de traslado de 3 de abril de 1995 (fs. 231 a 236), la licenciada GEOMARA GUERRA DE JONES, Fiscal Segunda Superior del Primer Distrito Judicial, solicitó que la Sentencia impugnada sea confirmada en todas sus partes.

En cuanto a la agravante específica del homicidio por motivo fútil, la Agente del Ministerio Público señaló lo siguiente:

"La futileza es la no correspondencia de motivos, con la acción dolosa de resultado, muerte, ocasionada por motivos intrascendentes, baladies (sic) o poco serios. Algunos autores establecen que es la casi ausencia de relación entre la causa y el efecto, es decir, entre lo que impulsa la conducta y el resultado que se obtiene.

De la declaración rendida por el condenado SU GONZÁLEZ, calendad (sic) de fojas 9 a 15 del expediente al explicar los hechos señala que:

'A ese man (el occiso) lo conocí esa misma del sábado 8 de este mes ya que cuando yo iba llegando a mi casa, a eso de las nueves (sic) y media de la noche, yo lo vi (sic) que el iba saliendo de la puerta de atrás de mi residencia y cuando me vio salió corriendo para los lados de la cantina mireya (sic)'.

Más adelante narra que:

'Bueno yo no pensé nada malo ya que pensé que a lo mejor ese muchacho estaba jugando con alguien (sic). Yo me dirigí a la parte de adelante de mi cuarto y abrí la puerta delantera del mismo y me dirigí hacia la refriguedora (sic) a guardar una carne y una yuca que yo traía, pero cuando miré hacia la estufa de gas, lleno sólo estaba el otro, ya que yo siempre tengo dos tanques de gas. Enseguida me dirigí hacia la puerta de atrás del cuarto y note (sic) que ésta solo estaba ajustada".

Sigue narrando el procesado SU GONZÁLEZ que:

'Yo me enfurecí bastante ya que el sábado de la semana anterior se habían llevado del tendedero la ropa de mi señora y mía. Enseguida me dirigí hacia la cama y saqué debajo del colchón el arma de fuego que antes me habían (sic) encontrado en un bus, me la metí en la retina cerre (sic) la puerta del cuarto y me fuí (sic) hacia el supermercado a buscar al tipo que yo había visto salir de mi casa; lo busque (sic) y lo busqué y no lo encontré y como a las once y quince de la noche lo vi (sic) que venía bajando una loma, entró a una casa y después se sentó fuera en el patio. Yo me le acerqué lo agarré por el cuello y le dije: 'QUIERO QUE ME DEVUELVAS LAS COSAS QUE TE HAS LLEVADO DE MI CASA'. El me contestó: 'QUE CHUCHA, YO NO HE LLEVADO NADA'. Mientras yo mas (sic) halaba por la camisa, el m s (sic) se enojaba conmigo y fue entonces que yo saque (sic) a relucir mi arma, lo agarré con mi mano derecha puse el cañón hacia el piso, nos pusimos a forcejear, el me agarró la mano y estuvimos como dos minutos forcejeando y de repente sonó el disparó (sic)'.

De la larga cita hecha, se advierte que el generador del incidente fatal, era la creencia del imputado de haber descubierto de (sic) que el occiso había penetrado a su residencia y le había hurtado cierto tanque de gas, motivos (sic) que consideramos fútil, similar su importancia comprovado (sic) con el bien que se arrebato (sic), la vida, ...
...
... el procesado ante el hurto descubierto debió concurrir a las autoridades y no pretender hacer justicia por sus propias manos; ... ." (Fs. 232 a 234).

Con respecto a la atenuante común de la confesión oportuna y espontánea del agente, contenida en el numeral 5 del artículo 66 del Código Penal, la Fiscal Segunda Superior del Primer Distrito Judicial, en la contestación de traslado de 3 de abril de 1995, señaló lo siguiente:

"Cuando la ley Penal establece la confesión como una circunstancia atenuante del rigor punitivo, obliga a que esta (sic) no sólo sea espontánea, es decir, sin apremio, ni cálculo alguno, y oportuna. Lo que significa que la misma debe ocurrir en la fase en que adquiera relevancia para el proceso. También la confesión debe ser integral. En otras palabras, completa, no fraccionada.
...
SU GONZÁLEZ, confiesa lo que ya toda la comunidad sabía, que él ejecutó el hecho punible; pero trata de acomodar a su favor la forma en que ocurrieron los mismos. Esto hace que su confesión sea fraccionada y conveniente; por tanto no opera como atenuante a su favor." (F. 235).

Sobre el segundo punto alegado, la Sala considera que no es procedente reconocerlo puesto que la confesión del agente no fue espontánea, entendiéndose como voluntaria, ni oportuna, entendiéndose como una contribución indispensable para el esclarecimiento y precisión sobre la ocurrencia de los hechos, puesto que, conforme se desprende de la ratificación del informativo rendido por el propio encausado, luego de esconder el arma junto a un árbol, se dirigió hacia la casa donde había acontecido el hecho, donde se encontró con los compañeros del hoy occiso, quienes lo golpearon y lo llevaron al DENI, iniciándose así la acción penal con su propio informativo de los hechos. Además, el delito se perpetró

delante de varias personas como testigos presenciales del hecho, de tal manera que, independientemente de que el autor del ilícito lo hubiese negado ante las autoridades de policía, su autoría se habría determinado por los medios normales utilizados por los agentes del Ministerio Público para la investigación de los diversos delitos.

Por otro lado, la Sala lamentablemente no comparte el criterio de la Agente del Ministerio Público ni del Tribunal a quo, con respecto al homicidio cometido por motivo fútil, toda vez que, en estos casos se toma en consideración la existencia de aspectos que no tienen la relevancia para motivar al agente a cometer un homicidio, porque no ofenden los bienes individuales propios o ajenos, en las categorías de la vida y la libertad, el honor y la propiedad; puesto que en la doctrina contemporánea, todos los bienes jurídicos de las personas sean estos propios o ajenos, son susceptibles de legítima defensa, la cual antes era restrictiva para la defensa de la vida e integridad personal y el honor. En el caso bajo estudio, aquellas circunstancias motivadoras de la acción, baladíes, insignificantes, nimias o de poca importancia, que son las que definen tal agravante punitiva, y que inducen a la comisión del homicidio, no se encuentran comprobadas fehacientemente en el proceso, mas por el contrario puede decirse que **DAVID SU GONZÁLEZ** no sólo fue objeto de violación de domicilio sino que también, le fue hurtado un bien mueble constitutivo de su patrimonio -tanque de gas-, bienes jurídicos tutelados éstos, que no son más que derechos individuales propiamente tales; entendiéndose que la violación de dichos derechos, aunada a la circunstancia de que el encausado había sido recientemente afectado con el hurto de la ropa de su tendedero, nos llevan a concluir que, tal como se desprende de la propia declaración indagatoria del encausado, la inseguridad jurídica en la que se vio envuelto en un momento dado **SU GONZÁLEZ**, "... ya que estaba aburrido de que me estuvieran robando a menudo." (f. 14), lo impulsó a buscar el arma que tenía en su casa, para cometer el hecho punible, con el fin de recuperar esa misma noche, las cosas que le habían sido hurtadas y, siendo que lo que decide si la actividad del sujeto pasivo tenía la relevancia para que el sujeto activo del delito actuara de esa forma lo son las circunstancias o modalidades del acto, nos lleva a concluir que ciertamente en el caso sub-judice la situación de inseguridad jurídica representó para el sujeto activo una situación que definitivamente lo alteraba emocionalmente.

Advierte la Sala que, en estos casos, debe existir una cierta jerarquía de los motivos, como punto de partida para el juzgador al momento de determinar la calidad del motivo para cometer un homicidio; y, sin perjuicio de las circunstancias de cada caso en particular, podemos indicar que un motivo de poca importancia da lugar a que se reconozca la agravante específica del motivo fútil, no así los casos en que se de la ausencia de motivos comprobados, ni los casos en que exista un motivo que tenga cierta relevancia en razón del fin, que generalmente, es la defensa de los bienes individuales propios o ajenos, en las categorías de la vida y la libertad, el honor y la propiedad como hemos dicho; y, finalmente, en la escalera de los motivos, están los motivos que son reconocidos en la Ley como eximentes de responsabilidad penal o causas de justificación de la antijuricidad, o sea, el cumplimiento del deber, el estado de necesidad y la legítima defensa (Capítulo II, Título II del Código Penal).

En este orden de ideas, debe reconocerse lo argumentado por el recurrente en cuanto a que se trata de un homicidio simple y no de uno agravado, no obstante, la conclusión a la que arriba la Sala no justifica el proceder del procesado -ya que por más humilde que sea la persona y por muy valioso que sea el bien material objeto de hurto en este caso, en ningún momento puede decirse que tal circunstancia justifique el hecho de causarle la muerte a otra persona, pues la vida no es sólo un bien jurídico tutelado por nuestro ordenamiento penal, sino que es un derecho natural o un derecho humano que tiene todo hombre por el hecho de existir y que, por lo tanto, sobrepasa todos los ordenamientos jurídicos existentes-, tan sólo sirve para calificar el delito como homicidio simple (Art. 131 del Código Penal), puesto que en este proceso no ha podido determinarse agravante específica alguna que aumente la peligrosidad del agente al cometer el ilícito.

En este sentido, se califica al delito como homicidio simple, que conlleva

una sanción penal inferior a la que da lugar el homicidio calificado.

En la Sentencia apelada el Tribunal del conocimiento individualizó la pena en abstracto dentro del intervalo penal de doce (12) a veinte (20) años, por configurar la conducta delictiva, el tipo del homicido agravado del artículo 132, numeral 3 del Código Penal, es decir, por haber cometido el homicidio sin tener para ello justificación alguna, o sea, por motivo fútil.

Para la dosificación de la pena, el a quo tomó en cuenta los factores previstos en el artículo 56 de la excerta penal patria. El tribunal a quo individualizó la pena base por homicidio agravado en veinte (20) años de prisión y, por no existir circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, ni atenuantes ni agravantes que aplicar, fijó la pena líquida a cumplir en veinte (20) años de prisión.

También, se fijó la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por un término de ocho (8) años contados a partir del cumplimiento de la pena de prisión.

Lo anterior nos conduce entonces a la necesidad de modificar la pena, tomando en cuenta los parámetros establecidos en el artículo 56 del Código Penal, en cuanto a las circunstancias personales del sujeto activo y del pasivo, dentro de los aspectos subjetivos del delito, el Tribunal a quo en la Sentencia apelada, indicó:

> "Para individualizar judicialmente la pena, tomamos en consideración que el procesado era ocho (8) años mayor que el finado, sabía lo que hacía, actuó on ventaja, no hubo justificación del hecho, terminó la escuela básica, la secundaria y obtuvo oficio de soldador en carrera técnica. ... ." (F. 218).

Finalmente, sobre los demás aspectos señalados por el recurrente, como la circunstancia de delincuente primario del sujeto activo del delito, y demás condiciones personales del agente, la Sala los tomará en cuenta al fijar la pena base, según el artículo 56 del Código Penal, según la discrecionalidad propia de todo juzgador, dentro del intervalo penal de cada delito.

Además, tomaremos en cuenta para la dosificación de la pena en abstracto, la prohibición de la reformatio in pejus, que se desprende del artículo 2428 del Código Judicial.

Por lo anterior, estima la Sala que una pena base de diez (10) años de prisión es cónsona con la gravedad y condiciones en que se cometió el delito, reconociéndose la calidad de delincuente primario del encausado y demás circunstancias del hecho, aunado lo anterior, al valor del bien jurídico tutelado y a la evasión por seis (6) años del procesado (f. 137).

En este orden, por no existir circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que aplicar, se fija la pena líquida a cumplir en diez (10) años de prisión.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REFORMA la Sentencia apelada de 30 de agosto de 1994, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, en el sentido de condenar a DAVID SU GONZÁLEZ a la pena principal de diez (10) años de prisión; y, la CONFIRMA en lo demás.

Notifíquese, Cúmplase y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA EN EL PROCESO SEGUIDO A JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ BANDA, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE GILBERTO MANUEL CASTILLO HERNÁNDEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Para resolver la alzada, ha ingresado a la Sala Penal de la Corte Suprema, la Sentencia que fuera dictada en el proceso que por razón del homicidio de GILBERTO MANUEL CASTILLO HERNÁNDEZ, se le sigue a **JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ BANDA,** hecho ocurrido en horas de la noche del 16 de diciembre de 1993.

Un jurado de conciencia encontró culpable a **RODRÍGUEZ BANDA** por el homicidio de GILBERTO MANUEL CASTILLO HERNÁNDEZ, en audiencia pública celebrada el ocho (8) de enero de 1996. Al momento de emitir sentencia, el Segundo Tribunal Superior de Justicia le impuso una pena principal de doce (12) años de prisión y una accesoria de dos (2) años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas a partir del cumplimiento de la pena principal.

Para fijar esta pena, el Tribunal estimó que se trata de un homicidio calificado al tenor de lo dispuesto en el ordinal 6° del artículo 132 del Código Penal "referente a la acción de causar la muerte a otro después de intentar cometer un hecho punible y, precisamente el procesado primero llevó a cabo los actos necesarios para cometer el delito de robo en perjuicio de una dama, ésta pidió auxilio y ello impidió lograr el fin propuesto". Discrecionalmente, y tomando en cuenta los parámetros del artículo 56 del Código Penal; las cicunstancias de modo, tiempo y lugar; la calidad de los motivos determinantes y la conducta del agente, el a-quo fijó la pena base en la mínima para el homicidio agravado, es decir doce (12) años de prisión, considerando que a favor del reo no concurren circunstancias agravantes ni atenuantes a aplicar.

Al sustentar la apelación, la defensora de oficio del sindicado, Licenciada MIREYA RODRÍGUEZ MONTEZA, indica que la sentencia acoge como cierto el hecho no probado de la supuesta tentativa de robo de que fue víctima la señora **DIOSELINA LABRADOR DE DILLON,** quien no pudo identificar a su patrocinado como la persona que intentó agredirla. En segundo lugar, indica la jurista que, la sentencia valora subjetiva e injustamente la actuación de su representado cuando intentó ensayar una excluyente de antijuricidad, pues no toma en cuenta que se trata de una arma registrada por el sindicado lo que demuestra que no se estaba ocultando, sino que cuando el hoy occiso se le acercó corriendo con un arma en mano, pensó que lo iban a asaltar, pues ya había sido víctima de asaltos anteriormente. También señala la recurrente; que su patrocinado no presenta antecedentes penales y que es detenido de confianza en el centro de resocializacion de El Renacer y que se encuentra actualmente becado por culminar con honores sus estudios; que no se tomó en cuenta en la sentencia la vida anterior y posterior al delito ya que es una ciudadano honesto, estudioso y trabajador; que no se tomó en cuenta la confesión que de haberle disparado al hoy occiso hiciera **RODRÍGUEZ BANDA.** Finalmente indica que se debe imponer a su patrocinado la pena mínima porque se trata de una equivocación en la identidad del sujeto que intentó robar a la señora **LABRADOR DE DILLON.**

Al corrérsele el traslado respectivo a la Fiscal Tercera Superior del Primer Distrito Judicial, esta manifestó su opinión respecto al presente recurso, en los siguientes términos:

> "... La primera circunstancia planteada por la recurrente, quedó totalmente descartada al **existir en el proceso suficientes elementos que (sic) prueba que señalan a JUAN A. RODRÍGUEZ BANDA, como la persona que intentara robarle a DIOSELINA LABRADOR DE DILLON.** Ello se desprende del informe de novedad suscrito por el detective ORLANDO A. MARTÍNEZ, ... quien afirma que al momento de la detención del sujeto, la novia y la madre del occiso lo reconocieron y dijeron que se trataba de la misma persona y habían sido ellos quienes

> dieron la descripción de la ropa que lleva (sic) puesto el sujeto ...
> ... consecuencia lógica de la aprehensión del procesado y posterior detención preventiva ante los elemento probatorios que militaban en su contra, es la confesión del mismo, que hace, precisamente a raíz de conocer que su arma, era el arma incriminada, ...
> ...
> También la confesión espontánea debe ser integral, esto es completa, total y universal, en contrario de confesión parcial, relativa o fragmentada. Dándose en el caso sub-júdice, el segundo presupuesto, **al no tener el imputado otra alternativa que aceptar haber disparado contra el hoy occiso, pero negando ser el autor de la tentativa del robo, a pesar de existir en autos pruebas de que lo vieron a él tratando de robar a la señora DIOSELINA DE DILLON y al hoy occiso ir en su persecución**, en cumplimiento de un deber ciudadano y de servidor público.
> ...
> ... la calidad de delincuente primario, como la conducta anterior y condiciones personales a que hace relación la defensora no pueden ser apreciadas por el juzgador al **no estar reconocidas en las atenuantes previstas en el artículo 66** del Código Penal.". (Fs. 436-439) (lo resaltado es nuestro).

Concluye la Fiscalía su contestación indicando que coincide con el Segundo Tribunal Superior al calificar la conducta del imputado como homicidio agravado, sin embargo agrega que al dosificar la pena, no se aplicó el aumento de la agravante del numeral 6° del artículo 132 del Código Penal y que por ello le cabe al procesado un aumento de una sexta a una tercera parte.

Las piezas procesales acotadas al expediente, indican que en horas de la noche del día 16 de diciembre de 1993, en las inmediaciones de la urbanización San Pedro N° 2, ubicada en Juan Díaz, Vía Tocumen, Distrito de Panamá, tuvo lugar un incidente en el cual perdió la vida el señor GILBERTO CASTILLO, mientras perseguía al sindicado **JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ BANDA** quien minutos antes, luego de intentar robarle a la señora **DIOSELINA DE DILLON**, se había dado a la fuga. En lo anterior coinciden los testigos del hecho, y pese a que el imputado niega haber intentado robarle a la señora **DE DILLON**, acepta que fue quien disparó contra el hoy occiso, que laboraba en el departamento de seguridad del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La forma como se dieron los hechos, y los testimonios y los informes de novedad llegados al proceso indican que efectivamente **JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ BANDA** fue la persona que intentó, primeramente, robar a la señora **DIOSELINA DE DILLON** y luego le disparara a GILBERTO CASTILLO, quien intentó atraparlo cuando se daba a la fuga; por ello, estimamos inadmisible lo alegado por la defensa en el sentido de que no se encuentra probada la vinculación de su defendido con la tentativa de robo. Lo anterior hace que la calificación que el a-quo hiciera del delito de homicidio agravado por el numeral 6 del artículo 132 del Código Penal, "inmediatamente después de haberse cometido otro delito, para asegurar su ocultación, su ventaja o la impunidad para sí o para un tercero o porque no se pudo alcanzar el fin propuesto", sea la más apropiada al caso bajo examen.

La ausencia de antecedentes penales y la conducta anterior y posterior al hecho punible, etc., (artículo 56 del Código Penal) son circunstancias que el tribunal debe valorar al momento de aplicar la pena base. La Sala estima que dichas circunstancias fueron valoradas adecuadamente por el a-quo (ver página 4 de la sentencia, foja 410 del sumario), prueba de ello es que, benévolamente, fijó la pena base en el mínimo establecido para el homicidio agravado.

Por otro lado, compartimos los criterios esbozados por la Fiscalía en relación con la atenuante de la confesión que solicita la defensa le sea reconocida al procesado; puesto que la confesión a que se alude, no fue espontánea ni oportuna, tal como lo hiciera ver el agente del Ministerio Público, y como se desprende de la propia indagatoria de **RODRÍGUEZ BANDA**, legible a foja 130.

En cuanto a la observación que hiciera la Fiscalía, en el sentido de que el Tribunal dejó de aplicar la tercera parte que le corresponde al procesado por la "agravante" del numeral 6 del artículo 132 del Código Penal; consideramos improcedente tal salvedad, puesto que la ley es clara al indicar que los supuestos enumerados en el artículo 132, se utilizan a los efectos de determinar cuándo el homicidio es agravado y por tanto sancionado con una pena de 12 a 20 años de prisión. Resulta ilógico pretender que dichos numerales sean aplicados además a efectos de aumentar una tercera parte de la pena base, ya que no son consideradas circunstancias agravantes comunes, al tenor de lo dispuesto en el artículo 67 del Código Penal. Por todo lo anterior, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida, pues se adecúa a las exigencias legales necesarias.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA en todas sus partes, la Sentencia de veintitrés (23) de enero de 1996, emitida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en el proceso seguido a JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ BANDA por el delito de homicidio en perjuicio de GILBERTO CASTILLO HERNÁNDEZ.

Notifíquese, Cúmplase y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO SEGUIDO A RICARDO PEÑALBA MORALES, POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL (HOMICIDIO), EN PERJUICIO DE ISIDRA AGUILAR. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, NUEVE (9) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de apelación ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Sentencia de 30 de abril de 1996 (fs. 229 a 235), dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, que condenó a **RICARDO PEÑALBA MORALES** a la pena principal de veinte (20) años de prisión y, a la pena accesoria de dos (2) años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, una vez cumplida la pena privativa de libertad ambulatoria; y, se decretó el comiso del arma punzo-cortante con la cual fue llevado a cabo el hecho punible, por el delito de homicidio cometido en perjuicio de ISIDRA AGUILAR.

Al culminar la Audiencia Pública, **RICARDO PEÑALBA MORALES** fue declarado culpable por los Jueces de Conciencia a quienes correspondió juzgarlo (f. 160), de haber participado en la muerte de la señora ISIDRA AGUILAR, quien falleció a consecuencia de: "Shock Hipobolémico (sic) por Hemorragia masiva.", según consta en el informe de fecha 13 de octubre de 1993, del Doctor Ricaurte Samaniego, del Centro de Salud de Darién, visible de fojas 46 a 47 del expediente, todo lo cual fue el resultado de un hecho de sangre ocurrido en horas de la madrugada del día 20 de septiembre de 1993, en la Comunidad de Setegantí, Distrito de Chepigana, Provincia de Darién.

Mediante Oficio N° 47-12333 de 19 de julio de 1994 (f. 104), la doctora ELAINE BRESSAN DE VEGA, Médica Psiquiatra Forense del Instituto de Medicina Legal, notificó que **RICARDO PEÑALBA MORALES** fue evaluado el día 15 de julio de 1994 en el Instituto de Medicina Legal, y presentaba en el momento de la entrevista, "disgregación de pensamiento, verborrea, alucinaciones auditivas de carácter persecutorio. Decía que su compañera había muerto por 'cáncer en la matriz' y que le estaban acusando para perjudicarle." (f. 104).

Tal como consta en el Oficio/47-11893 de 22 de diciembre de 1994 (f. 110), suscrito por la doctora ELAINE BRESSAN, Médica Psiquiatra Forense, luego de la entrevista con los familiares de **RICARDO PEÑALBA MORALES** el 12 de octubre de 1994, por el doctor ALEJANDRO PÉREZ, Médico Psiquiatra Forense del Instituto de Medicina Legal, necesaria para el examen Psiquiátrico Forense solicitado, se concluyó que:

> "1. En el momento de la evaluación (13-7-94) el señor Penalba (sic) se encontraba con un cuadro psicótico, probablemente de origen orgánico (sic) debido al uso de alcohol.
>
> 2. Presenta cuadro de alcoholismo crónico.
>
> 3. Se enmarca dentro de las prerrogativas del artículo 25 del Código Penal.-" (F. 110).

Mediante Resolución de 8 de marzo de 1996 (fs. 215 a 221), el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, ordenó una evaluación psiquiátrica forense, con la participación de dos peritos del Instituto de Medicina Legal, al señor **RICARDO PEÑALBA MORALES**, como un acto procesal previo a la dictación de la sentencia, para fijar la pena o las medidas de seguridad correspondientes.

En este orden, mediante Oficio 63-11356 de 25 de marzo de 1996 (f. 224), suscrito por el Psiquiatra Forense del Instituto de Medicina Legal, Doctor JUAN MANUEL BÉNITEZ, del examen médico psiquiátrico de **RICARDO PEÑALBA MORALES** (fs. 225-226), se establece que:

> "1. No hay evidencia clínica de enfermedad mental alguna." (F. 224).

El licenciado **Danilo Montenegro A.**, Defensor de Oficio, sostuvo en su apelación de la sentencia, que la pena máxima impuesta, resulta excesiva y que los motivos de agravación de la misma señalados en la sentencia recurrida, no se ajustan a la realidad procesal.

Según el recurrente, la última evaluación psiquiátrica forense efectuada, se refiere a la capacidad mental de **PEÑALBA MORALES** en la actualidad, en el sentido de que no hay evidencia clínica de enfermedad mental en la persona de su defendido, y no a su capacidad mental en el momento de causarle la muerte a la señora ISIDRA AGUILAR, toda vez que este hecho de sangre ocurrió hace casi tres años, término éste que ha servido para rehabilitar a su defendido del alcoholismo crónico que padecía. Y, la doctora ELAINE BRESSAN DE VEGA después de evaluar en diferentes fechas a **RICARDO PEÑALBA MORALES**, y entrevistarse con familiares de éste, certificó que éste presentaba cuadro de alcoholismo crónico y que al momento de los hechos actuó con imputabilidad disminuída, lo cual significa que poseía incompleta la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho, en razón de grave perturbación de la conciencia, provocado por un cuadro psicótico probablemente de origen orgánico, debido al alcoholismo crónico.

Según el recurrente la capacidad incompleta que poseía **RICARDO PEÑALBA MORALES** al momento de los hechos, trae como consecuencia que las agravantes de premeditación y medios de ejecución atroces no resulten aplicables al caso, pues se requiere que la persona sea plenamente consciente y con capacidad de comprender el hecho ilícito para que tales agravantes le sean aplicables.

Además, alegó el recurrente que, en cuanto al parentesco existente entre víctima y victimario, éstos no tenían el carácter de cónyuges, pues si bien estuvieron unidos en vida marital por dieciocho (18) años (f. 37), se separaron en 1983, es decir que para la fecha del hecho habían transcurrido diez (10) años o más de separación. También, argumentó el recurrente que para la aplicación de la agravante contenida en el numeral 1 del artículo 132 del Código Penal, se requiere que el vínculo esté legalmente establecido y que el mismo debe estar debidamente acreditado en el proceso, lo que no ocurre en este caso; y, según la doctrina el matrimonio debe probarse dentro del proceso penal y la vida marital en común debe estar vigente durante cierto tiempo anterior al hecho. Por lo

anterior, según el licenciado **Danilo Montenegro A.**, estamos en presencia de un homicidio simple y no de un homicidio calificado, atendiendo al estado mental de **PEÑALBA MORALES** al momento del crimen (Art. 25 del Código Penal). Y, como en la actualidad no evidencia enfermedad mental alguna, no procederá la aplicación de medidas de seguridad.

En oposición a la apelación de 27 de junio de 1996 (fs. 243 a 248), la licenciada GEOMARA GUERRA DE JONES, Fiscal Segunda Superior del Primer Distrito Judicial, solicitó que la Sentencia impugnada sea confirmada en todas sus partes.

Con respecto a la aplicación de la agravante por la condición de cónyuges, la Representate del Ministerio Público alegó que, tal como lo reiteró el Tribunal a quo en la Sentencia apelada, la doctrina jurisprudencial ha interpretado que el vínculo entre dos personas en condición de cónyuges no es necesario acreditarlo a través de certificado de matrimonio, basta que las pruebas demuestren que en la comunidad dentro de la cual se desenvuelven los protagonistas del hecho, son vistos y considerados como marido y mujer, teniendo los mismo efectos de las uniones consensuales y, en tal sentido, la Agente del Ministerio Público señaló:

> "En el caso concreto que nos compete, está probado en autos que el procesado y la occisa convivieron 18 años en condiciones de singularidad y estabilidad, durante los cuales concibieron siete hijos, y el distanciamiento habido entre los mismos, no le resta la calidad del parentesco por afinidad con la occisa, en que se fundamenta la especial protección de la norma, máxime que el procesado tenía las intenciones de reconciliarse con la difunta y durante todo el distanciamiento, no mantuvo relación estable con otra mujer." (F. 246).

La Sala difiere del criterio antes esbozado, puesto que si bien nuestra Constitución Nacional en su artículo 54, reconoce la institución del matrimonio de hecho entre personas legalmente capacitadas para contraer matrimonio, mantenida durante cinco (5) años consecutivos en condición de singularidad y estabilidad, atribuyéndole todos los efectos del matrimonio civil, y este artículo constitucional, es desarrollado en el Título I, Del matrimonio, de los artículos 53 al 59 del Código de la Familia, para que éste surta todos los efectos, su inscripción debe ser solicitada ante el Registro Civil y deberá probarse con las declaraciones de dos personas honorables y vecinas del lugar, y a falta de dicha inscripción, podrá comprobarse judicialmente dicha unión por cualquier persona para la reclamación de sus derechos.

Siendo el caso que **RICARDO PEÑALBA MORALES** y la occisa, estuvieron separados por más de diez (10) años, no puede entonces hablarse de una unión mantenida durante cinco (5) años en condiciones de estabilidad, puesto que la estabilidad se cumple, según el artículo 54 del Código de la Familia, cuando la convivencia sea constante, durable y permanente. En este caso, si bien puede decirse que el procesado y la víctima convivieron por dieciocho (18) años en un matrimonio de hecho, cuyo fruto fueron siete hijos, la simple separación de cuerpos por más de diez (10) años, elimina todos los efectos civiles del mismo.

Cabe aclarar que, contrario a lo dicho en la Sentencia apelada, en los casos en que resulte aplicable el numeral 1 del artículo 132, como agravante específica del homicidio, es decir, en la persona de un pariente cercano con conocimiento del parentesco, si bien el artículo 68, establece que para los fines de la ley penal, se consideran parientes a los cónyuges, éstos no pueden ser considerados como parientes por afinidad sino únicamente como cónyuges.

En cuanto a la imputabilidad disminuída diagnosticada por la doctora ELAINE BRESSAN, según la Fiscal Segunda Superior del Primer Distrito Judicial, este punto fue aclarado durante el interrogatorio en la Audiencia, a foja 173, donde la Médico Psiquiatra Forense manifestó que, al momento de la entrevista, el señor **PEÑALBA** no estaba apto para hacer la entrevista, lo cual se desprende de su informe de foja 104, en el cual además, solicitó entrevista con familiares del sindicado para concluir la experticia.

La entrevista con el familiar de **RICARDO PEÑALBA** fue realizada por el doctor ALEJANDRO PÉREZ, quien concluyó que **RICARDO PEÑALBA MORALES**, en el momento de la evaluación, presentaba cuadro pisicótico, cuadro de alcoholismo crónico y se enmarcaba dentro de las prerrogativas del artículo 25 del Código Penal.

En tal virtud, a juicio de la Fiscal Segunda Superior del Primer Distrito Judicial,

> "Queda claro entonces, que los peritos psiquiátricos, precisan el momento en que PEÑALBA MORALES presentaba el cuadro de alcoholismo crónico, y no es precisamente el día de los hechos. Ese cuadro fue desapareciendo, cuando en la actualidad y conforme lo certifica el Dr. JUAN MANUEL BENÍTEZ, en su dictamen, consultable a fojas 224-226 del proceso, el procesado PEÑALBA MORALES, no tiene evidencia clínica de enfermedad mental alguna. ... ." (Fs. 247-248).

Ciertamente, en este proceso se dio una confusión en cuanto a la situación psíquica del procesado, quien en primer lugar fue enmarcado dentro de la imputabilidad disminuída del artículo 25 del Código Penal, sin embargo, al realizarse el último examen médico legal se comprobó que el mismo no se enmarcaba en tales prerrogativas. Así, pues, la Médico Psiquiatra Forense, al ser interrogada en la Audiencia (fs. 161 a 213), manifestó que, cuando entrevistó a **RICARDO PEÑALBA MORALES**, éste no estaba en su capacidad mental normal y, en tal razón, indicó que con la indagatoria únicamente, no pudo llegar a ninguna conclusión sobre el estado mental del procesado al momento del hecho; luego indicó que necesitaba volver a entrevistarlo para llegar a alguna conclusión. Según manifestó la doctora ELAINE BRESSAN, el hecho de no haber podido establecer el estado mental de **RICARDO PEÑALBA MORALES**, al momento del hecho, la hizo concluir en un alcoholismo crónico, que hoy en día se define por las consecuencias que tiene en la vida de las personas, y este señor ha tenido consecuencias bastante severas y ha seguido tomando, y no por la cantidad y frecuencia con que la persona ingiere bebidas alcohólicas como en años anteriores; y, a raíz de dicha enfermedad provocada, pueden presentarse ciertas alteraciones en él, por lo que lo enmarcó en el artículo 25 del Código Penal. No obstante, al referirse a la indagatoria, la doctora BRESSAN indicó que **RICARDO PEÑALBA**, al rendir la misma -dos días después del hecho-, no estaba bajo efecto de sustancia alguna que pudiera sacarlo de la realidad, porque el respondió adecuadamente a las preguntas (Ver f. 165).

De lo anterior se desprende que, si bien la doctora ELAINE BRESSAN, en un primer momento no pudo determinar la situación psíquica del procesado por el estado mental que el mismo presentaba en la entrevista, dicho estado mental pudo ser determinado con posterioridad en la ampliación decretada por el Tribunal a quo, al realizarse una nueva entrevista al procesado en un estado mental normal, la cual aunada a la declaración indagatoria del mismo, pudo determinar el estado psíquico normal de **RICARDO PEÑALBA MORALES**, quien actuó con plena conciencia y discernimiento.

Cabe destacar el hecho de que, en los casos en que la persona presenta un cuadro psíquico de imputabilidad disminuída, además de la pena procede fijar al procesado medidas de seguridad curativas.

Al aplicarse las circunstancias agravantes específicas del homicidio por premeditación y medios de ejecución atroces, en la Sentencia apelada se señaló:

> "No tuvo ninguna justificación el sujeto activo para llevar a cabo el hecho, sus actos fueron ejecutados sin piedad, no le ofreció ningún tipo de auxilio a la víctima, ésta estaba en desventaja y el hecho causó gran impresión en la comunidad, ..." (F. 234).

La Fiscal Segunda Superior del Primer Distrito Judicial, señaló que las circunstancias agravantes de premeditación, alevosía y ventaja y con medios de ejecución atroces, se desprenden de la propia declaración indagatoria del procesado, quien dejó claro que al momento de los hechos no había ingerido alcohol desde hace tres días, y los testigos presenciales afirman no haberlo

visto tomando ese día. Además, cuando se le preguntó si tenía planeado darle muerte a la hoy occisa, éste contestó que sí tuvo la intención de matarla como lo hizo y que lo hizo estando ella acostada, dándole cinco machetazos, y luego al salir ésta corriendo la siguió hasta la casa del vecino, dándole con el machete y al llegar donde el vecino la agredió nuevamente.

La Sala coincide con la aplicación de las agravantes específicas del homicidio, de los numerales 2 y 3 del artículo 132 del Código Penal, puesto que, sobre la premeditación, se dio el factor tiempo y la perversidad de la personalidad del agente, quien se acercó a su víctima en horas de la madrugada, con la intención de causarle la muerte a su exconcubina, madre de sus siete hijos, porque según declaró posteriormente, ésta lo había amenazado con meterlo preso y matarlo, por lo que él se le adelantó.

En cuanto a los medios de ejecución atroces, no cabe la menor duda que las heridas que le propició **RICARDO PEÑALBA** a la hoy occisa, a quien persiguió por la escalera lesionándola con el machete, efectivamente fueron causadas con el fin de aumentar el sufrimiento de la misma.

Por lo tanto, se desvirtúa el argumento del licenciado **Danilo Montenegro A.**, sobre el homcidio simple, manteniéndose lo esbozado en la Sentencia apelada, sobre el homicidio agravado.

En la Sentencia apelada el Tribunal del conocimiento individualizó la pena en abstracto dentro del intervalo penal de doce (12) a veinte (20) años, por configurar la conducta delictiva, el tipo del homicido calificado del artículo 132, ordinales 1, 2 y 3 del Código Penal, es decir, por tratarse de un homicidio cometido en perjuicio de pariente cercano, con premeditación y medios de ejecución atroces.

Para la dosificación de la pena, el a quo tomó en cuenta los parámetros previstos en el artículo 56 del Código Penal y, en el negocio bajo examen, aplicaremos los referentes a los aspectos objetivos y subjetivos del hecho punible; las circunstancias de modo, tiempo y lugar; la calidad de los motivos determinantes; las condiciones personales tanto del sujeto activo como de la sujeto pasivo; la conducta del agente y los efectos sociales como familiares. El tribunal a quo individualizó la pena base por homicidio agravado en veinte (20) años de prisión y, por no existir circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, ni atenuantes ni agravantes que aplicar, fijó la pena líquida a cumplir en veinte (20) años de prisión.

También, se fijó la pena accesoria de dos (2) años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, una vez cumplida la pena privativa de libertad ambulatoria; y, se decretó el comiso del arma punzo-cortante con la cual fue llevado a cabo el hecho punible.

Por lo anterior, estima la Sala que una pena base de veinte (20) años de prisión es cónsona con la gravedad y condiciones en que se cometió el delito.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Sentencia apelada de 30 de abril de 1996, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, que condenó a RICARDO PEÑALBA MORALES a la pena principal de veinte (20) años de prisión y a la pena accesoria de dos (2) años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, una vez cumplida la pena privativa de libertad ambulatoria; y decretó el comiso del arma punzo-cortante con la cual fue llevado a cabo el hecho punible.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A MARLON LINARES LEONARD Y NARCISA ESTELA NÚÑEZ REYNA, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE FERNANDO ADRIÁN FLORES. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante sentencia de 29 de diciembre de 1995, el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, declaró responsable criminalmente al procesado **MARLON LINARES LEONARD (a) "MARLON"**, del delito de homicidio en detrimento de Fernando Adriano Flores Pájaro y lo condenó a la pena principal de dieciséis (16) años de prisión y a la de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el término de 10 años una vez cumplida la pena anterior. Además, le impuso medida de seguridad preventiva de carácter personal de prohibición de portar armas por el término de 16 años después de cumplir su condena.

Tanto el procesado como la defensa técnica, representada por el licenciado Danilo Montenegro, miembro del Instituto de Defensoría de Oficio, impugnaron el fallo al momento de notificarse y por sustentado en tiempo oportuno permite el examen en esta segunda instancia.

FUNDAMENTO DEL APELANTE

En primer lugar, el licenciado Montenegro, señala que el proceso se realizó de acuerdo con las reglas del juicio ordinario o sea en derecho, a petición de su representado, quien ante la presencia de tres magistrados que conforman la Sala, se declaró culpable del delito del homicidio; situación que estima debe ser valorada en el momento de la dosificación de la pena.

En lo medular, no está conforme con la ubicación de la conducta de su defendido en el tipo penal de homicidio calificado por motivo fútil, ubicado en el artículo 132 del Código Penal. Explica que se trata de una especie de rencilla o guerra entre pandillas rivales y que su defendido desde el primer momento que fue investigado, confesó haber causado la muerte de Flores Pájaro porque los muchachos de Arco Iris habían matado a su sobrino en 1992; que su intención era herirlo apuntándolo hacia los pies pero el arma al momento del disparo se levantó.

Concluye el impugnante que no se trata de un motivo intrascendente o de poca importancia, y que en ese sentido, la Corte Suprema ha manifestado que en la medida que el motivo que llevó al homicida a causar la muerte no este comprobado, ello no implica que el homicidio se haya dado por razón de tal motivo fútil.

Por otra parte, señala que la ubicación de la herida región lumbar resulta compatible con lo que ha dicho el procesado, dado que la experiencia indica que las armas de fuego, sobre todo las cortas, suelen levantarse cuando se da la detonación, lo cual es un hecho conocido. Por tanto, le llama la atención que los magistrados del tribunal Superior lo ignoren al señalar que ello es difícil de asimilar de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

Aspira así, a que se le reconozca la atenuante consagrada en el numeral 2 del artículo 66 del Código penal y se califique la conducta de su defendido como un homicidio simple (fs. 302-304).

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Al dar respuesta al traslado, el licenciado Dimas E. Guevara G., Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial, estima que la sentencia recurrida debe ser confirmada en todas sus partes.

Explica que según lo alegado por la defensa se estaría ante un acto ilícito de venganza premeditada; además que ni siquiera se ha establecido que el hoy occiso estuviera involucrado en dicho hecho. No siendo viable aducir esa circunstancia como elemento favorable al procesado.

Respecto a la exclusión de la culpabilidad del procesado, estima que resulta extemporánea, ya que fue declarada por el Tribunal de Jurado de Conciencia. Sin embargo, este caso fue llevado a Tribunal de Derecho a solicitud del procesado.

Considera que la declaratoria de culpabilidad fue tomada en consideración por el Tribunal al momento de fijar la pena, cuando discrecionalmente no aplicó la pena máxima al procesado sino que partió de una pena intermedia (fs. 306-307).

FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA

Se refiere el presente proceso penal a la muerte violenta de Fernando Adrián Flores, de veinte años de edad, ocurrida en horas de la noche del día 9 de febrero de 1994, como consecuencia de herida producida con arma de fuego, hecho ocurrido en avenida 13 y Central de la ciudad de Colón.

Vinculado a ese ilícito fue indagado y llevado al plenario Marlon Linares Leonard, quien renunció al derecho de ser juzgado por jurados, realizándose la audiencia el 29 de noviembre de 1995, de conformidad con los trámites del proceso ordinario y decidido en derecho.

FUNDAMENTACIÓN INTELECTIVA

Con respecto al juicio de tipicidad, el tribunal de primera instancia calificó la conducta de Linares Leonard en el tipo penal de homicidio calificado por motivo fútil, contemplado en el artículo 132 del Código Penal numeral 3, que tiene asignada la pena de prisión de 12 a 20 años.

Indica que el comportamiento agresivo del procesado fue frío, sin escrúpulos y alejado de una actitud digna y decorosa. En lo medular señala:

> "Hay que destacar que como razón fundamental esgrimida por el imputado LINARES para ultimar a FLORES es que "los muchachos de Arco Iris, en el año de 1992, habían matado a mi sobrino el que apareció muerto en el corredor". Produce la intención de que se trata de un pase de factura o venganza privada. No obstante, LINARES no atina a decir que la víctima fue quien le causó la muerte a su sobrino, sino que da a entender que pertenecía a una banda que lo hizo ... ?".

Como elemento calificador del homicidio agravado, el motivo fútil está consagrado en pocas legislaciones penales y es aquella "causa nimia, o ausencia de motivo real, atendible, es el factor móvil de poca importancia o poca seriedad que determina a la voluntad del agente para que haga o no haga alguna cosa" (Corte Suprema. Sala de lo Penal. Resolución de 27 de noviembre de 1991).

Ahora bien, observa la Sala dos aspectos muy importantes.

Primero, el único testigo presencial, Marcial Esquina Hooker, quien estaba en compañía de Flores Pájaro al momento de los hechos, afirma que después que el sujeto le disparara a su amigo, lo vio cuando le arrancó la cadena que tenía puesta el hoy occiso (cfr. 91).

Consta en el informe de comisión de 10 de febrero de 1994, que la detención del procesado, se efectuó cuando viajaba en compañía de Narcisa Estela Núñez Reyna y su hermano menor de edad Alberto Reyna en el autobús de la ruta Panamá-Colón, a la altura del sector Sabanita y que en ese momento le encontró a la joven el arma homicida y al menor una cadena de oro que le pertenecía al occiso (cfr. 36). Los agentes Virgilio Garibaldi, Francisco Ayarza y Virgilio Garibaldi se afirman y ratifican del contenido del informe (fs. 114-115; 119-121 vt y 122-123).

Con respecto al asunto de las dos cadenas, Linares Leonard al ser indagado, señala que una pertenece a la joven Narcisa y la otra **"no tiene conocimiento de donde salió"** (fs. 99). Narcisa Estela Núñez Reyna, declara que una de las cadena era de ella y **"de la otra cadena no sabe nada"** (f. 105).

En la denuncia presentada por Inocencio Flores Altamar, padre del occiso, afirma que a su hijo le robaron dos cadenas de oro (f. 12). Al ponérsela de presente las cadenas aludidas, indicó que no podía afirmar que eran las que tenía su hijo puestas el día de los hechos, porque las mismas le pertenecían a su hija Yadira Elvira Flores de Jiménez quien estaba hospitalizada en el Hospital Santo Tomás, sala 23 tercer piso, cama 23 y no sabe que tiempo va a permanecer en dicho centro de salud (fs. 109-110).

Hasta ese punto llegó la investigación sobre las cadenas de oro.

Por otra parte, el procesado excepciona en su indagatoria que su actuación en este caso se debió a que un sobrino fue ultimado por miembros de la banda Arco Iris en 1992 (f. 99), de la que supuestamente formaba parte el occiso.

No obstante, el escrito de la evaluación psiquiátrica forense signada por la doctora Elaine Bressan de Vega, del Instituto de Medicina Legal, deja constancia que el procesado narra la historia del problema de otra manera. Indica que pertenece a la banda denominada "Bambú", la cual había peleado con la banda a la que pertenecía el occiso, que de ese enfrentamiento resultó herido de bala en una pierna y por ello decidió vengarse (cfr. 214).

En cuanto a la excepción por la muerte del sobrino, no se realizó ninguna diligencia con el objeto de verificar tal versión. Por tanto, no se comprobó la existencia de esa alegación.

Ahora bien, el procesado manifiesta que se desenvuelve en grupos de bandas delictivas e incluso que ha recibido siete impactos de balas "por guerra de pandillas" (cfr. 214). Las bandas o pandillas en nuestro medio están formadas por sujetos peligrosos cuyas actividades delictivas por lo general, consisten en cometer delitos contra el patrimonio, delitos relacionados con droga y delitos contra la libertad sexual, sin descartar los delitos contra la vida e integridad personal.

Dentro de ese orden de ideas, si bien no se llevaron a cabo diligencias para comprobar si el comportamiento ilícito llevado a cabo por Linares Leonard se dio para facilitar un hecho punible contra el patrimonio, al encontrar en su poder el arma y las cadenas de oro robadas al occiso y con base a varios testimonios recogidos en autos, es posible calificar su conducta en el tipo penal de homicidio agravado de que trata el artículo 132 ordinal 5 del Código Penal, no así en el 3° como señaló el tribunal de primera instancia.

Por tal razón, siendo el objeto del juicio penal establecer la realidad de los hechos, las pruebas allegadas son demostrativas de que la conducta realizada por el procesado se adecúa al tipo penal del homicidio agravado que contempla el artículo 132 numeral 5° del código punitivo patrio, que está sancionado con pena de prisión de 12 a 20 años.

En cuanto a la individualización judicial de la pena, la Sala estima que es correcta la impuesta tomando en consideración los factores contemplados en el artículo 56 del Código Penal.

No se observan circunstancias que modifiquen la responsabilidad penal (arts. 66 y 67 del C. P). En cuanto a la solicitud de la defensa respecto al reconocimiento de la circunstancia atenuante común, referente a no haber tenido la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo (art. 66 ord. 5), dicha circunstancia no es compatible con el comportamiento asumido por Linares Leonard, en este caso.

Luego entonces, la pena líquida a imponer es la fijada por el a quo, a pesar de que la calificación del delito se ubica en un numeral distinto al

establecido en la sentencia revocada.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA , SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia apelada.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO A BERNARDO OJINIS DIMAS URRUTIA, POR EL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE LETICIA CHAVARRÍA DE CUETO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante sentencia calendada 9 de abril de 1996, condenó a Bernardo Ojinis Dimas Urrutia a cumplir la pena de 20 años de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas por el término de 10 años, como responsable del delito de homicidio cometido en perjuicio de Leticia Chavarría de Cueto. Esta decisión jurisdiccional fue apelada por el sentenciado y su defensor técnico, licenciado Luis Carlos Arosemena Ramos.

En el libelo de sustentación de la alzada el imputado sostiene básicamente que la conducta incriminada no se enmarca en el supuesto previsto en el numeral 2 del artículo 132 del Código Penal, pues "mi actitud únicamente puede considerarse como DELITO PASIONAL y en su comisión no puede mediar el factor Premeditación y mucho menos puede ser calificado con ese (sic) agravante" (f. 355). Asimismo, plantea que la sentencia atacada no "tomó en cuenta para la dosificación de la pena ... mi confesión tan pronto fui conducido a las autoridades ... Posteriormente expresé mi ... arrepentimiento" (f. 356).

Cabe destacar que los demás reparos que formula el imputado están dirigidos a censurar el fallo en lo concerniente a su responsabilidad penal (f. 358). No obstante, estos planteamientos resultan inapropiados en esta fase del proceso, toda vez que la culpabilidad del apelante fue declarada por un jurado de conciencia (f. 267), decisión que se caracteriza por ser autónoma y definitiva.

Por su parte, el licenciado Arosemena Ramos argumenta que el tribunal a-quo debió tomar en consideración que su defendido actuó completamente cegado por los celos, circunstancia que "se enmarca dentro de la causal 8 del artículo 66 del Código Penal" (f. 363). Sostiene igualmente que al "momento de rendir su indagatoria **BERNARDO** aceptó la responsabilidad del hecho ... encuadrándose su confesión en el artículo 66 ordinal 5 del Código Penal la que no fue tomada en cuenta" (f. 363). Finalmente, el defensor de oficio rechaza la apreciación de que el procesado haya actuado "premeditadamente y sin razón justificada", pues "**DIMAS URRUTIA y LETICIA** habían peleado por los celos que le provocaba la relación que se estaba dando entre la finada y **ANÍBAL**, lo que provocó posteriormente este lamentable crimen" (f. 363).

Como viene indicado, la culpabilidad del sentenciado ya fue declarada por tribunal de jurados de conciencia, por lo que la actuación de la Sala Penal se circunscribe a considerar los puntos objetados por los recurrentes que guardan relación con la pena impuesta.

La encuesta sumarial permite conocer que el hecho de sangre ocurrió en horas de la mañana del día 20 de octubre de 1993, en la oficina de Consular y Naves del Ministerio de Hacienda y Tesoro, localizada en el Puerto Pesquero de Vacamonte, Distrito de Arraiján, provincia de Panamá, cuando Dimas Urrutia empleó un arma blanca (cuchillo) y le infirió varias heridas a su concubina Leticia Chavarría de Cueto. Según el dictamen médico-legal, la muerte fue consecuencia de: "SHOCK HEMORRÁGICO. SECCIÓN DE CARÓTIDA DERECHA Y VENAS YUGULARES. HERIDA PUNZO CORTANTE EN EL CUELLO" (f. 73).

Se cuestiona que el homicidio haya sido ejecutado con premeditación. La Sala advierte que esta agravante específica consiste "en el propósito firme, reflexivo y bien meditado tendiente a la ejecución de la prohibición penal. Tal propósito se caracteriza por mantenerse persistente durante el lapso que sea necesario hasta realizar todos los actos encaminados a procurar el resultado criminal" (Registro Judicial, junio de 1995, pág. 335).

En el caso que ahora ocupa a la Sala, no se encuentra probado que el sentenciado hubiere concebido, firme y deliberadamente, la ejecución de la conducta delictiva con antelación a los hechos. Basta observar lo que relata el imputado Dimas Urrutia, en el sentido de que el día anterior discutió con la víctima "cosas de marido y mujer ... Comenzó a decir cosas y palabras obscenas (sic), yo me puse muy molesto y para evitar un problema, me fui de la casa para donde mi hermana BASILIA DIMAS en curundú" (f. 147); que "El día 20 temprano me tocaba viajar y no fui para viaje (sic)"; y que su presencia en el lugar de trabajo de su concubina, fue para "llevarle la cédula ya que ella me había mandado a buscar un cheque del hijo" (f. 147).

En autos se comprueba que, efectivamente, Dimas Urrutia estaba asignado para viajar el día 20 de octubre en la nave de nombre Ikaros, "pero por problemas que tuvo con el capitán encargado de la nave, al prenombrado señor no se le permitió salir en ese viaje, es decir, se quedó en tierra" (f. 201). Es de advertir también que en la encuesta sumarial no existe pieza probatoria alguna que invalide la explicación que ofrece el procesado de su presencia en el lugar en que acaeció el hecho de sangre.

Por otra parte, la Corte resalta que el hecho de que el arma blanca (cuchillo) utilizada durante la agresión "no es uso de la oficina" (f. 19), como lo manifiesta Aníbal Enrique Barría De La Cruz, ello no significa necesariamente que el reo tuviera planificada la acción homicida porque, tal como se indica en la sentencia, "es un hecho cierto que todo pescador lleva consigo un arma blanca que utiliza como instrumento de trabajo" (f. 345).

A falta de otros elementos de prueba que pongan de relieve que el proceder del imputado fue premeditado, producto de una fija e intencionada voluntad de cometer el hecho punible, esta Superioridad no puede menos que desestimar la premeditación, como conducta de agravación específica del delito de homicidio, pues dicha circunstancia "debe estar comprobada. Y si no está acreditada fehacientemente, la duda debe favorecer al reo (indubio pro reo)" (Registro Judicial, junio de 1991, pág. 59).

En cuanto al reclamo que se formula para que se tenga como atenuante la confesión del agente, la Sala considera que no cabe su reconocimiento, pues Dimas Urrutia se vio forzado a aceptar la autoría del ilícito al ser descubierto cuando ejecutaba el acto homicida. Además, se observa que el sentenciado no tenía la intención de presentarse voluntariamente a declarar ante las autoridades competentes. Así lo declaran Aníbal Enrique Barría De La Cruz: "el joven abrio la puerta, y estaba enbarrado de sangre por la pierna ... cogió una botella de soda partiendo la venta del deposito, luego **el joven se tiro abajo, callendo a un techo y de hay se tiro al agua**" (sic) (f. 18), y Alonso Núñez Quiróz: "lo primero que vi fue el cuerpo de una mujer tirado en el piso ... luego vi al sujeto que estaba adentro ... escuché dentro del cuarto ... ruidos como de vidrios ... escuché unas voces ... gritaban que un hombre se había tirado por la ventana ... **decidimos bajar en persecusión (sic) de este sujeto**" (fs. 25-26). Es evidente entonces, que la confesión de su protagonismo en el hecho delictivo no reviste la calidad ni de espontánea ni de oportuna.

Se desestima también la aplicación de la atenuante común de arrepentimiento, toda vez que Dimas Urrutia no realizó actos posteriores a la consumación del delito, encaminados a disminuir las consecuencias dañinas de su acción delictiva.

Finalmente, con relación a la petición del defensor técnico en el sentido de que, con base en el numeral 8 del artículo 66 del Código Penal, se reconozca "que mi representado actuó totalmente cegado por los celos", hay que advertir que el citado precepto legal autoriza a reconocer, con el valor de atenuante común, "Cualquier otra circunstancia no preestablecida por la ley, que a juicio del Tribunal debe ser apreciada por su analogía con las anteriores o por peculiares condiciones del ambiente". De lo visto se sigue que el reconocimiento de una circunstancia a este título se encuentra librada a la discreción del juzgador, de modo que carece de sustento jurídico la exigencia en comento.

Con vista en lo expuesto hasta ahora, se concluye que la conducta del procesado Dimas Urrutia encuentra adecuación típica en el artículo 131 del Código Penal, que establece una pena que oscila de 5 a 12 años de prisión para sus infractores. A los efectos de individualizar la pena aplicable, deben ser considerados los factores establecidos en el artículo 56 del Código Penal. Con tal fundamento, la Sala considera prudente fijar como pena base 12 años de prisión, la cual debe ser aumentada en una tercera parte por la concurrencia de la circunstancia agravante prevista en el numeral 10 del artículo 67 del Código Penal, correspondiente a: "Haber cometido el hecho punible con abuso de las relaciones domésticas, prestación de obras o de servicios, de cohabitación o de hospitalidad", resultando en dieciséis (16) años la cuantía de la pena a imponer.

En razón de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REFORMA la sentencia de 9 de abril de 1996 proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, en el sentido de CONDENAR a Bernardo Ojinis Dimas Urrutia a la pena de dieciséis (16) años de prisión, y la CONFIRMA en lo demás.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN

FIANZA DE EXCARCELACIÓN A FAVOR DE ÁNGEL ABEL FRÍAS, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO FÉLIX DE LEÓN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante resolución de 31 de agosto de 1995, el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, negó a **ÁNGEL ABEL FRÍAS GARCÍA**, el beneficio de excarcelación, formulado a su favor el 21 de agosto de ese año (fs. 7-8). Dicha decisión que fue impugnada por el señor Frías García según consta en escrito visible a foja 10. El recurso fue concedido por medio de la providencia de fecha 18 de septiembre de 1995.

Diez meses después, mediante informe secretarial de fecha 19 de julio de 1996, se le comunica al magistrado sustanciador, que el cuadernillo de fianza de excarcelación a favor de Frías García, el cual estaba pendiente de ser remitido a la Corte Suprema de Justicia en apelación, se encontraba traspapelado en el escritorio de uno de los funcionarios de esa secretaría (cfr. f. 12).

Es en esas condiciones que ingresa a la Secretaría de la Sala Penal, el 22 de julio de 1996, el cuadernillo que contiene la solicitud de fianza de excarcelación de Ángel Abel Frías, en grado de apelación.

SITUACIÓN PROCESAL

Al examinar los antecedentes, la Sala se percata de la lectura del expediente principal, que a solicitud de la defensa técnica (fs. 255-257), la Fiscalía Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, emitió la resolución calendada el 26 de diciembre de 1995, mediante la cual ordenó la libertad del señor Frías García teniendo como basamento, que las piezas procesales demuestran que en el presente caso se acreditó la causal de justificación, conocida como legítima defensa, que consagra el artículo 21 del Código Penal.

Además, apoyado en estas mismas razones, el agente del Ministerio Público solicita por medio de la vista fiscal N° 20 de fecha 27 de febrero de 1996, que se sobresea de manera definitiva a favor del señor Frías García dentro del presente proceso (fs. 278-283).

Por razón de la dilación con que se ha manejado este caso, se está ante el fenómeno jurídico conocido como sustracción de materia, dado que actualmente el señor Frías García, goza de libertad y no se requiere decidir la solicitud de fianza presentada con antelación.

La Sala llama la atención a la secretaría del tribunal de primera instancia, en el sentido, que las funciones y diligencias judiciales que realizan por ministerio de la Ley se deben llevar a cabo de manera acuciosa, sin negligencia porque la administración de justicia debe ser eficiente, expedita y sin dilaciones.

En el presente caso, se trata de una resolución que decide una solicitud de fianza. La fianza no es más que una medida legal de obtener la libertad por medio del cumplimiento de ciertas obligaciones que garantizan la continuidad del proceso y la comparecencia oportuna del procesado. Dada su importancia, nuestro Código Judicial ordena que el recurso de apelación interpuesto contra las resoluciones que decidan las solicitudes de fianza se deben conceder **ipso facto** por lo que una demora de diez meses representa en estos casos una anulación de la institución de libertad caucionada.

Es claro pues, que no se debe permitir este tipo de negligencia que pueden afectar la libertad de las personas, que tan celosamente, protege nuestro ordenamiento procesal penal.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que ha ocurrido sustracción de materia en el presente caso.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN A FAVOR DE NURIA MARÍA ÁLVAREZ A., SINDICADA POR EL SUPUESTO DELITO DE ABORTO PROVOCADO EN DETRIMENTO DE MARILÚ ITZEL HIGUERO DE LEÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá formalizó recurso de apelación contra auto calendado 11 de julio de 1996, mediante el cual el Segundo Tribunal Superior de Justicia concede el beneficio de fianza excarcelaria a favor de Nuria María Álvarez Alvarado, sindicada por el delito de aborto provocado cometido en perjuicio de Marilú Itzel Higuero De León, y fija la cuantía de la fianza en la suma de B/.3,000.00.

El agente del Ministerio Público, en escrito consultable a fojas 11-13 del cuaderno, expresa su desacuerdo con el auto impugnado, por considerar que de las sumarias se desprende que la Doctora Nuria María Álvarez "no solamente tenía conocimiento de la realización del Aborto, sino que facilitó el lugar donde se realizaría el mismo, para lo cual dio su consentimiento y subsiguiente tuvo participación en ese ilícito, prestando auxilio al señor ALEXIS VÁSQUEZ, durante la practica de este hecho criminoso" (f. 12). Sostiene que "la Cuantificación de la Fianza impuesta es irrisoria", por cuanto "el delito sujeto a investigación no contempla tal beneficio, en base a lo normado en el artículo 2181 del Código Judicial" (f. 13).

La Sala pasa a resolver la alzada, exclusivamente sobre los puntos de la resolución a que se refiere el recurrente, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 2428 del Código Judicial. Es así como advierte que la investigación versa sobre la muerte de Marilú Itzel Higuero De León, ocurrida en horas de la tarde del 17 de junio del año que decurre, como consecuencia de maniobras abortivas que le practicara Alexis Velásquez Medina, en la Clínica Camila, ubicada en el sector sur, Tocumen, provincia de Panamá.

Para reconocer el beneficio de fianza excarcelaria solicitada, el tribunal de primera instancia dio por establecido que "contra la Dra, ÁLVAREZ no existen en autos graves indicios, ni serios motivos de credibilidad que vinculen su conducta con la comisión de dicho delito, puesto que, quien se confesó único autor material del mismo, el Dr. ALEXIS VELÁSQUEZ MEDINA ... excluyó de toda participación en el mismo a la Dra. NURIA ÁLVAREZ ALVARADO" (f. 8 de autos).

El examen del proceso permite conocer que, hasta este momento, el único elemento probatorio que compromete la vinculación de Nuria María Álvarez Alvarado con el ilícito que se le imputa, es la declaración indagatoria de Marilú Esther De León Escarriola, madre de la occisa, quien sostiene que tanto Alexis Velásquez Medina como Álvarez Alvarado "estaban ... en la práctica del aborto de mi hija" (f. 54). No obstante este señalamiento, la Corte advierte que la afirmación carece de soporte jurídico, pues si bien De León Escarriola acompañó a su hija a la Clínica, ella no presenció la práctica abortiva, por lo que mal puede determinar cuál fue el grado de participación que tuvo Álvarez Alvarado en tal actividad.

El dicho de De León Escarriola pierde aun más fuerza probatoria, cuando se confronta con el relato de los hechos que brinda el imputado Velásquez Medina, quien afirma que la hoy finada "fue a verme ... para ver si yo podía ayudarla a que perdiera el hijo ... le dije que fuera el lunes ... al CONSULTORIO MÉDICO CAMILA, que es propiedad de mi esposa ... yo le pasé el mensaje ... a mi esposa de que le (sic) lunes iba a ver una paciente en la Clínica, yo no le dije para que era ... El lunes ... procedí a hacer la dilatación del cuello uterino ... me quedé con ella esperando que expulsara el feto ... con una pinza de garfio procedía a buscar el cordón umbilical, allí en ese procedimiento ella tuvo sangrado ... se pudo (sic) bastante pálida ... cayó en un paro ... comencé a reanimarla ... al mismo tiempo yo llamá (sic) a la doctopra (sic) ÁLVAREZ para que me ayudara con el masage (sic), allí fue a donde la doctora vio lo que yo estaba haciendo y me dijo que porque yo estaba haciendo eso ... de allí cogí un taxi y me fui con la mamá y la muchacha para la Policlínica JJ VALLARINO ... como unos 15 o 20 minutos fue que ella falleció" (fs. 35-36).

Tal como se aprecia, de la versión que brinda el indagado resulta que la Dra. Álvarez Alvarado "no conocía que yo iba a hacer eso allí, ella pensó que era una consulta normal" (f. 36). La imputada corrobora esta afirmación, cuando manifiesta que "mi esposo, me llamó para pedirme mi clínica para ver o atender

a una paciente, eso fue lo que él me dijo, más nada ... no sospeché ni tenía conocimiento de la acción que iba a realizar el Dr. ALEXIS VELÁSQUEZ ... no sabía que él estaba practicando un aborto" (fs. 42 y 44).

A juicio de esta Corporación de Justicia, la valoración hecha por el a-quo de las constancias de autos es correcta; sin embargo, no comparte la medida en que ha sido fijada la fianza de excarcelación pues, si se considera que de las piezas procesales incorporadas hasta ahora a las incipientes sumarias no se desprenden elementos probatorios que hasta ahora vinculen categóricamente a la Dra. Álvarez Alvarado con el hecho punible que se investiga, la consecuencia jurídica de esta comprobación es la revocatoria de la diligencia o auto que decreta la detención que pesa en su contra, según el mandato que trae el párrafo segundo del artículo 2178 del Código Judicial.

Por las anteriores consideraciones, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REFORMA el auto de 11 de julio de 1996 emitido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, en el sentido de REVOCAR la orden de detención preventiva que pesa sobre Nuria María Álvarez Alvarado.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) MARIANO E. HERRERA
(fdo.) Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN A FAVOR DE EDWIN ABDIEL SAMANIEGO RIVERA, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Iván Oscar Agrazal F. ha presentado solicitud de fianza excarcelaria en favor de **EDWIN ABDIEL SAMANIEGO RIVERA**, sindicado por delito contra la Administración Pública.

El actor fundamenta su solicitud, principalmente, en los siguientes hechos:

Que el delito por el que se investiga al Sr. **SAMANIEGO RIVERA** lo tipifica el artículo 324 del Código Penal;

Que el artículo 2162 del Código Judicial le permite a su defendido el beneficio a la fianza;

Que **RAMZI ABOA LIAM HUSEIN CAMARENA** fue quien sacó las piezas y accesorios de la Mitsubishi Montero color gris oscuro -propiedad de la Dirección Regional de Aduanas-, tal como lo señaló el Sr. **REYNALDO DUCASA CASTILLO.**

Que **DUCASA CASTILLO** manifestó que sacó de su taller al Sr. **HUSEIN**, por ser el vehículo propiedad del Estado.

Cuestiona el solicitante la postura del Sr. **HUSEIN**, quien afirma que no sabía que el vehículo en cuestión era propiedad del Estado.

Que el Sr. **SAMANIEGO** nunca estuvo presente cuando se realizó el intercambio de piezas y accesorios.

Observa esta Corporación de Justicia que en este negocio existen dos vertientes a examinar. Primero, si hubo "culpa" o "dolo" en la situación

planteada, para determinar si en realidad cabía detener preventivamente a **SAMANIEGO RIVERA**; y, en caso positivo, determinar si estaba en verdad justificada la medida precautoria.

El incipiente expediente revela que las piezas fueron cambiadas por el Sr. **RAMZI HUSEIN** en el taller del Sr. **REYNALDO DUCASA**; cuando este se percató que el vehículo era del Estado, mandó a sacarle las piezas en otra parte, según su propia declaración.

A fojas 4 a 6 del infolio, se observa la declaración jurada -en la Agencia de la Policía Técnica Judicial de Veraguas- en la que **HUSEIN CAMARENA** denuncia a **EDWIN SAMANIEGO**, de haberle estafado la suma de doscientos once (B/.211.00) balboas, toda vez que este último le ofreció ciertas piezas que le faltaban a su vehículo, un Mitsubishi Montero -relojes, asientos, sillones delanteros, etc.- acordando que lo llamaría si las conseguía. Días después lo llamó, ofreciéndole las piezas de un automóvil de su propiedad, que estaba estacionado en Plaza Palermo, entonces ambos remolcaron dicho auto al taller de **REYNALDO DUCASA**; allí **SAMANIEGO** le entregó las llaves del auto, y lo "autorizó" a intercambiar las piezas del mismo por la suma de dinero antes mencionada.

El señor **DUCASA** se enojó porque lo vio sacarle las piezas a la Mitsubishi Montero, y le ordenó que lo sacara de su taller, sino lo haría él, ya que no quería problemas con las autoridades; al devolver el auto de aduanas a Plaza Palermo, ya le había instalado las piezas en su Mitsubishi Montero.

El 1° de agosto del año que decurre, **SAMANIEGO** lo llamó para decirle que si la situación se dificultaba, que le devolviera las piezas, toda vez que los demás funcionarios de aduanas se estaban molestando por el asunto, entonces le pidió las llaves del carro, pero a él se le habían perdido.

Cabe destacar que **HUSEIN CAMARENA** devolvió voluntariamente todas las piezas involucradas a la Policía Técnica Judicial el pasado 2 de agosto.

En otra declaración jurada rendida en el Departamento de Fiscalización Aduanera de la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda y Tesoro -fs. 7 y 8-, señaló **HUSEIN CAMARENA** que cuando fue a entregarle a **SAMANIEGO** el dinero convenido, notó una discusión entre los funcionarios referente al vehículo de marras, por ser oficial. Allí notó que las piezas pertenecían a un auto oficial.

Empero, surge una contradicción en la declaración de este señor, pues, mientras en la primera él señaló que **SAMANIEGO** se ofreció a conseguirle piezas para su Mitsubishi Montero, en esta segunda declaración manifestó "... como yo me dedico a comprar vehículos chocados y carros enteros me comuniqué con el señor Samaniego ya que me era conocido para ver si se podía intercambiar unas piezas de mi auto por las de él, por la cual me respondió que sí y me pidió una diferencia de 210.00 dólares.".

Es decir, por una parte dijo que el inculpado se ofreció voluntariamente a conseguirle las piezas de su auto, mientras que en la segunda dijo que él mismo fue a ver si **SAMANIEGO** le vendía las piezas de ese automóvil. Este es un punto muy importante que le resta credibilidad a la situación jurídica de **HUSEIN CAMARENA**.

En el mismo testimonio, afirmó éste que él -**HUSEIN**- remolcaba el Mitsubishi perteneciente a Aduanas, con la suya, mientras aquél manejaba el carro que tenía la piezas que le interesaban.

Ambos habían acordado que **HUSEIN** tomara las piezas que le interesaban, y para ello le había entregado las llaves del vehículo oficial; dice también que los mecánicos del taller del Sr. **DUCASA** fueron testigos de que **SAMANIEGO** llegó manejando el auto de marras a dicho lugar.

Por su parte, **REYNALDO DUCASA CASTILLO**, quien es dueño del taller donde llevaron el auto para cambiarle las piezas, rindió declaración jurada -f. 10 y

11- ante la Policía Técnica Judicial, señalando que el 23 de julio del presente año, llegó el señor **HUSEIN CAMARENA** -a quien conocía- halando una Mitsubishi Montero nueva, sin placa, color gris oscuro, con su carro, y otro señor manejando ese auto sin placa; metieron el vehículo que nos ocupa en su taller y ambos -**HUSEIN** y **SAMANIEGO**- se fueron; a las 6:00 p. m. llegó **RAMZI HUSEIN** al taller, y él solo empezó a soltar los asientos delanteros del carro con una lámpara.

Al preguntarle si la Mitsubishi era de él, éste le respondió que no, que era un negocio que había hecho con el jefe de la aduana, a lo que el declarante -**DUCASA**- le dijo que "... sacara esa chiva de ahí porque era del gobierno si no yo se la iba a sacar con mi carro, ...", teniendo que llevar el auto empujado porque no encontró sus llaves.

En otro orden de cosas, **EDWIN SAMANIEGO** manifestó -en un informe de entrevista de la Policía Técnica Judicial a fojas 18 y 19 del infolio- que le había explicado a **CARLOS ÁLVAREZ**, quien es jefe administrativo de Aduanas, que podía conseguir con un amigo en Santiago un motor de gasolina, ya que el interés de ÁLVAREZ era el turbo de la camioneta; este le dijo que esa transacción debía hacerse a través de una resolución y con presencia de Contraloría. Por ello, fue al almacén del Sr. **RAMZI HUSEIN**, quien le aseguró que podían hacer el cambio, pero que tenía que probar el carro.

Como tenía que sacar el Montero de la Aduana, por razón de las fiestas patronales, y estaba interesado en probar el turbo del vehículo, lo llevó a un taller que estaba detrás de la Universidad. Se sorprendió que cuando le apareció la

> "chiva sin llave, sin nada, trancada y estacionada allí en los predios de la Agencia, y parte de mi personal se percató de que habían varias piezas cambiadas, fue entonces que verificamos, y nos dirigimos a el Almacén el (sic) señor JIMÉNEZ, y nos percatamos de que no había nadie en el almacén, por lo tanto nos trasladamos al Taller y allí le hice un escándalo, ya que pregunté por RAMZI, y nadie me quería decir nada, ni en donde (sic) viví. (sic) Seguidamente yo dejé razón en el taller que en cuanto llegara RAMZY, fuera a ADUANAS, y el señor RAMZY se presentó a la Agencia. Una vez allí JIMÉNEZ y yo le recriminamos sobre lo que había hecho, por lo tanto le dije que quería las piezas del carro hoy, pero el (sic) me dijo que le daba pena ponerce (sic) a sacar las piezas del carro. En vista de lo anterior le dije que le daba plazo hasta el día Lunes cinco (5) de agosto."

La versión de **SAMANIEGO** es contraria a la de **HUSEIN**, toda vez que aquél dice que le mencionó a su jefe que se podía hacer el cambio de motor a través de la persona conocida en Santiago, pero que su sorpresa fue que encontró el auto con muchas piezas cambiadas, motivo por el que le recriminó a éste, le dijo que quería las piezas originales, y le dio un plazo hasta el 5 de agosto.

En declaración indagatoria rendida ante la Fiscalía Segunda de Circuito de Veraguas -fs. 28 a 40 del infolio-, **SAMANIEGO** ratificó las declaraciones que hizo en la Policía Técnica Judicial y señaló que el único dinero que recibió de **HUSEIN CAMARENA** fueron treinta (B/.30.00) balboas que él le había prestado, no señalando nada sobre los doscientos diez (B/.210.00) balboas que **HUSEIN** dijo que le había dado a él, por acordar el cambio de las piezas.

Aunque el criterio de la Sala es que carecen de valor probatorio las declaraciones no rendidas ante un funcionario de instrucción, en el presente expediente la única declaración existente distinta a las de los directamente involucrados, es la del propietario del taller, señor **DUCASA**, por lo que hay que tomarla en cuenta.

Este criterio fue utilizado por la Fiscal Segunda de Circuito de Veraguas, quien interpretó dicha declaración en el sentido de que **DUCASA** vio a ambos llevar el Mitsubishi Montero a su taller como a las 3:00 p. m., y se fueron; luego vio a **HUSEIN CAMARENA** regresar y hacer el cambio de piezas, preguntándole si el

automóvil era de él. Cuando **HUSEIN** le dijo que había hecho un negocio con el jefe de Aduanas, le ordenó sacarlo de allí, porque era del gobierno. Es decir, consideró la Fiscal como verdadero el señalamiento que le hizo **HUSEIN** a **DUCASA**, de que había acordado con **CAMARENA** el cambio de las piezas.

Empero, se observa que eso fue lo que le dijo **HUSEIN** a **DUCASA**; pero lo señalado por el dueño del taller cuadra también con la declaración de **CAMARENA**, quien manifestó que había llevado el carro a ese taller -con **HUSEIN**- para probar el Turbo que le interesaba al denunciante; también se entiende que quiso dejarlo en el taller, para protegerlo de robos durante las patronales que se iban a celebrar.

En apoyo a sus declaraciones, se observa que **RAMZI HUSEIN** entregó voluntariamente los artículos extraídos del vehículo que nos ocupa; por su parte, **EDWIN CAMARENA** señala que su jefe tenía conocimiento del cambio de motor, que el señor **IVÁN JIMÉNEZ** fue testigo de su dicho, y que su representante solicita una serie de declaraciones de testigos y careos, para hacer emerger la verdad de lo sucedido.

Pero obra en beneficio del actor la ya mencionada contradicción en las declaraciones del denunciante, en el sentido de que primero dijo que **CAMARENA** se ofreció a conseguirle el cambio de piezas del auto, y luego dijo que, por ser dueño de un negocio de venta de autos usados, él le fue a preguntar al denunciado si podía conseguirle dichas piezas.

En este estado de cosas, considera esta Corporación de Justicia que no existe claridad en cuanto a la relación entre el delito -en etapa de investigación- y la participación y responsabilidad del imputado, motivo por el cual es viable la concesión de una fianza en favor del solicitante, toda vez que el proceso que motiva la presente solicitud se fundamenta en el artículo 322 del Código Penal, que conlleva una pena de prisión de 2 a 10 años y hasta 250 días multa.

Para la fijación de la fianza, hay que tomar en cuenta el valor de las piezas sustraidas, así como el hecho de que fue **RAMZI HUSEIN** quien las devolvió oportunamente.

En ese sentido, las piezas cambiadas son un tablero, un velocímetro, un tacómetro, radio, parrilla delantera, porta placa trasero, todas piezas nuevas; además, se cambiaron los dos asientos delanteros nuevos del Mitsubishi Montero, que son de valor apreciable.

Tomando en consideración que estas piezas son nuevas, y pese a que en el expediente no se aportó el precio individual de ninguna de ellas, considera esta colegiatura que debe establecer la fianza en cuatro mil (B/.4,000.00) balboas.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE fianza a favor del señor EDWIN ABDIEL SAMANIEGO RIVERA, y la fija en la cantidad de cuatro mil (B/.4,000.00) balboas.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN A FAVOR DE JUSTO LUIS AGUILAR MOSQUERA, SINDICADO POR EL SUPUESTO DELITO DE HOMICIDIO EN DETRIMENTO DE MANUEL SMITH DE LA ESPADA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Como Tribunal de Segunda Instancia, conoce la Sala Penal de recurso de apelación presentado por el licenciado José Concepción contra auto calendado 17 de julio de 1996, proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, que niega el beneficio de excarcelación bajo fianza solicitado en favor de Justo Luis Aguilar Mosquera, quien se encuentra sindicado por el delito de homicidio cometido en perjuicio de Manuel Smith De La Espada.

Aunque el apelante no presentó escrito de sustentación, por mandato del artículo 2165 del Código Judicial el tribunal de la alzada debe decidir sin mas actuación, a lo que procede.

Es importante destacar que la Sala, mediante auto de 22 de abril del año que decurre, al conocer de alzada surtida con ocasión de anterior solicitud de excarcelación impetrada en favor del mismo sindicado, advirtió que las piezas probatorias que obran en las sumarias vinculan a Aguilar Mosquera al hecho "de haber disparado su arma de fuego contra las personas que supuestamente atacaban a sus hermanos", y que "A pesar de que, según él, su intención no era la de herir o matar a nadie, lo allegado a las sumarias no permite ... realizar con firmeza jurídica un juicio de valor justo sobre este aspecto" (f. 221 del cuaderno penal).

Un nuevo examen de los antecedentes no revela la existencia de nuevos elementos de convicción que modifiquen el status procesal del imputado. En tales circunstancias, y como quiera que se trata de un delito que no admite el beneficio de excarcelación mediante fianza, no es posible acceder a la pretensión del recurrente.

En razón de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto llegado en grado de apelación.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ
MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

DENUNCIA INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DARÍO EUGENIO CARRILLO CONTRA ALFREDO SANJUR, DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL DE SAN FRANCISCO Y ALEJANDRO MONCADA, DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL, POR LOS DELITOS DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LIBERTAD Y ABUSO DE AUTORIDAD. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Darío Eugenio Carrillo Gomila, apoderado judicial de Josué Levy Levy, presentó denuncia escrita ante el Procurador General de la Nación contra el licenciado Alejandro Moncada, Director General de la Policía Técnica Judicial, y Alfredo Sanjur, Inspector Jefe de la agencia de la Policía Técnica Judicial del corregimiento de San Francisco, por los delitos de privación ilegal de libertad y Abuso de Autoridad.

Según se desprende del libelo de la denuncia, el día 26 de febrero del año que decurre Josué Levy Levy se apersonó "a la Dirección de la Policía Técnica Judicial de San Francisco, a fin que rindiera declaración en denuncia promovida

por ISAAC DAVID MIZRACHI por un disparo de perdigones que al parecer había impactado parte de la fachada de su residencia" (f. 3). Explica el denunciante que una vez "Terminada su declaración, nuestro representado fue retenido en las instalaciones de la Policía Técnica Judicial" (f. 3) y "sólo se le permitió abandonar las instalaciones ... a las 8:00 a. m. del 27 de febrero de 1996" (f. 4), a pesar de que "Desde las 4:30 de la madrugada ... comenzó a sentirse indispuesto" (f. 4).

Es necesario advertir que en este caso la Sala sólo tiene competencia para conocer de los cargos de naturaleza penal que se le endilgan al licenciado Alejandro Moncada, en su calidad de Director General de la Policía Técnica Judicial, habida cuenta de que, en cuanto a Alfredo Sanjur, se encuentra inhibida para pronunciarse sobre su status procesal, tarea que le corresponderá a la autoridad jurisdiccional competente.

La Corte pasa a examinar las constancias de autos, a los efectos de comprobar si la actuación que se le atribuye al funcionario denunciado puede ser calificada de naturaleza dolosa. Así, según el licenciado Guillermo Alberto Cochez Farrugia, siendo "las ocho de las (sic) noche ... le dijimos al Inspector Sanjur que considerábamos que no había motivo para mantener detenido al señor Levy ... diciendo que por instrucciones del Licenciado Pérez, Asistente del Director de la PTJ ... debía permanecer allí bajo investigación ... después ... nos enteramos de que el Licenciado JOSÉ MARÍA CASTILLO, Secretario General de la Procuraduría ... liberaba al señor LEVY ... Habiendo ya estado dentro de nuestros vehículos ... fuimos redeados (sic) por agentes de la PTJ ... indicándonos que el señor LEVY no podía irse ya que se había recibido una contraorden del Director de la PTJ para que el señor LEVY se quedase retenido hasta la mañana siguiente" (fs. 94-95). En el mismo sentido se pronuncian Griselda María Sanmartín de Carrillo (fs. 85-88), Carlos Eugenio Carrillo Gomila (fs. 89-91), Rodrigo Mejía Andrión (fs. 97-99) y Cledia Aoun de Mejía (fs. 100-101).

Ahora bien, de acuerdo con el informe rendido por el licenciado Alejandro Moncada: "nuestros funcionarios cumplieron cabalmente sus funciones, adelantando todas las gestiones que eran necesarias para verificar la coartada presentada por el denunciado" (f. 36). Explica que su participación se circunscribió a enviar a "Mi Asistente, Licdo. **JOSÉ ANTONIO PÉREZ** ... a fin de que se apersonara, averiguara el estado de cosas del expediente **LEVY** y me informara inmediatamente; por lo que luego de cumplida la diligencia, me comunicó que las investigaciones se conducían normalmente" (f. 39).

El relato del funcionario acusado no revela intención de retener ilegalmente a Josué Levy Levy en las instalaciones de la Policía Técnica Judicial del corregimiento de San Francisco; lo que evidencia concretamente es el deseo del funcionario por mantenerse informado sobre el curso de las investigaciones. Así lo expresan Alfredo Enrique Sanjur: "conversé con el señor director lo que estaba sucediendo ... me dijo ... Que continuara mi caso legalmente ... me pidió que continuara con la investigación en forma legal como lo estaba haciendo" (f. 31) y José Antonio Pérez López: el licenciado Moncada solicitó "que yo investigara que era lo que estaba sucediendo en relación al caso del señor LEVY para que yo le informara posteriormente sobre el mismo ... yo le comuniqué ... que se estaba actuando conforme a derecho" (fs. 103 y 105).

Siendo esa la realidad legal y fáctica, que desvirtúa las referencias supuestamente incriminatorias antes citadas, se concluye que el comportamiento por el que se acusa al Director General de la Policía Técnica Judicial no configura delito alguno a la luz de nuestro derecho penal sustantivo. Esta comprobación no puede sino conducir, en consecuencia, a que se atienda la recomendación que formula el Procurador General de la Nación en su Vista N° 49 de 17 de julio de 1996.

Por lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SOBRESEE DEFINITIVAMENTE, DE MANERA IMPERSONAL, en esta causa, con base en lo que establece el numeral 2 del artículo 2210 del Código Judicial, y DECLINA ante la esfera de los Juzgados de Circuito el conocimiento del negocio en lo relacionado

al imputado Alfredo Sanjur.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LABORAL

AGOSTO 1996

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ALBERTO CHANG V., EN REPRESENTACIÓN DE YADIRA ELIZABETH ALDRETE DE ARAÚZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 01-96 DEL 20 DE ENERO DE 1996, EXPEDIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE FERIAS, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Alberto Chang V.** en nombre y representación de **YADIRA ELIZABETH ALDRETE DE ARAÚZ** ha interpuesto demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 01-96 del 20 de enero de 1996, emitida por la Comisión Nacional de Ferias, y actos confirmatorios.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda, para determinar si la misma cumple con los requisitos mínimos que exige la ley, para que la misma pueda ser admitida.

Observa el suscrito que el libelo carece de una formalidad, que sin el mismo no podría ser admitido.

La parte actora presenta el acto acusado de ilegal pero sin estar debidamente autenticado, y el mismo consiste en la Resolución N° 01-96 del 20 de enero de 1996, tal como lo exigen los artículos 44 y 45 de la Ley 135 de 1943, los cuales dicen lo siguiente:

> "ARTÍCULO 44. A la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, según los casos."
>
> "ARTÍCULO 45. Se reputan copias hábiles para los efectos de este artículo, las publicaciones en los periódicos oficiales, debidamente autenticadas por los funcionarios correspondientes."

Ya la Sala ha manifestado reiteradamente la importancia de aportar debidamente autenticado el acto que se acusa de ilegal, y en caso de que se le imposibilite obtener la documentación requerida previa comprobación de que se llevaron a cabo las correspondientes diligencias para su consecución, el interesado dentro de la demanda expondrá el hecho y solicitará al Magistrado Sustanciador, que éste requiera a la oficina respectiva el documento que es motivo de controversia.

Por las anteriores consideraciones el Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el licenciado Alberto Chang V. en nombre y representación de YADIRA ELIZABETH ALDRETE DE ARAÚZ.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA LICENCIADA AIDA JURADO ZAMORA, A FIN DE QUE SE DECLARE QUE EL SEÑOR FRANCISCO

ALEXIS HERRERA TIENE DERECHO A SER RESTITUIDO EN EL CARGO DE CAPITÁN DE LA FUERZA PÚBLICA, POR HABERLO DISPUESTO ASÍ EL JUZGADO SEXTO PENAL DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ, MEDIANTE AUTO N° 91 DEL 1° DE FEBRERO DE 1996 Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SEIS (6) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Aida Jurado Zamora, actuando en nombre y representación del señor FRANCISCO ALEXIS HERRERA, interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción a fin de que la Sala haga las siguientes declaraciones:

> "A. Que el señor FRANCISCO HERRERA, tiene derecho a ser restituido al cargo de Capitán de la Fuerza Pública por haberlo dispuesto así el Juzgado Sexto Penal de la Provincia de Chiriquí mediante auto N° 91 del 1° de febrero de 1996, e informado al Ministro de Gobierno y Justicia mediante oficio N° 340 del 29 de febrero de 1996.
>
> B. Que es violatorio de la ley el Acto del Ministro de Gobierno y Justicia de negar tácitamente por silencio administrativo la restitución al cargo de Capitán de la Fuerza Pública al señor FRANCISCO ALEXIS HERRERA, al no cumplir lo dispuesto por el Juez Sexto de Circuito Penal de Chiriquí mediante auto N° 91 del 1° de febrero de 1996 e informado mediante oficio N° 340 del 29 de febrero de 1996.
>
> C. Que como consecuencia de ello, el Ministro de Gobierno y Justicia está obligado en el cargo de Capitán de las Fuerzas Públicas al señor FRANCISCO ALEXIS HERRERA, funciones que tenía y desempeñaba dentro esta institución ..."

A juicio de la Magistrada Sustanciadora, la presente demanda no debe admitirse.

De acuerdo con los hechos y el petitum de la demanda, la apoderada del actor pide a la Sala que declare ilegal la negativa del señor Ministro de Gobierno y Justicia de reintegrar al señor FRANCISCO ALEXIS HERRERA al cargo que ocupaba en la Fuerza Pública. Según la apoderada judicial del actor, el levantamiento de la suspensión del cargo, fue ordenada por el Juez Sexto de Circuito, Ramo Penal, de la Provincia de Chiriquí, mediante Auto N° 91 del 1° de febrero de 1996, y comunicada al señor Ministro de Gobierno y Justicia a través del Oficio N° 340 del 29 de febrero de 1996, quien hasta la fecha en que fue presentada la demanda no había cumplido dicho Auto.

La Magistrada Sustanciadora estima que la negativa tácita en que incurrió el señor Ministro de Gobierno y Justicia no es impugnable ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que la misma se refiere al incumplimiento de una resolución judicial, cuya ejecución sólo puede pedirse utilizando los mecanismos legales previstos al efecto y no mediante una acción contenciosa administrativa de plena jurisdicción, en la que la Sala debe decidir acerca de la ilegalidad o no de actos administrativos autónomos. De conformidad con el artículo 42 (N° 3) de la Ley N° 135 de 1943, el silencio administrativo no es impugnable por la vía contencioso-administrativa cuando la solicitud que se hace al funcionario no es de las que originan actos recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

En la Resolución del 24 de abril de 1996, la Sustanciadora mantuvo este criterio cuando expresó que "El incumplimiento de las Resoluciones judiciales es exigible por la vía judicial y su incumplimiento también debe sancionarse por esa vía".

Adicionalmente, la apoderada del actor no pidió a la Sala la nulidad de ningún acto en particular, sino que simplemente se limitó a pedir que se hicieran

las declaraciones transcritas, lo cual no es cónsono con la naturaleza de la acción contencioso-administrativa de plena jurisdicción propuesta en la que, previo a la petición de reparación del derecho violado, se requiere que se pida la nulidad de actos administrativos concretos, tal como exige el numeral 2° del artículo 43 de la Ley N° 135 de 1943.

Por las razones anotadas, la Magistrada Sustanciadora considera que la presente demanda no debe admitirse y así procede a declararlo.

De consiguiente, la Suscrita Magistrada Sustanciadora administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NO ADMITE la demanda contenciosa-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la licenciada Aida Jurado Zamora, en nombre y representación del señor FRANCISCO ALEXIS HERRERA.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DOCTOR ROLANDO VILLALAZ, EN REPRESENTACIÓN DE RUBÉN CASTRO SHEDEEN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 1223-95 DE 11 DE FEBRERO DE 1995, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EL ACTO CONFIRMATORIO Y EL SILENCIO ADMINISTRATIVO INCURRIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, AL NO RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN EN SUBSIDIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SEIS (6) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante escrito fechado 10 de julio de 1996, el doctor Rolando Villaláz Guerra, actuando en nombre y representación de doctor **RUBÉN CASTRO SHEDEEN**, ha desistido del proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción presentado el 24 de julio de 1995, promovido para que se declare nulos, por ilegales, la Resolución N° 1223-95 de 11 de febrero de 1995, dictada por Director General de la Caja de Seguro Social, el silencio administrativo incurrido por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social al no resolver el recurso de apelación y para que se hagan otras declaraciones.

Del escrito de desistimiento se corrió traslado a la señora Procuradora de la Administración, por el término de tres días, quien no se opuso al mismo.

A juicio de la Sala el desistimiento presentado por el demandante es procedente de conformidad con lo preceptuado en el artículo 66 de la Ley 135 de 1943, en concordancia con el artículo 1080 del Código Judicial, y por tanto, debe acogerse.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACOGE EL DESISTIMIENTO del proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción, interpuesto por el doctor Rolando Villaláz Guerra, actuando en nombre y representación de RUBÉN CASTRO SHEDEEN, para que se declare nulos, por ilegales, la Resolución N° 1223-95 de 11 de febrero de 1995, dictada por el Director General de la Caja de Seguro Social, el silencio administrativo en que incurrió la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO BOLÍVAR RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, EN REPRESENTACIÓN DE NEXIDES DEL C. AULESTIA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 424 DE 16 DE JUNIO DE 1995, EMITIDO POR EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Bolívar Rodríguez Hernández, actuando en nombre y representación de **NEXIDES DEL C. AULESTIA**, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el Resuelto N° 424 de 16 de junio de 1995, emitido por el Ministro de Educación.

La parte actora solicita además que como consecuencia de la declaración de nulidad del acto impugnado, se ordene el reintegro de la señora **NEXIDES DEL C. AULESTIA** a la posición que desempeñaba en la Escuela Artes y Oficios Melchor Lasso De La Vega, en la cátedra de Ciencias Naturales, como Educadora Ñ-2, posición 35082, Permanente, nombrada mediante el Resuelto N° 685 de 13 de mayo de 1983. (Fs. 27).

El acto impugnado resuelve trasladar a la profesora **NEXIDES AULESTIA** de la posición de educadora Ñ-2 de Ciencias Naturales en la Escuela Artes y Oficios Melchor Lasso De La Vega a la Escuela Nocturna Oficial de Colón.

Al admitirse la presente demanda se corrió en traslado a la señora Procuradora de la Administración quien, mediante la Vista Fiscal N° 447 de 24 de octubre de 1995, solicitó a esta Sala denegar las pretensiones de la demandante (fs. 46-54). Además, se solicitó al funcionario demandado que rindiera el informe de conducta a que se refiere el artículo 33 de la Ley 33 de 1946, lo que hizo oportunamente (Fs. 43-45).

El licenciado Rodríguez Hernández estima que el acto administrativo impugnado viola los artículos 30, 39, 43 y 46 del Resuelto No. 1102 de 30 de mayo de 1980, los cuales expresan en ese orden, lo siguiente:

RESUELTO N° 1102 DE 30 DE MAYO DE 1980.

"Artículo 30: El educador que sea trasladado a una posición que hubiese solicitado y no la acepte, no tendrá derecho a otro traslado durante el mismo año escolar. ...

Artículo 39: El educador que participe en concursos para algún cargo en el Ramo de Educación, podrá pedir por la vía gubernativa, la reconsideración de los nombramientos, ascensos o traslados que se efectúen en contravención de las normas de selección o de las disposiciones legales vigentes sobre la materia en un plazo hasta de quince (15) días calendarios, contados desde la publicación del Decreto, Resolución o Resuelto correspondiente para que los mismos se dejen sin efecto, y sin perjuicio de su derecho a interponer ulterior acción contencioso administrativa. ...

Artículo 43: Las acciones para interponer los recursos de que trata este título prescribirán a los quince (15) días calendarios, contados a partir de la fecha de la publicación del Decreto, Resolución o Resuelto correspondiente. ...

> Artículo 46: Cerrado el concurso se procederá a llevar a cabo la ponderación de los créditos de los participantes y se elaborará una lista de elegibles de acuerdo con la puntuación obtenida por cada uno para conocimiento de los aspirantes. Dichas listas se fijarán en las Direcciones Provinciales y en el Ministerio de Educación."

La infracción de todas estas disposiciones se da, a juicio del licenciado Rodríguez Hernández, porque todo educador tiene derecho a aceptar o no aceptar el traslado a una posición, aún cuando la hubiese ganado por concurso, con la única limitación de que en caso de que no acepte el traslado, pierde el derecho de concursar en otro traslado durante el mismo año escolar; porque el Ministerio de Educación no publicó el aviso de traslado de la profesora **NEXIDES DEL C. AULESTIA** en ningún diario de la localidad, sino que la profesora **AULESTIA** tuvo conocimiento del traslado el día 11 de abril de 1995, cuando llegó a la Escuela Artes y Oficios Melchor Lasso de la Vega y una trabajadora manual le dijo que había sido trasladada, por lo que el 18 de abril de 1995, antes de vencerse los quince (15) días con que contaba para interponer los recursos de rigor, presentó ante el Ministerio de Educación recurso de reconsideración con apelación en subsidio; porque la Junta de Personal ha querido justificar la falta de notificación del traslado a la profesora **AULESTIA**, con una supuesta notificación a través de llamada telefónica; porque al aceptar el recurso de reconsideración presentado y no rechazarlo de plano por extemporáneo, se ha aceptado tácitamente que la profesora **AULESTIA** no fue notificada del traslado por ninguna llamada telefónica, y además, ni siquiera se ha indicado la fecha y la hora en que supuestamente se le llamó, se le comunicó y aceptó; porque se ha violado el artículo 46 al no publicar en las listas de elegibles que fueron fijadas en la Dirección Provincial y en el Ministerio de Educación el nombre y puntaje de la profesora **AULESTIA**; y porque además en la Junta de Personal se le comunicó a la profesora **AULESTIA** que no era elegible para el traslado a las escuelas que había aplicado. (Fs. 31-33).

El licenciado Rodríguez Hernández también estima que se han infringido los artículos 127, 129, 131, 132 y 133 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, cuyo texto transcribimos a continuación:

LEY N° 47 DE 1946, ORGÁNICA DE EDUCACIÓN.

> "Artículo 127: Todo miembro del personal docente, o administrativo del Ramo de Educación inclusive quienes presten servicios de portería, como los porteros, aseadores, mensajeros, etc., que haya sido nombrado o que posteriormente se nombre, de acuerdo con las disposiciones presentes a esta Ley, continuará prestando servicio durante todo el tiempo que dure su eficiencia y buena conducta y el término de su licencia cuando se trate de maestro o profesor.
>
> Los empleados del Ramo de Educación no podrán ser trasladados a otra Escuela, o a otro lugar sino en concepto de recompensa, para lo cual debe dárseles previo aviso para que den a conocer al Ministerio su conformidad o disconformidad con el mismo, o en los casos previstos en el Parágrafo de este Artículo, o como sanción por falta cometida, de acuerdo con las disposiciones que en esta Ley se establezcan. Tampoco podrán ser removidos sino mediante el proceso establecido en esta Ley. ...
>
> Artículo 129: Las quejas que sobre algún miembro del personal docente o administrativo del Ramo de Educación tenga un superior, que le han llegado por algún conducto digno de crédito, serán inmediatamente investigados por el superior tan prolijamente como su importancia demande. ...
>
> Artículo 131: Si de la investigación se desprende que hay indicios de culpabilidad que haga acreedor al subalterno a alguna sanción, caso de resultar comprobados los hechos, el superior pasará al subalterno el pliego de cargos por el término de ocho (8) días para que se defienda.

> Artículo 132: Si el inferior no pudiera desvirtúa los cargos, el superior procederá a aplicar la sanción que le corresponda de acuerdo con las disposiciones respectivas.
>
> Artículo 133: Toda sanción dispuesta en contra de un miembro del personal docente o administrativo del Ramo de Educación será dictada por escrito en forma de resolución, y deberá expresar claramente los motivos de ella, los fundamentos legales y su carácter específico. Tal resolución deberá ser comunicada al interesado por el funcionario que la dicta, por el órgano regular. Al interesado se le conceden veinticuatro (24) horas desde el momento de la notificación para que apele, si lo desea, ante el superior respectivo. Contado desde la fecha de la notificación, el interesado dispone de ocho (8) días para sustentar su apelación.
>
> Aquellos maestros que presten servicios en lugares apartados debe dársele ocho (8) días para que apelen de la resolución o quince días más para que aporte las pruebas de su defensa."

Al exponer el concepto en que estas normas han sido infringidas por el acto impugnado, el licenciado Rodríguez Hernández expresó que el Ministerio de Educación le impuso un traslado a la profesora **AULESTIA** sin tomar en cuenta que el mismo fue rechazado dentro del término de ley; que dicho traslado no cumplió con el requisito del previo aviso, ya que la profesora **AULESTIA** tuvo conocimiento del mismo el 11 de abril de 1995, cuando ya la habían trasladado y la estaban esperando en la Escuela Nocturna Oficial de Colón; que se ha violado el derecho a la estabilidad que tiene la profesora **AULESTIA**, no sólo en el cargo que ocupa sino en el lugar de trabajo; y que la decisión de imponer el traslado por parte del Ministerio de Educación, convierte el traslado en una sanción, en cuyo caso se debió cumplir con el procedimiento consagrado en los artículos 129 y siguientes de la Ley Orgánica de Educación.

A estos cargos se opuso la señora Procuradora de la Administración señalando que, si bien el educador que es trasladado a una posición para la cual ha concursado tiene derecho de aceptar o no dicho traslado, en el caso que nos ocupa no se violó ninguno de los preceptos citados porque la propia demandante participó en el concurso de posición vacante en la Escuela Nocturna Oficial de Colón, obtuvo 29 puntos, lo que la ubicó por debajo del profesor Rodolfo Cogley, quien fuera escogido para ocupar la posición en la Escuela Nocturna Oficial de Colón, pero renunció a ella y como resultado de la solicitud de la profesora **AULESTIA**, el Ministerio de Educación le adjudicó dicha posición; que la demandante aceptó el traslado a la Escuela Nocturna Oficial de Colón, al momento en que le fue notificado debidamente, luego de su publicación; que el Ministerio de Educación cumplió con la ponderación de los créditos y la consecuente elaboración y fijación de la lista de elegibles en la sede del Ministerio y las Direcciones Provinciales; y que el traslado de la profesora **AULESTIA** no responde a una medida disciplinaria, sino a su participación en un concurso para traslado, en el que ella voluntariamente decidió participar y en un colegio libremente escogido por ella.

Evacuados los trámites legales, los Magistrados que integran la Sala de lo Contencioso Administrativo proceden a resolver la presente controversia.

De acuerdo con las constancias procesales, la profesora **NEXIDES AULESTIA** ingresó al Ramo de Educación, como Educadora 7-A, de Ciencias, el 27 de abril de 1978, mediante el Decreto N° 57 de 13 de junio de 1978; por medio del Decreto N° 38 de 3 de abril de 1981 fue nombrada Educadora Ñ-2, de Ciencias, permanente en el Primer Ciclo Santa Rita; y el 13 de mayo de 1983, a través del Resuelto N° 685 fue trasladada a la Escuela Artes y Oficios Melchor Lasso de La Vega, como Educadora Ñ-2 en Ciencias Naturales, lugar donde laboró hasta el 11 de mayo de 1995, fecha en que fue trasladada a la Escuela Secundaria Nocturna Oficial de Colón, mediante el Resuelto N° 424 de 16 de junio de 1995, acto que se impugna en esta demanda. (Fs. 19-21).

Señala la autoridad demandada que la profesora **NEXIDES AULESTIA** participó

con 29 puntos en el concurso de traslado 1-95 para las vacantes de los Colegios Fermín Naudeau, el Instituto Comercial Panamá y la Escuela Nocturna Oficial de Colón; que en la vacante de Ciencias Naturales de la Escuela Nocturna Oficial de Colón fue escogido el Profesor Rodolfo Omar Cogley quien no aceptó; que para llenar la vacante fue remitido al Despacho Superior, la terna de 2 de marzo de 1995 con el nombre de **NEXIDES AULESTIA**, siguiendo el orden descendente en el listado, la cual fue firmada por el señor Ministro de Educación el 18 de marzo de 1995; que cuando se escogió a la profesora **NEXIDES AULESTIA** para la vacante de la Nocturna Oficial de Colón, ya habían sido publicados los resultados del concurso de traslados, razón por la cual se hizo la notificación oficial mediante llamada telefónica, mecanismo utilizado para llevar el control de las notificaciones que se hacen a los educadores que son seleccionados en los diferentes concursos; y que, por tanto, la profesora **NEXIDES AULESTIA** fue debidamente notificada del traslado a la Escuela Nocturna Oficial de Colón.

Por su parte, la demandante alega que no se le dio la opción de aceptar o rechazar dicho traslado porque no se le notificó el traslado debidamente, ni siquiera a través de llamada telefónica y expresa que lo único que se le mostró en la Junta de Personal, cuando se apersonó el 11 de abril de 1995, fecha en que supo del traslado, fue "un folder, con una hoja que contenía algunos de mis datos y en la parte superior escrito en rojo la palabra sí, en la parte inferior y a lápiz mi número de teléfono y los dos teléfonos que siempre doy para casos de emergencia, de mis hermanas." (Fs. 8).

En relación con los artículos del Resuelto N° 1102 de 1980, que el demandante estima infringidas, cabe advertir que esta Sala se pronunció en sentencia de 20 de junio de 1994, en relación con este instrumento jurídico, en los siguientes términos:

> "estas normas no pueden contradecir lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, que establece como únicas causas que motivan los traslados del personal del ramo educativo, la sanción y la recompensa, ya que conforme lo establecido en el artículo 757 del Código Administrativo, la Ley tiene preferencia sobre los reglamentos del poder ejecutivo, y el artículo 15 del Código Civil dispone que las órdenes y demás actos ejecutivos del Gobierno, expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria, tienen fuerza obligatoria, y serán aplicados mientras no sean contrario a la Constitución o a las leyes. Además, tanto el resuelto N° 1102 de 1980 como el 1066 de 1970 no pueden aplicarse, por ser actos reglamentarios que debieron ser expedidos mediante Decretos Ejecutivos conforme lo dispuesto en el ordinal 14 del artículo 179 de la Constitución Política y el ordinal 11 del artículo 629 en concordancia con el ordinal 1° del artículo 638, ambos del Código Administrativo, esto es, debieron ser expedidos por el Presidente de la República y el Ministro de Educación. Como lo ha indicado esta Sala en reiterados fallos, por medio de los resueltos se deciden asuntos administrativos de carácter poco trascendente, como vacaciones, traslados, destituciones, licencias, etc., y mediante los mismos no se puede reformar, adicionar, subrogar o reglamentar una Ley." (Sentencia de 20 de junio de 1994, en demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Julio F. Barba en representación de **OTILIA ARROYO VELÁZQUEZ** para que se declare nulo el Resuelto N° 279 de 10 de febrero de 1993, emitido por el Ministro de Educación, Registro Judicial, junio de 1994, p. 179).

En virtud del criterio expuesto, la Sala desestima los cargos de violación de los artículos del Resuelto N° 1102 de 30 de mayo de 1980, toda vez que estas normas no deben aplicarse, por tratarse de un acto reglamentario que debió ser expedido mediante Decreto Ejecutivo y no mediante Resuelto, conforme lo dispuesto en el ordinal 14 del artículo 179 de la Constitución Política y el ordinal 11 del artículo 629 en concordancia con el ordinal 1° del artículo 638, ambos del Código Administrativo, tal como se expresa en la jurisprudencia citada.

En cuanto al cargo de violación del artículo 127 de la Ley 47 de 1946, observa la Sala que de la lectura del mismo se desprende que las causas de traslado del personal permanente del ramo educativo se dan: por recompensa o por sanción; que tratándose de un traslado por recompensa se requiere la **anuencia del funcionario**, porque "debe dársele previo aviso para que den a conocer al Ministerio su conformidad o disconformidad con el mismo ..."; mientras que tratándose de un traslado por sanción deben cumplirse las disposiciones de la Ley 47 de 1946. (Sentencia de 20 de junio de 1994, en demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Juan Ramón Sevillano en representación de **SUSANA CAICEDO DE RODRÍGUEZ**, contra el Resuelto N° 964 de 30 de abril de 1993, dictado por el Ministro de Educación, Registro Judicial, junio de 1994, p. 181).

De acuerdo con lo señalado en la demanda, en el acto impugnado y lo expresado en el informe de conducta del señor Vice Ministro de Educación (fs. 45), el traslado de la profesora **NEXIDES AULESTIA** no se dio por sanción, sino que el mismo fue el resultado de su participación en el concurso N° 01-95 para la cátedra de Ciencias Naturales en la Escuela Nocturna Oficial de Colón. En este caso, a juicio de la Sala se trata de un traslado por concurso, que la Ley califica como traslado por recompensa, toda vez que el educador resulta favorecido para dicho nombramiento en virtud de sus méritos. La ley exige en estos casos que se de aviso previo del traslado al educador favorecido, con la finalidad de que exprese su conformidad o disconformidad con el mismo; por tanto, la autoridad administrativa estaba obligada a notificarle dicho traslado a la profesora **AULESTIA**, a fin de que ella expresara su aceptación o rechazo.

Observa la Sala, que si bien la autoridad demandada afirma que la profesora **NEXIDES AULESTIA** fue notificada y aceptó el traslado a la Escuela Nocturna Oficial de Colón, por vía telefónica, no reposa en el expediente administrativo prueba de este hecho. Mediante el oficio N° 205 de 1° de marzo de 1996, dictado en cumplimiento del auto que admite las pruebas de 12 de febrero de 1996, se solicitó a la Secretaría General del Ministerio de Educación "copia autenticada de la diligencia mediante la cual se notificó a la profesora Nexides del C. Aulestia, de su traslado a la Escuela Nocturna Oficial de Colón" (fs. 58-59) y el Ministerio de Educación no remitió a la Sala prueba alguna de la notificación, y no explicó el por que de esta omisión.

A juicio de la Sala, el ente administrativo incumplió lo preceptuado en el artículo 127 de la Ley 47 de 1946, al no avisar previamente a la profesora **NEXIDES AULESTIA** que sería trasladada a la Escuela Nocturna Oficial de Colón, a fin de que manifestara su conformidad o disconformidad con el traslado, tal como lo hizo con el profesor Rodolfo Cogley quien ganó el concurso de la vacante en la Escuela Nocturna Oficial de Colón, pero no aceptó dicho traslado. Consta en autos que la profesora **NEXIDES AULESTIA** se dio por notificada de su traslado a la Escuela Nocturna Oficial de Colón, el 11 de abril de 1995, fecha en que presentó recurso de reconsideración con apelación en subsidio, recurriendo oportunamente contra dicho acto.

En virtud de que la autoridad demandada fundamenta la legalidad del acto de traslado en el hecho de que la profesora **AULESTIA** fue notificada debidamente y aceptó el traslado, como lo exige la ley, y no ha probado haber cumplido con este requisito, a juicio de la Sala debe declararse la ilegalidad del acto impugnado, y aceptarse la disconformidad con el traslado que ha manifestado la profesora **AULESTIA** a través de los medios de impugnación y ordenarse al Ministerio de Educación que restablezca a la profesora **AULESTIA** a la posición que ocupaba en la Escuela Artes y Oficios Melchor Lasso de la Vega.

En lo que concierne al cargo de violación de los artículos 129, 131, 132 y 133 de la Ley 47 de 1946, los cuales consagran el procedimiento para imponer sanciones a los miembros del ramo de educación, a juicio de la Sala estas normas no son aplicables al caso y por tanto no se han violado, toda vez que se ha probado en autos, que el traslado de la profesora **NEXIDES AULESTIA** no fue por sanción.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, adminis-

trando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NULO, POR ILEGAL, el Resuelto N° 424 de 16 de junio de 1995, expedido por el Ministro de Educación; y en consecuencia ORDENA al Ministro de Educación que reintegre a la funcionaria NEXIDES DEL C. AULESTIA a la posición que ocupaba como Educadora Ñ-2, en Ciencias Naturales, en la Escuela Artes y Oficios Melchor Lasso de la Vega.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EMIDIO MANZANÉ, EN REPRESENTACIÓN DE ANEL GARCÍA, BEATRIZ ÁBREGO Y LASTENIA VÁLDEZ Y POR EL LICENCIADO JORGE ÁLVAREZ, EN REPRESENTACIÓN DE CÁNDIDA ÁBREGO Y MARÍA GARCÍA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 126 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 1995, DICTADA POR LE DIRECTOR NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS DE (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante Auto del 2 de mayo de 1996, la Magistrada Sustanciadora ordenó la acumulación de la demanda contencioso-administrativa de nulidad interpuesta por el licenciado Jorge Álvarez, en representación de CÁNDIDA ÁBREGO y MARA GARCÍA, a la demanda interpuesta por el licenciado Emidio Manzané, en representación de ANEL GARCÍA, BEATRIZ ÁBREGO y LASTENIA VÁLDEZ, ambas, contra la Resolución N° 126 A. L. del 7 de diciembre de 1995, expedida por el Director Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre del Ministerio de Gobierno y Justicia.

En su demanda, el licenciado Jorge Alvarez pidió a la Sala la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado, ya que "la misma implica un perjuicio notoriamente grave a los usuarios de transporte de la ruta interna VERANILLO-DON BOSCO-SINAÍ, dado que se le está cobrando una suma de quince centavos de balboas (B/0.15), a diferencia de los diez centavos de balboas (B/0.10) que se le cobraban antes de la Resolución ... Agrega, que es "de suma importancia decretar la suspensión provisional dado que de mantenerse sus efectos, las sumas pagadas adicionales no podrán ser restituidas a los usuarios en el evento de que se decrete la nulidad de la Resolución al final del presente proceso." (F. 53).

De acuerdo con el artículo 73 de la Ley N° 135 de 1943, la Sala puede suspender los efectos del acto, resolución o disposición acusada si, a su juicio, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave. Reiterada jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que en las demandas de nulidad la adopción de esta medida cautelar es posible cuando el acto o disposición acusada infringe ostensiblemente el ordenamiento jurídico.

Del examen preliminar que ha hecho la Sala de los cargos se desprende, que la Resolución N° 126 A. L. del 7 de diciembre de 1995 viola ostensiblemente el artículo 40 de la Ley N° 14 del 26 de mayo de 1993, el cual establece que el Ente Regulador, previa consulta con los Consejos Técnicos Provinciales de Transporte, determinará la tarifas que regirán el transporte terrestre público de pasajeros". Lo anterior es así, porque de la detenida lectura de los considerandos del acto impugnado no se infiere que el Director Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, como Ente Regulador, haya cumplido con el requisito previo de consultar al Consejo Técnico Provincial de Panamá, antes de autorizar el aumento de la tarifa mínima del pasaje de la ruta interna de Veranillo-Don Bosco-Sinaí a la suma de quince centésimos de balboa (B/.0.15).

En consecuencia, la Sala estima que los efectos del acto administrativo acusado deben suspenderse y así procede a declararlo.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SUSPENDE PROVISIONALMENTE los de la Resolución N° 126 A. L. del 7 de diciembre de 1995, expedida por el Director Nacional de Tránsito y Transporte y Terrestre del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LCDA. DIDIA BASO EN REPRESENTACIÓN DE EDUARDO ALBERTO VALDÉS F., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL SILENCIO ADMINISTRATIVO INCURRIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGUROS SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, OCHO (8) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Procuradora de la Administración (Suplente), mediante Vista N° 303 de 9 de julio de 1996, ha promovido recurso de apelación contra la Providencia de 3 de mayo del mismo año, la cual admitió la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción propuesta por la licenciada **Didia Baso** en nombre y representación de **EDUARDO ALBERTO VALDÉS**, para que se declare nulo por ilegal el silencio administrativo incurrido por el Director General de la Caja de Seguro Social.

El argumento esgrimido por la Procuradora de la Administración, que fundamenta su pretensión de que no se admita la demanda, consiste en primer lugar, que la parte actora no ha demostrado que ha solicitado a la Caja de Seguro Social certificación si hubo o no contestación a la solicitud de ajuste de pensión propuesto, con lo cual quedaría agotada la vía administrativa, y pueda concurrir ante esta Sala Tercera.

En segundo término, que la demandante no solicitó al Magistrado Sustanciador enviara oficio a la Caja de Seguro Social, para determinar si hubo o no respuesta a la solicitud antes descrita.

Del recurso de apelación se le corrió traslado a la parte contraria, quien en tiempo oportuno se opuso al referido recurso.

Encontrándose la alzada en este estado, el resto de los Magistrados que integran la Sala entran a resolver lo pertinente:

Este Tribunal al revisar las constancias procesales que reposan en el expediente es del criterio que la Procuradora de la Administración no deja de tener razón en relación a la omisión por parte de la demandante en requerirle al Magistrado Sustanciador se peticionara a la Caja de Seguro Social, certificación de que el recurso de apelación había sido resuelto o no; pero en lo que respecta a los esfuerzos desplegados por el afectado para que se contestara el mencionado recurso en la vía gubernativa, los mismos fueron comprobados mediante los escritos que reposan de foja 5 a 14 del expediente contentivo de este proceso.

Sin embargo, el resto de la Sala es del convencimiento que realmente existe un elemento de mayor importancia que impide la admisión de la demanda, y es que

el recurso de apelación en la vía administrativa fue interpuesto extemporáneamente. Esto lo decimos en razón de que la propia Resolución N° 6007 de 1° de julio de 1987, la cual concede la pensión de vejez anticipada a **EDUARDO ALBERTO VALDÉS**, indica en su parte final, que el interesado puede interponer los recursos de reconsideración, el de apelación o ambos dentro de los cinco (5) días hábiles a partir de la notificación (ver foja 18). En este mismo orden de ideas, y de acuerdo a lo anterior, es clara la extemporaneidad del recurso incoado por el demandante, ya que no fue hasta 20 de diciembre de 1995 que presenta un escrito ante el Director de la Caja de Seguro Social, para que considere la Resolución N° 6007 de 1° de julio de 1987 antes mencionado. Esta situación se traduce a que el señor **EDUARDO ALBERTO VALDÉS** no agotó la vía gubernativa, lo que le imposibilita ocurrir ante este Tribunal Contencioso Administrativo, tal como lo preceptúa el artículo 42 de la Ley 135 de 1943, reformado por la Ley 33 de 1946.

Por las consideraciones expuestas, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera Contencioso-Administrativa de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCAN la Providencia de 3 de mayo de 1996, en el sentido de que NO ADMITEN la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción propuesta por la licenciada Didia Baso en nombre y representación de EDUARDO ALBERTO VALDÉS.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MIGUEL GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓN DE ELMER MIRANDA QUINTERO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN N° 12 DE 25 DE MARZO DE 1996, DICTADA POR LA JUNTA COMUNAL DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PANAMÁ, ACTO CONFIRMATORIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Miguel González, actuando en nombre y representación de Elmer Miranda Quintero, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 12 de 25 de marzo de 1996, dictada por la Junta Comunal de San José, Distrito de San Carlos, Provincia de Panamá, acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones.

Conjuntamente con las pretensiones de la demanda, el licenciado González, solicita que la Sala decrete la suspensión provisional de la Resolución N° 12 de 25 de marzo de 1996, dictada por la Junta Comunal de San José, Distrito de San Carlos, Provincia de Panamá, por medio de la cual se deja sin efecto el contrato de arrendamiento de fecha 14 de agosto de 1991 celebrado entre el Municipio de San Carlos y el Señor Elmer Miranda Quintero.

El apoderado judicial del demandante fundamenta su petición en los siguientes términos:

"PETICIÓN DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO.

Como quiera que el acto demandado deja sin efecto el contrato de arrendamiento suscrito entre mi mandante y el Municipio de San Carlos, dicho convenio bilateral queda afectado en su existencia.

> Así las cosas, es claro que de hacerse efectiva la resolución demandada, el municipio puede adoptar acciones o medidas sobre el bien que fue y es objeto del arrendamiento, como, por ejemplo, venderlo o arrendarlo a un tercero. Ello, sin lugar a dudas, producirá una situación insubsanable e irreparable que, obviamente, también causará perjuicios de esa envergadura a mi poderdante.
>
> Es por eso que me permito solicitarle al Honorable Magistrado Sustanciador, con mi acostumbrado respeto, que previo a la admisión de la demanda, se disponga la suspensión provisional del acto acusado." (Fs. 14-15).

Sobre el particular, el artículo 73 de la Ley 135 de 1943 faculta al Pleno de la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) para suspender los efectos del acto impugnado "si a su juicio ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave". Procede la Sala a analizar la gravedad del perjuicio causado por el acto impugnado.

Observa la Sala que el demandante no detalla los perjuicios potenciales que sufriría, ni presenta pruebas que acrediten la existencia de los mismos. La Sala Tercera (Contencioso Administrativa) ha sido clara y reiterativa en establecer la necesidad de que la parte actora alegue y compruebe que el posible perjuicio sea notoriamente grave e irreparable. Por estas razones estima la Sala que no debe acceder a la petición antes mencionada.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACCEDE a la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la Resolución N° 12 de 25 de marzo de 1996, dictada por la Junta Comunal de San José, Distrito de San Carlos, Provincia de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LCDA. MARLENE BALLARD DE FÁBREGA, EN REPRESENTACIÓN DE EDUARDO E. ARANGO, PARA QUE SE DECLAREN NULAS POR ILEGALES LAS RESOLUCIONES N° 137-93 DE 7 DE JULIO DE 1993, N° 051-93 DE 11 DE OCTUBRE DE 1993 DICTADOS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Marlene Ballard de Fábrega en nombre y representación de **EDUARDO ARANGO**, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción contra las Resoluciones N° 137-93 de 7 de julio de 1993, y N° 051-93 de 11 de octubre de 1993 proferidos por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, y los actos confirmatorios.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda, para determinar si la misma cumple con los requisitos mínimos que exige la ley, para que la misma pueda ser admitida.

Observa el suscrito que el libelo carece de ciertas formalidades, que sin el mismo no podría ser admitido. En este sentido pasamos a enumerar lo conducente:

En primer lugar, la parte actora no dirige su escrito al Magistrado Presidente de la Corte Suprema, tal como lo exige el artículo 102 del Código Judicial, el cual es del tenor siguiente:

> "ARTÍCULO 102. Las demandas, recursos, peticiones e instancias formuladas ante la Corte Suprema de Justicia y los negocios que hayan de ingresar por alguna razón en ella, deberán dirigirse al Presidente de la Corte si competen al Pleno de ésta o a la Sala de Negocios Generales y a los Presidentes de las Salas Primera, Segunda y Tercera, si se tratare, respectivamente, de negocios civiles, penales, contencioso-administrativos y laborales y es hará la presentación ante el Secretario General o de la Sala correspondiente, quien debe dejar constancia de ese acto." (Subrayado es nuestro).

En segundo término, dentro del escrito de demanda, no se hace alusión a las partes, a lo que se demanda, ni a la expresión de las disposiciones que se estimen violadas y el concepto de la violación, contraviniendo lo preceptuado en el artículo 43 de la Ley 135 de 1943, reformado por la Ley 33 de 1946 que dice lo siguiente:

> "ARTÍCULO 43. Toda demanda ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo contendrá:
>
> 1. La designación de las partes y de sus representantes;
> 2. Lo que se demanda;
> 3. Los hechos u omisiones fundamentales de la acción;
> 4. La expresión de las disposiciones que se estimen violadas y el concepto de la violación."

De acuerdo a lo señalado en líneas anteriores, no queda más que reiterar que la demanda no puede ser admitida por este Tribunal.

Por las consideraciones expuestas, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción presentada por la licenciada Marlene Ballard de Fábrega en nombre y representación de EDUARDO ARANGO.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA PITTY Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE NEW GENERATION, INC., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA DMV/1519/95 DE 13 DE JULIO DE 1995, EXPEDIDA POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense **Pitty y Asociados** actuando en nombre y representación de **NEW GENERATION, INC.**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Nota DMV/1519/95 de 13 de julio de 1995, expedida por conducto del Ministerio de Vivienda, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

PRETENSIONES DE LA PARTE ACTORA

El apoderado judicial de la sociedad demandante **NEW GENERATION, INC.**, pretende que esta Superioridad proceda a hacer las siguientes declaraciones:

"PRIMERA: Que es nulo por ilegal, el acto administrativo contenido en la Nota DMV/1519/95 de 13 de julio de 1995, expedido por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Vivienda, que dispone `... al respecto señalamos que no estamos facultados para eliminar disposiciones, que ya han sido aprobadas mediante Resolución de dicho Ministerio de Vivienda, salvo que se cumpla con los requisitos exigidos por la Ley 13 de 1993 en su artículo 42.

SEGUNDA: Que es nulo por ilegal el acto administrativo contenido en la nota N° DMV/1865-95 de 12 de septiembre de 1995 del Ministerio de Vivienda, en virtud del cual se confirmó el acto administrativo contenido en la Nota DMV/1519/95 de 13 de julio de 1995, el cual en su parte medular establece: `Una vez aprobado el Reglamento de Copropiedad por el Ministerio de Vivienda y declarado el edificio apto para incorporarse al Régimen de Propiedad Horizontal e inscrita la escritura en el Registro Público, no es el Ministerio de Vivienda el competente para eliminar disposiciones establecidas en el Reglamento de Copropiedad, sin cumplir con lo que dispone el artículo 42 de la Ley 13 de 28 de abril de 1993.

TERCERA: Que el Ministerio de Vivienda no puede aprobar reglamentos de copropiedad que contengan estipulaciones violatorias de la Ley 13 de 28 de abril de 1993, ni de cualquier otra disposición legal aplicable al Régimen de Propiedad Horizontal; y que por tanto, cualquier reglamento que apruebe ese Ministerio en contravención a la Ley, es nulo.

CUARTA: Que el Ministerio de Vivienda tiene capacidad y competencia legal para excluir estipulaciones contenidas en los reglamentos de copropiedad aprobados que se hayan inscrito o no en el Registro Público y que sean evidentemente contrarios a derecho.

QUINTA: Que es nula por ilegal la estipulación contenida en el párrafo segundo del artículo 8 del Reglamento de Copropiedad del P. H. Centro Comercial Plaza Concordia, aprobado mediante la resolución N° 47-93 de 19 de julio de 1993 y la número 3-94 de 12 de enero de 1994, ambas del Ministerio de Vivienda, la cual dispone.`De igual manera, LOS PROPIETARIOS de cada local comercial o unidad departamental, asumirán los costos y gastos de publicidad y propaganda que la Asamblea de Propietarios estime conveniente a efectos de promocionar el `P. H. CENTRO COMERCIAL PLAZA CONCORDIA .

SEXTA: Que es nula por ilegal la estipulación contenida en el artículo 18 del Reglamento de Copropiedad del P. H. Centro Comercial Plaza Concordia, que establece que la sociedad `PLAZA VANDOOM, INC., se reserva el derecho de usufructo de los ingresos que se deriven de los letreros y anuncios comerciales colocados o ubicados en esta servidumbre voluntaria de tránsito para uso peatonal. PLAZA VANDOOM, INC., igualmente podrá optar por ceder este derecho de usufructo a la persona natural o jurídica que estime conveniente, y en los trámites y condiciones económicos que estime oportunos y convenientes .

SÉPTIMA: Que se ordene al Ministerio de Vivienda que emita una resolución excluyendo del Reglamento de Copropiedad del P. H. Centro Comercial Plaza Concordia, las estipulaciones señaladas como ilegales y que se encuentran insertadas en los artículos 8 y 18 del Reglamento de Copropiedad y lo comunique al Sr. Director del Registro Público para su inscripción correspondiente.

OCTAVA: Que los actuales y futuros copropietarios del P. H. Centro Comercial Plaza Concordia no tienen la obligación de asumir los costos y gastos y propaganda para promocionar la venta de las fincas que componen esta propiedad horizontal.

NOVENA: Que no es materia de un reglamento de copropiedad la constitución de usufructo y servidumbre voluntaria y privada sobre vía pública".

LOS HECHOS U OMISIONES FUNDAMENTALES DE ESTA ACCIÓN

Según el recurrente en la presente acción se han producido los siguientes hechos:

1. Que mediante la Resolución N° 47-93 de 19 de julio de 1993 y la Resolución N° 3-94 de 12 de enero de 1994, el Ministerio de Vivienda aprobó el Reglamento de Copropiedad del P. H. CENTRO COMERCIAL PLAZA CONCORDIA, y sus modificaciones.

2. Que el promotor del proyecto del P. H. CENTRO COMERCIAL PLAZA CONCORDIA, la sociedad PLAZA VANDOOM, INC., incorporó en los artículos 8 y 18 del Reglamento de Copropiedad, estipulaciones contrarias a lo establecido en la Ley 13 de 28 de abril de 1993 (objeto de la presente acción).

3. Que el día 25 de abril de 1991, la sociedad denominada **NEW GENERATION, INC.**, y la sociedad **BELGRAVIA, S. A.**, celebraron un contrato de promesa de compra venta, en virtud del cual la parte actora se comprometió a comprarle y esta sociedad prometió venderle dos (2) locales comerciales (el N° 108 y el N° 109), los cuales formarían parte de un edificio que la prominente vendedora construiría sobre la FINCA N° 46,916, inscrita al FOLIO 392 del TOMO 1102 de la Sección de Propiedad del Registro Público, Provincia de Panamá, el cual sería sometido al Régimen de Propiedad Horizontal.

4. Que posterior a la celebración de dicho contrato, el mencionado edificio se construyó y la Finca N° 46,916 fue incorporada al Régimen de la Propiedad Horizontal, pasando a constituir la FINCA N° 30792, ROLLO 3780, DOCUMENTO 1 de la Sección de Propiedad Horizontal del Registro Público, Provincia de Panamá.

4. La sociedad **NEW GENERATION, INC.** prominente compradora de dos (2) locales comerciales en el P. H. CENTRO COMERCIAL PLAZA CONCORDIA, así como otros futuros propietarios de unidades departamentales o locales comerciales en dicho centro comercial, resultan perjudicados por las estipulaciones del Reglamento de Copropiedad, siendo negada dicha petición, al igual que el recurso de reconsideración.

INFORME DE CONDUCTA DE LA ENTIDAD DEMANDADA

Mediante informe explicativo de conducta, que consta a fojas 58-61, el ente administrativo demandado indicó a esta Sala que la nota DMV/1519/95 del 13 de julio de 1995, tiene su asidero legal en lo dispuesto en el Artículo 31 de la Ley 13 del 28 de abril de 1993, que señala que la resolución que dicta la Institución, declarando apto para incorporarse al régimen de Propiedad Horizontal un edificio construido sobre una finca y en la cual se aprueban los planos correspondientes y el Reglamento de Copropiedad del Edificio, es de carácter irrevocable. Por consiguiente, agrega el precitado funcionario, que si el promotor o propietario, en el caso que la finca y edificio que se aprobó su Incorporación al Régimen de Copropiedad horizontal no haya sido debidamente inscrita la Escritura de Constitución al Registro Público o los propietarios de las fincas que nazcan de la Incorporación, por conducto de Presidente y Representante Legal de la Asamblea de Propietarios, deberán conforme al Artículo 42 de la citada Ley 13, solicitar al Ministerio de Vivienda la aprobación de reformas al Reglamento de Copropiedad. Ésta a juicio de dicha entidad, es la única vía legal de competencia del Ministerio de Vivienda para eliminar o reformar artículos del Reglamento de Copropiedad del P.H. CENTRO COMERCIAL PLAZA CONCORDIA.

DISPOSICIONES INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

Sostiene el recurrente que el acto administrativo acusado de ilegal, es violatorio de los artículos 2, 22; párrafo 1, y el artículo 41, todos de la Ley 13 de 28 de abril de 1993, que en el orden indicado, establecen lo siguiente:

> **"Artículo 2.** Podrán pertenecer al Régimen de Propiedad Horizontal, sujetos a la presente Ley, los siguientes bienes:
>
> 1. Las diversas unidades departamentales de una edificación, cuando sean independientes y tengan salida a la vía pública directamente o por un pasaje común.
>
> 2. Los distintos edificios o unidades departamentales edificadas sobre un terreno común.
>
> 3. Cualquier otro tipo de unidad departamental, edificio o edificios siempre que sean susceptibles de aprovechamiento independiente y que presenten las características del régimen.
>
> Cada uno de los bienes anteriormente enumerados podrá pertenecer en copropiedad a más de una persona. Estos copropietarios deberán designar su representante en la Asamblea de Propietarios."
>
> **"Artículo 22.** Cada propietario deberá contribuir a los gastos necesarios para la administración, conservación, mantenimiento, reparación y modificación de los bienes comunes, así como el pago de la prima de seguros contra incendios, terremoto, incendio causado por terremoto con extensión de cubierta sobre todo el edificio y daños ocasionados por o al ascensor en proporción al valor de su piso o unidades departamentales sin perjuicio de las estipulaciones expresas de las partes. Sin embargo, los gastos de administración podrán ser distribuidos en forma distinta, si así lo acordara el setenta y cinco por ciento (75%) de los propietarios."
> ...
> **"Artículo 41.** El reglamento de copropiedad deberá contener las siguientes materias, sin perjuicio de otras disposiciones que los propietarios juzguen necesarias para el mejor funcionamiento del régimen:
>
> 1. Forma de administración, especificando las facultades del administrador y período de duración;
>
> 2. Facultades y funciones de la junta directiva y sus dignatarios;
>
> 3. Determinación del uso a que se destina cada unidad departamental;
>
> 4. Señalamiento de la fecha en que el administrador debe rendir informe de su gestión;
>
> 5. Forma de convocatoria y periodicidad de las Asambleas de Propietarios;
>
> 6. Mayoría necesaria para celebrar sesiones extraordinarias y para adoptar resoluciones, cuando se trate de casos en que esta Ley no exija cómputos especiales;
>
> 7. Regulación concerniente en materia de mudanza, mejoras a unidades departamentales y protección y uso del elevador, escaleras y otras áreas comunes que sirvan de acceso, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
>
> En caso de no existir tal disposición en el Reglamento de Copropiedad, y de que algún dueño desee efectuar modificaciones a su unidad departamental y haya obtenido los permisos correspondientes,

> deberá solicitar por escrito a la junta directiva, el uso de los espacios comunes si pretendiera su uso para el traslado de materiales nuevos o escombros. En tales casos la junta directiva podrá dar su autorización o en caso necesario negarlo y exigir el uso de instalaciones temporales exteriores. Tal decisióm podrá ser apelada ante la Asamblea de Propietarios;
>
> 8. La obligatoriedad de presentar un presupuesto anual de ingresos y egresos;
>
> 9. La obligatoriedad de llevar un libro de actas, el cual deberá estar debidamente rubricado ante un Juzgado de Circuito; y
>
> 10. La obligatoriedad de que el tesorero lleve un libro de ingresos y egresos debidamente rubricado ante un Juzgado de Circuito."

De igual forma se considera infringido el artículo 1106 del Código Civil que a la letra establece:

> "**Artículo 1106.** Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarias a la ley, a la moral ni al orden público".

En cuanto al concepto de la violación del artículo 2 de la Ley 13 de 1993, la sociedad demandante sostiene que el mismo se ha dado en virtud de que el acto acusado de ilegal, al permitir la existencia de la estipulación que se insertó en el artículo 18 del Reglamento de Copropiedad referente a la incorporación de un paso peatonal, conjuntamente con la regulación de su uso y usufructo, ha permitido el establecimiento de bienes que no están sujetos a la incorporación del régimen de propiedad horizontal de acuerdo con lo dispuesto en esa norma.

En lo que se refiere a la transgresión del párrafo 1 del artículo 22 de la referida Ley 13 de 1993, alega el recurrente que si el Ministerio de Vivienda hubiese aplicado esta norma habría resuelto favorablemente su petición de exclusión de las estipulaciones contenidas por el citado reglamento de copropiedad. Ello, debido a que esta norma establece cuáles son los gastos comunes que deben pagar los copropietarios y dentro de los que menciona esta norma, no se encuentran los gastos de promoción del propietario del proyecto para vender sus locales comerciales. Por consiguiente, considera el demandante que al no excluirse los gastos de promoción que carga el artículo 8 del reglamento de copropiedad a los copropietarios, lo que se hace es patrocinar el enriquecimiento ilícito para los promotores del P. H. CENTRO COMERCIAL PLAZA CONCORDIA, porque no se toma en consideración que este es un gasto propio de los propietarios del proyecto y no que es un gasto común a cargo de los copropietarios, que no aparece contemplado en la Ley 13 de 1993.

Sobre la transgresión del artículo 41 de la mencionada Ley 13 de 1993, sostiene el demandante que si bien esta disposición contempla cuáles son las materias que deben estar sujetas a regulación en un reglamento de copropiedad, y además, deja abierta la posibilidad de que los propietarios introduzcan otras disposiciones que juzguen necesarias para el mejor funcionamiento del régimen, el Ministerio de Vivienda al no excluir del Reglamento de Copropiedad del P. H. Centro Comercial Plaza Concordia las estipulaciones contenidas en los artículos 8 y 18 del referido reglamento de copropiedad, vulneró el artículo 41 de la Ley 13 de 1993, porque las disposiciones contenidas en ellos no constituyen materias propias del régimen de propiedad horizontal. Agrega que el Ministerio de Vivienda lo que hace es avalar estipulaciones que no se ajustan a derecho, y, en consecuencia, lo que hace es provocar conflictos entre propietarios, y entre éstos y el promotor.

Finalmente, en cuanto a la infracción del artículo 1106 del Código Civil, la parte actora estima que la estipulación contemplada en el artículo 8 del referido reglamento de copropiedad, referente a quiénes asumirán los costos de gastos de publicidad y propaganda de promoción del P. H. Centro Comercial Plaza Concordia, y la consiguiente aprobación por parte del Ministerio de Vivienda, constituye materia que debe estar sujeta a la libre contratación civil de las

partes y por tanto, al imponérsele a los copropietarios la obligación contenida en el artículo 8 del referido reglamento de copropiedad del P. H. Centro Comercial Plaza Concordia, se vulnera el principio de la autonomía de la voluntad de las partes para contratar, y así debió reconocerlo el Ministerio de Vivienda al absolver la petición del demandante.

CRITERIO DE LA SEÑORA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Mediante Vista Fiscal N° 63 de 31 de enero de 1996, legible a fs. 62-79 del expediente, la señora Procuradora de la Administración actuando en defensa del acto acusado, en atención al artículo 348; ordinal 2 del Código Judicial, solicitó a esta Superioridad denegar las pretensiones de la sociedad demandante.

Previo a examinar las argumentaciones de la prenombrada funcionaria, la Sala quiere llamar la atención a la Procuraduría de la Administración en el sentido de que el traslado se dio el 30 de noviembre de 1995, y lo contestó dos meses después, para un término de cinco (5) días. Consta en el expediente que la Vista Fiscal fue preparada el mismo día de la notificación, 31 de enero de 1996. Esta es una práctica adoptada en contra de lo establecido en el artículo 2305 del Código Judicial, aplicable en estos casos por analogía para el procedimiento, ya que el término se cuenta a partir del ingreso del expediente al despacho del agente del Ministerio Público. Le recomendamos a la Secretaría de la Sala Tercera que haga cumplir la mencionada disposición para que se cumpla el trámite legal en su debido término procesal.

En lo que respecta a la infracción del artículo 2 de la Ley 13 de 1993, sostiene la señora Procuradora de la Administración que no coincide con el demandante por la siguiente razón:

> "... Es indudable que la edificación denominada PLAZA CONCORDIA, ha sido incorporada al Régimen de Propiedad Horizontal, y por ello, necesariamente se dio la aplicación del artículo dos (2) de esta Ley 13 de 1993. O sea, que la Administración tomó en cuenta los numerales del pretranscrito artículo dos (2), para poder incorporar dicho grupo comercial y empresarial, al Régimen de Propiedad Horizontal; luego no puede ser cierto que se dejó de aplicar esa disposición legal.
>
> Y es que para poder concederse la incorporación al régimen de propiedad de unidades departamentales, la actuación administrativa, se tiene que referir a dicho artículo; como en efecto ha sido aplicado en la presente situación de derecho."

Sobre la transgresión de los artículos 22 y 41 de la Ley 13 de 1993, la señora Procuradora sostiene:

> "No compartimos y `A CONTRARIS , negamos los alegatos acusatorios de la contraparte, puesto que somos de la opinión que parten de una base falsa: no es cierto que la Administración tenga necesariamente, en cada acto de incorporación al régimen de propiedad horizontal, que resguardarle la espalda a los copropietarios, presumiendo la mala fe y el uso abusivo del derecho de los promotores.
>
> Es de esperar que sean las propias personas naturales o jurídicas, en su calidad de copropietarios, al creerse afectadas en sus derechos, por vía de cláusulas abusivas del Reglamento de Copropiedad, las que planteen ante la jurisdicción pertinente (el juez circuital) sus demandas de justicia."

En lo que concierne al artículo 1106 del Código Civil, también acusado de ser infringido, la Procuradora se manifestó en los siguientes términos:

> "En realidad este artículo, desde nuestra perspectiva, por no ser aplicable a la situación estudiada; no tendría porqué haber sido violado o lesionado.

> Ciertamente, si vemos bien, la situación `IN EXAMINE , no dice relación con un acuerdo de voluntades entre la Administración y la empresa promotora o quizás, con la demandante; sino más bien con una actuación unilateral del Ente Activo de la Administración.
>
> Efectivamente, las autorizaciones son acto (sic) administrativos que no requieren para su perfeccionamiento y validez, el concurso de la voluntad del administrado; antes bien, son declaraciones que tienen por fin habilitar y controlar la actividad de una persona de derecho.
>
> En el caso en estudio, la autorización se enrrostra en un acto de policía administrativa (urbanística). Aquí la autorización integra la voluntad administrativa y su omisión sólo puede ser subsanada por una confirmación expresa a posteriori. Con estos actos se le otorga validez y eficacia al acto de los particulares, por esto, incide en su perfección.
>
> Para finalizar pués, (sic) digamos que la conducta de la administración se exteriorizó a través de la aprobación y control de los reglamentos de copropiedad, y esto, en nada tiene que ver con el acuerdo de voluntades al cual se refiere el artículo pretranscrito.

Finaliza argumentando la Procuradora de la Administración que pretender, como lo hace el recurrente, que esta Superioridad se pronuncie obligando a la Administración a obrar notoria y evidentemente en contra de Derecho constituye una verdadera incongruencia jurídica cimentada sobre una pretensión imposible de ser favorecida con una resolución judicial, por razón de que las Resoluciones Administrativas que aprueban la reglamentación de copropiedad o declaran un inmueble apto para la incorporación al régimen de propiedad horizontal son de **carácter irrevocable**. conforme a lo estatuido en el artículo 31 de la antes citada Ley 13 de 28 de abril de 1993.

DECISIÓN DE LA SALA TERCERA

Cumplidos los trámites legales establecidos para este tipo de procesos, la Sala procede a resolver la presente controversia. Un examen del presente caso indica a esta Superioridad que las pretensiones del recurrente recaen fundamentalmente, en que se declare la ilegalidad de la Nota DMV/1519/95 de 13 de julio de 1995, así como también de la N° DMV/1865-95 de 12 de septiembre de 1995, ambas expedidas por el Ministerio de Vivienda, mediante las cuales se le indicó a la sociedad **NEW GENERATION, INC.**, que una vez aprobado el Reglamento de Copropiedad por el Ministerio de Vivienda y declarado el edificio apto para incorporarse al Régimen de Propiedad Horizontal e inscrita la escritura en el Registro Público, el Ministerio de Vivienda no es la entidad competente para eliminar disposiciones establecidas en el Reglamento de Copropiedad, sin cumplir con lo que dispone el Artículo 42 de la Ley 13 de 28 de abril de 1993. Esta actuación administrativa obedeció a que las pretensiones del recurrente ante dicha institución gubernamental tenían como objeto la modificación de los artículos 8 y 18 del Reglamento de Copropiedad del P. H. CENTRO COMERCIAL PLAZA CONCORDIA.

A juicio de este Tribunal, la decisión adoptada por el Ministerio de Vivienda contrario a lo que señala la sociedad **NEW GENERATION, INC.**, y como bien lo indicara la señora Procuradora de la Administración en su oportunidad, se ajusta a derecho. Ello obedece a que de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 31 de la Ley 13 de 28 de abril de 1993, la resolución expedida por el Ministerio de Vivienda, aprobatoria del Reglamento de Copropiedad del edificio **es de carácter irrevocable**. Para mayor ilustración, veamos lo que al respecto establece la precitada excerta legal:

> **"Artículo 31.** Para constituir el Régimen de Propiedad Horizontal sobre una finca será necesario que el Ministerio de Vivienda (MIVI) mediante resolución apruebe los planos correspondientes, el Reglamento de Copropiedad del edificio y además lo declare apto para

incorporarse al régimen. **La resolución aprobatoria será de carácter irrevocable.**" ... (Lo resaltado es de la Sala).

En este sentido, se observa claramente que la decisión adoptada por el Ministerio de Vivienda, objeto de la presente acción de plena jurisdicción, encuentra pleno asidero jurídico en la precitada disposición legal, por consiguiente, mal podía el demandante pretender de manera unilateral, que la Administración accediera a la modificación de los precitados artículos 8; párrafo segundo y 18 del Reglamento de Copropiedad del P. H. CENTRO COMERCIAL PLAZA CONCORDIA sin que se cumplieran previamente, los presupuestos legales establecidos en los artículos 42 de la Ley 13 de 1993 y el artículo 28 acápite e) del Reglamento de Copropiedad del P. H. CENTRO COMERCIAL PLAZA CONCORDIA, cuyo texto es el siguiente:

"**Artículo 42**. Para reformar el Reglamento de Copropiedad se requiere un acuerdo de los propietarios tomado en Asamblea General por el voto de no menos del setenta y cinco por ciento (75%) de ellos. Estas reformas deberán ser aprobadas por el Ministerio de Vivienda (MIVI), ser elevadas a escritura pública e inscrita en el Registro Público para que surtan efecto contra terceros.

Para los cambios de la junta directiva, dignatario o administrador no se requerirá la aprobación del Ministerio de Vivienda (MIVI), pero sí su inscripción en el Registro Público."

"**ARTÍCULO 28**: La Asamblea de Propietarios tendrá a su cargo y será responsable por la Administración y conservación de los BIENES COMUNES y tendrá todas aquellas funciones y facultades que la Ley o este Reglamento de Propiedad no le atribuyan a la Junta Directiva, a los Dignatarios o al Administrador y en especial, tendrá las siguientes facultades:
...
e) Reformar el Reglamento de Copropiedad. Una modificación del reglamento de copropiedad, que afecte derechos sobre BIENES PRIVADOS O PRIVATIVOS, otorgados en la constitución inicial del Régimen de Propiedad Horizontal, ya se trate de fincas o reservas letales, requerirá indemnización previa, aceptándose como monto de dicha indemnización, la que determine EL PROPIETARIO , cuyo derecho sobre un bien PRIVADO O PRIVATIVO sea afectado." ...

Pretender que la Administración, en este caso el Ministerio de Vivienda, procediera a excluir las estipulaciones consagradas en el párrafo segundo del artículo 8, así como también del artículo 18 del Reglamento de Copropiedad del P. H. CENTRO COMERCIAL PLAZA CONCORDIA aprobado por dicho Ministerio mediante la Resolución N° 47-93 de 19 de julio de 1993, y la Resolución N° 3-94 de 12 de enero de 1994, sin cumplir con lo dispuesto en los precitados artículos 42 y 28 de la Ley 13 de 1993, y del Reglamento de Copropiedad del P. H. CENTRO COMERCIAL PLAZA CONCORDIA, respectivamente, a **prima facie** constituye una clara y manifiesta violación al consagrado principio de irrevocabilidad de los actos administrativos que prohíbe a la Administración revocar sus propios actos que crean, reconocen o declaran un derecho subjetivo a favor de los particulares. En este caso, el derecho subjetivo consiste en la aprobación por parte del Ministerio de Vivienda del respectivo Reglamento de Copropiedad del CENTRO COMERCIAL PLAZA CONCORDIA para pertenecer al Régimen de Propiedad Horizontal.

Aceptar que la Administración revoque libremente como pretende el recurrente, su propia actuación sería contradecir el principio de certeza jurídica del que gozan todos los actos administrativos hasta tanto el órgano jurisdiccional, en nuestro caso, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, se pronuncie acerca de su ilegalidad o no; y a esta vía mediante el Contencioso de Nulidad podría recurrir el interesado.

Por consiguiente, para que el Ministerio de Vivienda procediera a realizar las correspondientes modificaciones al Reglamento del P. H. CENTRO COMERCIAL PLAZA CONCORDIA, lo procedente era que la Asamblea de Copropietarios del centro

comercial en referencia, a través de su representante legal, y una vez se hubiesen aprobado las mismas mediante acuerdo tomado por los propietarios de dicho Centro en Asamblea General por el voto de no menos del setenta y cinco por ciento (75%) de ellos, solicitara al aludido ente administrativo la aprobación de reformas al referido Reglamento de Copropiedad, que de conformidad con lo establecido en los prenunciados artículos 42 de la Ley 13 de 1993, y el artículo 28 del Reglamento de Copropiedad del P. H. CENTRO COMERCIAL PLAZA CONCORDIA, constituyen el mecanismo legal para que el Ministerio de Vivienda proceda a aprobar, modificar, o eliminar las disposiciones contempladas en el reglamento de copropiedad del edificio incorporado al Régimen de Propiedad Horizontal.

Por las consideraciones expuestas no prosperan los cargos de violación endilgados a los artículos 2, 22 y 41 de la Ley 13 de 28 de abril de 1993.

En relación al artículo 1106 del Código Civil cuya infracción también se aduce, la Sala considera que esta norma no es de aplicación al caso que nos ocupa, y es que la misma dice relación con la contratación entre particulares, y no con la actuación administrativa llevada a cabo por parte de la administración (Ministerio de Vivienda) consistente en la aprobación o improbación del reglamento de copropiedad para constituir el Régimen de Propiedad Horizontal sobre una finca, que constituye un acto administrativo de carácter unilateral por parte del referido Ministerio de Vivienda, en atención a la atribución legal establecida en el artículo 31 de la Ley 13 de 1993.

En consecuencia, los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativo) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Nota DMV/1519/95 de 13 de julio de 1995, expedida por el Ministerio de Vivienda, acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS HERRERA EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ MIGUEL ZÁRATE, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1995, SUSCRITO POR EL COMANDANTE PRIMER JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PANAMÁ LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Carlos Herrera González** en nombre y representación de **JOSÉ MIGUEL ZÁRATE ORTEGA**, ha interpuesto recurso de apelación contra la Resolución de 8 de julio de 1996, la cual declara inadmisible la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción presentada por su persona.

El Magistrado Sustanciador al revisar la acción incoada, no admitió la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción por varias razones, y que a continuación exponemos:

En primer lugar, señaló el Ponente, que no se indica en el libelo las disposiciones que se estiman violadas y el concepto de la infracción; en segundo término, que no hay constancia del recurso de reconsideración interpuesto contra el acto impugnado. Que además, a fojas 9 y 10 del expediente consta una copia del Resuelto N° 155-R-32 de 3 de abril de 1996, que impide que se alegue silencio

administrativo, para invocar inmediatamente la jurisdicción contencioso administrativa. Que además no hay evidencia de notificación de ese acto.

El recurrente al impugnar la Resolución de 8 de julio de 1996, sustenta la alzada bajo el argumento, de que no es cierto que existió pronunciamiento por parte del Ministro de Gobierno y Justicia, toda vez que no entró a resolver el fondo del problema. Que el mencionado Resuelto, no admitió el recurso de apelación, interpuesto en la vía gubernativa, contra la Nota del 14 de septiembre de 1995, suscrita por el Comandante Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de Panamá. Por último indica el actor, que en el hecho III-5 se hace alusión a las normas violadas y en concepto de que lo han sido.

Encontrándose el proceso en este estado el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera entran a resolver lo pertinente:

Frente al argumento esgrimido por el recurrente, consideramos que no le asiste la razón, ya que su demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción no reúne los requisitos mínimos estatuidos en la Ley 135 de 1943 reformada por la Ley 33 de 1946. Esto lo decimos en función de que el demandante al presentar su escrito, en el mismo no establece las normas legales que estima infringida y el concepto de que lo ha sido. Sólo menciona que se han violado las normas del debido proceso y las que aluden a la responsabilidad de las autoridades de garantizar los recursos legales pertinentes, como lo es el derecho a tener trabajo.

De igual manera no hay constancia de la notificación de la Nota de 14 de septiembre de 1995, ni del recurso de apelación que emitiera el Ministro de Gobierno y Justicia, que sirva de referencia para determinar si la interposición de los recursos, dentro de la administración, se hizo en tiempo oportuno.

Las deficiencias antes anotadas, impiden a este Tribunal que conoce la alzada, admitir la demanda en comento.

Por las anteriores consideraciones el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMAN la Resolución de 8 de julio de 1996.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA AIDA JURADO ZAMORA, EN REPRESENTACIÓN DE LÁZARO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, PARA QUE LA SALA TERCERA DECLARE, QUE EL DEMANDANTE TIENE DERECHO A SER RESTITUIDO AL CARGO DE CAPITÁN DE LA FUERZA PÚBLICA, POR HABERLO DISPUESTO ASÍ EL JUZGADO SEXTO PENAL DE CIRCUITO DE CHIRIQUÍ, MEDIANTE AUTO N° 92 DE 1° DE FEBRERO DE 1996, Y QUE ES VIOLATORIA LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO INCURRIDO POR EL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA AL NO EJECUTAR UNA ORDEN JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Aida Jurado Zamora, actuando en nombre y representación de Lázaro González González, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, demanda contencioso-administrativa para que la Sala formule las siguientes declaraciones:

"A. Que el señor LÁZARO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, tiene derecho a ser restituido al cargo de Teniente de la Fuerza Pública por haberlo dispuesto así el Juzgado Sexto Penal de la Provincia de Chiriquí mediante auto N° 92 del 1° de Febrero de 1996, e informado al ministro de Gobierno y Justicia mediante oficio N° 348 del 29 de febrero de 1996.

B. Que es violatorio de la ley el Acto del Ministro de Gobierno y Justicia de negar tácitamente por silencio administrativo la restitución al cargo del Teniente de la Fuerza Pública al señor **LÁZARO GONZÁLEZ GONZÁLEZ**, al no cumplir lo dispuesto por el Juez Sexto de Circuito Penal de Chiriquí mediante auto N° 92, del 1° de febrero de 1996, e informado mediante oficio N° 348 del 29 de febrero de 1996.

C. Que como consecuencia de ello, el Ministro de Gobierno y Justicia está obligado a restituir en el cargo de Teniente de las Fuerzas Públicas al señor **LÁZARO GONZÁLEZ GONZÁLEZ**, funciones que tenía y desempeñaba dentro de esta Institución, cuando fue suspendido del cargo por el Procurador General de la Nación, y pagarle todos los salarios dejados de percibir desde que fuera suspendido del cargo, con iguales derechos y prerrogativas hasta que se cumpla con la resolución de restitución, así como reconocer cualquier otro derecho de que hubiere gozado de no habérselo impedido la suspensión."

En la demanda presentada, la apoderada judicial del actor solicita a la Sala que declare ilegal la negativa del señor Ministro de Gobierno y Justicia de reintegrar al señor Lázaro González González al cargo que ocupaba en la Fuerza Pública. De acuerdo con la apoderada judicial del demandante, el levantamiento de la suspensión del cargo, fue ordenada por el Juez Sexto de Circuito, Ramo Penal, de la Provincia de Chiriquí, mediante Auto N° 92 del 1° de febrero de 1996, y comunicada al señor Ministro de Gobierno y Justicia a través del Oficio N° 348 de 29 de febrero de 1996, quien hasta la fecha en que fue presentada la demanda no había cumplido dicho Auto.

Al resolver sobre la admisibilidad de la demanda, el Magistrado Sustanciador considera que la misma no debe admitirse, ya que la negativa tácita en que incurrió el Ministro de Gobierno y Justicia no es impugnable ante la jurisdicción contenciosa administrativa, toda vez que la misma se refiere al incumplimiento de una resolución judicial, cuya ejecución sólo puede pedirse utilizando los mecanismos legales previstos al efecto y no mediante un acción contenciosa-administrativa de plena jurisdicción, en la que la Sala debe decidir acerca de la ilegalidad o no de actos administrativos autónomos. En relación con lo anterior, el numeral 3 del artículo 22 de la Ley N° 33 de 1946 señala que el silencio administrativo no es impugnable ante la vía contencioso administrativa cuando la solicitud que se hace al funcionario no es de las que originan actos recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Por otro lado, la apoderada judicial del demandante, se limitó a pedir a la Sala que se hicieran las declaraciones transcritas, sin solicitar la nulidad de un acto en particular, lo cual no se relaciona con la naturaleza de la acción contencioso-administrativa de plena jurisdicción propuesta en la que, previo a la petición de reparación del derecho violado, se requiere que se pida la nulidad de actos administrativos concretos, tal como lo exige el artículo 43 a) de la Ley N° 135 de 1943.

En virtud de lo anterior, lo procedente es no admitir la demanda.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la licenciada Aida Jurado Zamora, en nombre y representación del señor Lázaro González González.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA MORENO Y FÁBREGA, EN REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCTORA URBANA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NEGATIVA TÁCITA DEL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, A ACCEDER AL PAGO DE LOS GASTOS INCURRIDOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL ENSANCHE ARRAIJÁN-PUENTE DE LAS AMÉRICAS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce el resto de la Sala Tercera de la Corte, de la demanda contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por la firma Moreno y Fábrega, en representación de **CONSTRUCTORA URBANA, S. A.** para que se declare nula por ilegal, la negativa tácita del Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Obras Públicas, a acceder al pago de los gastos incurridos en el Proyecto de construcción para el ensanche Arraiján-Puente de las Américas, y para que se hagan otras declaraciones.

La señora Procuradora de la Administración al notificarse de la providencia de 14 de marzo de 1996, que **ADMITIÓ** la presente demanda, mediante Vista Fiscal N° 226 de 23 de mayo de 1996, presentó y sustentó formal recurso de apelación contra la misma, en los siguientes términos:

> "A nuestro juicio, la demanda presentada no debió ser admitida, ya que consta en el expediente, que el Ministerio de Obras Públicas, mediante Resolución N° 280 de 26 de octubre de 1993, le reconoció a **CONSTRUCTORA URBANA, S. A.** la suma de B/.420,597.78, en concepto de compensación, lo cual no fue impugnado en la vía gubernativa, conviniendo tácitamente la Empresa Constructora con la Resolución emitida.
>
> Del estudio del cuaderno judicial también se desprende, que **CONSTRUCTORA URBANA, S. A.** no impugnó la Resolución N° 280-93 y que una vez se envió la documentación con la cantidad reconocida, a la Contraloría General de la República, donde se realizó el estudio del caso, se determinó por parte de la Dirección de Ingeniería que era improcedente el ajuste aprobado. No existe constancia que el contralor se haya pronunciado mediante Resolución alguna; tampoco consta que la Empresa haya recurrido, ante el silencio de la Contraloría General de la República, por ende no se agotó la vía gubernativa en este caso.
>
> Consta en el expediente que el Ministerio de Obras Públicas, a la fecha mantiene en trámite una cuenta contra el Tesoro Nacional, a favor de Constructora Urbana, que no ha sido aprobada por la Contraloría (Ver Nota de 13 de noviembre de 1995 dirigida al Licdo. Humberto Toala, por la Jefa de contabilidad del Ministerio de Obras Públicas).
>
> A la solicitud de arbitraje formulada por la Empresa, consideramos que no tenía porque acceder el Consejo de Gabinete, y consideramos acertada la recomendación de que acudiera ante los tribunales de justicia, que es lo procedente".

Por su parte, el apoderado judicial de la parte actora se opuso a lo pretendido por la Procuradora, y presentó sus objeciones en la que sostiene que la vía gubernativa fue agotada. Al responder a las objeciones que la señora

Procuradora emite en la sustentación del recurso de apelación visible a foja 67, el demandado estableció lo siguiente:

> "A la Contraloría de la República le correspondía refrendar la orden, o improbarla, por lo que en consecuencia dicha decisión no está en firme por lo que sería prematuro interponer algún recurso contra la actuación del Contralor. Cabe agregar que el Contralor debe indefectiblemente o refrendar o devolver la cuenta al Ministerio de Obras Públicas sin refrendar, pero debe hacerlo consignando en forma escrita las razones de su improbación. La Contraloría tiene, obligatoriamente, que adoptar una de las dos decisiones que corresponden: refrendar o devolver la nota mediante oficio dirigido a la autoridad -en este caso- el Ministerio de Obras Públicas, notificando que no la aprueba, lo que no sucedió en este caso.
> ...
> En consecuencia, la Contraloría no cumplió con ninguno de los dos presupuestos a que está obligada ni mucho menos la ha improbado ya que no impuso las razones por las cuales no la refrenda.
>
> ... el Contralor debe, en caso de improbación, devolver la cuenta al funcionario que la aprobó, para que éste tenga la oportunidad de insistir en su pago o allanarse a la improbación del Contralor. Ello indica claramente que la retención de la cuenta en la Contraloría no es un acto definitivo y menos impugnable, como en el caso que nos ocupa, en el que ni siquiera se ha dado la improbación a la cuenta.
>
> En todo caso la persona afectada por la suspensión del pago dispuesta por el Contralor General podrá demandar su revisión ante la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia.
>
> Independientemente de lo anterior, el monto a que se refería la cuenta no aprobada ni refrendada por la Contraloría no incluye la pretensión real y total sobre la cual estamos accionando ya que esta es solamente un pago parcial.
>
> No es válido el argumento del apelante en cuanto a que no se agotó la vía gubernativa por no haber recurrido ante el supuesto silencio administrativo de la Contraloría ya que no se puede accionar mientras se encuentre pendiente de refrendo".

Encontrándose el proceso en este estado, el resto de los Magistrados que integran este Tribunal proceden a expresar las siguientes consideraciones a fin de resolver la controversia planteada:

Estima este Tribunal de apelaciones que, efectivamente, le asiste razón al Procurador de la Administración toda vez que la demanda encausada es extemporánea, ya que si bien es cierto, el actor considera agotada la vía gubernativa en virtud de la negativa tácita de la Administración, a los efectos de ocurrir en demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción ante esta Sala, el libelo fue incoado cuando ya había precluido la oportunidad para presentar esta acción.

A prima facie, se observa que la presente demanda adolece de un defecto formal que impide su admisibilidad, toda vez que un examen exhaustivo del expediente nos demuestra claramenteque, si bien es cierto, el recurrente considera agotada la vía gubernativa en virtud de que ha presentado reiteradas solicitudes para la constitución de un TRIBUNAL ARBITRAL de conformidad con lo establecido en la cláusula 7.8 del Contrato N° 27 suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y Constructora Urbana, S. A. debe señalar esta Sala, que dichas solicitudes no fueron realizadas en tiempo oportuno.

Lo anterior es así, ya que se aprecia a foja 7 del expediente el memorial fechado 22 de septiembre de 1995, escrito éste en el que se señalan las diferentes fechas en que **CONSTRUCTORA URBANA, S. A.** ha presentado solicitud formal para la constitución del mencionado Tribunal Arbitral. La primera

solicitud fue presentada el 8 de junio de 1995, la segunda el 22 de septiembre de 1995, y la última el 22 de diciembre de 1995, y la demanda contenciosa administrativa fue presentada el día 26 de diciembre de 1995, todo esto evidencia la extemporaneidad de la presente demanda, ya que con relación a las primeras solicitudes el demandante esperó a obtener respuesta por parte de la Administración, en diferentes fechas, y sin que entre y una y otra mediara el límite mínimo de los dos meses, y no es sino hasta el 26 de diciembre de 1995 que acude ante este Tribunal a fin de demandar la negativa tácita proveniente de la entidad demandada, a través de la acción de plena jurisdicción, basándose en la reiteración de la solicitud original visible a fojas 7 y 8, la cual aún así es extemporánea por cuanto fue presentada ante de los dos meses con respecto a la última solicitud de 22 de diciembre de 1995.

Ya ha sido doctrina uniforme de la Sala Tercera de esta Corte establecer que el fenómeno jurídico del silencio administrativo, como medio de agotamiento de la vía gubernativa, se configura cuando transcurren dos meses sin que la Administración se pronuncie sobre la solicitud o recurso que le han sido presentados, conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 33 de 1946, por lo que es a partir de ese momento que se da inicio al cómputo del término de prescripción de los dos meses **para el ejercicio de la acción de plena jurisdicción**, en atención a lo previsto en el artículo 27 de la Ley 33 de 1946.

Con el fenómeno jurídico del silencio administrativo lo que se pretende es que el negocio sometido a la consideración de la administración, y que no ha sido resuelto dentro de un plazo razonable (dos meses según nuestra legislación), pueda ser recurrido en la vía jurisdiccional dentro del término establecido en la ley, el cual es de dos meses tratándose de una acción encaminada a obtener la reparación de derechos subjetivos que se consideran vulnerados, como en el presente caso.

Como queda expuesto, el cómputo de prescripción del silencio administrativo se inicia inmediatamente al vencimiento del plazo de dos meses que tenía la Administración para pronunciarse, plazo que tiene el propósito de dar certeza jurídica a las actuaciones administrativas, y, al administrado la seguridad de una negativa tácita a su solicitud o recurso, a fin de que tanto administración como administrado conozcan el término fatal en que tienen que decidirse los asuntos públicos. Después de los dos meses sin pronunciamiento administrativo, el afectado sólo podrá, si no usa el silencio administrativo en los dos meses subsiguientes, recurrir a la Sala Tercera cuando se emita una decisión, y dentro de los dos meses después de notificado o enterado de la misma.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, Contencioso Administrativa de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, PREVIA REVOCATORIA de la Resolución fechada 14 de marzo de 1996, NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por la firma MORENO Y FÁBREGA, en representación de la sociedad CONSTRUCTORA URBANA, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA VELARDE Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE JORGE ISAAC GONZÁLEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 407 DE 19 DE MARZO DE 1996, EMITIDA POR LA COMISIÓN DEL FONDO COMPLEMENTARIO DE PRESTACIONES SOCIALES Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Velarde y Asociados, actuando en nombre y representación de **JORGE ISAAC GONZÁLEZ**, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 407 de 19 de marzo de 1996, emitida por la Comisión del Fondo Complementario de Prestaciones Sociales de la Caja de Seguro Social, y para que se hagan otras declaraciones.

Al resolver sobre la admisibilidad de la demanda presentada, se observa que se ha acompañado a la demanda copia del memorial, con sello de recibido, del recurso de reconsideración promovido contra el acto administrativo originario impugnado (Fs. 2-17), y copia de las solicitudes de certificación, también con notas de recibo, en las que se solicita al funcionario demandado certifique que han transcurrido dos meses desde la interposición del recurso, sin que se haya emitido decisión alguna sobre el mismo (Fs. 32-34).

El ordinal 1° del artículo 22 de la Ley 33 de 1946 preceptúa que interpuesto alguno o algunos de los recursos señalados en el artículo 20 de la Ley 33 de 1946 (Reconsideración y/o Apelación), se entienden negados si no son resueltos en un plazo de dos meses. El artículo 46 de la Ley 135 de 1943 dispone que el Magistrado Sustanciador puede solicitar, antes de admitir la demanda, copia del acto impugnado o certificación sobre su publicación, en aquellos casos en los cuales el acto no ha sido publicado, o se ha negado la expedición de copia o la certificación sobre su publicación, siempre que se exprese este hecho en la demanda con indicación de la oficina donde se encuentra el original.

Con fundamento en las disposiciones antes mencionadas y en virtud de la falta de respuesta del funcionario demandado, la Sala dispone solicitar al Presidente de la Comisión del Fondo Complementario de Prestaciones Sociales de la Caja de Seguro Social, que certifique si ha sido o no resuelto el recurso de reconsideración promovido el 18 de abril de 1996 contra la Resolución N° 407 de 19 de abril de 1996, a fin de comprobar el agotamiento de la vía gubernativa.

En mérito de lo expuesto, la Magistrada Sustanciadora en representación de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, antes de admitir la demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 407 de 19 de marzo de 1996, emitida por la Comisión del Fondo Complementario de Prestaciones Sociales de la Caja de Seguro Social, DISPONE solicitar por Secretaría al Presidente de la Comisión del Fondo Complementario de Prestaciones Sociales de la Caja de Seguro Social, que en el término de cinco (5) días expida y envíe a la Sala: 1. Certificación en la cual conste si ha sido o no resuelto el recurso de reconsideración promovido el 18 de abril de 1996 contra la Resolución N° 407 de 19 de abril de 1996, emitida por la Comisión del Fondo Complementario de Prestaciones Sociales de la Caja de Seguro Social, por medio de la cual se niega la solicitud de jubilación de JORGE ISAAC GONZÁLEZ ESPINO, cédula 8-471-577 y seguro social N° 98-4784; y 2. Si el recurso de reconsideración ha sido resuelto expida y envíe copia autenticada del acto mediante el cual se resolvió dicho recurso y constancia de su notificación.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO AMÍLCAR E. BONILLA EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD PARIMAR, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA NOTA N° 4971-DINACOFI DE 18 DE DICIEMBRE DE 1995 SUSCRITA POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA

FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante Vista N° 289 de 28 de junio de 1996, la señora Procuradora de la Administración apeló de la Providencia fechada el 29 de abril 1996, a través de la cual se admitió la acción contencioso-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Amílcar Eliécer Bonilla Morales, en nombre y representación de **PARIMAR, S. A.**, para que se declare nula por ilegal la Nota N° 4971-DINACOFI de 18 de diciembre de 1995 suscrita por el Contralor General de la República, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

I. LOS FUNDAMENTOS DEL RECURSO

En opinión de la representante del Ministerio Público, la demanda no debió admitirse por los siguientes motivos:

a) La parte demandante carece de legitimidad para impugnar los actos que considera ilegales.

La señora Procuradora de la Administración manifestó que existen dos disposiciones legales una contenida en el Código Fiscal en el artículo 1165 y la otra en el artículo 77 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984 (Ley orgánica de la Contraloría General de la República) que establecen quienes pueden incoar un proceso ante la Sala Contenciosa Administrativa en los casos que como este, el señor Contralor General de la República imprueba un desembolso de fondos del Tesoro Público, ordenado por un acto público, a favor de una persona jurídica como lo es Parimar, S. A.

Señala que la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República establece nuevas disposiciones relacionadas con la materia por lo que considera que el artículo 1165 del Código Fiscal se debe estimar insubsistente por incompatibilidad con el artículo 77 de dicha ley, conforme el artículo 36 del Código Civil.

Con fundamento en lo anterior establece que lo que ha operado en esta ocasión es una derogación tácita del artículo 1165 del Código Fiscal y por lo tanto la disposición que debe aplicarse en el presente negocio es la estipulada por el artículo 77 de la Ley 32 de 1984, el cual suprime la facultad que tienen la persona agraviada acudir a la vía contencioso administrativa para hacer valer sus derecho tal y como lo establecía el segundo párrafo del artículo 1165 del Código Judicial, por lo que en este caso la empresa Parimar, S. A., carece de legitimidad para actuar ante la Sala Tercera.

b) El demandante impugna como acto principal un acto administrativo que no lo es.

Manifiesta la señora Procuradora que la parte demandante enderezó la demanda contenciosa administrativa contra la Nota N° 49-71-DINACOFI de 18 de diciembre de 1995 acto administrativo emitido por el señor Contralor de la República el cual según afirma no constituye el acto principal, el acto administrativo que la señora Procuradora señala como principal es el emitido por Nota N° 101-DINACOFI, de 11 de enero de 1996, que el demandante señala en su demanda como un acto confirmatorio del principal.

C) El poder presentado por la representación jurídica de la Empresa Parimar, S. A., constituye una copia simple.

Señala que el poder presentado por la parte actora con la demanda es una copia y no un original, por lo que el mismo no reúne los requisitos legales que contempla artículo 614 del Código Judicial.

II. LOS ARGUMENTOS DE LA OPOSITORA AL RECURSO

En su escrito de oposición al recurso de apelación, el apoderado judicial del demandante pidió la confirmación de la resolución impugnada y objetó dicho recurso en los siguientes términos:

1. En el presente negocio la empresa Parimar S. A., tal y como lo establece el artículo 1165 del Código Fiscal, los artículos 42, 42 b) y 43 b) de la Ley 35 de 1943 y el numeral 2° del artículo 203 de la Constitución Política, está debidamente facultada para incoar una acción contenciosa administrativa ante la Sala Tercera, para hacer valer sus derechos los cuales han sido afectados directamente por el acto administrativo emitido por el señor Contralor de la República.

2. La Nota N° 4971-DINACOFI de 18 de diciembre de 1995, si constituye el acto administrativo principal porque mediante esta nota dirigida al Director General de Ingresos por el señor Contralor General de la República imprueba el pago de la cuenta N° 5915 A a favor de Parimar, S. A., y niega el refrendo. Por otro lado indica que la Nota N° 101-DINACOFI de 11 de enero de 1996, constituye la respuesta del Contralor General a la Nota N° 201-974 de 28 de diciembre, por la cual el Director General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro insiste en el pago de la cuenta favor de Parimar, S.A por lo que representa un acto confirmatorio del principal.

3. Finalmente agrega que el día 18 de abril de 1996, presentó la demanda con los documentos y requisitos exigidos, los cuales fueron revisados tanto por la Secretaría de la Sala como por el personal del despacho del Magistrado Molino Mola y por el propio Magistrado sustanciador y en ningún momento advirtieron tal deficiencia, además señala que ha sido el apoderado judicial de Parimar, S. A., dentro del proceso administrativo por lo que tiene poder suscrito ante el Ministerio de Hacienda y Tesoro y la Contraloría de la República, situación que legítima su actuación tal y como lo señala el artículo 615 en concordancia con el 617 del Código Judicial.

III. DECISIÓN DEL RESTO DE LOS MAGISTRADOS DE LA SALA

Estima el resto de los Magistrados de la Sala que no le asiste razón a la señora Procuradora de la Administración en virtud de las siguientes consideraciones:

En general los actos administrativos son impugnables ante la vía contencioso administrativa tal y como lo señala el artículo 98 del Código Judicial, y los actos administrativos no impugnables en esta vía están expresamente señalados en la ley (artículo 17 de la Ley 33 de 1946). Por lo tanto la norma que ordena al Contralor General de la República consultar ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia el alcance de las normas procesales, no impide que la parte agraviada en el proceso administrativo impugne el acto en la vía contencioso administrativa. En el caso que nos ocupa, la empresa Parimar, S. A., se encuentra afectada por la improbación del pago de la cuenta a su favor por parte el Contralor General de la República, situación que le permite acudir, una vez agotada la vía gubernativa, ante la Sala Tercera para impugnar dicho acto.

La condición de apoderado judicial del demandante se ha comprobado con el poder original que, éste ha presentado en su escrito de oposición al recurso de apelación. Si bien este documento debió presentarse con la demanda, lo actuado sin poder suficiente puede ratificarse, de conformidad con el artículo 643 del Código Judicial.

Además aún cuando el poder presentado con la demanda, fue objetado dentro del término legal por haberse presentado únicamente fotocopia del mismo, este error no invalida lo actuado y fue corregido (artículo 617 del Código Judicial).

Finalmente observan los Magistrados de la Sala que de las constancias procesales se desprende que los tres actos administrativos, es decir la Nota N° 4971-DINACOFI de 18 de diciembre de 1995, la Nota N° 101-DINACOFI de 11 de enero de 1996 y la Resolución N° 53 de 12 de marzo de 1996, impugnados en la demanda contencioso administrativa, han sido emitidos por el señor Contralor, están íntimamente ligados entre sí, y responden a la misma situación jurídica que no

es otra que la negación al pago de una cuenta a favor de la empresa Parimar, S. A., por parte del señor Contralor General de la República.

Si bien la Nota N° 4971-DINACOFI de 18 de diciembre de 1995 a foja 9 del expediente no constituye el acto principal contra el cual se dirigió la demanda contencioso administrativa, en esta también se impugna el acto principal y su confirmación y se pide que como consecuencia de la declaratoria de ilegalidad de la Nota 101-DINACOFI, del 11 de enero de 1996 y de la Resolución 53 de 12 de marzo de 1996 se declare que Parimar, S. A., tiene derecho a que la citada cuenta le sea cancelada (cfr., párrafo D a foja 38).

Por las razones expuestas, el resto de los Magistrados de la Sala considera que la resolución apelada debe confirmarse.

De consiguiente, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Providencia de 29 de abril de 1996, mediante la cual se admitió la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción a que se refiere el presente negocio.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MIGUEL A. CÁRDENAS EN REPRESENTACIÓN DE ELSA MARIBEL GONZÁLEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL EL DECRETO DE PERSONAL N° 325 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 1995, DICTADO POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante Vista N° 227, de 24 de mayo de 1996, la Procuradora de la Administración interpuso recurso de apelación contra la providencia del 29 de abril de 1996, que admitió la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción presentada por el licenciado Miguel A. Cárdenas, en nombre y representación de Elsa Maribel González.

I. LOS FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La representante del Ministerio Público estima que la demanda no debió admitirse, porque la actora no acreditó el silencio administrativo y, por tanto, tampoco probó que agotó la vía gubernativa para recurrir ante la Sala Tercera lo cual es exigido por el artículo 36 de la Ley 135 de 1946, modificado por el artículo 22 de la Ley 33 de 1946. Agrega, que "un rápido examen de las piezas procesales aportadas por la parte demandante, nos demuestra que, en efecto, no existe constancia alguna de que el Ministerio de Educación emitiera su pronunciamiento, sobre el Recurso de Reconsideración interpuesto por la parte actora, oportunamente, contra el acto acusado. Siguiendo este mismo orden de ideas, tampoco se aprecia que el apoderado de la parte demandante presentara, mediante memorial al Ministerio de Educación, solicitud de Certificación si hubo o no contestación al Recurso de Reconsideración propuesto, con lo cual se agotaría la vía gubernativa, para poder ocurrir ante la Sala de lo Contencioso Administrativo." (Fs. 26-27).

II. DECISIÓN DEL RESTO DE LOS MAGISTRADOS DE LA SALA

Conforme a las constancias procesales, la parte actora interpuso su demanda contra el Decreto de Personal N° 325 de 27 de noviembre de 1995, emitido por conducto del Ministerio de Educación, por el cual se deja sin efecto el nombramiento de la señorita Elsa Maribel González, como secretaria II. del Instituto Coronel Segundo de Villarreal de la provincia de Los Santos.

En los hechos cuarto y quinto de su libelo, la demandante expresó que contra el Decreto de Personal N° 325 emitido por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Educación, interpuso y sustentó recurso de reconsideración el día 12 de enero de 1996 y que el mismo nunca fue resuelto por dicho Ministerio, con lo cual considera agotada la vía gubernativa en virtud del artículo 22 de la Ley N° 33 de 11 de septiembre de 1946. Sin embargo al examinar el expediente, el resto de los Magistrados de la Sala observa que, en efecto, la demandante no acreditó el silencio administrativo mediante una certificación expedida por algún funcionario competente del Ministerio de Educación, en la que constara que dicho recurso de reconsideración no fue resuelto dentro de los dos meses siguientes a su presentación o copia del escrito en que se pidió la certificación.

La debida comprobación del silencio administrativo es de vital importancia porque, como expresó la Sala en su fallo del 3 de febrero de 1995, "podría ocurrir que el silencio administrativo no se ha producido porque existe un fallo revocatorio o confirmatorio del acto impugnado y que este hecho no sea de conocimiento del actor, quien no se ha cerciorado de si el recurso ha sido o no resuelto, pidiendo una certificación de lo ocurrido mediante memorial. En el supuesto de que el hecho hubiera sido revocado el objeto procesal ya no existiría y si hubiera sido confirmado, no existiría el silencio administrativo."

La Sala considera que le asiste la razón a la señora Procuradora ya que el agotamiento de la vía gubernativa es requisito esencial para ocurrir a la jurisdicción contencioso administrativa, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley N° 33 de 1943, en concordancia con el numeral 1° del artículo 22 de la misma Ley. Como el cumplimiento de dicho requisito no se probó, no es posible darle curso a la mencionada demanda tal y como lo ordena el artículo 31 de la misma excerta legal.

De consiguiente, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, previa revocatoria de la providencia de 29 de abril de 1996, dictada por el Honorable Magistrado sustanciador, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa interpuesta por el licenciado Miguel A. Cárdenas, en nombre y representación de ELSA MARIBEL GONZÁLEZ, contra el Decreto de Personal N° 325 de 27 de noviembre de 1995, expedido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Educación.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS RAÚL TRUJILLO SAGEL, EN REPRESENTACIÓN DE RAÚL TRUJILLO MIRANDA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 12862 DE 30 DE AGOSTO DE 1995, EXPEDIDA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES DE PENSIÓN DE VEJEZ ANTICIPADA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado CARLOS RAÚL TRUJILLO SAGEL, actuando en representación de

RAÚL TRUJILLO MIRANDA, ha promovido proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Caja de Seguro Social.

I. LA PRETENSIÓN Y SU FUNDAMENTO

En la demanda se formula pretensión consistente en una petición dirigida a la Sala Tercera de la Corte Suprema para que ésta declare que es nula por ilegal la Resolución N° 12862 de 30 de agosto de 1995 dictada por la Comisión de Prestaciones de Pensión de Vejez Anticipada de la Caja de Seguro Social, por medio de la cual no accede a la solicitud formulada por el señor RAÚL TRUJILLO MIRANDA para que se le conceda una pensión de vejez con base a todas las cotizaciones o cuotas aportadas, incluyendo el período en que laboró como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y, declarada esa nulidad, se condene a la Caja de Seguro Social a conceder la pensión en los términos solicitados por el asegurado.

El demandante fundamenta su pretensión en base a los siguientes hechos: el señor RAÚL TRUJILLO MIRANDA, quien aparece inscrito en la CAJA DE SEGURO SOCIAL como asegurado número 23-3996, solicitó a dicha institución el día 3 de abril de 1986 que se le concediera una pensión de vejez. En este sentido, mediante Resolución N° C. de P. 9849, expedida por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social el día 30 de julio de 1986, se reconoció a RAÚL TRUJILLO MIRANDA una pensión de vejez anticipada por la suma mensual de B/.125.00. Agrega el demandante que el día 8 de enero de 1990, el asegurado RAÚL TRUJILLO MIRANDA comunicó a la CAJA DE SEGURO SOCIAL que a partir del día 3 de enero de ese año había tomado posesión del cargo de MAGISTRADO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, con el propósito que la institución, dada su condición de pensionado, tomara las providencias correspondientes. En base a los trámites administrativos de la institución, se ordenó al departamento correspondiente, mediante Memorando de 31 de enero de 1990, "confeccionar el movimiento de suspensión de la pensión de Vejez Anticipada de acuerdo a nota del pensionado". Señala el apoderado judicial del demandado que desde el momento en que el asegurado RAÚL TRUJILLO MIRANDA hizo su comunicación a la CAJA DE SEGURO SOCIAL no recibió ninguna suma de dinero correspondiente a la pensión y la Supervisora Institucional de Pensiones y Subsidios comunicó a la persona encargada, Elsa de Gracia, retener las sumas correspondientes para reintegrarlas a los fondos de la institución, en atención a que la suspensión de la pensión se acordó para la segunda quincena de 1990.

Señala el apoderado judicial del demandante que el día 7 de julio de 1995 el asegurado RAÚL TRUJILLO MIRANDA solicitó al Departamento de Pensiones y Subsidios que se le concediera una pensión de vejez con fondo complementario, en donde se le advertía de la suspensión de la pensión de vejez anticipada y de las nuevas cotizaciones realizadas con base al salario de B/.3,000.00 mensuales durante los años 1990 a 1995. También señala que para los meses de octubre, noviembre y diciembre se cotizó en base al salario de B/.6,000.00, suma esta que le fue pagada, más un mes de vacaciones.

Por último, señala el demandante, su solicitud fue negada mediante Resolución N° 12862 de 30 de agosto de 1995, la cual señala que la decisión en ella expresada fue adoptada en reunión de 27 de septiembre de 1995, fecha posterior a la expedición de la resolución impugnada. La misma fue apelada por la parte actora con el propósito de que se mantuviera parte de la resolución y se ordenara acceder a la pensión de vejez revisando las aportaciones hechas en los últimos años por el asegurado.

El demandante estima que los actos administrativos por él impugnados han violado el aparte E del artículo 2, los artículos 53 A), 54, 73 y 83 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social.

La parte actora sostiene que la resolución impugnada viola directamente, por omisión, el aparte E del artículo 2 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social que a la letra dice:

"Quedan sujetos al régimen obligatorio del Seguro Social:
...
e) Los pensionados de la Caja y los jubilados del Estado, en las

condiciones que determine esta Ley."

La violación consiste, a juicio del demandante, en que si los pensionados de la Caja de Seguro Social están sujetos al régimen obligatorio de la Caja de Seguro Social, también lo están para recibir de ésta las prestaciones que contempla la Ley Orgánica, la cual por ningún lado prohíbe que el pensionado por vejez, quien cotiza obligatoriamente, pueda aumentar mediante la revisión correspondiente su pensión conforme al sistema de cálculos que contiene la misma. Agrega el demandante que la cotización obligatoria contenida en el artículo 2 literal e) señalado, no tiene como razón otorgarle a éste otros beneficios distintos a la pensión, ya que el pensionado, por el hecho de serlo, goza de esos beneficios sin necesidad de aportar nuevas cuotas. Y en este sentido, señala, la razón de esa nueva aportación es el mejorar las prestaciones relativas a la invalidez y la vejez.

También se señala violado el artículo 83 de la Ley Orgánica, según el cual:

> "Artículo 83: Las prestaciones reconocidas por el presente Decreto-Ley y sus reglamentos, son de orden público y de interés social, por consiguiente es nula toda disposición u orden que les sean contrarias. Los derechos y beneficios del Seguro Social son de carácter irrenunciable y personalísimo, pero estarán sujetos a los plazos de prescripción que se establezcan en el presente Decreto-Ley."

Esta disposición ha sido violentada, a juicio del demandante, por interpretación errónea al darle un alcance limitativo contrario al artículo 83 arriba citado pues si bien los derechos y beneficios del Seguro Social son irrenunciables y personalísimos, ello no implica que al concederse la pensión de vejez anticipada, la misma no puede ser revisable en favor del asegurado cuando este posteriormente a dicha pensión, ha seguido cotizando obligatoriamente. Añade el demandante que una interpretación limitativa de la norma en estudio la violenta al negar un ajuste de la pensión con fundamento a las nuevas aportaciones hechas por el asegurado pensionado.

Se quebranta, a su vez, el artículo 53-A de la Ley Orgánica del Seguro Social que señala lo siguiente:

> "Artículo 53 A): El monto de las pensiones mensuales de vejez e invalidez se calculará así:
>
> a) Sesenta por ciento (60%) del sueldo base mensual.
>
> b) Uno un cuarto por ciento (1.25%) del sueldo base mensual por cada doce (12) meses completos de cotización que el asegurado tuviese en exceso de las ciento ochenta (180) cotizaciones, antes de cumplir con los requisitos para la pensión de vejez.
>
> c) El asegurado que cumpla con el requisito de edad y tenga las cuotas requeridas para tener derecho a la pensión de vejez, y continúe trabajando sin haberse pensionado, se le reconocerá dos por ciento (2%) adicional del salario base por cada doce (12) meses de cotizaciones pagadas después de cumplir con la edad normal de retiro."

Esta norma ha sido violada, a juicio del demandante, al pretender la resolución mantener el monto de la pensión sin tomar en cuenta las nuevas aportaciones, alejándose totalmente del derecho que consagra el artículo 53-A para determinar su monto.

También se alega infringido el artículo 54 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social que dice:

> "Artículo 54. Se tomará como salario base mensual para el cómputo de las pensiones, el promedio de los salarios correspondientes a los siete (7) mejores años de cotizaciones acreditadas en la cuenta

individual.

Si tratándose de pensión de invalidez el asegurado no llegare a tener siete (7) años de cotizaciones, se tomará el promedio de sueldos correspondientes al los meses de cotizaciones que tuviese acreditadas.

Para los efectos de método de cálculo se aplicará el reglamento correspondiente, de acuerdo a las recomendaciones del Consejo Técnico."

En opinión del demandante, la norma citada fue violada directamente, por omisión, ya que para determinar el salario base mensual se mantiene lo establecido en la pensión anticipada y no permite que se revise dicha pensión mensual incluyendo los nuevos salarios sobre los cuales se cotizó posteriormente la pensión.

Por último, se alega como infringido el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, que a la letra dice:

"Artículo 73. Las prestaciones en dinero concedidas por la Caja podrán ser revisadas por causa de errores de cálculo, falta en las declaraciones, alteración en los datos pertinentes, falsificación de documentos o por cualquier error u omisión en el otorgamiento de tales prestaciones. Cuando de la revisión resultaren reducidas tales prestaciones o revocadas las ya concedidas, los beneficiarios no estarán obligados a devolver las sumas recibidas en exceso, a menos que hubieran sido pagadas a base de documentos, declaraciones o reclamos fraudulentos o falsos. En este caso la Caja exigirá la devolución de las cantidades ilícitamente percibidas, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar."

Esta norma se viola directamente, por omisión, al no tomarse en cuenta, por no existir en el momento en que se otorgó la pensión anticipada, las nuevas cotizaciones. Al darse estas nuevas cotizaciones la Caja de Seguro Social está obligada a revisar la prestación en dinero concedida incluyendo estas cotizaciones que fueron omitidas y cuya omisión perjudica al pensionado.

II. EL INFORME DE CONDUCTA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL

El informe de conducta expedido por la Caja de Seguro Social el 4 de marzo de 1995 señala fundamentalmente que la pensión de vejez solicitada por el señor RAÚL TRUJILLO MIRANDA el 3 de abril de 1986 y reconocida por el seguro social mediante resolución N° C. de P. 9849 de 30 de julio de 1986, con fundamento en el artículo 54-A del Decreto N° 14 de 27 de agosto de 1954, por la suma de B/.125.11 entró en vigencia a partir del 3 de abril de 1986.

Agrega dicho informe que con fecha de 10 de enero de 1990 se recibe nota del señor RAÚL TRUJILLO MIRANDA, mediante la cual comunica a la Caja de Seguro Social que a partir del 3 de enero del mismo año tomó posesión como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente señala el informe antes aludido que "en forma errada y desatendiendo el contenido de la comunicación del señor RAÚL TRUJILLO MIRANDA, la Caja de Seguro Social procedió a suspender de manera ilegal el pago de la pensión de vejez anticipada."

Posteriormente, indica el informe, el 7 de julio de 1995 el señor RAÚL TRUJILLO MIRANDA formaliza nueva solicitud a fin de que se reconozca en su favor una pensión de vejez normal. Y es en este momento, según el informe, que "la Caja de Seguro Social se percata del error cometido al suspender el pago de la pensión de vejez anticipada, procediendo a actualizar el mismo durante el período comprendido del 16 de enero de 1990 al 15 de agosto de 1995, por la suma total de Seis Mil Quinientos Cinco Balboas con Setenta y Dos Centésimos (B/.6,505.72)."

En base a lo antes expuesto, la Comisión de Prestaciones por medio de la Resolución N° 12862 de 30 de agosto de 1995, resolvió no acceder a la solicitud formulada por el señor RAÚL TRUJILLO MIRANDA, asegurado N° 23-3996, en vista de

que le fue concedida una pensión de vejez anticipada que entró en vigencia a partir del 3 de abril de 1986, derecho este que al tenor de lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley Orgánica es de carácter irrenunciable. Dicha resolución, indica el informe, fue notificada al afectado el día 6 de noviembre de 1995. La misma fue apelada por el señor Trujillo Miranda.

Añade el informe que el señor RAÚL TRUJILLO MIRANDA se acogió a la vejez anticipada regulada en el artículo 54-A de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, y que a la luz de dicha norma es un derecho irrenunciable y que cualquier circunstancia posterior a la vigencia de esta situación jurídica, como lo puede ser que el pensionado de manera anticipada vuelva a cotizar por ser sujeto de una relación de trabajo, no puede afectar la referida situación.

Finalmente, señala el informe, la nota fechada 10 de enero de 1990 a través de la cual el señor RAÚL TRUJILLO informa a la Caja de Seguro Social que tomó posesión del cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, no tiene efecto legal alguno por el carácter irrenunciable que el artículo 83 de la ley orgánica de dicha institución le impone a la prestación de vejez anticipada reconocida en su favor. Ello no impide que una persona que disfruta de una pensión de vejez anticipada pueda trabajar por lo que la información suministrada por el señor TRUJILLO MIRANDA es irrelevante y carece de todo fundamento.

III. LA POSTURA DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

La Procuradora de la Administración contestó la demanda mediante la Vista N° 193 de 8 de mayo de 1996. En esa vista la Procuradora alega que no se dieron las violaciones aducidas por la parte demandante. La Procuradora estima que los nuevos aportes realizados al Fondo Complementario (2%) como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pueden ser en todo caso, reconocidas al momento de cumplir con los requisitos esenciales para recibir este beneficio. Tampoco considera viable una supuesta revisión a la pensión de vejez anticipada otorgada por la Caja de Seguro Social sobre la base de un salario de B/.3,000.00 mensuales, por cuanto a su juicio el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social indica expresamente los supuestos en que procede la revisión de las prestaciones concedidas por esta entidad de seguridad social y en ninguna de ellas se prevé el supuesto de mejorar las prestaciones por haber hecho otras cotizaciones como asegurado pensionado, o que por haber dado nuevas aportaciones a la Caja el pensionado por vejez anticipada pueda aspirar a una Pensión de Vejez Normal.

Agrega la Procuradora que el régimen de seguridad social contempla dos modalidades de pensiones de las cuales el demandante optó por el pensión de vejez anticipada, por lo que sólo tiene derecho a los beneficios que confiere la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social y la ley que reglamenta el fondo complementario. En el caso en estudio, señala la Procuradora, el demandante ya obtuvo una de las prestaciones que otorga la Caja, que es la pensión de vejez anticipada, la cual es irrenunciable y personalísima.

Por último, estima esta funcionaria, aunque un trabajador haga aportes a la Caja, luego de su jubilación, no pueden adicionarse estos aportes a los anteriores, salvo autorización legal para ello para que sirva de capital acumulado en su beneficio pero como la ley no dice nada al respecto, debe mantenerse en el mismo plan restrictivo que aparece en la Ley de Seguridad Social. No considera, pues, que la Caja tiene obligatoriamente que revisar sus cotizaciones para que éstas nuevas cuotas sean tomadas en cuenta para aumentar su pensión de vejez anticipada o para que se le otorgue una pensión de vejez normal.

IV. LA LEY Y LA JURISPRUDENCIA DE LA SALA SOBRE EL DERECHO DEL ASEGURADO A ESCOGER LA PENSIÓN MÁS BENEFICIOSA; ERROR EN EL CÁLCULO DE LA PENSIÓN Y PRINCIPIO DE BUENA FE.

Una vez examinada la demanda en cuestión la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia pasa a resolver lo pertinente previa una serie de necesarias consideraciones.

Se trata, pues, de un supuesto de hecho no previsto en las leyes que regulan la Caja de Seguro Social, por lo que le corresponde a esta Superioridad el determinar si le asiste el derecho a un jubilado mediante pensión de vejez anticipada que frente a una nueva relación laboral solicita y se le acepta la suspensión de dicha pensión, y que vuelve a cotizar nuevas cuotas -que son aceptadas y cobradas por la Caja de Seguro Social- el acceder al derecho de pensión normal de vejez y a que se le revise y tome en consideración las nuevas aportaciones, para el cálculo de su pensión de vejez normal.

El Decreto-Ley 14 de 1954, que es la Ley Orgánica de la CAJA DE SEGURO SOCIAL, regulaba en su artículo 54-A la pensión de vejez anticipada para los asegurados que tuviesen acreditados por lo menos ciento ochenta (180) meses de cotizaciones y siempre que hubiesen cumplido cincuenta y cinco (55) años los hombres y cincuenta (50) años las mujeres. Se establecía igualmente el procedimiento para el cálculo del monto de dicha pensión a la cual se le aplicaba un factor de reducción por la obtención anticipada de dicha pensión.

El régimen de pensión de vejez anticipada fue revisado mediante el artículo 41 de la Ley 30 de 26 de diciembre de 1991, por la cual se modificó el Decreto Ley N° 14 de 27 de agosto de 1954, Orgánica de la Caja de Seguro Social. En dicho artículo se dispone mantener temporalmente el régimen de pensiones de vejez anticipada hasta el 1° de enero de 1993, para aquellos asegurados que tuviesen acreditadas, por lo menos, doscientos cuarenta (240) meses de cotizaciones y se modificaron los factores de reducción que se aplican al monto de la pensión de vejez que le hubieran correspondido a la edad normal.

Por otro lado, se hace necesario destacar que con fundamento en el acápite 1° del artículo 1° del Decreto de Gabinete N° 17 de 22 de enero de 1969 se prohibía terminantemente el nombramiento o contratación para prestar servicios en cargos públicos del Estado, entidades autónomas o semiautónomas o en los Municipios, de toda persona que gozara de jubilación o estuviese remunerado como empleado supernumerario o que gozara de pensión de vejez o invalidez. Dicha norma fue modificada posteriormente por el artículo 1° del Decreto de Gabinete N° 294 de 4 de septiembre de 1969,y sucesivamente por el artículo 1° del Decreto N° 375 de 3 de diciembre de 1969, por el artículo 1° del Decreto de Gabinete N° 65 de 31 de marzo de 1970, por el artículo 1° del Decreto de Gabinete N° 109 de 24 de junio de 1970 y adicionalmente por el artículo 2° del Decreto de Gabinete N° 334 de 21 de octubre de 1970, modificado por el Decreto de Gabinete N° 85 de 25 de marzo de 1971 y por la Ley N° 76 de 6 de septiembre de 1974. Cabe agregar que dicha norma y sus modificaciones fueron declaradas inconstitucionales por el Pleno de esta Corporación mediante resolución fechada el día 5 de septiembre de 1984.

Si bien a partir del 5 de septiembre de 1984 se permitió a los jubilados o pensionados volver a trabajar, las leyes que modifican la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social no contemplan este supuesto a fin de determinar qué sucede en el caso del jubilado a quien se le suspende efectivamente su pensión y a quien se le vuelve a recibir nuevos aportes, los cuales según dicha ley son obligatorios, aunque, como se deja dicho, la Ley si le otorga al asegurado el derecho a escoger la prestación más beneficiosa.

Tenemos pues que, hasta fines de 1992, la Caja de Seguro Social permitía al jubilado por Ley Especial acogerse al beneficio de la pensión de vejez normal al momento de reunir los requisitos que la misma exige, si la misma le resultaba más beneficiosa. En este sentido, la sola manifestación mediante nota del deseo de acogerse a la pensión más ventajosa bastaba para que se eliminara la anterior en planilla y se le adjudicara la que más le beneficiaba. Fue a partir de 1993 que la Caja de Seguro Social no permitió a los jubilados escoger la pensión que más les beneficiara, de modo pues, que debía el jubilado quedarse con la que originalmente se le había otorgado. Ello a pesar de que el artículo 22 de la Ley 15 de 1975 por la cual se modifica la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social prevé que en caso de que un asegurado tenga derecho a recibir más de una prestación de la Caja de Seguro Social, si éstas son incompatibles, puede escoger la más beneficiosa.

Ha dicho la Sala con anterioridad que pagar al beneficiario la pensión más

beneficiosa a que tiene derecho, cuando ésta se la otorga la Caja de Seguro Social, además de ser una solución que prevé la Ley, tal como se ha expuesto, la misma se compadece con los fines sociales de ambas instituciones. Así tenemos, pues, que en dos sentencias expedida por la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema el día 29 de septiembre de 1995 se señaló lo siguiente:

> "El Decreto-Ley 14 de 1954, que es Ley Orgánica de la CAJA DE SEGURO SOCIAL, fue modificado por la Ley 15 de 1975, la cual en el artículo 22 antes transcrito prevé que en caso de que un asegurado tenga derecho a recibir más de una prestación de la CAJA DE SEGURO SOCIAL, si éstas son incompatibles, puede escoger la más beneficiosa.
>
> Por tanto, estima la Sala que al demandante le asiste la razón cuando alega que el acto administrativo impugnado viola directamente por falta de aplicación el mencionado artículo 22 de la Ley 15 de 1975 por la cual se modifica la Ley Orgánica de la CAJA DE SEGURO SOCIAL el cual debe aplicarse en este caso, por mandato expreso del artículo 30 de la Ley 16 de 1975.
>
> En principio las jubilaciones especiales otorgan el derecho de recibir en dicho concepto el último salario completo. Y el fondo complementario fue creado para pagar a los servidores públicos, prestaciones complementarias por las contingencias de vejez, invalidez o incapacidad, o sea para beneficiar a los servidores públicos con una pensión más cuantiosa que las que otorga la Caja de Seguro Social. Por tanto, pagar al beneficiario la pensión más beneficiosa a que tiene derecho, además de ser una solución ajustada a la Ley, tal como se ha expuesto, la misma se compadece con los fines sociales de ambas instituciones."
>
> "El supuesto de hecho no previsto, al cual ya nos hemos referido, es el que se da cuando una persona es beneficiaria de una jubilación especial otorgada por el FONDO COMPLEMENTARIO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS y adquiere el derecho de recibir una pensión de vejez más beneficiosa de la CAJA DE SEGURO SOCIAL ya que no se establece en estos casos qué derecho tiene el beneficiario de ambas prestaciones.
>
> El Decreto-Ley 14 de 1954, que es la Ley Orgánica de la CAJA DE SEGURO SOCIAL, fue modificada por la Ley 15 de 1975, la cual en el artículo 22 antes transcrito prevé que en caso de que un asegurado tenga derecho a recibir más de una prestación en dinero de la CAJA DE SEGURO SOCIAL, si éstas son incompatibles, puede escoger la más beneficiosa.
> ...
> En principio las jubilaciones especiales otorgan el derecho a recibir en dicho concepto el últimos salario completo. Y el Fondo Complementario de las Prestaciones Sociales de los Servidores Públicos fue creado para complementarles las prestaciones por las contingencias de vejez, invalidez o incapacidad, o sea para otorgar a los servidores públicos pensiones más beneficiosas que las que le otorga la Caja de Seguro Social. Por tanto, pagar al beneficiario la pensión más beneficiosa a que tiene derecho, cuando esta se la otorga la Caja de Seguro Social, además de ser una solución ajustada a la Ley, tal como se ha expuesto, la misma se compadece con los fines sociales de ambas instituciones."

El informe de conducta remitido por las autoridades de la Caja de Seguro Social denota una irregularidad y una inconsistencia jurídica en el procedimiento seguido para resolver la petición del señor TRUJILLO MIRANDA en torno a las prestaciones a las que tiene derecho. En primer lugar, le conceden una pensión de vejez anticipada que le fue suspendida una vez el demandante inició sus labores como Magistrado de la Corte Suprema. Le suspendieron la pensión de vejez anticipada y le aceptaron las nuevas aportaciones o cuotas de seguro social durante un período de aproximadamente 6 años para luego afirmar que la suspensión

de la pensión de vejez anticipada fue ilegal a fin de no reconocer ni tomar en consideración las nuevas cuotas o aportaciones que por todo ese período (enero 1990-diciembre 1995) le fueron aceptadas sin ningún problema. Ello sin mencionar que la pensión de vejez anticipada fue eliminada y que dicho régimen se mantuvo temporalmente hasta el 1° de enero de 1993, más en la actualidad la misma ya no está contemplada dentro de nuestro régimen de seguridad social.

A juicio de la Sala, el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social permite la revisión del monto de las prestaciones en dinero concedidas por la Caja de Seguro Social entre otras cosas por errores de cálculo, falta en las declaraciones, alteración en los datos pertinentes, falsificación de los documentos o por cualquier error u omisión en el otorgamiento de tales prestaciones. En el presente caso, estamos ante un error de cálculo basado en una interpretación errónea de la Caja, por lo cual la Sala considera que se impone la revisión de las prestaciones en dinero concedidas por la Caja al señor TRUJILLO MIRANDA.

La Sala considera que no existe fundamento jurídico alguno que sustente el procedimiento mediante el cual la Caja de Seguro Social no permite a sus asegurados acogerse a la jubilación que más les favorece. Más aún, ante el vacío normativo, la Sala considera que la Caja de Seguro Social está obligada a pagar pensiones de vejez normal a favor de aquellos servidores públicos jubilados que han seguido cotizando con posterioridad a una jubilación especial, si esas nuevas aportaciones originan mejores prestaciones en dinero.

Y es que, en el presente caso, es necesario reiterar la vigencia del principio de buena fe en el Derecho Administrativo. En este sentido, se ha manifestado la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) de la Corte Suprema, al señalar en sentencia fechada el 13 de junio de 1991, lo siguiente:

> "Por último, la Sala debe enfatizar en este caso la vigencia del principio de buena fe en el Derecho Administrativo, que vincula a la Autoridad Portuaria Nacional en las relaciones con los servidores públicos que en ella laboran. La doctrina y jurisprudencia comparadas aceptan que dicho principio es aplicable al Derecho Administrativo. Así, el tratadista uruguayo Sayagués afirmaba que "el principio general de la buena fe debe regir en todas las relaciones jurídicas" (Tratado de Derecho Administrativo, Montevideo, Tomo I, 1959, pág. 148) y el catedrático español Jesús González Pérez le ha dedicado una obra reciente en que expone sus aplicaciones en este campo (El Principio General de la Buena Fe en el Derecho Administrativo, 2 a). edición, Ed. Civitas, Madrid, 1989, 199 páginas). En nuestro país el artículo 1109 del Código Civil establece que los contratos obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado sino también a todas las consecuencias que sean conformes a la buena fe, norma esta que es aplicable a los contratos o convenios celebrados por la Administración pública. Sería contrario a la buena fe que los servidores públicos de la Autoridad Portuaria Nacional hayan prestado servicios con expectativas razonables de recibir ciertas contraprestaciones pactadas, que no contrarían la ley y que, luego de recibir los servicios, la Autoridad Portuaria Nacional no pague esta contraprestación (ayuda económica en caso de desastre), alegando extemporáneamente, después de beneficiarse con la prestación de estos servicios, que por no estar autorizada expresamente por una ley no podía pagar lo convenido en esa cláusula que no es esencial a una convención colectiva de trabajo."

En el presente caso, el principio de la buena fe debe aplicarse en el sentido de que el asegurado cotiza confiado en que posteriormente esas cotizaciones le revertirán en forma de una pensión de vejez. A nuestro juicio se violenta el principio de la buena fe que debe regir en las relaciones del Estado con sus administrados, pues se le ha creado al asegurado en cuestión una razonable esperanza de poder recibir una pensión de vejez normal, al haberle suspendido su pensión de vejez anticipada y recibirle nuevos aportes, para posteriormente aseverar que el asegurado no tiene derecho a recibir una pensión

de vejez normal ni a que se le revisen el cálculo de su pensión tomando en cuenta todos los aportes recibidos por la Caja de Seguro Social. Es contrario a la buena fe que el asegurado TRUJILLO MIRANDA cotizara nuevamente en la Caja de Seguro Social, con la expectativa razonable de que dichos nuevos aportes mejorarían la prestación anterior y que, luego de recibir dichos nuevos aportes, la Caja de Seguro Social le niegue una pensión de vejez normal por no estar esta situación expresamente contemplada en las normas que regulan la Caja de Seguro Social, sin tomar en consideración que el artículo 22 de la Ley N° 15 de 1975 antes mencionada prevé la posibilidad de que un asegurado tenga derecho a recibir más de una prestación, en cuyo caso puede escoger la más beneficiosa.

Así pues, el tratadista Jesús González Pérez señala que "la aplicación del principio de la buena fe permitirá al administrado recobrar la confianza en que la Administración no va a exigirle más de lo que estrictamente sea necesario para la realización de los fines públicos que en cada caso concreto persiga. Y en que no le va a ser exigido en el lugar, en el momento ni en la forma más inadecuados, en atención a sus circunstancias personales y sociales, y a las propias necesidades públicas. Confianza, legítima confianza de que no se le va a imponer una prestación cuando sólo superando dificultades extraordinarias podrá ser cumplida, ni en un lugar en que, razonablemente, no cabía esperar. Ni antes de que lo exijan los intereses públicos, ni cuando ya no era concebible el ejercicio de la potestad administrativa. Confianza, en fin, en que en el procedimiento para dictar el acto que dará lugar a las relaciones entre Administración y Administrado, no va a adoptar una conducta confusa y equívoca que más tarde permita eludir o tergiversar sus obligaciones." (**GONZÁLEZ PÉREZ, JESÚS.** El Principio General de la Buena Fe en el Derecho Administrativo. Editorial Civitas, S. A. Segunda Edición. Madrid, España. 1989. pág. 69.

Como de la confrontación del acto impugnado con el artículo 73 ha resultado la ilegalidad del mismo, se estima innecesario confrontarlo con otras normas cuya violación se invoca.

Vale la pena subrayar que el demandante tiene razón, además, porque no percibió la pensión anticipada entre 1990 y 1995 y la Caja aceptó esa suspensión y recibió las cuotas sobre el nuevo salario. Contraría la buena fe que ahora la Caja, que aceptó la suspensión de la pensión, venga contra su propio acto y lo invoque como ilegal para no acceder al pago de la nueva pensión. Ir contra los actos propios (venire contra factum propium) es contrario al principio de buena fe (Franz Wieacker, El Principio General de la buena fe, Edit. Givitas, Madrid, 1986, pág. 21). Según ese autor "con ello se quiere decir que el acto de ejercicio de ... una facultad es inadmisible cuando con él la persona se pone en contradicción con el sentido que objetivamente y de acuerdo con la buena fe había que dar a su conducta anterior."

El actor también solicita en su demanda que como consecuencia de la declaratoria de ilegalidad de los actos impugnados se ordene a la Caja de Seguro Social que pague la pensión de vejez a RAÚL TRUJILLO MIRANDA con base a todas las cotizaciones o cuotas aportadas, incluyendo el período en que laboró como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y se le conceda la pensión de vejez normal por ser la más beneficiosa.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que es ILEGAL la Resolución N° 12862 de 30 de agosto de 1995, expedida por la Comisión de Prestaciones de Pensión de Vejez Anticipada de la Caja de Seguro Social y en consecuencia, CONDENA a la Caja de Seguro Social a pagar al señor RAÚL TRUJILLO MIRANDA una pensión de vejez normal con base en el promedio de salarios correspondientes a los siete (7) mejores años de cotización acreditadas en su cuenta individual (artículo 54 del Decreto Ley 14 de 1954), incluyendo el período que laboró como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia entre 1990 y 1995, entendiéndose que la Caja no debe descontinuar los pagos que debe efectuar desde el 1° de enero de 1996 en concepto de pensión anticipada hasta tanto revise el monto de la nueva pensión y la empiece a pagar a partir del 1° de enero de 1996.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LADO. EMILIO DE LEÓN, EN REPRESENTACIÓN DE EFRAÍN STAFF SÁNCHEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 022 DE 7 DE NOVIEMBRE DE 1994, EXPEDIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURO AGROPECUARIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Emilio De León, en representación de **EFRAÍN STAFF SÁNCHEZ,** ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo por ilegal el Resuelto N° 022 de 7 de noviembre de 1994, expedido por el Director General del Instituto de Seguro Agropecuario, y para que se hagan otras declaraciones.

PRETENSIONES DE LA PARTE ACTORA

Con la acción encausada el recurrente pretende que esta Superioridad declare la ilegalidad del acto administrativo contenido en la Resolución enunciada en el párrafo anterior, mediante el cual se le destituyó del cargo que ocupaba en el Instituto de Seguro Agropecuario como Ingeniero Agrónomo, con el consiguiente reintegro a su posición, y se ordene a dicha entidad, que pague su indemnización por renuncia en el programa de retiro voluntario.

HECHOS Y OMISIONES FUNDAMENTALES DE LA PRESENTE ACCIÓN

El recurrente basa sus pretensiones en los siguientes hechos:

"**PRIMERO:** Mediante el resuelto de Personal N° 007-91 del 7 de febrero de 1991, expedido por el Director General del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), el Ing. EFRAÍN STAFF SÁNCHEZ fue nombrado, en dicha institución, en el cargo de Ingeniero Agrícola II.

SEGUNDO: Según nota del 18 de febrero de 1993, número DG-238-93, el entonces Director del ISA agradece y felicita al Ing. STAFF por la labor que realizó como encargado de la Dirección Regional de Los Santos, durante el mes de vacaciones del titular de dicho despacho. Asimismo le comunicó que "Todas las consideraciones y recomendaciones hechas por usted serán tomadas en cuenta para tratar de hacer la prestación de servicios del Instituto de Seguro Agropecuario más eficiente en la Regional de Los Santos".

TERCERO: Seguidamente, de acuerdo al Resuelto N° 07 del 1 de junio de 1993, el Ing. STAFF fue nombrado en el ISA en el cargo de Ingeniero Agrónomo I, con un sueldo mensual de B/.1,150.00., a partir de 1° de enero de 1993.

CUARTO: La ley 32 de 1991, "Por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 1992", en su artículo 170, dispuso que "El Órgano Ejecutivo adoptará y reglamentará un Programa de Retiro Voluntario para lo cual creará un Fondo que permitirá cubrir una indemnización equivalente a doce (12) meses de salario a aquellos funcionarios que se acojan al mismo ..."

QUINTO: Luego, a través del Decreto Ejecutivo N° 112 de 22 de

diciembre de 1992, se adoptó y reglamentó el Programa de Retiro Voluntario del Servidor Público. En el artículo noveno de dicho Decreto Ejecutivo se informa que "El servidor público interesado en acogerse al Programa de retiro Voluntario deberá llenar una solicitud en formulario especial que le será proporcionado por la institución correspondiente ... La decisión del servidor público de presentar su renuncia será libre y personal"
...
OCTAVO: El día 29 de diciembre de 1993, el Ing. STAFF presentó ante el ISA la Solicitud de Retiro Voluntario N° 390-0001, acogiéndose al supremencionado programa.

NOVENO: A continuación se aprueba la Ley 32 de 31 de diciembre de 1993, "Por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 1994", en cuyo artículo 131 se contempla el presupuesto del ISA y en su artículo 221 se mantiene el Programa de Retiros Voluntarios.

DÉCIMO PRIMERO: Mediante el Resuelto de Retiro Voluntario N° 005-94 del 16 de marzo de 1994, expedido por el Director General del ISA, se le aceptó al Ing. STAFF su renuncia, por retiro voluntario, del cargo de Ingeniero Agrónomo I que ocupaba en dicha institución; pero no se le llega a pagar la indemnización correspondiente, por lo que siguió laborando en espera de que se la hicieran efectiva.

DÉCIMO QUINTO: ... a través del Decreto Ejecutivo N° 76 de 1 de noviembre de 1994, se prórroga la suspensión del Programa de Retiro Voluntario a partir de dicha fecha; exceptuándose "aquellas solicitudes de los funcionarios que al suspenderse el programa, habían presentado renuncia a sus respectivos cargos, antes de haber recibido su indemnización".

DÉCIMO SEXTO: El 14 de noviembre de 1994, en la Dirección Regional del ISA en Chiriquí, le entregan al Ing. STAFF el Memorando N° 788/GA, fechado 2 de noviembre de 1994, expedido por la Gerencia de Administración, mediante el cual se le comunicó "que el Director General mediante Resuelto N° 022-94, deja sin efecto su nombramiento como Ingeniero Agrónomo I (1) del Instituto de Seguro Agropecuario a partir del 7 de noviembre de 1994" ...

De la acción instaurada se le corrió traslado a la parte demandada, el Director General del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), quien procedió a rendir su informe explicativo de conducta, encontrándose el mismo a foja 49 del expediente.

OPINIÓN DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

De la misma manera, se dio traslado a la señora Procuradora de la Administración, quien mediante su Vista Fiscal N° 311 de 25 de julio de 1995, se opuso a las pretensiones del demandante y solicitó denegar las declaraciones impetradas, por cuanto no le asiste razón alguna en su pretensión. Que en lo que respecta a la supuesta violación del artículo 10 de la Ley 22 de 30 de enero de 1961, la misma no procede, toda vez que no ha realizado de dicho artículo una interpretación correcta, ya que mediante sentencia de 28 de septiembre de 1984, la Corte Suprema de Justicia declaró que la frase **SOLO**, contenida en el artículo 10 de la ley 22 de 1961 era inconstitucional. Por tanto considera la Procuradora que al eliminarse la palabra solo hace extensiva las causales de destitución para los profesionales en Ciencias Agrícolas. Luego entonces, señala, puede darse, legalmente otras causas de destitución fuera de las determinadas en la disposición en estudio.

Acerca del artículo 10 de la Ley N° 68 de 15 de diciembre de 1975, a que se refiere el demandante, señala la Procuradora que los cargos de infracción endilgados no proceden, ya que en dicho artículo sólo se detallan ciertas facultades y obligaciones atribuidas al Director General del ISA, puesto que en

su última frase se hace alusión a las demás facultades y obligaciones que la propia ley y sus reglamentos le confiere. Si bien es cierto, agrega, no existe nada en cuanto al ente o autoridad competente para destituir, más no así para nombrar, la situación la resuelve el artículo 794 del Código Administrativo que faculta al funcionario que hace el nombramiento para remover, salvo expresa prohibición de la propia Constitución o la Ley.

Con relación a la violación al artículo 14 del Reglamento Interno del Instituto de Seguro Agropecuario, indica la Procuradora, que los funcionarios o servidores públicos no están amparados con el régimen de estabilidad, puesto que en la práctica no existe la carrera administrativa al no haberse implementado la misma, por ello cualesquiera reglamentación al respecto, carecerá de validez jurídica, como sucede en el caso en controversia.

En cuanto al artículo 221 de la Ley N° 32 de 31 de diciembre de 1993 que comprende el Programa de Retiro Voluntario, enfatizó la Procuradora que el mismo tuvo una duración perentoria en la Administración Pública, ya que mediante Decreto Ejecutivo N° 28 del 18 de mayo de 1994, se suspendió temporalmente la ejecución del Programa hasta el 31 de agosto de 1994, en cualesquiera de las etapas en que se encontrara.

Concluye la Procuradora señalando que la declaratoria de insubsistencia del Ing. Staff se da por razones presupuestarias, y no haberse acogido éste al Retiro Voluntario, ya que existía, previamente, renuncia de su cargo, para acogerse al Programa en cuestión, sin embargo por razones ajenas a la administración del Instituto éste no se perfeccionó.

POSICIÓN DE LA SALA

Con la presente acción la parte demandante considera en primer lugar, que el acto acusado de ilegal es violatorio del artículo 10 de la Ley N° 22 de 30 de enero de 1961; artículo 10 de la Ley 68 de 1975; artículos 14 y 78 del Reglamento Interno de Personal del ISA, los cuales están en íntima concordancia, por lo que a continuación los analizaremos conjuntamente.

El artículo 10 de la Ley 22 de 1961 es del tenor siguiente:

> **"ARTÍCULO 10:** Los profesionales idóneos al servicio del Estado podrán ser destituidos por razones de incompetencia física, moral o técnica. En cada caso particular, el Consejo Técnico Nacional de Agricultura hará las investigaciones necesarias para establecer la veracidad de los cargos, oyendo a las partes. El Consejo Técnico Nacional de Agricultura decidirá y solicitará lo conducente al Órgano Ejecutivo si se hubiese cometido infracción al presente artículo de esta Ley".

Indica la parte actora que los resueltos impugnados infringen la supratranscrita disposición legal, porque la misma no autoriza las destituciones por razones presupuestarias, y por igual motivo agrega violan el siguiente precepto:

El artículo 10 de la Ley 68 de 1975, señala:

> **"ARTÍCULO 10:** El Director General tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
>
> a) Ejecutar los acuerdos del Comité;
>
> b) Someter al conocimiento y aprobación del Comité Ejecutivo los planes de seguro, las tarifas, los modelos de contratos de seguro y reaseguro, endosos, instructivos, cuestionarios y demás documentos de contratación, así como los reglamentos de la Institución;
>
> c) Someter al Comité Ejecutivo para su estudio y aprobación, el balance mensual que muestra la posición financiera del Instituto y

el resultado de sus operaciones;

d) Someter a la aprobación del Comité Ejecutivo el Balance Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias del año y la Memoria de cada ejercicio;

e) Someter oportunamente a la aprobación del Comité Ejecutivo el plan de trabajo y los presupuestos correspondientes a cada ejercicio;

f) Nombrar el personal del Instituto previa consulta y aprobación del Comité Ejecutivo;

g) Ejercer la jurisdicción coactiva la cual podrá delegar en otro servidor público de la Institución;

h) **Las demás facultades y obligaciones que le confiere esta Ley y sus reglamentos**". (Énfasis nuestro).

El artículo 14 del Reglamento Interno del Instituto de Seguro Agropecuario consagra:

"**ARTÍCULO 14**: Todo funcionario del ISA, que haya prestado servicios continuos durante dos años, con probada honestidad, competencia, lealtad y moralidad en el servicio, gozará de estabilidad. Sólo podrá ser destituido por causa justificada, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 116 del 10 de octubre de 1984."

Sostiene el recurrente que los resueltos demandados infringen la norma reglamentaria transcrita, porque desconocen el derecho a la estabilidad y al debido proceso que la misma reconoce a los empleados del ISA; en atención a que, según el, los resueltos impugnados lo que hacen es disimular una destitución en contra de su representado, como también violan en forma directa, por comisión y por falta de competencia tanto el preámbulo como el literal e del Reglamento Interno del ISA, cuyos contenidos son los siguientes:

"**Artículo 78**: Separación del cargo es el acto mediante el cual se separa el empleado de las funciones, deberes y responsabilidades asignadas al cargo que desempeña.
...
e. Eliminación del cargo o cesantía es el acto mediante el cual la autoridad competente suprime o elimina puestos por ser innecesarios, por escasez de fondos o por cambios importantes en la institución o en las funciones correspondientes al puesto.

Cuando sea necesario decretar cesantía la autoridad administrativa correspondiente procederá a separar los empleados en el siguiente orden:

1. Empleados nombrados con carácter eventual.
2. Empleados nombrados con carácter interino.
3. Empleados nombrados y en período de prueba.
4. Empleados nombrados en propiedad o regulares.

En cuanto al orden de prelación para la separación se considerará dentro de cada grupo mencionado la antigüedad del servicio y las clasificaciones por apreciación de servicios del empleado, a fin de separar primero a los menos eficientes y luego a los de menor antigüedad".

Esta Superioridad estima que no le asiste razón al recurrente, ya que la letra de los preceptuados artículos **no debe entenderse como limitante para que se proceda con el despido de un funcionario que labore en el ISA**, tal cual ya lo ha señalado la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en sentencias de 12 de enero de 1996, y 23 de abril de 1996 y principalmente por las siguientes

razones:

1) No debe entenderse como limitante, dado que un funcionario del ISA, es ante todo un funcionario público, que como tal, debe estar supeditado a las disposiciones constitucionales que rigen para ellos en general.

De tal manera preceptúa el segundo párrafo del artículo 295 de nuestra Carta Magna que "Los servidores públicos se regirán por el sistema de méritos; y la estabilidad en sus cargos estará condicionada a su competencia, lealtad, y moralidad en el servicio. Por su parte, el segundo párrafo del artículo 297 de la misma excerpta legal establece que "los nombramientos que recaigan en el personal de carrera se harán con base en el sistema de méritos".

El ingeniero **EFRAÍN STAFF SÁNCHEZ** no ha acreditado que ingresó a dicha institución por concurso de mérito, que es lo que le otorgaría estabilidad en su cargo si fuera funcionario de carrera.

Es así por cuanto es potestad discrecional de la entidad demandada el libre nombramiento y remoción de los funcionarios no amparados en cuanto a su estabilidad, por una Ley de Carrera Administrativa, o de una Ley especial en relación con funciones públicas. Es procedente entonces, reiterar que las carreras en los servicios públicos sólo pueden establecerse mediante ley conforme a los principios de sistema de méritos, tal cual lo consagra el artículo 300 de la Constitución Nacional.

2) En el presente caso nos encontramos que prima la potestad discrecional de la entidad demandada para proceder con el despido de un funcionario público, por cuanto se trata de un funcionario público no amparado por una Ley de carrera administrativa. Son empleados que no tienen vinculación con una carrera administrativa quienes ejercen empleo de libre nombramiento y remoción, o quienes desempeñando cargos de carrera no pertenecen a ella por no haber ingresado mediante los procedimientos previstos en la ley para ese efecto.

Cuando se trata de un empleado no amparado por fuero especial que otorga la carrera administrativa, el mismo puede ser removido de su cargo en virtud de una **declaratoria de insubsistencia**, que según palabras de **YOUNES MORENO**, "**es el producto de la facultad discrecional de remover de la cual están investidas las autoridades nominadoras, para declarar sin efecto el nombramiento hecho a un funcionario público, con el propósito de hacer cesar su vinculación con el empleo para el cual fue designado**". (YOUNES MORENO, Derecho Administrativo Laboral, 5ta, edición, Editorial Temis, S. A. Bogotá, Colombia, 1993).

Dicha declaratoria de insubsistencia puede ser declarada libremente, por la autoridad nominadora **sin** tener necesariamente que **motivar** la providencia siempre y cuando la autoridad nominadora se haya persuadido de su conveniencia y oportunidad.

La declaratoria de insubsistencia es una medida instituida **en pro de la administración** y como todos sus actos está amparada por la presunción de legalidad. En el presente caso, mediante Resuelto N° 022-94 del 7 de noviembre de 1994, el Director General del Instituto de Seguro Agropecuario, señaló "**que por razones presupuestarias y reestructuración organizativa es indispensable declarar insubsistentes algunos nombramientos en esta institución**". Motivo por el cual se declara, entre muchos otros, insubsistente a partir del 7 de noviembre de 1994 al Ing. **EFRAÍN STAFF**. Tal proceder evidencia que dicha declaratoria fue en pro de la administración y no con abuso o desviación de las funciones propias del funcionario que la expidió.

No sucede así cuando se trata de un funcionario de carrera. En estos casos la insubsistencia deja de ser una medida discrecional y su ejercicio está condicionado al acaecimiento de ciertas circunstancias, y con arreglo a ciertos procedimientos de formalidad, como serían el oír previamente el concepto de la comisión de personal, y la motivación del acto de despido. Para los empleados de carrera la insubsistencia debe fundamentarse en el cuestionamiento de su eficiencia, de su rendimiento, pero de ninguna manera de su ética o moralidad.

La insubsistencia es en definitiva una medida que se ejerce sobre los funcionarios de libre nombramiento y remoción, como desarrollo de una atribución totalmente discrecional. Y este es el caso precisamente del Ing. **EFRAÍN STAFF.**

Una ley de carrera administrativa sería la ley básica, preferente, y especial en materia de estabilidad en la función pública. Tal como se deduce del artículo 300 de la Constitución el cual, como ya señalamos, instituye las carreras en los servicios conforme a los principios del sistema de méritos.

Es por ello, que como quiera que el **Ing. EFRAÍN STAFF**, fue nombrado libremente, y al no estar su estabilidad sujeta a una Ley de Carrera Administrativa, o de una ley especial en relación con funciones públicas, y no de tipo profesional totalmente independiente del ejercicio de funciones públicas como es el presente caso, es potestad discrecional de la entidad demandada el libre nombramiento y remoción de sus miembros.

Todo lo expresado anteriormente tiene como fundamento la declaratoria de inconstitucionalidad de la frase **Sólo**, contenida en el artículo 10 de la Ley 22 de 1961 mediante sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de 28 de septiembre de 1984, que en su parte pertinente señala lo siguiente:

> "Entiende la Corte que es inconstitucional la previsión legal que limita las causas de destitución o despido de Servidores públicos: los profesionales en ciencias agrícolas- a tres supuestos específicos (a. Incompetencia física; b. Incompetencia moral; y, c. Incompetencia técnica), excluyendo otras causales comunes de destitución surgidas de los deberes que, de modo expreso, la Constitución instituye como garantía mínima para el ejercicio eficiente de la función. Esos deberes, comunes a todos los servidores públicos, constituyen, entonces, las normas básicas que deberán orientar el régimen disciplinario, según la variedad de funciones. El régimen disciplinario, constituido por un conjunto de disposiciones especiales, se muestra, así, como el régimen penal del funcionario público, en cuanto al posible quebrantamiento de las normas que reglamentan su actividad. **Cuando los cargos no son de libre nombramiento y remoción, los funcionarios que ingresan a tal posición con base en el sistema de méritos y previa demostración de determinados requisitos exigidos para tal fin por una Ley preexistente, se crea a su favor un estado de inamovilidad** condicionada por su competencia, lealtad y moralidad en el servicio (art. 295, Constitución) y por el desempeño personal de sus funciones a las que dedicarán el máximo de sus capacidades (art. 297 Constitución).
>
> Agregando el Pleno, también, que el funcionario público, entonces, podrá ser destituido aún con un sistema de Carrera Administrativa, por razones de incompetencia física, moral o técnica, como lo señala el artículo 10 de la Ley 22 de 1961; pero podrá, igualmente, ser, destituido por razón del incumplimiento de los demás deberes expresamente señalados en la Constitución.
>
> En consecuencia, al ser limitadas las causas destitución de los servidores públicos en los términos del art. 10, de la Ley 22, de 30 de enero de 1961, por la expresión SOLO PODRÁN excluyendo otras que surgen de los arts. 295 y 297, en la forma en que han sido examinados en esta resolución de la Corte, el término o expresión SOLO se torna inconstitucional, porque equivale a ÚNICAMENTE. Sin embargo, los funcionarios a quienes se refiere ese horrad. 10 mencionado, PODRÁN ser destituidos por las causas esprecíficas (sic) que se señalan en ese artículo, PERO TAMBIÉN PODRÁN SER DESTITUIDOS, se repite, por el incumplimiento de los deberes, expresamente señalados en la Constitución para todos los servidores públicos, y por las demás causas que se establezcan en Leyes y Reglamentos.
>
> El Pleno de la Corte Suprema, en ejercicio de la potestad que le

> acuerda el horrad. 203 de la Constitución Nacional, DECLARA QUE ES INCONSTITUCIONAL la frase Sólo, contenida en el artículo de la Ley 22, de 30 de enero de 1961." (Lo resaltado es por la Sala).

Igualmente la Corte quiere observar que consta en el expediente administrativo la resolución de 16 de marzo de 1994 del Instituto de Seguro Agropecuario mediante la cual se le aceptó la renuncia por retiro voluntario al señor **EFRAÍN STAFF SÁNCHEZ**, por lo que desde ese momento dejó de pertenecer a la institución. El posterior despido que se le hizo y el pago de salarios mientras continuó trabajando, fue un error administrativo del Instituto de Seguro Agropecuario. La indemnización que se le reconoció en dicha resolución por el retiro voluntario y no se le canceló, es un problema aparte que debe resolver por la vías que correspondan el afectado. La jurisprudencia de la Corte es clara que la relación de trabajo concluye con la aceptación de la renuncia del funcionario. La Corte en sentencia de 11 de mayo de 1995 manifestó lo siguiente, acogiendo la doctrina de Jorge Rodríguez Mancini en su obra "Curso de Derecho de Trabajo y la Seguridad Social":

> "La renuncia al empleo es una acto esencialmente receptivo; por ello, sus efectos operan desde que se conforma con la llegada de la comunicación en esfera de conocimientos del empleador. Consecuentemente, el acto no se lo puede retractar unilateralmente u otorgarle efectos retroactivo, suspenderlo o someterlo a condiciones sin un acto jurídico bilateral. (Curso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Editorial Astrea, Buenos Aires, 1993, pág. 413) Este principio es de carácter general aplicable tanto a la esfera privada como administrativa estatal, ya que se refiere a una de las formas universales de concluir una relación de empleo cual es la renuncia."
>
> Y más adelante agregó la Sala Tercera de la Corte lo siguiente:
>
> "En lo concerniente a la situación de estabilidad del demandante, esta Corporación de Justicia discrepa del criterio externado por el demandante por cuanto que, este derecho de inamovilidad protege al funcionario recurrente de ser removido de acuerdo a la libre voluntad de la autoridad nominadora, más no en casos de renuncia voluntaria como evidentemente ocurrió en el caso que nos ocupa."

El anterior criterio ha sido mantenido por la Corte en abundante jurisprudencia, entre la que podemos mencionar el fallo de 11 de octubre de 1994, caso en el cual se estimaba conculcado el artículo 23 de la Ley N° 7 de 14 de abril de 1981, que regula el ejercicio de la profesión de Economista en todo el territorio nacional, artículo este que establece:

> "Artículo 23: Los profesionales de la economía gozarán de estabilidad en sus cargos condicionada a su competencia, lealtad y moralidad en el servicio".
>
> En dicho caso la Corte expresó:
>
> "Con relación a este aspecto, es fundamental señalarle al recurrente, que no ha comprobado haber ingresado al Ministerio de Planificación y Política Económica por concurso de mérito que es lo que le demostraría su competencia, y además, lo que le otorgaría estabilidad en su cargo por ser funcionario de carrera, obtenida la posición, repetimos, en concurso, donde es la única forma legal de ganar estabilidad".

Por todo lo antes expuesto, y con la finalidad de unificar la jurisprudencia hay que decir que no es necesario que en el expediente obren pruebas contundentes que demuestren a la Sala que se ha configurado la justa causa de destitución, como alega el recurrente que no se hizo, y como sostuvo esta Sala en fallo de 29 de mayo de 1996 y fallo de 28 de junio de 1996, pues en realidad no estamos frente a un caso de destitución, como señala la parte afectada, sino de insubsistencia, como ya hemos puntualizado.

Veamos la diferencia entre destitución e insubsistencia, claramente explicada por YOUNES MORENO:

> "Es precisamente la connotación disciplinaria de la destitución, su carácter de verdadera pena administrativa de máxima sanción aplicable a los empleados, lo que permite distinguirla de la insubsistencia, que como se vio, no tiene características sancionadoras ni disciplinarias. **La insubsistencia es, por el contrario, una medida que se ejerce sobre los funcionarios de libre nombramiento y remoción, como desarrollo de una atribución discrecional**, o como resultado de deficientes calificaciones de servicio, negativas evaluaciones del desempeño, tratándose de empleados vinculados a la carrera administrativa. Es decir, la insubsistencia para empleados que no están amparados por un fuero tiene como base su propia condición de empleados **de libre nombramiento y remoción** ...
>
> La destitución, por el contrario, apareja una censura a la ética o a la probidad de la conducta del empleado destituido." (Énfasis nuestro).

Respecto al artículo 14 del Reglamento interno de Personal que establece la estabilidad en el ejercicio del cargo dentro del Instituto de Seguro Agropecuario (el cual para aquél momento ya no era aplicable por las razones que seguidamente pasaremos a explicar), es procedente, aún así, reiterar que las carreras en los servicios públicos sólo pueden establecerse mediante ley conforme a los principios de sistema de méritos, tal cual lo consagra el artículo 300 de la Constitución Nacional.

El objetivo de la presente demanda es determinar la legalidad o no del resuelto 22 de 7 de noviembre de 1994, confrontado principalmente con el artículo 10 de la Ley 22 de 30 de enero de 1961, por lo que establecida la inconstitucionalidad de la frase **Sólo** en dicho artículo así como la **clara diferencia** entre un **funcionario de carrera** y uno de **libre nombramiento**, y por ende la diferencia entre la **destitución** y la **insubsistencia**, consideramos que no prosperan los cargos de violación endilgados al artículo 10 de la Ley 22 de 1961, artículo 10 de la Ley 68 de 1975, y al artículo 14 del Reglamento Interno del Instituto de Seguro Agropecuario, por cuanto no se trata de un servidor público con fuero de carrera administrativa, que de ser así hubiera gozado de ciertas prerrogativas y trámites procedimentales solemnes para su destitución, incluyendo, entre ellos, lo que el artículo 10 de la Ley 22 de 1961, considerado supuestamente infringido, consagra.

Con relación a la violación al artículo 78, al igual que el 14 del Reglamento Interno del Instituto de Seguro Agropecuario, los mismos no pueden ser aplicados, dado que sus contenidos estaban supeditado a lo dispuesto en el Decreto N° 116 de 10 de octubre de 1984, el cual reglamentó la estabilidad de los servidores públicos, y que fue derogado posteriormente por el Decreto de Gabinete N° 1 de 26 de diciembre de 1989, que a su vez fue derogado en todas sus partes por el artículo 197 de la Ley N° 9 de 10 de junio de 1994, "Ley de Carrera Administrativa".

Por las anteriores razones, los artículo 14 y 78 del Reglamento en estudio, perdieron toda eficacia jurídica. Al no tener vigencia alguna, los cargos contra los mismos son improcedentes.

Por último, señala el recurrente, que se ha violentado el artículo 221 de la Ley N° 32 de 31 de diciembre de 1993, por el cual se aprobó el Presupuesto General del Estado para el período fiscal de 1994, cuya parte pertinente dice así:

> "Artículo 221: El gobierno Nacional ejecutará el Programa de Retiro Voluntario para lo cual se mantendrá el Fondo creado que permitirá cubrir una indemnización equivalente a doce (12) meses de salario a aquellos funcionarios que se acojan al mismo ...".

Sostiene el demandante que los actos impugnados violan dicha disposición, porque dejaron de ejecutar el previamente aprobado retiro voluntario del Ing. **STAFF**; máxime que los Decretos Ejecutivos que reglamentaban dicho programa, no afectaron la vigencia del resuelto mediante el cual se aprobó la renuncia por retiro voluntario, renuncia que se mantenía vigente al momento en que se procedió a su destitución, y que se encontraba pendiente del pago de la indemnización. No obstante, la pretensión del demandante con respecto a dicha indemnización no es viable en la presente demanda, por cuanto no guarda relación con la declaratoria de insubsistencia del Ing. STAFF, que es el asunto objeto de análisis en el presente caso y que ya establecimos que al aceptarse su renuncia no era necesario declararlo insubsistente.

Estima esta Sala oportuno reproducir un fragmento de la sentencia de 23 de abril de 1996, en la que se decidió sobre la legalidad de la declaratoria de insubsistencia del señor **RAFAEL LÓPEZ VARGAS** del puesto que ocupaba como Ingeniero Agrónomo I del Instituto de Seguro Agropecuario, quien alegó el mismo cargo de violación contra dicho artículo 221 de la Ley N° 32 de 31 de diciembre de 1993:

> "Esta Sala estima que el presente cargo de violación no es procedente, por cuanto se trata de una pretensión que en nada guarda relación con el acto administrativo acusado de ilegal, que consiste en la declaratoria de insubsistencia del señor RAFAEL LÓPEZ VARGAS del cargo que ocupaba como Ingeniero Agrónomo I del Instituto de Seguro Agropecuario. **La destitución del recurrente se dio por razones presupuestarias, y en atención a la facultad discrecional de la entidad administrativa nominadora de libre nombramiento y remoción de sus miembros; y no por haberse acogido al programa de Retiro Voluntario**". (Énfasis nuestro).

Igual es la situación con respecto al Ing. STAFF, quien a la fecha en que se le destituyó por un error administrativo, es decir el 7 de noviembre de 1994, había sido previamente aceptada su renuncia y la misma se encontraba pendiente del pago de la correspondiente indemnización.

Por tales motivos, tal cual lo señaló la Procuradora de la Administración, el recurrente no puede atribuirle al ISA responsabilidad alguna por la suspensión o interrupción del Programa de Retiro Voluntario, específicamente, en cuanto al pago de la indemnización correspondiente, ya que dicha suspensión fue una determinación tomada a nivel del Órgano Ejecutivo mediante Decreto Ejecutivo N° 28 de 18 de mayo de 1994, prorrogada por el Decreto Ejecutivo N° 76 de 1 de noviembre de 1994, a la cual tenían que someterse todas las entidades del engranaje gubernamental, incluyendo la entidad estatal ahora demandada. De allí que no le asiste la razón, cuando señala que el ISA ha violado el artículo 221 de la mencionada Ley N° 32 de 31 de diciembre de 1993.

En consecuencia, los Magistrados que integran la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN QUE NO ES ILEGAL el Resuelto N° 022-94 de 7 de noviembre de 1994, expedido por el Director General del Instituto Agropecuario.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ EN REPRESENTACIÓN DE FERRETERÍA INDUSTRIAL, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 163-94 DE 14 DE JUNIO DE 1994, DICTADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y

ELECTRIFICACIÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense **Galindo, Arias y López**, en representación de **FERRETERÍA INDUSTRIAL, S. A.**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 163-94 de 14 de junio de 1994, dictada por la Junta Directiva del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

PRETENSIONES DE LA PARTE ACTORA

Con la presente acción la parte actora pretende que esta Superioridad declare la nulidad, por ilegal, de la prenunciada Resolución por la cual se resolvió "Declarar administrativamente resuelta la Solicitud de Precios N° 762-93, adjudicada por el IRHE mediante Resolución de la Junta Directiva N° 296-93 de 11 de noviembre de 1993, en favor de FERRETERÍA INDUSTRIAL, S. A. para el suministro, transporte y entregas en el almacén de San Francisco, de repuestos para el mantenimiento preventivo de las unidades Pielstick, de acuerdo con las especificaciones que formaban parte de la Solicitud de Precios N° 762-93." Paralelamente, se declare que FERRETERÍA INDUSTRIAL, S. A., no ha incumplido sus obligaciones respecto a la Solicitud de Precios N° 762-93, y por consiguiente, la fianza presentada no es exigible por incumplimiento de contrato. De igual manera, se declare que la oferta de FERRETERÍA INDUSTRIAL, S. A., fechada 11 de octubre de 1993, al Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) respecto a la Solicitud de Precios N° 762-93 expiró antes que la institución solicitante haya procedido a la confección de la respectiva orden de compra, y finalmente, se declare que el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación debe solicitar una nueva cotización de precios para los renglones objeto de la Solicitud de Precios N° 762-93.

LOS HECHOS Y OMISIONES FUNDAMENTALES DE LA PRESENTE ACCIÓN

El apoderado judicial de la parte actora basa sus pretensiones fundamentalmente, en los siguientes hechos:

"1. A solicitud de Precios del INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (en adelante el IRHE), FERRETERÍA INDUSTRIAL, S. A. le ofertó el 11 de Octubre de 1993, cuatro renglones de piezas para la rehabilitación de la Planta San Francisco.

2. Dicha oferta tenía una validez de 120 días calendarios a partir del 11 de Octubre de 1993.

3. La mencionada oferta mantenía el nombre de las piezas y los números de catálogo que el IRHE había solicitado con las correcciones que FERRETERÍA INDUSTRIAL, S. A. consideró hacer en vista que no coincidían con los números de catálogos del fabricante de la misma.

4. El IRHE nunca notificó a FERRETERÍA INDUSTRIAL, S. A. que había sido adjudicada definitivamente el concurso de precios ni le entregó contrato u orden de compra alguna dentro del plazo de 120 días de la oferta arriba mencionada. Lo único que hizo fue solicitarle mediante nota DESG-DP-SSP-4809-93 que presentara fiaza (sic) de cumplimiento, cosa que FERRETERÍA INDUSTRIAL, S. A., cumplió desde el 3 de Diciembre de 1993.

5. Mediante Resolución N° 163-94 de 14 de Junio de 1994, EL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN decidió dar por

> resuelto la solicitud de Precios N° 7623-93 que originalmente dijo había sido adjudicada definitivamente a favor de FERRETERÍA INDUSTRIAL, S. A., conforme a lo dispuesto por el Artículo 68, Numeral 6 del Código Fiscal, o sea por incumplir con la entrega de la mercancía ofertada."

OPINIÓN DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Mediante Vista Fiscal N° 64 de 10 de febrero de 1995, que reposa a folios 22-38 del expediente principal, la señora Procuradora de la Administración solicitó a esta Superioridad no acceder a las pretensiones del recurrente alegando fundamentalmente, que las decisiones contenidas en los actos acusados de ilegales se encuentran ajustadas a nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación sí cumplió con gestionar el Contrato producto de la Solicitud de Precios al expedir la Orden de Compras N° 63238 de 26 de noviembre de 1993, en la cual se detalla el contenido del modelo incluido en el pliego de cargos de la solicitud de precios. Además, que la misma se había confeccionado desde antes que se constituyera la Fianza de Garantía de Cumplimiento, expedida por la Cía. Aseguradora Mundial, S. A.

Según la aludida funcionaria, tal aseveración obedece a que a tenor del Artículo 36 de Decreto 33 de 3 de mayo de 1985, es la Orden de Compra el documento que se utiliza para formalizar la relación contractual para el suministro de bienes muebles, y por consiguiente, es el contrato a que hace alusión el recurrente.

EXAMEN DEL CASO. ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA

En primer lugar se estiman infringidos los artículos 53 y 57, ambos del Código Fiscal que por estar estrechamente vinculados entre sí, la Sala procede a su análisis en conjunto. El texto de los mismos es el siguiente:

> "Artículo 53. Constituida la fianza definitiva, o pagado el precio del remate, el Ministro o el Representante legal de la entidad pública procederá a formalizar el Contrato de acuerdo al modelo incluido en el pliego de licitación y con arreglo a las disposiciones legales pertinentes."

> "ARTÍCULO 57. En el caso de que el rematante no cumpliese sus obligaciones, la entidad pública contratante declarará resuelto administrativamente el contrato y el contratista perderá la fianza otorgada que ingresará al Tesoro Nacional como indemnización del perjuicio ocasionado.
>
> En caso de que la fianza sea constituida mediante garantía de contrato expedido por compañías afianzadora o de seguros, la fiadora tendrá opción de pagar el importe de la fianza o de sustituir al contratista en todos los derechos y obligaciones derivadas del contrato."

Sobre el concepto de la violación de tales disposiciones legales, sostiene el recurrente que la misma se ha producido de manera directa por falta de aplicación, al insistir el IRHE en que FERRETERÍA INDUSTRIAL, S. A., incumplió con sus obligaciones de suministrar las piezas de repuestos ofertadas el 11 de octubre de 1993, cuando dicha empresa no podía hacerlo sino hasta tanto se produjera el contrato u orden de compra respectiva. En tal sentido, advierte el apoderado legal del demandante que la razón por la cual FERRETERÍA INDUSTRIAL, S. A., no pudo cumplir con su obligación de suministrar las piezas de repuestos objeto de la solicitud de precios 762-93 es porque no se le había ordenado hacerlo, dado que era hasta tanto se produjera y se firmase el contrato respectivo o se hiciese entrega de la orden de compra respectiva, que su representada estaba obligada a hacer entrega de los repuestos ofertados.

MOTIVACIONES DEL TRIBUNAL

Cumplidos los trámites legales instituidos para estos procesos, la Sala

procede a resolver la controversia, previa las siguientes consideraciones.

De las constancias procesales incorporadas en el expediente administrativo, se desprende que el día 11 de octubre de 1993 el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), celebró la Solicitud de Precios identificada bajo el N° 762-93, Segunda Convocatoria, "para el suministro, transporte y entrega en el almacén de San Francisco, de repuestos para el mantenimiento preventivo de las unidades Pielstick", la cual fue adjudicada provisionalmente con base en el precio más bajo a la sociedad FERRETERÍA INDUSTRIAL, S. A., por un monto de TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS BALBOAS (B/.36,882.00). Posteriormente, la misma fue adjudicada definitivamente a dicha empresa mediante Resolución N° 296-93 de 16 de noviembre de 1993, emitida por la Junta Directiva por la suma de B/.36,882.00, la cual tenía como término de validez de la oferta, ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la celebración del acto público, es decir, el 11 de octubre de 1993. De la referida Resolución N° 296-93, se le comunicó debidamente al contratista (FERRETERÍA INDUSTRIAL, S. A.), mediante la nota distinguida bajo el N° DSG-DP-SSP-48809-93 de 26 de noviembre de 1993, (f. 89), a los efectos de que procediera a presentar la fianza de cumplimiento.

La aludida fianza fue presentada por dicha empresa el día 3 de diciembre de 1993, (cfr. f.13 del expediente administrativo). A partir de ese momento, tal como se constata en dicho expediente la sociedad contratista procedió al envío de una serie de notas referente a verificaciones de piezas solicitadas en los renglones de dicha solicitud con fecha de 3 y 7 diciembre de 1993, (fs. 88 del expediente administrativo y 105 del expediente contencioso administrativo) y otras como la que data de 8 de febrero de 1994, (ver fs. 80-81 del expediente administrativo) en la cual se le indica a la entidad licitante (IRHE), que en el caso de modificarse el renglón 2 de tal solicitud, se produciría una elevación en los precios. Durante ese lapso el IRHE dio respuesta a las mismas, indicándole el hecho de no poder aceptar modificación al precio si no había cambio en las especificaciones de lo solicitado, ya que en ese caso, al darse tal cambio, y, por ende, modificarse el precio de las partes, se procedería a dar desierto el acto y convocar a un nuevo llamado (al respecto confróntese Nota DSG-DP-SSP-4955-93 de 29 de diciembre de 1993 y Nota DSG-DP-SSP-187-94 de 21 de febrero de 1994, legibles a fojas 85 y 78 del expediente administrativo, respectivamente). Pese a esta situación se observa que el IRHE mediante nota DSGG-DP-SSP-254-94 de 14 de marzo de 1994, (f. 98 del expediente contencioso administrativo) notificó al proveedor FERRETERÍA INDUSTRIAL, S. A. que dado que las modificaciones introducidas al renglón N° 2 de la Solicitud de Precios involucraban un aumento de precio de la oferta inicial se procedía a la anulación de dicho renglón, y, que por consiguiente, procediera a confirmar la validez de la propuesta para el resto de los renglones (1, 3 y 4) a fin de dar trámite a la orden de compra. Sin embargo, mediante nota S/N de 25 de marzo de 1994, (cfr. f. 79 del expediente administrativo) el contratista procedió a informar al IRHE que el tiempo de validez de su oferta había vencido, y que si bien el costo del renglón N° 1 se mantenía, sí se producía un incremento en el costo de lo renglones N° 3 y 4 y extendía la validez de su oferta hasta el 15 de mayo de 1994.

Posteriormente, el IRHE procedió a solicitar a la empresa garante (Aseguradora Mundial, S. A.) mediante nota DEA-DSG-DP-SCA-237-94 de 20 de abril de 1994, (fojas 70-71 del expediente administrativo), hacer efectiva la fianza que amparaba la referida Solicitud de Precios N° 762-93 alegando incumplimiento de contrato. Procediendo además, a rescindir administrativamente la aludida Solicitud de Precios N° 762-93 adjudicada definitivamente en favor de FERRETERÍA INDUSTRIAL, S. A., aduciendo como fundamento legal lo dispuesto en el artículo 68, numeral 6 del Código Fiscal.

De lo expuesto se colige que le asiste razón al representante legal de la sociedad demandante FERRETERÍA INDUSTRIAL, S. A., al expresar que la institución estatal demandada (IRHE) mal puede reclamar el incumplimiento de contrato inexistente, en virtud de que pasados los 120 días calendario, a partir de la fecha de la celebración de la solicitud de precios el 11 de octubre de 1993, no se había producido una orden de compras o contrato que amparara la misma.

Como hemos visto, no consta en autos que el Instituto de Recursos Hidráu-

licos y Electrificación (IRHE) procediese como en efecto lo exige la normativa legal vigente en materia de solicitud de precios a emitir el contrato respectivo, o la correspondiente Orden de Compra que amparase la referida Solicitud de Precios, dentro del término de validez de dicha oferta, que según se desprende del texto de la Resolución N° 296-93 de 16 de noviembre de 1993, que adjudicó definitivamente dicha solicitud de precios, como señaláramos antes, era de ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la celebración del acto público, es decir, el 11 de octubre de 1993.

La emisión de la aludida Orden de Compra de acuerdo con el artículo 36 del precitado Decreto N° 33 de 1985, constituye el documento que venía a formalizar la relación contractual para el suministro de los referidos bienes muebles entre el INSTITUTO DE RECURSO HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (entidad pública contratante) y la sociedad FERRETERÍA INDUSTRIAL, S. A., (empresa contratista). Para mayor ilustración, veamos lo que al respecto establece el artículo 36 del aludido Decreto 33 de 1985:

> "Artículo 36. La Orden de Compra es el documento que utiliza de manera eventual el Gobierno Central y demás instituciones públicas, mediante el cual se formaliza una relación contractual para el suministro de bienes muebles y la adjudicación de servicios en la localidad."

Corrobora el criterio expresado y contrario a lo señalado por la Procuradora de la Administración, el hecho de que en la propia resolución N° 163-94 de 14 de junio de 1994, que declaró administrativamente resuelta la aludida Solicitud de Precios, la Junta Directiva del IRHE tal y como se observa a f. 2 del expediente contencioso administrativo, procediera a indicar que no se expidió la orden de compra, y que se transcribe a continuación:

> "... K. Que el IRHE abunda en documentos que prueban que la dilación y el ulterior vencimiento de la validez de la oferta del proveedor se debió a las constantes variaciones de su propuesta hechas a través de sus notas, en que se solicitaba aclaraciones o variaba el suministro y/o los costos de los mismos, lo que consecuentemente impidió la expedición de la correspondiente Orden de Compra."

De igual manera, la anulación de la Orden de Compra N° 63238 de 26 de noviembre de 1993, en la que consta un sello de anulado por parte del IRHE referente a la Solicitud de Precios S/P 762-93 (cfr. f. 4 del expediente gubernativo). Así como también, la Nota DSG-DP-SSP-254-94 de fecha 14 de marzo de 1994, firmada por el Jefe del Departamento de Proveeduría del IRHE que aparece a f. 98 del expediente contencioso, en la que sostiene que necesitan la confirmación de la validez de la propuesta de los renglones 1, 3 y 4, a fin de dar trámite a la orden de compra y que el Tribunal considera oportuno reproducir a continuación:

"DSG-DP-SSP-254-94
14 de marzo de 1994

Señora
Anabella G. de Rubinoff
Gerente General
Ferretería Industrial, S. A.
E. S. D.

Referencia: Solicitud de Precios
N° 762-93 II Convocatoria

Estimada Señora Rubinoff:

Referente a su nota fechada 8 de febrero de 1994, relacionada a cambios en las especificaciones para el renglón N° 2, collar de resorte para válvula de escape, le comunicamos que dado que las modificaciones involucra aumento de precio de la oferta inicial, procederemos a la anulación de dicho renglón.

A fin de dar trámite a la orden de compra, favor de confirmarnos la válidez (sic) de la propuesta para el resto de los renglones (1, 3, y 4)." ...

Por las consideraciones expresadas se pone de manifiesto que al proceder la referida entidad estatal a declarar administrativamente resuelta la Solicitud de Precios S/P N° 762-93 II Convocatoria, que como hemos visto le fuera adjudicada definitivamente a la sociedad demandante FERRETERÍA INDUSTRIAL mediante Resolución de Junta Directiva N° 296-93, sin que mediase la correspondiente emisión de la Orden de Compra o contrato que formalizara la oferta, efectivamente incurrió en infracción de los precitadas artículos 53 y 57 del Código Fiscal. Esto es así, dado que es con la emisión del respectivo contrato o la Orden de Compra a la que alude el precitado artículo 36 del Decreto Ejecutivo 33 de 1985, que el IRHE en atención a las precitadas disposiciones, puede proceder en caso de incumplimiento de contrato por parte de la empresa a la que le fuere adjudicada la correspondiente solicitud de precios, a declarar administrativamente resuelta dicha solicitud de precios, tal como lo establece el artículo 68 de Código Fiscal. De igual manera, a exigir a la compañía afianzadora o de seguros que proceda a hacer efectivo el pago de la fianza por incumplimiento de contrato, conforme lo dispone el artículo 57 del Código Fiscal.

Por tanto, prosperan los cargos de violación endilgados a los artículos 53 y 57 del Código Fiscal.

En lo que respecta al cargo de violación del artículo 26 del Decreto Ejecutivo N° 235 de 30 de junio de 1969, que establece el régimen especial para la contratación de materiales, obras o servicios para el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, este Tribunal considera pertinente no entrar a conocer del mismo, por razón de que la ilegalidad del acto acusado, ya ha sido debidamente comprobada con la infracción de los artículos 53 y 57 del Código Fiscal, alegados por la parte demandante como conculcados.

En consecuencia, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA:

1. Que es NULA, POR ILEGAL la Resolución N° 163-94 de 14 de junio de 1994, emitida por la Junta Directiva del INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE),

2. Que FERRETERÍA INDUSTRIAL, S. A., no ha incumplido sus obligaciones respecto a la Solicitud de Precios N° 762-93,

3. Que la oferta de FERRETERÍA INDUSTRIAL, S. A., de fecha 11 de octubre de 1993, al INSTITUTO DE RECURSO HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE) respecto de la Solicitud de Precios N° 762-93 expiró antes que la institución solicitante haya procedido a la confección de la respectiva orden de compra, por consiguiente,

4. Que la fianza presentada por FERRETERÍA INDUSTRIAL, S. A., no es exigible por incumplimiento de contrato,

5. Que el INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE) debe proceder a solicitar una nueva cotización de precios para los renglones objeto de la Solicitud de Precios N° 762-93.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL

DOCTOR WINSTON SPADAFORA FRANCO, EN REPRESENTACIÓN DE DORIAN RÍOS APARICIO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO N° 27 DE 27 MARZO DE 1996, DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Doctor Winston Spadafora Franco, actuando en nombre y representación de DORIAN RÍOS APARICIO, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto Ejecutivo N° 27 de 27 de marzo de 1996, dictado por el Presidente de la República, por conducto del Ministerio de Comercio de Industrias, y para que se hagan otras declaraciones.

Al resolver sobre la admisibilidad de la demanda presentada, se observa que se ha acompañado con la misma el memorial, con sello de recibido, en el que la parte actora solicita a la señora Ministra de Comercio e Industrias, copia autenticada del Decreto Ejecutivo N° 27 de 27 de marzo de 1996 (fs. 8), y el memorial, también con sello de recibido, mediante el cual solicita que se certifique si fue resuelto o no el recurso de reconsideración interpuesto contra dicho Decreto Ejecutivo (fs. 7).

El ordinal 1° del artículo 22 de la Ley 33 de 1946 preceptúa que interpuesto alguno o algunos de los recursos señalados en el artículo 20 de la Ley 33 de 1946 (Reconsideración y/o Apelación), se entienden negados si no son resueltos en un plazo de dos meses. El artículo 46 de la Ley 135 de 1943 dispone que el Magistrado Sustanciador puede solicitar, antes de admitir la demanda, copia del acto impugnado o certificación sobre su publicación, en aquellos casos en los cuales el acto no ha sido publicado, o se ha negado la expedición de copia o la certificación sobre su publicación, siempre que se expresa este hecho en la demanda con indicación de la oficina donde se encuentra el original.

Con fundamento en las disposiciones antes mencionadas y en virtud de la falta de respuesta del funcionario demandado, la Sala dispone solicitar al Ministerio de Comercio e Industrias, que certifique si ha sido o no resuelto el recurso de reconsideración promovido el 27 de junio de 1996 contra el Decreto Ejecutivo N° 27 de 27 de marzo de 1996, a fin de comprobar el agotamiento de la vía gubernativa y que expida copia autenticada del referido Decreto Ejecutivo.

En mérito de lo expuesto, la Magistrada Sustanciadora en representación de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, antes de admitir la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto Ejecutivo N° 27 de 27 de marzo de 1996, emitido por el Señor Presidente de la República, por conducto de la señora Ministra de Comercio e Industrias, DISPONE solicitar por Secretaría al Ministerio de Comercio e Industrias, que en el término de cinco (5) días expida y envíe a la Sala:

1. Copia autenticada del Decreto Ejecutivo N° 27 de 27 de marzo de 1996, con la constancia de su notificación:

2. Certificación en la cual conste si ha sido resuelto el recurso de reconsideración promovido el 27 de junio de 1996, contra el Decreto ejecutivo N° 27 de 27 de marzo de 1996 emitido por el señor Presidente de la República y a señora Ministra de Comercio e Industrias, por medio del cual se declara insubsistente del cargo a DORIAN A. RÍOS APARICIO; y

3. Si el recurso de reconsideración ha sido resuelto expida y envíe copia autenticada del acto mediante el cual se resolvió dicho recurso y constancia de su notificación.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EMILIO DE LEÓN, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR JOSÉ DEL CARMEN ESPINOZA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 032 DEL 15 DE JUNIO DE 1995, EXPEDIDO POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA DE PANAMÁ; ASÍ COMO LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Emilio De León Lokee, actuando en nombre y representación del señor JOSÉ DEL CARMEN ESPINOZA QUINTERO, promovió recurso de apelación contra la Providencia del 25 de marzo de 1996, mediante la cual no se admitió la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción interpuesta contra el Resuelto N° 032, del 15 de junio de 1995, expedido por el Director General del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá.

I. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA

De acuerdo con la resolución apelada, la demanda interpuesta por el licenciado De León no fue admitida porque la parte demandante no agotó la vía gubernativa para poder accionar ante esta Sala en demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción. Expresa el Magistrado Sustanciador que, como al demandante se le notificó del Resuelto confirmatorio N° 048-95 del 24 de julio de 1995 mediante Nota N°-N-497 del 10 de octubre de mismo año, debió sustentar la apelación dentro de los cinco días siguientes a esta notificación y no el 11 de noviembre, como en efecto lo hizo (f. 13). Agrega, que esta inadecuada utilización de los recursos gubernativos hace que la vía gubernativa no se haya agotado debidamente (fs. 83-85) y, consecuentemente, no pueda el actor ocurrir ante esta vía.

II. LOS ARGUMENTOS DEL RECURRENTE

Oportunamente el licenciado De León Lokee sustentó su apelación manifestando, que la Nota N°-N-497 del 10 de octubre de 1995, no fue recibida ni notificada a su representado en esa misma fecha, como afirma el Magistrado Sustanciador, sino el 2 de noviembre de ese año. Así se lee claramente en el "Escrito de Notificación y Reiteración de Apelación" que consta a foja 9 de expediente, en el cual su representado se da por notificado del Resuelto N° 048-95 del 24 de julio de 1995, que resuelve el recurso de reconsideración antes mencionado, documento que fue recibido en el Instituto de Investigación Agropecuaria el 2 de noviembre de 1995, tal como consta en el mismo.

Agrega, que como el aludido resuelto debe tenerse como notificado el 2 de noviembre de 1995, la apelación se sustentó el 6 de noviembre del mismo año. Concluye indicando, que el último párrafo de la Nota N°-N-497 en cita, reafirma todo lo expuesto, pues, en el mismo se hace constar que para el 10 de octubre de 1995, su representado no había sido notificado del Resuelto N° 048-95 ibídem (fs. 92-95).

III. OPINIÓN DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Mediante Vista N° 190 del 7 de mayo de 1996, la señora Procuradora de la Administración se opuso al recurso de apelación, reafirmando los hechos y argumentos en que se fundamentó el Magistrado Sustanciador para inadmitir la demanda (fs. 96-100).

IV. DECISIÓN DEL RESTO DE LOS MAGISTRADOS DE LA SALA

De acuerdo con las constancias de autos, el señor JOSÉ DEL CARMEN ESPINOZA QUINTERO fue destituido mediante Resuelto N° 032, del 16 de junio de 1995. El recurso de reconsideración interpuesto contra este acto, se resolvió por medio del Resuelto N° 048-95, del 24 de julio del mismo año (fs. 1 y 5).

El Magistrado Sustanciador expresa en su Providencia del 6 de marzo de 1996, que la vía gubernativa no se agotó debidamente, porque el Resuelto N° 048-95 ibídem, le fue notificado al demandante mediante Nota N° N-497-95 del 10 de octubre de 1995 y, por tanto, debió sustentar su apelación dentro de los cinco días siguientes a esta última fecha y no el 2 de noviembre de 1995, como en efecto lo hizo.

El problema que se plantea consiste, pues, en determinar si mediante la referida nota del 10 de octubre de 1995 se notificó o no al demandante del Resuelto N° 048-95, que resolvió el recurso de reconsideración previamente interpuesto. A juicio del resto de los Magistrados de la Sala, le asiste razón al licenciado De León Lokee, puesto que si bien la Nota N° N-497-95, está fechada el 10 de octubre de 1995, en ella no consta que para esta misma fecha fue entregada o notificada formalmente al señor ESPINOZA QUINTERO. Lo anterior es así, porque en dicha nota no aparece sello alguno en el que se indique la fecha de notificación o de entrega a la parte interesada.

Sobre el particular, debe tenerse presente que, de acuerdo con el artículo 991 del Código Judicial, aplicable supletoriamente en el presente caso por razón de lo dispuesto en al artículo 57 C) de la Ley N° 135 de 1943, las notificaciones personales deben practicarse "haciendo saber la resolución del Juez a aquellos a quienes deba ser notificada, **por medio de una diligencia en que se expresará en letras, el lugar, hora, día, mes y año de la notificación, todo lo que firmarán, el notificado o un testigo por él, si no pudiere o no quisiere firmar y el Secretario, expresando éste debajo de su firma, su cargo. En todo caso de notificación personal se dará copia de la resolución que se notifique**".

En razón de lo expuesto, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera estima que el Resuelto N° 048-95 del 24 de julio de 1995 debe tenerse por notificado el día **2 de noviembre de 1995**, fecha cierta en que el demandante presentó ante el Director General del IDIAP un escrito dándose por enterado del contenido del aludido resuelto y reiterando la interposición del recurso de apelación contra el Resuelto N° 032 del 14 de julio de 1995, mediante el cual se le destituyó de su cargo.

Como la sustentación del mencionado recurso se hizo oportunamente, esto es, el 11 de noviembre del mismo año y como el mismo no fue resuelto dentro de los dos meses siguientes, según la certificación que reposa a foja 177, se ha configurado el silencio administrativo y con ello, el agotamiento de la vía gubernativa, presupuesto esencial para ocurrir ante esta vía.

De consiguiente, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, previa revocatoria de la Providencia del 25 de marzo de 1996, ADMITE la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Emilio De León Lokee, en nombre y representación del señor JOSÉ DEL CARMEN ESPINOZA QUINTERO, para que se declare nulo, por ilegal, el Resuelto N° 032, del 15 de junio de 1995, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Envíese copia de esta demanda al Director General del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, a fin de que rinda un informe de conducta dentro del término de cinco días, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley N° 33 de 1946.

Se corre traslado a la Procuradora de la Administración por el término de cinco días.

Ábrase la causa a pruebas por el término de cinco días.

Téngase al licenciado Emilio De León Lokee, como apoderado de la parte actora.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA EDDA AMAYA, EN REPRESENTACIÓN DE SISTEMAS ENERGÉTICOS DE PANAMÁ, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 20-96 DE 9 DE MAYO DE 1996, EMITIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Edda Amaya, actuando en su calidad de apoderada judicial de **SISTEMAS ENERGÉTICOS DE PANAMÁ, S. A.**, ha presentado desistimiento de la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 20-96 de 9 de mayo de 1996, emitida por la Junta Directiva del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación.

En efecto, a foja 59 del expediente se aprecia el escrito de desistimiento presentado por la licenciada apoderada legal de la Sociedad demandante en momentos en que el proceso se encontraba en trámite.

Dado que el artículo 66 de la Ley 135 de 1943 establece que en cualquier estado del juicio es admisible por declaración expresa, el desistimiento del recurso contencioso administrativo, y el artículo 1063 del Código Judicial recoge el mismo principio, es perfectamente viable el desistimiento presentado por la licenciada **Edda Amaya** en representación de **SISTEMAS ENERGÉTICOS DE PANAMÁ, S. A.**, quien además esta facultada para desistir como se aprecia a foja 30 del expediente.

En consecuencia, el Magistrados Sustanciador en representación de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO, presentado por la licenciada Edda Amaya, en representación de SISTEMAS ENERGÉTICOS DE PANAMÁ, S. A., dentro de la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nula por ilegal la Resolución N° 20-96 de 9 de mayo de 1996, emitida por la Junta Directiva del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA EISENMAN & AROSEMENA, EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ MARÍA DUTARY CALVIÑO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 10,568-95-J. D. DE 20 DE JULIO DE 1995, EMITIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE

HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Alejandro Watson**, en representación del señor de **JOSÉ MARÍA DUTARY CALVIÑO**, en calidad de apoderado sustituto, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare parcialmente nula, por ilegal, la Resolución 10,568-95-J. D. de 20 de julio de 1995, proferida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social y para que se hagan otras declaraciones.

PRETENSIONES DE LA PARTE ACTORA

Por medio de la presente acción, el apoderado judicial de la parte demandante ha solicitado a este Tribunal que proceda a declarar parcialmente nulo, por ilegal, el acto administrativo enunciado en el párrafo anterior. Paralelamente, se declare que se conceda al asegurado demandante **JOSÉ MARÍA DUTARY CALVIÑO**, una pensión de invalidez de carácter provisional por la suma mensual de MIL BALBOAS (B/.1,000.00) calculada sobre un salario mínimo promedio mensual de MIL NOVECIENTOS CUARENTA BALBOAS CON VEINTINUEVE CENTÉSIMOS (B/.1,949.29) a partir del 26 de febrero de 1990, por el término de dos (2) años, toda vez que reúne los requisitos exigidos por el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social para tener derecho a una pensión de invalidez. Que igualmente, se declare que se concede al prenombrado asegurado una pensión de invalidez de carácter definitivo por la suma mensual de MIL BALBOAS (B/.1,000.00) calculada sobre un salario promedio mensual de MIL NOVECIENTOS CUARENTA BALBOAS CON VEINTINUEVE CENTÉSIMOS (B/.1,949.29) a partir del 26 de febrero de 1992, dado que cumple con los requisitos de los artículos 46 y 49-A de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social para tener derecho a una pensión de invalidez de carácter definitivo.

INFORME DE CONDUCTA DE LA ENTIDAD DEMANDADA

De la demanda encausada se le corrió traslado a la institución administrativa demandada (Junta Directiva de la Caja de Seguro Social), quien procedió a rendir su informe explicativo de conducta en los siguientes términos:

Inicialmente, señala la referida entidad estatal que el asegurado fue evaluado por primera vez por la Comisión Médica Calificadora el 8 de diciembre de 1990, evaluando ésta los exámenes y dictámenes proporcionados por la hija del mismo en vista de que el asegurado no se encontraba en el país. Agrega que en aquel momento, la Comisión Médica Calificadora dictaminó que el paciente sufría de insuficiencia renal, que su capacidad para el trabajo había disminuido en un 70%, con un inicio de invalidez en el mes de febrero de 1990. La solicitud le fue negada por no cumplir con lo dispuesto en el artículo 49-B de la Ley Orgánica.

Como consecuencia del proceso administrativo ventilado, indica la aludida entidad, el asegurado fue evaluado en persona por la Comisión Médica Calificadora y mediante informe de 8 de junio de 1993, dictaminó que aunque el asegurado padecía de insuficiencia renal crónica, dicho padecimiento no le impedía realizar sus labores habituales, es decir, no existía el estado invalidante. Sin embargo, posteriormente, el día 22 de marzo de 1995, el asegurado sufrió un accidente automovilístico que automáticamente agravó su condición, por lo que nuevamente es evaluado por la Comisión Médica Calificadora, la cual mediante informe médico de 10 de abril de 1995, dictaminó que el asegurado sufría de insuficiencia renal e hipertensión arterial, que su capacidad para el trabajo había disminuido en un 70%, determinando el inicio de la invalidez en el mes de abril de 1995, por lo que recomienda concederle una pensión de invalidez por el término de dos años.

Señala la referida institución que para el momento en que se dio la precitada evaluación, el expediente se ventilaba en segunda instancia, y es por ello, que en dicha instancia administrativa y ante la existencia de anteriores

negativas de la Comisión de Prestaciones, es que la Junta Directiva de la Institución la que declara el estado invalidante del asegurado, al concederle la prestación y determina la fecha de inicio del pago de la pensión, en base al Informe de la Comisión Médica Calificadora, siendo ésta de abril de 1995. Destaca además, que el dictamen médico inmediatamente anterior había determinado que el asegurado no estaba inválido para laborar por lo que esta nueva evaluación es la que indica a la Junta Directiva la condición de salud del asegurado y el estado invalidante del mismo.

Por las consideraciones anotadas finaliza diciendo la referida entidad estatal, la Junta Directiva al emitir la Resolución N° 10,568-95-J. D. de 20 de julio de 1995, declara el estado invalidante del asegurado y fija la fecha de inicio de pago de la pensión en concordancia con la fecha considerada por los miembros de la Comisión Médica Calificadora como el inicio del estado invalidante del asegurado, abril de 1995. Mal puede pagársele la pensión de invalidez al asegurado desde febrero de 1990, dado que si bien es cierto, la Comisión Médica Calificadora había determinado que estaba inválido, tal estado no fue declarado por la Comisión de Prestaciones, por consiguiente, no se le podía conceder la pensión solicitada.

DISPOSICIONES ACUSADAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

Sostiene el apoderado legal del señor **DUTARY CALVIÑO** que se han infringido los artículos 49 y 49-A de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, modificados por la Ley 30 del 26 de diciembre de 1991, que en el orden citado señalan lo siguiente:

> "**Artículo 49:** La pensión de invalidez comenzará a pagarse desde la fecha en que se declare tal estado. Cuando el beneficiario estuviere en goce de subsidio por incapacidad temporal en el seguro de enfermedad no profesional y maternidad, el pago de la pensión de invalidez comenzará a regir al expirar el derecho al mencionado subsidio."
>
> "**Artículo 49-A:** La pensión de invalidez se otorgará inicialmente con carácter provisional por un período de dos (2) años. Durante este período, la Caja podrá ordenar en cualquier tiempo la revisión de la incapacidad, de oficio o a pedido del interesado, con el fin de investigar si se ha producido reducción o aumento de la incapacidad.
>
> Si subsiste la incapacidad después de transcurrido el período de vigencia provisional, la pensión tendrá carácter definitivo. Sin embargo, podrá efectuarse la revisión de la incapacidad cuando hubiere fundamento para presumir que han cambiado las condiciones esenciales de la estimación de la incapacidad. La pensión de invalidez será vitalicia a partir de la edad mínima fijada para el derecho a pensión de vejez."

Sobre el concepto de la violación del artículo 49 de la Ley bajo examen, el demandante sostiene que el mismo se ha producido de manera directa, toda vez que el texto legal en ella consagrado establece que la pensión por invalidez se comenzará a pagar desde la fecha en que se declare tal estado. Que por lo tanto, la violación alegada se da en razón de que a pesar de que se pudo establecer que la incapacidad que sufre el señor **DUTARY CALVIÑO** es desde 1990, y que a la fecha de 10 de abril de 1995, se establece que es crónica, se ordena pagar desde el 1° de abril de 1995, cuando debió ser desde el 26 de febrero de 1990.

En lo que respecta a la transgresión del artículo 49-A de la precitada Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, manifiesta el recurrente que la resolución cuya declaratoria parcial de ilegalidad se solicita lo vulnera de manera directa, toda vez que al establecerse que su representado padece de insuficiencia renal crónica desde el 26 de febrero de 1990, ello significa que al mismo debió otorgársele una pensión de invalidez de carácter provisional desde el 26 de febrero de 1990, hasta el 26 de febrero de 1992, y una pensión por invalidez de carácter definitivo desde el 26 de febrero de 1992, hasta la actualidad, y en

ambos casos, pagando la suma mensual de B/.1,000.00, ya que el mismo reúne los requisitos exigidos por los artículos 46, 49 y 49-A de la Ley en comento. En este punto, agrega el recurrente, que estima fundamental señalar que desde el primer informe rendido por la Comisión Médica del Departamento de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social en 1990, en donde se estableció que el señor **DUTARY CALVIÑO** padecía de insuficiencia renal, hasta el momento en que este hecho fue confirmado nuevamente mediante el informe de 10 de abril de 1995, en el que se expresó que su mandante sufre de insuficiencia renal crónica con hipertensión arterial lo que ha disminuido su capacidad de trabajo en un 70%, debió pagársele una pensión por invalidez de carácter definitivo una vez se venza el período de la pensión provisional.

CRITERIO DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Mediante Vista Fiscal N° 456 de 30 de octubre de 1995, que corre de folios 35-48 del expediente principal, la Procuradora de la Administración actuando en defensa de los intereses de la Administración Pública, en cumplimiento del ordinal 2 del artículo 348 del Código Judicial, solicitó a esta Corporación de Justicia denegar las declaraciones pedidas por el demandante expresando lo siguiente:

> "Yerra el actor al considerar que es la Comisión Médica calificadora quien declara la invalidez del asegurado a que se refiere el artículo 49 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, cuando por disposiciones de la misma Ley Orgánica, corresponde a la Comisión de Prestaciones tal declaratoria, apoyándose en el Informe de la Comisión Médica Calificadora y demás exámenes y pruebas.
>
> En caso de apelarse de la Resolución, corresponde entonces a la Junta Directiva, declarar la condición del asegurado, para que pueda tener derecho o no a la pensión de invalidez.
>
> En el caso subjúdice, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, mediante Resolución N° 10568-95-J. D. de 20 de julio de 1995, declara el estado invalidante del señor JOSÉ MARÍA DUTARY CALVIÑO, en base al Informe de 10 de abril de 1995, y señala como fecha de inicio del pago de la pensión el mes de abril de 1995.
>
> Con anterioridad no existía pronunciamiento alguno, ni de la Comisión de Prestaciones, ni de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, reconociendo la condición de inválido, del Señor DUTARY CALVIÑO." ...

DECISIÓN DE LA SALA TERCERA

Cumplidos los trámites legales correspondientes, esta Superioridad procede a resolver la demanda.

Por la estrecha relación que guardan entre sí, el Tribunal estima conveniente analizar en conjunto los cargos endilgados a los artículos 49 y 49-A de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, modificada por la Ley 30 de 1991.

La Sala considera que la actuación administrativa de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social contenida en la Resolución 10,568-95-J.D. de 20 de julio de 1995, en virtud de la cual se resolvió a favor del señor asegurado **JOSÉ MARÍA DUTARY CALVIÑO** el pago de una pensión de invalidez por la suma mensual de MIL BALBOAS (B/.1,000.00), por un período de dos (2) años, con efectividad a partir del 1° de abril de 1995, y no partir del 26 de febrero de 1990, contrario a las alegaciones del recurrente, no conlleva vicios de ilegalidad, previas las siguientes consideraciones.

Consta en autos que el día 26 de febrero de 1990, el pensionado **JOSÉ MARÍA DUTARY CALVIÑO**, solicitó ante la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social se le reconociera una pensión por invalidez sin fondo complementario en razón de que a partir del 5 de diciembre de 1990, la Comisión Médica Calificadora

lo evaluó y dictaminó que el mismo padecía de insuficiencia renal, además de que estableció que su capacidad para el trabajo había disminuido en un 70%, y recomendó que al mismo se le concediese una Pensión por Invalidez durante el período de un (1) año (ver fs. 41-42 reverso del expediente gubernativo). De igual manera, a fs. 55 del expediente administrativo, existe evidencia de que dicha solicitud le fue negada por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social mediante Resolución N° 4385 de 4 de agosto de 1992. Contra esta resolución tal como se observa en el legajo contentivo de pruebas aportado al presente proceso, el recurrente presentó en tiempo oportuno el respectivo recurso de reconsideración.

Posteriormente, según se aprecia a fs. 70-72 y reverso del expediente gubernativo, la Comisión Médica Calificadora de Riesgos Profesionales e Invalidez de la Caja de Seguro Social mediante informe fechado 8 de junio de 1993, procedió nuevamente a la evaluación del señor asegurado **DUTARY CALVIÑO** y dictaminó que el mismo padecía de insuficiencia renal crónica, que su capacidad para el trabajo había disminuido en un 30%, y que no estaba incapacitado para trabajar.

Sobre el recurso de reconsideración interpuesto se pronunció la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social mediante Resolución N° 23741 de 9 de agosto de 1993, en virtud de la cual resolvió no acceder a la solicitud de pensión de invalidez del asegurado señor **DUTARY CALVIÑO**. (Cfr. f. 74 del expediente gubernativo).

Contra dicha resolución, el prenombrado asegurado presentó recurso de apelación en el que indicó que debido al progreso de la enfermedad, y por encontrarse desde algún tiempo en estado de debilidad y somnolencia, que afectaron sus reacciones normales, había sufrido un accidente automovilístico el día 22 de marzo de 1995. Agravándose así su cuadro de insuficiencia renal (ver f. 76 del expediente gubernativo).

Ante tal situación, la Comisión Médica Calificadora de Riesgos Profesionales e Invalidez de la Caja de Seguro Social mediante informe calendado 10 de abril de 1995, legible a f. 91 reverso, señaló a la Comisión de Prestaciones Económicas de la aludida entidad de seguridad social, que procedió a realizar una nueva evaluación al señor **DUTARY CALVIÑO** indicándole que el mismo padecía de insuficiencia renal crónica y de hipertensión arterial, que su capacidad para el trabajo disminuyó en un 70%, además, que el inicio de la invalidez era a partir de abril de 1995, razón por la cual recomendaba que se le concediese un pensión de invalidez durante el período de dos (2) años, (al respecto cfr. foja 91 y reverso del expediente administrativo).

Con base en el anterior informe médico, así como también en el informe de 20 de junio de 1995, emitido por la Comisión Asesora Técnica de Riesgos Profesionales e Invalidez de la Caja de Seguro Social, (fs. 97-100) y demás pruebas existentes en el expediente gubernativo, la Junta Directiva de dicho organismo estatal, y dado que era el ente encargado de pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto en su oportunidad por el señor **JOSÉ MARÍA DUTARY CALVIÑO** procedió a emitir la Resolución N° 10,568-95-J. D. de 20 de junio de 1995, acto impugnado, en la cual resolvió a conceder al asegurado **DUTARY CALVIÑO** una pensión de invalidez por la suma mensual de MIL BALBOAS (B/.1,000.00) calculada sobre un salario promedio mensual de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE BALBOAS CON VEINTINUEVE CENTÉSIMOS (B/.1.949.29) a partir del 1° de abril de 1995, por el término de dos (2) años.

Por las consideraciones anotadas, esta Superioridad considera que si bien desde el 26 febrero de 1990, la Comisión Médica Calificadora informó a la Comisión de Prestaciones Económicas de la Institución de que el asegurado **JOSÉ MARÍA DUTARY CALVIÑO** padecía de insuficiencia renal, este dictamen no debe considerarse, contrario a las alegaciones del demandante, cómo el momento a partir del cual procede declarar el estado de invalidez de los asegurados, sino a partir de la declaratoria de invalidez por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 46 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, en concordancia con el parágrafo primero del Artículo 4° del "Reglamento para el Cálculo de las

Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte, Asignaciones Familiares e Indemnizaciones Familiares que Otorga la Caja de Seguro Social", y el Artículo 12 del "Reglamento de la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social" que para mayor ilustración, y en el orden indicado, consideramos oportuno transcribir:

> "**Artículo 46**: Tendrá derecho a pensión de invalidez el asegurado que reúna los siguientes requisitos:
>
> a) **Ser declarado inválido por la Comisión de Prestaciones de la Institución en vista del informe de la Comisión Médica Calificadora y de los demás exámenes y pruebas que estime necesarios;**" ... Lo resaltado es de la Sala.
>
> "**Artículo 4°**: Para efecto del cálculo de las pensiones, se observará el siguiente procedimiento:
> ...
> PARÁGRAFO PRIMERO:
>
> La fecha a partir de la cual el asegurado tendrá derecho a la pensión de invalidez, será según el caso, la siguiente:
>
> 1. **La que establezca la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social, en base al expediente que incluye el informe de la Comisión Médica Calificadora y demás pruebas que se consideren necesarias y en concordancia con el artículo 12 del Reglamento de la Comisión de Prestaciones Económicas** ..." Lo resaltado es nuestro.
>
> "**Artículo 12: La Comisión una vez terminado el estudio del expediente procederá a la aprobación o el rechazo de la solicitud de acuerdo a la Ley y los Reglamentos respectivos.** En caso de concesión se fijará la cuantía, fecha de inicio y término del goce de la prestación y determinará de acuerdo con las condiciones y requisitos que en ejercicio de su derecho debe llenar y observar el asegurado." Lo resaltado es nuestro.

Es evidente que la facultad legalmente establecida de declarar el estado invalidante del asegurado corresponde a la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social, y no a la Comisión Médica Calificadora como señala el recurrente. Mal puede entonces pretender el asegurado **JOSÉ MARÍA DUTARY CALVIÑO** que se declare que es a partir del 26 de febrero del año de 1990, fecha en la que fue evaluado por primera vez por la Comisión Médica Calificadora, cuando no es hasta el 20 de julio de 1995, en que la Junta Directiva de la Institución al conocer de dicho proceso en la segunda instancia administrativa, procedió a declarar que su estado de invalidez era a partir de abril de 1995, tomando como base el informe de 10 de abril de 1995, emitido por la Comisión Médica Calificadora en el que se estableció como inicio de la invalidez abril de 1995. Por consiguiente, es a partir de dicha fecha en que se debe comenzar a pagar la correspondiente pensión de invalidez, en atención al supratranscrito artículo 49 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, modificado por la Ley 30 de 1991.

Cabe anotar que la función de la Comisión Médica Calificadora acorde con las disposiciones contenidas en los artículos I, VI y demás, del Reglamento de las Comisiones Médico Calificadoras aprobado por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social mediante Resolución N° 8375-93-J. D. de 19 de agosto de 1993, es la de determinar (no declarar) el estado de incapacidad de asegurados activos o inactivos o beneficiarios cuando dicho dictamen se requiera para el trámite de alguna actuación o prestación consagrada en la ley Orgánica y los Reglamentos de la Caja de Seguro Social, así como también, la condición médica del beneficiario inválido.

Además de que el inicio de la invalidez que debe señalar la Comisión Médico Calificadora y que consagra el literal c) del Artículo 46 de la Ley Orgánica, constituyen dictámenes previos, o un proceso evaluador de la incapacidad física del asegurado solicitante de la pensión de invalidez previo a la fase declarativa

de dicho estado que como señaláramos en párrafos anteriores, corresponde por mandato legal a la Comisión de Prestaciones Económicas de dicha institución de seguridad social.

En cuanto a la infracción del Artículo 49-A de la Ley Orgánica de la Institución, la Sala estima que al ser declarada la pensión de invalidez, por primera vez, a partir del mes de abril de 1995, como se ha dejado sentado, lo procedente y como bien lo estableciera la Junta Directiva en la Resolución N° 10,568.95 J. D. de 20 de julio de 1995, acusada de ilegal, es que la misma fuese otorgada al asegurado como en efecto se hizo, inicialmente con carácter provisional por un período de dos (2) años. Dándose de esta manera cabal cumplimiento a lo previsto en la disposición antes citada.

Con base a lo expuesto, esta Superioridad considera que no se han producido las transgresiones endilgadas por el demandante a los artículos 49 y 49-A de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social.

En consecuencia, los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativo), de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN QUE NO ES ILEGAL la Resolución N° 10,568-95-J. D. de 20 de julio de 1995, emitida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ARIEL CASTILLERO GONZÁLEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL OFICIO N° A. L. 1778-95 SUSCRITO POR EL SECRETARIO GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL DE 26 DE DICIEMBRE DE 1995, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Luis Felipe Muñoz, actuando en nombre y representación de Ariel Castillero González, ha promovido y sustentado recurso de apelación contra la Resolución de 26 de junio de 1996, mediante la cual el Magistrado Sustanciador **no admitió** la demanda Contencioso Administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el Oficio N° A. L. 1778-95, de 26 de diciembre de 1995, expedido por la Secretaría General de la Policía Técnica Judicial.

En dicha resolución, el Magistrado Sustanciador consideró lo siguiente:

> "De inmediato, advierte el Suscrito Sustanciador que la acción incoada no debe ser admitida dado que ha sido enderezada contra varios actos administrativos consistente en el Oficio A. L. 1778-95 de 26 de diciembre de 1995, suscrito por el Secretario General de la Policía Técnica Judicial, el A. L. 0315-96 de 7 de marzo de 1996 suscrito por el Director General de la Policía Técnica Judicial y el A. L. 0705-96 de 27 de mayo de 1996, suscrito por el Secretario General de la Policía Técnica Judicial ...
>
> Pesé a lo expuesto, se observa que el recurrente no ha individualizado de manera categórica el acto cuya ilegalidad se solicita; en este sentido, a juicio de quien suscribe, una vez resuelto dicho recurso con el cual se agotaba la vía gubernativa, a tenor de lo establecido en el artículo 20 de la Ley 16 de 9 de julio

> de 1991 que aprueba la Ley Orgánica de la Policía Técnica Judicial, y desde el momento en que se notificó del mismo el día 11 de abril de 1996, le asistía el derecho para recurrir ante esta Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, y por ende encauzar su acción contra el acto original contenido en el Oficio N° A. L. 1778-95 de 26 de diciembre de 1995.
>
> No obstante, se constata que el actor insiste nuevamente ante la Policía Técnica Judicial con una solicitud de reintegro presentada el 20 de mayo de 1996, dicha institución nuevamente lo niega mediante oficio A. L. 0705-96 de 27 de mayo de 1996." (F. 20).

El demandante sustentó el recurso de apelación alegando que el acto administrativo contra el cual se interpuso la demanda Contencioso Administrativa sí estaba debidamente individualizado. Esto es así porque el Oficio A. L. 1778-95 se situó en el numeral uno de la sección II. denominada **"Lo que se demanda"** en el escrito de la demanda, y para los efectos de la misma constituye lo que en los procesos contenciosos administrativos se categoriza como acto original o acto originario.

Señala además que los siguientes Oficios A. L.0315-96 de 7 de marzo de 1996 y A. L. 0705-96 de 27 de mayo de 1996 impugnados en la demanda no constituyen actos administrativos diferentes, sino que estos son actos confirmatorios del acto original, situación que nos coloca ante un solo acto administrativo, el cual consiste en la negativa de la Dirección de la Policía Técnica Judicial al reintegro de su representado.

El recurrente afirma que la primera solicitud de reintegro del señor Castillo interpuesta ante la Dirección de la Policía Técnica Judicial, como el recurso de reconsideración fueron contestados mediante Oficio A. L. 1778-95 de 26 de diciembre 1995 y Oficio A. L. 0315-96 de 7 de marzo 1996, los cuales a su juicio son inadecuados ya que éstos no reúnen los requisitos formales de una Resolución. Debido a esta situación decidió no recurrir a la Sala Contencioso Administrativo, sino que, interpuso por segunda vez ante la Dirección de la Policía Técnica Judicial la petición de reintegro de su representado exigiendo una respuesta por medio de Resolución sin embargo señala que, la misma también se dio mediante Oficio A. L. 0705-96 de 27 de mayo de 1996.

Evacuados los trámites de la Ley, el resto de los Magistrados de la Sala proceden a resolver la alzada interpuesta, previas las siguientes consideraciones.

El resto de los Magistrados de la Sala estiman que le asiste razón al recurrente ya que el primero de los actos que se impugna, esto es, el Oficio N° A. L. 1778-95 de 26 de diciembre de 1995, constituye el acto original dictado en repuesta a la petición de reintegro del señor Ariel Castillero González al cargo que ocupaba en la Agencia del D. E. N. I. actualmente Policía Técnica Judicial. Asimismo, el Oficio N° A. L. 0315-96 de 7 de marzo de 1996, es el acto confirmatorio del primer Oficio, dictado en virtud del recurso de reconsideración interpuesto por el licenciado, Luis Felipe Muñoz, contra este último acto.

Finalmente, se impugna el Oficio N° A. L. 0705-96 de 27 de mayo de 1996, el cual se dictó en respuesta a una misma solicitud de reintegro que erróneamente hizo el apoderado judicial del demandante mucho antes de vencerse el término para impugnar el acto original ante esta Sala. Tal como consta en la parte final del citado Oficio N° A. 0705, éste se limita a reiterar **la negativa de acceder a la petición de reintegro del señor ARIEL CASTILLERO GONZÁLEZ al cargo que ocupaba en el D. E. N. I. actualmente Policía Técnica Judicial.**

Si bien, como afirma el Magistrado Sustanciador, reiterada jurisprudencia de esta Sala ha insistido en la necesidad de individualizar los actos administrativos con toda precisión, en el presente caso se justifica la presentación de la demanda contra los citados oficios, ya que todos ellos niegan las solicitudes de reintegro del demandante hechas por su apoderado judicial. La inadmitida demanda tiene como objeto, la nulidad de los oficios impugnados y la

consecuente restitución del señor Castillero González a su cargo público, con el pago de los salarios no percibidos, y fue presentada el 11 de junio de 1996, antes de que prescribiera la acción, contando el término de dos meses a partir de la fecha en que se notificó el acto confirmatorio, el 11 de abril de 1996.

Por otra parte, cabe agregar que, el hecho de que el funcionario público haya actuado mediante un oficio, no significa que su actuación sea inadecuada o que la misma debió ser a través de una Resolución para poder impugnarse. Tal y como lo señala el numeral 1 del artículo 98 del Código Judicial, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de cualquier acto administrativo que se acuse de ilegal.

En virtud de lo anterior, lo procedente es revocar el auto apelado.

De consiguiente, el resto de los Magistrados que integran la Sala REVOCAN la Resolución de 26 de junio de 1996, dictada por el Honorable Magistrado Sustanciador y en consecuencia, ADMITEN la presente demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Luis Felipe Muñoz E. en nombre y representación del señor ARIEL CASTILLERO GONZÁLEZ, contra los Oficios N° A. L. 1778-95, N° A. L. 0315-96, N° A. L. 0705-96, y para que se hagan otras declaraciones.

Envíese copia de esta demanda al Director General de la Policía Técnica Judicial, para que rinda un informe de conducta, dentro del término de cinco días, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 33 de la Ley 33 de 1946.

Se corre traslado a la Procuradora de la Administración por el término de cinco días.

Ábrase a prueba la presente causa, por el término de cinco días.

Téngase al licenciado Luis Felipe Muñoz, como apoderado de la Parte Actora.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO HERNÁN BONILLA, EN REPRESENTACIÓN DE PABLO MORÁN BATISTA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO N° 57 DE 14 DE MARZO DE 1995, DICTADO POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Hernán Bonilla, actuando en nombre y representación de **PABLO MORÁN BATISTA**, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto N° 57 de 14 de marzo de 1995, dictado por conducto del Ministerio de Educación.

La parte actora solicita además que se le restituya al cargo de Jefe de Administración, Contabilidad y Finanzas en la oficina Ejecutora del Programa Educación-BID del Ministerio de Educación, en el que fue nombrado mediante el Decreto de Personal N° 267 de 6 de julio de 1992, y se le pague los salarios dejados de percibir durante el tiempo que no ha estado laborando como funcionario de esa institución. (Fs. 10).

Admitida la presente demanda se corrió en traslado al señor Procurador de la Administración, quien mediante la Vista Fiscal N° 486 de 16 de noviembre de 1995, solicitó a esta Sala denegar las pretensiones del demandante (fs. 34-40); además, se solicitó al funcionario demandado que rindiera el informe que exige el artículo 33 de la Ley 33 de 1946, el que fue evacuado en los siguientes términos:

> "... la posición de Jefe de Administración, Contabilidad y Finanzas, que ocupaba **PABLO MORÁN BATISTA**, no forma parte de la Carrera Docente, ya que no está contemplada en el escalafón establecido en la Ley 47 de 1979 que regula lo concerniente al escalafón y a la política salarial de los educadores. Por consiguiente, esta posición es considerada de libre nombramiento y remoción de la Administración, ya que no forma parte de la Carrera Pública y, en particular, de la Carrera Docente.
>
> El Artículo Segundo de la Ley 9 de 20 de junio de 1994, por la cual se establece y regula la Carrera Administrativa, respecto del Servidor Público de Libre Nombramiento y Remoción, señala lo siguiente:
>
> "Servidor Público de Libre Nombramiento y Remoción: Aquellos que trabajan como personal de secretaria, asesoría, asistencia o de servicio inmediatamente adscrito a los servidores que no forman parte de ninguna carrera y que, por la naturaleza de sus funciones, están sujetos a que su nombramiento esté fundado en la confianza de sus superiores y a que la pérdida de dicha confianza acareé la remoción del puesto que ocupan."
>
> Esta disposición está en concordancia con lo establecido en los Artículos 295, 300 y 302 de la Constitución Nacional, que se refieren a las Carreras Públicas y al sistema de méritos dentro del engranaje gubernamental.
>
> El demandante **PABLO MORÁN BATISTA**, no prueba en modo alguno que su ingreso a este Ministerio fue producto de un concurso de méritos, de conformidad con lo que prescribe la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación; todo indica en consecuencia, que se trata de una designación personal del Ministro de Educación para esa fecha. Por consiguiente, es una posición administrativa que no forma parte de la Carrera Docente o Pública y es, en ese sentido, que dicha posición se tiene como de libre nombramiento y remoción, al ser de confianza y colaboración con la máxima autoridad de la administración. (Fs. 29-33).

La parte actora estima que el acto administrativo impugnado viola el artículo 127 de la Ley 47 de 24 de septiembre de 1946, cuyo texto transcribimos a continuación:

> "**Artículo 127**. Todo miembro del personal docente, o administrativo del Ramo de Educación inclusive quienes presten servicios de portería, como los porteros, aseadores, mensajeros, etc., que haya sido nombrado o que posteriormente se nombre, de acuerdo con las disposiciones presentes a esta Ley, continuará prestando servicio durante todo el tiempo que dure su eficiencia y buena conducta y el término de su licencia cuando se trate de maestro o profesor.
>
> Los empleados del Ramo de Educación no podrán ser trasladados a otra Escuela, o a otro lugar sino en concepto de recompensa para lo cual debe dárseles previo aviso para que den a conocer al Ministerio de conformidad o disconformidad con el mismo, o en los casos previstos en el Parágrafo de este Artículo, o como sanción por falta cometida, de acuerdo con las disposiciones que en esta Ley se establezcan. Tampoco podrán ser removidos sino mediante el proceso establecido en esta Ley."

En el concepto de la infracción de la norma transcrita el demandante indicó que la Ley 47 de 1946 desarrolla la carrera docente establecida en la Constitución, la cual se basa en el sistema de méritos, es decir, para ingresar en ella es necesario que los maestros o profesores que ejerzan la docencia hayan ingresado por concurso de méritos; sin embargo, la estabilidad los alcanza aún cuando ejerzan cargos administrativos en el ramo de educación. Nada dice la Ley en cuanto a la forma para llegar a ser miembro del personal administrativo del ramo de educación, y por tanto debemos entender que cualquier persona, que no sea maestro o profesor y sea nombrado en un cargo administrativo no puede ser libremente removido de su cargo por la autoridad que lo nombró, salvo cumpliendo el procedimiento que consagra la Ley.

A continuación los Magistrados que integran la Sala, proceden a resolver la presente controversia.

Nuestra Constitución Nacional, en sus artículos 295 y siguientes instituye las carreras públicas, y en sus artículos 297 y 300 consagra que, los principios para los nombramientos, ascensos, suspensiones, traslados, destituciones, cesantía y jubilaciones serán determinados por la Ley y que será la Ley la que regulará la estructura y organización de dichas carreras de conformidad con las necesidades de la Administración. Por tanto, ninguna norma de categoría inferior a la ley puede otorgar estabilidad a un funcionario público. Señalan además estas normas, que los nombramientos que recaen en el personal de carrera se harán con base en el sistema de méritos y que las dependencias oficiales funcionaran a base de un Manual de Procedimiento y otro de Clasificación de Puestos.

El 24 de septiembre de 1946 fue dictada la Ley N° 47 Orgánica de Educación, que desarrolla la carrera docente y que en su artículo 127 otorga el derecho a la estabilidad, tanto a docentes como administrativos del Ramo de Educación, durante todo el tiempo que dure su eficiencia y buena conducta, que hubiesen sido nombrados o que se nombren de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. Esta norma está en concordancia con los artículos 115 y 119 de la Ley 47 de 1946, los cuales preceptúan que, los nombramientos y promociones de los miembros del personal docente y administrativo del Ramo de Educación serán decretados por el Órgano Ejecutivo de acuerdo con el Escalafón y las normas que esta Ley establece; y que todo miembro del personal docente o administrativo del Ramo de Educación en servicio o que aspire a ingresar a él, debe registrar en el Ministerio de Educación, si no lo ha hecho, los títulos profesionales exigidos por la Ley 47 de 1946, para desempeñar el cargo que ejerce o aspira ejercer.

Esta Sala ha reiterado en diversas ocasiones, que el hecho de que ciertos empleados administrativos gocen de estabilidad en el puesto, situación que limita traslados y despidos, se debe a que los cargos que ocupan han sido ganados por el sistema de méritos o concursos, o por el tiempo de servicio en la Institución.

Observa la Sala, que el señor **PABLO MORÁN BATISTA** fue nombrado mediante el Decreto número 267 de 6 de julio de 1992, en el cargo de Jefe de Administración, Contabilidad y Finanzas de la Oficina Ejecutora del Programa Educación-BID, por tanto se trata de un funcionario público del Ramo de Educación, que ocupaba un cargo administrativo dentro del Ministerio de Educación.

Tal como lo afirma el propio demandante a foja 13 del expediente, la carrera docente, al igual que todas las carreras públicas, se basa en el sistema de méritos. Esta exigencia es aplicable también a los administrativos del Ramo de Educación, y no sólo a los docentes, como ha querido hacer ver el demandante. La carrera de los docentes está reglamentado, entre otras, por la Ley N° 12 de 1956 modificada por la Ley 82 de 1963, mediante la cual se crea la Dirección de Personal en el Ministerio de Educación y se regula la Junta de Personal, que ejerce la función de reclutar los candidatos para llenar las vacantes que ocurren entre los maestros, profesores, directores y subdirectores de escuelas primarias y colegios secundarios, inspectores de educación primaria y superiores de educación secundaria.

Entre las pruebas aportadas por el señor **PABLO MORÁN BATISTA** no reposa documento alguno en que conste que el cargo que ocupaba como Jefe de Adminis-

tración, Contabilidad y Finanzas, lo obtuvo por concurso de méritos. Tampoco ha presentado prueba del registro de los títulos profesionales que se exigen para desempeñar el cargo de Jefe de Administración, Contabilidad y Finanzas, tal como lo exige el artículo 119 de la Ley 47 de 1946.

Por tanto, a juicio de la Sala el cargo que ocupaba el demandante no forma parte de la estructura del personal administrativo del Ramo de Educación con estabilidad, y la Sala considera que no se ha violado el artículo 127 de la Ley 47 de 1946.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, el Decreto de Personal N° 57 de 14 de marzo de 1995, emitido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Educación.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE AROSEMENA, NORIEGA Y CONTRERAS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD SOL LIMITED, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 3-5989, DEL 8 DE AGOSTO DE 1994, DICTADA POR LA COMISIÓN DE CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL; ASÍ COMO LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Arosemena, Noriega y Contreras, presentó, ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 3-5989 del 8 de agosto de 1994, expedida por la Comisión de Clasificación de Empresas de la Caja de Seguro Social; la negativa tácita por silencio administrativo al no resolver los recursos gubernativos interpuestos contra la citada resolución, y para que se hagan otras declaraciones.

La parte pertinente de la Resolución acusada es del tenor siguiente:

"Panamá, 8 de agosto de 1994

RESOLUCIÓN N° 3-5989
LA COMISIÓN DE CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS
DE LA
CAJA DE SEGURO SOCIAL

CONSIDERANDO:

Que según el Decreto de Gabinete N° 68 del 31 marzo de 1970, se centralizó en la Caja de Seguro Social, la cobertura obligatoria de los riesgos profesionales.

Que en el Título V, del mencionado Decreto se estipula como (sic) se determina la Prima que deberá pagar cada empleador en concepto de Riesgos Profesionales.

Que la Comisión ha estudiado la solicitud de inscripción de la empresa SCHERING OVERSEAS LIMITED.

RESUELVE:

> Clasificar a la empresa SCHERING OVERSEAS LIMITED con número patronal de Seguro Social 30-611-0429 en la clase de riesgo III y por lo tanto pagará el 1.545 de los salarios mensuales pagados a los trabajadores en concepto de Prima de Riesgos Profesionales. Esta resolución entrará a regir, contados treinta días a partir de su notificación. ..." (F. 1).

Corrido el traslado a la Procuradora de la Administración, ésta se opuso a las pretensiones de la demandante, mediante Vista N° 326, del 2 de agosto de 1995 (fs. 32-39); mientras que el representante legal de la entidad demandada rindió su informe de conducta a través de su Nota S/N°, del 13 de junio de 1995 (fs. 29-31).

LAS NORMAS VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

La primera norma que se cita como violada es el artículo 54 del Decreto de Gabinete N° 68 del 31 de marzo de 1970, cuyo tenor literal es el siguiente:

> "Artículo 54. Cada tres años, la Caja efectuará la revisión de las clases y grados de riesgos; pero la caja estará facultada para disponer que se efectúe la revisión en cualquier tiempo, si la experiencia adquirida por la estadística de los riesgos profesionales así lo aconsejare."

La apoderada de la demandante considera que esta norma ha sido violada en forma directa, por comisión, dado que el acto impugnado dispone que se clasifique a la empresa en un nuevo grado de riesgos, lo cual contraría lo dispuesto en la norma transcrita, que permite la revisión del riesgo, pero no permite la clasificación o reclasificación del mismo.

También se estima violado el primer párrafo del artículo 59 del mencionado Decreto de Gabinete, el cual preceptúa lo siguiente:

> "Artículo 59. Los patronos están obligados a pagar en la Caja de Seguro Social las primas correspondientes a las tarifas que ésta fije en base al Reglamento de Clasificación de Empresas. ..."

Al exponer el concepto de la infracción la apoderada judicial de la demandante señala, que la aludida norma fue violada en forma directa, por comisión, ya que no se aplicó al supuesto que nos ocupa. La norma transcrita exige que las tarifas sean fijadas en base al Reglamento de Clasificación de Empresas, lo cual no ha ocurrido en este caso, ya que el acto acusado se fundamenta en el Decreto de Gabinete N° 68 de 1970 y no el Reglamento de Clasificación de Empresas, el cual contiene normas precisas para la reclasificación del riesgo de una empresa.

Asimismo, en la demanda se cita como infringido el artículo 24 del Acuerdo N° 2 de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, por el cual se dictó el Reglamento General de Inscripciones, Clasificación de Empresas y Recaudos de Seguro de Riesgos Profesionales. La norma aludida, establece las reglas que debe seguir la Caja de Seguro Social para la modificación de los grados de riesgos.

Finalmente, la actora considera que el acto impugnado viola el artículo 19 del mencionado Acuerdo N° 2, el cual tiene el contenido siguiente:

> "Artículo 19. La clasificación de las Empresas será hecha por la Dirección de Riesgos Profesionales, pero necesitará para su validez de la aprobación de la Comisión de Clasificación de Empresas, de que tratan los artículos 63 y 64 del Decreto de Gabinete N° 68 de 1970."

La actora manifiesta que el acto acusado violó la norma en examen, porque el funcionario que lo dictó carecía de competencia para ello. Agrega, que la clasificación fue hecha por la Comisión de Clasificación y no por la Dirección de Riesgos Profesionales, como dispone aquélla norma (fs. 11-15).

DECISIÓN DE LA SALA TERCERA

La primera norma que se cita como violada es el artículo 54 del Decreto de Gabinete N° 68 de 1970, el cual faculta a la Caja de Seguro Social para **revisar** cada tres años, o, en cualquier tiempo, cuando la experiencia adquirida por la estadística de los riesgos profesionales así lo aconsejare, las clases y grados de riesgos. En opinión de la actora, esta norma ha sido violada porque sólo permite la revisión del riesgo y no la clasificación o reclasificación del mismo.

A juicio de la Sala, no le asiste razón a la demandante, pues, si bien la norma in comento utiliza el vocablo "**revisión**" y no el de "**reclasificación**" **o** "**modificación**", ello no significa, ni puede interpretarse en el sentido de que la Caja de Seguro Social esté impedida para modificar las clases y grados de riesgos asignados a una empresa, cuando existan razones que así lo justifiquen. Podría ocurrir, por ejemplo, que desde el momento de su clasificación por parte de la Caja de Seguro Social, una empresa haya variado las actividades originalmente declaradas, o que las condiciones de seguridad e higiene ofrecidas por la misma se hayan deteriorado, que el índice de accidentes de trabajo haya aumentado, etc., con la consiguiente necesidad de aumentar también la clase o el grado de riesgo asignado por la Caja, según el caso.

A juicio de la Sala, el vocablo "revisión" es una expresión genérica que, de por sí, supone la posibilidad de modificar la clase y grado de riesgo en que ha sido clasificada una empresa, siempre y cuando se cumplan presupuestos legales como los ya señalados.

Sobre el punto, debe observarse, que el artículo 24 del Reglamento General de Inscripciones, Clasificaciones de Empresas y Recaudos de Seguro de Riesgos Profesionales, (adoptado mediante el Acuerdo N° 2 del 29 de mayo de 1970 y vigente en el momento en que se dictó el acto acusado), dictado en desarrollo de aquélla norma, también utilizó la expresión "**revisión**" para referirse, precisamente, a la "**modificación**" del grado de riesgo asignado a una empresa. La aludida norma establece en su parte inicial, lo siguiente:

> "Artículo 24. Para la modificación de los grados de riesgo, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 14 del presente Reglamento, señálanse las siguientes reglas:
>
> **Primera**: Después de transcurrido un año, por lo menos, desde la fecha de inscripción de una empresa en el Seguro de Riesgos Profesionales, el patrono podrá pedir a la Institución **la revisión del grado de riesgo** en que ha quedado clasificada su empresa. La solicitud deberá hacerse por escrito, indicando claramente las medidas de prevención de los riesgos de trabajo en que fundamenta su solicitud. ..."

Finalmente, se debe indicar que esta Sala ya se ha pronunciado sobre la facultad de la Comisión de Clasificación de Empresas de **revisar** y modificar periódicamente la clase y grado en que están ubicados cada uno de los establecimientos empresariales. Entre esos pronunciamientos está la Sentencia del 30 octubre de 1995, cuya parte pertinente expresa lo siguiente:

> Observa igualmente la Sala que dentro del expediente se evidencia que la Empresa Textiles La Chorrera no había sido objeto de evaluación pormenorizada durante todo el tiempo de operaciones. Es en razón de lo anterior, que la Comisión de Clasificación de Empresas efectúa la **reclasificación** con fundamento en lo dispuesto en el artículo 54 del Decreto N° 68 de 31 de marzo de 1970, en el cual se prevé la **revisión** de las clases y grados de riesgos cada tres años por parte de la Caja de Seguro Social.
>
> (Reg. Jud. de octubre de 1995, págs. 370-374) (Los subrayados son de la Sala).

Por las razones anotadas, la Sala debe desestimar el primer cargo.

La segunda norma que se dice violada es el artículo 59 del Decreto de Gabinete N° 68 de 1970, precepto que obliga a todo patrono a pagar a la Caja de Seguro Social las primas correspondientes a las tarifas que ésta les fije **"en base al Reglamento de Clasificación de Empresas"**. Este Reglamento contiene, pues, las condiciones o requisitos en base a los cuales la Comisión de Clasificación de Empresas debe ubicar a cada una de ellas dentro de su respectiva clase y grado de riesgo, con el propósito de fijarle la prima que deben pagar en concepto de riesgos profesionales.

La firma apoderada de SOL LIMITED considera que el precepto en cita se violó porque la tarifa impuesta a su representada no se fijó en base al Reglamento de Clasificación de Empresas.

El artículo 11 de este Reglamento, contiene los elementos que la Caja de Seguro Social debe considerar para distribuir a las empresas en clases y grados de riesgo. La norma in comento es del tenor siguiente:

> "Artículo 11° La distribución de las empresas en las clases y grados de riesgo establecidos en el artículo 49 del Decreto de Gabinete N° 68 de 1970, se hará teniendo en cuenta:
>
> a) Para la clase de riesgo, la actividad predominante o principal que desarrolle cada empresa según la mayor o menor peligrosidad que la actividad presente.
>
> b) Para los grados de riesgo, la frecuencia o severidad de los accidentes que ocurran en la empresa de que se trate y las medidas de seguridad adoptadas por el patrono."
>
> **Parágrafo**: Para los efectos del presente artículo, la Caja de Seguro Social llevará estadísticas por cada empresa, en las que se registren los accidentes ocurridos y la severidad de los mismos."

Si bien la parte pertinente de la norma transcrita alude a la **"distribución de las empresas"**, es evidente que a estos mismos parámetros debe ajustarse la Comisión de Clasificación de Empresas en el momento en que, con fundamento en el artículo 50 del Decreto de Gabinete N° 68 de 1970, revisa la clase y grado de riesgo en que se encuentran ubicadas cada una de ellas. Este criterio se dejó claramente plasmado en la sentencia supra citada, en los siguientes términos:

> "A juicio de la Sala, la reclasificación de la Empresa Textiles La Chorrera, S. A. dentro de la Clase de riesgo III, grado 30, tiene claro fundamento en lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto de Gabinete N° 68 de 31 de marzo de 1970 conjuntamente con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento en mención. Dichas disposiciones establecen que la clasificación de las empresas se hará tomando en cuenta la actividad principal o predominante que cada una desarrolle, en este caso, el ensamblaje de ropa interior de mujer el cual tiene riesgos ocupacionales inherentes, tales como los "riesgos ergonómicos" que implica largos períodos de tiempo sentados y afecciones respiratorias, como se observa en el Informe N° DAL-IJD-32-94 de 11 de mayo de 1994 para la Junta de la Caja de Seguro Social que reposa de fojas 27 a 29 del expediente administrativo. Una vez efectuada la clasificación para la clase de riesgo según la actividad principal o predominante de la empresa, se determina el grado de riesgo, y el artículo 11 literal b) del reglamento y el artículo 50 del Decreto 68 de 31 de marzo de 1970 regulan esta situación cuando establecen que los grados de riesgos se determinan por la frecuencia o severidad de los accidentes de los accidentes que ocurran en la empresa, conjuntamente con las medidas de seguridad adoptadas por el patrono y en atención a las medidas de prevención e higiene más otros elementos que inciden en los riesgos particulares de cada empresa respectivamente." (Ibídem, pág. 373).

No obstante lo expresado, la Sala considera que, en el presente caso, la

Comisión de Clasificación de Empresas no ha demostrado que la modificación de la clase y grado de riesgo en que fue ubicada la empresa SOL LIMITED por medio del acto acusado, se fundamentó en alguno de los elementos contemplados en aquélla norma, es decir, en la peligrosidad de las actividades de esta empresa, en la ausencia o deficiencia de las medidas de prevención e higiene del trabajo, condiciones de éste u otros elementos que hayan influido en el riesgo de dicha empresa; en el índice de accidentes que hayan ocurrido en la empresa y en la severidad de los mismos, etc.

Lo primero que cabe señalar a este respecto, es que la resolución impugnada no contiene motivación alguna que permita a la Sala conocer las razones que llevaron a la Comisión de Clasificación de Empresas a modificar la clase y el grado en que originalmente fue ubicada SOL LIMITED. El artículo 20 del Reglamento mencionado establece que las "decisiones de la Comisión de Clasificación de Empresas se adoptarán por medio de Resoluciones", lo cual supone necesariamente que estas decisiones deben estar debidamente motivadas a fin de que el afectado conozca las razones o motivos en que las mismas se fundan y pueda hacer uso adecuado de los recursos legales que la Ley pone a su alcance para enervar sus efectos. El ordinal 4 del artículo 1193 del Código Fiscal exige que las resoluciones administrativas fiscales sean motivadas y se aplica en general a todos los casos. En segundo lugar, se observa que para la fecha en que fue emitida la Resolución acusada (**8 de agosto de 1994**) no existía en el expediente administrativo de esta empresa ninguna prueba de la cual pudieran deducirse elementos de juicio para modificar la Clase II y grado de riesgo 14, previamente asignados. Lo anterior es así porque la "Inspección de Higiene y Seguridad" del Programa de Salud Ocupacional de la Caja de Seguro Social, cuyo informe reposa en el expediente administrativo, fue practicada en las instalaciones de dicha empresa el día **7 de julio de 1995**, es decir, en fecha posterior a la expedición del acto que se acusa.

Igual situación ocurrió con el informe estadístico preparado por el Departamento Nacional de Estadísticas de la Dirección Nacional de Planificación de la mencionada institución, sobre los accidentes de trabajo registrados por la Caja de Seguro Social durante los años 1992, 1993 y 1994. En este informe, que también es de fecha posterior a la del acto acusado (**11 de mayo de 1995**), se observa que durante el aludido período no se han registrado accidentes de trabajo en la empresa SOL LIMITED (antes SHERING OVERSEAS LIMITED).

Por otra parte, de acuerdo con el Oficio SIRP. N. N° 63-96, del 6 de marzo de 1996, consultable en el expediente administrativo, con anterioridad al 12 de julio de 1995 no existe en los archivos de la Sección de Trámite de Riesgos Profesionales y de los Servicios Médicos de Riesgos Profesionales constancia de atención, reclamación o prestación de riesgos de los trabajadores de la empresa: Craig Olson, Edgar De León, Sophia de Feuillet y Rafael Palacios. Según el mismo Oficio, el Departamento de Seguridad Ocupacional de la Caja de Seguro Social tampoco ha emitido nota o comunicación alguna en la que recomiende a la empresa SOL LIMITED, medidas de seguridad e higiene para evitar riesgos profesionales.

Los hechos señalados llevan a esta Sala a concluir que, al emitir la Resolución N° 3-5989 del 8 de agosto de 1994 para modificar la Clase y el grado de riesgo en que estaba ubicada SOL LIMITED, la Comisión de Clasificación de Empresas de la Caja de Seguro Social no valoró ninguno de los elementos a que se refiere el artículo 50 del Decreto de Gabinete N° 68 de 1970. Siendo ello así, el acto impugnado infringió el artículo 59 supracitado, pues, a través de dicho acto se está obligando a la empresa SOL LIMITED a pagar a la Caja de Seguro Social primas en concepto de riesgos profesionales de sus trabajadores que no se han fijado **"en base al Reglamento de Clasificación de Empresa"**, tal y como ordena aquélla norma.

También se cita como violado el artículo 24 del Reglamento General de Inscripciones, Clasificación de Empresas y Recaudos de Seguro de Riesgos Profesionales, adoptado mediante el Acuerdo N° 2 del 29 de mayo de 1995, de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, promulgado en la Gaceta Oficial N° 22.805, del 15 de junio de 1995. Como puede observarse, dicho Acuerdo entró a regir en fecha posterior a aquélla en la que se dictó el acto acusado de ilegal,

por lo cual, la Sala debe desestimar el cargo de violación formulado contra el citado artículo 24.

Finalmente, la apoderada judicial de SOL LIMITED considera que el acto acusado violó el artículo 19 del mencionado Acuerdo N° 2 del 29 de mayo de 1995, ya que éste debió dictarlo la Dirección de Riesgos Profesionales y no por la Comisión de Clasificación de Empresas de la Caja de Seguro Social.

La Sala estima que no le asiste razón a la demandante. El aspecto relativo a la competencia de la referida Comisión fue considerado por esta Sala en la citada Sentencia del 30 de octubre de 1995, en cuya parte pertinente se expresó:

> "Para resolver, la Sala entra a considerar en primer lugar, la facultad de la Comisión de Clasificación de Empresas de la Caja de Seguro Social para efectuar la clasificación de las empresas y la asignación del grado de riesgo en la respectiva clase. En relación a ello, se observa que en el artículo 19 del Acuerdo N° 2 por el cual se dicta el Reglamento General de Inscripciones, Clasificación de Empresas y Recaudos de Seguro de Riesgo Profesionales, se le asigna a la Dirección de Riesgos Profesionales dicha función bajo la aprobación de la Comisión de Clasificación de Empresas. El artículo en mención, nos remite a su vez a los artículos 63 y 64 parte final del Decreto de Gabinete N° 68 de 1970, donde se prevé claramente la competencia de dicha comisión para efectuar la clasificación y la asignación del grado de riesgo en la clase que corresponda, para los efectos de la fijación de las primas del Seguro de Riesgos Profesionales a que alude el artículo 49 del mismo decreto." (Ibídem, pág. 373).

En atención a lo anotado la Sala también debe rechazar el último cargo.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES NULA, POR ILEGAL la Resolución N° 3-5989 del 8 de agosto de 1994, dictada por la Comisión de Clasificación de Empresas de la Caja de Seguro Social, y ORDENA que en su lugar se mantenga la clasificación, el grado de riesgo y la tarifa vigente antes de dictarse la Resolución anulada.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ARISTIDES G. FIGUEROA, EN REPRESENTACIÓN DE EZEQUIEL DAWSON VALDIVIESO, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO N° 215 DE 15 DE MARZO DE 1995, EXPEDIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Aristides Figueroa, actuando en nombre y representación de **EZEQUIEL DAWSON VALDIVIESO**, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el Artículo décimo primero del Decreto Ejecutivo N° 215 de 15 de marzo de 1995, expedido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La parte actora solicita además que se le restituya al cargo que ocupaba

en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y se le pague los salarios dejados de percibir como consecuencia del decreto de destitución.

Por medio del acto impugnado se declaró sin efecto el nombramiento del señor **EZEQUIEL DAWSON VALDIVIESO**, como Divisionario de Política Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con salario mensual de B/.1,170.00.

Admitida la presente demanda se corrió en traslado a la señora Procuradora de la Administración, quien mediante la Vista Fiscal N° 433 de 13 de octubre de 1995, solicitó a esta Sala denegar las pretensiones del demandante (fs. 31-40); además se solicitó al funcionario demandado que rindiera el informe de conducta a que se refiere el artículo 33 de la Ley 33 de 1946, lo que hizo oportunamente (fs. 29-30).

La parte actora estima que el acto administrativo impugnado viola el artículo 23 de la Ley N° 7 de 1981, el cual preceptúa lo siguiente:

LEY N° 7 DE 14 DE ABRIL DE 1981.

"Artículo 23. Los profesionales de la economía gozarán de estabilidad en sus cargos condicionada a su competencia, lealtad y moralidad en el servicio."

En el concepto de la infracción de la norma transcrita el demandante indicó que la misma se ha violado por omisión, porque el señor **EZEQUIEL DAWSON VALDIVIESO** es economista de profesión y está amparado por la estabilidad que consagra la Ley N° 7 de 1981; que los profesionales de las ciencias económicas no pueden ser destituidos de sus cargos, salvo que su conducta se subsuma en alguna de las causales de destitución contempladas en el Reglamento Interno de Trabajo de la institución respectiva; y que el señor **EZEQUIEL DAWSON VALDIVIESO** ejerció sus funciones como servidor público en el Ministerio de Relaciones Exteriores por dieciocho (18) años, con arreglo a los principios de competencia, lealtad y moralidad.

A este cargo se opuso la señora Procuradora de la Administración expresando que, "cualesquiera regulación jurídica, consagratoria del derecho de estabilidad, no le es aplicable al caso en controversia, ya que los empleados públicos no gozan de estabilidad hasta tanto no se implemente la Ley de Carrera Administrativa, cosa que no se ha realizado hasta el momento"; que la estabilidad de los economistas consagrada en la Ley 7 de 1981 es un principio que no ha sido reglamentado ni desarrollado porque tan sólo señala la norma que gozan de estabilidad, mientras que nuestra Constitución exige que las carreras públicas se funden en el principio del sistema de méritos; que al señor **EZEQUIEL DAWSON VALDIVIESO**, le son aplicables las normas constitucionales y legales sobre servidores públicos, y como no se ha puesto en ejecución la carrera administrativa, mal puede invocar derecho a estabilidad en el cargo; y que en virtud de que el señor **EZEQUIEL DAWSON VALDIVIESO** fue nombrado discrecionalmente, sin sujeción a ninguna Ley de Carrera, su remoción también es discrecional.

Cumplidos los trámites de ley, procede la Sala al examen del cargo de ilegalidad que la parte actora endilga al acto acusado.

Tal como lo expresa la señora Procuradora de la Administración, al señor **EZEQUIEL DAWSON VALDIVIESO** le son aplicables las normas constitucionales y legales que consagran el régimen de los servidores públicos. Nuestra Constitución regula en el Título XI este tema y establece que el nombramiento y remoción de los servidores públicos no será potestad absoluta de ninguna autoridad, salvo lo que al respecto dispone la propia Constitución, y ésta preceptúa que **los servidores públicos se regirán por el sistema de méritos y la estabilidad en sus cargos estará condicionada a su competencia, lealtad y moralidad** (art. 295); **instituye** además, las carreras públicas conforme a los principios del sistema de méritos (art. 300); y consagra que los deberes y **derechos** de los servidores públicos, así como los principios para los nombramientos, ascensos, suspensiones, traslados, **destituciones**, cesantía y jubilaciones serán determinados por la Ley y que los nombramientos que recaigan en el personal de carrera se harán con base en el

sistema de méritos (art. 297).

En relación con las normas mencionadas, esta Sala señaló en sentencia de 11 de agosto de 1992 lo siguiente: para que la estabilidad de los servidores públicos en el empleo esté garantizada mientras dure su competencia, lealtad y moralidad en el servicio, "es menester que el legislador colateralmente a dichas normas constitucionales expida la Ley de Carrera Administrativa para todos los servidores públicos." (Sentencia de 11 de agosto de 1992, en demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto N° 173 de 31 de diciembre de 1990, Registro Judicial, p. 31). Además del fallo enunciado, en sentencia de 23 de mayo de 1991, al resolver la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Ley N° 25 de 14 de diciembre de 1990, la Corte expresó sobre el artículo 295 lo siguiente:

> "Este inspirado precepto, al igual que casi todos los que aparecen en el Título XI, sobre los servidores públicos, está supeditado al establecimiento y existencia efectiva de las carreras públicas, ...
>
> Así, puede verse que, según el transcrito artículo, "los servidores públicos se regirán por el sistema de méritos". Este sistema es típico y exclusivo de la carrera administrativa y de las otras carreras públicas. Y de igual manera lo es la regla invocada por los demandantes de que el nombramiento y remoción de los empleados públicos no es potestad absoluta y discrecional de ninguna autoridad.
>
> Por todo lo expuesto, pues, el invocado artículo 295 de la Constitución, como casi todos los demás del Título XI de la Constitución, sólo cobraría vigencia cuando se restablezcan las carreras públicas que dicho Título menciona." Registro Judicial, P. 100-101).

Por tanto, si bien el artículo 295 de la Constitución Nacional preceptúa que el nombramiento y remoción de los servidores públicos no es potestad discrecional de ninguna autoridad, la norma agrega al final del párrafo como excepción "lo que al respecto disponga la Constitución". Y en este sentido, tal como ha quedado expresado, nuestra Constitución dispone que los servidores públicos y las carreras en la función pública se rigen por el sistema de méritos, y que los deberes y derechos de estos funcionarios deben consagrarse en la Ley.

Observa la Sala, que a pesar de ser una Ley la que se invoca como fundamento de la estabilidad del señor **EZEQUIEL DAWSON VALDIVIESO**, ésta no desarrolla ni reglamenta un régimen de carrera, ni consagra los deberes y derechos respectivos, tampoco consagra esta Ley los principios para los nombramientos, ascensos, suspensiones, traslados, destituciones, cesantía y jubilaciones como lo dispone la Constitución. En este sentido, ha sido jurisprudencia reiterada de la Corte el afirmar, que los funcionarios que no se encuentran amparados por los beneficios de una carrera pública, que les garantice un sistema de nombramiento, ascenso, suspensión, traslado, destitución, cesantía y jubilación de conformidad con los artículos 297 y 300 de la Constitución, pueden ser removidos a discreción de la autoridad nominadora, a menos que la ley prohíba su remoción discrecional.

El señor **EZEQUIEL DAWSON VALDIVIESO** funcionario público nombrado mediante el Decreto Ejecutivo N° 39 de 15 de marzo de 1977 en el Ministerio de Relaciones Exteriores, se rige por la Ley de Carrera Administrativa. La carrera administrativa fue restablecida, mediante la Ley N° 9 de 20 de junio de 1990, que confiere estabilidad a quienes ingresan a la administración mediante concursos pre-calificados por su formación académica, experiencia, habilidades y ejecutorias, pero está suspendida en razón del artículo 198 que dispone que, "La incorporación de los diversos niveles funcionales e instituciones de la administración pública a la carrera administrativa, será progresiva, y se hará mediante acuerdo del Consejo de Gabinete ...", hecho que no se ha dado.

En relación con el precepto que se estima violado, observa la Sala un caso similar al que nos ocupa, en el que se invocó como violado el artículo 23 de la

Ley 7 de 1981, y en el que esta Sala expresó lo siguiente:

> "... es fundamental señalarle al recurrente, que no ha comprobado haber ingresado al Ministerio de Planificación y Política Económica por concurso de mérito que es lo que demostraría su competencia, y además, lo que le otorgaría **estabilidad** en su cargo por ser funcionario de carrera, obtenida la posición, repetimos, en concurso, donde es la única forma legal de ganar estabilidad. La ley de Carrera Administrativa es para estos casos la ley **básica, preferente, y especial en materia de estabilidad en la función pública**. Tal como se deduce del artículo 300 de la Constitución Nacional que instituye las carreras en los servicios públicos conforme a los principios del sistema de méritos.
>
> En vista de lo anteriormente expuesto, como quiera que el señor **VALDERRAMA** fue nombrado libremente, y al no estar su estabilidad sujeta a una Ley de Carrera Administrativa, o de una ley especial en relación con funciones públicas, y no de tipo profesional, totalmente independiente del ejercicio de funciones públicas como es el presente caso, es potestad discrecional de la entidad demandada el libre nombramiento y remoción de sus miembros." (Sentencia de 11 de octubre de 1994, Registro Judicial, octubre de 1994, p. 313).

A juicio de la Sala, el señor **EZEQUIEL DAWSON VALDIVIESO** no puede invocar derecho a estabilidad en el cargo que ocupaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores porque no estaba amparado por los beneficios de una carrera administrativa que le garantizara un sistema de nombramiento, ascenso, suspensión, traslado, destitución, cesantía y jubilación de conformidad con los artículos 297 y 300 de la Constitución Nacional. Por tanto, no se ha violado el artículo 23 de la Ley N° 7 de 14 de abril de 1981.

En consecuencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, el Decreto Ejecutivo N° 215 de 15 de marzo de 1995, emitido por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores; y NIEGA las otras declaraciones pedidas.

Notifíquese.

MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA FÁBREGA, BARSALLO, MOLINO Y MULINO, EN REPRESENTACIÓN DE CEMENTO PANAMÁ, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° A. C. R. P. 587-92 S/F, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma de abogados Fábrega, Barsallo, Molino y Mulino, actuando en representación de CEMENTO PANAMÁ, S. A. ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, la Resolución N° A. C. R. P. 587-92 s/f, emitida por la Comisión de Prestaciones Médicas de la Caja de Seguro Social.

En la demanda se pide a la Sala que declare nula la Resolución N° A. C. R. P. 587-92 s/f expedida por la Comisión de Prestaciones Médicas de la Caja de

Seguro Social, por medio de la cual no se accede a la petición de reembolso formulada por la empresa CEMENTO PANAMÁ, en relación con los gastos incurridos por atención médica en clínica privada al señor Amado Domínguez.

Sostiene la parte actora que el acto impugnado ha infringido el artículo 1 del Código Civil, el Artículo 12 del Reglamento de la Ley Vigente de Riesgos Profesionales de la Caja de Seguro Social y el artículo 18 del Reglamento de Prestaciones Médicas, cuyos textos son del tenor siguiente:

> "Artículo 1 del Código Civil: La ley obliga tanto a los nacionales como a los extranjeros, residentes o transeúntes en el territorio de la República y una vez promulgada, la ignorancia de ella no sirve de excusa".
>
> Artículo 12 del Reglamento General de Prestaciones del Seguro de Riesgos Profesionales: Cuando por la gravedad de un accidente de trabajo, la víctima sea conducida a un centro hospitalario que no sea de propiedad del Seguro, ni contratado por éste, el patrono deberá informar de este hecho a la Dirección Ejecutiva del Riesgos Profesionales.
>
> La Caja procederá a enviar un médico el lugar de reclusión de la víctima, con el fin de que le sea practicado un reconocimiento. Si de dicho reconocimiento se desprende que el accidentado puede ser trasladado sin peligro de su vida, y de que la movilización no ocasionará un agravamiento de la lesión, se procederá, por los servicios médicos de la Caja, a efectuar el traslado a un centro asistencial de ésta. Si el traslado no es aconsejable, la Caja asumirá los costo a que diere lugar la atención del paciente mientras no se encuentre en condiciones de ser movilizado.
>
> En el primer caso, el valor de la asistencia prestada por la entidad particular, con anterioridad al traslado, será de costo del patrono, salvo que por los servicios médicos del Seguro se compruebe la urgencia del tratamiento, ya que, de otro modo, deberá considerarse esta situación, dentro de la denominación de "Primeros Auxilios" de que trata el artículo 16 del Decreto de Gabinete N° 68 de 1970".
>
> "Artículo 18 del Reglamento de Prestaciones Médicas: En casos de urgencia y cuando se compruebe que el asegurado no pudo obtener debidamente las órdenes de la Caja de Seguro Social, o cuando se hospitalice en un lugar donde la Caja no tenga arreglo alguno con esos hospitales, se autorizará el reembolso hasta la concurrencia de tarifas aprobadas por la Junta Directiva".

La parte demandante alega que la Resolución N° A. C. R. P. 587-92 s/f viola, en forma directa,por infracción literal el artículo 1 del Código Civil, ya que la Compañía Cemento Panamá no estaba en la obligación de cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 12 del Reglamento de Riesgos Profesionales, en virtud de lo que establece el artículo 1 del Código Civil, pues el mismo no estaba, al momento de la emisión de la resolución impugnada, publicado en la Gaceta Oficial.

De igual forma, la parte actora alega que la Resolución A. C. R. P. 587-92 infringe por indebida aplicación, el artículo 12 del Reglamento de Riesgos Profesionales de la Caja de Seguro Social, pues la Caja de Seguro Social pretende que la empresa Cemento Panamá, S. A. cumpla con una serie de trámites del precitado reglamento, cuando el mismo no había sido publicado en la Gaceta Oficial.

Finalmente, el recurrente estima que la resolución A. C. R. P. 587-92 viola el artículo 18 del Reglamentos de Prestaciones Médicas, por infracción literal del precepto legal, pues no se reconoce el derecho de la empresa Cemento Panamá, a obtener el reembolso de los gastos por atención a un trabajador asegurado, en este caso el señor Amado Domínguez.

La Procuradora de la Administración contestó la demanda mediante la Vista N° 193 de 12 de mayo de 1996, en la cual discrepa de la opinión del demandante y solicita se denieguen las pretensiones del mismo.

La Sala Tercera (Contencioso Administrativa) pasa a resolver la presente controversia previa las siguientes consideraciones.

Observa la Sala que la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción en comento, se basa en el hecho que, según la parte demandada, la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguros Social utilizó como base legal, para emitir el acto administrativo impugnado, el Reglamento General de Prestaciones del Seguro de Riesgos Profesionales, aun cuando éste no había sido promulgado en la Gaceta Oficial. Cabe señalar que dicho reglamento fue publicado en la Gaceta Oficial N° 22805 de 15 de junio de 1995.

En este sentido la Sala considera que, si bien es cierto el Reglamento de Prestaciones del Seguro de Riesgos Profesional debió ser publicado en la Gaceta Oficial desde el momento de su emisión, por contener un procedimiento general aplicable a todas los accidentes de trabajo, dicha omisión no invalida dicho reglamento, es decir no vicia dicho acto de nulidad, **sino que afecta su eficacia**.

En relación con lo anterior, el autor Gustavo Penagos considera que un acto administrativo no es nulo en sí mismo por falta de promulgación, es decir, que la misma no es un requisito de validez; añade el autor que cuando ésta falta, la sanción es la inoponibilidad del acto a los particulares, lo que causa que el mismo no sea obligatorio y, en consecuencia es ineficaz, pues carece de fuerza vinculante ante los administrados (El Acto administrativo, Quinta Edición, Ediciones Librería del Profesional, Colombia, 1992, p. 446 y ss.).

En este sentido, el artículo 15 del Código Civil establece que las órdenes y demás actos ejecutivos del Gobierno, expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria, tienen fuerza obligatoria, mas dicha obligatoriedad y aplicación están supeditadas a que los mismos cumplan con los requisitos de validez y eficacia. Dicha postura ha sido reiterada en diversas ocasiones por la Sala Tercera, tal como se establece en la sentencia 15 de noviembre de 1994 que es del tenor siguiente:

> "La Sala comparte el criterio del señor Procurador de la Administración porque si bien la Resolución N° 53-90 de 1990 debe ser publicada en la Gaceta Oficial, la omisión de dicha publicación no vicia el acto de nulidad, sino que afecta su eficacia, toda vez que la publicación marca el punto de partida para que el acto **surta efectos** y sea obligatoria u oponible a los administrados (PENAGOS, Gustavo, "El Acto administrativo, Cuarta Edición, Ediciones Librería del Profesional, Colombia, 1987, p. 863)".

Estima la Sala Tercera que le asiste razón a la parte actora, ya que en este caso la Comisión de Prestaciones mal puede utilizar como sustento jurídico un acto administrativo (Reglamento de Prestaciones del Seguro de Riesgo Profesional), que si bien es cierto es válido pues, en su formación reúne los requisitos que la ley exige para nacer a la vida jurídica, no es menos cierto que hasta su promulgación en 1995, fue ineficaz ya que al no ser promulgado en la Gaceta Oficial desde el momento de su emisión carecía de capacidad para producir los efectos jurídicos que el ordenamiento ha previsto para la función administrativa que ejerce.

En relación con lo anteriormente expuesto, la Sala Tercera en sentencia de 15 de mayo de 1991, consideró que "la eficacia se presenta como un complemento imprescindible de la validez del acto administrativo sin lo cual el despliegue de actividad que efectúa la administración pública para ejecutar el acto administrativo no tendría connotaciones jurídicas sino más bien de hecho; y, por otra parte, el supuesto de la eficacia es la validez del acto administrativo sea ésta real o presunta. Puede suceder sin embargo que un acto sea válido pero carezca de eficacia".

Después del análisis efectuado queda claro, pues, que el Reglamento de Prestaciones del Seguro de Riesgo Profesional de la Caja de Seguro Social, desde el momento de emisión del mismo hasta la fecha de publicación, era ineficaz, y como ya lo hemos mencionado inoponible a los administrados, por lo que lo sociedad Cemento Panamá no estaba en la obligación de cumplir con los trámites exigidos en dicho reglamento, mas debía cumplir con los requisitos previstos en legislación que al momento de emisión de la Resolución A. C. R. P. 587-92 s/f, regía los riesgos profesionales. Esta es, el Decreto Ley N° 68 de 31 de marzo de 1970, mediante el cual se centraliza en la Caja de Seguro Social la cobertura obligatoria de los riesgos profesionales para todos los trabajadores del Estado y las Empresas Particulares que operan en la República. Consecuentemente, se puede apreciar que la parte demandante cumplió con lo establecido en los artículos 65, 66 y 67 del mencionado decreto ley, toda vez que la empresa Cemento Panamá dio aviso del accidente a la Caja de Seguro Social, por medio de los formularios suministrados por dicha Institución, dentro de las 48 horas, siguientes al accidente (ver fojas 64 y 85 del expediente administrativo).

Finalmente, en cuanto al cargo de ilegalidad que se le imputa a la Resolución A. C. D. P. 587-92 s/f por ser violatoria del artículo 18 del Reglamento de Prestaciones Médicas, como ese Reglamento tiene eficacia pues, a diferencia del Reglamento de Prestaciones del seguro de riesgos Profesionales fue promulgado, coincide la Sala con lo expresado por la parte actora en la medida que, se dio cumplimiento a los supuestos previstos en el precitado artículo, toda vez que el accidente sufrido por el señor Amado Domínguez fue sumamente grave, al quedar atrapado por las aspas de una empacadora-trituradora de cemento, lo que justifica la urgencia del caso. Aunado a lo anterior, a foja 7 de expediente se encuentra el Informe de Casos de Urgencia elaborado por la doctora María de Caballero, en el cual se describe el estado de salud del señor Amado Domínguez al ingresar al Centro de Salud de Nuevo San Juan y, a consecuencia de las graves lesiones presentadas, se le refiere a la Clínica Hospital San Fernando.

Estiman los Magistrados que se ha demostrado de forma palmaria a lo largo del expediente que el señor Amado no podía obtener las órdenes de la Caja de Seguro Social debido al trágico accidente que había sufrido (ver fs. 54 a 60 del expediente administrativo).

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativo) de la Corte Suprema de Justicia, actuando en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES ILEGAL, la Resolución N° A. C. D. P. 587-92 s/f emitida por la Comisión de Prestaciones Médicas de la Caja de Seguro Social y ordena el reembolso de los gastos incurridos por la Empresa Cemento Panamá, S. A. hasta la concurrencia de las tarifas aprobadas por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DR. ROLANDO VILLALAZ EN REPRESENTACIÓN DE FRANCISCO DÍAZ MÉRIDA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 10,961-DNP DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1995 EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, LA NOTA D. G. 522-95 DE 17 DE OCTUBRE DE 1995, EL ACTO CONFIRMATORIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El doctor Rolando Villalaz, actuando en nombre y representación de

Francisco Díaz Mérida, ha presentado recurso de apelación contra la Resolución de 18 de julio de 1996, en la que no se admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulas, por ilegales, la Resolución N° 10,961-DNP de 24 de noviembre de 1995, expedida por el Director General de la Caja de Seguro Social; la Nota D. G. 525-95 del 17 de octubre, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

La Magistrada Sustanciadora no admitió la demanda por considerar que el apoderado judicial del demandante no se ajustó a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley N° 135 de 1943, pues, no acompañó la demanda con copia autenticada de los actos que impugna. También señala la Magistrada Sustanciadora que el apoderado judicial del demandante pidió a la Secretaría General de la Caja de Seguro Social copia autenticada de cada uno de los actos impugnados el mismo día que presentó la demanda (28 de junio de 1996) y, sin embargo, no aportó dichas copias con su demanda ni expresó en ella que la expedición de dichas copias le fue negada, ni tampoco pidió a la Magistrada Sustanciadora que las solicitara a la entidad demandada, conforme a lo preceptuado en el artículo 46 de la Ley en cita.

El resto de los Magistrados que integran la Sala, observan que el apoderado judicial del apelante luego de notificarse de la Resolución anunció recurso de apelación.

A foja 49 del expediente, obra informe secretarial en el cual se señala que vencido el término de apelación no se presentó, por medio de apoderado judicial, escrito de sustentación de la misma y que, sin embargo, se presentó en el período de la apelación, escrito de corrección de la demanda.

Este Tribunal de Apelación considera que sólo tiene competencia para conocer del recurso de apelación y no de la corrección de la demanda, ya que es a la Magistrada Sustanciadora a quien le corresponde decidir su admisión. Sin embargo, se observa que la corrección de la demanda es extemporánea, ya que el acto que causó la demanda fue notificado el 30 de abril de 1996 y la corrección de la demanda fue presentada el 2 de agosto de 1996, dos meses después de que fue notificado el acto que causó la demanda.

En virtud de lo anterior, como se trata de un recurso de apelación contra un auto y el mismo no fue sustentado, lo procedente es declarar desierto el recurso de apelación, tal como lo dispone el artículo 1122 del Código Judicial.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, actuando en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA DESIERTO el recurso de apelación interpuesto por el doctor Rolando Villalaz, actuando en nombre y representación de Francisco Díaz Mérida.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. JULIO F. BARBA, EN REPRESENTACIÓN DE FLORENCIO DE LEÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA NEGATIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DE PAGAR EL SOBRESUELDO AUTORIZADO POR LA RESOLUCIÓN N° 2 DE 11 DE ABRIL DE 1980. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. Julio F. Barba, actuando en representación de Florencio De León, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula por ilegal, la negativa del Ministerio de Educación, de pagar las sumas deducidas al profesor Florencio De León, como ajuste a la escala salarial, establecida por la Ley 47 de 20 de noviembre de 1979.

Al encontrarse el negocio en estado de resolver, la Sala con fundamento en el artículo 62 de la Ley N° 135 de 1943, estima necesario incorporar al expediente copia autenticada del expediente administrativo del Prof. De León, desde el inicio de sus labores en el Ministerio de Educación en 1962, hasta su jubilación en 1992, que debe contener todas las resoluciones o decretos por medio de los cuales se le reconoce al recurrente sobresueldos, aumentos, ascensos, etc. Por otro lado, solicitamos copia autenticada del detalle de los pagos efectuados al Prof. Florencio De León y el número de la resolución o decreto por medio de los cuales éstos fueron concedidos desde 1962 hasta 1992, indicándose el cambio en la escala salarial del Prof. De León, al entrar en vigencia la Ley 47 de 1979.

En consecuencia, la Sala Tercera de lo contencioso administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley SOLICITA al MINISTERIO DE EDUCACIÓN que le remita a la mayor brevedad posible la información requerida en el párrafo anterior.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. JULIO F. BARBA, EN REPRESENTACIÓN DE FLORENCIO DE LEÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA NEGATIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DE PAGAR EL SOBRESUELDO AUTORIZADO POR LA RESOLUCIÓN N° 2 DE 11 DE ABRIL DE 1980. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. Julio F. Barba, actuando en representación de Florencio De León, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula por ilegal, la negativa del Ministerio de Educación, de pagar las sumas deducidas al profesor Florencio De León, como ajuste a la escala salarial, establecida por la Ley 47 de 20 de noviembre de 1979.

Al encontrarse el negocio en estado de resolver, la Sala con fundamento en el artículo 62 de la Ley N° 135 de 1943, estima necesario incorporar al expediente una certificación de la Contraloría General de la República donde conste el monto del sueldo bruto del Prof. Florencio De León desde 1962 hasta 1991. Seguidamente, solicitamos se certifiquen todas las deducciones efectuadas del salario del Prof. De León desde 1979 hasta 1992, con el detalle de las instituciones, asociaciones u otras empresas a las que se les remitieron dichos pagos.

En consecuencia, la Sala Tercera de lo contencioso administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley SOLICITA a la CONTROLARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA que le remita a la mayor brevedad posible la información requerida en el párrafo anterior.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE MORENO Y FÁBREGA, EN NOMBRE PROPIO, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACUERDO MUNICIPAL N° 13 DEL 25 DE ABRIL DE 1994, DICTADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BARÚ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Moreno y Fábrega, actuando en su propio nombre y representación, interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa de nulidad para que se declare nulo, por ilegal, el Acuerdo Municipal N° 13 del 25 de abril de 1994, expedido por el señor Alcalde del Distrito de Barú.

El negocio se encuentra en estado de resolver y antes de proceder a ello, la Sala, con fundamento en el artículo 62 de la Ley N° 135 de 1943, estima necesario dictar un auto para mejor proveer a fin de solicitar a la Dirección General de Catastro del Ministerio de Hacienda y Tesoro copia autenticada de los siguientes documentos:

1. Plano N° 41-28376, del 8 de junio de 1975.

2. Anexo IV del Contrato de Arrendamiento de tierras celebrado entre la Nación y las empresas United Brands Company, Chiriquí Land Company y Compañía Carona, S. A., aprobado mediante la Ley N° 5 del 7 de enero de 1976 (Dibujo N° D7-569).

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **DISPONE** solicitar a la Dirección General de Catastro del Ministerio de Hacienda y Tesoro copia autenticada de los siguientes documentos:

1. Plano N° 41-28376, del 8 de junio de 1975.

2. Anexo IV del Contrato de Arrendamiento de tierras celebrado entre la Nación y las empresas United Brands Company, Chiriquí Land Company y Compañía Carona, S. A., aprobado mediante Ley N° 5 del 7 de enero de 1976 (Dibujo D7-569).

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA INFANTE, GARRIDO Y GARRIDO, EN REPRESENTACIÓN DE GUSTAVO ORTEGA RÍOS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE OFICIALES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PANAMÁ, CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 1993, POR MEDIO DE LA CUAL SE ELIGIÓ COMO COMANDANTE PRIMER JEFE, A CHRISTIAN ARNHEITER. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense **Infante, Garrido y Garrido**, presentó demanda Contencioso Administrativa de Nulidad en su condición de apoderado judicial del señor **GUSTAVO ORTEGA RÍOS**, con el fin de que se declare nula por ilegal, la Sesión Extraordinaria de la Junta Oficial del Cuerpo de Bomberos de Panamá celebrada el día 25 de marzo de 1993, mediante la cual se realizó la elección de los Comandantes Primer Jefes de dicho Cuerpo de Bomberos.

Evacuados todos los trámites procesales establecidos por la Ley, pasa la Sala Tercera a decidir la controversia legal planteada.

CARGOS DE VIOLACIÓN AL ACTO IMPUGNADO

La parte demandante considera que se han violado los artículos 43 y el artículo 26 literal b del Reglamento General del Cuerpo de Bomberos, aprobado mediante la Ley 21 de 18 de octubre de 1982.

La violación del artículo 43, la explica de la siguiente manera previa la transcripción de la norma impugnada.

> "Artículo 43. El mando activo de los Cuerpos u Organizaciones de Bomberos corresponde al Primer Jefe, en su defecto, sucesivamente al Segundo y al Tercer Jefe.
>
> En caso de ausencia temporal de los tres Jefes, el mando activo corresponderá al oficial designado por la comandancia.
>
> En caso de faltas absolutas y permanentes de los Jefes, quedará al mando de la institución el Fiscal, si ostenta el grado de Mayor o el Oficial de mayor graduación y antigüedad, debiendo convocar a elecciones dentro de un plazo no mayor de 15 días.
>
> Este artículo ha sido violado en el concepto de violación directa por comisión ya que se aplicó, por la Junta de Oficiales de Cuerpo de Bomberos de Panamá, desconociendo el derecho que consagra esta norma al convocarse y elegirse a **Christian Arnheiter** como Comandante Primer Jefe, a Mario Ramírez como Comandante Segundo Jefe y a Gregorio Arosemena como Mayor Tercer Jefe, cuando sólo debió convocarse la elección del Comandante Segundo Jefe y del Mayor Tercer Jefe debido a que no se había producido la falta absoluta y permanente del Comandante Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de Panamá, porque el Coronel **Guillermo A. Leblanc Jr.** se encontraba ausente temporalmente de la Jefatura del Cuerpo de Bombero de Panamá".

De acuerdo con el demandante se ha violado el ordinal b del artículo 26 de Reglamento General de los Cuerpos de Bomberos de la República, aprobado conforme a la Ley 21 de 1982, que dice:

> "Artículo 26. Son atribuciones de la Junta de Oficiales:
> ...
> b) Elegir los Jefes y Oficiales, conferirle los grados y dar de baja a éstos, en la forma prescrita en el Reglamento General y su respectivo Reglamento Interno.
> ...
> Este artículo se ha violado en el concepto de violación directa por comisión porque mediante el acto atacado se eligió a el Comandante Primer Jefe del Cuerpo de Bombero de Panamá en forma distinta a la prescrita en el Reglamento General".

INFORME DE CONDUCTA DEL FUNCIONARIO DEMANDADO

En respuesta a la solicitud de Informe de Conducta solicitada por esta Sala, el Director General de los Cuerpos de Bomberos de la República y Comandante

Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de Panamá, contestó de manera amplia y en lo que respecta específicamente a los cargos de ilegalidad los contesto así:

> "El Resuelto N° 115 de abril de 1992, señala de manera expresa y categórica, que debido al hecho que a partir de la separación del ex-Comandante GUILLERMO LEBLANC, producida mediante el Resuelto del Ministerio de Gobierno y Justicia N° 165 de 12 de abril de 1991, la Dirección General de los Cuerpos de Bomberos de la República, no contaba con la debida representación de su Director General y a que hasta ese momento el Consejo de Directores de Zona, había actuado **"de manera, insubordinada, arbitraria e irregular, asumiendo atribuciones ejecutivas que no le confiere la Ley"**, se procedía a reconocer como DIRECTOR GENERAL DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, al Comandante LUIS E. CASTILLO ARIAS (q. e. p. d.), quien desde ese momento reemplazó en propiedad al ex-comandante GUILLERMO LEBLANC RAMOS, tanto en su cargo de Director General de los Cuerpos de Bomberos de la República, como en el de Comandante Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de Panamá, ya que ello se deriva automáticamente y por imperio de la Ley, del contenido del numeral primero del artículo 8 de la Ley 21 de 18 de octubre de 1982.
>
> Ante el fallecimiento del Comandante LUIS E. CASTILLO ARIAS, ocurrido el 5 de marzo de 1993, se procedió, tal y como lo disponen el artículo 43 del Reglamento Interno del Cuerpo de Bomberos de Panamá y el artículo 43 del Reglamento General (original) de los Cuerpos de Bomberos de la República, a efectuar la convocatoria para que dentro de los quince días hábiles siguientes se realizara una sesión extraordinaria de la Junta de Oficiales del Cuerpo de Bomberos de Panamá, especialmente para elegir las figuras de los comandantes de la institución, ya que se había producido la falta absoluta y permanente del Comandante Primer Jefe; elección ésta que se llevó a cabo cumpliendo con todas las formalidades y disposiciones contempladas en el numeral segundo del Art. 22 y del Art. 43 y siguientes del Reglamento Interno del Cuerpo de Bomberos de Panamá, así como de los dispuesto en el numeral segundo del Art. 26 y de los Arts. 43 y siguientes del Reglamento General (original) de los Cuerpos de Bomberos de la República.
>
> Dentro de la citada sesión de Junta de Oficiales, celebrada el 25 de marzo de 1993, en la que concurrieron CIENTO CUARENTA Y DOS (142) Oficiales de un total de CIENTO SESENTA Y DOS (162) Oficiales activos con derecho a voto, se eligió en propiedad y por mayoría absoluta de votos emitidos secretamente, al hasta entonces Comandante Segundo Jefe, CHRISTIAN V. ARNHEITER, para ocupar el cargo de Comandante Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de Panamá; al hasta entonces Comandante Tercer Jefe, MARIO RAMÍREZ, para pasar a ocupar el cargo de Comandante Segundo Jefe y hasta el entonces Fiscal del Cuerpo, GREGORIO AROSEMENA, para pasar a ocupar el cargo de Comandante Tercer Jefe del Cuerpo de Bomberos de Panamá.
>
> En virtud de lo ya expresado, la Sesión Extraordinaria de la Junta de Oficiales del Cuerpo de Bomberos de Panamá, celebrada el 25 de marzo de 1993, en nada contraviene lo dispuesto en las normas que se señalan como violadas en sentido directo dentro de la demanda contencioso administrativa de nulidad que nos ocupa, ya que por el contrario, en dicha sesión especialmente convocada para ello, la mayoría absoluta de dicha Junta, cumplió fielmente con el contenido de las formalidades para elecciones de sus Jefes que contienen los arts. 43 y siguientes del Reglamento Interno del Cuerpo de Bomberos de Panamá, que son literalmente idénticas a las normas contenidas en los artículos 43 y siguientes del Reglamento General (original) de los Cuerpos de Bomberos de la República de Panamá, las cuales reglamentan el ejercicio de la facultad de escoger libremente a los Jefes, la cual se le confiere expresamente a ese ente bomberil, dentro del numeral segundo del Art. 22 del Reglamento Interno del

Cuerpo de Bomberos de Panamá y en el numeral segundo del Art. 26 del Reglamento General (original) de los Cuerpos de Bomberos de la República".

OPINIÓN DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

La Procuradora de la Administración, actuando en defensa de los intereses de la Ley, considera que es Legal la Sesión Extraordinaria de la Junta de Oficiales del Cuerpo de Bomberos de Panamá celebrada el 25 de marzo de 1993, por la cual se eligió al Comandante Primer Jefe, con base en los siguientes argumentos:

"Al evaluar el cargo de ilegalidad, planteado por el demandante, se hace evidente su improcedencia, puesto que, él no consideró que la vacante temporal que había dejado el señor Guillermo Leblanc Jr., al ser suspendido del cargo de Comandante Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de Panamá (ver Resuelto N° 165 de 12 de abril de 1991, folio 28 y 29), dejó de tener el carácter de temporal y por tanto, pasó a ser absoluta y permanente, cuando el Ministro de Gobierno y Justicia, dicta el Resuelto N° 115 de 24 de abril de 1992 (ver folios 31 y 32), por medio del cual se resuelve:

`Artículo Primero: Reconocer al Comandante LUIS E. CASTILLO ARIAS, como Director General de los Cuerpos de Bomberos de la República y Director de la Zona 1 . (Cfr. fs. 32).

En efecto, al producirse un nuevo nombramiento en el cargo de Director General de los Cuerpos de Bomberos de la República, tácitamente se produjo la separación permanente del señor Leblanc, de dicho cargo. Veamos:

El Comandante Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de Panamá, Luis E. Castillo Arias, falleció el 5 de marzo de 1993, y la Sesión Extraordinaria, para la elección del nuevo ocupante del cargo, se produjo el 25 de marzo. Y es que, de no haber ocurrido el deceso del Comandante Castillo no hubiese sido necesario llamar a elecciones.

De allí que, la actuación de la Junta de Oficiales del Cuerpo de Bomberos de Panamá, al convocar a elecciones para elegir los Comandante de la Institución, no es violatoria del artículo 43 del Reglamento General de los Cuerpos de Bomberos de la República.

2. ARTÍCULO 26, LITERAL b, DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA.

`ARTÍCULO 26: Son atribuciones de la Junta de Oficiales:
...
b) Elegir los Jefes y Oficiales, conferirle los grados y dar de baja a éstos, en la forma prescrita en el Reglamento General y su respectivo Reglamento Interno.
... .
El demandante, afirma que la norma arriba transcrita, ha resultado infringida.

`... porque mediante el acto atacado se eligió a el Comandante Primer Jefe del Cuerpo de Bombero de Panamá en forma distinta a la prescrita en el Reglamento General . (Cfr. fs. 24).

El artículo 26, se refiere a las atribuciones o funciones de la Junta de Oficiales, y en su literal b), ordena la de elegir los Jefes y Oficiales, conferirles los grados y dar de baja a éstos, de acuerdo al Reglamento General y al Reglamento Interno de cada Institución Bomberil.

En el proceso contencioso administrativo que nos ocupa, la Junta de Oficiales reunida en Sesión Extraordinaria celebradas el 25 de marzo

de 1993, contando con la presencia de CIENTO CUARENTA Y DOS OFICIALES (142), de un total de CIENTO SESENTA Y DOS (162) con derecho a voto, eligió por mayoría absoluta de votos, emitidos secretamente a los Comandantes Primer, Segundo y Tercer Jefe, del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Para ocupar dichos cargos, fueron elegidos respectivamente, quienes venían ocupando hasta esa fecha (25 de marzo de 1993) los cargos de Comandantes Segundo y Tercer Jefe, además del hasta entonces también, Fiscal del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Nuevamente, debemos manifestar que, la actuación de la Junta de Oficiales del Cuerpo de Bomberos de Panamá, contenida en su Sesión Extraordinaria del 25 de marzo de 1993, se ajustó a Derecho, puesto que en ella, se eligió su Jefatura dentro del término y en la forma prescrita por la Ley".

ALEGATO DEL DEMANDANTE

Por último, en su alegato de conclusión, la firma forense **INFANTE, GARRIDO Y GARRIDO**, en sus consideraciones relacionadas con los cargos de ilegalidad, manifiesta lo siguiente:

"La Procuradora de la Administración fundamenta su argumento en la citada Resolución N° 115 (ver folios 31 y 32), al afirmar que la suspensión del Coronel Leblanc pasó a ser absoluta y permanente cuando se le reconoce al Comandante Luis E. Castillo, como Director General de los Cuerpos de Bomberos de la República y Director de la Zona 1. Sin embargo, la Procuradora de la Administración no advierte o desconoce, como ya ha sido explicado, que los cargos de Director General de los Cuerpos de Bomberos de la República y Director de la Zona 1, se le reconoció al Comandante Luis E. Castillo, por estar encargado temporalmente de la Jefatura del Cuerpo de Bomberos de Panamá y, para darle legalidad a esta designación, a fin de superar la crisis en los mandos de las Instituciones Bomberiles del país, el Consejo de Directores lo eligió Subdirector de la Dirección General, lo que aparejaba su reconocimiento como Director General mientras durara la ausencia del titular de conformidad con lo resuelto por el Ministerio de Gobierno y Justicia. El carácter eventual de las funciones del Comandante Luis Castillo, como Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de Panamá, está plenamente acreditada en las resoluciones aportadas en el proceso y en las disposiciones del Reglamento General de los Cuerpos de Bomberos de la República. En el proceso penal seguido al Comandante Guillermo Leblanc Jr. por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, esta Alta Corporación reconoció expresamente que el procesado Leblanc Jr., se encontraba suspendido en sus funciones del cargo de Comandante Primer Jefe y no separado en forma permanente y absoluta como quiere sostener la Procuraduría de la Administración (ver Registro Judicial de mayo 1994, Resolución del 31 de mayo de 1994, págs. 248-250), por lo cual le correspondía su juzgamiento. De aquí nuestra afirmación que la elección hecha mediante Sesión Extraordinaria del 25 de marzo de 1993, impugnada de nula por este proceso, es totalmente ilegal, ya que, contrario a lo expuesto por la Procuraduría de la Administración la Sala Penal podía juzgar al encartado Leblanc Jr. por razón del cargo público que ostentaba.

La explicación anterior sobre la Dirección General de los Cuerpos de Bomberos de la República, y la situación surgida en el Consejo de Directores ante la ausencia temporal del Comandante Primer Jefe, Coronel Guillermo Leblanc, aclara cualquier posible confusión traída al expediente por el Ministerio Público. Lo que concretamente se plantea con este proceso Contencioso Administrativo de Nulidad es la ilegalidad de la Sesión Extraordinaria de la Junta de Oficiales del Cuerpo de Bombero de Panamá, celebrada el 25 de marzo de 1993, al

elegir indebidamente al Primer, Segundo y Tercer Jefe, ante la muerte repentina del Mayor Tercer Jefe del Cuerpo de Bombero de Panamá, Luis E. Castillo, encargado temporalmente del mando activo de la Jefatura de dicho Cuerpo Bomberil por la separación o suspensión temporal de los titulares, cuando en realidad sólo se había producido la vacante permanente en el cargo del Mayor Tercer Jefe.

La elección que se realizó mediante la Sesión Extraordinaria del 25 de marzo de 1993 del Comandante Primer Jefe del Cuerpo de Bombero de Panamá es ilegal porque en ese momento, el Coronel Leblanc se mantenía separado temporalmente y la muerte del Mayor Tercer Jefe, quien estaba encargado de la Jefatura, produjo la ausencia permanente del cargo que era titular, pero no así del cargo de Comandante Primer Jefe del cual el Mayor Castillo sólo estaba encargado por disposición legal y mientras concluyeran las investigaciones por la cual se había suspendido temporalmente a su titular. Son dos aspectos diferentes, y la representante del Ministerio Público los confunde al defender el acto administrativo, en detrimento del interés de la legalidad. En consecuencia, la única elección que debió realizarse el 25 de marzo de 1993 era la del Mayor Tercer Jefe debido a la vacante permanente producida por la muerte de su titular, y luego de la elección, conforme al Reglamento General y la Ley, le correspondía asumir el mando activo ante la ausencia temporal del Primer y Segundo Jefe de la Institución y, a su vez, le correspondía al Consejo de Directores elegir al nuevo Subdirector de la Dirección General de los Cuerpos de Bomberos de la República.

Por otra parte, los cargos de sustracción de materia y extemporaneidad argumentados por la Procuraduría de la Administración no tienen sustento jurídico al partir del equívoco de que la Resolución de condena del proceso penal seguido contra el Comandante Primer Jefe, Coronel Guillermo Leblanc, produce por sí sola el efecto de convertir en definitiva la suspensión temporal de sus funciones. La sanción impuesta por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en el proceso penal seguido al Comandante Leblanc por el delito genérico de peculado concluyó con una condena de sesenta (60) días multa, por el delito de peculado por aplicación pública diferente a los caudales dados en administración, sin que se le inhabilitara por ningún término para el ejercicio de funciones públicas.

A quien corresponde conocer y sancionar las faltas cometidas por el Jefe de un Cuerpo Bomberil es al Tribunal de Honor, según el artículo 98 del Reglamento General de los Cuerpos de Bomberos de la República. De manera que es dicho Tribunal, quien puede ante la condena impuesta por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, iniciar el juzgamiento del Coronel Leblanc por faltas, conforme al proceso contemplado en los artículos 99 y siguientes del Reglamento General. Pero, asumir, como lo hace la Procuraduría de la Administración, que la sanción penal deja insubsistente por sí el cargo de Comandante Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de Panamá es incorrecto y sería una violación a la ley y al debido proceso. Por lo tanto, la elección de Christian Arnhelter se dio en clara violación de las disposiciones de dicho Reglamento y de la Ley.

Ha señalado el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en un número plural de decisiones, que los Tribunales de Justicia constituyen la última garantía de los derechos y legítimos intereses de los ciudadanos, para que su protección no quede al albur y no aleté sobre ellos el germen de inseguridad jurídica. Sin adentrarnos a criticar el fallo emitido por la Honorable Sala de lo Penal, es fácil observar que al Comandante Guillermo Alfredo Leblanc Ramos se le condena por supuestamente haber dado a los fondos del 5% provenientes de la prima bruta de seguro contra incendio, una aplicación diferente para el cual fue creado al pagar el flete del carro bomba Protector IV cuando ese pago de transporte marítimo

> debió hacerlo el Comité de Rifa Centenario. Como se detalla en esa Sentencia, no era con los fondos del 5% de donde debió haberse pagado el transporte de ese carro bomba; ello le acarreó su condena con base a una norma (Art. 326) vigente del Código Penal. Los actos así señalados por la Sala Penal de la Corte dio margen a la pena de 60 días multa impuesta. No obstante por ningún lugar se le condena a la inhabilitación para ejercer el cargo que ocupaba. En nuestro país es de conocimiento público, por lo tanto no puede pasar inadvertido a la ilustre Procuradora de la Administración, el precedente existente, avalado por todos los funcionarios que vigilan la conducta de los servidores públicos, que el Tribunal Electoral condenó a la Alcaldesa electa del Distrito de Panamá a una pena privativa de la libertad, la cual fue suspendida, y a su inhabilitación por un año para ejercer cargos públicos. Sin embargo, aún siendo declarada inhábil para ejercer el cargo de funcionario, se le mantuvo su posición y se le permitió encargarse de la posición de Alcaldesa una vez finalizada el término de inhabilitación. No puede decir la Procuradora de la Administración que se trata de casos distintos. En el caso de Leblanc Jr. no hubo inhabilitación, ni siquiera privación de libertad y, en el otro caso no sólo se trató de un delito más grave que el señalado al Comandante del Cuerpo de Bomberos sino que se produjo la inhabilitación para el cargo".

MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA

Examinados todos los argumentos expuestos por las partes de este proceso, entra la Sala Tercera a motivar la sentencia en este caso.

No hay la menor duda que el problema central de esta controversia es decidir, si la separación del Comandante Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá **Guillermo Leblanc Jr.**, era temporal o definitiva, para la fecha en que se celebraron las elecciones para elegir a los Comandantes de dicho cuerpo, el día 25 de marzo de 1993. Esta acción de nulidad persigue entonces un interés particular de manera indirecta por parte de un tercero como sería el reintegro del señor **Guillermo Leblanc Jr.** a la posición de Comandante Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, tal se echa de ver en el alegato de conclusión de la parte demandante y para este fin lo que debió incoarse era una acción de plena jurisdicción que es la que repara derechos y no la acción de nulidad, que únicamente declara si es legal o no el acto que se impugna y no repara derechos, por lo que en este caso estaría prescrita la acción de plena jurisdicción, razón por la cual se ha recurrido a la acción de nulidad que no puede producir el reintegro en el cargo del señor **Guillermo Leblanc Jr.**

Hecha la aclaración anterior, tenemos que considerar ahora si la elección del Comandante Primer Jefe se hizo oportunamente o no. La Procuradora de la Administración, en nuestra opinión, adelantó lo que puede ser la ratio decidendi en esta controversia cuando manifestó en su Vista N° 527 de 5 de diciembre de 1995 y que aparece a fojas 44, 45 y 46, y en particular en ésta última foja lo siguiente:

> "Desde nuestro punto de vista, en el presente proceso, la Sala Tercera debe declarar que ha operado sustracción de materia, por una razón sencilla, elemental y evidente: el Ex Coronel GUILLERMO LEBLANC JR., luego del día veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, dejó **definitivamente**, de ser miembro en calidad de Comandante Primer Jefe, del Cuerpo de Bomberos de Panamá. Es decir, luego de que la Sala Segunda (de lo penal) de la Corte Suprema de Justicia, declarara su culpabilidad y responsabilidad penal, por la comisión del delito de peculado (que fue la causa administrativa de su sanción); perdió su calidad de jefe".

Efectivamente, desde el 26 de mayo de mil novecientos noventa y cinco fue que dejó de ser Comandante Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos el señor **Guillermo Alfredo Leblanc Ramos** cuando fue condenado por el delito de peculado doloso del

artículo 326 del Código Penal por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con la ponencia del Magistrado **HUMBERTO A. COLLADO,** por lo que técnica y oficialmente desde esa fecha no podía ocupar cargo alguno o reingresar a ninguna institución bomberil con base en lo dispuesto en los artículos 89 numeral 6 y el parágrafo del artículo 91 del Reglamento del Cuerpo de Bomberos de Panamá que establecen lo siguiente:

> "Artículo 89. Constituye falta gravísima:
> ...
> 6° Propender por cualquier acto o medio a la malversación de los fondos de la institución.
> ...".
>
> "Artículo 91. Las sanciones con que se castigarán las faltas serán las siguientes:
> ...
> PARÁGRAFO: No podrá pertenecer, ingresar o reingresar a ninguna institución bomberil, quien hubiere sido expulsado, dado de baja por indisciplina, **o haber cometido cualquiera otra falta grave** en un Cuerpo, Compañía o Sección de Bomberos de la República de Panamá".

Por lo anteriormente expresado, sí el señor **Guillermo Alfredo Leblanc Ramos** dejó de ser Comandante desde el 26 de mayo de 1995, fecha de la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que lo condenó por el delito de peculado establecido en el artículo 326 del Código del Penal, resulta evidente que la elección del Comandante Primer Jefe celebrada el día 25 de marzo de 1993 es extemporánea y debe por ello llamarse a nuevas elecciones con base en el Reglamento General del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, aprobado mediante Resolución N° 1 de 13 de agosto de 1983.

Por lo expuesto, la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ILEGAL la Sesión Extraordinaria de la Junta Oficial del Cuerpo de Bomberos de Panamá celebrada el día 25 de marzo de 1993, únicamente en relación con el cargo de Comandante Primer Jefe y ORDENA que se realicen nuevas elecciones conforme al Reglamento General del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, para la elección de Comandante Primer Jefe de dicho cuerpo.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO AURELIO ANTONIO ROBLES, EN REPRESENTACIÓN DE AUGUSTO CÉSAR RODRÍGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ARTÍCULO 9 DEL REGLAMENTO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL ÓRGANO JUDICIAL, APROBADO MEDIANTE EL ACUERDO N° 9 DE 12 DE AGOSTO DE 1992, DICTADO POR LA SALA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Aurelio Antonio Robles ha promovido demanda contencioso administrativa de nulidad en representación del señor **AUGUSTO CÉSAR RODRÍGUEZ,** para que se declare nulo, por ilegal, el artículo 9 del Reglamento de las Áreas Administrativas del Órgano Judicial, aprobado mediante el Acuerdo N° 9 de 12 de agosto de 1992 de la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia.

La parte actora solicita la declaratoria de ilegalidad del artículo 9 del Reglamento de las Áreas Administrativas del Órgano Judicial por considerar que viola por omisión el artículo 6 de la Ley 57 de 1978, "Por la cual se reglamenta la profesión de Contador Público Autorizado", cuyo texto transcribimos a continuación:

> **Ley 57 de 1 de septiembre de 1978.**
> **"CAPÍTULO III**
> **DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN**
> **Artículo 6°** Sólo el Contador Público Autorizado podrá ejecutar los actos de la profesión destinados a dar fe pública a que se refiere el Artículo 1° de la presente Ley."

Señala la parte actora en su demanda, que la norma citada dispone que sólo los Contadores Públicos Autorizados podrán ejecutar los actos propios de la profesión de contador, es decir, los actos que enumera el artículo 1 de la Ley destinados a dar fe pública; que el artículo 10 del Reglamento de las Áreas Administrativas del Órgano Judicial atribuye a la Dirección de Auditoría Interna, funciones propias de los Contadores Públicos, tales como: la fiscalización y regulación del cumplimiento de los sistemas y controles contables establecidos en el Órgano Judicial, coordinar con la Contraloría General de la República la organización y ejecución de los métodos y sistemas contables y realizar las auditorías periódicas en los diferentes juzgados; y que sin embargo, el reglamento antes mencionado, exige como requisito para ocupar el cargo de Director de Auditoría Interna del Órgano Judicial, poseer título universitario en Finanzas, Administración Publica, Economía o Administración de Empresas, y no de Contador como lo ordena la Ley.

Observa la Sala, que si bien el artículo 9 impugnado, tal como fue aprobado por el Acuerdo N° 9 de 12 de agosto de 1992, exigía para el ejercicio del cargo de Director de Auditoría Interna del Órgano Judicial lo siguiente: ser panameño; haber cumplido treinta años de edad; poseer título universitario en Finanzas, Administración Pública, Economía o Administración de Empresas; y someterse a las reglas de concurso señaladas por el reglamento de carrera; esta norma fue modificada mediante el Acuerdo N° 10 de 27 de octubre de 1995, publicado en la Gaceta Oficial N° 22.917 de 23 de noviembre de 1995.

El nuevo texto de la norma modifica lo referente al título que se exige para ocupar el cargo de Director de Auditoría Interna, preceptuando que debe "Poseer título universitario en Contabilidad y licencia de Contador Público Autorizado", conforme lo establece la Ley N° 57 de 1978, que reglamenta la profesión de Contador Público Autorizado.

A juicio de la Sala, como quiera que el texto impugnado del artículo 9 del Acuerdo 9 de 1992 ha sido modificado por el Acuerdo N° 10 de 1995, ambos dictados por la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, y la norma impugnada no está vigente, el objeto litigioso de este proceso ha dejado de existir en el mundo jurídico. Por lo expuesto, debe declararse que se ha producido el fenómeno jurídico denominado sustracción de materia y ordenarse el archivo del expediente.

La modificación del texto impugnado del artículo 9 del Acuerdo N° 9 de 1992, debe tenerse en cuenta al resolver este proceso en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 979 del Código Judicial.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, por sustracción de materia DECLARA EL CESE del proceso iniciado con la demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por el licenciado Aurelio Antonio Robles en representación de AUGUSTO CÉSAR RODRÍGUEZ, para que se declare nulo, por ilegal, el Artículo 9 del Reglamento de las Áreas Administrativas del Órgano Judicial, aprobado mediante el Acuerdo N° 9 de 12 de agosto de 1992.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA ZARAK (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO HERNÁN BONILLA G., EN REPRESENTACIÓN DEL LICENCIADO DIÓGENES ARDINES GONZÁLEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO N° 14 DE 10 DE MARZO DE 1987, DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FÁBREGA P. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Procede la Sala a decidir la Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad, interpuesta por el Licenciado Diógenes Ardines González, por conducto de apoderado idóneo, para que se declare nulo por ilegal, el Decreto Ejecutivo N° 14 de 10 de marzo de 1987, expedido por el Presidente de la República con el Ministro de Comercio e Industrias.

Mediante ese Decreto Ejecutivo el Órgano Ejecutivo designó los miembros de la Junta Técnica de Contabilidad para un período de dos (2) años.

El período de los miembros de la Junta Técnica de dos años venció el 10 de marzo de 1989, razón por la cual cesó de producir efectos jurídicos.

En consecuencia, se ha producido el fenómeno que se conoce como sustracción de materia mediante el cual el proceso deviene sin objeto. (S. de 5 de sept. de 1953, Rep. Jur. N° 12, pág. 38; S. de 11 de mayo de 1966, Rep. Jur. N° 12, pág. 62; S. de 21 de junio de 1979, Espinosa vs. Lescano).

El artículo 979 del Código establece que "en la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo de las pretensiones objeto del proceso ocurrida después de haberse propuesto la demanda, siempre que haya sido aprobada oportunamente".

Por las anteriores consideraciones, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, de acuerdo con la opinión del Procurador de la Administración, reconoce la sustracción de materia y ordena el archivo del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JORGE FÁBREGA P.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ALEJANDRO PÉREZ, EN NOMBRE DE LEOPOLDO BENEDETTI, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 98 DE 29 DE DICIEMBRE DE 1994, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y LA EMPRESA PYCSA DE PANAMÁ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Alejandro Pérez, actuando en representación de Leopoldo Benedetti, ha presentado demanda contencioso administrativa de nulidad con el objeto que esta Sala Tercera de la Corte Suprema declare que es nulo por ilegal, el Contrato Administrativo N° 98 de 29 de diciembre de 1994, suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y la Empresa Pycsa de Panamá, S. A.

I. LA PRETENSIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE Y SUS FUNDAMENTOS.

En la demanda se pide a la Sala que declare que es nulo el Contrato Administrativo N° 98 de 29 de diciembre de 1994, suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y la Empresa Pycsa de Panamá, S. A., mediante el cual "el concesionario se obliga formalmente a llevar a cabo el: estudio, diseño, construcción, mantenimiento, operación, explotación, de la Autopista Panamá-Colón y de la Fase I del Corredor Norte (Sección Oeste)."

La parte demandante sostiene que el mencionado contrato administrativo infringe de manera directa, por comisión, el artículo 2 de la Ley N° 5 del 15 de abril de 1988, que define el sistema de concesión administrativa, como el contrato celebrado entre el Estado y una persona jurídica que "se obliga, por su cuenta y riesgo a realizar cualesquiera de las actividades susceptibles de concesión ..., bajo el control y fiscalización de la autoridad concedente, a cambio de una retribución." El apoderado judicial del demandante, sustenta la violación que le imputa al artículo en mención en los siguientes términos:

> "... al pactarse en el contrato de Concesión Administrativa, obligaciones que transcienden los límites y el espíritu de la Ley de Concesiones Administrativas ...
>
> El obligarse contractualmente a impedir que se construya directamente o por vía de concesiones administrativas carreteras o autopistas, y a no realizar `mejoras a la actual carretera Panamá-Colón son privilegios que, en modo alguno, se derivan del tenor literal del artículo 2 de la precitada ley y por el contrario, conculcan lo preceptuado en dicho artículo.
>
> Lo pactado por el Estado Panameño, también consagran contractualmente la ausencia de libre competencia en las construcciones y obras del Estado; algo totalmente contradictorio y violatorio a lo establecido por el precitado artículo 2, que en materia de concesiones administrativas, no limita el número de concesiones que se pudiesen contratar para la construcción de carreteras o autopistas, ni limita la posibilidad que compitan entre sí, por vías públicas paralelas, diversos concesionarios.
>
> Por otro lado, la obligación que tiene el Estado Panameño de incentivar a los usuarios al uso de la vía objeto de la concesión, no tiene ningún asidero legal ya que el Estado no tiene porque compartir obligaciones propia (sic) y unilaterales del concesionario, quién por su propia cuenta y riesgo asume el éxito o fracaso de su inversión, y que la vía pública objeto de la concesión se use o no.
>
> El artículo 2 es claro, la inversión es por cuenta y riesgo del concesionario, y cualquier pacto en contrario, viola directamente por comisión, este precepto legal.
>
> De igual forma es violatorio de este artículo 2, en cuanto a las garantías de servidumbre y vía pública que pactó el Estado Panameño, si ello implica desembolsos del Estado para indemnizaciones o compras de terrenos por donde se construya la obra, ya que en este supuesto, el Estado estaría por su propia cuenta realizando actividades propias de la concesión, infringiendo directamente lo estatuido legalmente: las concesiones administrativas corren por cuenta y riesgo del concesionario."

En segundo lugar, la parte actora considera que ha sido violado de manera

directa por comisión el artículo 1640 del Código Administrativo, el cual dispone qué puede considerarse vía pública y qué sucede si alguna porción de ésta es usurpada. A juicio del demandante, se ha "enajenado tanto la vía Panamá-Colón como la vía del Ferrocarril de Panamá, al restringir e impedir el derecho a su mantenimiento y a mejoras." Considera que al no estar autorizado este hecho en la ley de las concesiones administrativas "implica la restricción de la inajenabilidad de la vía pública," lo que a su juicio, propicia el monopolio y la limitación al dominio público.

También considera violado, de manera directa por omisión, el artículo 1° de la Ley 35 de 30 de junio de 1978 mediante el cual se faculta al Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Obras Públicas a llevar a cabo los programas e implementar la política de construcción y mantenimiento de las obras públicas de la Nación. El demandante considera que se ha violado el presente artículo de la siguiente manera:

> "El texto de la norma legal es clara y no admite ninguna otra interpretación. El Ministro de Obras Públicas tiene el deber de realizar mejoras y a (sic) efectuar mantenimientos en las obras públicas actuales y las futuras, ya sea que se construya mediante actos públicos o por concesiones administrativas. El Ministro de Obras Públicas no puede ni debe pactar la no realización de `mejoras en la Carretera Panamá-Colón, porque esta omitiendo la aplicación de una norma legal aplicable, y por ello viola la exigencia legal de lo estatuido por esta disposición. Por ello, al pactarse la no realización de `mejoras en la Carretera Panamá-Colón, porque está omitiendo la aplicación de una norma legal aplicable, y por ello viola la exigencia legal de lo estatuido por esta disposición. Por ello, al pactarse la no realización de `mejoras el Estado Panameño conviene en adquirir una obligación ilegal, violatoria por omisión del precitado artículo N° 1.
>
> El Ministerio de Obras Públicas debe cumplir y aplicar lo estatuido en el Código Administrativo, y en consecuencia no puede ni limitar ni obviar el deber legal que posee el Estado Panameño de implantar y ejecutar las políticas de construcción y mantenimiento de vías nacionales.
>
> Por otro lado, el Estado Panameño, a través del Ministro de Obras Públicas no puede condicionar su acceso a áreas de construcciones de vía públicas objeto de concesiones administrativas, ya que las labores de supervisión, inspección y control de obras públicas son asuntos inherentes a su competencia privativa, derivadas del deber legal de llevar a cabo los programas y políticas de construcción y mantenimiento de las obras públicas de la Nación. En este sentido, el Estado Panameño al pactar con la Empresa Pycsa de Panamá, S. A. que el acceso de funcionarios de obras públicas a la obra objeto de la concesión administrativa de la Carretera Panamá-Colón, está sujeto a un acuerdo de formalidades y requisitos, viola directamente el artículo 1 de la precitada ley N° 35; ya que por mandato de ley el Estado debe y tiene acceso irrestricto e incondicional a las obras públicas sean objeto de concesiones administrativas o no, derivada de la función fiscalizadora emanada del precitado artículo N° 1 de la ley N° 35 de 30 de junio 1978."

Por último, la parte actora considera violado, de manera directa por omisión, el artículo 15 del Código Civil que establece que la obligatoriedad y aplicación de las órdenes y demás actos ejecutivos que el Gobierno expide en pleno uso de su potestad reglamentaria. A su juicio, "se han desconocido las leyes que desarrollan los principios legales y constitucionales que rigen la libre competencia y comercio contenidos en los artículos 290 y 293 de nuestro estatuto fundamental, al inobservarse ello, se ha conculcado la disposición legal citada."

II. EL INFORME DE CONDUCTA DEL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS.

El Ministro de Obras Públicas rindió informe explicativo de conducta mediante Nota DM-377-95 de 28 de marzo de 1995 en la cual señala fundamentalmente lo siguiente:

"...

El Consejo de Gabinete a través de la Resolución de Gabinete N° 661 del 15 de diciembre de 1994, resolvió acoger la recomendación efectuada por el Ministerio de Obras Públicas y adjudicar a la empresa Pycsa Panamá, S. A. la ejecución mediante el sistema de concesión administrativa, del proyecto en referencia, de igual forma se resolvió emitir concepto favorable al proyecto de contrato a celebrarse entre el Ministerio de Obras Públicas y la mencionada empresa.

Así en base a los anteriores antecedentes se suscribió el día 29 de diciembre de 1994, el contrato respectivo con la empresa Pycsa Panamá, S. A. para la ejecución del proyecto denominado `Autopista Panamá-Colón y Fase I del Corredor Norte (Sección Oeste) , por el sistema de concesión administrativa.

Es oportuno señalar que de conformidad con lo que establece el artículo 22 de la Ley de Concesión Administrativa y el artículo 12 del Decreto que la reglamenta, que fue modificado por el artículo 9 del Decreto N° 272 del 30 de noviembre de 1994, el contrato antes mencionado contiene los siguientes aspectos:

...

En adición a lo antes expresado, consideramos prudente puntualizar los siguiente aspectos:

a. Las obligaciones consignadas en la cláusula sexta del Contrato N° 98 de 1994, tienen su fundamento jurídico en lo señalado en el numeral 6 del artículo 12 de la Ley N° 5 de 1988 y en los literales `g e `i del artículo 12 del Decreto Ejecutivo N° 17 de 1989.

b. De conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 5 de 1988, no se aplicarán a las concesiones reguladas por esta Ley las disposiciones contenidas en la **Ley 35 del 30 de junio de 1978**.

c. El numeral 18 de las Condiciones Especiales del Pliego de Bases, que precedió la celebración del Contrato N° 98 de 1994, estableció lo siguiente:

`18 Indemnizaciones:

El Concesionario asumirá y considerará dentro del costo de su propuesta las sumas de dinero que el Estado deba pagar, por la adquisición o expropiación de fincas de propiedad privada, necesarias para la ejecución de la obra.

El Concesionario cancelará a cada propietario las sumas de dinero necesarias, tan pronto se concreten la expropiación o adquisición de cada finca, según lo indique el Estado.

El valor de cada finca determinado mediante avalúo efectuado por el Ministerio de Hacienda y Tesoro.

Cabe señalar que de acuerdo con lo estipulado en la cláusula segunda del Contrato N° 98 de 1994, las Condiciones Especiales formarán parte integral del Contrato de Concesión.

d. El comprometerse el Estado según se establece en la cláusula sexta del contrato, a no realizar mejoras a la actual carretera Panamá-Colón y a la vía férrea que une a estas dos ciudades, a niveles que representen competencia al concesionario y a no construir directamente o a través de concesión administrativa alguna vía que represente competencia al concesionario, constituye una contraprestación de el (sic) Estado o una retribución a el (sic)

concesionario por su inversión, que se fundamenta precisamente en lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N° 5 de 1988, según el cual la retribución que se pacte puede consistir en derechos a cobrar tarifas o cualquier otra forma que se convenga.

e. El Estado debe proporcionar a un Concesionario que se obliga a construir y operar una obra pública se le den ciertas garantías de que podrá recuperar su inversión y obtener una ganancia por el capital invertido en la obra, lo cual no sería posible si el Estado en cualquier momento pudiera o se reservara la facultad de construir alguna vía alterna o de realizar mejoras a las vías de comunicación ya existentes en el tramo que cubre la autopista a construirse, a niveles que puedan representar competencia al concesionario. Bajo esas condiciones pensamos que ninguna empresa o consorcio estaría interesado en invertir en una obra de la magnitud que tiene la que se proyecta construir bajo el referido contrato, por la sencilla razón de que no se le daría ninguna seguridad de que al finalizar la obra va a poder recuperar el capital invertido ni obtener una ganancia razonable por la inversión hecha.

f. El artículo 2 de la Ley de Concesión Administrativa no da pie en su texto, ni quiere indicar que deba existir en todo momento una libre competencia entre concesionarios para construir por concesión vías públicas alternas o que puedan competir entre sí. Y es que de interpretarse de esta forma dicho artículo se privaría a todo concesionario de una obra pública a poder contar con una garantía al menos mínima de que si finaliza la obra contratada, y cumple con ello, podrá recuperar la inversión realizada y obtener una ganancia justa y merecida por el riesgo que asumió al hacer la inversión de la construcción de la obra.

g. No existe en la Ley N° 5 de 1988 ninguna disposición que impida que el Estado se obligue a incentivar el uso de la obra objeto de concesión y esa obligación de incentivar constituye un mecanismo de retribución lícito que pueda pactarse con fundamento en la parte final del artículo 2 de la Ley 5 de 1988 y en el ordinal 3 del artículo 15 de la referida ley, otorgando éste último el derecho del Concesionario a recibir la colaboración para que el bien objeto de la concesión se le dé el uso para el cual ha sido realizado.

h. La obligación consignada en la cláusula sexta del contrato en el sentido de que el Estado se obliga a garantizar las servidumbres, el derecho de vía y los derechos de paso y acceso que el Concesionario requiera para efectuar las labores pactadas se fundamenta en lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 15 de la Ley 5 de 1988, según el cual uno de los derechos del Concesionario es el que las entidades concedentes le otorguen las servidumbres necesarias para la ejecución de la obra y para la prestación del servicio para el cual se ha realizado la misma, y para que se expidan por su conducto los permisos de uso que correspondan en coordinación con las entidades competentes .

i. En ninguna cláusula del contrato se estipula que la obra a construirse se enajenará al concesionario ni a ninguna otra empresa o consorcio; por el contrario dicha obra pertenecerá al Estado y en este sentido se establece en el último párrafo de la cláusula primera del contrato, que el concesionario no podrá solicitar por vía judicial, justificación de título constitutivo de dominio sobre las mejoras u obras permanentes efectuadas en el área dada en concesión.

Tampoco existe cláusula que establezca que el Estado a través del Contrato N° 98 de 1994 traspasa o enajena a el Concesionario, la actual carretera Panamá-Colón, ni la vía férrea que une ambas ciudades.

j. Lo establecido en el párrafo noveno de la cláusula tercera del

> contrato, de que el concesionario permitirá el acceso a la obra de funcionarios del MOP o del Estado, siempre que se llenen las formalidades que al respecto se acuerden, no impide en ningún momento que el Ministerio de Obras Públicas a través de los funcionarios designados pueda ejercer la supervisión e inspección de las obras, sino que sólo dispone que para ello se han de cumplir las formalidades que se acuerden entre el Estado y el Concesionario, lo cual viene a ser lógico, pues por ejemplo ello garantizaría que la obra sólo pudiera ser inspeccionada por los funcionarios que para ello designe el MOP exigiéndose como formalidad que éstos se identifiquen debidamente, y otras situaciones más que puedan darse.
>
> En tal sentido se puede observar que el párrafo décimo tercero de la cláusula tercera del contrato, estipula que el Estado tiene todo el derecho de inspeccionar la ejecución de la obra para garantizar que en su construcción se cumplan las normas y prácticas aceptadas en el ejercicio de la Ingeniería así como las especificaciones técnicas aprobadas y/o suministradas por el Estado."

Finalmente, observa la Sala que PYCSA PANAMÁ, S. A., mediante escrito presentado en la Secretaría de la Sala Tercera, el 8 de junio de 1995, a través de su apoderado judicial, se opone a los argumentos expuestos por la parte demandante. A criterio de la representación judicial de PYCSA PANAMÁ, S. A., la cláusula tercera del Contrato N° 98 de 29 de diciembre de 1994 es clara al enunciar que el concesionario tiene la obligación de dar acceso a la obra a los funcionarios del M. O. P. o del Estado, siempre que se llenen las formalidades acordadas al respecto. Igualmente afirma, que en el pliego de cargos para la licitación y en las condiciones generales que también son parte del contrato, se estableció que los costos que impliquen el ejercicio de derechos de vía, paso y acceso frente a terceros, estarían comprendidos dentro del costo propuesto para la obra. No obstante, nada en el contrato se opone al derecho del Estado a introducir mejoras o efectuar reparaciones a la carretera actual que une a las ciudades de Panamá y Colón o la vía férrea existente. En relación con lo antes anotado, la apoderada de PYCSA PANAMÁ, S. A., enfatiza que paralelamente a ello, el Estado debe tener presente que en toda concesión administrativa "es de esencia" la obligación de dar al concesionario una retribución, la cual no tendría objeto, si el Estado por vía directa o indirecta, ejecutara actos de competencia que hicieran imposible para el concesionario, el cobro de la retribución a que hace referencia el artículo 2 de la Ley 5 del 15 de abril de 1988.

III. DECISIÓN DE LA SALA TERCERA.

La Procuradora de la Administración, solicita en su Vista N° 304 de 20 de julio de 1995, visible a fojas 44 a 60 del expediente, que se desestimen las pretensiones del demandante, puesto que "el Contrato N° 98 de 1994 se adecúaala legislación patria relacionada con las concesiones administrativas."

Procede entonces la Sala a examinar las infracciones señaladas por la parte actora.

Para resolver, la Sala entra en primer lugar, a efectuar un breve análisis en lo que concierne a las concesiones administrativas, tal como están previstas en nuestro ordenamiento positivo. Las concesiones administrativas son contratos administrativos, los cuales se encuentran debidamente regulados en disposiciones legales en las que se delimita la situación jurídica del contratante que en este caso es representado por la Administración, y del contratista que puede estar representado por personas naturales o jurídicas o sociedades de economía mixta debidamente facultadas para ello, e igualmente en ellas se prevé, el procedimiento a seguir para la interpretación y ejecución de cada uno de esos contratos. En ese sentido, observa la Sala que el Código Fiscal regula de manera genérica los contratos administrativos y mediante la Ley N° 5 de 15 de abril de 1988 que está reglamentada por el Decreto N° 17 de 29 de noviembre de 1989 que a su vez fue modificado por el Decreto N° 272 de 30 de noviembre de 1994, se establece y regula el sistema de ejecución de obras públicas por el sistema de concesión administrativa y se adoptan otras disposiciones. El artículo 2 de la

Ley N° 2 de la Ley N° 5 de 1988, define de forma global lo que es una concesión administrativa, sin perjuicio claro está, de los requisitos y condiciones que se establecen en el pliego de bases y en el mismo contrato. El artículo en mención es del tenor siguiente:

> "ARTÍCULO 2: Mediante el sistema de concesión administrativa, una persona jurídica o entidad se obliga, por su cuenta y riesgo, a realizar cualesquiera de las actividades susceptibles de concesión a que se refiere esta ley, bajo el control y fiscalización de la entidad concedente, a cambio de una retribución que puede consistir en los derechos o tarifas que, con aprobación del Órgano Ejecutivo, el primero cobra a los usuarios de tales obras por el tiempo que se determine en el acto que otorgue la concesión, o en cualquier otra forma que se convenga."

De lo antes citado se colige claramente, que la concesión administrativa es un contrato en el cual el Estado, que está representado para los efectos de dicha Ley por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Obras Públicas, concede a una persona jurídica el derecho a ejecutar a su cuenta y riesgo una obra, siempre que sea bajo el control y fiscalización del concedente a cambio de una retribución consistente en el cobro de tarifas o cualquier otra forma que se convenga.

Observa la Sala que el actor al invocar el artículo 2 de la Ley 15 de abril de 1988 como infringido, afirma por un lado, que el contrato acusado impide la realización de mejoras a la actual carretera Panamá-Colón y, por otro lado, consagra la ausencia de libre competencia en las construcciones y obras del Estado.

No es cierto, como lo señala la parte actora, que se ha violado el artículo 2 de la Ley N° 5 de 1988, por cuanto se aprecia que el Contrato 98 de 1994 fue redactado de acuerdo a lo que establece la mencionada Ley N° 5 de 1988, reglamentada por el Decreto Ejecutivo 17 de 29 de noviembre de 1989, por lo que el mismo de ninguna forma trasciende los límites y el espíritu de la ley de Concesiones Administrativas. En opinión de la Sala, no se puede soslayar el hecho que al suscribirse un contrato de esa naturaleza entre el Estado y un particular, surgen derechos y obligaciones recíprocas. Ejemplo de lo anterior lo tenemos en que la persona natural o jurídica que se proponga llevar a cabo una concesión administrativa, debe asumir los riesgos de la obra, por lo que sería contraproducente, que otra obra preste el mismo servicio en iguales condiciones a la sociedad, ya que ello significaría "competencia" e impediría que se realizaran este tipo de contratos entre particulares y el Estado, y ese no es el objetivo, habida cuenta que nada en el contrato acusado se opone al derecho del Estado de introducir mejoras o efectuar reparaciones a la carretera que une Panamá y Colón, o la vía férrea existente tal como se aprecia en la cláusula sexta y la Addenda N° 1 del contrato respectivamente. El deber del Estado es, pues, como parte de su política económica, ya que es a quien corresponde la prestación de los servicios públicos, garantizar el derecho que le asiste al concesionario de percibir su retribución, ya sea mediante tarifas que percibe del usuario por un tiempo determinado previa autorización del Estado, o cualquier otro método que se pacte como contraprestación a la inversión efectuada. En relación a lo anterior la Sala aclara que no se trata de limitar la libre competencia como lo aduce la parte actora, sino que, por el contrario, se trata de aclarar la postura del Estado frente al concesionario el cual es escogido de un grupo de personas naturales o jurídicas que asistieron a la convocatoria al poseer capacidad para obrar y reunir con los requisitos y condiciones legales y del pliego de bases.

Finalmente, en cuanto al desembolso por parte del Estado de los costos para que la concesionaria pueda ejercer derechos de servidumbre y vía pública que alega la parte actora, opina la Sala que no le asiste la razón, ya que si se toma en cuenta la cláusula segunda del mismo, se observa que enuncia claramente que los derechos de concesión están sujetos al cumplimiento de los planos y especificaciones técnicas, condiciones generales y condiciones especiales que forman parte "integral" del contrato. En ese orden de ideas se observa que dentro de las condiciones especiales, se prevé en la cláusula 18 relativa a las

indemnizaciones, que el concesionario asumirá dentro del costo de su propuesta, "las sumas de dinero que el Estado deba pagar por la adquisición o expropiación de fincas necesarias para la ejecución de la obra". Como resultado de todo lo anterior, se desestima, pues, la violación al artículo 2° de la Ley N° 5 de 15 de abril de 1988.

En cuanto a la violación que se le endilga al artículo 1640 del Código Administrativo, que hace referencia a que las vías públicas son de uso común inalienables e imprescriptibles, no coincide la Sala con lo que afirma la parte actora. Entre los argumentos por ella expuestos a fin de sustentar la violación alegada, figura que el Contrato N° 98 de 29 de diciembre de 1994, enajena tanto la vía Panamá-Colón como la Vía del Ferrocarril, al restringir su desarrollo, mantenimiento y mejoras con el pretexto de impedir la existencia de libre competencia. No ve la Sala, cuál es la relación entre la norma invocada y la pretensión sugerida, dado que, tal como lo señala la firma que representa PYCSA PANAMÁ, S. A., la suscripción de un contrato que otorga una concesión administrativa para la construcción de la autopista Panamá-Colón y la Fase Primera del Corredor Norte y lo expuesto en relación a los monopolios, en nada tiene que ver con una norma que señala que las vías públicas son de uso común inalienables e imprescriptibles. El contrato N° 98 de 29 de diciembre de 1994, de ningún modo pretende enajenar la Vía-Panamá-Colón o la vía férrea, si partimos del hecho que "enajenar" según el Diccionario de la Lengua Española es, "pasar o transmitir a otro el dominio de una cosa o algún derecho sobre ella", que no es el caso, y si tomamos en cuenta lo antes señalado, que nada en el contrato impide al Estado seguir brindando ese servicio con las mejoras que conlleven esa vías que son públicas y por tanto a disposición de todos, salvo que sean a niveles que representen competencia. Vale destacar, con respecto a lo anterior, que según la Cláusula Sexta contenida en la Addenda N° 1 de 23 de noviembre de 1994, queda excluida de esa obligación la vía férrea actual, lo que **a contrario sensu** presupone que sí puede ser mejorada a niveles que pueda competir con la concesión administrativa. (Diccionario de la Lengua Española, editorial Espasa-Calpe, S. A., vigésima primera edición, Madrid, 1992, pág. 575).

La parte actora también estima como violado el artículo 1 de la Ley 35 de 30 de junio de 1978 en el cual se faculta al Órgano Ejecutivo, para que por conducto del Ministerio de Obras Públicas, lleve a cabo los programas e implemente la política de construcción y mantenimiento de las obras públicas de la Nación. La Sala no comparte lo señalado por el demandante al respecto, dado que de la documentación allegada al proceso se infiere que, precisamente, el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Obras Públicas con miras de implementar la política de construcción y mantenimiento de las obras públicas de la Nación, pretende por un lado, mediante concesión administrativa la construcción de la Autopista Panamá-Colón y la Fase I del Corredor Norte y, por otro lado, brindarle mantenimiento a las vías que actualmente existen y que unen a las provincias de Panamá y Colón, que si bien es cierto según lo pactado no pueden ser a niveles competitivos por las razones antes anotadas, no es menos cierto que las mismas permitirán el uso de la actual carretera Panamá-Colón. Igualmente, es importante señalar que la Ley N° 5 de 1988 faculta al Ministerio de Obras Públicas a realizar todas las inspecciones que tenga a bien efectuar a fin de examinar el buen avance de la obra. Lo anterior fue claramente previsto, sin estar sujeto a condición alguna el acceso a los funcionarios del M. O. P. , en el Contrato N° 98 de 29 de diciembre de 1994 cuando en la cláusula tercera, párrafo 13 dispone:

> "EL CONCESIONARIO acepta que EL ESTADO tiene todo el derecho de inspeccionar la ejecución de la obra para garantizar que, en su construcción, se cumplan las normas y prácticas aceptadas en el ejercicio de la Ingeniería así como las especificaciones técnicas aprobadas y/o suministradas por EL ESTADO."

Finalmente, la parte actora aduce como violado el artículo 15 del Código Civil según el cual las órdenes y demás actos del gobierno expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria son obligatorios, salvo que contradigan la Constitución o las leyes. A criterio de la parte actora el artículo en mención ha sido violado de manera directa por omisión, al desconocerse la leyes que

desarrollan los principios legales y constitucionales que rigen la libre competencia y comercio contenidos en los artículos 290 y 293 de la Constitución Nacional.

La Sala se ha manifestado en diversas ocasiones en relación con la facultad que posee el Presidente de la República con el Ministro respectivo de reglamentar las leyes, la cual está concedida en el numeral 14 del artículo 179 de la Constitución Política. En esa norma se señala que el Presidente de la República, con la participación del Ministro respectivo, tiene potestad para reglamentar las leyes que lo requieran a fin de asegurar o facilitar su cumplimiento o aplicación. No obstante también se ha señalado que los actos emitidos en función de dicha potestad, no pueden alterar en ningún caso, ni el texto ni el espíritu de la ley que reglamenta. De lo antes señalado, se colige que no se trata de una función legislativa, sino de una potestad para reglamentar leyes concedidas al Órgano Ejecutivo para su efectiva aplicación y cumplimiento. En ese sentido Gustavo Penagos afirma que, la generalidad que tiene o debe tener la orden o el reglamento no es criterio suficiente para hacerlo participar de la función legislativa, porque él no "crea" modifica ni extingue una norma jurídica. Solamente provee, en forma general, el modo práctico de su aplicación." (El Acto Administrativo, Tomo I, Cuarta Edición, Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, 1987, pág. 425). Queda claro, pues, que toda orden o acto ejecutivo del gobierno expedido en ejercicio de la potestad reglamentaria están subordinados tanto a la Constitución como a las leyes, de conformidad con el artículo 15 del Código Civil.

Es en virtud de la potestad reglamentaria a la que hacemos referencia, que el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Obras Públicas, emitió los Decretos N° 17 de 1989 y el N° 272 de 1994 que modifica al anterior, que se desarrolla la Ley N° 5 de 1988 que contempla el sistema de ejecución de obras públicas, mediante concesión administrativa.

La Sala no comparte el criterio que sustenta el demandante, pues, el Contrato N° 98 de 1994 suscrito por el Ministerio de Obras Públicas y la empresa PYCSA PANAMÁ, S. A., no violenta de modo alguno las normas relativas a la libre competencia y comercio que la Constitución Nacional establece. Lo anterior es así, toda vez Ley N° 5 de 1988 desarrollada por los Decretos N° 17 de 1989 y el N° 272 de 1994, claramente contemplan que las obras susceptibles de realizarse por el sistema de concesión administrativa se harán mediante un procedimiento de selección y, en este caso, el concesionario fue escogido entre personas naturales y jurídicas que asistieron a la convocatoria y su selección fue conforme a la Ley, la cual en su artículo 6° remite a la legislación fiscal para los efectos del procedimiento a seguir en la selección del concesionario. En razón de lo antes anotado, concluye la Sala que no se vulnera de modo alguno el artículo 15 del Código Civil, dado que, por un lado, no estamos en presencia de un monopolio y, por otro lado, tampoco se restringe el libre comercio, ya que en el contrato suscrito nada impide al Estado efectuar mejoras en la actual carretera Panamá-Colón, salvo que represente competencia dada la naturaleza del mismo, condición a la cual no está sujeta la actual vía férrea que sí puede ser objeto de mejoras que la coloquen en situación competitiva. Se desestima este último cargo.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL el Contrato Administrativo N° 98 de 29 de diciembre de 1994, suscrito entre el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS y la EMPRESA PYCSA PANAMÁ, S. A.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ICAZA, GONZÁLEZ-RUÍZ & ALEMÁN, EN REPRESENTACIÓN DE TULIP INTERNACIONAL A/S PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 7171 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995, DICTADO POR LA DIRECTORA GENERAL DE COMERCIO INTERIOR DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, OCHO (8) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Honorable Magistrada Mirtza Angélica Franceschi de Aguilera ha manifestado impedimento para conocer de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por la firma Icaza, González-Ruíz & Alemán, en representación de Tulip Internacional A/S, para que se declare nulo, por ilegal, el Resuelto N° 7171 de 15 de septiembre de 1995, dictado por la Directora General de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industrias.

La Magistrada Franceschi de Aguilera fundamenta su impedimento en los siguientes términos:

> "HONORABLES MAGISTRADOS DE LA SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:
>
> Pongo en conocimiento de ustedes que estoy impedida para conocer de la presente Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, interpuesta por la firma Icaza, González-Ruíz & Alemán, en representación de TULIP INTERNACIONAL A/S, para que se declare nulo por ilegal, el Resuelto N° 7171 de 15 de septiembre de 1995, dictado por la Directora General de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industrias, porque antes de ser Magistrada, actué como apoderada general para procesos de AGENCIAS ESCOFERRY, S. A., con cuya audiencia debe resolverse la presente controversia (Art. 348 ordinal 3 del Código Judicial).
>
> Por consiguiente, solicito a los Honorables Magistrados que se me declare impedida para el conocimiento del presente negocio, de acuerdo con lo que preceptúa el (sic) artículos 79 ordinal 4 de la Ley 135 de 1943 y 749 ordinal 2° del Código Judicial."

La Magistrada Franceschi de Aguilera fundamenta su impedimento en el numeral 4 del artículo 78 de la Ley 135 de 1943 en conjunto con el numeral 2 del artículo 749 del Código Judicial motivo que es suficiente y que da lugar para separarla del conocimiento del presente negocio.

En consecuencia, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento de la MAGISTRADA MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA, la separa del conocimiento del negocio interpuesto y procede a llamar al Magistrado RAFAEL A. GONZÁLEZ, de la Sala Primera, para que asuma el conocimiento del mismo.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA LICENCIADA GRETTEL VILLALAZ DE ALLEN, EN SU PROPIO NOMBRE, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 002-96 DE 25 DE

ENERO DE 1996, DICTADA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Honorable Magistrada Mirtza Angélica Franceschi de Aguilera ha manifestado impedimento para conocer de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por la licenciada Grettel Villalaz de Allen, actuando en su propio nombre, para que se declare nula por ilegal, la resolución N° 002-96 de 25 de enero de 1996, dictada por el Presidente de la Junta Directiva de la Autoridad de la Región Interoceánica.

La Magistrada Franceschi de Aguilera fundamenta su impedimento en los siguientes términos:

> "HONORABLES MAGISTRADOS DE LA SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:
>
> Manifiesto a ustedes que estoy impedida para conocer de esta acción interpuesta por la Licda. Grettel Villalaz de Allen para que se declare nula por ilegal la resolución N° 002-96 de 25 de enero de 1996, dictada por el Presidente de la Junta Directiva de la Autoridad de la Región interoceánica, porque soy inquilina de uno de los bienes que administra esta entidad gubernamental y como tal, tengo interés en la decisión del caso.
>
> Por tanto, pido a los honorables Magistrados declaren legal el impedimento que manifiesto y me separen del conocimiento del presente negocio, con fundamento en el artículo 78 (4) de la Ley 135 de 1943 y el artículo 749 (6) del Código Judicial."

La Magistrada Franceschi de Aguilera fundamenta su impedimento en el numeral 4 del artículo 78 de la Ley 135 de 1943 en conjunto con el numeral 6 del artículo 749 del Código Judicial motivo que es suficiente y que da lugar para separarla del conocimiento del presente negocio.

En consecuencia, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera (Contenciosa Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento de la MAGISTRADA MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA, la separa del conocimiento del negocio interpuesto y procede a llamar al Magistrado ELIGIO A. SALAS, de la Sala Primera, para que asuma el conocimiento del mismo.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE IMPEDIMENTO, DEL MAGISTRADO ÓSCAR VARGAS VELARDE, DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, PARA QUE SE LE SEPARE DEL CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ANTECEDENTES N° 166-1-93-DAG-DEAE, DE 15 DE DICIEMBRE DE 1993, ELABORADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GENERAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Óscar Vargas Velarde, Magistrado Presidente de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, ha manifestado impedimento para que se le separe del conocimiento del Informe de Antecedentes N° 166-1-93-DAG-DEAE, del 15 de diciembre de 1993, elaborado por la Dirección de Auditoría General de la Contraloría General de la República, para determinar el uso y la disposición de los fondos públicos provenientes del Programa Multiagencial de Legisladores, durante el período 1984-1989, por parte del entonces legislador Pedro Teodoro Brin Martínez.

El Magistrado Oscar Vargas Velarde fundamenta su impedimento en los siguientes términos:

> "Sobre el particular, con el respeto que me caracteriza, le expreso mi impedimento para asumir y resolver el mérito de dicho Informe de Antecedentes debido a que el nombre de mi esposa, la señora Aura E. de Vargas, aparece en los documentos visibles a fojas 167, 169, 171, 172, 173, 174, 175 y otras del expediente, en virtud del cargo que desempeñaba en la Dirección General para el Desarrollo de la Comunidad."

A juicio de los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, la causal de impedimento citada por el Magistrado Vargas, se adecua a lo establecido en el numeral 1 del artículo 749 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 2 del decreto de Gabinete N° 36 de 10 de febrero de 1990.

En virtud de lo anterior, lo procedente es declarar legal el impedimento invocado.

En consecuencia, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE ES LEGAL el impedimento invocado por el Magistrado Oscar Vargas Velarde para que se le separe del conocimiento del Informe de Antecedentes N° 166-1-93-DAG-DEAE, del 15 de diciembre de 1993, elaborado por la Dirección de Auditoría General de la Contraloría General de la República, para determinar el uso y la disposición de los fondos públicos provenientes del Programa Multiagencial de Legisladores, durante el período 1984-1989, por parte del entonces legislador Pedro Teodoro Brin Martínez y, en base al artículo 2 del Decreto de Gabinete N° 36 de 10 de febrero de 1990, llama al Magistrado Suplente, para que asuma el conocimiento del mismo.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE IMPEDIMENTO, DEL MAGISTRADO ÓSCAR VARGAS VELARDE, DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, PARA QUE SE LE SEPARE DEL CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ANTECEDENTES N° 225-1-93-DAG-DEAE, DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1993, ELABORADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Óscar Vargas Velarde, Magistrado Presidente de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, ha manifestado impedimento para decidir sobre la medida precautoria relacionada con el ex legislador Santiago Curabo Ábrego, en el proceso que se le sigue de conformidad con la Resolución de reparos N° 86-94 de 5 de julio de 1994, fundada en el Informe de Antecedentes N° 225-1-93-DAG-

DEAE, del 28 de diciembre de 1993, elaborado por la Dirección de Auditoría general de la Contraloría General de la República, para determinar el uso y la disposición de los fondos públicos provenientes del Programa Multiagencial de Legisladores, durante el período 1984-1989.

El Magistrado Óscar Vargas Velarde fundamenta su impedimento en los siguientes términos:

> "Sobre el particular, con el respeto que me caracteriza, le expreso mi impedimento para conocer el mencionado caso debido a que el nombre de mi esposa, la señora Aura E. de Vargas, aparece en los documentos visibles a fojas 133, 134, 136 y 227 del expediente, en función de cargo que ocupaba en la Dirección General para el Desarrollo de la Comunidad."

Los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, consideran fundado el impedimento en vista de que el mismo se enmarca dentro de lo previsto en el numeral 1 del artículo 749 y 754 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 2 del Decreto de Gabinete N° 36 de 10 de febrero de 1990.

En consecuencia, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE ES LEGAL el impedimento invocado por el Magistrado Óscar Vargas Velarde para decidir sobre la medida precautoria relacionada con el ex legislador Santiago Curabo ábrego, en el proceso que se le sigue de conformidad con la Resolución de reparos N° 86-94 de 5 de julio de 1994, fundada en el Informe de Antecedentes N° 225-1-93-DAG-DEAE, del 28 de diciembre de 1993, elaborado por la Dirección de Auditoría general de la Contraloría General de la República, para determinar el uso y la disposición de los fondos públicos provenientes del Programa Multiagencial de Legisladores, durante el período 1984-1989 y, en base al artículo 2 del Decreto de Gabinete N° 36 de 10 de febrero de 1990, llama al Magistrado Suplente, para que asuma el conocimiento del mismo.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA LICENCIADA GRETTEL VILLALAZ DE ALLEN, EN SU PROPIO NOMBRE, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 002-96 DE 25 DE ENERO DE 1996, DICTADA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Honorable Magistrado Eligio A. Salas, ha manifestado impedimento para conocer de la demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por la licenciada Grettel Villalaz de Allen, actuando en su propio nombre, para que se declare nula por ilegal, la resolución N° 002-96 de 25 de enero de 1996, emitida por el Presidente de la Junta Directiva de la AUTORIDAD DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA.

El Magistrado Salas fundamenta su impedimento en los siguientes términos:

> "Respetuosamente solicito al resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte, me separen del conocimiento de esta demanda Contencioso Administrativa de Nulidad interpuesta contra la

> Resolución N° 002-96 de 25 de enero de 1996, dictada por el Presidente de la Junta Directiva de la AUTORIDAD DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA, toda vez que en la actualidad soy inquilino de uno de esos bienes situación que podría afectar mi interés en la decisión de este caso.
>
> En ese sentido, es evidente que estoy vinculado a la prenombrada Autoridad de la Región Interoceánica y, por lo tanto, con el debido respeto solicito se **acceda** a separarme del presente negocio, como anteriormente lo ha hecho el Pleno en otros casos.
>
> Fundamento de derecho: numerales 6 y 13 del artículo 749 del Código Judicial."

De la lectura del impedimento, el resto de los Magistrados observan que el mismo se encuadra dentro de lo dispuesto en los numerales 6 y 13 del artículo 749 del Código Judicial, por lo que lo procedente es pues, declarar legal el impedimento invocado.

Por consiguiente, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera (Contenciosa Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el Magistrado ELIGIO A. SALAS, lo separa del conocimiento del negocio interpuesto y procede a llamar al Magistrado ROGELIO A. FÁBREGA Z., de la Sala Primera, para que asuma el conocimiento del mismo.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DENTRO DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL, INTERPUESTA POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LA FISCALIZACIÓN ADUANERA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE LA SALA SE PRONUNCIE SOBRE EL ALCANCE Y SENTIDO DE LA SENTENCIA N° HCO32-96 DICTADA POR EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (HABEAS CORPUS DEL SEÑOR MANUEL A. SIMANCA) 22 DE ENERO DE 1996. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante escrito fechado 27 de agosto de 1996, el Magistrado ROGELIO A. FÁBREGA Z., manifiesta impedimento para conocer el presente negocio, contentivo de la Demanda Contencioso Administrativa de Interpretación Prejudicial interpuesta por el licenciado JORGE PLATA, Jefe de Fiscalización Aduanera, de la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda y Tesoro, para que la Sala se pronuncie sobre el alcance y sentido de la sentencia N° HCO32-96, dictada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el 22 de enero de 1996, que decidió acción de habeas corpus a favor del señor Manuel Simanca.

El Magistrado Rogelio Fábrega, señala que la resolución objeto del presente proceso fue dictada por los "nueve Magistrados que integramos el Pleno de la Corte Suprema de Justicia" por lo que considera que se encuentra impedido para conocer el presente negocio, al tenor de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 78 de la Ley 33 de 1946.

En efecto, la disposición citada señala que es causal de impedimento el haber dictado el acto o providencia sometido a examen o haber contribuido a dictarlo, situación que se verifica en el presente caso.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el Magistrado ROGELIO A. FÁBREGA, para conocer de la demanda contencioso administrativa de interpretación judicial interpuesta por el Licenciado Jorge Plata, Jefe del Departamento de Fiscalización Aduanera de la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda y Tesoro, para que la Sala se pronuncie sobre el alcance y sentido de la sentencia N° HCO32-96, por medio de la cual se resolvió la acción de habeas corpus presentada a favor del señor Manuel A. Simanca.

En cumplimiento de lo previsto por el artículo 78 del código Judicial, se designa al Magistrado FABIÁN A. ECHEVERS en reemplazo del Magistrado impedido.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JURISDICCIÓN COACTIVA

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DIEGO VELÁZQUEZ CARVAJAL, EN REPRESENTACIÓN DE ALBERTO DE MAYO ANDJELO, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SEIS (6) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Diego Velázquez Carvajal, actuando en representación de ALBERTO DE MAYO ANDJELO, ha promovido excepción de prescripción en el Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo que le sigue el Municipio de Panamá.

El recurrente fundamenta su pretensión afirmando que mediante auto de 20 de junio de 1995, el Juez Ejecutor del Municipio de Panamá libró mandamiento de pago ejecutivo en contra de su representado por la suma de B/.5,619.30, en concepto de impuestos municipales dejados de pagar, más recargos legales hasta el mes de mayo de 1995. Señala que de acuerdo al artículo 96 de la Ley 106 de 1973, las obligaciones resultantes de los impuestos municipales prescriben a los cinco (5) años de haberse causado, por lo que la acción para el cobro del impuesto originado el 30 de noviembre de 1987, notificado el 22 de febrero de 1990, prescribió el 1° de diciembre de 1992.

Según el excepcionante, la obligación exigida es condicional, porque debe gravarse la actividad del establecimiento comercial, y señaló que en este caso fue un inspector del Municipio quien informó que posiblemente en el año de 1987 comenzó a operar el establecimiento comercial cuya denominación iba a ser Don Chicho Internacional, el cual nunca operó, y señala que la prueba de ello es que no tuvo licencia comercial, sino que en ese local operó el establecimiento comercial denominado La Berraquera de Salsipuedes, que después cerró sus operaciones.

Admitida la presente excepción de prescripción se corrió en traslado al Juez Ejecutor del Municipio de Panamá y a la señora Procuradora de la Administración por el término de ley.

La licenciada Doris Peacock, representante del Municipio de Panamá, negó la mayoría de los hechos de la demanda y señaló que es cierto que el señor De Mayo debe impuestos municipales desde el 30 de noviembre de 1987, pero que es falso que no se le notificaron sino hasta el 22 de febrero de 1990, porque esa notificación se refiere a los impuestos correspondientes a un nuevo negocio que el señor De Mayo abrió en ese año, tal como lo señala la Nota N° 0417 de 20 de

febrero de 1970 (sic), en la que se le comunicó que debía pagar a partir del mes de mayo de ese mismo año. Señaló además que los otros impuestos facturados desde el año de 1987 corresponden a un negocio que el señor De Mayo tuvo y del cual no notificó el cierre al Municipio de Panamá.

Mediante Vista Fiscal N° 460 de 31 de octubre de 1995, la señora Procuradora de la Administración solicitó a esta Sala que declare parcialmente probada la prescripción de la obligación tributaria comprendida entre el mes de noviembre de 1987, hasta el 20 de junio de 1990, porque dicho período superó los cinco años que dispone el artículo 96 de la ley 106 de 1973, pero señala que subsiste la acreencia a favor del Municipio por los impuestos causados desde enero de 1991 hasta mayo de 1995, identificados como otras actividades lucrativas orden 003, renta N° 11250500 y la orden 0001, renta N° 11250500 y los rótulos orden 004, renta N° 11253002, renta N° 11253002 y la orden 0002, renta N° 112553002.

La señora Procuradora manifestó además, que mediante Nota N° 0417 de 20 de febrero de 1990, se le comunicó a Alberto De Mayo Andjelo, que debía pagar, por la apertura de su nuevo negocio, impuestos a partir de mayo de 1990, notificándole esta nota el 22 de febrero de 1990, contrariamente a lo que expresa el excepcionante con relación a que dicha notificación correspondía a los impuestos registrados desde el 30 de noviembre de 1987, y señaló finalmente que el saldo adeudado por el contribuyente Alberto De Mayo Andjelo debe ser determinado por las autoridades municipales correspondientes, de conformidad con los libros y archivos, descartando los impuestos prescritos del período comprendido entre noviembre de 1987 al 20 de junio de 1990.

El Juez Ejecutor del Municipio de Panamá, mediante Resolución de 20 de junio de 1995, libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva contra Alberto De Mayo Andjelo (contribuyente N° 185-7150), por la suma de B/.5,619.30 en concepto de impuestos morosos y recargos.

El estado de cuenta emitido por el Municipio de Panamá, fechado el 20 de junio de 1995, establece que Alberto De Mayo Andjelo, mantiene con el Municipio de Panamá una obligación tributaria, en concepto de impuestos y recargos, desde noviembre de 1987 hasta mayo de 1995 identificada con las ordenes 1 (renta 11250500), 2 (renta 11253002), 3 (renta 11250500) y 4 (renta 11253002).

Mediante Nota N° 0417 de 20 de febrero de 1990, la Tesorería Municipal notificó al contribuyente Alberto de Mayo Andjelo (185-7150) que fue debidamente clasificado y que a partir del 1° de marzo de 1990, debe pagar al Tesoro Municipal un impuesto de B/.40.00 mensuales por venta al por menor del negocio nuevo (Don Chicho Internacional, Calle 13 E, San Felipe) y B/.15.00 anuales en concepto de rótulo. Dicha nota fue notificada al contribuyente el 22 febrero de 1990.

Consta en las tarjetas de historial del contribuyente que el establecimiento "El Retacero" ubicado en el Mercado de las Pulgas V. F. de C. fue gravado en el Memo 111/85 Col. 110 Nota N° 7645 (Fs. 33).

En relación al "cobro ilegal e improcedente" de los impuestos municipales originados por el establecimiento Don Chicho Internacional y el Retacero en el Mercado de las Pulgas, el excepcionante manifiesta que no le corresponde pagar impuestos municipales por un establecimiento comercial que nunca operó y que tampoco adeuda los impuestos del establecimiento comercial ubicado en El Mercado de las Pulgas, porque dicho mercado era quien hacía los pagos al Municipio (fs. 2 a 5).

Acerca de la existencia o inexistencia de los referidos impuestos municipales, se desprende de las constancias procesales que las actividades comerciales del señor ALBERTO DE MAYO fueron gravadas mediante los memos N° 37/90 y 111/85 Col. 110, y la obligación de pagar estos impuestos le fue notificada al contribuyente DE MAYO, distinguido con el N° 185-7150, mediante las notas N° 0417 (Don Chicho Internacional) y N° 7645 (El Retacero), por lo que si él consideraba que no procedía el cobro de dichos gravámenes, debió oponerse al pago impugnando los actos administrativos mencionados por la vía gubernativa.

Como el excepcionante no impugnó oportunamente los gravámenes y no probó la existencia de los hechos alegados en la excepción de inexistencia de la obligación tributaria, la Sala considera que debe desestimarla y proceder a determinar si está probada la excepción de prescripción de la acción.

El artículo 96 de la Ley 106 de 1973 sobre Régimen Municipal preceptúa:

"ARTÍCULO 96. Las obligaciones resultantes de los impuestos municipales prescriben a los cinco (5) años de haberse causado."

En relación con la prescripción de las acciones, el artículo 738 del Código Fiscal establece lo siguiente:

"ARTÍCULO 738. El término de la prescripción se interrumpe:

a) Por auto ejecutivo dictado contra el contribuyente;
b) Por promesa de pago escrita del contribuyente debidamente garantizada; y,
c) Por cualquier actuación escrita del funcionario competente encaminada a cobrar el impuesto."

Esta norma es aplicable supletoriamente en materia de impuestos municipales por preceptuarlo así el artículo 7 del Código Fiscal.

De conformidad con estos preceptos, los impuestos municipales adeudados por el contribuyente Alberto De Mayo Andjelo correspondientes al período comprendido entre 1987 y 1990, con motivo de la actividad comercial desempeñada en el establecimiento "El Retacero" órdenes 1 (renta 1125050001) y 2 (renta 11253002-01), ubicado en el Mercado de las Pulgas V. F. de C. han prescrito por el mero transcurso del tiempo y así procede declararlo.

El Municipio Capitalino libró auto de mandamiento de pago contra Alberto de Mayo Andjelo el 20 de junio de 1995, y en virtud de que no fue probada la excepción de inexistencia de la obligación, el Juzgado Ejecutor del Municipio de Panamá tiene derecho a cobrar por la vía ejecutiva, los impuestos causados cinco años antes de dicha fecha, o sea que la excepcionante debe pagar aquellos impuestos municipales que adeuda a partir del 20 de mayo de 1990, originados por las actividades comerciales identificadas con las ordenes 1 (renta 11250500), 2 (renta 11253002), 3 (renta 112505500) y 4 (renta 11253002).

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO PROBADA LA EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN de los impuestos municipales correspondientes al período comprendido entre el 30 de noviembre de 1987 a mayo de 1995, interpuesta por el licenciado Diego Velázquez Carvajal, en representación de Alberto De Mayo Andjelo y DECLARA PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN de los impuestos municipales del período comprendido entre el 30 de noviembre de 1987 al 20 de junio de 1990, identificados mediante las órdenes 1 (renta 11250500), 2 (renta 11253002), 3 (renta 11250500) y 4 (renta 11253002), dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Municipio de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE PAGO POR CONSIGNACIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RICARDO VILLARREAL ALVARADO, EN REPRESENTACIÓN DE EUGENE CHARLES McGRATH RENAULD, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SIETE (7) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Ricardo Villarreal Alvarado, en su condición de apoderado judicial de EUGENE CHARLES McGRATH RENAULD, ha interpuesto excepción de pago por consignación, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ.

El apoderado judicial señaló que su representado consignó judicialmente la suma reclamada en el proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco Nacional de Panamá, el cual se rehusó a aceptar el pago, y fundamentó la presente excepción en los siguientes hechos:

> "PRIMERO: Por medio de la escritura pública N° 1151 de 17 de marzo de 1989, otorgada ante el Notario Segundo del Circuito de Panamá, el Banco Nacional de Panamá y el señor EUGENE CHARLES McGRATH RENAULD, con cédula de identidad personal N° 8-476-764, celebraron contrato de arrendamiento con opción de compra, préstamo comercial.
>
> SEGUNDO: Conforme la mencionada escritura N° 1151, el Banco Nacional de Panamá, se obliga a celebrar con EUGENE McGRATH RENAULD, un contrato de arrendamiento, una vez inscrito los anteriores inmuebles descritos a su nombre.
>
> TERCERO: La escritura pública N° 1151 fue inscrita en el Registro Público el día 17 de mayo de 1989, conforme los sellos que se aprecian en ese momento.
>
> CUARTO: Conforme al anexo del contrato de arrendamiento que aparece en la escritura pública N° 1151 cláusula 9ª, el canon de arrendamiento se acordó para el primer año, en la suma de OCHO MIL BALBOAS (B/.8,000.00) anual.
>
> QUINTO: El día 20 de marzo de 1990 mediante cheque número 1130 se consignó a favor del Banco Nacional la suma de OCHO MIL BALBOAS (8,000.00) para el pago del arriendo pactado.
>
> SEXTO: Después de retener el cheque por casi tres meses, el Banco Nacional de Panamá, el día 19 de junio de 1990 lo devuelve, mediante nota.
>
> SÉPTIMO: El señor EUGENE McGRATH RENAULD confirma su voluntad de pagar, y en efecto consigna, las sumas correspondiente a los canones de arrendamientos, dentro de los términos del contrato de arrendamiento." (Fs. 3 a 4).

Admitida la presente excepción de pago, se corrió en traslado al Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá y a la Procuradora de la Administración.

Al contestar el traslado, la licenciada Elsy Vernaza de Cornejo, actuando en nombre y representación del Banco Nacional de Panamá, se opuso a la pretensión alegando que la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 14 de julio de 1995, dictada dentro del proceso sumario de lanzamiento propuesto por el Banco Nacional de Panamá contra Eugene McGrath Renauld, determinó que la entrega de un cheque por B/.8,000.00 el día 20 de marzo de 1990, no constituía un pago hecho oportunamente, y señaló además que el excepcionante desistió de la pretensión en el proceso de pago por consignación que se interpuso contra el Banco Nacional de Panamá, cuando se encontraba en casación en la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, por lo que si ha renunciado a sus supuestos derechos, su pretensión debe considerarse extinguida.

Mediante Vista Fiscal N° 25 de marzo de 1996, la señora Procuradora solicitó a esta Sala que rechace la presente excepción porque fue presentada antes de tiempo, ya que mediante Auto N° 134 de 24 de enero de 1996, el Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá declaró nula la notificación del auto

ejecutivo dictado contra Eugene McGrath Renauld, en virtud de que dicha notificación se hizo en contravención a lo establecido en el artículo 1667 del Código Judicial. Considera que según el artículo 1706 del Código Judicial, el ejecutado debía proponer la excepción dentro de los ocho días siguientes a la notificación válida del auto ejecutivo y no antes de que se haga la misma.

Consta en autos copia autenticada del expediente del proceso sumario de pago por consignación, interpuesto ante el Juzgado Quinto del Circuito de Chiriquí, Ramo Civil, por Eugene McGrath Renauld, contra el Banco Nacional de Panamá, en cuya foja 20 reposa la diligencia de pago por consignación del certificado de Garantía N° 167008, por la suma de B/.8,000.00.

Dentro del proceso sumario de pago por consignación, el Juzgado Quinto del Circuito de Chiriquí, Ramo Civil, dictó la Sentencia N° 79 de 14 de junio de 1994, en la que declaró "improcedente las consignaciones hechas por el actor y en consecuencia no las admite y no accede a poner las sumas de dinero consignadas a órdenes del acreedor" (fs. 126 del expediente del proceso sumario de pago por consignación), dicha resolución fue apelada por Eugene McGrath Renauld ante el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, el cual dictó la sentencia de 15 de diciembre de 1994, en la que revocó la sentencia de primera instancia, admitió las consignaciones hechas por Eugene McGrath Renauld y accedió a poner las sumas de dinero consignadas a órdenes del Banco Nacional de Panamá (fs. 150 del expediente del proceso sumario de pago por consignación).

El 23 de enero de 1995, el Banco Nacional de Panamá, formalizó recurso de casación civil contra la sentencia de 15 de diciembre de 1994, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, y el 31 de agosto de 1995, el apoderado del ejecutado Eugene McGrath Renauld presentó ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, escrito de desistimiento de la pretensión dentro del proceso de pago por consignación que interpuso en contra del Banco Nacional de Panamá, el cual no fue admitido mediante sentencia de 17 de noviembre de 1995.

En el expediente del proceso ejecutivo por cobro coactivo propuesto por el Banco Nacional de Panamá contra Eugene Charles McGrath reposa copia autenticada del Auto N° 773 de 2 de agosto de 1995 mediante el cual el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá señaló lo siguiente:

> "Los canones de arrendamiento se pagarían anualmente y los montos para los cinco (5) años de duración del contrato se establecieron así: B/.8,000.00, B/.8,000.00, B/.15,000.00, B/.20,000.00 y B/.35,000.00, respectivamente. También, el Arrendatario se obligó a pagar al BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, un porcentaje anual de las utilidades netas que produjeran las fincas arrendadas, las cuales están cultivadas con sembrados de café y se encuentran ubicadas en Boquete, Provincia de Chiriquí. Estas utilidades deberán ser del 20% el primer año y 30% los años subsiguientes.
>
> Las partes acordaron que la falta de pago de una anualidad en concepto de canon o la falta de pago de los porcentajes en concepto de utilidades, daría derecho al ARRENDADOR para dar por terminado el referido contrato de arrendamiento.
>
> De acuerdo con Certificación Bancaria de fecha 20 de julio de 1995, expedida por el Jefe del Departamento de Administración y Venta de Bienes Adjudicados, refrendada por un Contador Público Autorizado del Banco Nacional de Panamá, el Arrendatario no cumplió con las obligaciones adquiridas en el contrato de arrendamiento. ...
>
> En virtud de lo anteriormente expuesto, se hace necesario proceder a recuperar lo adeudado por el señor EUGENE McGRATH al BANCO NACIONAL DE PANAMÁ que, en concepto de canones de arrendamiento, que (sic) asciende a OCHENTA Y SEIS MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.86,000.00) por los cinco años de ocupación de las fincas.
>
> Por tanto, quien suscribe, JUEZ EJECUTOR DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ, Administrando Justicia en nombre de la

República y por autoridad de la Ley, LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO EJECUTIVO a favor del BANCO NACIONAL DE PANAMÁ y en contra de EUGENE CHARLES McGRATH RENAULT, hasta la concurrencia de la suma de OCHENTA Y SEIS MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.86,000.00), en concepto de capital, más gastos de cobranza que se fijan en QUINIENTOS BALBOAS CON 00/100 B/.500.000.

Con motivo de un incidente de nulidad de notificación presentado por los apoderados judiciales de Eugene Charles McGrath, el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá,mediante Auto N° 134 de 24 de enero de 1996, declaró nula la notificación del Auto N° 773 de 2 de agosto de 1995, ya que la misma fue hecha mediante sello, en contravención a lo establecido en el artículo 1667 del Código Judicial. El Auto N° 134 también ordenó la notificación del auto ejecutivo a la parte demandada o a su apoderado conforme a la ley.

El artículo 1710 del Código Judicial, referente a la excepción de pago, establece los medios para probar dicho pago y la Sala observa que en la presente excepción de prescripción no consta que el ejecutado haya hecho el pago del canon de arrendamiento correspondiente al período comprendido entre el 17 de marzo de 1989 al 1 de marzo de 1990, por la suma de B/.8,000.00, incluida en el auto por medio del cual el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá libró mandamiento de pago en su contra.

El pago de la suma de B/.8,000.00 correspondiente al canon de arrendamiento del primer año del contrato celebrado entre Eugene Charles McGrath y el Banco Nacional de Panamá, está sujeto a la decisión que emita la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el recurso de Casación interpuesto por el Banco Nacional de Panamá, dentro del Proceso Sumario de Pago por Consignación interpuesto por Eugene Charles McGrath ante el Juzgado Quinto de Circuito de Chiriquí, Ramo Civil.

Si la decisión de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, dentro del referido recurso, es favorable a las pretensiones del deudor Eugene Charles McGrath, el certificado de garantía consignado por éste ante el Juzgado Quinto de Circuito de Chiriquí, Ramo Civil, deberá ser aceptado por el Banco Nacional de Panamá como pago del primer año de arrendamiento y abonado a la deuda contraída por Eugene Charles McGrath con dicha institución bancaria. De no hacerlo, el ejecutado podrá promover una excepción de pago parcial de conformidad con el artículo 1710 del Código Judicial.

Por otro lado, si la decisión de la Sala Civil de la Corte es favorable al Banco Nacional de Panamá, el certificado de garantía por la suma de B/.8,000.00 también deberá ser abonado a la obligación que mantiene Eugene Charles McGrath, ya que según consta en el expediente del proceso ejecutivo por cobro coactivo el Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, mediante la nota N° 95(14010-01)1740 de 4 de septiembre de 1995, comunicó a la Secretaría de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que por medio del Auto N° 724 de 28 de julio de 1995, decretó secuestro sobre los certificados de garantía consignados por Eugene Charles McGrath dentro de los procesos de lanzamiento y pago por consignación, tramitados ante los Juzgados Segundo y Quinto del Circuito de Chiriquí, Ramo Civil.

Por lo antes expuesto, esta Sala debe declarar no probada la excepción de pago interpuesta por Eugene McGrath Renauld dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco Nacional de Panamá.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO PROBADA la excepción de pago interpuesta por el licenciado Ricardo Villarreal Alvarado, en representación de EUGENE CHARLES McGRATH RENAULD, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE RESCISIÓN DE SECUESTRO, INTERPUESTO POR LA FIRMA ROSAS Y ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE FINANCIERA DELTA, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE AHORROS, CONTRA SANTIAGO JUSTO ARAÚZ Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Rosas y Rosas, ha presentado, en representación de Financiera Delta, S. A., recurso de reconsideración en contra de la resolución de 18 de junio de 1996,emitida por este Tribunal Colegiado, mediante la cual se resuelve el incidente de rescisión de secuestro dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que la Caja de Ahorros le sigue a SANTIAGO JUSTO ARAÚZ.

El actor propuso el medio de impugnación en referencia, ya que se manifiesta en completo desacuerdo con los conceptos emitidos por esta máxima Corporación de Justicia en la precitada resolución de 18 de junio de 1996.

En este orden de ideas es indispensable resaltar que mediante fallo de 26 de mayo de 1993, dentro del caso JILMA ALIXIA RODRÍGUEZ DE VILLAMIL VS EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, decretó que no era judicialmente viable por parte de los intervinientes interesados, interponer recursos de reconsideración en contra de las resoluciones dictadas por el Pleno de esta Sala en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, por considerar que este medio de impugnación procesal en estos casos en concreto, antagoniza directamente con el contenido de los artículos 203 numeral segundo de la Constitución Política vigente y, con el artículo 100 del Código Judicial; consagrando de esta manera un precedente jurídico de gran importancia procesal basado en la exacta aplicación de los textos de las disposiciones antes mencionadas. La discrepancia a la que hacemos alusión entre las normas antes mencionadas y el recurso de reconsideración propuesto contra resoluciones emitidas por esta Sala, se observa en el sentido de que el artículo 203 de la Constitución vigente numeral segundo estatuye que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y específicamente los dictámenes de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, son finales, definitivas y obligatorias; por lo que mal podríamos reconsiderar una decisión que no admite recurso adicional, por ser las mismas terminantes y conclusivas.

Por otro lado, el Código Judicial en el artículo 100 en concordancia con el artículo 98 numeral 4° de la misma excerta legal, taxativamente dispone que las resoluciones que decidan las apelaciones, tercerías o cualquier incidente que se ventilen en esta Sala dentro de los procesos por cobro coactivo son finales, definitivas y obligatorias y no procede, en consecuencia, recurso alguno en contra de dichos pronunciamientos ya que estos son vinculantes, de cumplimiento forzoso, invariables, inmodificables e inimpugnables.

Así las cosas, es evidente por los motivos antes señalados que el recurso de reconsideración incoado ante este Tribunal Colegiado, no prospera por tratarse de una resolución dictada por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, deviniendo la situación planteada, en firme y por lo tanto en cosa juzgada, una vez se notifique en debida forma a las partes la resolución en cuestión.

En consecuencia, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZAN DE PLANO el recurso de reconsideración interpuesto por la firma Rosas y Rosas, en representación de SANTIAGO JUSTO ARAÚZ.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE PAGO INTERPUESTA POR LA LICENCIADA SARAI ISABEL BLAISDELL EN REPRESENTACIÓN DE ÓSCAR DANILO CRUZ ÁBREGO, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, LE SIGUE A ABELARDO CRUZ ÁBREGO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Sarai Isabel Blaisdell, actuando en nombre y representación de Óscar Danilo Cruz Ábrego, ha interpuesto excepción de pago dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que el Banco Nacional de Panamá, le sigue a Abelardo Cruz Ábrego.

Se trata de un proceso ejecutivo por cobro coactivo en el cual el Banco Nacional de Panamá persigue cobrar a los señores Abelardo Cruz Ábrego, Yadira Caballero de Cruz y Óscar Danilo Cruz Ábrego una deuda de veinticuatro mil novecientos noventa y seis balboas con ochenta y cuatro centésimos (B/.24,996.84), en concepto de capital, intereses vencidos y gastos de cobranza, sin que se haya verificado su cumplimiento en el plazo establecido en el documento de crédito correspondiente, razón por la cual se libró mandamiento de pago mediante auto de 4 de octubre de 1991. Igualmente, observa la Sala que mediante Auto N° 1087 de 26 de octubre de 1993, la Juez Ejecutora del Banco Nacional de Panamá, Casa Matriz, decretó formal secuestro sobre el quince por ciento (15%) del excedente del salario mínimo que devenga el señor Óscar Danilo Cruz Ábrego. Finalmente, el mismo tribunal, mediante Auto N° 489 de 12 de mayo de 1995, elevó a la categoría de embargo el secuestro decretado sobre el quince por ciento (15%) del excedente del salario mínimo que devenga el señor Óscar Danilo Cruz Ábrego, hasta la concurrencia de la suma de veintisiete mil ciento ochenta y seis balboas con cuarenta y cuatro centésimos (B/.27,186,44) en concepto de capital, intereses vencidos, gastos de cobranza, más los intereses que se generen hasta la cancelación de la obligación.

A los señores Abelardo Cruz Ábrego, Yadira Caballero de Cruz y Óscar Danilo Cruz Ábrego se les notificó del auto ejecutivo que libró el mandamiento de pago, según constan en las diligencias de notificación, el 8 de abril, 26 de abril y 7 de abril de 1995 respectivamente (fs. 4-6).

El apoderado judicial del excepcionante fundamentó su recurso en los siguientes términos:

> "... **SOLICITO MUY RESPETUOSAMENTE LA EXCEPCIÓN DE PAGO A FAVOR DE MI REPRESENTADO Y EN CONTRA DE ABELARDO CRUZ ÁBREGO, quien labora en el cargo de DIRECTOR DE LA COOPERATIVA DE CACSA, con un salario de arriba de dos mil balboas, la expresada Cooperativa esta ubicada en la vía España al lado del Hotel europa (sic).**
>
> De tal manera, que debe inmediatamente SUSPENDERSE LOS DESCUENTOS A MI REPRESENTADO ÓSCAR DANILO DE LA (sic) CRUZ, toda vez que el departamento de Gerencia de Crédito Personal de este Banco le ha venido descontando suma (sic) de dineros desde el día 19 de octubre de 1995, hasta la fecha.
>
> Razón por la cual solicitamos de que este Banco, **ORDENE DE MANERA INMEDIATA EL DESCUENTO DE LA DEUDA DEL SEÑOR ABELARDO CRUZ ÁBREGO, A LA COOPERATIVA DE CACSA Y SE SE (sic) SUSPENDA EL DESCUENTO A MI REPRESENTADO. Por darse el Fenómeno (sic) jurídico de la Exepción**

(sic) de pago."

En oposición a la excepción interpuesta por la licenciada Blaisdell, el Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá señaló lo siguiente:

> "1) Mediante Auto de N° 1087 de 26 de octubre de 1993, el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, Casa Matríz (sic), Decretó (sic) Secuestro (sic) sobre el quince por ciento (15%) del excedente del salario mínimo que devenga el señor Danilo Cruz Ábrego, con cédula N° 4-102-277, como funcionario del Ministerio 12, Planilla 12, Empleado N° 14152.
>
> 2) Mediante Auto N° 2399 de 4 de octubre de 1991, este Tribunal LIBRO MANDAMIENTO DE PAGO EJECUTIVO en contra de ABELARDO CRUZ ÁBREGO, con cédula 4-80-736; YADIRA CABALLERO de CRUZ, con cédula 4-100-1775 y ÓSCAR DANILO CRUZ ÁBREGO con cédula N° 4-102-277.
>
> 3) Mediante Diligencia de Notificación fechada 7 de abril de 1995, el señor Óscar Danilo Cruz, con cédula N° 4-102-277, se notificó del Auto que Libra Mandamiento de Pago Ejecutivo fechado 4 de octubre de 1991.
>
> 4) Mediante Diligencia de Notificación fechada 8 de abril de 1995, el Señor Abelardo Cruz Ábrego, con cédula N° 4-80-736, se Notificó (sic) del Auto que Libra Mandamiento de Pago Ejecutivo fechado 4 de octubre de 1991.
>
> 5) Mediante Diligencia de Notificación fechada 26 de abril de 1995, la Señora Yadira Caballero de Cruz, con cédula N° 4-100-1775, se notificó del Auto que Libra Mandamiento de Pago Ejecutivo fechado 4 de octubre de 1991.
>
> 6) En vista de que los demandados no interpusieron recurso alguno dentro del término legal acordado en el artículo 1706 del Código Judicial que a la letra dice:
>
> Artículo 1706: "Dentro de los ocho días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo. puede el ejecutado proponer las excepciones que crea le favorezcan ...
>
> 7) este (sic) Tribunal mediante Auto N° 489 de 12 de mayo de 1995, Elevó (sic) a la Categoría de Embargo el Secuestro decretado sobre el quince por ciento (15%) del excedente del salario mínimo que devenga el señor Óscar Danilo Cruz Ábrego, con cédula N° 4-102-277, como Empleado (sic) del Ministerio 12, Empleado 14152."

En el caso que nos ocupa, se observa que la excepción de pago incoada es improcedente, ya que el excepcionista se limitó a solicitar que se le suspendiera el descuento de la deuda y se le descontara la misma al deudor principal. Para que la excepción de pago proceda, el excepcionista debe demostrar que la deuda ha sido pagada por él o por cualquiera de los otros deudores solidarios y, por lo tanto, se considere que se ha extinguido la obligación, tal como lo preceptúa el artículo 1032 del Código Civil.

También se observa en las diligencias de notificación de Yadira Caballero de Cruz y Abelardo Cruz Ábrego, deudores solidarios, que ambos concertaron con el Banco Nacional de Panamá arreglo de pago por un monto mensual de B/.250.00 cada uno, lo que demuestra que la deuda no ha sido pagada.

La Sala observa que como no se ha probado el pago de la deuda, la excepción de pago incoada es a todas luces improcedente y, en consecuencia, lo procedente es declarar no probada la presente excepción de pago.

Por las razones expuestas, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA NO PROBADA la excepción de pago presentada por la licenciada Blaisdell,

actuando en nombre y representación de Óscar Danilo Cruz Ábrego, dentro del proceso ejecutivo por jurisdicción coactiva que el Banco Nacional de Panamá le sigue a Abelardo Cruz Ábrego.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR LA FIRMA MORGAN Y MORGAN, EN REPRESENTACIÓN DE PANAMETAL INTERNACIONAL, S. A., Y DESARROLLO PANCHILE, S. A., CONTRA LA SENTENCIA DE 1° DE JULIO DE 1995, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: GUSTAVO CHELLEW SCHOEDER -VS- PANAMETAL INTERNACIONAL, S. A., Y DESARROLLO PANCHILE, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SEIS (6) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

La firma de abogados Morgan y Morgan, actuando en representación de la sociedad Panametal Internacional, S. A. y Desarrollo Panchile, S. A., ha interpuesto recurso de casación laboral contra el auto expedido por el Tribunal Superior de Trabajo el 1° de julio de 1996, mediante el cual se revoca el auto N° 57 de 15 de marzo de 1996 expedido por el Juzgado Cuarto de la Primera Sección, al resolver el incidente de nulidad promovido por los abogados Morgan y Morgan en el proceso laboral interpuesto contra su representado por Gustavo A. Chellew Schoeder.

El recurso se interpone contra un auto del Tribunal Superior de Trabajo que revoca el auto proferido por el tribunal de primera instancia en el cual anula todo lo actuado por el y dejó sin efecto las medidas cautelares decretadas en contra de los bienes de la empresa demandada.

Motivó anular todo lo actuado por parte del tribunal de primera instancia el hecho de que el recurrente en la demanda presentó un incidente de nulidad de lo actuado por ilegitimidad de personería. La inconformidad del Tribunal Superior de Trabajo se basó en que el incidente interpuesto era improcedente puesto "El Juez A-quo debió saber que la única forma en que se puede anular una sentencia ejecutoriada mediante el Proceso de nulidad, contemplado en el artículo 984 del Código de Trabajo".

La parte recurrente alega que el auto por ella impugnado ha violado los artículos 530, 992 numeral 2, 675 numeral 3 y 677 del Código de Trabajo.

Es evidente que la parte recurrente persigue con su recurso la corrección de trámites procesales, ya que la nota común de las mencionadas infracciones que le imputa al auto impugnado está constituida por la alegación de que no se le dio traslado de la demanda a quien ostenta la representación legal de la compañía pues, este es el "resultado de una clara conducta de colusión dolosa entre el demandante, y la persona que se hizo pasar por Representante Legal de las demandadas" y, como consecuencia de ello, persigue que la Sala anule la actuación a fin de que se reponga el trámite procesal correspondiente.

Veamos lo que señala el artículo 928 del Código de Trabajo:

> "Artículo 928. Recibido el expediente, el Tribunal de casación Laboral rechazará de plano el recurso si se ha interpuesto contra lo que dispone el artículo 925. Lo mismo hará cuando en el recurso se

pida únicamente la corrección, reposición o práctica de trámites procesales.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo arriba citado, la Sala considera que el recurso de casación, en este caso debe ser rechazado, pues dicho recurso pide fundamentalmente la corrección, reposición y práctica de trámites procesales.

En consecuencia, la Sala Tercera (Laboral) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA DE PLANO el recurso de casación interpuesto por la firma de abogados Morgan y Morgan contra el auto dictado por el Tribunal Superior de Trabajo el 1° de julio de 1996, dentro del proceso laboral promovido por GUSTAVO A. CHELLEW SCHOEDER contra PANAMETAL INTERNACIONAL, S. A. y DESARROLLO PAN CHILE, S. A.

Copíese y Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR IVÁN ROBERTO CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE JACQUES CHEVIGNE, CONTRA LA SENTENCIA DE 28 DE JUNIO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: JACQUES CHEVIGNE -VS- INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. LABORAL.

VISTOS:

El licenciado **Iván Roberto Castillo** en nombre y representación de **JACQUES CHEVIGNE**, ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de 28 de junio de 1996, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial dentro del proceso laboral **JACQUES CHEVIGNE -vs- INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN**, dado que según él se ha conculcado el artículo 5 del Código de Trabajo.

En este estado del proceso, la Sala procede a examinar el recurso para determinar si el mismo cumple con los requisitos mínimos que exige la ley para que pueda ser admitido por esta Superioridad.

La Sala debe señalar que no procede la admisión del recurso, dado que el recurrente no explica claramente en que consiste la violación del artículo 5 del ibídem, única norma que se estima vulnerada, incumpliéndose así lo estatuido en el artículo 926, numeral 3 Código Laboral. Esta Sala en reiteradas ocasiones ha manifestado que es imprescindible que el interesado explique de manera clara y ordenada en que consiste la infracción del precepto legal, de lo contrario se imposibilita a este Tribunal el conocimiento de la misma (ver Sentencia de 15 de noviembre de 1994).

En otro orden de ideas, de igual manera debemos destacar que el artículo 5 del Código Laboral, no es una norma sustantiva susceptible de ser conculcada, dado que la misma prevé las fuentes de integración y su jerarquía para la solución de los casos no previstos en el cuerpo legal citado.

Para que proceda el planteamiento del recurso debe tratarse de violaciones a normas sustantivas de derecho del trabajo, ya que de otro modo no puede atenderse su objetivo, porque cuando la acusación no formula normas de carácter sustantivo de materia laboral, el cargo o cargos quedan incompletos y no alcanzan a producir los resultados que se persiguen, ni la finalidad del recurso de

casación.

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados de la Sala Tercera (Casación Laboral) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO ADMITE el recurso de casación propuesto el licenciado Iván Roberto Castillo en nombre y representación de JACQUES CHEVIGNE.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL INTERPUESTO POR EL LICENCIADO NICODEMUS RODRÍGUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE ABEL CUSATTI, CONTRA LA SENTENCIA DE 8 DE FEBRERO DE 1996, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: ATLANTIC PACIFIC, S. A. VS. ABEL CUSATTI. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. LABORAL.

VISTOS:

El licenciado Nicodemus Rodríguez, actuando en nombre y representación de **ABEL CUSATTI**, ha interpuesto recurso de casación laboral contra la sentencia de 8 de febrero de 1996, proferida por el **TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO** dentro de la controversia laboral habida entre la empresa **ATLANTIC PACIFIC, S. A.** y el trabajador **ABEL CUSATTI.**

Mediante la resolución impugnada se decide revocar la sentencia de 27 de octubre de 1995 que emitiera el Juzgado Segundo de la Sección de Colón y San Blas, y se autoriza a la mencionada empresa para "despedir al trabajador ABEL CUSATTI, portador de la cédula de identidad personal N° 3-57-281".

El casacionista estima que la sentencia del Ad Quem es violatoria del artículo 213, numeral 5, del Código de Trabajo, en el concepto de violación directa, y en el momento procesal oportuno la apoderada judicial de la empresa, licenciada Ana Isabel Carrillo, presentó escrito mediante el cual se opone al recurso, fundamentándose en varias razones que expone detalladamente.

En efecto, el actor expresa que la resolución recurrida viola, en forma directa, el artículo 213, numeral 5, del Código Laboral, cuyo texto copiamos a continuación:

> "Artículo 213. Son causas justificadas que facultan al empleador para dar por terminada la relación de trabajo:
>
> A. De naturaleza disciplinaria:
> ...
> 5) Incurrir el trabajador, durante la ejecución del contrato, en faltas graves de probidad u honradez, o la comisión de delito contra la propiedad, en perjuicio del empleador. ..."

Expresa el representante judicial del recurrente que la infracción de la citada norma se ha producido porque la parte demandada no probó la falta de probidad incurrida por el señor **ABEL CUSATTI**, a lo que agrega que éste goza de fuero sindical, y hay que tener consideración a tal condición; además, la resolución del **TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO** sostiene que la empresa **ATLANTIC PACIFIC, S. A.** probó la causal fundatoria de su solicitud consistente en que se autorice el despido del trabajador **ABEL CUSATTI**, pues el mismo consume drogas,

específicamente cocaína. Señala que como el trabajador advertía que la empresa buscaba la forma para despedirlo, cada vez que le hacían las pruebas para detectar consumo de drogas, entonces él acudía "... a otras clínicas y al seguro social hacerse las mismas y salió negativo (sic)" (fojas 2). A estas alegaciones el apoderado del trabajador suma lo siguiente:

> "... estas pruebas no son contundentes, y al no ser así, porque el Tribunal Superior considera que las pruebas de los laboratorios de la empresa son ciertas y las practicadas por el trabajador Cusatti no son ciertas, a mi modo de ver no se puede autorizar al despido de un trabajador (sic) en estas condiciones inciertas y sobre todo cuando este (sic) goza de Fuero Sindical, cuando todos sabemos que las empresas no quieren trabajadores que luchen por sus derechos y de los demás compañeros de trabajo, y quieren entonces que no estén (sic) en sus empresas y los consideran sus enemigos, si esto es así hay que tener mucho cuidado en autorizar el despido de un trabajador en esas condiciones inciertas sino (sic) existen causas contundentes, en el caso que nos ocupa no hay asidero para autorizar el despido de este trabajador, porque si solo hubiera pruebas del laboratorio (sic) por parte de la empresa entonces se pudiera autorizar el despido, pero si tambien (sic) hay pruebas de laboratorios que favorecen al trabajador Cusatti, se crea una duda o conflicto y esto debe favorecer al trabajador de acuerdo con lo estimado en el artículo 6 del Código de Trabajo" (foja 2).

Por su parte, la apoderada de la empresa contradice lo dicho por el trabajador; pero antes solicita al Tribunal que no admita el recurso de casación bajo estudio porque a su juicio no cumple con los requisitos que establece el Código de Trabajo para este tipo de medio de impugnación extraordinario. En efecto, aduce la opositora que el recurrente no expone con la claridad necesaria el concepto de la supuesta violación, y a su entender lo que hace es utilizar el recurso de casación "como si fuera una tercera instancia de apelación" (foja 7). Y en caso que el Tribunal de Casación admitiera el recurso, pide que se confirme la decisión del **TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO** porque la empresa **ATLANTIC PACIFIC, S. A.** no ha violado el artículo 213, numeral 5, del Código de Trabajo como afirma el actor.

Los motivos centrales de la oposición al recurso son los siguientes:

1) No se expresa lógica y razonadamente el concepto de la supuesta infracción directa del numeral 5, artículo 213, del Código Laboral;

2) Más que aducir una infracción directa, el recurso parece referirse a un "error en la apreciación de la prueba" incurrida por el Juzgador de segunda instancia;

3) El trabajador no pudo probar que no consumía cocaína en las fechas indicadas, y pretende sembrar una especie de duda, al expresar que sí se consideraron como medios probatorios los exámenes de laboratorio practicados por la empresa y no los practicados a sí mismo por el trabajador; y que el Tribunal Ad Quem ha explicado adecuadamente que las pruebas presentadas por el obrero no tienen fuerza probatoria para comprobar sus afirmaciones. Por el contrario, las pruebas aportadas por la empresa, practicadas en el "Laboratorio Clínico Fernández", "... fueron corroboradas por el Director de esa institución, quien es un técnico idóneo, y dio fe del resultado de los mismos, reconoció su firma en ellos, así como la metodología empleada para la práctica y el procedimiento para la toma y el análisis de las muestras. Y que el procedimiento para la toma de las muestras garantiza que la muestra proviene realmente de la persona examinada y que se toman las medidas de seguridad suficientes para que no se produzca ninguna confusión ni duda en su manejo" (foja 9); y

4) El propósito del recurso es entronizar duda sobre si el trabajador es o no consumidor de droga (cocaína) para así aplicar el principio general del Derecho Laboral conocido como "In dubio pro operario", lo que aunado a que el obrero es un dirigente sindical, convierte a éste en "una especie de víctima de

la persecución de la empresa". Todo esto es negado por la letrada que patrocina los intereses de **ATLANTIC PACIFIC, S. A.**, y transcribe parte de la sentencia que es objeto del presente recurso donde claramente se reconoce que el trabajador ha tenido una conducta reincidente en el consumo de drogas, conducta que constituye falta de probidad, según el texto de la Resolución indicada; además que la jurisprudencia reiterada de la Sala Laboral ha negado la vigencia del Indubio pro operario en cuanto a la valoración de la prueba se refiere.

Al decidir sobre la admisibilidad del recurso, la Sala observa que la parte opositora pide que no sea admitido el recurso, o en su defecto sea confirmada la sentencia del Tribunal de segunda instancia, y funda su petición en que el casacionista no explica razonadamente los motivos que cimentan su impugnación. Sobre esto la Sala, tomando como substrato jurídico el artículo 926 del Código Laboral, en múltiples ocasiones ha dicho que en relación a las formalidades mínimas que debe reunir este recurso sólo producirá su inadmisibilidad los defectos u omisiones que hagan totalmente imposible el conocimiento de la cuestión controvertida, situación que este Tribunal estima no se configura en el presente caso, puesto que si bien el recurrente no esboza con propiedad las razones de que se vale para estimar violado el numeral 5, Acápite A, del artículo 213 del Código Laboral, se desprende de lo señalado que el cargo de infracción se centra en que no fue demostrado fehacientemente el consumo de drogas, por parte de su representado, motivo por el cual debe beneficiársele con lo dispuesto en el artículo 6 de la misma excerta, que trata del in dubio pro operario.

La Sala, pues, pasa a analizar el cargo de infracción directa endilgado al numeral 5 del artículo 213 del Código de Trabajo que se refiere a la falta de probidad u honradez, como causal que habilita al empleador para dar por terminada la relación de trabajo, y considera que no le asiste la razón al recurrente porque el Tribunal de segunda instancia procedió correctamente y con apego a la Ley, aplicando las reglas de la sana crítica, cuando revocó la sentencia del Tribunal Seccional de Trabajo de la Segunda Sección que decidió, en primera instancia, no acceder a la autorización de despido promovida por la empresa **ATLANTIC PACIFIC, S. A.** contra **ABEL CUSATTI.** Según el a quo, el despido se había consumado, y en consecuencia dicha petición derivaba "improcedente e inconducente" (foja 81 del Expediente). Esta decisión fue revocada por el **TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO**, con fundamento, entre otras motivaciones, en las siguientes:

> "... si bien es cierto que la empresa despidió al trabajador el 18 de agosto de 1995, fundamentándose en que el trabajador había resultado positivo en una prueba de cocaína, y se vio obligada a reintegrarlo en virtud de un proceso de reintegro propuesto por el trabajador, ya que el mismo alegaba estar amparado por el fuero sindical.
>
> En dicho proceso la empresa no puede discutir las causas que lo motivaron a dar por terminada la relación de trabajo, ya que dicho proceso no se no (sic) permite que la acumulación de solicitud de autorización de despido, excepciones incidentes, peticiones o procesos de otra naturaleza.
>
> La empresa demandada ordenado el reintegro procedió a presentar la demanda de autorización de despido el 5 de septiembre de 1995, por lo que se encontraba dentro del término establecido en el artículo 12, numeral 4 para solicitar autorización de despido.
>
> No existe asidero legal para que el juzgador no entre a resolver las causales alegadas por la empresa para solicitar la autorización de despido del trabajador" (fojas 97 y 98).

Como apoyatura de esta opinión, cita un fallo proferido por esta Superioridad fechado el 6 de febrero de 1976 en el que se dijo que no es motivo para considerar caduca la acción de autorización de despido que planteara la empleadora con posterioridad a la orden de reintegro, "ni está exigida como traba en disposición alguna para que el Tribunal entrara a examinar si, **conforme a las pruebas producidas en el proceso**, está o no demostrada la falta que la demandante

le imputa al trabajador para justificar su despido" (Caso: Compañía de Servicios, S. A. Vs. Gilma Gutiérrez de Romero).

Ciertamente, el Tribunal Ad Quem hizo una relación coherente y razonada de los elementos de convicción porque al valorar las diversas pruebas de laboratorio aportadas por ambas partes cuyo objeto era verificar si el trabajador **ABEL CUSATTI** consumía drogas, especialmente cocaína, y con ello demostrar o no la falta de honradez y probidad que exige la causal de despido aludida. Esta relación y estimación de las pruebas por parte del ad quem se plasma a fojas 99 y siguientes del expediente en la sentencia objeto de impugnación, y en ella se observa una clara estimación tanto de los exámenes de laboratorio que la empresa ATLANTIC PACIFIC, S. A. acostumbra practicar a sus trabajadores, dentro de los cuales está el señor ABEL CUSATTI, quien ha resultado positivo en varias ocasiones, también se indican los métodos utilizados para la confección de esos exámenes para detectar el consumo de drogas; se alude al reconocimiento de firma por uno de los profesionales, el tecnólogo médico Rodolfo Fernández Dianous, del Laboratorio Clínico Fernández, que lleva una relación de dos años aproximadamente prestándole ese servicio a la empresa; así como las declaraciones de los testigos Enrique Eduardo Eskeeret Alexis y Marie Madeleine Ducruet Núñez, de cuyas declaraciones se advierte que las pruebas se hacen sorpresivamente durante la jornada de trabajo.

En la sentencia del Juzgador Ad Quem también se hace una relación respecto de las pruebas llevadas al proceso por el trabajador de las cuales se evidencia la falta de correspondencia de las fechas en los exámenes que indican que ante la prueba para determinar el consumo de droga cocaína, el señor ABEL CUSATTI resultó negativo, y esto porque el señor CUSATTI aportó un documento del Departamento de Laboratorios de la Caja de Seguro Social (foja 28), fechado el 25 de julio de 1995, sobre prueba de cocaína, que dio ese resultado, mientras que igualmente trajo al proceso una certificación con fecha 13 de octubre de 1995 (fojas 29) que hace constar que el documento que porta el señor ABEL CUSATTI "es fiel copia del examen realizado por el Laboratorio Clínico del Castillo en el septimo (sic) mes del año 1994 " y "no ha sido alterado"; sin embargo, a fojas 30 aparece una copia simple de un examen de cocaína que devino negativo, mas éste proviene del Centro Médico Cristóbal, conforme se lee, y no del Laboratorio Clínico del Castillo, esto revela una contradicción evaluada por el Juzgador.

La Sala desea recordar que en el ordenamiento procesal laboral vigente rige el principio de la sana crítica, como método de apreciación probatoria, a la cual de acuerdo al artículo 732 del Código de Trabajo, debe ajustarse el Juzgador y por ende aplicar en la estimación o evaluación de las pruebas las reglas de la lógica y la experiencia, cuestión que en este asunto ha cumplido con acierto el Tribunal de segunda instancia. En materia de valoración probatoria no rige la regla in dubio pro operario contenida en el artículo 6 de la excerta citada ya que existen principios probatorios específicos como el anotado.

Vale decir que el artículo 6 mencionado contiene dos reglas que emanan del Principio Pro operario establecido en el artículo 1° del Código de Trabajo y 74 de la Ley Fundamental. El artículo del Código que señala que en caso de conflicto o duda sobre la aplicación o interpretación de las disposiciones de trabajo legales, convencionales o reglamentarias, prevalecerá la disposición o la interpretación más favorable al trabajador, no es conducente en el caso tratado, ya que el mismo se circunscribe a casos de conflicto entre normas o varias interpretaciones (caso del In dubio) racionales desprendidas de preceptos ya sea con categoría de Ley, convenciones colectivas e incluso reglamentos, supuestos en los cuales debe prevalecer la **norma más favorable** ante el conflicto normativo o bien la **interpretación más beneficiosa** ante la duda del Juez o Intérprete a favor del trabajador, para así cumplir con el principio tuitivo. Sin embargo, como lo tiene dicho la jurisprudencia de este Tribunal, la regla in dubio pro operario emanada del principio protector no tiene vigencia en la valoración de las pruebas porque aquí impera el método de apreciación conforme a la sana crítica.

Con relación a la negativa de que se aplique la regla In dubio a la estimación de los elementos de convicción traídos al proceso y, por otra parte,

acerca de la preminencia del sistema de sana crítica en el proceso laboral, mediante sentencia de 28 de agosto de 1990 esta Sala sostuvo que "En realidad el juez está en la obligación de averiguar la verdad material de los hechos de la controversia y para ello debe evaluar las pruebas según las reglas de la sana crítica, las cuales le deben permitir despejar las dudas que pudieran existir en cuanto a determinados hechos y no puede negarse esta libertad de evaluación de las pruebas mediante la aplicación de una regla de evaluación (in dubio pro operario) de las mismas que implicaría un retorno a la prueba tasada, sistema que representó un avance frente al sistema feudal de los juicios de Dios o de las compurgaciones pero que hoy se encuentra ampliamente superado como producto del racionalismo aplicado al proceso judicial que se concreta en un sistema de evaluación de las pruebas que le otorgue libertad al juez para evaluarlas racionalmente de conformidad con las reglas de la lógica y de la experiencia de la vida rica en situaciones de hecho" (Registro Judicial, agosto, 1990, p. 431).

A juicio de la Sala, no se ha producido transgresión directa alguna del artículo 213, Acápite A, numeral 5, del Código Laboral, por la sentencia de 8 de febrero del **TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO**, puesto que la causal de despido consistente en la falta de probidad u honradez a que atañe el citado precepto, se configuró, y así fue apreciado debidamente por el Tribunal Ad Quem conforme se lee en el fallo impugnado, máxime que tampoco los elementos probatorios aportados generaron duda o incertidumbre en el ánimo del Juzgador, quien ciñéndose a las normas de sana crítica los justipreció y estimó probada la causal, y por ello autoriza el despido del trabajador **ABEL CUSATTI.**

De consiguiente, la Sala Tercera (Laboral) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 8 de febrero de 1996, proferida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO dentro del proceso laboral: ATLANTIC PACIFIC, S. A. Vs. ABEL CUSATTI.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ÁLVARO MUÑOZ EN REPRESENTACIÓN DE DOMINGO QUINTERO, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 4 DE JUNIO DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: DOMINGO QUINTERO -VS- FINCA SANTA LUCIA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

El Licenciado Álvaro Muñoz Fuentes, apoderado judicial del señor Domingo Quintero, ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia de 4 de junio de 1996 dictada por el Tribunal Superior de Trabajo dentro del proceso laboral promovido por su representado contra la sociedad denominada Finca Santa Lucia, S. A.

Se trata de un proceso laboral mediante el cual el demandante reclama el pago de 22 horas extras nocturnas y 8 horas en días domingos trabajados durante 125.5 semanas que suman un total de B/.6,000.00.

El juzgador de primera instancia absolvió a la empresa de las reclamaciones incoadas en su contra y el Tribunal Superior de Trabajo revocó la sentencia y condenó a la demandada únicamente al pago de trescientos trece balboas con veintiséis centésimos (B/.313.26) en concepto de horas extraordinarias correspondientes a los días sábados y la absolvió de todo lo demás.

El recurrente señala que la sentencia de segunda instancia ha infringido los artículos 732, 33, 735, 41 y 48 del Código de Trabajo.

La Sala pasa a examinar las infracciones que se endilgan a la sentencia de segunda instancia.

Con respecto a la infracción al artículo 732 del Código de Trabajo, el recurrente señala que el Tribunal Superior se apartó de la lógica y la experiencia puesto que no les otorgó el valor correspondiente a los testigos presentados por él, quienes demostraron que el horario del señor Domingo Quintero era de 6:00 p. m. a 6:00 a. m. y sólo otorgó valor a los testigos presentados por la parte demandada e inclusive, según el casacionista, uno de ellos miente en su declaración. Además, señaló el recurrente, el Tribunal Superior no apreció el informe patronal que hizo la demandada en ocasión del accidente de trabajo, el cual confirma las declaraciones de los testigos presentados por él, en cuanto al horario del trabajador. Veamos lo que señala:

> "La sentencia recurrida ha infringido de modo directo por comisión el artículo 732 del Código de Trabajo, porque al apreciar el cúmulo de pruebas presentadas lo hizo apartándose de la lógica y la experiencia. En primer lugar no apreció la prueba documental que consta a fojas 61 que es un informe pericial de accidente de trabajo en el que el administrador al haber hecho el informe de un accidente de trabajo sufrido por **DOMINGO QUINTERO** dejó plasmado que **DOMINGO QUINTERO** tenía un horario de 6:00 p. m. a 6: a. m. como celador nocturno. Cabe señalar que esta prueba no fue objetada por la contraparte en la audiencia, de manera que tiene plena validez.
>
> Igualmente no se le otorgó el valor que correspondía a los testimonios ... a su vez la sentencia impugnada sólo le otorgaba valor a las declaraciones dadas por los testigos de la empresa demandada. **VÍCTOR CEDEÑO** (Fs. 46 y 47) **ORLANDO EMILIO JIMÉNEZ QUIEL** (Fs. 53 y 54) y por ello admite reconocer el pago de las horas extras trabajadas los sábados porque estos así lo admitieron.
> ...
> La sentencia impugnada por no haber valorado el caudal probatorio en su conjunto como ordena el principio de la sana crítica contemplado en el artículo 732 del Código de Trabajo, no se percató que el documento de Fs. 61 que constituye un informe de accidente de trabajo donde se acredita el horario de trabajo de **DOMINGO QUINTERO,** prueba esta que no fue objetada, encuentra sustento en las declaraciones vertidas por **QUINTÍN GONZÁLEZ, FRANKLIN MORENO y JOSÉ TRINIDAD MORALES,** quienes corroboraron lo que la prueba documental establece respecto del horario de trabajo de **DOMINGO QUINTERO.** pese a que en la contestación de la demanda se niega que **DOMINGO QUINTERO** tuviera el horario de 6:00 p. m. a 6:00 a. m. hasta los capataces de la empresa aceptaron que ciertos días el horario era de 11 horas, solo manifestaron que las horas extras trabajadas se le pagaron, lo cual es mentira porque las mismas boletas de pago presentadas por la propia empresa demuestran lo contrario. Por estas razones es más creíble las declaraciones de los testigos **QUINTÍN GONZÁLEZ, FRANKLIN MORENO y JOSÉ TRINIDAD MORALES.**"

Con respecto al numeral 3 del artículo 33 del Código de Trabajo, el actor señala que ha sido violado por lo siguiente:

> "Como consecuencia de los errores de apreciación de las pruebas y la violación al principio de la sana crítica, la sentencia impugnada ha infringido el artículo 33 del Código de Trabajo en su numeral 3, toda vez que no computó todas las horas extras trabajadas aplicándoles el recargo establecido en esta norma sino tan sólo para los días sábados. No se computó adecuadamente las horas extras trabajadas en domingo, los días feriados y los días ordinarios."

Los cargos endilgados, arriba citados se estudiarán en conjunto pues versan

sobre lo mismo.

De lo anterior se desprende claramente que los cargos endilgados por el casacionista se fundamentan en que no está de acuerdo con la valoración que el Tribunal Superior de Trabajo le dio a los testimonios por ella presentados y al informe patronal, por lo tanto, el fallo resultó en su contra.

En diferentes ocasiones esta Sala ha señalado que el recurso de casación no es una tercera instancia con el objeto de revisar el valor que el Tribunal Superior de Trabajo le haya dado a las pruebas, sino más bien es un recurso con el objeto de revisar los errores in judicando en que haya incurrido el tribunal de segunda instancia. Igualmente ha señalado esta Sala, que sólo en ocasiones excepcionales puede entrar a juzgar la valoración que el juez le dé a las pruebas y es en los casos en que dicho tribunal haya incurrido en un error manifiesto, un error que salte a la vista sin mayor dificultad o haya infringido la regla de la sana crítica.

En el caso bajo estudio, el recurrente manifiesta que el Tribunal Superior incurre en error, pues se separa de la lógica y la experiencia al no apreciar el informe patronal visible a foja 61 en el cual el administrador de la empresa demandada al llenar el citado informe "dejó plasmado que **DOMINGO QUINTERO** tenía un horario de 6:00 p. m. a 6:00 a. m. como celador nocturno", lo que corrobora las declaraciones de los testigos por el presentados (**QUINTÍN GONZÁLEZ (Fs. 35), FRANKLIN MORENO ARAÚZ (Fs. 39) y JOSÉ TRINIDAD MORALES CUBILLA (Fs. 41))**. Además, "no hay razón de peso para haberle negado valor a estos testimonios", por lo que no se le debió dar más valor o mayor credibilidad a los testigos de la parte demandada.

No concordamos con el recurrente en cuanto que el informe patronal corrobora las declaraciones de los testigos por él presentados. Todo lo contrario, el informe patronal (ver foja 67 del expediente contentivo del proceso), confeccionado por el administrador de la finca, sr. Demetrio Rivera Sánchez, indica que el horario del sr. Domingo Quintero es de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. de sábado a domingo, no todos los días. Siendo esto así, se han sustentado los cargos endilgados en hechos incorrectos. No existe tal error en la apreciación de la prueba, pues el Tribunal Superior ha visto en la prueba lo que ella contiene y no lo que no contiene, como pretende confundir el casacionista. Por lo tanto, el Tribunal Superior de Trabajo no hizo más que valorar la prueba de acuerdo a la sana crítica.

Consideramos prudente citar la Corte Suprema de Justicia de Colombia:

> "Ha dicho la jurisprudencia de la Corte que esta clase de error consiste en no dar por probado un hecho, estándolo, o tenerlo por establecido, sin que sea así, todo lo cual ocurre por la mala apreciación o la falta de apreciación de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas que la reglamentan, lo cual debe conducir a la ley sustancial; pero el error debe ser manifiesto, evidente, ostensible, etc. Esta causal de casación resulta entonces, de un proceso subjetivo del juzgador consistente en un equivocado razonamiento apreciativo de las pruebas que conduce a dar por establecido un hecho sin estarlo o al contrario."
> ...
> El error de hecho resulta más que todo de un proceso subjetivo del juzgador, de un equivocado razonamiento apreciativo de las probanzas que da por establecido un hecho que no sucedió o que al contrario, da por no establecido un hecho consumado y probado plenamente.
>
> (El recurso Extraordinario de Casación Laboral, Luis Lagos Pantoja, Primera edición 1993, pág. 41-42-44, Santa Fe de Bogotá, Colombia).

Al no existir un error manifiesto en la apreciación de la prueba, es claro entonces que los cargos endilgados no serían otros que la inconformidad del recurrente en la apreciación que el juzgador le diera a las pruebas, por lo que nos tendríamos que remitir a la vigente orientación jurisprudencial en cuanto a

que este recurso no es una tercera instancia judicial.

Sobre la violación al párrafo segundo del artículo 735 del Código de Trabajo, el demandante dice que ha sido violado de la siguiente manera:

> "La sentencia recurrida viola en forma directa por omisión el párrafo segundo del artículo 735 del Código de Trabajo, toda vez que a pesar que la demandada al contestar la demanda aceptó que **DOMINGO QUINTERO** inició a laborar el 25 de agosto de 1992, por el hecho de que unas boletas de pago en su nomenclatura dice **OLMEDO KISWEATER, S. A.**, sin tener presente que se trata tan solo de un nombre en un papel utilizado por una empresa cuyos dueños tienen otras empresas.
>
> En virtud a la infracción anotada la sentencia sólo reconoce el inicio de la relación laboral a partir de mayo de 1993, lo cual va en contra de los derechos reclamados por el trabajador y reconocidos parcialmente en la sentencia."

Esta norma, de haberse violado generaría errores in procedendo, no revisables en este recurso.

Del artículo 41 del Código de Trabajo, el recurrente señaló lo siguiente:

> "La sentencia recurrida infringió de modo directo por omisión el artículo 41 del Código de Trabajo, toda vez que sin existir prueba alguna que indique que **DOMINGO QUINTERO** acordó con el patrono tomar otro día de descanso por el día domingo y sin que ello haya sido alegado por el patrono, no se quiso reconocer que a **DOMINGO QUINTERO** no se le pagaba correctamente los recargos por trabajo en domingo y horas extras trabajados en domingos."

No concordamos con el recurrente con el cargo arriba señalado puesto que no es cierto que no existiera prueba alguna. Existió una prueba indiciaria para que el Tribunal Superior de Trabajo considerara que el día de descanso semanal era el jueves y no el domingo y no es otra que los recibos de planilla. Así fue señalado en la página 7, último párrafo de la sentencia impugnada.

Por último, el casacionista señala que se ha violado el artículo 48 del Código de Trabajo por lo siguiente:

> "Toda vez que existiendo pruebas suficientes negó reconocer que no se le pagó a **DOMINGO QUINTERO** los recargos por trabajo en horas extras, los días feriados a pesar que hasta los testigos de la empresa admitieron que laboraba 11 horas los días de fiesta o duelo nacional.
>
> El testimonio del capataz **ORLANDO EMILIO JIMÉNEZ** a fojas 53 y 54 señaló lo siguiente:
> ...
> Como se puede observar este testigo al que le dio mucha fe la sentencia atacada dice que **DOMINGO QUINTERO** laboraba los días de fiesta o duelo nacional, con el mismo horario que los domingos y sin embargo tampoco se quiso computar las horas extras trabajadas durante estos días, en la sentencia."

Por su parte, el Tribunal Superior de Trabajo señaló "Esta prestación laboral, si bien fue enunciada en el hecho tercero del libelo de la demanda, no formó parte de lo que finalmente se reclamó, tal como puede apreciarse del hecho sexto del mismo escrito".

Al analizar la reclamación del casacionista, la Sala observa que no se especificó en la demanda cuáles eran los días feriados o de duelo nacional en los que había trabajado las horas extras reclamadas, sino simplemente se reclamó que el demandante trabajó horas extras todos los días feriados y de duelo nacional del año. Por lo anterior, no podemos darle la razón al recurrente puesto que, al

no especificar en la demanda ni probar en forma concreta, los días feriados o de duelo nacional en los cuales se trabajó las horas extras reclamadas no procedía la condena.

La Sala ha sido constante en señalar que si bien es cierto que le corresponde a la empresa demandada probar que ha pagado los salarios reclamados por tener en su poder los elementos necesarios para tal probanza, como lo son las planillas, recibos, etc.; también es cierto que dicho criterio sólo puede ser aplicable al pago de jornadas ordinarias, pero tratándose de jornadas extraordinarias corresponde al trabajador probar en forma concreta y específica haberlas trabajado para tener derecho a su cobro. En el presente caso, no solo no se ha presentado prueba en concreto para probar que se han trabajado los días de descanso reclamados sino que los demandantes ni siquiera han señalado o especificado los días que reclaman haber trabajado.

El criterio anterior de esta Sala se puede aplicar de igual manera con las horas extras reclamadas anterior a la fecha de inicio de la relación de trabajo señalada por el Tribunal Superior de Trabajo.

En cuanto al día domingo, consideramos acertado el criterio del Tribunal Superior que señaló lo siguiente:

> "También se advierte, que de acuerdo a los recibos de planilla, objeto de análisis, el señor **DOMINGO QUINTERO** tenía como día de descanso el jueves. Es decir, que el trabajo en día domingo formaba parte de la jornada ordinaria semanal.
>
> Sin embargo, este día le era remunerado al trabajador doblemente de lo que percibía diariamente, por lo que debe entenderse que se remuneraba el trabajo extraordinario."

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, consideramos que no se debe casar la sentencia.

En consecuencia, los Magistrados de la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO CASA la Sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo el 4 de junio de 1996, en el proceso laboral promovido por DOMINGO QUINTERO contra FINCA SANTA LUCIA, S. A.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO HUMBERTO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, EN REPRESENTACIÓN DE SIDIA MARISOL RUILOBA, CONTRA LA SENTENCIA DE 12 DE JULIO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: SIDIA MARISOL RUILOBA -VS- BUSINESS SUPPLIERS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. LABORAL.

VISTOS:

El licenciado Humberto Hernández Jiménez, en nombre y representación de **SIDIA MARISOL RUILOBA**, ha interpuesto recurso de casación, contra la sentencia de 12 de julio de 1996, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial dentro del Proceso Laboral: **SIDIA MARISOL RUILOBA -vs- BUSINESS SUPPLIERS, S. A.**

Este recurso tiene su génesis, en un solicitud de reintegro con el consecuente pago de salarios caídos, por fuero de maternidad incoado por **SIDIA MARISOL RUILOBA CEDEÑO, CONTRA BUSINESS SUPPLIERS, S. A.**

Mediante Auto N° 4 de 4 de enero de 1996, el Juez Primero de Trabajo de la Primera Sección, ordenó el reintegro inmediato de la trabajadora y señaló un término de tres (3) días contados a partir de la notificación de la Resolución, para que la empresa impugnara dicha decisión.

Posteriormente la empresa impugnó el mandamiento de reintegro, bajo el argumento de que la relación de trabajo entre la señora **RUILOBA** y Business Suppliers, S. A. se inició en virtud de un contrato de trabajo por tiempo indefinido, pero con cláusula probatoria, por un período de tres (3) meses. Que de acuerdo al artículo 78 del Código de Trabajo, cuando un servicio exija cierta habilidad o destreza, será válida la cláusula que fije un período probatorio hasta por el término de tres (3) meses y siempre que conste claramente en contrato de trabajo.

El juzgador de primera instancia, frente a la impugnación, resolvió en sentencia N° 24 de 7 de junio de 1996, revocar la orden de reintegro, plasmada en el Auto N° 4 de 4 de enero de 1996, sustentando dicha decisión, en el hecho de que al ser contratada la señora **SIDIA MARISOL RUILOBA** como ejecutiva de ventas, era obvio que este servicio requería una habilidad y destreza especial, y que la empresa no estaba obligada a comprobar que la trabajadora carecía de estas características para desempeñarse debidamente. También señaló el juez a-quo que si la empresa tuviera que probar la carencia de habilidad o destreza especial en el que se ejecuta oficio se perdería el sentido discrecional del artículo 78 del Código de Trabajo, y el mismo se convertiría una causal de despido.

Posteriormente la parte afectada con la Sentencia citada, interpuso recurso de apelación contra la misma ante el Tribunal Superior de Trabajo. Este Tribunal de Segunda Instancia, mediante sentencia de 12 de julio de 1996, confirmó la Resolución N° 24 de 7 de junio de 1996. Las consideraciones que sostuvo el Tribunal Superior para no acceder al reintegro por fuero de maternidad, fueron las siguientes:

1. que si se exige probar la habilidad o destreza especial que habla el artículo 78 del Código de Trabajo, esta exigencia convertiría el período probatorio en una causal de despido, el cual no es el sentido de la norma;

2. que el contrato de trabajo, en donde se establecía el período probatorio de tres meses fue firmado por la trabajadora y que no se ha probado que hubiere existido engaño;

3. que durante la vigencia de la cláusula probatoria, cualquiera de las partes puede dar por terminada la relación de trabajo, lo que indica que esta cláusula se establece en interés de las partes; y

4. que el hecho de que el empleador pueda dar por terminada la relación de trabajo durante el período probatorio, es una excepción a la prohibición de despedir sin justa causa, y que se deja a la discreción del empleador el establecer si el trabajador durante el período probatorio reúne las cualidades requeridas en el cargo para el cual fue contratado.

La sentencia del Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial fue recurrida en casación en tiempo oportuno, por el apoderado judicial de la trabajadora, en el cual señala que el Tribunal de Segunda Instancia ha violado el artículo 78 del Código de Trabajo, reformado por el artículo 13 de la Ley N° 44 de 1995.

Encontrándose el recurso en este estado, los Magistrados que integran la Sala, entran a resolver lo pertinente.

Señala el demandante, que el Tribunal Superior de Trabajo ha violado el

artículo 78 del Código de Trabajo, reformado, que es del tenor siguiente:

> "Cuando la prestación de un servicio exija cierta habilidad o destreza especial, será válida la cláusula que fije un período probatorio hasta por el término de tres meses, siempre que conste expresamente en el contrato escrito de trabajo. Durante dicho período, cualquiera de las partes podrá dar por terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad alguna.
>
> No será válido el pacto de prueba, cuando se contrate al trabajador para desempeñar una posición que haya ocupado anteriormente en la misma empresa."

Estima el interesado que la norma transcrita ha sido transgredida de manera directa, ya que no se le ha dado la relevancia al nuevo requisito de que la habilidad o destreza debe ser especial. Que la modificación que se le hiciera el artículo 78 por medio del artículo 13 de la ley 44 de 1995, conlleva la obligación, por parte del empleador de demostrar la falta de habilidad y destreza especial.

Frente al argumento esgrimido por el actor, debemos manifestar que no coincidimos con su planteamiento, dado que el objetivo primordial del artículo 78 del Código de Trabajo, reformado por el artículo 13 de la ley 44 de 1995, no estriba en que el empleador esté obligado a demostrar que el trabajador contratado, carece de la habilidad o destreza especial; sino, que la norma ha sido modificada para llamar la atención de que no es en todo contrato que debe incluirse una cláusula probatoria, pues es obvio que no todas las labores requieren habilidad o destreza especial por parte de quien las desempeña, o pretende desempeñar.

De acuerdo a lo anterior, no tiene sentido de que el Legislador hubiese creado la disposición comentada, para que posteriormente la misma se convirtiera en una causal de despido, tal y como lo señalaron el juez de primera instancia y el Tribunal Superior de Trabajo. Igualmente, coincidimos con el Tribunal de Segunda Instancia, cuando este señaló que el artículo 78 reformado por la ley 44 de 1995, es introducido en la legislación laboral en interés de las partes, ya que la misma excerta legal dispone que en el período probatorio "cualquiera de las partes podrá dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad alguna."

La señora **SIDIA MARISOL RUILOBA CEDEÑO**, fue contratada como Ejecutiva de Ventas por la empresa Business Suppliers, S. A., cargo este que evidencia que la trabajadora debía reunir la habilidad o destreza especial para desempeñarse en el mismo. Si no demostró la trabajadora tener estas características, la empresa demandada estaba en todo su derecho de prescindir de sus servicios invocando la cláusula probatoria, aunque se encontrara en estado de gravidez. La propia trabajadora, aceptó la cláusula probatoria, inserta en el contrato, al firmar libremente este último.

En última instancia, si la señora **RUILOBA** no estaba de acuerdo con el empleador, en el sentido de que ella carecía de la habilidad o destreza especial, pudo haber demostrado lo contrario, aportando las pruebas conducentes.

De acuerdo a lo anterior, no observamos que la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, haya violado el artículo 78 del Código de Trabajo, reformado por la Ley N° 44 de 1995.

En consecuencia, los Magistrados que integran la Sala Tercera, Laboral, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la Sentencia del 12 de julio de 1996 dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial dentro del Proceso Laboral: SIDIA MARISOL RUILOBA -vs- BUSINESS SUPPLIERS, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES

AGOSTO 1996

CARTA ROGATORIA

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO SESENTA Y TRES DE MADRID, ESPAÑA, DENTRO DEL PROCESO DE MAYOR CUANTÍA N° 281-95, A INSTANCIA DE LA ENTIDAD PORTMAN GOLF, S. A. CONTRA OTROS Y LA ENTIDAD INVERSORES REUNIDOS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por conducto de la Directora General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, ha ingresado a la Sala Cuarta de Negocios Generales, de la Corte Suprema de Justicia, la Comisión Rogatoria librada por el Juzgado de Primera Instancia N° Sesenta y Tres de Madrid, España, dentro del Proceso de Mayor Cuantía N° 281-95, a instancia de la Entidad PORTMAN GOLF, S. A. contra otros y la Entidad INVERSORES REUNIDOS, S. A.

El Mencionado Tribunal de Justicia español solicita:

> "la practica de la diligencia de emplazamiento del demandado INVERSORES REUNIDOS, S. A., rogándole se interese en la misma, dignandose ordenar el cumplimiento de la comunicación dirigida a EL DORADO, PANAMÁ CITY, REPÚBLICA DE PANAMÁ, para que dentro del término de nueve días y noventa más por razón de la distancia, comparezcan en autos, con Abogado que la defienda y Procurador que la represente, bajo el apercibimiento de que si no lo efectúa, será declarada en rebeldía, siguiendo el pleito su curso, notificándole dicha resolución y las demás que se dicten en los estrados de este Juzgado."

De acuerdo con el Código Judicial en su artículo 101 numeral 3, le corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales la función de "recibir los exhortos y Comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe cumplirlo".

Seguidamente, procede el tribunal a verificar la existencia de convenios internacionales que rijan a ambas naciones.

Observa la Sala Cuarta, que tanto el Estado panameño, como el Estado español, están actualmente adscritos al Convenio de la Haya, concertado el 5 de octubre de 1961, Ley de la República N° 6 de 25 de junio de 1990 (publicada en la Gaceta Oficial N° 21.571 de 3 de julio de 1990), y, a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, aprobada a través de la Ley N° 12 de 23 de Octubre de 1975 (publicada en la Gaceta Oficial N° 18.072 de 23 de abril de 1976).

El Convenio de la Haya suscrito el 5 de octubre de 1961, en sus artículo 2 y 3 establece lo siguiente:

> "Artículo 2: Cada Estado contratante eximirá de la legalización a los documentos a los que se apliquen el presente convenio y que deberán ser presentados en su territorio. La legalización, en el sentido del presente convenio, sólo cubrirá la formalidad por la que los agentes diplomáticos o consulares del país en cuyo territorio el documento deba surtir efecto, certifiquen la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre que el documento ostente."

> "Artículo 3: La única formalidad que podrá ser exigida para certificar la autenticidad de la firma, el carácter con que ha actuado el signatario del documento, y de corresponder la identidad del sello o del timbre que lleva el documento, será una anotación

> que deberá ser hecha por la autoridad competente del Estado en el cual se originó el documento, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.
>
> Sin embargo, la formalidad mencionada en el párrafo precedente no podrá exigirse cuando las leyes, reglamentos o las costumbres vigentes en el Estado en el que el documento deba surtir efecto, o un acuerdo entre dos o más Estados contratantes, la rechacen, la simplifiquen o eximan al documento del requisito de la legalización."

Se colige palmariamente de los artículos antes transcritos, que al no encontrarse Panamá dentro de las excepciones señaladas en el párrafo segundo del artículo 3, resulta obligatorio el cumplimiento de la formalidad de la "**acotación o apostilla**" como única formalidad exigida y aplicable en todo documento público proveniente del extranjero, el cual es el caso del negocio que nos ocupa.

La Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias en su artículo VI suprime la exigencia de legalización "diplomática o consular", cuando los exhortos o cartas rogatorias se tramitan por vía consular diplomática o por intermedio de la autoridad central, no obstante, es evidente, por lo expresado en párrafos precedentes, que este artículo no establece de forma alguna la exclusión de la formalidad exigida relativa al cumplimiento de la "apostilla", la cual se tiene que surtir en el Estado requirente.

La Sala observa que en el presente exhorto en cuestión no se aprecia el sello de la apostilla o acotación que legaliza los documentos expedidos en el Estado requiriente, siendo éste un requisito indispensable para declarar viable un exhorto o carta rogatoria, pues su cumplimiento encierra la presunción de que los documentos han sido expedidos conforme a la ley local del país que emitió dichos documentos.

Los señalamientos que preceden conducen a esta Magistratura a considerar que no es posible acceder a lo impetrado en la presente oportunidad, toda vez que "las convenciones y tratados internacionales otorgan derechos e imponen obligaciones a las partes contratantes, preferentemente. Es una regla de conducta obligatoria para los Estados que los suscriben y ratifican. La teoría de la fuerza obligatoria de los pactos internacionales ha sido muy amplia y se ha orientado hacia los más variados criterios ..., pero la esencia de ellas es la afirmación del carácter obligatorio de los mismos, cualquiera que sea el fundamento que las informa" (Sepúlveda, César, Derecho Internacional, Editorial Porrúa, S. A., México, 1983, pág. 135).

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala Cuarta de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE el diligenciamiento en el territorio nacional, de la Comisión Rogatoria librada por el Juzgado de Primera Instancia N° Sesenta y Tres de Madrid, España, dentro del Proceso de Mayor Cuantía N° 281-95, a instancia de la Entidad PORTMAN GOLF, S. A. contra otros y la Entidad INVERSORES REUNIDOS, S. A., y ORDENA que se remita el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores para que proceda de acuerdo a los convenios internacionales relativos a esta materia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

COMISIONES ROGATORIAS PROCEDENTES DEL PRIMER FISCAL DIRIGENTE DEL JUZGADO SUPERIOR DE LA CIUDAD DE DUSSELDORF, ALEMANIA, EN LO REFERENTE A LOS TRES ALLANAMIENTOS, REGISTRO Y CONFISCACIÓN DE LAS OFICINAS DEL SEÑOR GERARDO STRANSKY TRUST CORPORATION; ABN-MRO BANK Y MOSSACK, FONSECA & CO. MAGISTRADO PONENTE:

RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por conducto de la Directora General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, ha ingresado a la Sala Cuarta de Negocios Generales, de la Corte Suprema de Justicia, mediante Nota N° DGPE/DCL/N° 1185/96, Comisiones Rogatorias de solicitud de asistencia en asuntos jurídicopenales, libradas por el Primer Fiscal Dirigente, Postfach 101122, 40002 Dusseldorf, República de Alemania, con números de referencia 6 b AR 11/96, 6 b AR 12/96 y 6 b AR 13/96, dentro del proceso seguido contra los ciudadanos alemanes Helmut Gottwald y otros, por fraude y otros delitos.

Según lo establece el numeral 3 del artículo 101 del Código Judicial, le corresponde a la Sala Cuarta recibir exhortos y comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y considerar si vulnera o no el orden público y, en el evento de que no lo vulnere, determinar el funcionario o tribunal que debe cumplirlo.

La comisión rogatoria puede ser controlada bajo la excepción del orden público cuando la ejecución o práctica de la misma conlleve o altere instituciones o principios fundamentales del régimen del país del Estado exhortado o contraríe una ley imperativa. El orden público en el Derecho Internacional Privado es una noción judicial casuística y temporal que sólo el juzgador la constata o dicta en cada negocio jurídico y tiene efectos para el caso en examen nada más.

Corresponde en primer lugar, determinar si existe entre la República de Panamá y Alemania convención suscrita relativa a exhortos o cartas rogatorias. En cuanto a esta materia, observa la Sala que no existe convención alguna entre ambos países, de manera que el procedimiento a seguir en cuanto al diligenciamiento del suplicatorio en estudio, será conforme a lo estipulado en nuestro Código Judicial como fuente supletoria en este caso.

La Sala observa que la documentación procedente de las autoridades alemanas se encuentra debidamente legalizada, pues consta la incorporación de la apostilla en cada uno de los documentos a diligenciar, lo cual encierra la presunción de que han sido expedidos conforme a la ley local del país requiriente; además, las comisiones rogatorias se encuentran traducidas al idioma español, requisitos éstos indispensables en el negocio en estudio.

El objeto de las comisiones rogatorias en análisis consiste, en su parte medular, en que las autoridades panameñas competentes realicen las siguientes diligencias:

> "I) El Primer Fiscal Dirigente con número de referencia: 6 b AR 11/96 ... Para más aclaración del estado de cosas, el Tribunal Municipal de Dusseldorf ha decretado el 11.12.1995 (150 Gs 309/95) resoluciones de registro y confiscación referente a:
>
> GERALDO STRANSKY
> Edificio Tamanaco, Vía Italia, Panamá
> (Confiscación de los documentos detallados de fojas 67 a 68).
>
> y WESTERN TRUST CORPORATION,
> Apartado 4725 Panamá, 5
> República de Panamá
>
> y FIRMA MEMPHIS INTRODUCING BROKERAGE INCORPORATED, Comosa Building, 15th Floor, Samuel Lewis Avenue, Panamá City, República de Panamá, ... para lo que ruego su ejecución.
> (Confiscación de los documentos descritos de fojas 72 a 73).

... se tome declaración como testigos a
GERALDO STRANSKY (preguntas de fojas 8 a 21), MINERVA ACOSTA e IRMA QUIÑONES (preguntas de fojas 21 a 23) , ambas testigos a citar por la Western Trust Corporation, Panamá.

... Finalmente ruego, por el volúmen y complejidad del procedimiento, se autorice la participación en las medidas a tomar allí a los señores Wilfried Jeltsch, comisario principal de investigación criminal, y Jürgen Brandt, comisario principal de investigación criminal, de la Brigada de Investigación Criminal del Land de Renania del Norte de Westfalia."

"II)**El Primer Fiscal Dirigente con número de referencia: 6 b AR 12/96**

... Para más aclaración del estado de cosas, el Tribunal Municipal de Dusseldorf ha decretado el 11.12.1995 (150 Gs 3009/95) resoluciones de registro y confiscación referente a:

ABN-AMRO BANK
Ciudad de Panamá
República de Panamá

... Se ordena la confiscación de todos los documentos de cuentas que están o estuvieron a nombre de los inculpados y a los nombres de Dolphin, Brokerage y Metro Broker Incorporated, solos respectivamente o juntos con otros nombres y sobre las que los inculpados y/o las personas denominadas están o estaban autorizadas a disponer solos o junto con otros ... para lo que yo pido su ejecución.

La confiscación se refiere especialmente a las cuentas:

Número de Cuenta	Titular:
a) 2.35.49009	a) Dolphin
b) 2.33.68004	b) Western Trust Corporation
c) 2.35.0018	c) Memphis Introducing Brokerage
d) 2.34.99.001	d) Metro Broker Incorporated.

... El registro se refiere también a la Caja fuerte alquilada a los inculpados (HELMUT GOTTWALD, HAGEN SCHWARZE, y JüRGEN HACKSTEIN) y a DOLPHIN, WESTERN TRUST CORPORATION, MEMPHIS INTRODUCING BROKERAGE y METRO BROKER INCORPORATED.

La confiscación abarca todas las cuentas existentes o caducadas (cuentas corrientes, de ahorro, de depósito a plazo fijo, de crédito, de depósitos y demás cuentas, inclusive subcuentas), actas de crédito completas (con balances, análisis, observaciones internas), documentaciones de aperturas de cuenta, depósitos de títulos-valores, operaciones de pagos, documentos contables sobre movimientos de dinero, que han sido tramitadas por CpD-u otras cuentas- también internos bancarios, así como todos los documentos sobre operaciones al contado).

Período de tiempo de la confiscación: 1° de enero de 1992 hasta el 31 de diciembre de 1996.

... Además, ruego se haga toma de declaración como testigo al señor ANDRE VAN DER MEULEN o a otro responsable del banco ABN-AMRO, en la ciudad de Panamá, que esté versado con los negocios de los inculpados." (preguntas de fojas 54 a 55).

... Finalmente ruego, por el volumen y complejidad del

procedimiento, se autorice la participación en las medidas a tomar allí a los señores Wilfried Jeltsch, comisario principal de investigación criminal, y Jürgen Brandt, comisario principal de investigación criminal, de la Brigada de Investigación Criminal del Land de Renania del Norte de Westfalia."

"III) **El Primer Fiscal Dirigente con número de referencia: 6 b AR 13/96**

... Para más aclaración del estado de cosas, el Tribunal Municipal de Dusseldorf ha decretado el 20.12.1995 (150 Gs 3099/95) resoluciones de registro y confiscación referente a:

MOSSACK, FONSECA UND CO.,
Ciudad Panamá,
Arango-Orillac Bldg.,
54th Street,
P. O. Box 8320
Panamá 7
República de Panamá

para lo que yo pido su ejecución.

... Se ordena la confiscación de los siguientes documentos: documentaciones que pudiesen dar aclaración sobre los auténticos dominantes de las diferentes sociedades panameñas, como órdenes de fundación y protocolos de asambleas de socios, así como instrucciones al bufete Mossack, Fonseca.

... Además, ruego se tome declaración como testigo a Jürgen Mossack o a otra persona responsable de la casa del bufete panameño Mossack, Fonseca und Co., que esté versado en el estado de cosas en cuestión. (Preguntas de fojas 99 a 100).

... Finalmente ruego, por el volumen y complejidad del procedimiento, se autorice la participación en las medidas a tomar allí a los señores Claus Helbing, comisario principal de investigación criminal, y Wilfried Jeltsch, comisario principal de investigación criminal, de la Brigada de investigación Criminal del Land de Renania del Norte de Westfalia."

De toda la documentación aportada por las autoridades alemanas, se puede colegir que las investigaciones seguidas en Alemania que dan origen a la presente solicitud, son en base a sospechas de fraude y de infracción a la Ley Bursátil alemana, en donde aparecen como inculpados ciudadanos alemanes, quienes se encuentran en prisión preventiva, y que, aparentemente, dirigían desde Dusseldorf, Alemania, a través de casas o sociedades ficticias panameñas una organización de una estructura conspiradora que posibilitaba encubrir a los verdaderos responsables en ese trenzado de casas, y dificultar, o hacer imposible tanto la persecución jurídicopenal como de derecho civil, en donde inducían a inversionistas a negocios de especulación, que, por lo menos en parte, después ni siquiera fueron invertidos.

Según el Primer Fiscal Dirigente se sirvieron, supuestamente, de un fiduciario panameño, el señor Geraldo Stransky, y "probablemente" con la intervención de la firma de abogados Mossack, Fonseca y socios, en lo referente a la creación de las sociedades panameñas; además, señala esta autoridad, que fue al banco ABN-AMRO donde transfirieron los importes de dinero acumulados de los clientes, ... "estos saldos activos eran "lavados" entonces en Panamá, en la forma en que, los inculpados, de forma aún no determinada de aclarar, hacían que el dinero volviese a Alemania ocultando su origen" ... "La inmensa cifra de denuncias existentes hasta la fecha, hace llegar a la conclusión de una suma de daños por un importe en millones". El Código Penal Alemán define el fraude como:

"Parágrafo 263:

> Párrafo 1: Quien con la intención de conseguir un beneficio de capital para sí mismo o para un tercero daña el patrimonio de otro, de tal manera, que incita o mantiene un error mediante simulación o supresión de hechos reales, será penado con pena restrictiva de la libertad de hasta cinco años o con pena de multa." (Foja 23).

Nuestra legislación penal recoge en el Libro II (De los Delitos), Título IV (Delitos contra el Patrimonio), Capítulo IV, los delitos denominados "De la estafa y otros fraudes", en el artículo 190 que a la letra dice:

> "Artículo 190: El que engañe a una persona, para procurarse o procurar a un tercero un provecho ilícito, con perjuicio de otro, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y de 50 a 150 días-multa.
>
> La prisión será aumentada de una cuarta parte a la mitad de la pena si el delito lo cometen apoderados o administradores en el ejercicio de sus funciones o si se comete en detrimento de la administración pública o de un establecimiento de beneficencia."

Manifiesta la autoridad exhortante que hasta ahora son conocidas las siguientes sociedades registradas en Panamá, bajo la dirección: Apartado 4725, Edificio Comosa, Panamá 5/República de Panamá:

-DOLPHIN DEVELOPMENT, INC. (DDI)
-EUROPEAN PORTFOLIO MARKETING, INC. (EMP)
-FREDERIC DUBOIS INTERNATIONAL MARKETING, S. A. (FDI)
-INTERSTELLAR SERVICE, INC.
-L. A. MARKETING, INC. (LAM)
-LAVALLE MARKETING, S. A.
-MEMPHIS INTRODUCING BROKERAGE, INC. (MIB)
-METRO BROKER, INC.
-NEW YORK INVESTMENTS, INC. (NYI)
-QUENTIN INTERNATIONAL, CORP. (QIC)
-SHELBY TRADING, INC.
-TEXAS CAPITAL INTERNATIONAL
-UNIVERSAL INVERSIONES Y COMERCIO, S. A.

Es pertinente establecer que las autoridades alemanas hacen referencia a una asistencia judicial en asuntos jurídicopenales, y tomando en consideración que el Derecho extranjero se aplica en virtud de una tolerancia discrecional mediante la vieja "regla de urbanidad" de la Cortesía Internacional (Comitas), el exhorto o comisión rogatoria es parte de los medios típicos del auxilio judicial, que consiste en que los jueces del proceso o de la causa soliciten al juez extranjero que lo auxilien en una tramitación dentro de un negocio jurídico, ventilándose en el extranjero.

La República de Panamá en materia de tratados dentro del Derecho Procesal Penal Internacional tiene sus antecedentes en el Tratado de Asistencia Legal Mutua suscrito con los Estados Unidos de América, el cual forma parte de un verdadero Acuerdo de Cooperación Judicial Penal Internacional de carácter coactivo a partir de la vigencia de la Ley 20 de 22 de julio de 1991. No obstante, al tratarse de otro Estado que solicite el auxilio internacional de carácter jurídicopenal, para cada caso en particular, la República de Panamá se reserva el derecho de prestar o no la colaboración en virtud de las limitaciones de nuestro ordenamiento interno y de acuerdo con los principios de reciprocidad internacional que deben prevalecer en la comunidad internacional.

La cooperación judicial se configura en dos vías: una, consagrada a permitir la ejecución de actos procesales de gestión o de coactividad con sus respectivos controles, y por la otra vía, actos destinados a la asistencia judicial-administrativa como son la legalización de documentos y actividades consulares de interés privado que se insertan, más bien, en el Derecho Consular Moderno. No obstante, la distinción clásica se limita a una concepción judicial de mero trámite de un lado y del otro, medidas coercitivas como embargo o congelamiento de fondos.

La no existencia de Convenios Multilaterales o Bilaterales entre la República de Alemania y Panamá, no constituye óbice para no practicar el auxilio judicial en favor de la autoridad exhortante.

El auxilio judicial, sin lugar a dudas, tiene su sustento en una simetría jurídica y en un presupuesto de **buena fe** de los Estados que son miembros de la Comunidad Internacional.

La Sala precisa establecer que, de acuerdo a la costumbre internacional, y con fundamento en nuestro ordenamiento interno, en cuanto a la tramitación de los exhortos o cartas rogatorias, éstos se tramitarán de acuerdo con las leyes y normas procesales nacionales como Estado requerido, no obstante, queda de forma discrecional y por principios de reciprocidad internacional que se le otorgue a la carta rogatoria una tramitación especial, o que en la práctica de las diligencias solicitadas se acepte la observancia de formalidades adicionales, siempre que no vulnere la legislación panameña.

LA SALA PROCEDE AL ANÁLISIS DE CADA UNA DE LAS DILIGENCIAS SOLICITADAS.

A) EL PRIMER FISCAL DIRIGENTE
NÚMERO DE REFERENCIA: 6 B AR 11/96.

Se detallan a fojas 2 y 3 de la presente resolución, las diligencias solicitas por las autoridades alemanas emisoras de las cartas rogatorias en cuestión referentes al señor **GERALDO STRANSKY**, señoras **MINERVA ACOSTA e IRMA QUIÑONES** y a las compañías WESTERN TRUST CORPORATIONS y **MEMPHIS INTRODUCING BROKERAGE INCORPORATED**, en donde se requiere la ejecución de allanamientos, registros, aprehensión de documentos y declaraciones; acciones tendientes a esclarecer las investigaciones dentro de procesos seguidos en Alemania a ciudadanos alemanes bajo sospechas de fraude y de infracción a la Ley Bursátil alemana, y que, "supuestamente", existe algún vínculo o relación con el señor Geraldo Stransky y las compañías mencionadas, razón por la cual solicitan la práctica de ciertas diligencias al igual que las declaraciones de el Sr. Stransky y de las señoras Acosta y Quiñones, diligencias que piden sean efectuadas por las autoridades panameñas, en presencia de oficiales de la Brigada de Investigación Criminal del Land de Renania del Norte de Westfalia, Alemania.

La Sala advierte que entre la documentación aportada por el Estado requiriente del presente suplicatorio, constan a fojas 119, 121, 123 y 125 copias autenticadas de notas cursadas por telefaxes entre el señor Geraldo Stransky y el inculpado abogado Schillings, de cuyo contenido se puede desprender "a priori" la supuesta preexistencia de vínculos comerciales que éstos sostenían con las empresas aquí cuestionadas, documentos éstos que, han inducido a las autoridades alemanas a elevar la presente solicitud de asistencia internacional pidiendo la colaboración como testigos al señor Geraldo Stransky y a las señoras Acosta y Quiñones.

La autoridades jurisdiccionales alemanas, dentro de sus investigaciones, expresan que " en el caso del testigo Geraldo Stransky se trata del hombre de paja antepuesto por los inculpados de las sociedades panameñas en cuestión; sobre éste, si bien, sobre su sociedad Western Trust Corporation, se realizaron las fundaciones de las casas buzones (ficticias). Stransky dio a los inculpados poderes para las sociedades fundadas por él. Especialmente el inculpado Schillings dio instrucciones a Stransky en forma de escritos formulados, solamente a firmar a Stransky. La casa Memphis Introducing Brokerage fue fundada por Stransky, que, tras instrucción del inculpado Gottwald, abrió para la misma cuentas en el banco ABN-AMRO, al que los inculpados Schillings y Schilling transfirieron los fondos de clientes acumulados" (foja 8 del expediente).

En lo relativo a las señoras Minerva Acosta e Irma Quiñones, solicitan las declaraciones de éstas, como testigos por la Western Trust Corporation, para las cuales han preparado un cuestionario de 18 preguntas visible a foja 21 y 22.

La Sala arriba a la conclusión de que en virtud de que las diligencias solicitadas dentro de la petición número 6 b AR 11/96, proferida por el Primer

Fiscal Dirigente de Dusseldorf, Alemania, no vulneran nuestro ordenamiento interno y, de acuerdo con el principio de reciprocidad y de auxilio judicial internacional que debe primar en la comunidad internacional, es permitida la práctica de las diligencias dentro de los parámetros que establecen las normas procesales penales internas relativas a la citación de testigos (artículos 2127, 2128 y concordantes del Código Judicial) y al allanamiento, registro y aprehensión de documentos (artículos 2185, 2189 y 2191 del Código Judicial).

Los funcionarios de instrucción, en lo referente al cuestionamiento al señor Geraldo Stransky, se remitirán al cuestionario de 54 preguntas elaborado por las autoridades alemanas que obra de fojas 8 a 21 del expediente; y, de igual forma, en lo pertinente a las señoras Minerva Acosta e Irma Quiñones, se ceñirán a las 18 preguntas descritas a fojas 21 y 22 del expediente.

Esta corporación judicial determina que en lo referente a la aprehensión de documentos descritos en la presente petición, éstos serán obtenidos a través de fotocopias de los originales, y si la autoridad designada a practicar las diligencias así lo considera, podrá valerse de peritos versados en la materia; no obstante éstos se limitarán, "única y exclusivamente", al reconocimiento de la documentación detallada a fojas 67, 68, 72 y 73 del expediente, correspondientes a las oficinas del señor Geraldo Stransky (Edificio Tamanaco, Vía Italia Panamá) y a las compañías Western Trust Corporation (Apartado 4725, Panamá 5, República de Panamá) y Memphis Introducing Brokerage Incorporated (Comosa Building, 15th, República de Panamá).

La Sala establece, con fundamento en nuestro Código Judicial, que el allanamiento se verificará, exclusivamente, después de haber citado a los testigos, y en el evento de que éstos se negaren a entregar de forma voluntaria los documentos requeridos, antes citados.

En lo relativo a la petición de que dos oficiales de la Brigada de Investigación Criminal estén presentes en la práctica de las diligencias, con el propósito de que intervengan al momento de hacer las preguntas o para el reconocimiento y aprehensión de documentos u objetos, este Tribunal determina que es admisible la presencia de los dos oficiales alemanes, "de forma limitada" es decir, que no podrán ejecutar ningún tipo de acción relativa a la práctica en sí de las diligencias, las cuales serán realizadas en toda su extensión por los funcionarios panameños de instrucción designados para tal fin, según la concepción de la lex fori.

B) EL PRIMER FISCAL DIRIGENTE
NÚMERO DE REFERENCIA: 6 B AR 12/96

La Sala observa que las diligencias solicitadas respecto al ABN-AMRO BANK, detalladas en fojas 3 y 4 de la presente resolución, tienen un basto alcance y es preciso analizarlas con detenimiento, al amparo de nuestro derecho positivo.

Las autoridades jurisdiccionales alemanas solicitan el "registro y aprehensión" de un sinnúmero de cuentas, subcuentas, existentes o caducadas, de cuentas corrientes, de ahorro, de depósito a plazo fijo, de crédito, actas de crédito completas (con balances, análisis, observaciones internas), documentaciones de aperturas de cuentas, depósitos de títulos-valores, operaciones de pagos a nombre de los inculpados o de éstos con terceros ... y en caso de salidas de cheques son necesarias también fotocopias del dorso de los cheques, ... además "el registro se refiere también a la caja fuerte alquilada a los inculpados (HELMUT GOTTWALD, HAGEN SCHWARZE Y JÜRGEN HACKTEIN) y a las compañías Dolphin, Western Trust Corporation, Memphis Introducing Brokerage y la Metro Broker Incorporated" (fojas 83 y 84). Requieren además, que el período de tiempo a considerar dentro de la diligencia solicitada, referente a la documentación que se detalla, sea del 1° de enero de 1992, hasta el 31 de diciembre de 1996.

Adicional a todo lo antes mencionado, requieren que se "tome declaración como testigo al señor Andre van der Meulen o a otro responsable del banco ABN-AMRO en la ciudad de Panamá, que esté versado con los negocios de los inculpados", para lo cual han elaborado un cuestionario de 10 preguntas (fojas

54 y 55).

A fojas 52, 53, 54, 83 y 84 del expediente, las autoridades judiciales alemanas exponen las circunstancias que "aparentemente" vinculan al banco "ABN-AMRO" en las investigaciones que se siguen en Alemania por sospechas de fraude y otros delitos contra ciudadanos alemanes.

Esta Superioridad determina que la asistencia aquí solicitada, en primera instancia, referentes al allanamiento, registro y aprehensión de documentos al banco ABN-AMRO, se ubican dentro de un contexto demasiado amplio o comprensivo, lesionando o vulnerando lo estatuido en nuestra Carta Magna según se desprende del artículo 29, y que por lo tanto, no es posible acceder, dentro de este marco, a su práctica.

> "Artículo 29: La correspondencia y demás documentos privados son inviolables y no pueden ser ocupados o examinados sino por disposición de autoridad competente, para fines específicos y mediante formalidades legales.
>
> En todo caso se guardará reserva sobre los asuntos ajenos al objeto de la ocupación o del examen.
>
> Igualmente, las comunicaciones telefónicas privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas. El registro de papeles se practicará siempre en presencia del interesado o de una persona de su familia o en su defecto, de dos vecinos honorables del mismo lugar. (Subraya la Sala).

No obstante, considera la Sala que respecto a lo solicitado a foja 52 y específicamente sobre las cuentas:

Número de cuenta	Titular
a) 2.35.0018	MEMPHIS INTRODUCING BROKERAGE
b) 2.35.49009	DOLPHIN
c) 2.34.99001	METRO BROKER INC.
d) 2.33.68004	WESTERN TRUST CORPORATION

Es procedente la práctica de la diligencia consistente en que el banco ABN-AMRO proporcione toda la información concerniente a todos y cada uno de los movimientos que se dieron en las mismas, circunscribiéndose al período de tiempo antes aludido; así como también información acerca de la documentación que reposa en la caja fuerte alquilada a los inculpados y a las compañías arriba mencionadas.

El banco ABN-AMRO tiene el deber de cooperarar con los funcionarios de instrucción, poniendo a disposición de éstos la documentación que específicamente se requiera, obteniéndose los mismos a través de fotocopias de los originales.

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia en jurisprudencia reiterada ha sostenido que " este deber de cooperación se encuentra consagrado en el artículo 384 del Código Judicial, y es una fuente de creación de especiales obligaciones de conductas exigibles por el funcionario de instrucción en cada caso concreto ... Este deber de cooperación implica que la sociedad demandada debe facilitar la tarea de investigación del funcionario de instrucción y colaborar con el mismo suministrando la información que razonablemente le sea requerida, dentro del marco constitucional y legal, absteniéndose de obstaculizar, impedir o dilatar las tareas del funcionario de instrucción" (Sentencia de 13 de marzo de 1990).

> "Artículo 384: Todos los empleados a cuyo cargo está la custodia de documentos públicos, tienen el deber de dar de oficio, cuantas noticias, datos, informes y copias que le solicitan los Agentes del Ministerio Público, sin necesidad para ello de resolución de autoridad alguna. Las personas naturales o jurídicas deberán también prestar la cooperación necesaria a dichos Agentes, cuando éstos

actúen en defensa de los intereses públicos o como funcionarios de instrucción, y los referidos funcionarios podrán imponer mediante resolución motivada, multas hasta veinticinco (B/.25.00) balboas o arresto por ocho días, a los que sin motivo justificado entorpecieren su acción con demoras, evasivas o negativas."

En lo referente a la petición de que se cite al señor ANDRE VAN DER MEULEN, como testigo, o a otro responsable del banco ABN-AMRO que esté versado con los negocios de los inculpados, para lo cual han preparado un cuestionario de 10 preguntas que obra de fojas 54 a 55 del expediente, esta Superioridad accede a su diligenciamiento a través de un funcionario de instrucción, de acuerdo a lo consagrado en los artículos 2127, 2128 y concordantes del Código Judicial, referentes a este materia.

La Sala reitera lo expresado en párrafos precedentes que, con fundamento en nuestro Código Judicial, el allanamiento se verificará, exclusivamente, después de haber citado al testigo, y en el evento de que éste se negare a entregar de forma voluntaria los documentos requeridos, antes detallados, según lo preceptuado en los artículos 2185, 2189, 2191 y concordantes del Código Judicial.

Respecto a la petición formulada en torno a la participación de dos oficiales alemanes de la Brigada de Investigación Criminal del Land de Renania del Norte de Westfalia en la práctica de las diligencias, reitera esta Corporación que se concede la misma, condicionada al hecho de que aquellas serán llevadas a cabo únicamente por los funcionarios de instrucción designados para tal fin, en presencia de los oficiales alemanes, no obstante éstos se abstendrán de participar de forma directa.

C) EL PRIMER FISCAL DIRIGENTE
NÚMERO DE REFERENCIA: 6 B AR 13/96.

Dentro de esta petición dirigida a que las autoridades panameñas realicen el allanamiento, registro y aprehensión de documentos referentes a MOSSACK, FONSECA UND CO. (Ciudad Panamá, Arango-Orillac Bldg., 54 Street, P. O. Box 8320, Panamá 7, República de Panamá), manifiestan que "este bufete panameño ("law firm") empezó a intervenir "probablemente" al tiempo de las fundaciones de las casas buzones (ficticias) por el testigo Stransky" (foja 98). "El bufete anteriormente mencionado acompañó a la fundación de las sociedades de inversión panameñas como "registered agent" (foja 118).

A foja 117 la autoridad peticionaria describe los documentos requeridos para su aprehensión de la forma siguiente: "Documentos que pudiesen dar aclaración sobre los auténticos dominantes de las diferentes sociedades panameñas, como órdenes de fundación y protocolos de asambleas de socios, así como instrucciones al bufete Mossack, Fonseca". Además solicitan se cite como testigo al señor JÜRGEN MOSSACK o a otra persona responsable de la casa del bufete panameño Mossack, Fonseca und Co.

En la presente solicitud la Sala estima que no se justifica acceder al allanamiento y registro de la firma Mossack, Fonseca und Co., dado que no los vinculan a priori es decir, no hay implicación directa con las investigaciones que se siguen en Alemania por sospechas de fraude y violación a la Ley Bursátil alemana.

La función de agente residente que realizan los abogados o firmas de abogados es un trabajo profesional, el cual no es vinculante con las acciones o gestiones derivadas de las operaciones de las sociedades que representan, no obstante, esto no es óbice para que el abogado o firma de abogados que actúa como agente residente de una sociedad anónima panameña conozca al cliente y que mantenga información suficiente para identificarlo, ante las autoridades competentes cuando así le sea requerido.

En el caso que nos ocupa, este Tribunal considera pertinente que se realice la práctica de la diligencia consistente en la citación como testigo al señor Mossack o a otra persona responsable de la casa del bufete panameño Mossack,

Fonseca und Co., para lo cual el Estado requiriente ha preparado un cuestionario de 11 preguntas visible en fojas 99 y 100, a través del cual los funcionarios de instrucción deben inducirlo a que proporcione la documentación mencionada a foja 117.

Reiteramos que de conformidad con l artículo 384 del Código Judicial los agentes residentes como cualquier otra persona, tienen un deber de cooperación para con los Agentes del Ministerio Público.

De igual forma que en las peticiones antes estudiadas, la Sala accede a que estén presentes los dos oficiales alemanes al momento del cuestionamiento al señor Mossack o a la persona que se designe, sin embargo, como expresamos anteriormente, la diligencia será realizada de forma exclusiva por el funcionario de instrucción, de acuerdo a lo consagrado en los artículos 2127, 2128 y concordantes del Código Judicial.

Por lo antes expuesto, la Sala estima conveniente acceder parcialmente a lo pedido en las comisiones rogatorias en análisis, basándose en los principios de auxilio judicial, reciprocidad y cooperación internacional que rigen las relaciones de los Estados que integran la comunidad internacional.

En consecuencia, la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE PARCIALMENTE el diligenciamiento de las comisiones rogatorias de solicitud de asistencia en asuntos jurídicopenales libradas por el Primer Fiscal Dirigente, Postfach 101122, 40002 Dusseldorf, República de Alemania, dentro del proceso seguido contra los ciudadanos alemanes Helmut Gottwald y otros, por fraude y otros delitos, en los siguientes términos:

I) Citar como testigo al Sr. Geraldo Stransky y formularle las preguntas que obran de fojas 8 a 21 del expediente.

Citar como testigos a las señoras Minerva Acosta e Irma Quiñones y realizarle las preguntas visible de fojas 21 a 22 del expediente.

Allanamiento, registro y aprehensión de las oficinas del señor Geraldo Stransky y compañías Wester Trust Corporation y Memphis Introducing Brokerage Incorporated, dentro de los parámetros antes señalados para la práctica de la presente diligencia.

II). Citar como testigo al señor Andre Vander Meulen o a otro responsable del banco ABN-AMRO versado con los negocios de los inculpados para formularle las preguntas visibles de fojas 54 a 55 del expediente, y a través de esta diligencia solicitarle al representante del banco que proporcione toda la información concerniente a las cuentas detalladas a foja 14 de la presente resolución y al contenido de las cajas fuertes alquiladas a los inculpados, así como a las compañías titulares de las cuentas antes citadas.

III). Citar como testigo al señor Jürgen Mossack o a otra persona responsable del bufete Mossack, Fonseca Und. Co., a fin de formularle las preguntas que obran de fojas 99 a 100 del expediente e inducirlo a que proporcione la documentación requerida a foja 117.

Permitir la presencia en las práctica de todas las diligencias antes detalladas de los dos oficiales Welfried Jeltsch y Jürgen Brandt de la Brigada de Investigación Criminal del Land de Renania del Norte de Westfalia con las limitaciones impuestas para tales efectos.

Igualmente **DECLARA NO VIABLE** el diligenciamiento de las presentes comisiones rogatorias en lo referente a:

Allanamiento, registro y aprehensión referentes al banco ABN-AMRO y a todas sus sucursales en Panamá, dirigidas a un sinnúmero de cuentas, subcuentas, existentes o caducadas, de cuentas corrientes, de ahorro, de depósito a plazo fijo, de crédito, actas de crédito completas (con balances, análisis, observaciones internas), documentaciones de aperturas de cuentas, depósitos de

títulos-valores, operaciones de pagos a nombre de lo inculpados o de éstos con terceros ... y en caso de salidas de cheques son necesarias también fotocopias del dorso de los cheques, ... además "el registro se refiere también a la caja fuerte alquilada a los inculpados (HELMUT GOTTWALD, HAGEN SCHWARZE Y JÜRGEN HACKTEIN) y a las compañías Dolphin, Western Trust Corporation, Memphis Introducing Brokerage y la Metro Broker Incorporated".

Allanamiento, registro y aprehensión de documentos de la firma de abogados Mossack, Fonseca und Co.

Como resultado de lo anterior, ORDENA que las mismas sean remitidas al PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, con el propósito de que designe al funcionario de instrucción encargado de el diligenciamiento de la presente solicitud de asistencia en asuntos jurídicopenales; además ESTABLECE que, en el evento de que se incurra en gastos, éstos deben ser cubiertos por el Estado Requiriente de la presente petición, los cuales se detallan a continuación:

a) Los honorarios de peritos.
b) Los gastos de traducción y transcripción.
c) Los costos razonables para localizar, reproducir y transportar a la autoridad judicial del Estado Requiriente, los documentos o registros especificados en esta solicitud.
d) Gastos de viaje e incidentales de testigos en el evento de que viajen al Estado Requiriente, incluyendo aquellos de los funcionarios que lo acompañen.

Una vez realizada la gestión REMÍTASE a la Cancillería panameña para los ulteriores trámites diplomáticos necesarios.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA

ELEANOR WAGNER DE EVANS, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO DICTADA POR LA CORTE DEL DISTRITO DEL CONDADO DE BELL TEXAS DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LA CUAL SE DETERMINA EL DIVORCIO ENTRE ELEANOR WAGNER DE EVANS Y ENRIQUE FLORENTINO EVANS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

En la resolución de fecha 28 de marzo de 1996 que declara ejecutable de sentencia extranjera de divorcio promovida por el licenciado LUIS GÓMEZ, la parte resolutiva incurre en un error de omisión de cita de la fecha de la sentencia de divorcio en donde dice:

"En consecuencia, **LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES,** administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, **DECLARA EJECUTABLE** en la República de Panamá la sentencia de divorcio proferida por la Corte de Distrito del Condado de Bell, Texas, Estados Unidos de América, mediante la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial entre **ELEANOR WAGNER** y **ENRIQUE FLORENTINO EVANS.**

Se AUTORIZA a la Dirección del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcios en los términos de la presente resolución.

Por lo tanto y en atención a lo dispuesto en el artículo 986 del Código Judicial, párrafo tercero, se modifica y queda de la siguiente manera:

"En consecuencia, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia de divorcio N° 114-492-B, proferida por la Corte de Distrito del Condado de Bell, Texas, Estados Unidos de América, de fecha 21 de mayo de 1987, mediante la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial entre ELEANOR WAGNER y ENRIQUE FLORENTINO EVANS.

Se AUTORIZA a la Dirección del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcios en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

BRENDA I. GILLIAM, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO DICTADA POR LA CORTE SUPERIOR DE CALIFORNIA, CONDADO DE LOS ÁNGELES, EL 5 DE JUNIO DE 1991. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DOS (2) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La licenciada Alexia Ma. Ogando C., actuando en representación de la señora BRENDA I. GILLIAM., formuló solicitud ante esta Sala Cuarta de la Corte Suprema para que en su nombre y representación solicite el reconocimiento y ejecución en Panamá de la sentencia de 5 de junio de 1991, caso N° SOD 110354 expedida por la Corte Superior de California, Condado de Los Ángeles, mediante la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial de Brenda I. Gilliam y Lesley L. Gilliam.

La peticionaria apoya su solicitud en los siguientes hechos:

"PRIMERO: Que la señora Brenda I. Gilliam y el señor Lesley L. Gilliam están formalmente divorciados mediante sentencia expedida por la Corte Superior de California, Condado de Los Ángeles, de 05 de junio de 1991.

SEGUNDO: Que el demandado fue notificado personalmente de la demanda de divorcio, tal como consta en el extracto de la sentencia que adjuntamos con el escrito, estando presente en la Corte.

TERCERO: Que mi poderdante, Brenda I.Gilliam, desea inscribir dicho divorcio en el Registro Civil, y así cumplir con las leyes panameñas para tales efectos."

La apoderada judicial de Brenda I. Gilliam adjuntó a la solicitud de ejecución de sentencia de divorcio, copia autenticada de la misma, debidamente traducida al español por intérprete público autorizado, e igualmente presentó el certificado de matrimonio emitido por la Dirección General de Registro Civil de Panamá, el cual hace constar la existencia del vínculo matrimonial vigente en la República entre Brenda I. Gilliam y Lesley L. Gilliam.

Una vez admitida la solicitud presentada, se corrió traslado al señor Procurador de la Nación para emitir concepto. En su Vista N° 30 de 16 de julio de 1996 concluyó que "... la sentencia cuyo reconocimiento y ejecución se pretende cumple las exigencias normativas, razón por la cual conceptuamos que

debe accederse a la petición que origina el presente proceso de exequátur".

Corresponde a esta Corporación examinar si la sentencia objeto de esta solicitud cumple con los requisitos establecidos en el artículo 1409 del Código Judicial para que se declare su ejecutabilidad en Panamá.

De las pruebas incorporadas al expediente se observa que el matrimonio fue efectuado el 17 de mayo de 1985 ante el Juzgado Cuarto Municipal- Chorrillo, de la República de Panamá, y su disolución se llevó a cabo en el extranjero, ante el tribunal competente conforme a las normas del Derecho Internacional, sin vulnerar lo establecido en la legislación nacional.

Por otro lado, se observa que la sentencia extranjera es resultado del ejercicio de una pretensión personal de efectos lícitos en nuestro país, está debidamente traducida, autenticada y no violenta los principios del Derecho Internacional Privado reconocidos por nuestro derecho. En cuanto a la rebeldía, no se configura, pues, el demandado fue notificado personalmente.

Por todo lo antes expuesto considera la Sala que la solicitud de ejecución de sentencia es viable conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial.

En consecuencia, la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia de divorcio proferida por la Corte Superior de California, Condado de Los Ángeles, Estados Unidos de América el 05 de junio de 1991, caso N° SOD 110354, mediante la cual se declaró disuelto el vínculo matrimonial que unía a BRENDA I. GILLIAM y LESLEY L. GILLIAM, y AUTORIZA a la Dirección del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcios en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

STEPHEN CHARLES BUDD, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA DE DIVORCIO DICTADA EL 19 DE MARZO DE 1996, DEL ESTADO DE NUEVO MÉXICO, CONDADO DE MORA, DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, MEDIANTE EL CUAL SE DISUELVE EL VÍNCULO MATRIMONIAL CON LA SEÑORA NATALIE ANN ROMERO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, CINCO (5) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

STEPHEN CHARLES BUDD, a través de su Representante Legal el licenciado Ernesto Castillo Almengor, ha presentado ante la Sala Cuarta de la Corte Suprema, solicitud para que sea reconocida en la República de Panamá, la sentencia de divorcio 96-09 DR, dictada por la Juez del Tribunal del Estado de Nuevo México, Condado de Mora, Estados Unidos de Norteamérica, mediante la cual se disuelve el vínculo matrimonial entre el peticionario y la señora **NATALIE ANN ROMERO**.

ANTECEDENTES DEL CASO

Entre los antecedentes del caso se cuentan que la señora Stephen Charles Budd y la señora Natalie Ann Romero, contrajeron matrimonio el día 15 de julio de 1994, en el Juzgado Quinto Municipal de Ancón, República de Panamá. Posteriormente, en fecha 20 de marzo de 1996, La Corte Distrital del Condado de Mora, Estado de Nuevo México, dicta sentencia mediante la cual se disuelve el

vínculo matrimonial que unía a los señores Budd-Romero.

La referida solicitud de reconocimiento y ejecución de sentencia extranjera se fundamenta, en la existencia de la mencionada sentencia de divorcio extranjera dictada por el Condado de Mora, Estado de Nuevo México.

OPINIÓN DEL PROCURADOR

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1410 del Código Judicial, se le corrió traslado del presente negocio al Procurador General de la Nación para que emitiera concepto.

El Procurador General de la Nación en Vista N° 32 de 19 de julio de 1996, visible de foja 12 a 13 del expediente, señaló que la presente solicitud de homologación de sentencia extranjera cumple con los requisitos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico, por lo cual debe accederse a lo solicitado.

DECISIÓN DE LA SALA

Cumplido con el procedimiento establecido en el Código Judicial para la homologación de sentencias extranjeras, la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, pasa a conocer la solicitud presentada con la finalidad de examinar si la sentencia de fecha 20 de marzo de 1996, puede reconocerse en la República de Panamá.

La Sala se manifiesta de acuerdo con lo expresado por el señor Procurador, en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1409 del código Judicial, ya que se trata de una pretensión personal. De igual forma, la Sala manifiesta que el cónyuge demandado ha sido debidamente notificados de la demanda, lo cual se hace patente a foja 17 del expediente, cuando en el punto 4 de la sentencia de divorcio establece **"4. Las propiedades conjuntas han sido divididas entre las partes a su entera satisfacción, de acuerdo con lo estipulado en el Acuerdo de Separación, con fecha 18 de enero de 1996."**

Por lo tanto, tomado en consideración lo expuesto en líneas anteriores, esta Magistratura es de la consideración que puede declararse ejecutable la sentencia de divorcio en análisis.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia de divorcio N° 96-09-DR dictada por la Corte Distrital del Condado de Mora, Estado de Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, de fecha 20 de marzo de 1996 mediante la cual se disuelve el vínculo matrimonial de fecha 15 de julio de 1994, que unía a los señores STEPHEN BUDD y a NATALIE ANN ROMERO.

Se autoriza a la Dirección General del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcios en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MARÍA DE LOS ÁNGELES BARÉS ALBA DE PERERA, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1987, PROFERIDA POR EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRABAJO Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO DE GUÁRICO, EN LA CUAL SE DISUELVE EL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LA UNÍA AL SEÑOR GUILLERMO PERERA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS

NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El licenciado Jorge Luis Pulido, actuando en representación de la señora María de los Ángeles Barés Alba de Perera, formuló solicitud ante esta Sala Cuarta de la Corte Suprema para que se declare ejecutable en Panamá la sentencia de 23 de noviembre de 1987, expedida por el Juzgado Primero de primera Instancia en lo Civil Mercantil del Trabajo y del Tránsito de la Circunscripción judicial del Estado Guarico, San Juan de los Morros, de la República Venezuela, en la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial de Guillermo Perera contra María de los Ángeles Bares Alba de Perera.

El peticionario apoya su solicitud en los siguientes hechos:

"**PRIMERO**: Que la sentencia de 23 de noviembre de 1987, fue dictada en virtud de la Demanda de Divorcio propuesta por el ciudadano Guillermo Enrique Perera Zubillaga, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad personal N° 3-717-461, con domicilio en la ciudad de Calabozo, Estado Guárico, contra María de los Ángeles Barés Alba.

SEGUNDO: que la aludida sentencia judicial que declaró con lugar la demanda de divorcio propuesta por el ciudadano Guillermo Enrique Perera Zubillaga contra la ciudadana María de los Ángeles Barés de Perera fue personalmente notificada a la demandada, y lo fue por el Tribunal 1° de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado de Guárico.

TERCERO: Que la obligación para cuyo cumplimiento se ha procedido es lícita en la República de Panamá.

CUARTO: Que la aludida Sentencia Judicial está debidamente autenticada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Departamento de Consular y Legalizaciones de Panamá.

QUINTO: Por las consideraciones antes expuestas y como quiera que se cumplen con los requisitos de Ley, solicitamos a la Honorable Corte Suprema de Justicia, previo los trámites legales dicte Resolución donde decrete que se reconozca la Sentencia Extranjera, para que se proceda a su ejecución en Panamá."

El apoderado judicial de María de los Ángeles Barés de Perera, adjuntó a la solicitud de ejecución de sentencia de divorcio, copia autenticada de la misma, e igualmente presentó el certificado de matrimonio emitido por la Dirección General de Registro Civil de Panamá, el cual hace constar la existencia del vínculo matrimonial vigente en la República entre GUILLERMO PERERA ZUBILLAGA y MARÍA DE LOS ÁNGELES BARES ALBA.

Una vez admitida la solicitud presentada, se corrió traslado al señor Procurador de la Nación para emitir concepto. En su Vista N° 33 de 19 de julio de 1996, concluye que "la relación precedente de aspectos examinados nos hacen pensar que la solicitud de exequátur cumple los requisitos que exige la ley ... Conceptuamos, pues, que debe accederse a lo pedido en este negocio".

Corresponde a esta Corporación examinar si la sentencia objeto de esta solicitud cumple con los requisitos establecidos en el artículo 1409 del Código Judicial para que se declare su ejecutabilidad en Panamá.

De las pruebas incorporadas al expediente se observa que el matrimonio fue efectuado el 24 de febrero de 1977 ante el Juzgado Tercero Municipal del Distrito de Panamá y su disolución se llevó a cabo en el extranjero, ante el tribunal competente conforme a las normas del Derecho Internacional, sin vulnerar lo

establecido en la legislación nacional.

Por otro lado, se observa que la sentencia extranjera es resultado del ejercicio de una pretensión personal de efectos lícitos en nuestro país, se encuentra autenticada y no violenta los principios del Derecho Internacional Privado reconocidos por nuestro derecho.

Advierte la Sala que la sentencia de divorcio fue dictada en ausencia de la demandada, señora María de los Ángeles Barés Alba de Perera, a pesar de que su apoderado judicial manifiesta en el hecho segundo de la presente solicitud que su poderdante fue notificada personalmente, no obstante, como es la demandada quien solicita la ejecución de la sentencia en cuestión, razón por la cual, esta Superioridad considera que esa situación no constituye un impedimento para declarar ejecutable la sentencia en estudio, al tenor del numeral 2 del artículo 1409 del Código Judicial.

Por todo lo antes expuesto, considera la Sala que la solicitud de ejecución de sentencia es viable conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial.

En consecuencia, la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia de divorcio proferida por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil Mercantil del Trabajo y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Guarico, San Juan de los Morros, República de Venezuela, el 23 de noviembre de 1987, mediante la cual se declaró disuelto el vínculo matrimonial que unía a MARÍA DE LOS ÁNGELES BARÉS ALBA DE PERERA y GUILLERMO PERERA ZUBILLAGA, y AUTORIZA a la Dirección del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcios en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DENISE ELIZABETH MANFREDO LEE, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO PROFERIDA POR LA CORTE SUPREMA DE CALIFORNIA, CONDADO DE MONTERREY DEL DÍA 7 DE ENERO DE 1992, EN VIRTUD DE LA CUAL DECLARA DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL EXISTENTE CON EL SEÑOR FRANK PETER. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

DENISE ELIZABETH MANFREDO de PETER mediante su apoderada legal, la Licda. ALEXIA MARÍA OGANDO, solicita a la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema el reconocimiento y ejecución de la sentencia de divorcio dictada por la Corte Superior de California, Condado de Monterrey, Estados Unidos, el día 7 de enero de 1992 con el objetivo que se declare disuelto el vínculo matrimonial entre la señora DENISE ELIZABETH MANFREDO de PETER y el señor FRANK PETER HOHMEISTER.

El peticionario fundamenta su solicitud en base a los siguientes hechos:

> **"PRIMERO**: La señora DENISE ELIZABETH MANFREDO de PETER y el señor FRANK PETER HOHMEISTER están formalmente divorciados mediante Sentencia expedida por la Corte Superior de California, Condado de Monterrey, de 7 de enero de 1992.

> **SEGUNDO:** Que el demandado fue notificado del proceso de divorcio, tal como se desprende del extracto de la sentencia que adjuntamos con el escrito.
>
> **TERCERO:** Que mi poderdante, DENISE ELIZABETH MANFREDO DE PETER, desea inscribir dicho divorcio en el Registro Civil, y así cumplir con la leyes panameñas para tales efectos".

Además a la solicitud de ejecución de sentencia de divorcio se adjuntaron los siguientes documentos: Copia de la Sentencia de 07 de enero de 1992, expedida por la Corte Superior de California, Condado de Monterrey, Estados Unidos debidamente autenticada y traducida al idioma español y el certificado de matrimonio emitido por la Dirección del General del Registro Civil de Panamá.

Admitida la solicitud presentada ante esta Corporación, se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación, quien en su Vista N° 35 de 9 agosto de 1996 señala lo siguiente:

> "Que la sentencia cuyo reconocimiento se pretende ha sido dictada como consecuencia de una pretensión personal".
>
> "Dicha sentencia accedió a las pretensiones de los esposos, quienes consintieron el fallo o decisión disolutoria del matrimonio".
>
> "La obligación o el negocio jurídico implícito y al cual accede la sentencia extranjera es lícita en Panamá".
>
> "Se observa que la copia de la sentencia es auténtica y está traducida al idioma español".
>
> "Establecidos los supuestos que configura la ley, conceptuamos que debe accederse a la presente petición de exequátur".

Observa la Sala, en cuanto a la licitud de la sentencia que nos ocupa que efectivamente, la misma es conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial, ya que, dicha sentencia fue dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, no fue proferida en rebeldía puesto que la parte demandada fue notificada. Se aprecia, además, que toda la documentación proveniente del extranjero se encuentra debidamente autenticada por las autoridades consulares correspondientes, como también se encuentra traducida a nuestro idioma oficial, requisitos éstos necesarios para que se declare su ejecutabilidad en la República.

Por lo antes expuesto, y en cumplimiento con lo establecido en los artículos 1409 y 1410 del Código Judicial, procede la Sala a declarar ejecutable la sentencia.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la Sentencia de Divorcio de 7 de enero de 1992, expedida por la Corte Suprema de California, Condado de Monterrey, Estados Unidos de América, mediante la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial celebrado el 6 de marzo de 1982 en la República de Panamá entre la señora DENISE ELIZABETH MANFREDO de PETER y el señor FRANK PETER HOHMEISTER.

Se autoriza a la Dirección General del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcios en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

VIANKA ESTELA CEDEÑO CÓRDOBA, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO DE FECHA DE 5 DE MAYO DE 1995 EMITIDA POR LA CORTE SUPERIOR DEL ESTADO DE GEORGIA, ESTADOS UNIDOS, EN LA CUAL SE DECLARÓ LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE UNÍA A ÉSTA CON GREGORY KEITH GREEN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

VIANKA ESTELA CEDEÑO CÓRDOBA mediante su apoderado legal, el licenciado JORGE COSTARANGOS G., solicita a la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema el reconocimiento y ejecución de la sentencia de divorcio dictada por la Corte Superior del Condado Chatham, Estado de Georgia, Estados Unidos, el día 5 de mayo de 1995 con el objetivo que se declare disuelto el vínculo matrimonial entre la señora VIANKA ESTELA CEDEÑO CÓRDOBA y el señor GREGORY KEITH GREEN.

La peticionaria fundamenta su solicitud en base a los siguientes hechos:

> "**PRIMERO:** Mediante sentencia del 5 de mayo de 1995, la Corte Superior del Condado Chatham, Estado de Georgia, Estados Unidos de América, disolvió el vínculo matrimonial que unía a Vianka Cedeño y Gregory Keith Green.
>
> **SEGUNDO:** La sentencia ha sido dictada a consecuencia del ejercicio de una pretensión personal.
>
> **TERCERO:** La demandada fue notificada de la demanda mediante publicación, sin embargo, es precisamente la demandada la que solicita la ejecución de la sentencia por lo que procede su ejecución.
>
> **CUARTO:** La sentencia decreta el divorcio lo cual es lícito en Panamá.
>
> **QUINTO:** La copia de la sentencia ha sido debidamente autenticada según consta mediante los sellos del Consulado de Panamá en Washington D.C. y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. Se adjuntó además la correspondiente traducción mediante Traductor Público Autorizado".

Además a la solicitud de ejecución de sentencia de divorcio se adjuntaron los siguientes documentos: Copia de la Sentencia de 05 de mayo de 1995, expedida por la Corte Superior del Condado Chatham, Estado de Georgia, Estados Unidos, debidamente autenticada y traducida al idioma español y el certificado de matrimonio emitido por la Dirección del General del Registro Civil de Panamá.

Admitida la solicitud presentada ante esta Corporación, se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación, quien en su Vista N° 37 de 14 agosto de 1996 señala lo siguiente:

> "El negocio jurídico del cual es resultante la sentencia cuya ejecución se solicita es lícito en Panamá, puesto que no violenta el ordenamiento jurídico de este país"
>
> "La copia de la sentencia traída a los autos ha sido autenticada y traducida al idioma español".
>
> "Frente a los factores reseñados es válido considerar que se ha cumplido con los requisitos de ley, por lo cual conceptuamos que debe accederse a la presente petición".

Observa la Sala, en cuanto a la licitud de la sentencia que nos ocupa que efectivamente, la misma es conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial, ya que, dicha sentencia fue dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, no fue proferida en rebeldía puesto que la parte demandada fue notificada mediante publicación y es la misma la que solicita en esta ocasión la ejecución de la presente sentencia extranjera en nuestro territorio lo que evidencia que ésta tuvo un conocimiento pleno sobre el proceso que fue instaurado en su contra. Se aprecia, además, que toda la documentación proveniente del extranjero se encuentra debidamente autenticada por las autoridades consulares correspondientes, como también se encuentra traducida a nuestro idioma oficial, requisitos éstos necesarios para que se declare su ejecutabilidad en la República.

Por lo antes expuesto, y en cumplimiento con lo establecido en los artículos 1409 y 1410 del Código Judicial, procede la Sala a declarar ejecutable la sentencia.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la Sentencia de Divorcio de 5 de mayo de 1995, expedida por la Corte Superior del Condado Chatham, Estado de Georgia, Estados Unidos de América, mediante la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial celebrado el 13 de agosto de 1990 en la República de Panamá entre la señora VIANKA ESTELA CEDEÑO CÓRDOBA y el señor GREGORY KEITH GREEN.

Se autoriza a la Dirección General del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcios en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LIBRADA CORTEZ, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA DE DIVORCIO DICTADA POR LA THE CIVIL INSTRICTIT COURT FOR THE PARISH OF NEW ORLEANS, N° 91-13108 DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DECRETADA EL 17 DE JUNIO DE 1991. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La firma forense Perea Arrieta & Chiari, actuando en nombre y representación de la señora LIBRADA CORTEZ, formuló solicitud ante esta Sala Cuarta de la Corte Suprema para que se declare ejecutable en Panamá la sentencia de divorcio, proferida por el Civil District Court for the Parish of Orleans, State of Louisiana, N° 91-13108 de Estados Unidos de América, dictada el 17 de julio de 1991, además solicitan la inscripción y reconocimiento de el matrimonio de su representada, celebrado el 13 de julio de 1992 ante el Judge of First City Court de la ciudad de New Orleans, Estado de Louisiana, Estados Unidos de América.

El peticionario fundamenta su solicitud en los siguientes hechos:

"**PRIMERO**: La señora Librada Cortez que representamos, ciudadana panameña, residente en el exterior, tramitó y obtuvo Sentencia de Divorcio proferida por el Civil District Court for the Parish of New Orleans, 91-13108 de Estados Unidos de América, decretado el 17 de junio de 1991 (si);

> **SEGUNDO**: La señora Librada Cortez que representamos, de igual manera contrajo, con posterioridad, matrimonio en la precitada ciudad de New Orleans, Louisiana ante el Judge of First City Court de la ciudad de New Orleans, Estado de Louisiana, Estados Unidos de América, el día 13 de julio de 1992;
>
> **TERCERO**: La señora Librada Cortez desea, como ciudadana nacional panameña, que tales instrumentos jurídicos sobre su estado civil, sean inscritos y mantengan todos sus efectos legales de reconocimiento en la República de Panamá."

La apoderada judicial de la señora LIBRADA CORTEZ adjuntó a la solicitud de ejecución de sentencia de divorcio, copia autenticada de la misma, debidamente traducida al español por intérprete público autorizado, e igualmente presentó el certificado de matrimonio emitido por la Dirección General de Registro Civil de Panamá, el cual hace constar la existencia del vínculo matrimonial vigente en la República entre Librada Cortez Caballero y Ardless Benjamin Hawk.

Se corrió traslado al señor Procurador de la Nación para emitir concepto una vez admitida la solicitud presentada. En su Vista N° 34 de 9 de agosto de 1996, consideró que "a nuestro juicio, la inclusión de la segunda pretensión, por así denominarlo, es asunto extraño al proceso de exequátur, donde se impetra el reconocimiento de actos jurisdiccionales (sentencias) y laudos pronunciados en el extranjero y no de meros actos jurídicos. Luego en nuestro concepto, es factible que la Sala acceda a lo pedido en cuanto al reconocimiento y ejecución de la sentencia de divorcio extranjera y se abstenga de pronunciarse respecto al pretendido reconocimiento del matrimonio celebrado por la solicitante en el exterior".

La Sala comparte el criterio antes expuesto por el señor Procurador de la Nación, toda vez que, a través de la institución del exequátur, se persigue, verificar la resolución extranjera (sentencia o toda resolución que le pone término a un proceso) para que sea reconocida y ejecutada en el territorio nacional, y no el reconocimiento de otro tipo de actos jurídicos como es el caso del matrimonio, al cual hace referencia la apoderada judicial, trámite éste que debe ser surtido directamente en el Registro Civil previa inscripción de la sentencia de divorcio extranjera.

Corresponde a esta Corporación examinar si la sentencia de divorcio objeto de esta solicitud cumple con los requisitos establecidos en el artículo 423 de la Ley 15 de 26 de septiembre de 1928 (Código de Bustamante) y en el artículo 1409 del Código Judicial para que se declare su ejecutabilidad en Panamá.

De las pruebas incorporadas al expediente se observa que el matrimonio fue efectuado el 24 de febrero de 1989, ante el Juzgado Primero Municipal - Chorrillo, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, su disolución se llevó a cabo en el extranjero, ante el tribunal competente conforme a las normas del Derecho Internacional, sin vulnerar lo establecido en la legislación nacional.

Por otro lado, se observa que la sentencia extranjera está debidamente traducida, autenticada y no violenta los principios del Derecho Interno, además, no consta que la sentencia fue dictada en rebeldía.

Por todo lo antes expuesto, considera la Sala que la solicitud de ejecución de la sentencia de divorcio es viable conforme a lo establecido en los artículos 1409 del Código Judicial y 423 del Código de Bustamante.

En consecuencia, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia de divorcio N° 91-13108, proferida por la Civil District Court for the Parish of Orleans, Estado de Louisiana, Estados Unidos de América, el 17 de julio de 1991, mediante la cual se declaró disuelto el vínculo matrimonial que unía a LIBRADA HAWK y ARDLESS BENJAMIN HAWK, y AUTORIZA a la Dirección del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcios en los términos de la presente

resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

VIANNEY VELÁZQUEZ QUESADA, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO PROFERIDA POR EL CIRCUITO 11AVO. CIRCUITO JUDICIAL DEL CONDADO DE DADE, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS EMITIDA EL 9 DE MARZO DE 1994, EN VIRTUD DE LA CUAL DECLARA DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL EXISTENTE CON EL SEÑOR HENRI TOLBERT. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

VIANNEY VELÁZQUEZ QUESADA mediante su apoderada legal, la licenciada CARMEN CARRASQUILLA CARRERA, solicita a la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema el reconocimiento y ejecución de la sentencia de divorcio dictada por el Undécimo Circuito Judicial, del Condado de Dade, Florida, Estados Unidos, emitida el día 9 de marzo de 1994 con el objetivo que se declare disuelto el vínculo matrimonial entre la señora VIANNEY VELÁZQUEZ QUESADA de TOLBERT y el señor HENRY HUBERT TOLBERT.

La peticionaria fundamenta su solicitud con base en los siguientes hechos:

"**PRIMERO**: VIANNEY VELÁZQUEZ QUESADA, panameña, con cédula de identidad personal N° 8-230-343 y HENRI TOLBERT, estadounidense, con pasaporte N° 20967022, contrajeron matrimonio el día 19 de febrero de 1987 ante el Juzgado Tercero Municipal de Panamá, el cual se encuentra debidamente inscrito y vigente al tomo 230 de matrimonios de la Provincia de Panamá, asiento 12 del Registro Civil.

SEGUNDO: Posterior al matrimonio los esposos TOLBERT VELÁZQUEZ trasladaron su domicilio al Condado de Dade, Florida, Estados Unidos de América.

TERCERO: Con el transcurrir de los años dentro del matrimonio ente VIANNEY VELÁZQUEZ QUESADA y HENRI TOLBERT, se dieron situaciones irreparables que rompieron la armonía del mismo, por lo cual la señora VIANNEY VELÁZQUEZ QUESADA presentó solicitud de disolución de matrimonio en la Corte del 11avo (sic). Circuito Judicial, en y para el Condado de Dade, Florida, Estados Unidos.

CUARTO: En virtud de la solicitud de disolución de matrimonio presentada por mi poderdante, ambas partes concurrieron al proceso de divorcio y en audiencia pública renunciaron al período de 10 días dentro del cual se registra cualquiera objeción al informe y a las recomendaciones del Maestro General.

QUINTO: El 9 de marzo de 1994 la Corte del Circuito del 11avo (sic). Circuito Judicial, en y para el Condado de Dade, Florida, emitió la sentencia final de disolución de matrimonio entre VIANNEY TOLBERT y HENRY TOLBERT".

Además a la solicitud de ejecución de sentencia de divorcio se adjuntaron los siguientes documentos: Copia de la Sentencia de 09 de marzo de 1994, expedida por la Corte del Undécimo Circuito Judicial, en y para el Condado de Dade, Florida, Estados Unidos debidamente autenticada y traducida al idioma español y

el certificado de matrimonio emitido por la Dirección del General del Registro Civil de Panamá.

Admitida la solicitud presentada ante esta Corporación, se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación, quien en su Vista N° 36 de 12 agosto de 1996 señala lo siguiente:

> "La lectura de las piezas y copias traídas a los autos nos coloca en posición de dar por establecido que la causa decidida por la sentencia extranjera fue dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal; que la obligación cuyo cumplimiento se procedió es lícita en Panamá y que la copia de la Sentencia es auténtica y aparece debidamente traducida al idioma español".
>
> "Se estructuran, pues, los presupuestos del artículo 1409 del Código Judicial, razón por la cual conceptuamos que debe accederse a la presente petición de reconocimiento y ejecución de sentencia extranjera".

Observa la Sala, en cuanto a la licitud de la sentencia que nos ocupa que, efectivamente, es conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial, ya que, dicha sentencia fue dictada como consecuencia del ejercicio de una acción personal, no fue proferida en rebeldía, puesto que la parte demandada fue notificada. Se aprecia, además, que toda la documentación proveniente del extranjero se encuentra debidamente autenticada por las autoridades consulares correspondientes, y se encuentra traducida a nuestro idioma oficial, requisitos éstos necesarios para que se declare su ejecutabilidad en la República.

Por lo antes expuesto, y en cumplimiento con lo establecido en los artículos 1409 y 1410 del Código Judicial, procede la Sala a declarar ejecutable la sentencia.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la Sentencia de Divorcio de 9 de marzo de 1994, expedida por la Corte del Undécimo Circuito Judicial, Condado de Dade, Florida, Estados Unidos de América, mediante la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial celebrado el 19 de febrero de 1987 en la República de Panamá, entre la señora VIANNEY VELÁZQUEZ QUESADA de TOLBERT y el señor HENRY HUBERT TOLBERT.

Se autoriza a la Dirección General del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcios en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTOS

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO CIVIL N° 2 DEL TRIBUNAL DEL DISTRITO DE TOKIO, JAPÓN, POR LA CUAL SE REQUIERE QUE POR CONDUCTO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES PANAMEÑAS, SE NOTIFIQUE A LA COMPAÑÍA, L. D. K. (TONG) INTERNATIONAL, INC. S. A.; DE LA DECISIÓN DE PROCEDER AL REMATE DE LOS BIENES INMUEBLES QUE SE LISTAN EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTO A LA SOLICITUD. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, CINCO (5) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, a través de la Dirección General de Política Exterior, ha remitido a la Sala Cuarta de Negocios Generales, de la Corte Suprema de Justicia, exhorto librado por el Juzgado Civil 21 del Tribunal del Distrito de Tokyo, Japón (encargado de remates públicos de Tercer Turno).

La diligencia solicitada por el Juzgado de Tokyo es "que se notifique a la Compañía L. D. K. (Tong) International, Inc. S. A., localizable en el Edificio República, Piso 15, Vía España y Calle Colombia, Ciudad de Panamá, de la decisión de proceder al remate de los bienes inmuebles que se detallan en documentos adjuntos".

De acuerdo con el Código Judicial en su artículo 101 numeral 3, le corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales la función de "recibir los exhortos y Comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe cumplirlo".

Seguidamente, procede el tribunal a verificar la existencia de convenios internacionales que rijan a ambas naciones. Observa la Sala, que tanto el Estado panameño, como el Estado Japonés, están actualmente adscritos al Convenio de la Haya, concertado el 5 de octubre de 1961, Ley de la República N° 6 de 25 de junio de 1990 (publicada en la Gaceta Oficial N° 21.571 de 3 de julio de 1990). Este Convenio suscrito el 5 de octubre de 1961, en sus artículos 2 y 3 establece lo siguiente:

> "Artículo 2: Cada Estado contratante eximirá de la legalización a los documentos a los que se apliquen el presente convenio y que deberán ser presentados en su territorio. La legalización, en el sentido del presente convenio, sólo cubrirá la formalidad por la que los agentes diplomáticos o consulares del país en cuyo territorio el documento deba surtir efecto, certifiquen la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre que el documento ostente."
>
> "Artículo 3: La única formalidad que podrá ser exigida para certificar la autenticidad de la firma, el carácter con que ha actuado el signatario del documento, y de corresponder la identidad del sello o del timbre que lleva el documento, será una anotación que deberá ser hecha por la autoridad competente del Estado en el cual se originó el documento, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.
>
> Sin embargo, la formalidad mencionada en el párrafo precedente no podrá exigirse cuando las leyes, reglamentos o las costumbres vigentes en el Estado en el que el documento deba surtir efecto, o un acuerdo entre dos o más Estados contratantes, la rechacen, la simplifiquen o eximan al documento del requisito de la legalización."

Se colige palmariamente de los artículos antes transcritos que, resulta obligatorio el cumplimiento de la formalidad de la "**acotación o apostilla**" como única formalidad exigida y aplicable en todo documento público proveniente del extranjero, la cual se tiene que surtir en el Estado requirente.

La sala observa que en el presente exhorto en cuestión no se aprecia el sello de la apostilla o acotación que legaliza los documentos expedidos en el Estado requirente, siendo éste un requisito indispensable para declarar viable un exhorto o carta rogatoria, pues su cumplimiento encierra la presunción de que los documentos han sido expedidos conforme a la ley local del país que emitió dichos documentos.

Los señalamientos que preceden conducen a esta Superioridad a considerar que no es posible acceder a lo impetrado en la presente oportunidad.

En consecuencia, la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE el diligenciamiento en el territorio nacional del exhorto

librado por el Juzgado Civil N° 21 del Tribunal de Distrito de Tokyo, Japón (encargado de remates públicos de Tercer Turno) y ORDENA que se remita el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores para que proceda de acuerdo a los convenios internacionales relativos a esta materia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE ASISTENCIA LEGAL LIBRADA POR EL TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DISTRITO NORTE, DENTRO DEL PROCESO DE ACCIÓN CIVIL NÚMERO 95-CV-0923-JTC SUBROGADA POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA USO Y BENEFICIO DE SIEMENS ENERGY AND AUTOMATION, INC. CONTRA INGENIERÍA DE DESARROLLO Y ELECTRICIDAD, S. A. (INDELSA), ASEGURADORA MUNDIAL, S. A. Y BANCO DE PANAMÁ, S. A. COMPAÑÍAS MERCANTILES EXTRANJERAS PARA NOTIFICAR A MARTA LORENA DE BERNAL, PRESIDENTE O GUSTAVO ADOLFO BERNAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por conducto de la Directora General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, ha ingresado a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, exhorto librado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de América, Distrito Norte.

El mencionado Tribunal de Justicia solicita lo siguiente:

> "La pronta notificación judicial a los señores MARTA LORENA BERNAL, presidente, o GUSTAVO ADOLFO BERNAL, ingeniería Desarrollo y Electricidad, S. A. Apartado 551049, Paitilla, Panamá."

De acuerdo con el Código Judicial en su artículo 101 numeral 3, le corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia la función de recibir los exhortos y comisiones rogatorias librados por Tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe cumplirlo.

Procede la Sala, pues, a verificar la existencia de convenios internacionales que rijan a ambas naciones.

Observa la Sala Cuarta, que tanto la República de Panamá, como los Estados Unidos de América, están actualmente adscritos al Convenio de la Haya, concertado el 5 de octubre de 1961, Ley de la República N° 6 de 25 de junio de 1990 (publicada en la Gaceta Oficial N° 21.571 de 3 de julio de 1990) y a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, aprobada a través de la Ley N° 12 de 23 de Octubre de 1975 (publicada en la Gaceta Oficial N° 18.072 de 23 de abril de 1976).

El Convenio de la Haya suscrito el 5 de octubre de 1961, en sus artículo 2 y 3 establece lo siguiente:

> "Artículo 2: Cada Estado contratante eximirá de la legalización a los documentos a los que se apliquen el presente convenio y que deberán ser presentados en su territorio. La legalización, en el sentido del presente convenio, sólo cubrirá la formalidad por la que los agentes diplomáticos o consulares del país en cuyo territorio el documento deba surtir efecto, certifiquen la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre que el documento

ostente."

"Artículo 3: La única formalidad que podrá ser exigida para certificar la autenticidad de la firma, el carácter con que ha actuado el signatario del documento, y de corresponder la identidad del sello o del timbre que lleva el documento, será una anotación que deberá ser hecha por la autoridad competente del Estado en el cual se originó el documento, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.

Sin embargo, la formalidad mencionada en el párrafo precedente no podrá exigirse cuando las leyes, reglamentos o las costumbres vigentes en el Estado en el que el documento deba surtir efecto, o un acuerdo entre dos o más Estados contratantes, la rechacen, la simplifiquen o eximan al documento del requisito de la legalización."

Se colige palmariamente de los artículos antes transcritos, que al no encontrarse Panamá dentro de las excepciones señaladas en el párrafo segundo del artículo 3, resulta obligatorio el cumplimiento de la formalidad de la "**acotación o apostilla**" como única formalidad exigida y aplicable en todo documento público proveniente del extranjero, el cual es el caso del negocio que nos ocupa.

La Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias en su artículo VI suprime la exigencia de legalización "diplomática o consular", cuando los exhortos o cartas rogatorias se trasmitan por vía consular diplomática o por intermedio de la autoridad central, no obstante, es evidente, por lo expresado en párrafos precedentes, que este artículo no establece la exclusión de la formalidad exigida relativa al cumplimiento de la "apostilla", la cual se tiene que surtir en el Estado requiriente.

La Sala observa que en el presente exhorto no se aprecia el sello de la apostilla o acotación que legaliza los documentos expedidos en el Estado requiriente, siendo éste un requisito indispensable para declarar viable un exhorto o carta rogatoria, pues su cumplimiento encierra la presunción de que los documentos han sido expedidos conforme a la ley local del país que emitió dichos documentos.

Los señalamientos que preceden conducen a esta Corporación Judicial a considerar que no es posible acceder a lo impetrado en la presente oportunidad, toda vez que "las convenciones y tratados internacionales otorgan derechos e imponen obligaciones a las partes contratantes, preferentemente. Es una regla de conducta obligatoria para los Estados que los suscriben y ratifican. La teoría de la fuerza obligatoria de los pactos internacionales ha sido muy amplia y se ha orientado hacia los más variados criterios ..., pero la esencia de ellas es la afirmación del carácter obligatorio de los mismos, cualquiera que sea el fundamento que las informa" (Sepúlveda, César, Derecho Internacional, Editorial Porrúa, S. A., México, 1983, pág. 135).

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala Cuarta de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE el diligenciamiento en el territorio nacional, del exhorto librado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de América, Distrito Norte y ORDENA que se remita el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores para que proceda de acuerdo a los convenios internacionales relativos a esta materia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE CURRIDABAT, REPÚBLICA DE COSTA RICA, DENTRO DE LA SUMARIA 780-2-96 SEGUIDA CONTRA ROBERTO RODRÍGUEZ LOBO POR DELITO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE DROGAS COMETIDO EN PERJUICIO DE LA SALUD PÚBLICA, TRAMITADO EN LA AGENCIA FISCAL DE CURRIDABAT. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La Dirección de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha remitido a este despacho el cuaderno contentivo del exhorto librado por el Juzgado de Instrucción de Curridabat, República de Costa Rica, dentro de la Sumaria 780-2-96 seguida contra Roberto Rodríguez Lobo por el delito de Transporte Internacional de Drogas cometido en perjuicio de la Salud Pública, tramitado en la Agencia Fiscal de Curridabat.

La diligencia solicitada por las autoridades peruanas, está destinada a lograr lo siguiente:

> a. Que solicite a la Dirección Nacional de Migración y Naturalización información referente a los señores ANTONIO BRAND y un sujeto de nombre JOSÉ de apellido ignorado, ambos de nacionalidad guatemaltecas, ingresaron a la República de Panamá entre el 24 de mayo al 3 de junio de 1996, (información suministrada verbalmente por la señora Juez de Costa Rica), y en qué puesto de migración ingresaron si es por tierra o por avión y cuántos días permanecieron en este país.
>
> b. Que el Hotel Acapulco de esta ciudad certifique si entre los días citados se registraron en la habitación 304 (información suministrada verbalmente por la señora Juez de Costa Rica) de ser afirmativo que certifique sus nombres completos, y los números de los documentos con los que se registraron en el caso de que se les hubiese solicitado que los mostraran.
>
> En adición a lo anterior, señala que de no suministrar la administración del citado Hotel, se ruega se la solicite a la INTERPOL DE PANAMÁ, se sirva comunicar si en los últimos días del mes de mayo del año en curso, el señor ROBERTO RODRÍGUEZ LOBO descargó avena en un almacén denominado FEDURO localizable en Panamá.

De esta manera y luego de haber visto en que consiste el pedido hecho por las autoridades costarricenses, la Sala considera lo siguiente:

a) Que Costa Rica forma parte por adhesión de la Convención Interamericana sobre Exhorto o Cartas Rogatorias de la cual es signatario la República de Panamá.

b) Que a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de las atribuciones que le asigna el artículo 101, numeral 3 del Código judicial, le corresponde el conocimiento de estos asuntos para el cumplimiento y diligenciamiento en nuestro país.

c) Que en los casos en donde no existe una Convención entre los Estados, en acatamiento de las normas de Derecho Internacional, se aplica el principio de reciprocidad para los fines de una mejor cooperación procesal internacional.

d) Que cuando en el diligenciamiento de los exhortos o cartas rogatorias se realiza por la vía de la reciprocidad, es necesario que los documentos remitidos se encuentren debidamente autenticados por autoridad consular panameña acreditada en el país requiriente, que no sean violatorios del orden público interno, por lo que en relación a la autenticidad de los documentos, esto se puede cumplir de dos maneras a saber: Por la incorporación del sello de la

apostilla, cuya finalidad es la supresión del trámite y proceso de legalización, y cuyo propósito real se sitúa en la celeridad del tráfico y de los actos o documentos públicos extendidos por Estados Extranjeros para producir efectos en el territorio de otro Estado.

En el caso que nos ocupa, la Sala observa que el exhorto que se expide por el Juzgado de Instrucción de Curridabat, República de Costa Rica cumple con el requisito de la vía diplomática; no se observan vicios de carácter formal en su presentación, sin embargo en torno al objetivo de la diligencia solicitada cabe señalar que la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias en su artículo segundo manifiesta claramente lo siguiente: "La presente Convención se aplicará a los Exhortos o Cartas Rogatorias expedidos en actuaciones y procesos en materia civil o comercial por los órganos jurisdiccionales de uno de los Estados Partes en esta Convención, se desprende entonces de manera diáfana que los negocios penales no pueden tramitarse por esta vía de ninguna manera por lo que resulta difícil cumplir con las diligencias solicitadas por la hermana República de Costa Rica, por lo tanto se desestima pues este petitorio.

En adición a todo lo expuesto, esta Superioridad también aprovecha la oportunidad para puntualizar que, en reiteradas ocasiones se ha manifestado que en procesos de carácter penales o de familia que se gesten o lleven a cabo en otras jurisdicciones, y se necesite conocer informaciones que ayuden a los juzgadores a resolver dichas controversias las cuales reposan en nuestro país, si no se abre el proceso de que trata en nuestro país, y de acuerdo a las normas y procedimientos que rigen dentro de nuestro territorio; ni esta Superioridad, ni ningún Juez o Fiscal panameño podrá a través de la vía del exhorto o comisión rogatoria, otorgar las autorizaciones para que se efectúen diligencias de esta naturaleza.

En concordancia a la materia antes expuesta, podemos señalar que la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero no ha sido extendida por la República de Panamá a las materias de jurisdicción especial.

Esta Corporación Judicial en su afán de cooperar con las autoridades internacionales con el objetivo de lograr un frente común para combatir el flagelo de la drogas que afectan los diferentes territorios del mundo, considera que es viable acceder al presente suplicatorio, sólo en las solicitudes que no riñen con nuestro ordenamiento interno.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE el exhorto librado por el Juzgado de Instrucción de Curridabat, República de Costa Rica, dentro de la Sumaria 780-2-96 seguida contra Roberto Rodríguez Lobo por el delito de Transporte Internacional de Drogas cometido en perjuicio de la Salud Pública, tramitado en la Agencia Fiscal de Curridabat con respecto sólo a las diligencias que no vulneran nuestro ordenamiento jurídico y ORDENA que a la Dirección Nacional de Migración y Naturalización, informe sobre el movimiento migratorio de los señores ANTONIO BRAND y un sujeto de nombre JOSÉ de apellido desconocido, ambos de nacionalidad guatemalteca, entre 24 de mayo al 3 de junio del año que decurre; al Hotel Acapulco de la Ciudad de Panamá, los registros de sus clientes en el período comprendido del 24 de mayo al 3 de junio del presente año y a la Policía Técnica Judicial información sobre avena presumiblemente descargada en FEDURO por el señor ROBERTO RODRÍGUEZ LOBO.

Una vez realizadas las diligencias, REMÍTASE el presente negocio a la Cancillería panameña para su posterior devolución a las autoridades de la República de Costa Rica.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE SAN JOSÉ, REPÚBLICA DE COSTA RICA, DENTRO DEL PROCESO ABREVIADO DE DIVORCIO PROMOVIDO POR VICTORIA CAROLINA MORALES SUÁREZ CONTRA ANTONIO CAMBRA VEGA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por vía diplomática fue enviado el suplicatorio proveniente del Juzgado Primero de Familia de San José, República de Costa Rica, dentro del proceso de Abreviado de Divorcio y Subsidiaria de Separación Judicial, promovido por la señora VICTORIA CAROLINA MORALES SUÁREZ contra el señor JOSÉ ANTONIO VEGA. El mismo fue remitido por la Dirección General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores a esta Superioridad mediante Nota DGPE/DCL/1453/96 el 23 de julio de 1996.

El objetivo del presente exhorto es "notificar al señor José Antonio Cambra Vega de la Resolución de 18 de marzo de 1996 dictada por el Juzgado Primero de Familia, visible a foja 2 del expediente, mediante la cual se le "da traslado por el plazo de treinta (30) días a JOSÉ ANTONIO CAMBRA VEGA.- Exprondrá con claridad si rechaza los hechos por inexactos o si los admite con variantes o rectificaciones, también manifestará con caridad las razones que tenga para su negativa y los fundamentos legales en que se apoye."

La Sala de Negocios Generales estima que de acuerdo al artículo 4 de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, los entuertos o cartas rogatorias deberán contener la relación de los elementos pertinentes para su cumplimiento que entre los cuales destacan:

a) Una indicación clara sobre el objeto de la prueba solicitada.

b) Copia de los escritos y resoluciones que funden y motiven el exhorto o carta rogatoria, así como los interrogatorios y documentos necesarios para su cumplimiento.

c) Nombre y dirección tanto de las partes como de los testigos, peritos y demás personas intervinientes y los datos indispensables para la recepción u obtención de la prueba.

d) Informe resumido del proceso y de los hechos materia del mismo en cuanto fuere necesario para la recepción u obtención de la prueba.

e) Descripción clara y precisa de los requisitos o procedimientos especiales que el órgano jurisdiccional requiriente solicite en relación con la recepción u obtención de la prueba, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 2, párrafo primero y en el Artículo 6.

Del estudio del expediente se aprecia, sin lugar a dudas, que el presente exhorto cumple con los requisitos antes transcritos.

La documentación ha sido presentada por la vía diplomática a través del Consulado de Costa Rica aquí en la Ciudad de Panamá, razón por la cual se hace innecesario el requisito de la legalización de firmas de acuerdo al artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, aprobada por la República de Panamá mediante Ley 13 de 23 de octubre de 1975.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE el diligenciamiento en el territorio nacional del Exhorto librado por el Juzgado Primero de Familia de San José, República de Costa Rica promovida por Victoria Carolina Morales Suárez contra José Antonio Cambra Vega, dentro del Proceso Abreviado de Divorcio y Subsidiaria de Separación Judicial y ORDENA que el mismo sea diligenciado por la Secretaría de la Sala Cuarta de Negocios Generales utilizando para tales efectos las normas jurídicas de nuestro orden

procesal vigente, y una vez realizadas las diligencias pertinentes del exhorto que nos ocupa, remítase a la Cancillería Panameña para los ulteriores trámites diplomáticos aplicables a esta materia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE ASISTENCIA LEGAL LIBRADA POR EL TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DISTRITO NORTE, DENTRO DEL PROCESO DE ACCIÓN CIVIL NÚMERO 95-CV-0923-JTC SUBROGADA POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA USO Y BENEFICIO DE SIEMENS ENERGY AND AUTOMATION, INC. CONTRA INGENIERÍA DE DESARROLLO Y ELECTRICIDAD, S. A., (INDELSA), ASEGURADORA MUNDIAL, S. A. Y BANCO DE PANAMÁ, S. A., (INDELSA), ASEGURADORA MUNDIAL, S. A. Y BANCO DE PANAMÁ, S. A., COMPAÑÍAS MERCANTILES EXTRANJERAS. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por conducto de la Directora General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, ha ingresado a la Sala Cuarta de Negocios Generales, de la Corte Suprema de Justicia, exhorto de solicitud de Asistencia Legal librada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de América, Distrito Norte de Georgia.

El Mencionado Tribunal de Justicia norteamericano solicita, con fundamento en el Protocolo de la Convención Interamericana correspondiente a Exhortos:

> "Solicita que se efectúe con prontitud la notificación judicial de los mismos a:
>
> Rafael Reyes o Paul Smith, Banco Continental de Panamá, S. A., Apartado 135, Panamá 9A, Casa Matriz, Vía España, 120, República de Panamá.
>
> Por la presente se le informa que Siemens Energy & Automation, Inc. ("Siemens") ha presentado Demanda contra Banco Continental de Panamá, S. A. ("Banco") en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de América situado en la ciudad de Atlanta (Georgia), de los Estados Unidos de América."

De acuerdo con el Código Judicial en su artículo 101 numeral 3, le corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales la función de "recibir los exhortos y Comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe cumplirlo".

Seguidamente, procede el tribunal a verificar la existencia de convenios internacionales que rijan a ambas naciones.

El Estado panameño, como los Estados Unidos de América, están actualmente adscritos al Convenio de la Haya, concertado el 5 de octubre de 1961, Ley de la República N° 6 de 25 de junio de 1990, y, a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, aprobada a través de la Ley N° 12 de 23 de Octubre de 1975 y su respectivo Protocolo Adicional a esta convención, Ley N° 10 de 18 de junio de 1991.

Esta Superioridad observa que el exhorto en estudio no posee ningún tipo de legalización. La apostilla o acotación, único requisito establecido en la

Convención de la Haya de 1961 relativos a los actos públicos, no se encuentra incorporada a los documentos, siendo éste un requisito indispensable para declarar viable un exhorto o carta rogatoria, pues su cumplimiento encierra la presunción de que los documentos han sido expedidos conforme a la ley local del país que emitió dichos documentos.

La "única excepción" establecida en la Convención Interamericana de 1975, lo constituye lo dispuesto en su artículo 7 que a la letra expresa:

> "Artículo 7: Los Tribunales de las zonas fronterizas de los Estados Partes pueden dar cumplimiento a los exhortos o cartas rogatorias previstos en esta Convención en forma directa, sin necesidad de legalizaciones."

El destacado jurista panameño, Dr. Gilberto Boutin manifiesta que, "cuando se refiere la Convención a suprimir la legalización sobre actos públicos no es más que un medio de autenticidad del documento o acto público a través de la apostilla. Debemos referirnos a que la autenticidad definida no es más que la veracidad del documento autógrafo. Carnelutti señalaba justamente este último, subsume la autenticidad del documento en el concepto más amplio de la identidad de la fuente, es decir, de su procedencia de una determinada persona. El problema de la autenticidad del documento presenta tan solo mayores dificultades prácticas a causa de la separación del documento y no al testimonio respecto a la persona del autor, es decir, se refiere únicamente al carácter fidedigno del responsable de quien extiende el documento" (**La Apostilla, según la Convención de la Haya 1961 y el Derecho panameño**, Editora Pérez y Pérez, Edición 1993, págs. 7 y 8).

La Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias en su artículo VI suprime la exigencia de legalización "diplomática o consular", cuando los exhortos o cartas rogatorias se trasmitan por vía consular diplomática o por intermedio de la autoridad central, no obstante, es evidente, por lo expresado en párrafos precedentes, que este artículo no establece de forma alguna la exclusión de la formalidad exigida relativa al cumplimiento de la "apostilla", la cual se tiene que surtir en el Estado requiriente.

Los señalamientos que preceden conducen a esta Superioridad a considerar que no es posible acceder a lo impetrado en la presente oportunidad, toda vez que "las convenciones y tratados internacionales otorgan derechos e imponen obligaciones a las partes contratantes, preferentemente. Es una regla de conducta obligatoria para los Estados que los suscriben y ratifican. La teoría de la fuerza obligatoria de los pactos internacionales ha sido muy amplia y se ha orientado hacia los más variados criterios ..., pero la esencia de ellas es la afirmación del carácter obligatorio de los mismos, cualquiera que sea el fundamento que las informa" (Sepúlveda, César, Derecho Internacional, Editorial Porrúa, S. A., México, 1983, pág. 135).

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE el diligenciamiento en el territorio nacional, del exhorto de solicitud de asistencia legal librado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de América, Distrito Norte de Georgia, Estados Unidos, y ORDENA que se remita el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores para que proceda de acuerdo a los convenios internacionales relativos a esta materia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE SAN JOSÉ, REPÚBLICA DE COSTA RICA, REFERENTE AL EXPEDIENTE 328-4-96 PROMOVIDO POR VICTORIA MORALES SUAREZ

CONTRA JOSÉ ANTONIO CAMBRA VEGA DENTRO DEL PROCESO DE GUARDA, CRIANZA Y EDUCACIÓN, EN FAVOR DE EMILIO CAMBRA MORALES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por vía diplomática fue enviado el suplicatorio proveniente del Juzgado Primero de Familia de San José, República de Costa Rica, dentro del proceso promovido por la señora VICTORIA CAROLINA MORALES SUAREZ contra el señor JOSÉ ANTONIO VEGA dentro del proceso de Guarda, Crianza y Educación, en favor de Emilio Cambra Morales. El mismo fue remitido por la Dirección General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores a esta Superioridad mediante Nota DGPE/DCL/1453/96, el 23 de julio de 1996.

El objetivo del presente exhorto es "notificar al señor José Antonio Cambra Vega de la Resolución de 21 de marzo de 1996 dictada por el Juzgado Primero de Familia, visible a foja 2 del expediente, mediante la cual "Del presente sumario se le confiere audiencia por el término de treinta días a JOSÉ ANTONIO CAMBRA VEGA para que la conteste."

El señor José Antonio Vega tiene su domicilio en:

"República de Panamá, Ciudad de Panamá, bella Vista, Calle 45, número 18, Edificio Rivera, Apartamento Número 3".

La Sala de Negocios Generales estima que de acuerdo al artículo 4 de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, los exhortos o cartas rogatorias deberán contener la relación de los elementos pertinentes para su cumplimiento, entre los cuales destacan:

a) Una indicación clara sobre el objeto de la prueba solicitada.

b) Copia de los escritos y resoluciones que funden y motiven el exhorto o carta rogatoria, así como los interrogatorios y documentos necesarios para su cumplimiento.

c) Nombre y dirección tanto de las partes como de los testigos, peritos y demás personas intervinientes y los datos indispensables para la recepción u obtención de la prueba.

d) Informe resumido del proceso y de los hechos materia del mismo en cuanto fuere necesario para la recepción u obtención de la prueba.

e) Descripción clara y precisa de los requisitos o procedimientos especiales que el órgano jurisdiccional requiriente solicite en relación con la recepción u obtención de la prueba, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 2, párrafo primero y en el Artículo 6.

Del estudio del expediente se aprecia, sin lugar a dudas, que el presente exhorto cumple con los requisitos antes transcritos.

La documentación ha sido presentada por la vía diplomática a través del Consulado de Costa Rica aquí en la Ciudad de Panamá, razón por la cual se hace innecesario el requisito de la legalización de firmas de acuerdo al artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, aprobada por la República de Panamá mediante Ley 13 de 23 de octubre de 1975.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE el diligenciamiento en el territorio nacional del Exhorto librado por el Juzgado Primero de Familia de San José, República de Costa Rica, referente al expediente 328-4-96 promovido por Victoria Carolina Morales Suarez contra José Antonio Cambra Vega, dentro del proceso de Guarda, Crianza y Educación, en favor

de Emilio Cambra Morales y se ORDENA que el mismo sea diligenciado por la Secretaría de la Sala Cuarta de Negocios Generales utilizando para tales efectos las normas jurídicas de nuestro orden procesal vigente, y una vez realizadas las diligencias pertinentes del exhorto que nos ocupa, remítase a la Cancillería Panameña para los ulteriores trámites diplomáticos aplicables a esta materia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO LIBRADO POR LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA, DIVISIÓN DEL TRIBUNAL DE LA REINA, CORTE MERCANTIL EN LAS CORTES REALES, STARND, LONDRES, CASO WC2C 2LL; DENTRO DEL PROCESO RELATIVO A LAS LEYES DE ARBITRAJE 1950-1979 Y EN EL ASUNTO DE ARBITRAJE ENTRE ANDRADE GUTIÉRREZ CONTRACTORS, IN. (SOLICITANTE) Y M. GROUP RESORTES, S. A. (RESPONDIENTE), PARA QUE REALICEN LOS TRÁMITES PERTINENTES DE NOTIFICACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La Directora General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha remitido a la Sala Cuarta de Negocios Generales, de la Corte Suprema de Justicia, exhorto librado por la Corte Superior de Justicia, División del Tribunal de la Reina, Corte Mercantil en las Cortes Reales de Justicia, Strand, Londres, WC2A 2LL, relativo al asunto de las leyes de arbitraje 1950-1979 y en el asunto de un arbitraje.

La diligencia solicitada por el autoridad exhortante inglesa es la siguiente:

> "Por cuanto en la División del Estrado de la Reina del Tribunal Superior de Justicia en Inglaterra se halla ahora pendiente una súplica en la que Andrade Gutiérrez Contractors, Inc., son los Demandantes y M. Group Resorts, S. A. los Demandados y en la susodicha acción judicial los Demandantes solicitan una orden judicial por la que parte del Fallo Arbitral Provisional de fecha 2 de agosto de 1995 hecho por Mr John Uff Abogado de Rango Superior en el arbitraje N° 93/X07 en el Tribunal de Londres para Arbitrajes Internacionales entre los Demandantes y los Demandados se ponga aparte o se remita al árbitro.
>
> Ahora yo, Juez Principal de la División del Estrado de la Reina del Tribunal Supremo de Justicia en Inglaterra y el País de Gales por este medio suplico a Su Señoría que tenga la bondad de servir a los Demandados M. Group Resorts, S. A. en el Edificio Salduba, Calle 53 Este, Obarrio, Ciudad de Panamá, República de Panamá, la Notificación por medio de una moción y la forma de Acuse de Recibo de Servicio de esta súplica en la dirección arriba indicada o en cualquier otra en la jurisdicción de la República de Panamá".

Según lo preceptuado por el Código Judicial en el numeral 3 del artículo 101, le corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales la función de "recibir los exhortos y Comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe cumplirlo".

Seguidamente, procede el tribunal a verificar la existencia de convenios internacionales que rijan a ambas naciones.

Observa la Sala, que tanto Panamá, como Inglaterra, son signatarios del Convenio de la Haya, concertado el 5 de octubre de 1961, Ley de la República N° 6 de 25 de junio de 1990.

Resulta palmario que el presente suplicatorio en cuestión no violenta el orden público nacional, además, se aprecia el sello de la apostilla o acotación que legaliza los documentos expedidos en el Estado requirente, siendo éste un requisito indispensable para declarar viable un exhorto o carta rogatoria, pues su cumplimiento encierra la presunción de que los documentos han sido expedidos conforme a la ley local del país que emitió dichos documentos, y toda la documentación aportada se encuentra traducida al idioma español.

En consecuencia, la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE el diligenciamiento en el territorio nacional del exhorto librado por la Corte Superior de Justicia, División del Tribunal de la Reina, Corte Mercantil en las Cortes Reales de Justicia, Strand, Londres, WC2A 2LL y ORDENA que el mismo sea diligenciado a través de la Secretaria de la Sala Cuarta de Negocios Generales, y una vez realizada la notificación, REMÍTASE el expediente a la Cancillería para su posterior devolución a las autoridades exhortantes.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO S/N DE 2 NOVIEMBRE DE 1995, LIBRADO POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO TRES DE SANT FELIU DE GUIXOLS, REINO DE ESPAÑA, DENTRO DEL PROCESO DE COGNICIÓN N° 18/94 A INSTANCIA DE D. FRANCISCO FITE GILLET CONTRA D. ROBERT JEGAT Y LA SOCIEDAD DE COURTAGE INMOBILIER QUEBECOIS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por conducto de la Directora General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, ha ingresado a la Sala Cuarta de Negocios Generales, de la Corte Suprema de Justicia, exhorto librado por el Juzgado de Primera Instancia Número Tres de Sant Feliu de Gixols, Reino de España, dentro del proceso de COGNICIÓN N° 18/94 a instancia de D. ROBERTO JEGAT y la SOCIEDAD DE COURTAGE INMOBILIER QUEBECOIS, S. A.

El Mencionado Tribunal de Justicia español solicita:

> "1. Que mediante entrega de la adjunta cédula y copias que acompañan, se emplace al Representante de la SOCIEDAD DE COURTAGE INMOBILIER para que en el improrrogable término de 30 días que se han fijado en atención a la distancia, comparezca ante el Juzgado a contestar en forma a la demanda, bajo apercibimiento que de no verificarlo se seguirá el juicio en su rebeldía."

De acuerdo con el Código Judicial en su artículo 101 numeral 3, le corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales la función de "recibir los exhortos y Comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe cumplirlo".

Seguidamente, procede el tribunal a verificar la existencia de convenios internacionales que rijan a ambas naciones.

Observa la Sala Cuarta, que tanto el Estado panameño, como el Estado español, están actualmente adscritos al Convenio de la Haya, concertado el 5 de octubre de 1961, Ley de la República N° 6 de 25 de junio de 1990(publicada en la Gaceta Oficial N° 21.571 de 3 de julio de 1990), y, a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, aprobada a través de la Ley N° 12 de 23 de Octubre de 1975 (publicada en la Gaceta Oficial N° 18.072 de 23 de abril de 1976).

El Convenio de la Haya suscrito el 5 de octubre de 1961, en sus artículo 2 y 3 establece lo siguiente:

> "Artículo 2: Cada Estado contratante eximirá de la legalización a los documentos a los que se apliquen el presente convenio y que deberán ser presentados en su territorio. La legalización, en el sentido del presente convenio, sólo cubrirá la formalidad por la que los agentes diplomáticos o consulares del país en cuyo territorio el documento deba surtir efecto, certifiquen la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre que el documento ostente."
>
> "Artículo 3: La única formalidad que podrá ser exigida para certificar la autenticidad de la firma, el carácter con que ha actuado el signatario del documento, y de corresponder la identidad del sello o del timbre que lleva el documento, será una anotación que deberá ser hecha por la autoridad competente del Estado en el cual se originó el documento, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.
>
> Sin embargo, la formalidad mencionada en el párrafo precedente no podrá exigirse cuando las leyes, reglamentos o las costumbres vigentes en el Estado en el que el documento deba surtir efecto, o un acuerdo entre dos o más Estados contratantes, la rechacen, la simplifiquen o eximan al documento del requisito de la legalización."

Se colige palmariamente de los artículos antes transcritos, que al no encontrarse Panamá dentro de las excepciones señaladas en el párrafo segundo del artículo 3, resulta obligatorio el cumplimiento de la formalidad de la "**acotación o apostilla**" como única formalidad exigida y aplicable en todo documento público proveniente del extranjero, el cual es el caso del negocio que nos ocupa.

La Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias en su artículo VI suprime la exigencia de legalización "diplomática o consular", cuando los exhortos o cartas rogatorias se trasmitan por vía consular diplomática o por intermedio de la autoridad central, no obstante, es evidente, por lo expresado en párrafos precedentes, que este artículo no establece de forma alguna la exclusión de la formalidad exigida relativa al cumplimiento de la "apostilla", la cual se tiene que surtir en el Estado requiriente.

La sala observa que en el presente exhorto en cuestión no se aprecia el sello de la apostilla o acotación que legaliza los documentos expedidos en el Estado requiriente, siendo éste un requisito indispensable para declarar viable un exhorto o carta rogatoria, pues su cumplimiento encierra la presunción de que los documentos han sido expedidos conforme a la ley local del país que emitió dichos documentos.

Los señalamientos que preceden conducen a esta Superioridad a considerar que no es posible acceder a lo impetrado en la presente oportunidad, toda vez que "las convenciones y tratados internacionales otorgan derechos e imponen obligaciones a las partes contratantes, preferentemente. Es una regla de conducta obligatoria para los Estados que los suscriben y ratifican. La teoría de la fuerza obligatoria de los pactos internacionales ha sido muy amplia y se ha orientado hacia los más variados criterios ..., pero la esencia de ellas es la afirmación del carácter obligatorio de los mismos, cualquiera que sea el

fundamento que las informa" (Sepúlveda, César, Derecho Internacional, Editorial Porrúa, S. A., México, 1983, pág. 135).

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE el diligenciamiento en el territorio nacional, del exhorto S/N de 2 de noviembre de 1995, librado por el Juzgado de primera Instancia Numero Tres de Sant Feliu de Guixols, Reino de España, dentro de Proceso de COGNICIÓN N° 18/94 a instancia de D. FRANCISCO FITE GILLET contra D. ROBERT JEGAT Y LA SOCIEDAD de COURTAGE INMOBILIER QUEBECOIS, S. A. y ORDENA que se remita el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores para que proceda de acuerdo a los convenios internacionales relativos a esta materia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

JUAN ORTELIO BERMÚDEZ HERNÁNDEZ, INTERPONE DENUNCIA POR FALTA A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO EN CONTRA DEL LICENCIADO ANTONIO GUARDIA OSSES. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Procedente del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, ha ingresado a la Secretaría de la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, el cuaderno contentivo de la denuncia por Falta a la Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado, interpuesta por JUAN ORTELIO BERMÚDEZ HERNÁNDEZ, contra el Licenciado ANTONIO GUARDIA OSES.

La denuncia interpuesta por el señor Juan Ortelio Bermúdez es formulada a través de carta de fecha 23 de enero de 1996, dirigida a los Miembros del Colegio Nacional de Abogados y confirmada en una nueva carta de fecha 26 de febrero de 1996.

La acusación formulada por el señor Bermúdez consiste en dos hechos fundamentales:

1. El haberle entregado al licenciado Guardia B/.1.850.00, para solicitar fianza de excarcelación a favor del señor Bermúdez, quién estaba recluido en la Cárcel Pública de Colón por el delito de posesión y uso ilícito de armas y por tener en su poder sustancias ilícitas (una bola de marihuana).

2. Por faltarle el respeto a la esposa del señor Bermúdez, en virtud de la situación desfavorable en la que éste se encontraba.

El señor Bermúdez apoya su acusación en las siguientes pruebas:

1. Fotocopia simple del Certificado de Garantía 14001, a favor del Juzgado Tercero de Circuito Penal, por la suma de B/.600.00., en la que consta que dicho certificado se expidió a solicitud de ANTONIO GUARDIA. (visible a foja 3 de expediente).

2. Fotocopia simple de acuso de recibo por la suma de B/.1.250.00, el mismo se lee así: "YO, ANTONIO GUARDIA BERMÚDEZ O. CON CÉDULA N° 2-85-485, LE ADEUDO AL SEÑOR JUAN ORTELIO BERMÚDEZ CON CÉDULA 5-17-324 LA CANTIDAD DE B/.1.250.00 (MIL DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS.)"

El Tribunal de Honor, en virtud de lo preceptuado en el artículo 26 de la Ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993, emitió mediante Vista de 11 de octubre de 1994 (visible de foja 19 a 21), en la cual requiere de esta Magistratura se "decrete la citación a juicio del licenciado Antonio Guardia por violación del Código de Ética y Responsabilidad del abogado, artículo 34, acápites b, e, ch.", en base a los siguientes criterios:

> "El dieciséis (16) de abril del año en curso, el denunciado contesta los supuestos hechos de la denuncia, tildando de injustos los cargos y efectuando una relación-**SIN APORTAR NINGÚN ELEMENTO PROBATORIO-** de su supuesta actuación en beneficio de la defensa al denunciante; más bien, reitera lo expresado por el denunciante, que no le había podido endosar el descrito cheque, por encontrarse en Darién.
>
> Ante lo descrito, el TRIBUNAL DE HONOR ha observado, que los hechos denunciados implican al licenciado ANTONIO GUARDIA O. en la infracción del artículo 34 del CÓDIGO DE ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO EN LOS SIGUIENTES ACOPIADOS, a saber:
>
> "b", por demorar la iniciación y prosecución de las gestiones que le fueron encomendadas.
> "e", por no rendir a su cliente las cuentas de su gestión.
> "ch", retener el dinero por un mandato que no ha cumplido."

Mediante providencia de fecha 19 de junio de 1996, el Magistrado Sustanciador ordenó darle traslado de la demanda al denunciado, conforme al artículo 28 de la Ley 9 de 18 de abril de 1984, con el fin de que el licenciado Guardia Osses, presentara los escritos de excepciones y de oposición correspondientes a la petición de llamamiento a juicio solicitado por el Tribunal de Honor.

El licenciado Guardia Oses, presentó dentro del término concedido por la ley, escrito de excepciones y oposición, tal como consta en Informe Secretarial de fecha 11 de julio de 1996, visible a foja 46 del expediente.

En el escrito de excepciones presentado por el licenciado Guardia Osses, afirma que en ningún momento se demoró la iniciación y prosecución de las gestiones del caso de Juan Ortelio Bermúdez, ya que una vez que la Fiscalía Tercera del Circuito de Colón ordenó la detención preventiva del señor Bermúdez, se acordó, la semana siguiente, con la esposa del mencionado denunciante fijar los honorarios, los cuales según consta en su escrito visible a foja 17, se fijaron en B/.1.850.00 (incluyendo la Consignación de la fianza) y a la vez solicitar la fianza de excarcelación, la cual se interpuso el día 24 de noviembre de 1995. No fue hasta el día 19 de diciembre de 1995, que se resuelve dicha petición. Sin embargo, el perfeccionamiento de la fianza permanecía sujeta a los resultados de la prueba de balística de las armas incautadas. Para lo cual, afirma el licenciado Guardia, tuvo que realizar en reiteradas ocasiones, viajes a la ciudad de Colón.

El licenciado Guardia Osses, presenta junto con el escrito de descargo, como pruebas, copias autenticadas de las partes procesales en las que, según afirma el acusado, se evidencia su actuación.

Tomando en consideración los hechos anteriores la Sala pasa al análisis del contenido de la denuncia en los siguientes términos:

La situación del licenciado Guardia Oses frente a lo preceptuado el artículo 34 acápite "b", "ch" y "e" señalado en párrafos precedentes, y a las pruebas presentadas por él, demuestran su actuación ante las autoridades competentes tendientes a lograr el cumplimiento del mandato otorgado por el señor Bermúdez.

En primer término, la Sala observa a foja 31 y 32, copia autenticada del cuadernillo del Juzgado Tercero de Circuito de Colón, Ramo Penal, con sede en el Corregimiento de Cristóbal, que contiene la solicitud de fianza de excarcelación

a favor del señor Juan Ortelio Bermúdez por el delito contra la Salud Pública; con lo que se demuestra, que efectivamente, el licenciado Guardia compareció al Tribunal, en cumplimiento de uno de los mandatos del señor Bermúdez.

Aunado a lo anterior, se observa a foja 35, una nueva actuación del licenciado Guardia, en el Juzgado Tercero del Circuito de Colón, ante el cual solicita se suspenda el trámite para resolver la fianza, "hasta tanto se haga llegar el resultado del análisis de la sustancia objeto de esta investigación". Como resultado de esta solicitud, el 19 de diciembre de 1995 se concedió la fianza de excarcelación y se fija en la suma de setecientos cincuenta balboas (B/.750.00), con la condición que la misma no había de perfeccionarse hasta tanto fuera recibida la prueba de balística.

De lo expuesto anteriormente se demuestra que, en efecto, la fianza fue solicitada ante las autoridades competentes, aunque la misma no se hizo efectiva sino hasta después de recibida la prueba de balística, el día 2 de enero de 1996, tal y como se desprende de la foja 40 del expediente. La libertad del señor Bermúdez, una vez consignada la fianza ante el juzgado Tercero de Circuito de Colón, resulta evidente toda vez que éste presentó la denuncia personalmente el día 26 de febrero de 1996, ante el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados.

En cuanto a la afirmación del denunciante, con respecto a la ausencia de poder firmado por el licenciado Guardia, la Sala se remite al artículo 631, párrafo primero del Código Judicial, que establece lo siguiente:

ARTÍCULO 631:

> "Por regla general, ninguno puede representar a otro en proceso, sino con poder otorgado con las formalidades legales; pero para notificarse de una demanda, contestarla, y para proponer o contestar alguna acción, incidente o recurso, cuando de no hacerlo pueda la parte sufrir algún perjuicio, no se necesita poder".

Del artículo transcrito, se desprende que ante las autoridades competentes, el licenciado Guardia Osses actuó como apoderado del señor Bermúdez al gestionar a su favor ante los tribunales de justicia, aún cuando no conste el poder por escrito.

De igual forma, se observa en la tarifa de honorarios profesionales mínimos de los abogados en la República de Panamá, publicado en la Gaceta Oficial N°20,980 de 2 de febrero de 1988, en la cual se establece lo siguiente para las actuaciones en negocios criminales:

I. Consultas.

1. Consultas verbales B/.100.00 a B/.300.00 por hora a criterio del abogado.
Cuando por razón de la consulta sea necesario comparecer ante Autoridad, ésta comparecencia causará un 50% de recargo.
2. Escritas B/.300.00

III. Formalización de Denuncias o Querellas
...
2. Ante Fiscalías de Circuito, B/.550.00

Aunado a lo anteriormente señalado, se destaca que la actuación fue realizada ante la Fiscalía Tercera del Circuito Judicial de Colón, Corregimiento de Cristóbal y ante el Juzgado Tercero de Circuito de Colón, Ramo Penal y se recalca la naturaleza de los hechos punibles por los cuales fue privado el señor Bermúdez, de su derecho a la libertad. Consecuentemente, no resulta excesiva la suma correspondiente a los honorarios del Licenciado GUARDIA OSES, en el presente caso.

En consecuencia, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

DECLARA que no existen méritos para el llamamiento a juicio del licenciado ANTONIO GUARDIA OSES, dentro de la denuncia interpuesta en su contra por el señor Juan Ortelio Bermúdez por Falta a la Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR DALYS CANTO CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 33-96 DE FECHA DIECISÉIS (16) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA (1996), EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, RAMO PENAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Ingresó a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de apelación, propuesto por el licenciado Rodolfo García de Paredes Jované, en representación de la señora Dalys Canto, en contra de la Resolución N° 33-96 de fecha dieciséis (16) de abril de mil novecientos noventa y seis (1996), emitida por la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial de Panamá, Ramo Penal.

La parte recurrente fundamenta su descontento con la evaluación efectuada por la Comisión de Personal, sobre las certificaciones laborales aportadas por la concursante, ya que según afirma el apoderado judicial se acreditan a estos 4.00 puntos por experiencia laboral en el Sector Público, cuando deben ser acreditados 5.00 puntos por los cinco años acumulados que se evidencia en las certificaciones aportadas.

Una vez transcrito el punto principal del recurso de apelación, esta Sala pasa a conocer el presente recurso de apelación, a fin de determinar si existen o no elementos que justifiquen una modificación en la resolución recurrida.

La Sala, una vez examinadas las piezas procesales en mención, se manifiesta de acuerdo con la Comisión de Personal en cuanto a la evaluación de las certificaciones, ya que a foja 10 del expediente se observa que la experiencia de la recurrente es de cuatro meses. De acuerdo con las normas de Carrera judicial, no será valorada la experiencia laboral menor de seis meses.

En cuanto a la puntuación obtenido en el renglón privado, se observa que la recurrente posee cuatro (4) años de experiencia, los cuales fueron valorados correctamente con cuatro (4.00) puntos por la Comisión de Personal.

Por lo antes expuesto la Sala manifiesta que no existen méritos de fondo que ameriten que se cambie la resolución impugnada.

En consecuencia, la SALA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES la Resolución 33-96 de fecha 16 de abril de 1996, dictada por la comisión de Personal del Primer Distrito Judicial de Panamá, Ramo Penal y ORDENA que una vez notificadas las partes involucradas en el presente negocio, se devuelva el expediente a la Secretaría de la Comisión de Personal para que se le otorguen los ulteriores trámites procesales aplicables a esta materia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

REPÚBLICA DE PANAMÁ
ÓRGANO JUDICIAL

ACUERDO NÚMERO 144

En la Ciudad de Panamá, a los cuatro (4) días del mes de julio de mil novecientos noventa y seis (1996), se reunió la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, con asistencia del Secretario General.

Abierto el Acto, el Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, informó a los presentes que el motivo de la reunión era considerar la conveniencia de modificar el Artículo 8 del Acuerdo Nº 12 de fecha 13 de agosto de 1992 de la Sala Cuarta de Negocios Generales, mediante el cual se computa el tiempo de servicio de los auxiliares de Magistrados y Jueces para efectos de la Carrera Judicial.

Sometida a consideración la solicitud, ésta recibió el voto unánime de la Sala y en consecuencia se acordó modificar el artículo 8 del Acuerdo Nº 12 de 13 de agosto de 1992, de la siguiente manera:

ARTÍCULO 8: Para los efectos de la Carrera Judicial, a los Auxiliares de Magistrados y Jueces, se les computará el tiempo de servicio utilizando la siguiente tabla de puntuación:

1. A los Auxiliares de Magistrados se les reconocerá igual puntuación que la asignada a los Jueces de Circuito.

2. A los Auxiliares de Jueces de Circuito se les reconocerá igual puntuación que la asignada a los Jueces Municipales.

3. A los Auxiliares de Jueces Municipales se les reconocerá igual puntuación que la asignada a los Secretarios.

No habiendo más nada que tratar, se dio por terminado el acto y se ordenó hacer las publicaciones correspondientes.

(fdo.) ARTURO HOYOS
Magistrado Presidente de la
Corte Suprema de Justicia

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAUNDES
Presidente de la Sala Penal

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
Presidente de la Sala Civil

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General de la
Corte Suprema de Justicia